REPÚBLICA ARGENTINA

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PODER LEGISLATIVO

DIARIO DE SESIONES

XXXI PERÍODO LEGISLATIVO

AÑO 2014

REUNIÓN N° 8

6ª SESIÓN ORDINARIA, 4 de DICIEMBRE de 2014

Presidente: Roberto Luis CROCIANELLI y Juan Felipe RODRÍGUEZ
Secretaria Legislativa: Marcela Verónica SCILLETTA
Secretario Administrativo: César Ariel PAGELLA
Prosecretaria Administrativa: Mabel Luisa CAPARRÓS

Legisladores presentes:

ANDRADE TENORIO, Claudia Gabriela

ARCANDO, Juan Carlos

BARRIENTOS, Néstor Eduardo

BLANCO, Pablo Daniel

DEL CORRO, Amanda Ruth

LECHMAN, Jorge Andrés

LIENDO, Marcelo Adrián

LÖFFLER, Damián Alberto

MARINELLO, Fabio Adrián

MARTÍNEZ, Myriam Noemí

MARTÍNEZ ALLENDE, Liliana

ROJO, Laura Susana

SIRACUSA, Marta Susana

TAPIA, Reinaldo Héctor

En la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los cuatro días de diciembre de dos mil catorce, se reúnen los señores legisladores en el recinto de sesiones de la Legislatura provincial, siendo las 9:25**.**

- I -

APERTURA DE LA SESIÓN

Sr. PRESIDENTE.— Habiendo quórum legal con 15 legisladores presentes en la Sala, se da inicio a la sesión ordinaria.

- II -

IZAMIENTO

Sr. PRESIDENTE.— Invito al señor legislador Rodríguez a izar el pabellón nacional y la bandera provincial. Nos ponemos de pie.

- Así se hace. (Aplausos).

- III -

PEDIDOS DE LICENCIA

Sr. PRESIDENTE.— Por Secretaría Administrativa se informa si existen pedidos de licencia.
Sec. ADMINISTRATIVO.— Señor presidente: No existen pedidos de licencia.

- IV -

HOMENAJES

Sr. PRESIDENTE.— Corresponde el tiempo de homenajes, si algún legislador quiere hacer uso de la palabra.

- Sin asentimiento.

Sr. PRESIDENTE.— Por Secretaría Legislativa, se da lectura al Boletín de Asuntos Entrados, cuya copia obra en el poder de los señores legisladores.

- V -

ASUNTOS ENTRADOS

- 1 -

De Legisladores y del Poder Ejecutivo

Sec. LEGISLATIVA.— "Asunto Nº 512/14. Resolución de Presidencia 811/14 para su ratificación.
- Con pedido de reserva.
Asunto Nº 513/14. Dictamen de Comisión Nº 1, en mayoría, sobre Asunto Nº 368/14. Poder Ejecutivo: Nota 205/14 que adjunta el Decreto provincial 1918/14 por el cual se ratifica el Acta registrada bajo el Nº 16649, referente a la reunión del Comité Ejecutivo Nº 148 de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, suscrito entre la provincia de

Tierra del Fuego y las provincias del Chubut, Formosa, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Salta; que aconseja su aprobación.
- Con pedido de reserva.
Asunto Nº 514/14. Dictamen de Comisión Nº 1, en mayoría, sobre Asunto Nº 373/14. Poder Ejecutivo: Nota 212/14 que adjunta el Decreto provincial 2037/14 por el cual se ratifican los convenios N.os 16926 y 16953, referentes al Proyecto de Planificación y Revalorización de la Senda Lucas Bridges, suscrito entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, la Unión Industrial Argentina y la provincia de Tierra del Fuego; que aconseja su aprobación.
- Con pedido de reserva.
Asunto Nº 515/14. Dictamen de Comisión Nº 1, en mayoría, sobre Asunto Nº 385/14. Poder Ejecutivo: Nota 221/14 que adjunta el Decreto provincial 2166/14 por el cual se ratifica el Convenio de Colaboración Nº 16887, referente a la Ley Nacional de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, organismo descentralizado...".
Sr. PRESIDENTE.— Un momento, secretaria. Por favor, pido silencio en la sala. Gracias.
Sec. LEGISLATIVA.— "... suscrito entre la provincia de Tierra del Fuego y el Instituto Nacional de Semillas, organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; que aconseja su aprobación.
- Con pedido de reserva.
Asunto Nº 516/14. Dictamen de Comisión Nº 1, en mayoría, sobre Asunto Nº 386/14. Poder Ejecutivo: Nota 224/14 que adjunta el Decreto provincial 2165/14 por el cual se ratifican las actas reglamentarias N.os 16497 y 16512, referentes a la transferencia de equipamiento de informática y comunicaciones a favor de la provincia, suscrito entre el Ministerio de Educación de la Nación y la provincia de Tierra del Fuego; que aconseja su aprobación.
- Con pedido de reserva.
Asunto Nº 517/14. Dictamen de Comisión Nº 1, en mayoría, sobre Asunto Nº 403/14. Poder Ejecutivo: Nota 244/14 que adjunta el Decreto provincial 2363/14, por el cual se ratifica el Convenio Marco registrado bajo el Nº 16957, referente a la implementación de un canal de colaboración y asistencia permanente para la producción de contenidos educativos, suscrito entre la provincia de Tierra del Fuego y EDUC.AR Sociedad del Estado; que aconseja su aprobación.
- Con pedido de reserva.
Asunto Nº 518/14. Dictamen de Comisión Nº 1, en mayoría, sobre Asunto Nº 415/14. Poder Ejecutivo: Nota Nº 249/14 que adjunta el Decreto provincial 2409/14, por el cual se ratifica el Convenio registrado bajo el Nº 17013, referente a las deudas de las provincias con el gobierno nacional, suscrito entre el señor jefe de Gabinete de Ministros, el señor ministro de Economía y Finanzas Públicas y la provincia de Tierra del Fuego; que aconseja su aprobación.
- Con pedido de reserva.
Asunto Nº 519/14. Dictamen de Comisión Nº 1, en mayoría, sobre Asunto Nº 441/14. Poder Ejecutivo: Nota Nº 259/14 que adjunta el Decreto provincial 2588/14, por el cual se ratifica el Convenio 16992, referente a la creación del Plan Federal del Bicentenario de Ganados y Carnes, suscrito entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; que aconseja su aprobación.
- Con pedido de reserva.
Asunto Nº 520/14. Bloque Frente para la Victoria: proyecto de ley que crea el régimen para el cuidado de adultos mayores y personas que por razones biológicas, psicológicas, físicas y/o sociales no pueden realizar por sí solas tareas de la vida cotidiana o requieren apoyarse en personal capacitado para realizarlas.
- Girado a la Comisión Nº 5.
Asunto Nº 521/14. Bloque Unión Cívica Radical: proyecto de ley sobre protección integral a víctimas de violencia familiar.
- Girado a la Comisión Nº 5.
Asunto Nº 522/14. Bloque Unión Cívica Radical: proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo a transferir a título oneroso, a la Universidad Tecnológica Nacional, el dominio del

inmueble individualizado catastralmente como sección F, macizo 1, parcela 256, matrícula II-A-4170, de la ciudad de Ushuaia.
- Girado a la Comisión Nº 1.
Asunto Nº 523/14. Bloque Unión Cívica Radical: proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, informe en qué condiciones edilicias se encuentran las casas dependientes del Hospital Regional Ushuaia, y otros ítems.
- Con pedido de reserva.
Asunto Nº 524/14. Bloque Unión Cívica Radical: proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo informe si el Hospital Regional Ushuaia cuenta con equipamiento oftalmológico apto para afrontar la atención adecuada para la población existente en la ciudad de Ushuaia, y otros ítems.
- Con pedido de reserva.
Asunto Nº 525/14. Bloque Unión Cívica Radical: proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo informe en relación al sector de anatomía patológica, y otros ítems.
- Con pedido de reserva.
Asunto Nº 526/14. Bloque Unión Cívica Radical: proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo informe en relación a la situación que atraviesan los hospitales públicos de la provincia.
- Con pedido de reserva.
Asunto Nº 527/14. Bloque Unión Cívica Radical: proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo informe sobre subsidios, conforme a Resolución Ministerial 1173/14, del Ministerio de Salud de la Nación.
- Con pedido de reserva.
Asunto Nº 528/14. Dictamen de Comisión Nº 6, en mayoría, sobre Asunto Nº 120/14. Bloque Unión Cívica Radical: proyecto de ley que crea la Procuración Penitenciaria, en el ámbito del Poder Legislativo de la provincia de Tierra del Fuego; que aconseja su sanción.
- Con pedido de reserva.
Asunto Nº 529/14. Resolución de Presidencia 841/14, que declara de interés provincial el Programa Agropecuario, Agro-Industrial y Agro-Alimentario, PROAGRO 2030".
- Con pedido de reserva.
Asunto Nº 530/14. Bloque Frente para la Victoria: proyecto de ley de salud pública provincial.
- Girada a la Comisión Nº 5.
Asunto Nº 531/14. Bloque Partido Patagónico Popular: proyecto de ley que crea el Programa Provincial de Prevención y Asistencia de la Diabetes, en la provincia de Tierra del Fuego.
- Girado a la Comisión Nº 5.
Asunto Nº 532/14. Comisión de Labor Parlamentaria: proyecto de resolución por el que se designan miembros del Consejo de la Magistratura.
- Con pedido de reserva.
Asunto Nº 533/14. Comisión de Labor Parlamentaria: proyecto de resolución por el que se designan miembros de la Comisión Legislativa de Receso.
- Con pedido de reserva.

- 2 -

Comunicaciones Oficiales

Comunicación Oficial Nº 179/14. Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS). Nota 1061/14 que adjunta informe correspondiente al período agosto del corriente año, dando cumplimiento a la Ley provincial 959.
- Para conocimiento de bloques.
Comunicación Oficial Nº 180/14. Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA). Nota 1655/14, que adjunta informe correspondiente al período octubre del corriente año, dando cumplimiento a la Ley provincial 959 y a la Resolución 423/14 del Ministerio de Economía, "Compromiso Fiscal y transparencia de la Gestión Financiera, Ley Provincial 487".

- Para conocimiento de bloques.
Comunicación Oficial Nº 181/14. Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (IPAUSS): Nota 295/14 que adjunta las planillas correspondientes al período junio del ejercicio 2014.
- Para conocimiento de bloques.
Comunicación Oficial Nº 182/14. Poder Ejecutivo: Nota 269/14 que adjunta el informe requerido mediante Resolución de Cámara 308/13 (desagregado por ministerios y secretarías sobre fondos tomados por la provincia por proyectos propios con asistencia del Consejo Federal de Inversiones).
- Para conocimiento de bloques.
Comunicación Oficial Nº 183/14. Poder Ejecutivo: Nota Nº 272/14 que adjunta el Decreto provincial 2832/14, mediante el cual se modifica la distribución analítica de erogaciones y cálculo de recursos del Instituto Fueguino de Turismo, ejercicio 2014.
- Para conocimiento de bloques.

- 3 -

Asuntos de Particulares

Asunto Nº 23/14. Asociación Fueguina de Empleados Públicos (AFEP): nota que adjunta el proyecto de ley de modificación de la Ley provincial 288 (Administración Pública provincial, remuneraciones: ratificación suplemento por zona desfavorable).
- Para conocimiento de bloques.
Asunto Nº 24/14. Señora María Rosa Meneghetti: Nota que solicita se legisle la implementación de dos pasajes aéreos para viajes de emergencia familiar sanitaria.
- Para conocimiento de bloques.
Asunto Nº 25/14. Federación de Bomberos Voluntarios: Nota 70/14 que adjunta el proyecto de ley sobre actividad y financiamiento del sistema de bomberos voluntarios de la provincia.
- Girado a comisiones N.os 1 y 2.”.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración de los señores legisladores el Boletín de Asuntos Entrados.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

- VI -

ORDEN DEL DÍA

Sr. PRESIDENTE.— Por Secretaría, se da lectura al Orden del Día, tal cual ha quedado conformado en Labor Parlamentaria.
Sec. LEGISLATIVA.— “Orden del Día Nº 1. Aprobación del Diario de Sesiones del 20 de noviembre 2014 (ordinaria).
Orden del Día Nº 2. Asunto Nº 276/13, con tratamiento preferencial sin fecha fija.
Orden del Día Nº 3. Asunto Nº 512/14.
Orden del Día Nº 4. Asunto Nº 529/14.
Orden del Día Nº 5. Asunto Nº 513/14.
Orden del Día Nº 6. Asunto Nº 514/14.
Orden del Día Nº 7. Asunto Nº 515/14.
Orden del Día Nº 8. Asunto Nº 516/14.
Orden del Día Nº 9. Asunto Nº 517/14.
Orden del Día Nº 10. Asunto Nº 518/14.
Orden del Día Nº 11. Asunto Nº 519/14.

Orden del Día Nº 12. Asunto Nº 528/14.
Orden del Día Nº 13. Asunto Nº 523/14.
Orden del Día Nº 14. Asunto Nº 524/14.
Orden del Día Nº 15. Asunto Nº 525/14.
Orden del Día Nº 16. Asunto Nº 526/14.
Orden del Día Nº 17. Asunto Nº 527/14.
Orden del Día Nº 18. Asunto Nº 532/14
Orden del Día Nº 19. Asunto Nº 533/14.
Orden del Día Nº 20. Asunto Nº 377/14.
Orden del Día Nº 21. Asunto Nº 402/14.
Orden del Día Nº 22. Asunto Nº 376/14.
Orden del Día Nº 23. Asunto Nº 388/14.”.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración el Orden del Día, tal como ha sido leído por la Secretaría Legislativa.

Mociones

Sra. DEL CORRO.— Pido la palabra.
Señor presidente: Solicito que nos apartemos del Reglamento para incorporar el Asunto Nº 507/14, que fue analizado en la Comisión Nº 1, referido a la modificación de la ley de contrataciones.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración de los señores legisladores.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.
Sr. BLANCO.— Pido la palabra.
Señor presidente: Solicito que nos apartemos del Reglamento, y dar ingreso al Asunto Nº 474/14, que ayer fue trabajado en la Comisión Nº 5.
Sr. PRESIDENTE.— A consideración de la moción del legislador Blanco.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.
Sra. MARTÍNEZ ALLENDE— Pido la palabra.
Señor presidente: Solicito que nos apartemos del Reglamento para incorporar el Asunto Nº 521/14.
Sr. PRESIDENTE.— A consideración de la moción de la legisladora Martínez Allende.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.
Sra. MARTÍNEZ— Pido la palabra.
Señor presidente: Solicito que nos apartemos del Reglamento para incorporar los asuntos N.^{os} 388/14 (proyecto de ley que adhiere a la Ley 26914) y 389/14.
Sr. PRESIDENTE.— Legisladora, el Asunto Nº 388/14 está en el Orden del Día.
Sec. LEGISLATIVA.— Es el Orden del Día Nº 23.
Sra. MARTÍNEZ— Bien. Entonces, mociono dar ingreso al Asunto Nº 389/14.
Sr. PRESIDENTE.— A consideración de la moción de la legisladora Martínez de dar ingreso al Asunto Nº 389/14.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.
Sra. ANDRADE TENORIO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito que nos apartemos del Reglamento para incorporar dos asuntos, el Nº 509/14 que tiene que ver con el trabajo conjunto de varios legisladores sobre trastornos alimenticios; y el otro es el Nº 490/14, sobre la actividad del acompañante terapéutico.

Sr. PRESIDENTE.— A consideración de la moción de la legisladora Andrade Tenorio.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.
Sr. RODRÍGUEZ.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito que nos apartemos del Reglamento para dar ingreso a un proyecto de ley, que tome estado parlamentario y sea tratado en esta sesión, sobre la modificación del artículo 28 de la Ley 439. Seguramente, deberemos constituir la Cámara en comisión para debatirlo.

Sr. PRESIDENTE.— A consideración de la moción del legislador Rodríguez.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.
Sr. ARCANDO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Pido que nos apartemos del Reglamento para incorporar un proyecto de ley que está en comisión (Asunto Nº 449/14), y que instituye el 14 de noviembre como Día Provincial de Concientización sobre la Diabetes.

Sr. PRESIDENTE.— A consideración de la moción del legislador Arcando.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.
Sr. BARRIENTOS.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito autorización a la Cámara para que nos apartemos del Reglamento, y dar ingreso a un asunto que en realidad es un pedido de los excombatientes para generar una ley referida a la inscripción y a la tipografía en varios lugares, en hoteles y en transporte público, de la inscripción “Las Malvinas son Argentinas”.

Por otra parte, de acuerdo a lo conversado en la Comisión Nº 1, también requiero la autorización para incorporar un proyecto de creación del fondo social para los trabajadores de la construcción, en el que trabajamos para acordar un dictamen dentro de la Comisión Nº 1, pero como no estábamos dentro de los plazos establecidos, lo vamos a tratar de discutir con la Cámara en comisión.

En función de la discusión que tuvimos en la Comisión Nº 4, pido que se incorpore un asunto que permita que los responsables de talleres culturales tengan el pase a horas interinas, a horas titulares.

Y luego, hay un pedido de informes que tiene que ver con una autorización que se le dio a la BBC para filmar un documental durante un mes en nuestra isla de los Estados, en el marco de lo que significó, inclusive con Cancillería, el programa *Top Gear*, que también era de la BBC.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Barrientos.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.
Sec. LEGISLATIVA.— Ingresan como asuntos N.^{os} 535, 536, 537 y 538/14.
Sr. PRESIDENTE.— Si no hay ningún asunto más para incorporar, ponemos a consideración de la Cámara el Boletín de Asuntos Entrados y los asuntos ingresados por los legisladores.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.
Por Secretaría Legislativa, damos lectura al Orden del Día, tal cual ha quedado conformado.

- 1 -

Aprobación Diario de Sesiones

Sec. LEGISLATIVA.— "Orden del Día Nº 1. Aprobación del Diario de Sesiones del 20 de noviembre de 2014 (ordinaria)".
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración de los señores legisladores, a mano alzada.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.
Continuamos con la lectura del Orden del Día.
Sec. LEGISLATIVA.— "Orden del Día Nº 2. Asunto Nº 276/14.".

- 2 -

Asunto Nº 276/14

Código Contravencional

Moción

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.
Señor presidente: Este es un dictamen de la Comisión Nº 6, que hace varios meses está en observaciones. Y, a efectos de analizarlas, se ha estado trabajando hasta la tarde de ayer. Por eso, solicito que se constituya la Cámara en comisión, así a medida que se dé lectura, se efectúen las correcciones a todas las observaciones oportunamente acercadas a la comisión.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Blanco.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.
Por Secretaría, continuamos con la lectura.

En Comisión

Sec. LEGISLATIVA.— "La Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Sanciona con fuerza de ley

Código Contravencional de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Libro I
Parte General

Título I
Interpretación y Aplicación de la Ley

Capítulo I
Principios Generales

Ámbito de aplicación. Territorialidad

Artículo 1º.- El Código Contravencional se aplicará a las contravenciones que se cometan en el territorio de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y a las que produzcan sus efectos en ella.

Principios generales

Artículo 2º.- En la aplicación de este Código resultan operativos todos los principios, derechos y garantías consagrados en la Constitución de la Nación Argentina; en los tratados de derechos humanos que forman parte de la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 22); en los demás tratados ratificados por el Congreso de la Nación (artículo 31 de la Constitución Nacional) y en la Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Lesividad

Artículo 3º.- El Código Contravencional de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur sanciona las conductas que por acción u omisión dolosa o culposa implican daño o peligro cierto para los bienes jurídicos individuales o colectivos protegidos.

Principio de legalidad

Artículo 4º.- Ningún procedimiento contravencional podrá ser iniciado sin imputación de acciones u omisiones tipificadas por ley dictada con anterioridad al hecho e interpretada en forma estricta.

Prohibición de analogía

Artículo 5º.- Ninguna disposición de este Código podrá interpretarse o integrarse en forma analógica en perjuicio del imputado.

Artículo 6º.- Las contravenciones son dolosas o culposas. La forma culposa debe estar expresamente prevista en la ley.

Presunción de inocencia

Artículo 7º.- Toda persona a quien se le imputare la comisión de una contravención tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.

Non bis in idem

Artículo 8º.- Nadie puede ser juzgado más de una vez por el mismo hecho.

Ley penal más benigna

Artículo 9º.- Si la ley vigente al tiempo de cometerse la falta fuere distinta de la que existiere al momento de pronunciarse el fallo, o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna.

Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la sanción se adecuará de oficio a la establecida por esa ley, quedando firme el cumplimiento parcial de la condena que hubiere tenido lugar.

En todos los casos, los efectos de la nueva ley operarán de pleno derecho.

In dubio pro reo

Artículo 10.- En caso de duda debe estarse siempre a lo que sea más favorable al presunto contraventor.

Ejercicio regular de los derechos
Artículo 11.- El ejercicio regular de los derechos constitucionales no constituirá contravención de acuerdo a las previsiones de este Código.

Capítulo II
De las Contravenciones

Contravención
Artículo 12 .- Es toda acción u omisión tipificada en el Libro Segundo de este Código.
Comisión por Omisión
Artículo 13.- Comete contravención por omisión quien omite evitar la producción de un resultado típico, cuando:

1) en razón de un deber jurídico emergente de la ley, o asumido libremente, deba cuidar que el resultado no se produzca; o
2) haya creado el peligro de producción del resultado.

Sólo será sancionado, conforme al tipo correspondiente, si lo injusto de su conducta, conforme a las circunstancias del hecho, equivale a lo injusto de la comisión activa.
Inimputabilidad. Causas de justificación.”.
Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Por una consulta que me hizo un legislador, aclaro se está leyendo en comisión, a efectos de analizar las observaciones y las modificaciones que iremos realizando.
Sec. LEGISLATIVA.— “Inimputabilidad. Causas de justificación
Artículo 14.- No resultarán punibles las personas que:

a) no hubieren cumplido 18 años a la fecha de comisión del hecho. Cuando el presunto infractor contare con una edad menor a la indicada precedentemente, el funcionario interviniente deberá remitir los antecedentes al Juzgado de Primera Instancia de Familia y Minoridad que corresponda. Cuando se imputare la comisión de contravenciones de tránsito, la edad de punibilidad será la requerida para la obtención de la licencia para conducir; y
b) actuaren en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, siempre que concurran las siguientes circunstancias:
    1) agresión antijurídica;
    2) necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla;
    3) falta de provocación suficiente por parte del que se defiende;
    4) causaren un mal para evitar otro mayor e inminente al que han sido extraños;
    5) obraren en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo;
    6) al momento de cometer la contravención se encontraren violentadas por fuerza física irresistible o amenazadas de sufrir un mal grave e inminente;
    7) al momento de cometer la contravención no pudieren comprender el alcance de sus actos o dirigir sus acciones.”.

Sr. PRESIDENTE.— Perdón, secretaria.

Nos quedamos quietos en los lugares y bajamos un poquito el ruido en la Sala, porque hay legisladores que están siguiendo la letra; y, la verdad, hay momentos en que resulta inaudible. Gracias.
Sec. LEGISLATIVA.— “Penalización atenuada
Artículo 15.- Cuando el autor comenzare a actuar justificadamente, y continuare luego su accionar antijurídicamente, la pena podrá disminuirse de conformidad con el grado de su antijuridicidad de su conducta, en su mínimo, a la mitad y, en su máximo, a un tercio respecto de la sanción prevista para el tipo contravencional respectivo.
Inculpabilidad
Artículo 16.- Serán causales de inculpabilidad:

1) error de tipo: quien en la ejecución de un hecho yerra sobre alguna circunstancia

del tipo contravencional o acepta circunstancias erróneamente, no actúa dolosamente, sin perjuicio de la eventual comisión culposa. Quien en la ejecución de un hecho admitiera erróneamente circunstancias que pertenecen a un tipo contravencional penado más benignamente sólo puede ser sancionado por comisión dolosa conforme al tipo cuyas circunstancias aceptó;

2) error de prohibición: quien en la ejecución de una conducta típica yerra sobre su antijuridicidad, actúa inculpablemente si el error no le es reprochable. En caso de serle reprochable, la pena podrá disminuirse en la forma establecida en el artículo 15, de conformidad con el grado de culpabilidad;
3) perturbaciones psíquicas: actúa inculpablemente quien, al tiempo del hecho, a causa de una perturbación grave de su actividad psíquica o por disminución de la misma, fuere incapaz de comprender lo injusto o de conducirse conforme esta comprensión;
4) estado de necesidad inculpable: quien comete un injusto contravencional para apartar de un peligro a bienes jurídicos propios, de parientes o de otra persona próxima, o de terceros que no son próximos, actúa inculpablemente cuando, conforme sus circunstancias personales y las del hecho no le fuere exigible otra conducta.

En caso de serle exigible otra conducta, deberá disminuirse la pena conforme la escala del artículo 15 atendiendo al grado de culpabilidad.

Tentativa y participación

Artículo 17.- La tentativa contravencional no es punible. Quien interviniere en la comisión de una contravención, como partícipe necesario o instigador, tendrá la misma sanción prevista para el autor, sin perjuicio de graduar la sanción con arreglo a su respectiva participación y lo dispuesto en el artículo 25. La sanción se reducirá en un tercio del máximo para quienes intervinieren como partícipes secundarios.

Responsabilidad de la persona de existencia ideal

Artículo 18.- Cuando una contravención se cometiere en ocasión del desarrollo de actividades realizadas en nombre, al amparo o beneficio de una persona de existencia ideal, esta será pasible de las sanciones que establece este Código cuya aplicación fuere procedente, sin perjuicio de la responsabilidad de los autores materiales.

Ámbito de Aplicación. Leyes especiales

Artículo 19.- Las disposiciones generales de este Código serán aplicables a las contravenciones tipificadas en el libro segundo (Parte Especial), y a las previstas en leyes especiales si estas no establecen normas expresas.

Cuando un hecho constituya a la vez una contravención y un delito, a excepción de las figuras contenidas en el capítulo III, título I, del libro segundo, las disposiciones de este Código no serán aplicables y el juzgamiento del mismo corresponderá exclusiva y excluyentemente al fuero penal, de conformidad con las normas que regulan su procedimiento, toda vez que por aplicación de esta ley se entenderá que la tipicidad contravencional queda subsumida en la penal.

Sin perjuicio de ello, en los casos previstos en el capítulo III, título I, del libro segundo, el inicio de la acción penal suspenderá la prescripción de la acción contravencional relativa al mismo hecho. En caso de absolución en el proceso penal, se reanudará el curso de la prescripción de la acción contravencional, debiéndose continuar con el proceso contravencional y aplicarse, en su caso, las sanciones que este Código prevé.

Conflictos de competencia

Artículo 20.-...".

Moción

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: En este artículo, desde el bloque, la primera modificación que vamos a sugerir es que se suprima en el artículo 20, el primer párrafo que dice: "Los conflictos

de competencia" hasta "Código Procesal Penal". Y que el artículo comience donde dice: "Cuando un mismo hecho..."; es decir, en el segundo párrafo. Que se anule el primero.
Sec. LEGISLATIVA.— Quedaría: "Artículo 20.- Cuando un mismo hecho...". Y anulamos todo lo anterior.
Sr. BLANCO.— Exactamente.
Sec. LEGISLATIVA.— "Cuando un mismo hecho cometido dentro de una jurisdicción territorial municipal caiga bajo la sanción de esta ley y de ordenanzas municipales, las disposiciones de este Código no serán aplicables y el juzgamiento del mismo corresponderá exclusiva y excluyentemente a la autoridad municipal competente.

Advertida la incompetencia, el juez contravencional remitirá las actuaciones a la autoridad municipal competente. Recibida una causa remitida por la autoridad municipal en que se reconoce su incompetencia, el juez contravencional se abocará al conocimiento del caso si reconoce la propia. En caso de considerarse incompetente para intervenir, remitirá los autos al juez correccional, quien resolverá la incidencia.

Cuando un mismo hecho cometido dentro de la jurisdicción territorial provincial estuviere tipificado por este Código y por normas provinciales especiales, el juzgamiento del mismo corresponderá exclusiva y excluyentemente a la autoridad administrativa provincial competente. Recibida una causa remitida por la autoridad administrativa principal en que se reconoce su incompetencia, el juez contravencional se avocará al conocimiento del caso si reconoce la propia. En caso de considerarse incompetente para intervenir, remitirá los autos al juez correccional, quien resolverá la incidencia.

Concurso de contravenciones

Artículo 21.- Cuando concurrieren varios hechos contravencionales independientes reprimidos con una misma especie de sanción, el mínimo aplicable será el mínimo mayor, y el máximo será la suma de los máximos acumulados. Ese máximo no podrá exceder los topes previstos para cada una de las sanciones.

Cuando concurrieren varios hechos contravencionales independientes reprimidos con sanciones de distinta especie, se aplicará la más grave. A tal efecto, la gravedad relativa de las sanciones de diferente naturaleza se determinará por el orden de enumeración del artículo 25, debiendo en tal sentido entenderse que las mismas se hallan allí enunciadas de menor a mayor.

Las sanciones establecidas como accesorias se aplicarán sin sujeción a lo dispuesto en los párrafos precedentes.

Cuando un hecho recaiga bajo más de una sanción contravencional, se aplicará solamente la escala mayor.

Reincidencia

Artículo 22.- El condenado por sentencia firme que cometiera una nueva contravención que afecta o lesiona el mismo bien jurídico, dentro de los dos años de dictada aquella, será declarado reincidente y la nueva sanción que se le imponga se agravará en un tercio del máximo. Se entiende que una nueva contravención afecta o lesiona el mismo bien jurídico cuando está contenida dentro del mismo capítulo.

Aplicación supletoria

Artículo 23. Las disposiciones generales del Código Penal de la Nación serán aplicables supletoriamente siempre que no estén excluidas por este Código.

Título II
Sanciones. Cuenta Contravencional

Capítulo I
De las Sanciones

Finalidad de la sanción

Artículo 24.- La sanción tiene por fin la adaptación del individuo a las condiciones de la vida en una comunidad jurídicamente organizada, necesarias para la realización individual y social.

Para la obtención de esta finalidad, los agentes de aplicación de la ley, el fiscal y el juez se esforzarán para que el contraventor tome conciencia de la responsabilidad social que le incumbe como partícipe de la comunidad democrática.
Enumeración
Artículo 25.- Las sanciones que este Código establece serán principales, accesorias y sustitutivas...".

Moción

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.
Señor presidente: Solicito que en este artículo donde dice: "Son sanciones principales..." se anule "amonestación publicada", que es el inciso 2. El resto queda tal cual.
Sec. LEGISLATIVA.— "Son sanciones principales:

1. amonestación formal;
2. caución de no ofender;
3. multa;
4. reparación del daño;
5. instrucciones especiales;
6. trabajo de utilidad pública.

b) Sanciones accesorias: Son sanciones accesorias:

1. prohibición de concurrencia;
2. clausura;
3. inhabilitación;
4. decomiso;
5. interdicción de cercanía.

Las sanciones accesorias sólo podrán imponerse juntamente con alguna de las establecidas como principales, cuando a criterio del juez resulten procedentes en atención a las circunstancias del caso.

c) Sanciones sustitutivas: Cuando el contraventor injustificadamente no cumpliere o quebrantare las sanciones impuestas, el juez podrá sustituirlas por trabajos de utilidad pública o multa. Esta medida podrá cesar cuando el contraventor manifestare su decisión de cumplir la sanción originalmente impuesta, o el resto de ella.

La sanción sustitutiva a aplicarse no podrá exceder el máximo previsto para dicha especie de sanción en el tipo contravencional respectivo.
Determinación y graduación de la sanción
Artículo 26.- La sanción en ningún caso deberá exceder la medida del reproche por el hecho.
Para elegir y graduar la sanción se deberán considerar las circunstancias que rodearon al hecho, la extensión del daño causado y, en caso de acción culposa, la gravedad de la infracción al deber de cuidado. Deberán ser tenidos en cuenta el carácter físico o jurídico de la persona del infractor, los motivos, la conducta anterior al hecho, las circunstancias económicas, sociales y culturales, y el comportamiento posterior, especialmente la disposición para reparar el daño, resolver el conflicto, mitigar sus efectos y los antecedentes contravencionales en los dos años anteriores al hecho del juzgamiento.
No serán punibles las conductas que no resulten significativas para ocasionar daño o peligro cierto para los bienes jurídicos individuales o colectivos protegidos.".

Moción

Sr. ARCANDO.— Pido la palabra.
Señor presidente: Sugerimos una modificación en el último párrafo donde dice: "los antecedentes contravencionales 'iniciados' en los dos años anteriores al hecho del juzgamiento". Así quedaría redactado, es la propuesta que hacemos.
Sec. LEGISLATIVA.— ¿En el artículo 26?

Sr. ARCANDO.— Sí, artículo 26: “Los antecedentes contravencionales iniciados”, eso está en el último párrafo.
Sr. PRESIDENTE.— Legislador, acerque las modificaciones escritas a la Secretaría, así avanzamos.
Sr. PRESIDENTE.— Leeremos las modificaciones propuestas por el legislador Arcando.
Sec. LEGISLATIVA.— “Artículo 26.- La sanción en ningún caso deberá exceder la medida del reproche por el hecho.

Para elegir y graduar la sanción se deberán considerar las circunstancias que rodearon al hecho, la extensión del daño causado y, en caso de acción culposa, la gravedad de la infracción al deber de cuidado. Deberán ser tenidos en cuenta el carácter físico o jurídico de la persona del infractor, los motivos, la conducta anterior al hecho, las circunstancias económicas, sociales y culturales, y el comportamiento posterior, especialmente la disposición para reparar el daño, resolver el conflicto, mitigar sus efectos y los antecedentes contravencionales iniciados en los dos años anteriores al hecho del juzgamiento.

No serán punibles las conductas que no resulten significativas para ocasionar daño o peligro cierto para los bienes jurídicos individuales o colectivos protegidos.

Acumulación de sanciones

Artículo 27.- Sólo podrán acumularse, como máximo, una sanción principal y dos accesorias, optando dentro de estas últimas por las más eficaces para prevenir la reiteración, reparar el daño o resolver el conflicto. El máximo de la sanción se reducirá en un tercio del máximo cuando al contraventor le fuera imputable un accionar culposo, siempre que la forma culposa estuviere expresamente prevista en la figura.

Amonestación formal

Artículo 28.- La amonestación formal consiste en el apercibimiento que el juez hará efectivo señalándole al infractor la naturaleza y alcances del hecho cometido y la sanción que le correspondería, conminándolo a evitar su reiteración. De todo ello el juez dejará constancia en acta.”.
Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Como en el artículo anterior se anuló “la amonestación publicada”, pido que en este artículo 29 sea suprimido.
Sec. LEGISLATIVA.— Hacemos un cambio en la numeración: de la amonestación formal, del artículo 28, pasamos al artículo 29.
“Caución de no ofender. Artículo 29.- La pena de caución de no ofender consiste en el depósito en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego de una suma establecida conforme los criterios fijados para la sanción de multa, con el compromiso formal de no cometer una nueva contravención durante el tiempo que se le fije, el que no podrá exceder de seis meses. Si a su término el contraventor no ha cometido una nueva contravención, se le reintegrará lo depositado; en caso contrario, la suma depositada pasará a integrar la Cuenta Contravencional prevista en el artículo 42 y siguientes.”.
Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito que se continúe leyendo con la numeración original, y que luego se corrija.
Sec. LEGISLATIVA.— “Multa. Artículo 31.- Consiste en la obligación de pagar una suma de dinero conforme la graduación establecida en este Código, dentro del plazo que al efecto fije en cada caso el juez contravencional, el que no podrá ser superior a 30 días posteriores a la resolución firme que la disponga, mediante el depósito correspondiente en la Cuenta Contravencional, prevista en el artículo 42 y siguientes.

El juez podrá autorizar al contraventor a pagar la multa en cuotas, fijando el importe y las fechas de los pagos, cuando el monto de la multa y la situación económica del condenado así lo aconseje.

Si por causas sobrevinientes a la sentencia condenatoria el contraventor demostrara carecer totalmente de bienes, el juez podrá reemplazar la multa no cumplida por la sanción de trabajos de utilidad pública.

En caso de incumplimiento injustificado de la sanción de multa se aplica lo dispuesto

en el artículo 25, inciso c), del presente Código, excepto en los casos en que el condenado sea una persona de existencia ideal, en los que se procederá a la ejecución forzada de la sanción.

Unidad de multa

Artículo 32.- La Unidad de Multa (U.M.) será del 5% del haber de la escala salarial correspondiente a la categoría 10 PAyT de la Administración Pública Central.

Cobro judicial de las multas

Artículo 33.- La falta de pago de la multa habilitará su cobro judicial. La acción se promoverá por vía de apremio a través de los funcionarios que la Fiscalía de Estado indique, sirviendo de título suficiente el testimonio de la sentencia condenatoria firme que deberá ser remitido por el juzgado contravencional a tal efecto.

Reparación del daño

Artículo 34.- Cuando la contravención hubiere causado un perjuicio a una persona determinada y no resultaren afectados el interés público o de terceros, el juez podrá ordenar la reparación del daño a cargo del contraventor.

Instrucciones especiales

Artículo 35.- Las instrucciones especiales consisten en el sometimiento del contraventor a un plan de conducta establecido por el juez, que no podrá superar el plazo de 24 meses.

Las instrucciones podrán consistir, entre otras, en asistir a determinados cursos especiales, en participar en programas individuales o de grupos de organismos públicos o privados, que le permitan modificar los comportamientos que hayan incidido en la realización de la conducta sancionada.

El juez no podrá impartir instrucciones especiales cuyo cumplimiento sea vejatorio para el contraventor, que afecten sus convicciones, su privacidad; que sean discriminatorias o que se refieran a pautas de conducta no directamente relacionadas con la contravención cometida.

Durante el tiempo de duración de estas instrucciones especiales el contraventor deberá solicitar la autorización del juez contravencional para abandonar la provincia en forma temporaria o definitiva.

El contraventor estará sometido a contralor judicial en lo que al cumplimiento de las instrucciones especiales respecta. El juez deberá instruirlo para que comparezca periódicamente a darle cuenta de su cumplimiento y tomar, además, todas las medidas que crea necesarias para el control de su conducta...".

Sr. PRESIDENTE.— ¿Quiere la palabra, legislador Blanco?

Sr. BLANCO.— Un segundito.

- El legislador Blanco se acerca al estrado.

Sr. PRESIDENTE.— Gracias, legislador.

Continúe, secretaria, por favor.

Sec. LEGISLATIVA.— "Durante el tiempo de duración de estas instrucciones especiales el contraventor deberá solicitar la autorización del juez contravencional para abandonar la provincia en forma temporaria o definitiva.

El contraventor estará sometido a contralor judicial en lo que al cumplimiento de las instrucciones especiales respecta. El juez deberá instruirlo para que comparezca periódicamente a darle cuenta de su cumplimiento y tomar, además, todas las medidas que crea necesarias para el control de su conducta. En caso de que una contravención se hubiera cometido en ocasión del desarrollo de actividades realizadas en nombre, al amparo o beneficio de una persona de existencia ideal, el juez podrá ordenar, a cargo de esta, la publicación de la parte dispositiva de la sentencia condenatoria en el Boletín Oficial de la provincia y en el medio gráfico provincial de mayor circulación.

Trabajo de utilidad pública

Artículo 36.- El trabajo de utilidad pública consiste en la sanción impuesta a una persona física de efectuar tareas en interés y beneficio de la comunidad.

El trabajo de utilidad pública se deberá prestar en lugares y horarios que determine el juez, fuera de la jornada de actividades laborales y educativas del contraventor.

Se considerará un día de trabajo de utilidad pública la prestación de cuatro horas de trabajo.

El trabajo de utilidad pública deberá realizarse en instituciones públicas o privadas de bien público y sin fines de lucro, con exclusión del Poder Judicial de la provincia, por un plazo que no podrá exceder de 90 días.

Esta sanción deberá adecuarse a las capacidades físicas y psíquicas del contraventor, y deberán tenerse especialmente en cuenta las habilidades o conocimientos especiales que el contraventor pueda aplicar en beneficio de la comunidad.

El juez deberá controlar el cumplimiento de los trabajos de utilidad pública, tomar las medidas que sean necesarias para su efectivo control e instruir al contraventor para que comparezca a dar cuenta de su cumplimiento.

Prohibición de concurrencia

Artículo 37.- La prohibición de concurrencia es la sanción impuesta al contraventor de no concurrir a ciertos lugares por un determinado período de tiempo, la que no podrá exceder del plazo de un año.

Clausura

Artículo 38.- La clausura importará el cierre por el tiempo que disponga la sentencia, el que no podrá exceder de 60 días, del establecimiento o local donde se cometiere la contravención.

Inhabilitación

Artículo 39.- La inhabilitación importará la prohibición de ejercer empleo, profesión o actividad y sólo podrá aplicarse cuando la contravención se produjere por incompetencia, negligencia o abuso en el ejercicio de un empleo, profesión, servicio o actividad dependiente de una autorización, permiso, licencia o habilitación de autoridad competente.

En el caso de profesiones que requieran matrícula para su ejercicio, regladas por leyes específicas que prevean el órgano sancionador, el juez se limitará a comunicar a dicho órgano la contravención cometida, cuando guardare relación con el ejercicio de dicha profesión o afectare el decoro y la dignidad de la misma.

La sanción de inhabilitación no podrá superar el término de dos años.

Decomiso

Artículo 40.- La condena implicará la pérdida de los instrumentos y efectos empleados en la contravención salvo que pertenecieran a un tercero no responsable y autorizado para su uso, o se tratare de bienes registrables, o cuando el juez dispusiere lo contrario fundado en la necesidad del contraventor de disponer de esos bienes para atender necesidades elementales para él y su familia. Tratándose de cosas que están en el comercio, se destinarán a establecimientos públicos de asistencia o enseñanza, cuando por su naturaleza cupiese tal destino. Caso contrario...".

Moción

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito realizar una modificación, en el texto que sigue: "caso contrario se procederá a su venta o subasta pública". Es decir, se agrega "o subasta pública".

Sr. PRESIDENTE.— Por Secretaría se da lectura a la modificación.

Sec. LEGISLATIVA.— "Caso contrario, se procederá a su venta o subasta pública, destinándose su producido a la Cuenta Contravencional. Tratándose de cosas cuyo comercio es ilícito y no puedan destinarse en beneficio del Estado, se ordenará su destrucción. El destino de las armas de fuego objeto de decomiso se regirá por la reglamentación legal vigente.

Interdicción de cercanía

Artículo 41. La interdicción de cercanía es la prohibición impuesta al contraventor de acercarse a menos de determinada distancia, de lugares o personas, o comunicarse por cualquier medio con las mismas. Los límites máximos para la imposición de esta sanción

serán de 200 metros y durante un plazo que no podrá exceder de un año.

Capítulo II
De la Cuenta Contravencional

Cuenta Contravencional. Creación y afectación
Artículo 42. Créase la Cuenta Contravencional, que se constituirá a partir de la promulgación de la presente ley, afectada específica y exclusivamente a la financiación de:

a) programas de educación, deportes, promoción social, médicos – psicológicos, o cualquier otro en los que se cumplan instrucciones especiales o trabajo de utilidad pública según lo establecido en el presente Código;
b) programas destinados a la promoción de la cultura cívica, convivencia, medios alternativos de resolución de conflictos, o cualquier otro que tenga como objeto la prevención y concientización de la población sobre la materia; y
c) programas vinculados a la prevención de las contravenciones más recurrentes, de acuerdo a los registros estadísticos, o aquellas que resultaren trascendentes por su impacto en la comunidad y en la opinión pública.

Cuenta Contravencional. Integración
Artículo 43. La Cuenta Contravencional estará integrada por:

a) los fondos provenientes de la aplicación de multas previstas en la presente ley;
b) los fondos provenientes del producido de la venta contemplada en el artículo 40; y
c) los fondos no reintegrados al contraventor que resulten de la aplicación del artículo 30 in fine.

Cuenta Especial. Ámbito de constitución
Artículo 44.- La Cuenta Contravencional se constituirá en el ámbito del Ministerio Jefe de Gabinete del Poder Ejecutivo.

Autorízase la apertura de una Cuenta Especial Contravencional, en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, con el fin de ingresar los conceptos enumerados en el artículo anterior, y cuyos egresos se ajustarán al destino indicado.

Moción

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: En razón de la modificación que hicimos en el artículo anterior donde hablaba de subasta pública, deberíamos agregar, en el artículo 43, inciso b): “Los fondos provenientes del producido de la venta y/o subasta pública”. Agregamos: “ y/o subasta pública”. Eso hay que corregir.

“Los fondos provenientes del producido de la venta y/o subasta pública, contemplada en el artículo 40”.

Sec. LEGISLATIVA.— “b) los fondos provenientes del producido de la venta y/o subasta pública, contemplada en el artículo 40; y

c) los fondos no reintegrados al contraventor que resulten de la aplicación del artículo 30 *in fine*.

Cuenta Especial. Ámbito de Constitución
Artículo 44. La Cuenta Contravencional se constituirá en el ámbito del Ministerio Jefe de Gabinete del Poder Ejecutivo.

Autorízase la apertura de una Cuenta Especial Contravencional, en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, con el fin de ingresar los conceptos enumerados en el artículo anterior, y cuyos egresos se ajustarán al destino indicado.

Los montos percibidos serán depositados en una cuenta especial en el Banco de la Provincia Tierra del Fuego.

Título III
Medidas Preventivas

Capítulo Único

Internación Tuitiva
Artículo 45.- Aún cuando no se presumiera la comisión o participación en alguna de las conductas tipificadas en el libro segundo de este Código, el funcionario interviniente tendrá la obligación de disponer el traslado, al nosocomio público más cercano, de cualquier persona hallada en la vía pública, cuando el estado en que se encuentre lo hiciera aconsejable con el objeto de proteger su integridad psicofísica.

Comunicará esa situación de inmediato a la Defensoría Pública correspondiente.

Internación Preventiva
Artículo 46.- Cuando el estado en que se hallare el presunto contraventor hiciere necesario su traslado a un nosocomio público con el objeto de proteger su integridad psicofísica y/o mantener el orden público, o en el caso previsto por el artículo 122 del libro segundo de esta ley, el funcionario interviniente dispondrá su traslado en el acto al establecimiento más cercano para su diagnóstico por un médico responsable, quien determinará si debe ser internado por el lapso necesario para su restablecimiento. Comunicará esa situación de inmediato a la Defensoría Pública correspondiente.

Los familiares del presunto contraventor podrán solicitar la derivación a un nosocomio privado a su costa, la que de ser factible, a criterio del médico tratante, se realizará por acta de entrega suscrita ante la autoridad de aplicación.”.

Moción

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Con respecto a este artículo 46, hay posturas encontradas en la redacción de la totalidad del artículo. Por eso, pido un cuarto intermedio sobre bancas para aclarar la situación.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Blanco.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Cuarto Intermedio

- Son las 10:20.
- A las 10:30

Sr. PRESIDENTE.— Salimos del cuarto intermedio.

Mociones

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Voy a mocionar que en el artículo 46 se saque la frase “en el caso manifiesto para el artículo 122, del libro segundo, de esta ley”. O sea: “Cuando el estado en que se hallare el presunto contraventor hiciere necesario su traslado a un nosocomio público con el objeto de proteger su integridad psicofísica y/o mantener el orden público...”. Sacamos lo que sigue y continúa: “el funcionario interviniente dispondrá su traslado en el acto al establecimiento más cercano para su diagnóstico por un médico responsable”; y sigue.

Sr. PRESIDENTE.— Se lee por Secretaría.

Sec. LEGISLATIVA.— “Internación preventiva. Artículo 46.- Cuando el estado en que se hallare el presunto contraventor hiciere necesario su traslado a un nosocomio público con el

objeto de proteger su integridad psicofísica y/o mantener el orden público, el funcionario interviniente dispondrá su traslado en el acto al establecimiento más cercano para su diagnóstico por un médico responsable, quien determinará si debe ser internado por el lapso necesario para su restablecimiento. Comunicará esa situación de inmediato a la defensoría pública correspondiente.

Los familiares del presunto contraventor podrán solicitar la derivación a un nosocomio privado a su costa la que, de ser factible a criterio del médico tratante, se realizará por acta de entrega suscripta ante la autoridad de aplicación.

Internación durante el proceso.”.

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: En este artículo 47 hay una modificación: “En cualquier estado del proceso el fiscal promoverá y el juez ordenará...”. Pido que diga “podrá ordenar” en lugar de “ordenará”.

Sec. LEGISLATIVA.— “Artículo 47.- En cualquier estado del proceso el fiscal promoverá y el juez podrá ordenar la internación en establecimientos médicos públicos o privados, a propuesta de familiares o interesados, de aquellos presuntos contraventores que por informe médico fuesen peligrosos para sí o para terceros, siguiendo el procedimiento previsto para la internación de incapaces o dementes establecido en el Código Civil, derivando su trámite a las defensorías públicas correspondientes.”.

Sr. TAPIA.— Pido la palabra.

Señor presidente: Respecto al artículo 46, lo que propongo es suprimirlo porque no estamos de acuerdo.

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Después, cuando votemos en particular, hay dos o tres artículos en los que seguramente van a haber disidencias.

Sr. PRESIDENTE.— Bien, iremos artículo por artículo.

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: En función de la mecánica y a cómo vamos a trabajar, desde nuestro bloque proponemos que, al momento de la votación en general, hagamos las observaciones que tenemos, puesto que la verdad ya hemos discutido y hemos acercado las observaciones, pero evidentemente no hemos logrado un consenso, con lo que propone en el despacho de comisión. Por lo tanto, para ahorrar tiempo, cuando se termine de discutir vamos a decir, ya en sesión, en qué cuestiones no estamos de acuerdo.

Sr. PRESIDENTE.— Legislador, iremos artículo por artículo.

Continúe, secretaria.

Sec. LEGISLATIVA.— “Demora y detención. Artículo 48.- Ningún funcionario podrá demorar o privar de la libertad ambulatoria a persona alguna, o ejercer sobre ella fuerza física, salvo que se tratare de funcionarios de policía, con sujeción estricta a las siguientes pautas en forma concurrente:

a) que se efectúe con el solo fin de hacer cesar los efectos de la presunta contravención;
b) que no exista otra medida preventiva de las contenidas en este capítulo para la consecución de tal fin;
c) que se proceda de acuerdo a los lineamientos establecidos en el artículo 64 de la presente ley; y
d) que se mantenga al presunto contraventor fuera de contacto con detenidos o demorados por presunta comisión de delitos o procesados, o condenados por delitos, debiendo permanecer durante el lapso de su demora en espacios especialmente destinados a tal fin.

Constituirá falta grave y causal de exoneración del funcionario que violare este precepto, sin perjuicio de la investigación penal a que diere lugar.

En ningún caso la demora o detención autorizará la incomunicación del presunto contraventor, debiendo facilitarse de manera inmediata a su detención una vía de comunicación con su abogado y/o familiar.

Secuestro
Artículo 49.- Con el solo fin de asegurar la prueba y hacer cesar los efectos de la presunta contravención, el fiscal podrá disponer el secuestro de aquellos elementos con los que presuntamente se hubiere cometido la contravención.
Clausura preventiva
Artículo 50.-".

Moción

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: En el artículo 50 hay una modificación, un agregado al final del artículo, donde dice: "12 horas de efectivizada la medida y solicitar instrucciones al fiscal -agregaría- y este deberá solicitar instrucciones al juez".
Después de fiscal "y este deberá solicitar instrucciones al juez".
Sr. PRESIDENTE.— Perfecto.
Sec. LEGISLATIVA.— "Clausura preventiva
Artículo 50.- El funcionario interviniente podrá, por decisión motivada, proceder a clausurar preventivamente lugares por el término necesario para hacer cesar la contravención, sólo cuando esta ponga en peligro la vida o bienes de terceros, incluyendo el daño ambiental.

En estos casos, el funcionario responsable deberá remitir las actuaciones dentro de las 12 horas de efectivizada la medida y solicitar instrucciones al fiscal y este deberá solicitar instrucciones al juez.
Prohibición de retener documentación. Obligación de exhibir en forma adecuada
Artículo 51.- Ningún funcionario podrá retener documentación personal ni exigir su entrega. Toda persona requerida estará obligada a exhibir adecuadamente la documentación legalmente exigible para la actividad, oficio, profesión, conducción o circulación de bienes o personas, de modo tal que garantice el acceso a los datos por parte de la autoridad de control.

Título IV
Extinción y Prescripción de la Acción y de la Sanción. Registro

Capítulo I
De la Extinción y Prescripción de la Acción y de la Sanción

Extinción de la acción y de la sanción
Artículo 52.- La acción se extinguirá por:

1) muerte del imputado;
2) prescripción;
3) el cumplimiento del acuerdo celebrado entre las partes involucradas en un proceso de mediación que ponga fin al conflicto; y
4) desestimación del caso por parte del fiscal.

La sanción se extinguirá por:

1) muerte del condenado;
2) prescripción; y
3) el cumplimiento de la sanción.

Prescripción de la acción
Artículo 53.- La acción prescribirá transcurridos dos años desde la comisión de la contravención.

La prescripción se interrumpe por:

a) la comisión de otra contravención;
b) el primer llamado a declarar, efectuado por el fiscal;
c) el requerimiento de remisión de la causa a juicio;
d) la citación a juicio de las partes;
e) el dictado de la sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre

firme.

La prescripción se suspende respecto de todos los imputados:

a) por el inicio del trámite de mediación;
b) por el inicio de la acción penal en los casos previstos en el capítulo III, título I, del libro segundo, de conformidad a lo establecido en el artículo 19.

Prescripción de la sanción. Interrupción de la prescripción de la sanción

Artículo 54.- La sanción contravencional se prescribirá transcurridos dos años desde la fecha en que quedare firme la sentencia condenatoria.

La prescripción de la sanción se interrumpirá por la imposición de otra condena firme.

Legislación Supletoria

Artículo 55.- A las disposiciones del libro primero de este Código son aplicables supletoriamente las disposiciones de la Parte General del Código Penal.

Capítulo II
Del Registro de Contravenciones de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Registro Contravencional

Artículo 56.- Créase el Registro de Contravenciones de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el que será llevado dentro del ámbito del Poder Judicial por el organismo que por vía de Superintendencia disponga el Superior Tribunal de Justicia. El registro será llevado en forma digital con mecanismos que aseguren su inviolabilidad y mecanismos de resguardo de su información. Ninguna autoridad policial o administrativa podrá requerir con fines estadísticos o de cualquier otro tipo información acerca del contenido del registro. Constituirá falta grave y será causal de exoneración para el funcionario responsable que autorizare o facilitare información a terceros particulares o funcionarios del contenido del registro o los expedientes contravencionales digitales. La información contenida en legajos digitales del registro será secreta. El juez tendrá pleno acceso a los expedientes digitales de las causas que lleve, y deberá consultar, a los fines de reincidencia de cada imputado, el registro digital respectivo.

El registro de cada expediente digital caducará y deberá ser borrado de forma segura junto con los respaldos o copias que existieren mediante un proceso informático automatizado a las cero horas del día en que prescriba la acción, la sanción o el plazo de cómputo de la reincidencia conforme a este Código.

Título V

Procedimiento Contravencional

Capítulo Único
Procedimiento Contravencional. Disposiciones Generales.

Promoción de la acción contravencional

Artículo 57.- Toda contravención da lugar a una acción pública que podrá ser promovida de oficio, o por simple denuncia verbal o escrita ante la autoridad policial o directamente ante el Ministerio Público Fiscal.

Simple denuncia

Artículo 58.- Toda persona podrá denunciar hechos que a su juicio puedan constituir una contravención reprimida por este Código. Podrá formularla por escrito u oralmente, personalmente, por representante o por mandatario especial, debiendo en este último caso agregarse el poder.

Se realizará ante un funcionario policial o del Ministerio Público Fiscal, quien estará obligado a recibirla sin demora ni formalidades, debiendo transcribir fielmente los hechos que denuncie, indicando si el denunciante resulta damnificado por los mismos. Será suscrita por el

denunciante, representante o apoderado, y deberá adjuntar copia del documento nacional de identidad (DNI). Si lo deseare, podrá intervenir en la etapa investigativa del procedimiento a los fines de la reparación del daño y composición del conflicto.

Acta de constatación de una contravención confeccionada por funcionario público

Artículo 59.- El acta de constatación de una contravención confeccionada por un funcionario público será considerada un instrumento público en los términos del artículo 293 del Código Penal.

Deberá ser claramente legible en todas sus partes y contener:

1) lugar, fecha y hora del acta;
2) lugar, fecha y hora de la comisión del hecho u omisión punible, cuando fuere posible determinarlos;
3) la naturaleza y circunstancias del hecho, características de los elementos, instrumentos o vehículos empleados para cometer la contravención;
4) el tipo contravencional de este Código presuntamente infringido;
5) el nombre y domicilio del infractor, si fuera posible determinarlo;
6) la constancia de la notificación al presunto contraventor, si estuviere presente, de su derecho a ser asistido por un defensor particular, así como del derecho a ser asistido por el defensor oficial en caso de no ejercer aquel derecho.
7) el nombre y domicilio de los testigos y del denunciante, si los hubiere;
8) las pruebas colectadas;
9) las medidas preventivas dispuestas;
10) la firma del funcionario con aclaración de su nombre completo, cargo y número de legajo o matrícula.

El acta así formulada hace civil y penalmente responsable de su autenticidad al funcionario que la suscribe.

Cuando el presunto infractor estuviere presente el funcionario responsable le entregará copia del acta labrada.

Serán nulas las constataciones formuladas en actas que no fueren claramente legibles o que les falten algunos de los requisitos exigidos por este artículo.

Las actas de constatación deberán ser presentadas ante el Ministerio Público Fiscal dentro de los dos días.

Notificaciones, citaciones y cómputo de términos

Artículo 60.- Las notificaciones, las citaciones y el cómputo de términos se realizarán de la forma prevista por el Código Procesal Penal.

Inhibición y recusación

Artículo 61.- Para la inhibición y recusación de fiscal, juez, secretario y empleados regirán las causales y el trámite establecidos en el Código Procesal Penal.

Investigación

Artículo 62.- Promovida la acción contravencional, el agente fiscal guiará la investigación con la finalidad de reunir, con la mayor celeridad, los elementos esenciales que permitan formar apreciación preliminar acerca de la existencia del hecho punible, su calificación legal, la individualización y condiciones personales de los partícipes del mismo.

Tendrá las mismas facultades de dirección e investigación que el Código Procesal Penal otorga al juez de instrucción, con excepción de las medidas establecidas en el artículo 41 de la Constitución Provincial, cuya producción deberá ser solicitada al juez contravencional en turno. Cualquier diligencia y aquellas que por su naturaleza y características se consideren definitivas e irreproducibles deberán ser notificadas por cualquier medio fehaciente en forma previa al defensor, bajo pena de nulidad. Bajo la misma sanción, se le notificará su producción, y que pueda examinar sus resultados.

La víctima y el imputado podrán proponer la producción de diligencias probatorias.

El juez contravencional ordenará su producción cuando las considere pertinentes y útiles. Su resolución será irrecurrible.

Medidas preventivas

Artículo 63.- Tomado conocimiento del hecho, el fiscal podrá disponer alguna o algunas de las

medidas preventivas establecidas en el capítulo único, del título III, del libro I de este Código.
Aprehensión. Flagrancia
Artículo 64.- Los funcionarios de la policía comunicarán toda aprehensión inmediatamente al fiscal y al juez contravencional. En ningún caso la aprehensión podrá exceder el término de seis horas. Las actas de prevención serán remitidas sin tardanza cuando el fiscal las solicite o en su defecto, dentro de las 24 horas de labradas.

El sumario deberá contener todas las actuaciones labradas en virtud de la presunta contravención cometida. Asimismo, cuando correspondiere, las certificaciones médicas del imputado y de las víctimas, los croquis y fotografías del lugar del hecho, las declaraciones testimoniales recibidas a todos los intervinientes, el resultado de las operaciones técnicas realizadas y toda otra diligencia practicada con relación al hecho investigado.

En la primera oportunidad, siempre antes de la realización de la audiencia prevista en el artículo siguiente, el fiscal invitará al imputado a elegir defensor; si no lo hiciere o el abogado no aceptare inmediatamente el cargo, convocará al acto al defensor oficial. La audiencia no procederá sin su presencia. El defensor podrá entrevistarse con su asistido inmediatamente antes de la realización de la audiencia única.
Audiencia única
Artículo 65.- Cuando hubiere motivo bastante para sospechar que una persona ha participado en la comisión de una contravención, el fiscal fijará...".

Moción

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Acá hay una modificación en la redacción para que el artículo quede. Se modifica "en lo atinente a la participación del juez contravencional durante la audiencia"; y quedaría con la redacción que voy a acercar ahora a Secretaría.

- Así se hace.

Sec. LEGISLATIVA.— Leo el artículo: "Artículo 65.- Cuando hubiere motivo bastante para sospechar que una persona ha participado en la comisión de una contravención, el fiscal fijará una única audiencia en la que realizará ante el juez contravencional el interrogatorio de identificación, de conformidad a las reglas establecidas en el Código Procesal Penal; posteriormente efectuará en total conocimiento del imputado, la imputación formal sobre el o los hechos atribuidos, los elementos de prueba colectados y la calificación legal provisoria. El imputado podrá efectuar un descargo o negarse a declarar, sin que su silencio implique una presunción de culpabilidad. Estarán presentes en esta audiencia el juez, el fiscal y su defensor, bajo pena de nulidad.
Remisión de la causa a juicio
Artículo 66.- Concluida la audiencia única, el fiscal remitirá la causa al juez contravencional competente en el término de tres días, prorrogable por otro período igual.

Esta remisión a juicio deberá contener, bajo pena de nulidad, los datos personales del imputado, una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, su calificación legal y una exposición sucinta de los motivos en que se funda.
Desestimación del caso
Artículo 67.- El fiscal desestimará las actuaciones con relación a uno, algunos o todos los imputados, cuando considere que el hecho investigado no se cometió; que el hecho investigado resulta atípico; que la contravención no fue cometida por el imputado o que media una causa de justificación, inimputabilidad, inculpabilidad o una excusa absolutoria.

En tal caso, procederá a reservar las actuaciones. Esta decisión podrá ser adoptada desde el inicio de las actuaciones.

En cualquier momento de la investigación, incluso antes de recibirle declaración al imputado, el fiscal podrá desestimar el caso cuando resultare evidente la levedad o insignificancia del hecho. Dicha desestimación cerrará definitiva e irrevocablemente el

proceso con relación al imputado a cuyo favor se dictare, debiendo disponerse el archivo de las actuaciones.

En cualquier caso, la desestimación del caso por parte del fiscal deberá ser fundada, bajo pena de nulidad.

Mediación

Artículo 68.-".

Moción

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Es para modificar una palabra en el artículo 68 donde dice: "y que no se encuentre afectado el interés público o de terceros", debería decir: "que no se encuentre afectado el orden público y de terceros".

Mediación

Artículo 68.- En cualquier estado de la investigación o del proceso, a pedido del imputado o de la víctima, o de oficio, siempre que no se trate de episodios de violencia familiar y que no se encuentre afectado el orden público o de terceros, el fiscal o el juez podrán derivar el caso al Centro de Mediación Judicial o Casa de Justicia de Tolhuin, a los fines de iniciar un proceso de mediación que ponga fin al conflicto.

Siempre necesitará el expreso consentimiento de la víctima y del imputado, y el acuerdo podrá contemplar algún tipo de reparación hacia la comunidad que resulte significativa para la víctima.

El trámite del proceso de mediación se regirá por las normas establecidas para las causas penales por la ley correspondiente.

Efectos de la mediación

Artículo 69.- En aquellos acuerdos en que las partes hayan dado enteramente por satisfechas sus pretensiones, el fiscal dispondrá la desestimación del caso y el juez declarará la extinción de la acción contravencional. Dicha desestimación hará cosa juzgada, no pudiéndose formular un nuevo juzgamiento por los mismos hechos.

Para los casos en que se pacte alguna obligación para las partes y/o hacia la comunidad, lo dispuesto en el párrafo precedente quedará sujeto a que se constate su cumplimiento. En caso de comprobarse el incumplimiento de aquella en el plazo acordado, se dejará constancia de dicha circunstancia, reanudándose el trámite del proceso.

Seguimiento

Artículo 70.- En los casos en los que se arribe a un acuerdo, el fiscal deberá disponer el control y seguimiento de lo pactado, pudiendo para ello solicitar colaboración a instituciones públicas y privadas; también podrá disponer que se efectúe directamente desde el Centro de Mediación o Casa de la Justicia de Tolhuin.

Juicio

Artículo 71.- Recibidas las actuaciones, el juez contravencional citará al Ministerio Público Fiscal, al imputado y su defensor, a fin de que en el término de 10 días comparezcan a juicio, examinen las actuaciones, los documentos y las cosas secuestradas, ofrezcan las pruebas e interpongan las recusaciones que estimen pertinentes.

Vencido el término de citación a juicio, o resueltas las recusaciones en su caso, el juez fijará la fecha de audiencia de debate, que se iniciará en un plazo de cinco días, prorrogable por otro período igual.

Regirán supletoriamente las normas del juicio común establecido por el Código Procesal Penal.

Omisión de debate

Artículo 72.- Dentro del plazo previsto por el artículo precedente, y cualquiera fuese la posición asumida por el imputado en orden a su culpabilidad, el fiscal podrá proponer omitir el debate. La propuesta y su trámite no suspenderán el plazo referido, a los fines allí contemplados. De la proposición, se conferirá vista al imputado quien, dentro de los cinco días, podrá expresar al juez contravencional su conformidad con la petición. Ratificada la

manifestación en forma personal ante el magistrado, por el imputado y su defensor, el proceso será llamado para resolver, dentro de los tres días, si corresponde omitir el debate. Si el juez también considerase innecesario el debate y adecuado el límite de la condena estimada por el fiscal, los autos pasarán a estudio hasta dictar sentencia. Dará a conocer esta, en audiencia pública, que tendrá lugar dentro de los tres días de dictado el pronunciamiento.

El juez podrá absolver o condenar, según corresponda, fundando su resolución en la prueba ya incorporada pero la condena nunca podrá superar la sanción mayor requerida por el fiscal.

Rechazada la petición, la estimación sancionatoria expresada no constituirá limitación alguna a la cuantía de la sanción que resulte procedente.

La existencia de varios imputados en un mismo procedimiento no inhibirá la aplicación de esta regla a alguno de ellos.

Audiencia de debate

Artículo 73.- La audiencia de debate, la confección del acta correspondiente y el dictado de la sentencia se regirán por las normas contenidas en los capítulos II, III y IV, del título I, del libro III, del Código Procesal Penal.

Duración del proceso

Artículo 74.- Si por circunstancias extraordinarias, la sentencia no pudiere ser pronunciada dentro del plazo de tres meses de recibida la causa por el juzgado contravencional, el juez deberá hacerlo saber al Superior Tribunal de Justicia, con anticipación de 10 días del vencimiento de aquel, expresando las razones que determinen la imposibilidad. Si considerare atendible la causa indicada, el Superior Tribunal de Justicia señalará el plazo en que la sentencia debe pronunciarse.

El juez que incumpliere reiteradamente alguna de estas obligaciones, incurrirá en falta grave.

Recurso

Artículo 75.- “.

Moción

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: En el primer renglón, donde dice: “el imputado y su defensor solo podrán”, hay que eliminar la palabra “solo”, y queda “el imputado o su defensor podrán”.

Sec. LEGISLATIVA.— “Artículo 75.- Contra la sentencia condenatoria, el imputado o su defensor podrán interponer recurso de apelación, el que se interpondrá en forma fundada, por escrito, ante el mismo tribunal que dictó la resolución, y dentro de los cinco días de notificada.

Omitida la fundamentación del recurso, el juez lo declarará desierto.

La concesión del recurso se notificará al fiscal, quien podrá sostener el pronunciamiento mediante escrito fundado que deberá presentar dentro de los cinco días.

Las actuaciones serán elevadas de inmediato al juez correccional competente.

Facultades del juez correccional

Artículo 76.- Recibidas las actuaciones, el juez correccional deberá resolver el recurso, pudiendo disponer de oficio medidas para mejor proveer la producción de prueba adicional, incluso citar al condenado o al denunciante para oírlo personalmente.

Deberá dictar sentencia fundada dentro de los 60 días de recibidas las actuaciones, confirmando total o parcialmente la resolución apelada, o bien dejándola sin efecto, pudiendo dictar en su reemplazo la que conforme a derecho corresponda, pero no podrá agravar la sanción impuesta.

Aplicación supletoria

Artículo 77.- Las disposiciones generales del Código Procesal Penal son aplicables supletoriamente siempre que no estén excluidas por este Código.

Libro Segundo

Parte Especial

Título I
Protección Integral de las Personas

Capítulo I
Integridad Física

Pelear
Artículo 78.- Quien peleare o tomare parte en una agresión física en lugar público o de acceso público que no causare lesiones penalmente punibles será sancionado con caución de no ofender de uno a cinco UM, o multa de uno a tres UM, o trabajo de utilidad pública de cinco a 10 días, y prohibición de concurrencia y/o interdicción de cercanía.
Hostigar. Maltratar. Intimidar. Maltratar físicamente
Artículo 79.- Quien intimidare u hostigare de modo amenazante o maltratare físicamente a otro, siempre que el hecho no constituya delito, será sancionado con multa de tres a 10 UM, o trabajo de utilidad pública de siete a 15 días, y prohibición de concurrencia y/o interdicción de cercanía.
Agravantes
Artículo 80.- En las conductas descritas en los dos artículos precedentes la sanción se eleva al doble cuando:

a) existiere previa organización;
b) la víctima fuere persona menor de 18 años, mayor de 70, o con limitación temporaria o permanente de sus capacidades; y
c) la contravención se cometiere con el concurso de dos o más personas;

Colocar o arrojar cosas o sustancias.”.

Mociones

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: En este artículo 81 hay que eliminar, en el tercer renglón: “amonestación publicada”, que ya fue arreglada en los artículos anteriores. O sea, quedaría: “sancionar con amonestación formal o reparación del daño”.

Sec. LEGISLATIVA.— Se lee la redacción final: “Artículo 81.- Quien arrojare cosas o sustancias que pudieran causar lesiones o daños a terceros, en lugares públicos o privados de acceso público será sancionado con amonestación formal, o reparación del daño, o multa de dos a 20 UM, o instrucciones especiales de uno a tres meses, o trabajo de utilidad pública de tres a 15 días, y prohibición de concurrencia y/o interdicción de cercanía. Admite culpa.

Quien colocare o arrojare sustancias insalubres o cosas capaces de producir un daño, en lugares públicos o privados de acceso público será sancionado con amonestación publicada o reparación del daño, o instrucciones especiales de tres a seis meses, o multa de cinco a 100 UM, o trabajo de utilidad pública de 10 a 30 días, y decomiso y/o prohibición de concurrencia y/o interdicción de cercanía. Admite culpa.

La sanción se elevará al doble cuando la conducta se realizare en espacios donde concurren niños.

Las personas de existencia ideal serán sancionadas con multa de cinco a 100 UM, o trabajo de utilidad pública de 10 a 30 días, y decomiso, cuando la acción se realizare en nombre, al amparo, en beneficio o con autorización de las mismas. Admite culpa.
Arrojar, derramar, permitir desborde o verter residuos y/o sustancias peligrosas
Artículo 82.- Quien arrojare a la vía pública…”.

- Ocupa la Secretaría Legislativa la prosecretaria administrativa, Mabel L. Caparrós.

Sr. ARCANDO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Proponemos eliminar el segundo párrafo del artículo 82: “Quien derramare líquidos cloacales en la vía pública o espacios públicos será sancionado con multa de 50 a 150 UM, o reparación del daño, o trabajo de utilidad pública de 15 a 40 días”.

Los que vivimos en Tierra del Fuego sabemos cuál es su realidad con respecto al asentamiento, y lamentablemente serían sancionados por esta particularidad.

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Esto no es así, porque que no haya servicio en los asentamientos no es responsabilidad de quien habita sino quien, en definitiva, tendría que ser multado es el Estado. Por eso mociono que se mantenga la redacción tal cual está.

Sr. PRESIDENTE.— En el momento de la votación, veremos en lo particular, artículo por artículo.

Sec. LEGISLATIVA.— “Artículo 82.- Quien arrojare a la vía pública o a un sitio común sustancias o emanaciones que puedan resultar peligrosas para la salud, será sancionado con multa de 10 a treinta 30 UM, o reparación del daño, o trabajo de utilidad pública de cinco a 15 días. Admite culpa.

Quien derramare líquidos cloacales en la vía pública o espacios públicos será sancionado con multa de 50 a 150 UM, o reparación del daño, o trabajo de utilidad pública de 15 a 40 días. Admite culpa.

Igual sanción le corresponderá a quien permita el desborde de cámaras sépticas o pozos ciegos.

En todos los casos, la sanción se elevará al doble cuando la conducta se verifique en espacios donde concurren niños.

El titular o responsable de un establecimiento industrial o comercial desde el que se vierten líquidos combustibles o aguas servidas u otro contaminante, en infracción a las normas vigentes en cada caso, será sancionado con multa de 50 a 400 UM, o trabajo de utilidad pública de 20 a 60 días, y clausura del establecimiento, y/o inhabilitación y/o decomiso de los elementos que contengan los líquidos combustibles, aguas servidas u otro contaminante.

Fabricar, introducir o vender ilegítimamente

Artículo 83.- Quien fabricare o introdujere en la provincia o vendiere ilegítimamente psicotrópicos, bebidas alcohólicas o sustancias para su preparación será sancionado con multa de 10 a 50 UM, o instrucciones especiales de seis a 12 meses, o trabajo de utilidad pública de 30 a 60 días, e inhabilitación y/o decomiso.

Organizar o promover juegos o competencias de consumo de alcohol

Artículo 84.- Quien organizare o promoviere juegos o competencias consistentes en el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos o de acceso público será sancionado con multa de 10 a 100 UM, o instrucciones especiales de dos a seis meses, o de 10 a 30 días de trabajo de utilidad pública, y clausura y/o decomiso y/o inhabilitación.

La sanción se elevará al doble cuando en el juego o competencia intervinieren personas menores de 18 años. En este único supuesto se admite la forma culposa.

Omitir recaudos de cuidado

Artículo 85.- Quien omitiera los recaudos de cuidado respecto de un animal que se encontrare a su cargo, con peligro para terceros será sancionado con caución de no ofender de uno a 10 UM, o multa de cinco a 15 UM, o cinco a 10 días de trabajo de utilidad pública.

La sanción se elevará al doble cuando por esa conducta se pusiera en peligro a una persona menor de 18 años, o mayor de 70, o con limitación temporaria o permanente de sus capacidades.

Capítulo II
Libertad Personal

Impedir u obstaculizar ingreso o salida

Artículo 86.- Quien impidiera u obstaculizara intencionalmente y sin causa justificada el

ingreso o salida de personas o vehículos de lugares públicos o privados, será sancionado con multa de 10 a 15 UM, o trabajo de utilidad pública de dos a 20 días, e inhabilitación.

La sanción se elevará al doble para quien dispusiere, organizare o promoviere la realización de la conducta precedente.

Ingresar o permanecer contra la voluntad del titular del derecho de admisión

Artículo 87.- Quien ingresare o permaneciere en lugares públicos, o de acceso público o privado, contra la voluntad expresa de quien ejerce válida y legalmente el derecho de admisión será sancionado con amonestación publicada o caución de no ofender, de dos a cinco UM, o con multa de uno a cinco UM, o trabajo de utilidad pública de cinco a 10 días, y prohibición de concurrencia y/o interdicción de cercanía.

Capítulo III
Niños, Niñas y Adolescentes

Inducir a la mendicidad a menores de edad.".

Sr. PRESIDENTE.— Perdón, secretaria. Les pido por favor que bajen el murmullo en la sala, porque se nos hace difícil seguir la letra de la lectura por Secretaría. Gracias.

- Ocupa la Presidencia el vicepresidente 1º Juan Felipe Rodríguez.

Sec. LEGISLATIVA.— "Artículo 88.- Quien indujere en su beneficio o de terceros a una persona menor de edad o con limitación temporaria o permanente de sus capacidades, a pedir limosna o contribuciones será sancionado con amonestación formal, o multa de dos a 20...".

Moción

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Disculpe, secretaria, pero en el artículo 87 hay que hacer una corrección, donde dice: "será sancionado con amonestación publicada". Esto fue dejado sin efecto, así que habría que suprimirlo.

Dice: "Artículo 87.- Quien ingresare o permaneciere en lugares públicos, o de acceso público o privado, contra la voluntad expresa de quien ejerce válida y legalmente el derecho de admisión, será sancionado con caución de no ofender...".

Estamos en comisión, solicito un segundo.

Sec. LEGISLATIVA.— "Artículo 87.- Quien ingresare o permaneciere en lugares públicos, o de acceso público o privado, contra la voluntad expresa de quien ejerce válida y legalmente el derecho de admisión, será sancionado con caución de no ofender, de dos a cinco UM, o con multa de uno a cinco UM, o trabajo de utilidad pública de cinco a 10 días, y prohibición de concurrencia y/o interdicción de cercanía.

Capítulo III
Niños, Niñas y Adolescentes

Inducir a la mendicidad a menores de edad

Artículo 88.- Quien indujere en su beneficio o de terceros a una persona menor de edad o con limitación temporaria o permanente de sus capacidades, a pedir limosna o contribuciones será sancionado con amonestación formal, o multa de dos a 20 UM, o instrucciones especiales de tres a ocho meses, o trabajo de utilidad pública de 10 a 30 días.

La sanción se elevará al triple cuando existiera previa organización.

El juez podrá eximir de sanción al autor en razón del superior interés del niño, niña o adolescente.

Promocionar, publicitar o informar de manera explícita

Artículo 89.- Quien promocionare, publicitare o informare de manera explícita o implícita, por

cualquier medio, ayuda, oportunidad, sitio, servicios y/o elementos adecuados o necesarios a fin de que terceros participen o intervengan en actos de contenido sexual que involucren a niños, niñas y adolescentes, será sancionado con multa de 50 a 200 UM, o trabajo de utilidad pública de 10 a 50 días, e inhabilitación y/o clausura y/o decomiso.

Quien condujere a terceros a establecimientos o lugares donde se oferte a menores de 18 años, para su utilización en actos de contenido sexual, será sancionado con multa de 70 a 250 UM, o trabajo de utilidad pública de 20 a 60 días, e inhabilitación.

Si en las conductas precedentes intervinieren prestadores de servicios turísticos, individual, colectiva, u organizadamente, o al amparo de agencias u otras organizaciones turísticas serán sancionados con multa de 80 a 600 UM, o trabajo de utilidad pública de 40 a 90 días, y clausura y/o inhabilitación y/o decomiso.”.

Moción

Sr. ARCANDO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito se efectúe una modificación en el último párrafo, que quedaría redactado de la siguiente manera: “Cuando los actos prohibidos fueran cometidos, con o sin fines de lucro, por una persona jurídica, los responsables de las personas jurídicas serán sancionados con multa de 80...”. Y continuaría tal cual está escrito en el texto que tiene la secretaria.

Sra. ANDRADE TENORIO.— ¿Legislador, puede repetir?

Sr. ARCANDO.— “Cuando los actos prohibidos fueran cometidos, con o sin fines de lucro, por una persona jurídica, los responsables de las personas jurídicas serán sancionados...”.

Sec. LEGISLATIVA.— Le pedimos que acerque la modificación, para incorporarlo al texto. ¿Le parece?

Sr. PRESIDENTE.— Continuamos con la lectura.

Sec. LEGISLATIVA.— “Artículo 89.- Si en las conductas precedentes intervinieren prestadores de servicios turísticos, individual, colectiva u organizadamente, o al amparo de agencias u otras organizaciones turísticas serán sancionados con multa de 80 a 600 UM, o trabajo de utilidad pública de 40 a 90 días, y clausura y/o inhabilitación y/o decomiso.

Si actuando en vinculación con agencias u organizaciones prestadoras de servicios turísticos, las conductas precedentes fueran cometidas por titulares responsables de bares y demás lugares de expendio de bebidas o titulares y conductores de ómnibus, camiones, taxis, remises o cualquier otro medio de transporte, serán sancionados con multa de 80 a 600 UM, o trabajo de utilidad pública de 40 a 90 días, y clausura y/o inhabilitación y/o decomiso.

Cuando los actos prohibidos fueran cometidos, con o sin fines de lucro, por una persona jurídica, el responsable será sancionado con multa de 80 a 600 UM, o trabajo de utilidad pública de 40 a 90 días…

Repetimos: “Cuando los actos prohibidos fueran cometidos, con o sin fines de lucro, por una persona jurídica, el responsable de la persona jurídica...”. Es una redundancia, perdón. Repito: “Cuando los actos prohibidos fueran cometidos, con o sin fines de lucro, por una persona jurídica, el responsable…”.

Sr. BLANCO.— “De esta”.

Sec. LEGISLATIVA.— “De esta”; le sacamos… “será sancionada con multa de 80 a 600 UM, o trabajo de utilidad pública de 40 a 90 días, y clausura y/o inhabilitación y/o decomiso.

Vender, entregar o exhibir material, elementos o publicaciones prohibidos para menores.

Filtros de contenido

Artículo 90.- Quien vendiere, entregare o exhibiere a un menor una publicación, película o cualquier otro elemento gráfico o audiovisual u objeto que hubiese sido calificado por la autoridad competente como de exhibición prohibida para el menor será sancionado con multa de 100 a 200 UM, o trabajo de utilidad pública de 10 a 30 días, y clausura.

La misma sanción se aplicará al titular o responsable de un establecimiento comercial que brinde acceso a internet y no instalare en todas las computadoras mecanismos o filtros de contenido que impidieren el acceso irrestricto a sitios con contenidos para adultos, u omitiera

activar estos mecanismos cuando los usuarios del servicio sean personas menores de 18 años.

Cuando los actos prohibidos fueran cometidos, con o sin fines de lucro, por una persona jurídica, esta será sancionada con multa de 150 a 300 UM, o trabajo de utilidad pública de 10 a 30 días, y clausura.

Agravantes

Cuando se tratare de material de contenido pornográfico o violento, las sanciones previstas en el artículo anterior se agravarán:

a) al doble, cuando se tratare de menores mayores de 14 años; y

b) al triple, cuando se tratare de menores de 14 años.

Suministrar alcohol y/o cigarrillos a personas menores de edad

Artículo 91.- El propietario, gerente, empresario, encargado o responsable de un comercio o establecimiento de cualquier actividad que suministrare o permitiera el consumo de bebidas alcohólicas y/o cigarrillos a personas menores de 18 años será sancionado con multa de 20 a 150 UM, o trabajo de utilidad pública de 15 a 45 días, y clausura y/o inhabilitación y/o decomiso. Admite culpa.

La sanción se incrementará al doble si se tratare de salas de espectáculos o diversión en horarios reservados exclusivamente para personas menores de edad. Admite culpa.

Tolerar o permitir la presencia de menores en lugares no autorizados

Artículo 92.- El propietario, gerente, empresario, encargado o responsable de un local de espectáculos públicos, de baile o de entretenimientos, que tolerare o admitiere la entrada o permanencia de una persona menor de 18 años fuera del horario permitido será sancionado con multa de 15 a 120 UM, o trabajo de utilidad pública de 10 a 30 días, y clausura y/o inhabilitación. Admite culpa.

Suministrar o permitir el acceso a material pornográfico

Artículo 93.- Quien suministrare o permitiere a una persona menor de 18 años el acceso a material pornográfico será sancionado con multa de 10 a 200 UM, o trabajo de utilidad pública de 10 a 45 días, y decomiso y/o inhabilitación y/o clausura. Admite culpa.

La sanción se elevará al doble en caso de que tal conducta se dirigiere a una persona menor de 16 años. Admite culpa.

Suministrar objetos peligrosos a menores de edad

Artículo 94.- Quien suministrare para su uso en espacios públicos o privados con acceso de público a una persona menor de 18 años cualquier tipo de arma no convencional, de aire o gas comprimido, arma blanca u objetos cortantes o contundentes inequívocamente destinados a ejercer violencia o agredir, será sancionado con multa de 20 a 300 UM, o instrucciones especiales de tres a ocho meses, o trabajo de utilidad pública de 15 a 30 días, y decomiso. Admite culpa.

La sanción se elevará al triple si se suministraren materias explosivas o sustancias venenosas para su uso en espacios públicos o privados con acceso de público a una persona menor de 18 años. Admite culpa.

Suministrar indebidamente productos industriales o farmacéuticos

Artículo 95.- Quien suministrare indebidamente a una persona menor de 18 años productos industriales o farmacéuticos, de los que emanen gases o vapores tóxicos que al ser inhalados o ingeridos sean susceptibles de producir trastornos en la conducta y/o daños en la salud, será sancionado con multa de 45 a 400 UM, o instrucciones especiales de seis a 12 meses, o trabajo de utilidad pública de 20 a 45 días, y clausura y/o inhabilitación y/o decomiso.

La sanción se elevará al doble cuando la acción se dirigiera a una persona menor de 16 años o los hechos se cometieran en el interior o en las adyacencias de un establecimiento escolar o educativo, o en ocasión de las entradas o salidas de los alumnos.

Capítulo IV
Derechos Personalísimos

Alterar identificación de las sepulturas
Artículo 96.- Quien alterare o suprimiere la identificación de una sepultura será sancionado con multa de 10 a 100 UM, o reparación del daño, o trabajo de utilidad pública de 10 a 30 días, y prohibición de concurrencia.
Inhumar, exhumar o profanar cadáveres humanos. Violar sepulcros. Sustraer o dispersar cenizas o restos humanos
Artículo 97.- Quien inhumare o exhumare clandestinamente, o profanare un cadáver humano, violare un sepulcro, o sustrajere o dispersare cenizas o restos humanos, será sancionado con multa de 30 a 500 UM, o reparación del daño, o trabajo de utilidad pública de 15 a 60 días, y prohibición de concurrencia.
La dispersión de cenizas humanas socialmente aceptada no será punible.
Perturbar ceremonias religiosas o servicios fúnebres
Artículo 98.- Quien impidiere o perturbare la realización de ceremonias religiosas o de un servicio fúnebre será sancionado con amonestación publicada, o multa de cinco a 30 UM, o reparación del daño...".

- Se detiene la lectura.

Sec. LEGISLATIVA.— Se anula, entonces...
Sr. BLANCO.— "Amonestación publicada".
Sec. LEGISLATIVA.— "Artículo 98.- Quien impidiere o perturbare la realización de ceremonias religiosas o de un servicio fúnebre será sancionado con multa de cinco a 30 UM, o reparación del daño, o trabajo de utilidad pública de siete a 15 días, y prohibición de concurrencia.
La sanción se elevará al doble si se produjere el ultraje o la profanación de objetos o símbolos en ofensa a los sentimientos religiosos.

- Ocupa la Presidencia el vicegobernador Roberto Luis Crocianelli.

Título II
Protección de la Propiedad Pública y Privada

Capítulo I
Administración Pública y Servicios Públicos

Afectar funcionamiento de servicios públicos
Artículo 99.- Quien afectare intencionalmente el funcionamiento de los servicios públicos de alumbrado, limpieza, gas, electricidad, agua, teléfono, transporte, correo o transmisión de datos será sancionado con multa de cinco a 350 UM, o reparación del daño, o trabajo de utilidad pública de cinco a 30 días.
Idéntica sanción se aplicará a quien abriera, removiera o afectare bocas de incendio, tapas de desagües o sumideros. Este supuesto admite culpa.
Afectar la señalización dispuesta por autoridad pública
Artículo 100.- Quien alterare, removiere, simulare, suprimiere, tornare confusa, hiciere ilegible o sustituyere señales colocadas por la autoridad pública para identificar calles o su numeración o cualquier otra indicación con fines de orientación pública será sancionado con amonestación publicada...".""
¿Sacamos "amonestación publicada"?
Sr. BLANCO.— Sí.
Sec. LEGISLATIVA.— "...será sancionado con caución de no ofender de dos a cinco UM, o multa de cinco a 100 UM, o reparación del daño, o trabajo de utilidad pública de tres a 30

días.

Idéntica sanción se aplicará a quien impidiere colocar la señalización reglamentaria.

Afectar servicios de emergencia o seguridad

Artículo 101.- Quien requiriere sin motivo un servicio de emergencia o seguridad será sancionado con caución de no ofender de uno a cuatro UM, o multa de dos a cinco UM, o trabajo de utilidad pública de uno a cinco días.

La sanción se elevará al triple para quien impidiere u obstaculizare intencionalmente tales servicios.

Denunciar falsamente

Artículo 102.- Quien denunciare falsamente la comisión de una contravención será sancionado con multa de cuatro a 100 UM, o instrucciones especiales de tres a cuatro meses, o trabajo de utilidad pública de tres a 10 días.

Quebrantar clausura

Artículo 103.- Quien quebrantare una clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa será sancionado con multa de 10 a 100 UM, o trabajo de utilidad pública de 10 a 30 días.

Quebrantar inhabilitación para conducir

Artículo 104.- Quien quebrantare una inhabilitación para conducir impuesta por resolución firme administrativa será sancionado con multa de 10 a 100 UM, o trabajo de utilidad pública de 10 a 30 días.

Ejercer ilegítimamente una actividad

Artículo 105.- Quien ejerciere actividad para la cual se le hubiere revocado por resolución firme la licencia o autorización, o quebrantare la inhabilitación será sancionado con multa de 15 a 200 UM, o trabajo de utilidad pública de 15 a 45 días, y clausura.

Capítulo II
Fe Pública

Frustrar subasta pública

Artículo 106.- Quien perturbare u obstaculizare el derecho de ofertar libremente, manipulare la oferta, o de cualquier otro modo contribuyere a frustrar en todo o en parte el normal desarrollo o el resultado de una subasta pública será sancionado con multa de cinco a 100 UM, o trabajo de utilidad pública de 10 a 45 días, e inhabilitación.

La sanción se incrementará al doble cuando la conducta se produjere a cambio de un ofrecimiento dinerario u otra dádiva, o si existiere previa organización.

Título III
Protección del Uso del Espacio Público o Privado

Capítulo Único
Uso del Espacio Público y Privado

Manchar o ensuciar bienes

Artículo 107.- Quien manchare o ensuciare por cualquier medio bienes de propiedad pública o privada será sancionado con multa de dos a 20 UM, o reparación del daño, o trabajo de utilidad pública de cinco a 15 días.

La sanción se elevará al doble cuando la acción se efectuare sobre estatuas, monumentos, templos religiosos, establecimientos educativos u hospitalarios. Admite culpa.

Producir ruidos molestos

Artículo 108.- Quien perturbare el descanso o la tranquilidad de terceros mediante ruidos que por su volumen, reiteración o persistencia excedieran la normal tolerancia, será sancionado con amonestación formal, o caución de no ofender de uno a cinco UM, o multa de dos a 10 UM, o trabajo de utilidad pública de dos a 10 días. Admite culpa.

Cuando la conducta se realizare en nombre, al amparo, en beneficio o con autorización de una persona de existencia ideal o del titular de una explotación o actividad,

estos serán sancionados con caución de no ofender de cinco a 25 UM, o multa de 10 a 100 UM, o trabajo de utilidad pública de cinco a 30 días. Admite culpa.

Introducir ganado sin autorización en propiedad ajena

Artículo 109.- Quien sin autorización del responsable introdujere ganado en propiedad ajena, de forma que produjere daño, será sancionado con caución de no ofender de cinco a 15 UM, o multa de 10 a 20 UM, o reparación del daño, o trabajo de utilidad pública de 10 a 15 días. Admite culpa.

Título IV
Protección de la Seguridad y la Tranquilidad

Capítulo I
Seguridad Pública

Portar armas

Artículo 110.- Quien portare, en lugares públicos o privados de acceso público, cualquier tipo de arma de fuego, de aire o gas comprimido, arma blanca, objeto cortante o contundente, u otro arma no convencional, sin causa que lo justifique, será sancionado con multa de cinco a 30 UM, o instrucciones especiales de uno a tres meses, o trabajo de utilidad pública de cinco a 15 días, y decomiso.

Entregar indebidamente armas, explosivos o sustancias venenosas

Artículo 111.- Quien entregare un arma, explosivos o sustancias venenosas a una persona declarada judicialmente insana, o con las facultades mentales notoriamente alteradas, o en estado de intoxicación alcohólica o bajo los efectos de estupefacientes, será sancionado con multa de cinco a 900 UM, o instrucciones especiales de tres a 24 meses, o trabajo de utilidad pública de 15 a 90 días, y decomiso y/o interdicción de cercanía y/o clausura.

Usar indebidamente armas

Artículo 112.- Quien ostentare indebidamente un arma de fuego, aún hallándose legalmente autorizado a portarla, será sancionado con multa de seis a 300 UM o trabajo de utilidad pública de 10 a 45 días, y decomiso y/o inhabilitación.

La sanción se elevará al doble para quien disparare un arma de fuego fuera de los ámbitos autorizados por la ley, siempre que la conducta no constituyere delito.

Suministrar o transportar sin autorización artefactos pirotécnicos y de cohetería, arrojar o encender artefactos pirotécnicos y de cohetería

Artículo 113.- Quien transportare sin autorización, detentare, fabricare, comercializare, tuviere en depósito o venta al público mayorista o minorista, suministrare a otro o tuviere para uso particular todo elemento de pirotecnia y cohetería, sea este de venta libre o no y/o fabricación autorizada, será sancionado con multa de ocho a 500 UM, o trabajo de utilidad pública de 10 a 90 días, y decomiso y/o clausura.

Idéntica sanción le corresponderá a quien arrojare o encendiere dichos elementos.

Quien suministrare, a cualquier título, artefactos pirotécnicos y de cohetería a personas menores de 18 años será sancionado con multa de 15 a 900 UM, o trabajo de utilidad pública de 20 a 90 días, y decomiso y/o clausura. Admite culpa.

Capítulo II
Actos y Espectáculos Públicos

Vender entradas o permitir ingreso en exceso

Artículo 114.- Quien dispusiere la venta de entradas en exceso o permitiere el ingreso de una mayor cantidad de asistentes que la autorizada a un espectáculo público será sancionado con multa de cinco a 200 UM, o trabajo de utilidad pública de tres a 30 días y clausura y/o inhabilitación. La sanción se elevará al doble si se produjeren daños a terceros por desórdenes, aglomeraciones o avalanchas. Admite culpa.

Omitir recaudos de organización y seguridad

Artículo 115.- Quien omitiere los recaudos de organización o seguridad exigidos por la legislación vigente o por la autoridad competente respecto de un acto o espectáculo públicos, será sancionado con multa de cinco a 200 UM, o reparación del daño, o trabajo de utilidad pública de tres a 30 días, y clausura y/o inhabilitación. La sanción se elevará al doble si se produjeren daños a terceros por desórdenes, aglomeraciones o avalanchas.

Omitir recaudos de organización y seguridad

Artículo 115.- Quien omitiere los recaudos de organización o seguridad exigidos por la legislación vigente o por la autoridad competente respecto de un acto o espectáculo público será sancionado con multa de cinco a 200 UM, o reparación del daño, o trabajo de utilidad pública de tres a 30 días, y clausura y/o inhabilitación. La sanción se elevará al doble si se produjeren daños a terceros por desórdenes, aglomeraciones o avalanchas. Admite culpa.

Producir avalanchas

Artículo 116.- Quien produjere por cualquier medio una avalancha en ocasión de un acto o espectáculo público será sancionado con multa de tres a 30 UM, o instrucciones especiales de uno a tres meses, o trabajo de utilidad pública de tres a 15 días, y prohibición de concurrencia.

La sanción se elevará al doble si se produjeren daños a terceros por las avalanchas.

Arrojar cosas o sustancias

Artículo 117.- Quien arrojare cosas o sustancias que pudieran causar lesiones o daños a terceros en ocasión de un acto o espectáculo público será sancionado con multa de tres a 45 UM, o instrucciones especiales de uno a tres meses, o trabajo de utilidad pública de tres a 20 días, y prohibición de concurrencia. Admite culpa.

Portar artefactos pirotécnicos

Artículo 118.- Quien portare artefactos pirotécnicos con motivo o en ocasión de un acto o espectáculo público será sancionado con multa de 15 a 500 UM, o trabajo de utilidad pública de 20 a 45 días, y decomiso y/o prohibición de concurrencia.

La sanción se elevará al doble si los artefactos son encendidos o arrojados. Toda autorización de excepción deberá ser otorgada en forma escrita por autoridad competente a los organizadores del evento.

Portar elementos aptos para la violencia

Artículo 119.- Quien con motivo o en ocasión de un acto o espectáculo público introdujere, tuviere en su poder o portare armas blancas o elementos destinados inequívocamente a ejercer violencia o a agredir, será sancionado con multa de 10 a 100 UM, o instrucciones especiales de dos a seis meses, o trabajo de utilidad pública de 10 a 30 días, y decomiso y/o prohibición de concurrencia.

Guardar elementos aptos para la violencia

Artículo 120.- Quien con motivo o en ocasión de un acto o espectáculo público guardare, en dependencias del lugar en el que se desarrollan tales actividades, elementos inequívocamente destinados a ejercer violencia o a agredir, será sancionado con una multa de 20 a 300 UM, o trabajo de utilidad pública de 15 a 45 días, y decomiso. Admite culpa.

El dirigente, miembro de comisiones directivas o subcomisiones, o persona con igual poder de decisión que guardare o permitiere la guarda, en dependencias del lugar en el que se desarrollan aquellas actividades, de elementos inequívocamente destinados a ejercer violencia o agredir, será sancionado con multa de 40 a 600 UM, o trabajo de utilidad pública de 20 a 90 días, y clausura y/o inhabilitación y/o decomiso. Admite culpa.

Capítulo III
Seguridad y Ordenamiento en la Circulación

Conducir con mayor cantidad de alcohol en sangre del permitido o bajo los efectos de estupefacientes

Artículo 121.- Quien condujere un vehículo superando los límites permitidos de alcohol en sangre o bajo la acción de otras sustancias que disminuyan la aptitud para hacerlo, será sancionado con multa de 20 a cien 100 UM, o instrucciones especiales de tres a 12 meses, o

trabajo de utilidad pública de siete a 30 días, e inhabilitación. Admite culpa.

La sanción se elevará al doble cuando:

a) la contravención fuere cometida por el conductor de un vehículo motorizado de carga o de transporte de pasajeros en servicio;

b) la contravención fuere cometida por el conductor de un vehículo de transporte escolar o de personas con limitación temporaria o permanente de sus capacidades.

Participar, disputar u organizar competencias de velocidad o destreza en vía pública

Artículo 122.- Quien participare, disputare u organizare competencias de destreza o velocidad con vehículos motorizados en la vía pública, violando las normas reglamentarias de tránsito, será sancionado con multa de 20 a 300 UM, o instrucciones especiales de seis a 12 meses, o trabajo de utilidad pública de 15 a 45 días, e inhabilitación.

La sanción se elevará al doble cuando la conducta descrita precedentemente se realizare mediante el empleo de un vehículo modificado o preparado especialmente para dicho tipo de competencias.

Confiar, permitir o no impedir conducción o manejo a menor de 16 años o manifiesto incapaz

Artículo 123.- Quien confiare la conducción, permitiere conducir, o no impidiese –estando en condiciones de hacerlo– la conducción o manejo de vehículo automotor, motocicleta, ciclomotor o cuatriciclo, a menor de 16 años o a un manifiesto incapaz, conociendo tal condición, será sancionado con multa de 20 a 400 UM, o instrucciones especiales de seis a 12 meses, o trabajo de utilidad pública de 15 a 45 días.

La sanción se elevará al doble cuando la conducta descrita precedentemente se realizare con la finalidad de que el menor de 16 años o manifiesto incapaz disputase o participare en competencias de destreza o velocidad en la vía pública, violando las normas reglamentarias de tránsito.

Incumplir obligaciones legales

Artículo 124. Quien al conducir un vehículo participare de un accidente de tránsito y no cumpliere con las obligaciones legales a su cargo será sancionado con multa de cinco a 50 UM, o trabajo de utilidad pública de 10 a 30 días, e inhabilitación.

La sanción se elevará al doble si el contraventor se diere a la fuga.

Fingir prestación de servicio. Abusar de situación de emergencia o cumplimiento de servicio oficial

Artículo 125.- Quien condujere fingiendo la prestación de un servicio de urgencia, de emergencia u oficial, o abusando de reales situaciones de emergencia o cumplimiento de un servicio oficial, será sancionado con multa de 40 a 200 UM, o instrucciones especiales de seis a 24 meses, o trabajo de utilidad pública de 14 a 60 días, e inhabilitación.

Disposiciones Transitorias”.

Mociones

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito hacer una modificación en el artículo 126, donde dice: “la presente ley entrará en vigencia a los 60 días”. La modificación es para que diga: “a los 120 días de su publicación”.

Sec. LEGISLATIVA.— “Disposiciones Transitorias. Artículo 126.- La presente ley entrará en vigencia a los 120 días de su publicación.

Artículo 127.- Derógase a partir de la entrada en vigencia de la presente el Digesto de Edictos Policiales contenido en el Decreto de Gobierno 77/1959.

Artículo 128.- Derógase a partir de la entrada en vigencia de la presente el artículo 4º, incisos b), h) y l) en lo atinente a los edictos policiales; y el artículo 19, incisos h) e i), ambos de la Ley provincial 263 (texto ordenado), y toda norma que se oponga a la presente.

Artículo 129.- Sustitúyese el inciso 5), del artículo 23, del Código Procesal Penal, Ley provincial 168, por el siguiente texto:

'Artículo 5º.- En grado de apelación en las resoluciones sobre faltas municipales o

contravenciones, y de queja por denegación de este recurso'.".
Sr. BLANCO.— Pido la palabra.
Señor presidente: El artículo 130 es el que comunica al Poder Ejecutivo, pero solicito incluir con esa numeración, el siguiente texto:
"Incorpórase el inciso 6) al artículo 23, del Código Procesal Penal, Ley provincial 168, a tenor del siguiente texto:
Inciso 6) en conflictos de competencias de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 del Código Contravencional".
Sec. LEGISLATIVA.— Damos lectura al artículo 130, redacción final: "Incorpórese el inciso 6), artículo 23, del Código Procesal Penal, Ley provincial 168, a tenor del siguiente texto:
Inciso 6) en conflictos de competencia de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 del Código Contravencional'.
Artículo 131.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.".
Sr. BLANCO.— Pido la palabra.
Señor presidente: Es para aclarar que después deberán corregir la numeración de los artículos, porque algunos fueron suprimidos. Pero a efectos de facilitar la votación en particular, solicito que respetemos el número que tiene y después cuando se haga el pase en limpio del proyecto de ley; en caso de ser aprobado, se corra la numeración, como así también si correspondiere alguna corrección, que se haga.
Sr. PRESIDENTE.— Si me permite legislador, los artículos que no tienen disidencia se pueden votar en general, y los que sí la tienen, en particular.

Mociones

Sr. BLANCO.— Eso, en primer lugar.
En segundo lugar, por haber artículos en los que hay disidencia, solicito que votemos primero, en general; y luego, en particular y en comisión, aquellos artículos que generan disidencias. Después, pasar a sesión, fundamentar el proyecto y votarlo en sesión.
Solicito que se vote, en general y en particular.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración de la Cámara la moción del legislador Blanco.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.
Sr. BLANCO.— Pido la palabra.
Señor presidente: Solicito que se vote en general, en comisión, el proyecto.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.
Sr. BLANCO.— Pido la palabra.
Señor presidente: Solicito que se realice la votación en comisión, en general.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración, en general, en comisión.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.
Sr. BLANCO.— Pido la palabra.
Señor presidente: Ahora solicito que, en comisión, votemos en particular.
No sé si por Secretaría se ha llevado el detalle de los artículos en los que hay disidencia y si no….
Sec. LEGISLATIVA.— Sí, son los 20 y 131.
Sr. BLANCO.— Solicito que votemos, en particular, desde el artículo 1º al 19 en conjunto, por

no haber disidencia.
Sr. BARRIENTOS.— En realidad no estoy seguro de que haya tantos legisladores que quieran votar por la negativa. Por lo que vi, todos votaron en general.

Yo quiero dejar manifestado que voto negativamente, en general y en particular. Si esto acorta el debate...
Sr. PRESIDENTE.— Está bien, pero hay bloques que han manifestado que no están de acuerdo, por ejemplo, con el artículo 46. Entiendo que eso expresó el legislador Tapia. ¿Es así, legislador?
Sr. TAPIA.— Sí.
Sr. ARCANDO.— Nosotros disentimos en cuatro artículos, y quiero dejar plasmado que son los 46, 86, 99 y 119, únicamente.
Sr. PRESIDENTE.— La alternativa es que, para los que tienen disidencia, propongo un cuarto intermedio. Si las resuelven, queda la posibilidad de hacer lo que dijo el legislador Barrientos.
Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Hay artículos sobre los que se tienen tres posturas; por lo cual solicito un cuarto intermedio sobre bancas. Nos ponemos de acuerdo en qué artículos tienen disidencia y hay más de una posición; y votamos.

Si le hiciéramos caso al legislador Barrientos, algunos que estamos en disidencia tendríamos que votar a favor; y no es así. Determinamos los artículos con las distintas posturas y votamos.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Blanco.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Cuarto Intermedio

- Son las 11:45.
- A las 11:55

Sr. PRESIDENTE.— Se levanta el cuarto intermedio.

Moción

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: En el cuarto intermedio quedamos de acuerdo en que al haber dictamen en comisión, votaremos en general y en particular, en sesión. Por eso, solicito que la Cámara se constituya en sesión para la votación, primero, en general y después en particular.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Blanco.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

En Sesión

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Previo a la votación, como presidente de la Comisión, y por ser quien tuvo a su cargo la elaboración de este dictamen, quiero, brevemente, hacer algunas consideraciones al respecto.

En principio, le recuerdo al resto de los legisladores que este es un trabajo que viene haciendo la Cámara legislativa hace más de dos años y medio, en los que hemos iniciado la

tarea. Los trabajos en comisión han comenzado, citando al Superior Tribunal de Justicia, al cuerpo de fiscales de la provincia; a los colegios de profesionales de la abogacía de Ushuaia y de Río Grande, a la Asociación de Magistrados de la provincia; a los tribunales municipales de faltas; por supuesto, todos los que quisieron participar.

Esta Comisión de Seguridad nombró de entre sus miembros, a través de los asesores de cada uno de los legisladores, una subcomisión que fue la que tuvo la tarea de llevar adelante la definición y la redacción del Código que -también vale la pena aclarar- desde el mes de mayo o junio está en período de observación, figurando recurrentemente en los órdenes del Día.

Y, a pesar del tiempo transcurrido, solamente se han recibido modificaciones o sugerencias de integrantes de la comisión y algunas de particulares, que han sido analizadas y discutidas, hasta el día de la fecha, donde se tomó la determinación de dar tratamiento a este código; entre otras cosas, a efectos de que, en principio y de una vez por todas, queden sin efecto edictos policiales que -como bien decía en los últimos artículos- es del año 1959, una época bastante nefasta para el país y para la provincia de Tierra del Fuego.

A su vez, respetando el trabajo llevado adelante por todos nuestros colaboradores -como dije- quienes participaron y llevaron adelante esta tarea.

En el caso del bloque Unión Cívica Radical lo hizo con permanente asesoramiento de la Universidad Nacional de Derecho, a través del doctor Carlos Francisco Balbín que tuvo a su cargo la revisión de todas las sugerencias al proyecto, y de las modificaciones. Y, luego, agradezco a los abogados del Frente para la Victoria, del Partido Justicialista, del Movimiento Popular Fueguino y del Partido Popular. Iba a dar los nombres pero temo olvidarme de alguno, así que a todos los que tuvieron la responsabilidad de participar y discutir, y dejar muchas horas de trabajo, corresponde desde esta Cámara legislativa el respeto a esa tarea que han llevado adelante, y que le demos un corte definitivo.

Será la decisión mayoritaria la que decidirá si la provincia de Tierra del Fuego, a partir de ahora va a tener un código de convivencia, un código contravencional o va a seguir con los edictos policiales.

En mi caso particular, debo agradecer a mis colaboradores más directos la responsabilidad y el compromiso que han puesto en la elaboración de este dictamen.

Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares, en general; y si hay disidencias, después, por supuesto, en particular.

Sr. PRESIDENTE.— Gracias, legislador.

Sr. ARCANDO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Comparto la apreciación del legislador de la bancada radical, en el sentido del agradecimiento a todos los que estuvieron trabajando en esta norma.

Uno obviamente, tiene sus conocidos, sus amigos, a quienes consultar.

En este caso, cuando salió el primer borrador del dictamen, consulté con el doctor Mario Alberto Juliano, que es el juez en el tribunal oral y criminal Nº 1, en Necochea, y aparte es el director de la Asociación Pensamiento Penal; él me manifestaba que se ajustaba a derecho, que no encontraba ninguna cuestión inconstitucional
dentro de la norma.

Y quiero decir que el doctor Juliano es aquel juez que se hizo famoso porque en sus fallos permitía que los presos tengan celulares dentro de la cárcel. O sea, nadie puede cuestionar su calidad de garantista dentro del espacio del derecho.

También me decía -sobre la ley- que si hay alguna cuestión inconstitucional, seguramente va a ser plasmada una vez que esté sancionada; y que los jueces deban sancionar a alguna persona y que el individuo, en su derecho, pueda plantear la inconstitucionalidad. Y ahí serán los jueces quienes determinarán si es o no de esa manera.

Creo que estas garantías que me dio el doctor Juliano, hacen que yo vote el proyecto tal cual ha sido consensuado con mis pares en esta sesión. Adelanto, en el caso particular, el acompañamiento al mismo. Nada más, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.— Gracias, legislador.

Tiene la palabra el legislador Barrientos.

Sr. BARRIENTOS.— Pido la palabra.

Señor presidente: En principio, hay que reconocer lo que ha planteado el legislador Pablo Blanco, sobre el trabajo realizado y el tiempo que lleva el proyecto en observación para su tratamiento.

De todas maneras, debo decir que el 28 de agosto, y sin pertenecer a la Comisión Nº 6, presenté 35 observaciones a este código.

Me parecía importante participar y trabajar, firmemente, en lo que -a mi modo de ver- es un código de convivencia. Claramente, creo que estamos perdiendo una oportunidad.

Hablar de un código contravencional, cuando en su momento en la ciudad de Buenos Aires se aprobó un código de convivencia -y a partir de la gestión del intendente Macri, se transformó en un código contravencional- esto está marcando un direccionamiento ideológico en este sentido.

Solicito autorización para que se incorporen las 35 observaciones que hice al Orden del Día, que fueran presentadas el 28 de agosto. Mencionaré algunas que no estoy de acuerdo.

Por ejemplo, los artículos 86 y 99, referidos a impedir u obstaculizar el ingreso o afectar el funcionamiento de servicios, me parece que son inconstitucionales, porque afecta el derecho de los gremios a poder manifestarse.

Hubiese sido una contravención el 17 de octubre del 45 o el 20 de diciembre de 2000/2001, o algo más cercano en la actualidad, cuando la ciudad de Ushuaia quedó cortada por la mitad, por los taxistas y los gremios que pedían seguridad al gobierno provincial, por la muerte del taxista Toledo. Eso también hubiese sido una contravención. Creo que no podemos impedir ese tipo de derechos.

Cuando en los artículos 45, 46 -y no recuerdo bien si en los artículos 47 y 48, porque hubo correlación de números- se siguen dando facultades, y se sigue poniendo en el funcionario la potestad de detener a una persona o de privarlo de su libertad, por más que tenga una buena intención este artículo. Dice nuestra Constitución que nadie, excepto un juez, puede privar de la libertad, por razones fundadas, a una persona.

Y, en este sentido, a mi modo de ver y por lo que hablé con mis asesores con quienes hemos trabajado profundamente en esto, también se está violando.

El acta de constatación del artículo 59, que se remita a ver los artículos del Código Procesal Civil y Penal, habla de la fe pública del acta, lo cual invierte el carácter de la prueba. Al tener un acta generada por un inspector, en carácter de fe pública, determina ya sea una acusación que el infractor debe ir a revertir. Y en nuestra legislación todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Acá la persona tiene que demostrar que es inocente, eso también se vulnera.

Luego, todo el Código -todo- está salpicado de lo que se llama “el procedimiento inquisitivo”. Este procedimiento delega, en un funcionario o en un fiscal, funciones que debiera tener el juez, únicamente como responsable de impartir justicia, de leerla; y se le delegan al fiscal determinadas cuestiones.

Hoy se trata en Diputados la reforma del Código de Procedimiento Penal donde claramente se toma una nueva doctrina y se avanza hacia el procedimiento acusatorio, que determina que haya un juez imparcial, un fiscal que acusa y un acusado. El juez está equidistante de estas dos partes.

En nuestro Código Contravencional -o Código de Convivencia, así me hubiese gustado que fuera- estamos haciendo a la inversa: delegamos funciones en el fiscal y violando lo que los legos llaman “la igualdad de armas en la defensa del juicio”.

Sinceramente de estas cosas podríamos leer jurisprudencia, inclusive del doctor Juliano, el Tratado Interamericano de Derechos Humanos; podríamos traer a la lectura varias cuestiones para fundamentar. Solo me remito, aunque sea, a leer las observaciones que ya he presentado.

Esto me genera una contradicción porque claro que quiero que los edictos policiales desaparezcan. Ahora, no en función de ello, la propia policía, en las reuniones que tuvimos en la Comisión Nº 6, dijo que casi ninguno se estaba poniendo en práctica y que con el solo

decreto de la gobernadora se podrían suprimir.

Para sacar esos edictos, me parece que estamos cometiendo un grave error. Por una cuestión de conciencia e ideológica es que no acompaño este Código Contravencional. Nada más, señor presidente.

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: A efectos de no entrar en polémica, sí he de aclarar algunas cosas.

El Código Contravencional en sus Principios Generales, artículo 2º, dice claramente: "En la aplicación de este código resultan operativos todos los principios, derechos y garantías consagrados en la Constitución de la Nación Argentina, en los tratados de derechos humanos que forman parte de la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 22), en los demás tratados ratificados por el Congreso de la Nación (artículo 31 de la Constitución Nacional) y en la Constitución de la Provincia deTierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur"; por lo cual todos los derechos constitucionales están garantizados por la Constitución Nacional y por la Constitución Provincial.

A mí también me hubiese gustado que se llame "Código de Convivencia" pero el criterio unánime de la mayoría fue ponerle Código Contravencional. Y no coincido ideológicamente ¡para nada! con Macri entre otras porque él es afiliado al partido del legislador preopinante, no lo es a la Unión Cívica Radical.

Por otro, lado cuando se labran actas, que es un documento público… Entonces, me pregunto ¿se están violando la Constitución y los derechos cuando se labra un acta de tránsito?

Sé que el legislador ha trabajado mucho y algunas de las observaciones que ha planteado han sido consideradas -independientemente de que su voto sea en contra en general y en particular- esas sugerencias realizadas formaran parte del Código Contravencional.

Pero a su vez cuando él se refiere a privar de la libertad a los gremios o a las manifestaciones, eso está garantizado por la Constitución Nacional, artículo 14 bis, autoría de la Unión Cívica Radical, y bajo ningún punto de vista este legislador iría en contra de los principios de mi partido. Nada más, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.— Pongo a consideración el asunto, tal cual ha sido leído.

Por tratarse de un proyecto de ley, corresponde votación nominal, en general que se tomará por Secretaría Administrativa.

Sec. ADMINISTRATIVO.— Procedo a tomar la votación.

- *Votan por la afirmativa los legisladores Andrade Tenorio, Arcando, Blanco, Del Corro, Lechman, Liendo, Löffler, Marinello, Martínez, Martínez Allende, Rodríguez, Rojo, Siracusa y Tapia.*
- *Vota por la negativa el legislador Barrientos.*

Sec. ADMINISTRATIVO.— Resultan 14 votos por la afirmativa, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

A consideración de la Cámara, la votación en particular de los artículos leídos. Por Secretaría Administrativa se toma la votación.

Sec. ADMINISTRATIVO.— Procedo a tomar la votación.

- *Votan por la afirmativa los legisladores Andrade Tenorio, Arcando, Blanco, Del Corro, Lechman, Liendo, Löffler, Marinello, Martínez, Martínez Allende, Rodríguez, Rojo, Siracusa y Tapia.*
- *Vota por la negativa el legislador Barrientos.*

Sec. ADMINISTRATIVO.— Resultan 14 votos por la afirmativa, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado. *(Ver texto definitivo en Anexo I).*

Mociones

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: A efectos de que quede resguardada la disidencia en cada artículo, en particular, solicito a aquellos legisladores que tienen diferencias, que aclaren su voto, en esos artículos, para que no queden como afirmativos.

Sr. PRESIDENTE.— Ya se votó.

Sr. TAPIA.— Está bien.

Señor presidente: Los artículos en los que nosotros no estamos de acuerdo son los artículos 46, 86 y 89, inciso 19.

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Si bien no es lo normal, para no dificultar más la votación acordamos votarlo de esta manera; y que cada legislador aclare los artículos en los que no estaba de acuerdo, para no generar contradicciones. Creímos que era la manera más rápida de llevar adelante la votación.

Por eso, solicito que aquellos legisladores que han votado por la afirmativa en general y en particular, pero que tienen disidencia en un artículo puntual, que quede constancia de que el legislador se opuso a ese artículo.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción planteada por el legislador Blanco.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Sr. BARRIENTOS.— Pido la palabra.

Señor presidente: Vuelvo a solicitar en sesión, que las 35 observaciones presentadas al dictamen de comisión, formen parte del Diario de Sesiones.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Barrientos.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado. *(Ver texto en Anexo III).*

Continuamos con el Orden del Día.

- 3 -

Asunto Nº 512/14

Resolución de Presidencia

Sec. LEGISLATIVA.— “La Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Resuelve:

Artículo 1º.- Ratificar en todos sus términos la Resolución de Presidencia 811/14, que forma parte integrante de la presente.

Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.”.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración de la Cámara.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

- 4 -

Asunto Nº 529/14

Resolución de Presidencia

Sec. LEGISLATIVA.— “La Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Resuelve:

Artículo 1.- Artículo 1º.- Ratificar en todos sus términos la Resolución de Presidencia 841/14, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.”.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración de los señores legisladores, a mano alzada.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

- 5 -

Asunto Nº 513/14

Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos

Sec. LEGISLATIVA.— “Dictamen de Comisión Nº 1, en mayoría. Sobre Asunto Nº 368/14.
Cámara legislativa: La Comisión N° 1 de Legislación General. Peticiones, Poderes y Reglamentos. Asuntos Constitucionales, Municipales y Comunales ha considerado el Asunto N° 368/14, del Poder Ejecutivo: Nota 205/14 que adjunta el Decreto provincial 1918/14, por el cual se ratifica el Acta registrada bajo el Nº 16649, referente a la reunión del Comité Ejecutivo N° 148 de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, suscrito entre la provincia de Tierra del Fuego y las provincias de Chubut, Formosa, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Salta; y, en mayoría, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconseja su aprobación. Sala de comisión, 27 de noviembre de 2014.
La Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Resuelve:

Artículo 1º.- Aprobar en todos sus términos el Acta registrada bajo el N° 16649, referente a la Reunión del Comité Ejecutivo Nº 148 de la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), celebrada el 9 de octubre de 2013, entre la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y las provincias del Chubut, de Formosa, de Jujuy, de Mendoza, de Neuquén, de Río Negro, de Salta y la Organización de los Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI); ratificada mediante Decreto provincial 1918/14.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.”.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración de los señores legisladores, a mano alzada.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Moción

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: A efectos de acortar el trámite porque hay muchos temas pendientes, solicito que de todos los asuntos con dictamen de comisión, la secretaria solo lea el número de asunto -que está en conocimiento de todos los legisladores- el dictamen de la comisión sobre el tema y después votamos.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración de los señores legisladores, la moción del legislador Blanco.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

- 6 -

Asuntos N.os 514, 515, 516, 517, 518 y 519/14

Dictámenes de Comisión

Sec. LEGISLATIVA.— "Dictamen de Comisión Nº 1, en mayoría, sobre Asunto Nº 373/14. Poder Ejecutivo. Nota Nº 212/14 que adjunta el Decreto provincial 2037/14, que ratifica los convenios N.os 16926 y 16953, referentes al proyecto de Planificación y Revalorización de la Senda Lucas Bridges, suscrito entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, la Unión Industrial Argentina y la provincia de Tierra del Fuego; y, en mayoría...".

Sr. LÖFFLER.— Pido la palabra.

Señor presidente: No se entendió lo que dijo el legislador Blanco. Él pidió que se identifique el número de Orden del Día de cada uno de los asuntos y que se ponga a consideración, en conjunto.

Sr. PRESIDENTE.— Sí, solamente los asuntos que tienen dictamen de comisión.

¿Qué asuntos serían?

Sec. LEGISLATIVA.— Están a consideración los asuntos N.os 514, 515, 516, 517, 518 y 519/14 inclusive.

Sr. PRESIDENTE.— Se ponen a consideración de los señores legisladores, los asuntos N.os 514, 515, 516, 517, 518 y 519/14, inclusive.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado. *(Ver textos en Anexo I).*

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: El Asunto Nº 528/14, que es de la Comisión Nº 6, tiene dictamen por la mayoría de la comisión, que es la creación de…

Sr. PRESIDENTE.— ¿Me puede repetir el número, por favor?

Sr. BLANCO.— Es el 528/14 (sobre creación de la Procuración Penitenciaria), que no tiene dictamen de comisión

Sr. PRESIDENTE.— Pero hubo un dictamen ayer.

Sr. BLANCO.— No, lo que pasa es que nos dividimos la comisión, primero eran todos los de la Comisión Nº 1 y ahora son los de la Comisión Nº 6.

- 7 -

Asunto Nº 528/14

Procuración Penitenciaria

Sec. LEGISLATIVA.— Dictamen de Comisión Nº 6, en mayoría. El asunto 120/14 que crea la Procuración.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración de la Cámara.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado. *(Ver texto en Anexo I).*
Sr. BLANCO.— Pido la palabra.
Señor presidente: En este caso, por ser un proyecto de ley, la votación tendría que ser nominal.
Sr. PRESIDENTE.— ¿Qué número es?
Sr. BLANCO.— El que recién fue votado, es el 528.
Sr. PRESIDENTE.— Por tratarse de un proyecto de ley, corresponde votación nominal, en general y en particular, que se tomará por Secretaría Administrativa.
Sec. ADMINISTRATIVO.— Procedo a tomar la votación.

- *Votan por la afirmativa los legisladores Andrade Tenorio, Arcando, Barrientos, Blanco, Del Corro, Lechman, Liendo, Löffler, Marinello, Martínez, Martínez Allende, Rodríguez, Rojo, Siracusa y Tapia.*

Sec. ADMINISTRATIVO.— Resultan 15 votos por la afirmativa, señor presidente.
Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Moción

Sr. BLANCO.— Solicito que los asuntos N.^{os} 523, 524, 525, 526 y 527/14 (proyectos de resolución) sean votados en conjunto.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Blanco.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

- 8 -

Asuntos N.^{os} 523, 524, 525, 526 y 527/14

Pedidos de Informe

Sr. PRESIDENTE.—Se votan en conjunto desde el número...
Sec. LEGISLATIVA.— Desde el 523 al 527/14, inclusive.
Sr. PRESIDENTE.— Por la afirmativa, a mano alzada.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado. *(Ver textos en Anexo I).*

- 9 -

Asuntos Nº 532/14

Miembros del Consejo de la Magistratura

Sec. LEGISLATIVA.— “La Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Resuelve:

Articulo 1º.- Designar miembros del Consejo de la Magistratura, en representación de esta Cámara legislativa, a los señores legisladores Jorge Lechman y Fabio Marinello, según lo establecido en el artículo 160, inciso 4), de la Constitución provincial, y en el artículo 2º, inciso 4), de la Ley provincial 8.

Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese. “.

Sr. LÖFFLER.— Pido la palabra.

Señor presidente: La votación deber ser nominal.

Mociones

Sr. MARINELLO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito excusarme de la votación.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Marinello.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Sr. LECHMAN.— Pido la palabra.

Señor presidente: En el mismo sentido, solicito excusarme de la votación.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Lechman.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Sr. ARCANDO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Adelanto el voto negativo de nuestra bancada, con los mismos argumentos que hemos hecho todos estos años. Nada más.

Sr. PRESIDENTE.— Por tratarse de una designación, corresponde tomar votación nominal, por Secretaría Administrativa.

Sec. ADMINISTRATIVO.— Procedo a tomar la votación.

- Votan por la afirmativa los legisladores Andrade Tenorio, Barrientos, Blanco, Del Corro, Liendo, Löffler, Martínez Allende, Rodríguez, Rojo y Siracusa.

- Votan por la negativa los legisladores Arcando, Martínez y Tapia.

- Abstención de los legisladores Lechman y Marinello.

Sec. ADMINISTRATIVO.— Resultan 10 votos por la afirmativa, tres por la negativa y dos abstenciones, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado. *(Ver texto en Anexo I).*

Moción

Sr. RODRÍGUEZ.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito un cuarto intermedio, para definir los integrantes de la

Comisión Legislativa de Receso.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Rodríguez.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Cuarto Intermedio

- Son las 12:27.
- A las 13:30

Sr. PRESIDENTE.— Levantamos el cuarto intermedio.
Por Secretaría Legislativa, se da lectura.

- 10 -

Asunto Nº 533/14

Comisión Legislativa de Receso

Sec. LEGISLATIVA.— "La Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Resuelve:

Artículo 1º.- Designar miembros de la Comisión Legislativa de Receso establecida durante el período 16 de diciembre de 2014 al 18 de enero de 2015 inclusive, a los legisladores Eduardo Barrientos (Partido Justicialista), Pablo Daniel Blanco (Unión Cívica Radical), Héctor Tapia (Frente para la Victoria), Damián Löffler (Movimiento Popular Fueguino), Amanda Del Corro (Partido Social Patagónico) y Jorge Lechman (Movimiento Popular Fueguino), y para el período comprendido desde el 19 de enero de 2015 al 23 de febrero de 2015 inclusive, a los legisladores Myriam Martínez (Frente para la Victoria), Juan Felipe Rodríguez (Unión Cívica Radical), Fabio Marinello (Partido Social Patagónico), Laura Rojo (Partido Popular Patagónico), Claudia Andrade Tenorio (Movimiento Popular Fueguino) y Marta Susana Siracusa (Partido Justicialista).
Artículo 2º.- En caso de que sea necesario modificar los miembros titulares de la Comisión Legislativa de Receso, dicha novedad será informada a la Presidencia de la Cámara mediante nota fundada del bloque político que corresponda.
Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese y archívese.”.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración de los señores legisladores, a mano alzada.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

- 11 -

Asunto Nº 377/14

Refuncionalización Colegio José Martí

Moción

Sr. LECHMAN.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito que se constituya la Cámara en comisión, ya que este proyecto no tiene dictamen.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Lechman.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

En Comisión

Sec. LEGISLATIVA.— "La Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Sanciona con fuerza de ley

Artículo 1º.- Aféctese el 1,66% de los fondos recaudados por la provincia en concepto de Ingresos Brutos y convenios multilaterales a la obra de construcción, reparación estructural y refuncionalización del edificio del Colegio Jose Martí, ubicado en la calle Juana Fadul Nº 37 de la ciudad de Ushuaia, hasta cubrir los fondos necesarios para la finalización total de la obra y puesta en funcionamiento de la institución.
Artículo 2º.- Comuníquese, regístrese y archívese.".
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración, a mano alzada.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Moción

Sr. LECHMAN.— Pido la palabra.
Señor presidente: Solicito que se constituya la Cámara en sesión.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Lechman.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

En Sesión

Sr. PRESIDENTE.— Por tratarse de un proyecto de ley, corresponde tomar votación nominal, por Secretaría Administrativa.
Sec. ADMINISTRATIVO.— Procedo a tomar la votación.

- *Votan por la afirmativa los legisladores Andrade Tenorio, Arcando, Barrientos, Blanco, Lechman, Liendo, Löffler, Martínez, Martínez Allende, Rodríguez, Rojo, Siracusa y Tapia.*
- *Votan por la negativa los legisladores Del Corro y Marinello.*

Sec. ADMINISTRATIVO.— Resultan 13 votos por la afirmativa y dos por la negativa.
Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.
Sr. LECHMAN.— Pido la palabra.
Señor presidente: Simplemente, agradecezco a mis pares por acompañar este proyecto que tiene, para mí, en lo personal, como ciudadano de esta provincia y principalmente como ushuaiense, el valor de hacer el esfuerzo para volver a poner en

funcionamiento el colegio José Martí, que tanto tiene que ver con la idiosincrasia de la ciudad de Ushuaia. Una institución que ha formado a muchísimas generaciones de fueguinos. Nuestro sueño es que ese edificio, en Fadul 37, vuelva a ser el hogar
de cientos de adolescentes fueguinos que se formen y se pueda ver, ahí reflejado para la sociedad, el beneficio de este proyecto.

Y entiendo la negativa del bloque oficialista, por lo que no hay resentimiento. Comprendo que no nos hayan acompañado, porque muchas veces los posicionamientos políticos nos obligan a jugar de una manera u de otra.

Nada más, gracias a mis pares.

Sr. BARRIENTOS.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solo dejo planteado que acompañamos este proyecto -y no es la primera vez, anteriormente también lo hicimos- entre otras cosas, porque tengo el orgullo de tener dos hijas egresadas del José Martí y una tercera, en este momento, cursando en ese colegio.

Y puedo dar fe del compromiso de toda esa comunidad educativa, en función de la educación de nuestros hijos. Que realmente estén atravesando esta situación nos parece, por lo menos, poco feliz. En función de esto es que acompañamos, por segunda vez, este proyecto. Nada más, señor presidente.

Sra. DEL CORRO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Aclaro que nos mueven los mismos motivos con respecto de la construcción del edificio José Martí, en relación a la historia de esa escuela, y al reconocimiento de la labor de esa comunidad educativa.

No hemos acompañado la moción del legislador Lechman porque está prevista, en el presupuesto 2015, la afectación del fondo específico para que se realice ese edificio; esos fondos que provienen del Fondo de la Soja; y que está realmente cercano…

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.— Gracias, legisladora.

Continuamos con la lectura de los asuntos, por Secretaría Legislativa.

- 12 -

Asunto Nº 402/14

Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas

Moción

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Por tratarse de un proyecto de ley solicito constituir la Cámara en comisión.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Blanco.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado. La Cámara se constituye en comisión.

En Comisión

Sec. LEGISLATIVA.— “La Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Sanciona con fuerza de ley

Artículo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Convenio registrado bajo el Nº 17009, referente al Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas,

proveniente de los programas de Asistencia Financiera 2010, 2011, 2012 y 2013, celebrado el 31 de julio de 2014, entre la provincia de Tierra de Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el gobierno nacional; ratificado mediante Decreto provincial 2330/14.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.”.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración de la Cámara.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Moción

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.
Señor presidente: Por tratarse de un proyecto de ley solicito constituir la Cámara en sesión.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración de la Cámara la moción del legislador Blanco.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

En Sesión

Sr. PRESIDENTE.— Por tratarse de un proyecto de ley, corresponde votación nominal.
Sec. ADMINISTRATIVO.— Procedo a tomar la votación.

- Votan por la afirmativa los legisladores Andrade Tenorio, Arcando, Barrientos Blanco, Del Corro, Lechman, Liendo, Löffler, Marinello, Martínez, Martínez Allende, Rodríguez, Rojo, Siracusa y Tapia.

Sec. ADMINISTRATIVO.— Resultan 15 votos por la afirmativa, señor presidente.
Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.
Continuamos por Secretaría Legislativa.

- 13 -

Asunto Nº 366/14

Presupuesto 2015

Moción

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.
Señor presidente: Por tratarse de un proyecto de ley, solicito que la Cámara se constituya en comisión, a efectos de dar tratamiento al presupuesto correspondiente al ejercicio 2015
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Blanco.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.
Sec. LEGISLATIVA.— “La Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Sanciona con fuerza de ley

Título I y II
Presupuesto de Recursos y Gastos de la Administración Central
y Organismos Descentralizados

Artículo 1º.- Fíjase en la suma de doce millones ochocientos cincuenta y cinco mil ciento noventa y cinco trescientos cuarenta y uno, los Gastos Corrientes y Gastos de Capital del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial (Administración Central y organismos descentralizados), para el ejercicio 2015, con destino a las finalidades e instituciones que se indican a continuación, y analíticamente en planillas anexas que forman parte de la presente ley:

Administración Provincial. Finalidad – Función.

001 Administración Gubernamental, tres mil ochocientos treinta y ocho seiscientos veinte un mil cuatrocientos ochenta y cinco; Gastos de Capital, setenta y dos mil doscientos ochenta y siete trescientos noventa y cinco. Total, tres mil novecientos diez novecientos ocho ocho setenta y nueve. Corregimos: Tres mil novecientos diez millones novecientos ocho mil ochocientos setenta y nueve.

002- Servicios de Seguridad, novecientos treinta y cuatro mil ochenta cero ochenta y dos cuatrocientos seis; Gastos de capital, veintinueve mil seiscientos ochenta y seis seiscientos cincuenta y siete; Total: novecientos sesenta y tres mil setecientos sesenta y nueve con sesenta y tres centavos;

Servicios Sociales, cinco mil ochocientos setenta y dos mil ochocientos cincuenta y seis; Gastos de capital, mil quinientos setenta y seis quinientos dieciséis mil cero cuarenta y seis; Total seis mil quinientos setenta y siete millones trescientos ochenta y ocho mil novecientos dos.

04 Sevicios Económicos, novecientos noventa y cuatro mil novecientos cuarenta y cinco ciento veintiséis; cuatrocientos cincuenta y ocho millones ciento ochenta y tres mil trescientos setenta y uno; un millón cuatrocientos tres mil ciento veintiocho cuatrocientos noventa y siete; mil cuatrocientos tres millones ciento veintiocho mil cuatrocientos noventa y siete. Total para Gastos Corrientes, diez mil millones setecientos dieciocho mil quinientos veintiuno ochocientos setenta y tres centavos; Gastos de Capital...".

Moción

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito un cuarto intermedio de dos minutos sobre bancas.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Blanco.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Cuarto Intermedio

- Son las 13:43.
- A las 13:45

Sr. PRESIDENTE.— Levantamos el cuarto intermedio.

Por Secretaría Legislativa, se da lectura.

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: En razón de que los legisladores tienen sobre las bancas el proyecto de ley, le solicito a la secretaria legislativa que de los cuadros lea los totales, no todo el detalle sino el total de cada uno de los cuadros.

Sr. PRESIDENTE.— O sea, vamos por rubro y total.
Sec. LEGISLATIVA.— "Administración provincial, el total: doce mil ochocientos cincuenta y cinco millones ciento noventa y cinco mil.".
Sr. BLANCO.— Por Secretaría se tiene que decir: "Gastos corrientes" y el total. Gastos de capital: dos mil ciento treinta y seis millones...
Sec. LEGISLATIVA.— "Administración provincial: Gastos Corrientes, diez mil setecientos dieciocho millones seiscientos veintitrés....".
Sr. BLANCO.— Quinientos veintiuno.
Sec. LEGISLATIVA.—
"Administración Provincial

Finalidad-Función	Gastos Corrientes	Gastos Capital	Total
Total	10.718.521.873	2.136.673.468	12.855.195.341

Administración Central

	Gastos Corrientes	Total
Total	9.767.583.790	10.552.960.403

Administración Descentralizada

Gastos Corrientes	Gastos Capital	Total
950.938.083	1.351.296.855	2.302.234.938

Organismos de la Seguridad Social

Gastos Corrientes		Gastos Capital	Aplicaciones Financieras	Total
Total	3.213.196.817	237.836.753	75.649.766	3.526.683.336

- Ocupa la Secretaría Legislativa, la prosecretaria administrativa Mabel L. Caparrós.

	Gastos Corrrientes	Gastos de Capital	Aplicaciones Financieras	Total
Administración Central	9.767.583.790	785.376.613		10.552.960.403
904- Poder Ejecutivo	6.772.470.090 ".			

Moción

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.
Señor presidente: Solicito que la Cámara me autorice a leer los cuadros porque no se interpreta lo que quise decir.
Sr. PRESIDENTE.— Legislador, adelante.
Sr. BLANCO.— "

	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Aplicaciones Financieras	Total
Administración Descentralizada	950.938.083	1.351.296.855		2.302.234.938
Organismos de Seguridad Social	3.213.196.817	237.836.753	75.649.766	3.526.683.336".

Sec. LEGISLATIVA.— "Artículo 2º.- Estímase en la suma de $ 11.389.193.453 el cálculo de ingresos de la Administración Pública provincial (Administración Central y organismos descentralizados) para el ejercicio 2015, destinado a atender los gastos fijados en el artículo 1º de la presente ley, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación y al detalle que figura en planillas anexas, las que forman parte integrante de la presente ley:

Responsable	Clasificación Económico	2015
Administración Central	0101- Ingresos Corrientes	$ 9.196.149.988
	0102- Recursos de Capital	$ 197.619.249
	Total	$ 9.393.769.237
Administración Descentralizada	0101- Ingresos Corrientes	$ 934.504.562
	0102- Recursos de Capital	$ 1.060.919.654
	Total	$ 1.995.424.216
Total		$ 11.389.193.453

Artículo 3º.- Fíjase en la suma de pesos 1.088.963.469 los importes correspondientes a los gastos figurativos para transacciones corrientes y de capital de la Administración Pública provincial (Administración Central y organismos descentralizados), quedando en consecuencia establecido el financiamiento por contribuciones figurativas de la Administración Pública provincial en la misma suma para el ejercicio 2015.
Artículo 4º.- El resultado económico de la Administración Pública provincial (Administración Central y organismos descentralizados) para el ejercicio 2015 se estima en la suma de $ -673.358.386 de acuerdo al siguiente detalle y al que figura en planillas anexas a la presente ley:

	Total	Administración Central	Organismos Descentralizados
Ingresos Corrientes	$ 10.130.654.550	$ 9.196.149.988	$ 934.504.562
Gastos Corrientes	$ 10.804.012.936	$ 9.847.416.830	$ 956.596.106
Resultado Económico	$ -673.358.386	$ -651.266.842	$ -22.091.544

Artículo 5º.- Fíjase en la suma de $ 207.148.516 el importe correspondiente a los gastos para atender el servicio de la deuda en la Administración Pública provincial, de acuerdo al detalle que figura en la planilla anexa, la que forma parte integrante de la presente ley:

Clasificación Económica del Gasto	Administración Central	Administración Descentralizada	Total
Renta de la Propiedad	$ 79.833.041	$ 5.658.023	$ 85.491.063
Armotización de la deuda y disminución de otros pasivos	$ 114.020.006	$ 7.637.447	$ 121.657.453
Total	$ 193.851.046	$ 13.295.470	$ 270.148.516

Artículo 6º.- Estímanse en la suma de $ 1.609.050.404 las Fuentes Financieras de la Administración Pública provincial (Administración Central y organismos descentralizados) para el ejercicio 2015, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación y al detalle que figura en la planilla anexa que forma parte integrante de la presente ley:

		Estimado
Fuentes Financieras	Administración Central	$ 1.500.136.908
	Administración Descentralizada	$ 108.913.496
Total		$ 1.609.050.404

Artículo 7º.- Apruébase el Presupuesto de Gastos y el Cálculo de Recursos y Fuentes Financieras de los organismos de Seguridad Social para el ejercicio 2015, de acuerdo al detalle que se indica a continuación y al de las planillas anexas, las que forman parte de la presente ley:

CONCEPTO	Total	Caja Compensadora de Policía	Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (Previsional)	Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (Asistencial)
Recursos Totales	$ 2.659.037.077	$ 193.141.777	1.740.189.548	725.705.752
Gastos Totales	3.451.033.570	227.141.777	2.362.254.528	861.637.265
Resultado Primario	-791.996.493	-34.000.000	-622.064.980	-135.931.513
Fuentes Financieras	867.646.260	46.000.000	$ 622.094.769	199.551.490
Aplicaciones Financieras	75.649.766	12.000.000	29.789	63.619.977
Resultado Financiero Neto	0	0	0	0

Artículo 8º.- Estímase en la suma de $ 431.195.539,68 el gasto tributario para el ejercicio 2015, de acuerdo a lo establecido por la Ley nacional 25917 y la Ley provincial 694, y modificatorias, según el siguiente detalle:

Beneficio Contribuyente Cumplidor, artículo 124, Ley provincial 439	6.593.003,84
Beneficio de Tasa Cero	53.561.480,26
Ley provincial 907, artículo 7º	180.887.377,72
Ley provincial 440, artículo 9º, punto 4, inciso 4.3 (Leyes provinciales 854, 878 y 976)	190.153.677,86
Total	431195539,68

Título III
Disposiciones Generales

Artículo 9º.- Fíjase en 9.139 el número total de cargos de la planta de personal permanente y de personal no permanente del Poder Ejecutivo provincial, exceptuando el escalafón docente, para el ejercicio 2015, de acuerdo a lo indicado en las planillas anexas que forman parte integrante de la presente ley.
Artículo 10.- Fíjase en 590 el número total de cargos de la planta de personal permanente y de personal no permanente del Poder Judicial.
Artículo 11.- Fíjase en 298 el número total de cargos de la planta de personal permanente y de personal no permanente del Poder Legislativo.
Artículo 12.- Fíjase en 154 el número total de cargos de la planta de personal permanente y de personal no permanente del Tribunal de Cuentas de la provincia.
Artículo 13.- Fíjase en 17 el número total de cargos de la planta de personal permanente y de personal no permanente de la Fiscalía de Estado.
Artículo 14.- Fíjase en 5.840 el número total de cargos de la planta de personal perteneciente al escalafón docente. Estímase en 826.000 la cantidad de horas cátedra destinadas a otorgarse para el ejercicio 2015.
Artículo 15.- Fíjase en 1.070 el número total de cargos de la planta de personal de los organismos descentralizados para el ejercicio 2015, de acuerdo al siguiente detalle:

Escalafón	Cargos
Instituto Fueguino de Turismo	84
Dirección Provincial de Puertos	161
Instituto Provincial de Vivienda	250
Dirección Provincial de Vialidad	155
Dirección Provincial de Energía	160
Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios	160
Instituto Provincial de Regulación de Apuestas	100
Total	1.070

Artículo 16.- Fíjase en 337 el número total de cargos de la planta de personal de los organismos de la Seguridad Social para el ejercicio 2015, de acuerdo a lo indicado en el siguiente detalle:

Escalafón	Cargos
Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social	304
Caja Compensadora de Policía	33
Total	337”

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Hay un agregado -parece que no pasaron la última corrección- a continuación del cuadro del IPAUSS y de la Caja Compensadora, dice: “El total de vacantes del Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (IPAUSS), reconoce un incremento respecto de las autorizadas para el ejercicio 2014 de 20 vacantes. Establécese respecto de estas últimas la obligatoriedad de destinar como mínimo 10 de ellas al sistema previsional”.

Sec. LEGISLATIVA.— Leo nuevamente el “Artículo 16.- Fíjase en 337 el número total de cargos de la planta de personal de los organismos de la Seguridad Social para el ejercicio 2015, de acuerdo a lo indicado en el siguiente detalle:

Escalafón	Cargos
Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social	304
Caja Compensadora de Policía	33
Total	337

El total de vacantes del Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (IPAUSS) reconoce un incremento, respecto de las autorizadas para el ejercicio 2014, de 20 vacantes. Establécese respecto de estas últimas la obligatoriedad de destinar como mínimo 10 de ellas al sistema previsional.

Artículo 17.- Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial así como los órganos de control podrán realizar las reestructuraciones y modificaciones que consideren necesarias dentro de los totales de erogaciones de capital y corrientes determinadas en el artículo 1º de la presente ley para cada uno de ellos, debiendo informar al Poder Ejecutivo dentro de los cinco días de realizada la tramitación a efectos de mantener consolidado el estado presupuestario de la Administración Central.

El total de erogaciones podrá ser incrementado solamente como consecuencia de la obtención de mayores recursos o de financiamiento adicional. En el caso del Poder Ejecutivo también se podrá incrementar cuando se produzcan excedentes financieros cuyo traslado de un ejercicio al siguiente lo justifique.

Los organismos descentralizados podrán proponer modificaciones presupuestarias, las que deberán ser autorizadas por el ministro de Economía, en el marco de las competencias asignadas por la Ley provincial 859, artículo 13, inciso 3) y sus modificatorias, autorización que podrá efectuarse, en el caso de contar con la tecnología adecuada, mediante la instrumentación de firma digital, Ley provincial 633 y Ley nacional 25506.

Artículo 18.- Facúltase al Poder Ejecutivo a producir reestructuraciones orgánicas de sus jurisdicciones y programas, así como a transferir y/o suprimir vacantes de la planta de personal aprobada por la presente ley, con la única limitación de no incrementar el número total de cargos.

El Poder Ejecutivo provincial podrá designar o reubicar al personal temporario, permanente o de planta política y/o gabinete en las distintas reparticiones de los organismos descentralizados cuando los organismos cuenten con el debido respaldo presupuestario en forma previa a la designación o reubicación del agente o funcionario.

Artículo 19.- El Poder Ejecutivo deberá distribuir los créditos que se aprueban por esta ley al

nivel de desagregación previsto en los clasificadores presupuestarios. Asimismo, podrá reestructurar los créditos del inciso “Personal”, según surja de su distribución en función de la recomposición de los salarios, aportes y contribuciones del personal de la Administración Central y organismos descentralizados. Las mayores asignaciones presupuestarias que deriven de estos ajustes deberán estar compensadas por la disminución de los gastos corrientes o de capital, o bien a través del incremento de los recursos, de manera de garantizar el principio de equilibrio…”.

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Quiero hacer una corrección en el artículo anterior. Por favor, ¿podría leerlo nuevamente?

Sec. LEGISLATIVA.— ¿Al artículo 19?

Sr. BLANCO.— Sí.

Sec. LEGISLATIVA.— “Artículo 19.- El Poder Ejecutivo deberá redistribuir los créditos que se aprueban por esta ley al nivel de desagregación previsto en los clasificadores presupuestarios. Asimismo, podrá reestructurar los créditos del inciso 'Personal' según surja de su distribución en función de la recomposición de los salarios, aportes y contribuciones del personal de la Administración Central y organismos descentralizados.

Las mayores asignaciones presupuestarias que deriven de estos ajustes deberán ser compensadas por la disminución de los gastos corrientes, o de capital…”.

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: “Por la disminución de los gastos corrientes”, no por la “de capital” porque ya se sacó en la anterior partida; o bien “a través del incremento de los recursos”.

Sec. LEGISLATIVA.— Leo de vuelta: “Las mayores asignaciones presupuestarias que deriven de estos ajustes deberán estar compensadas por la disminución de los gastos corrientes, o bien a través del incremento de los recursos, de manera de garantizar el principio de equilibrio presupuestario de cada organismo. Dicha atribución sólo podrá estar delegada al Ministerio de Economía.

Artículo 20.- Las vacantes que se generen durante el presente ejercicio por distintas razones, retiros, renuncias, jubilaciones, bajas, en cualquier repartición de la Administración Pública provincial serán transferidas al ámbito del Ministerio de Economía y constituirán una reserva de emergencia, las que se utilizarán prioritariamente para el ingreso de profesionales, técnicos y/o los beneficiarios aún no designados de las leyes provinciales 661 y 668. En el caso de las vacantes que se asignen para profesionales y técnicos serán destinadas preferentemente a las necesidades emergentes del sistema de salud de la provincia.

Artículo 21.- La liquidación de los fondos en concepto de coparticipación de recursos a las municipalidades, cuyo cálculo se incluye en planilla anexa, será efectuada de acuerdo al régimen legal vigente desde la Contaduría General y por los montos percibidos netos de retenciones.

El mismo procedimiento será aplicable para las retenciones a que se refiere el artículo 40 de la Ley provincial 534.

Artículo 22 .- El Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado podrán proponer el aumento en el número de sus respectivas vacantes vigentes, las que deberán ser incluidas en el proyecto de presupuesto del ejercicio de cada organismo, pero estas no podrán ser financiadas con recursos de la Administración Central, debiendo entonces procurar las fuentes de ingresos de recaudación propia o bien la disminución de los gastos, de manera de no incrementar las asignaciones presupuestarias que se remesan desde el Tesoro provincial, en tal concepto.

Dicha limitación sólo podrá ser alterada cuando existan razones de fuerza mayor y expreso acuerdo del Poder Ejecutivo.

Artículo 23.- El Poder Ejecutivo deberá remitir mensualmente las remesas financieras destinadas a financiar los presupuestos de gastos de los poderes Legislativo y Judicial, así como de los órganos de control, sujeto a lo establecido en el artículo 11 de la Ley nacional 25917, a la cual la provincia adhirió mediante Ley provincial 694.

Artículo 24.- Estímase en $ 329.312.725 las transferencias de capital de la Nación y la

inversión financiera provincial destinadas a solventar el Plan de Inversión del Fideicomiso Austral, según el anexo correspondiente.
Artículo 25.- Establecése que el censo al que hace alusión el artículo 4° de la Ley provincial 858 sea prorrogado para el ejercicio 2016.
Artículo 26.- Sustitúyese el artículo 2º de la Ley provincial 939 por el siguiente texto:
'Artículo 2º.- La presente ley tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015'.
Artículo 27.- Instrúyase al Poder Ejecutivo, a remitir a la Legislatura, dentro de los 30 días de aprobada la presente, las planillas anexas con el desagregado al nivel de apertura correspondiente, según los clasificadores presupuestarios vigentes de los recursos y gastos en los distintos niveles institucionales, a los efectos de su control y seguimiento presupuestario.
Artículo 28.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.”.

Moción

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Quiero hacer algunas consideraciones. En principio, solicito al área de Taquigrafía -debido a las dificultades que tuvimos en la lectura- que tomen del dictamen los cuadros, y los vuelquen en la versión taquigráfica.

En segundo lugar, aclaro que de la discusión que se llevó adelante en la Comisión de Presupuesto, el resultado logrado es este.

Se han hecho modificaciones, en el caso del presupuesto del IPAUSS, sobre el cobro de deuda que registraba el Instituto, y que no tenía la contrapartida en el presupuesto provincial. Independientemente -como se podrá apreciar en el cuadro referido al Instituto- hay previstos casi ochocientos -son setecientos noventa y un mil novecientos noventa y seis millones cuatrocientos noventa y tres- de pago de deuda de parte del Ejecutivo al organismo de previsión social. A aquellos que digan que no está registrado en el presupuesto el pago de la deuda, sí está. Que es el monto necesario a efectos de solventar el déficit que arrojaban tanto el sistema previsional como el sistema asistencial; teniendo en cuenta que el sistema previsional, de acuerdo a las proyecciones, está en un déficit (para el año 2015) de 625 millones de pesos.

Se ha incluido un artículo que prorroga la facultad del organismo de previsión social, de transferir recursos del sistema asistencial al sistema previsional, con el compromiso de su devolución a efectos de facilitar, esa fue la herramienta que facilitó, en parte, el pago de las jubilaciones y pensiones.

En el caso de las vacantes de los organismos descentralizados, se les ajustó a los efectivamente ocupados a la fecha de la realización y la elaboración de este dictamen. Por ejemplo, en el caso del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas, de donde recibimos una serie de inquietudes, se bajaron 25 vacantes solicitadas que estaban sin cubrir. Y se estableció la planta en 1.070, que es la que actualmente está ocupada a la fecha de la sanción de esta ley.

En el caso de las vacantes solicitadas por el Instituto Provincial de Seguridad Social, eran 40 y se fijaron en 20, asignando la responsabilidad en un artículo -a mi criterio- innecesario porque si hubiera voluntad de llevar adelante los compromisos que se han asumido... Pero con el tiempo vimos que se asumieron compromisos para asignar personal al sistema previsional y no sucedió con las vacantes oportunamente acordadas. Así que, a través de esta ley, les decimos que de las 20 vacantes que se le aprueban al Instituto Provincial de Seguridad Social, como mínimo 10 tienen que ser destinadas al sistema previsional, y no como las anteriores que fueron todas al sistema asistencial.

En definitiva, con respecto al presupuesto 2014, hay una modificación en un incremento de alrededor de un 30 o 32%. Y la diferencia que hay con respecto al presupuesto del año pasado que hoy una vez más, como hicimos al inicio del año pasado, se le quitó la facultad de movilidad de partidas al Ejecutivo provincial (partidas de Gastos Corrientes y Gastos de Capital), únicamente la puede hacer tanto el Ejecutivo como otros organismos

dentro de Gastos Corrientes o Gastos de Capital pero dentro del mismo, no cambiar de uno a otro. Con lo cual estamos realizando un mayor control sobre la movilidad.

Muchos dirán que el año pasado lo tenían y después sobre fin de año lo sacaron. Lo que pasa que cuando se sacó esa restricción estaba prácticamente el 25%...

Estos son los fundamentos mediante los cuales solicito al resto de los integrantes de la Cámara la aprobación del siguiente dictamen del presupuesto 2015.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración de los señores legisladores, en comisión, el proyecto leído.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Moción

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito que se constituya la Cámara en sesión, para que se vote en general y en particular el proyecto.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Blanco.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

- Ocupa la Secretaría Legislativa la señora Marcela V. Scilletta.

En Sesión

Sr. PRESIDENTE.— Por tratarse de un proyecto de ley corresponde votación nominal, la que se llevará adelante por Secretaría Administrativa.

Sec. ADMINISTRATIVO.— Procedo a tomar la votación.

- Votan por la afirmativa los legisladores Andrade Tenorio, Arcando, Barrientos, Blanco, Del Corro, Lechman, Liendo, Löffler, Marinello, Martínez, Martínez Allende, Rodríguez, Rojo, Siracusa y Tapia.

Sec. ADMINISTRATIVO.— Se registran 15 votos por la afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado. *(Ver texto definitivo en Anexo I).*

- 14 -

Asunto Nº 388/14

Provisión de Medicamentos e Insumos

Moción

Sra. ANDRADE TENORIO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Por ser un proyecto que no tiene dictamen, solicito que la Cámara se constituya en comisión.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legisladora Andrade Tenorio.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

En Comisión

Sec. LEGISLATIVO.—"La Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Sanciona con fuerza de ley

Artículo 1º.- Adhiérese la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en todos sus términos, a la Ley nacional 26914, modificación de la Ley sobre Problemática y Prevención de la Diabetes y su Resolución Reglamentaria 1156/14 del Ministerio de Salud de la Nación, y todas sus normas reglamentarias.
Artículo 2º.- El Poder Ejecutivo implementará, en el plazo de 60 días, los mecanismos necesarios tendientes a garantizar la provisión de medicamentos e insumos establecidos en el Anexo II de la Resolución Reglamentaria 1156/14, a las personas que no estén comprendidas en el Sistema Nacional de Salud.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.”.

Mociones

Sra. MARTÍNEZ.— Pido la palabra.
Señor presidente: Solicito que se incorporen los fundamentos del proyecto al Diario de Sesiones.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración de la Cámara.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado. *(Ver fundamentos en Anexo II).*
Sra. ANDRADE TENORIO .— Pido la palabra.
Señor presidente: Solicito constituir la Cámara en sesión.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legisladora Andrade Tenorio.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

En Sesión

Sr. PRESIDENTE.— Por tratarse de un proyecto de ley, corresponde votación nominal.
Sec. ADMINISTRATIVO.— Procedo a tomar la votación.

- Votan por la afirmativa los legisladores Andrade Tenorio, Arcando, Blanco, Del Corro, Lechman, Liendo, Löffler, Marinello, Martínez, Martínez Allende, Rodríguez, Rojo, Siracusa y Tapia.
- Ausente: legislador Barrientos.

Sec. ADMINISTRATIVO.— Resultan 14 votos por la afirmativa, señor presidente.
Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

- 15 -

Asunto Nº 507/14

Régimen de Contrataciones

Moción

Sra. ANDRADE TENORIO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Por tratarse de un proyecto de ley que no tiene dictamen, solicito que se constituya la Cámara en comisión.

PRESIDENTE.— Se pone a consideración de la Cámara la moción de la legisladora Andrade Tenorio.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

En Comisión

Sec. LEGISLATIVO.—"La Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Sanciona con fuerza de ley

Artículo 1º.- Ámbito de Aplicación. Las disposiciones de la presente ley son de aplicación para todo el sector público provincial no financiero, el que estará integrado por:

a) el Poder Ejecutivo, ministerios y secretarías de Estado;
b) el Poder Legislativo;
c) el Poder Judicial;
d) organismos autárquicos y descentralizados, comprendiendo a las instituciones de seguridad social;
e) órganos creados por la Constitución de la provincia;
f) empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur tengan participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.

En el contexto de esta ley se entiende por 'entidad' toda organización pública con personería jurídica y patrimonio propio, se trate de empresas o sociedades y organismos descentralizados; y por jurisdicción...".

Moción

Sr. BARRIENTOS.— Pido la palabra.

Señor presidente: Antes de seguir con el tratamiento de este proyecto, solicito una modificación en el Orden del Día -de acuerdo a lo conversado con los legisladores- para tratar el asunto referido a las horas titulares de los talleristas de Cultura.

PRESIDENTE.— Se pone a consideración de la Cámara la moción del legislador Barrientos.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Sec. LEGISLATIVA.— Queda en suspenso el Asunto Nº 507/14, y paso a dar lectura al Asunto Nº 536/14.

- 16 -

Asunto Nº 536/14

Titularización en Talleres Culturales

Moción

Sr. BARRIENTOS.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito que la Cámara se constituya en comisión porque el proyecto no tiene dictamen.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Barrientos.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

En Comisión

Sec. LEGISLATIVA.— "La Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Sanciona con fuerza de ley

Artículo 1º.- Establécese que, a partir de la promulgación de la presente ley, aquellos agentes responsables de talleres culturales que revistan en carácter de interino o suplente, bajo la modalidad de liquidación de horas cátedra transitorias, adquirirán el carácter de titular de horas cátedra, y todas aquellas horas cátedra que revistan una antigüedad la cantidad de tres años al momento de promulgación de la presente.

Artículo 2º.- La presente ley tiene carácter excepcional, y la titularidad se realiza por única vez en la fecha de promulgación de la presente ley, hasta tanto exista norma estatutaria específica que marque la labor del personal a cargo de talleres culturales.

Artículo 3º.- El carácter de titular de las horas cátedra existentes al momento de la promulgación de la presente ley se adquirirá con el dictamen favorable de una comisión ad hoc que tendrá por fin, evaluar cada una de las declaraciones juradas individuales que presenten los agentes alcanzados en lo establecido en el artículo 1º. Dicha comisión ad hoc estará integrada por un representante de la Secretaría de Cultura, un representante del Ministerio de Educación y un representante del gremio Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), responsables de los talleres culturales.

El plazo máximo para que la comisión ad hoc cumpla con su objetivo, y se efectivice...".

Mociones

Sra. DEL CORRO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Lamento que no se haya escuchado el pedido de la palabra.

Quiero introducir un texto, para su lectura, porque no tiene dictamen en comisión -como bien anunció el legislador Barrientos- pero tampoco…

Voy a pedir que por Secretaría se lea este texto que tiene el apoyo de los legisladores de la Comisión Nº 4. Como es un texto acordado en comisión, pido que también sea leído y que se someta a votación.

Sr. BARRIENTOS.— Pido la palabra.

Señor presidente: Pido que se termine de leer el proyecto presentado.

Como estamos en comisión, y el texto se puede modificar, luego pido que se lea el proyecto acordado por algunos otros legisladores.

Sr. LÖFFLER.— Pido la palabra.

Señor presidente: En comisión, hago la moción concreta de que se lea el texto acordado y que se ponga a consideración del Cuerpo.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Löffler.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Por Secretaría, se da lectura al texto acordado.

Sec. LEGISLATIVA.— "La Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Sanciona con fuerza de ley

Regulación del Procedimiento de Talleres Culturales y Deportivos

Capítulo I
Disposiciones Generales...".

- Manifestaciones del público.

Sr. PRESIDENTE.— Continúe, secretaria, por favor.

Sec. LEGISLATIVA.— "Artículo 1º.- Créanse, en el ámbito del Ministerio Jefe de Gabinete o el que un futuro lo reemplace, los interinatos en término como modalidad a implementrse para el desarrollo de programas y proyectos no escolarizados, pertenecientes a la educación no formal que promuevan la animación sociocultural como complemento habitual y cotidiano de la educación formal.

Artículo 2°.- Créase el módulo Cultural, que tendrá una duración de dos horas reloj, y será equivalente, a los fines de la remuneración, a tres horas cátedra de la educación media.

Artículo 3°.- Las horas cátedra afectadas al cumplimiento de la presente serán incluidas por el Poder Ejecutivo, en el proyecto de Presupuesto General de Erogaciones y Cálculo de la Administración Pública.

Artículo 4°.- Los responsables de talleres musicales culturales revistarán como interinos a término por un período de cuatro años con posibilidad de revalidación y renovación.

Artículo 5°.- La evaluación de nuevos proyectos o la renovación cada cuatro años, a los efectos de la revalidación y renovación, en los casos que correspondiere, la realizará una comisión competente y especializada cuya integración y funcionamiento garantice la selección objetiva de las alternativas bajo estudio.

Artículo 6°.- Los responsables de talleres culturales deberán acreditar idoneidad o título para:

1. impartir y guiar la formación en las diferentes áreas artísticas, formativas, recreativas y lúdicas que integran los talleres culturales en todas sus modalidades de desarrollo; y
2. dirigir y orientar la instrucción y formación en cualquiera de sus modalidades y especialidades.

Artículo 7º.- Establécese que a partir de la promulgación de la presente ley, aquellos responsables de los módulos de taller cultural que revistan el carácter de interino o suplente bajo la modalidad de liquidación de horas cátedra transitorias adquirirán el carácter de interino a término, en todas aquellas horas cátedras que revistan una antigüedad de tres años al momento de promulgación de la presente.

Artículo 8°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 60 días posteriores

a su promulgación.
Artículo 9º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.”.

- Manifestaciones del público.

Sr. BARRIENTOS.— Pido la palabra.

Señor presidente: En principio, claramente, esto que se acaba de leer nada tiene que ver con lo que habíamos acordado en una reunión, a la que asistimos cinco integrantes de la Comisión Nº 4 y los talleristas de la Dirección de Cultura provincial.

Lamentablemente, estamos discutiendo algo que se suponía que íbamos a debatir con mayor profundidad en otro momento, y que íbamos a buscar -era el compromiso asumido- la titularización de las horas cátedra de la gente que está, hace muchísimo tiempo, bajo una figura que no les brinda ningún tipo de garantía y seguridad en su trabajo.

También me llama a la reflexión cuando muchas veces, en otros ámbitos de trabajo en la provincia, reclamamos que haya estabilidad, que no haya contratos a término, que no haya -como se denominaron en algún momento- “contratos basuras”, lamentablemente, de esta forma, también estamos copiando algunas maneras que tiene el empleo privado y que, en muchas situaciones, rechazamos en lo discursivo. Nada más, señor presidente. *(Aplausos).*

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración de la Cámara el texto leído.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

- Manifestaciones del público.

Moción

Sra. DEL CORRO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito constituir la Cámara en sesión.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción de la legisladora Del Corro.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

- Manifestaciones del público.

En Sesión

Sr. PRESIDENTE.— Por tratarse de un proyecto de ley, corresponde votación nominal.

Sec. ADMINISTRATIVO.— Procedo a tomar la votación.

- Votan por la afirmativa los legisladores Andrade Tenorio...

Moción

Sr. ARCANDO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito un cuarto intermedio.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Arcando.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Cuarto Intermedio

- Son las 14:36.
- A las 14:45

Sr. PRESIDENTE.— Se levanta el cuarto intermedio.
Sra. DEL CORRO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Quiero poner un poco de claridad en esta discusión.

Efectivamente, no hubo dictamen de la Comisión Nº 4, porque no hubo acuerdo entre los legisladores.

El texto que ha presentado el legislador Barrientos como texto acordado, nunca fue tratado en la comisión, nunca se leyó; no tuvimos acuerdo. Y el texto que he presentado por Secretaría es un texto que se consensuó con los legisladores de la Comisión Nº 4, menos con el legislador Barrientos. Por lo tanto, solicito que se someta a votación el texto leído por Secretaría.

- Manifestaciones de reprobación del público.

Mociones

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: A efectos de aclarar algunas situaciones -porque yo me voy a hacer cargo de lo que digo y de lo que hago-, días pasados hubo una reunión de la Comisión Nº 4. No se trató el proyecto de la legisladora Laura Rojo ni se trató el proyecto del Ejecutivo.

El legislador Barrientos acercó una propuesta que era de un artículo, después creo que terminaron siendo dos artículos; no se elaboró dictamen.

A título personal, dije que estaba de acuerdo con el proyecto porque había que blanquear la situación, y darle estabilidad a la gente.

Con posterioridad, nos reunimos. En mi caso particular, no soy yo solo el que decide: lo discutimos entre los tres. Hablamos con otros legisladores, y muchos plantearon -a lo mejor más conocedores del tema- algunas implicancias que tendría esta actitud de darle estabilidad a estas horas cátedra, razón por la que se realizó la consulta, y por eso se está modificando la situación. Pero yo no tengo ningún problema de hacerme cargo.

Ahora, yo lo que no voy a hacer es discutir irresponsablemente. Y si la tesitura es que lo que estamos tratando no sirve para nada, mociono que queden en comisión los proyectos, y que los sigamos discutiendo porque no quiero tomar medidas para que después, algunos entendidos en el tema educación, digan que esto tiene implicancias con el resto de las horas cátedra o del sistema educativo. Por lo tanto, yo no estoy seguro de eso. No sé si tienen razón los que dicen una cosa o los que dicen otra; yo no voy a votar algo “por las dudas”. Dicen que esto es un efecto cascada por el resto. Entonces, yo irresponsablemente no lo voy a hacer.

Si los señores que vinieron a reclamar, y que fueron despacho por despacho, dicen que esta no es la solución a su problema, no tengo inconvenientes en continuar analizando el tema, pero no lo voy a votar.

Sra. DEL CORRO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Es para decir que hemos participado, más allá...

- Interrupciones del legislador Barrientos.

Sra. DEL CORRO.— Respetuosamente, le cedo la palabra al legislador Barrientos.
Sra. BARRIENTOS.— Pido la palabra.

Señor presidente: Es solo para hacer una aclaración. En la reunión de comisión , donde discutimos este proyecto, hubo cinco legisladores y no se elaboró dictamen porque ya estábamos fuera del plazo fijado por Reglamento, y no porque no lo habíamos consensuado.

Era este el paso que íbamos a seguir, y no toda otra modificación. *(Aplausos).*

Sra. DEL CORRO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Para tener razón no hace falta gritar; ya le había cedido antes la palabra al legislador.

Es cierto que por Reglamento no se podía tener dictamen. Los legisladores decidimos traerlo aquí para formalmente acordar, incluido el legislador Pablo Blanco, el texto que acaba de ingresar por Secretaría. Para eso, venimos a esta sesión, constituirnos en comisión y -en comisión- dar la discusión, si había una moción distinta de lo que ya se había consensuado. De modo que solicito que se vote y se resuelva por votación.

- Manifestaciones del público.

Sr. PRESIDENTE.— Por favor, así, no se puede escuchar a la legisladora.

Sra. ROJO.— Pido la palabra.

Señor presidente: A raíz de la controversia que se ha generado -como yo he presentado un proyecto- sugiero lo mismo que mi par, el legislador Pablo Blanco, de pasarlo a comisión y darle más discusión al tema. Pido no votar los proyectos que se han presentado y se puedan trabajar y analizar como se debe.

Sra. DEL CORRO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Así como, en forma consensuada por los legisladores, presenté el texto -estaba el consenso- de la misma manera si el consenso es que se pase a comisión, apoyo esa moción.

- Manifestaciones del público.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración que el proyecto pase a comisión.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

- Manifestaciones del público.

Sr. PRESIDENTE.— Les pido, por favor, que podamos seguir adelante con la sesión y que mantengan el orden, para seguir trabajando.

Continúa el Tratamiento del Asunto Nº 507/14

Moción

Sr. LECHMAN.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito que se constituya la Cámara en comisión, ya que este proyecto no tiene dictamen.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración de los señores legisladores, la moción del legislador Lechman.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

En Comisión

Sec. LEGISLATIVA.— “La Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Sanciona con fuerza de ley

Capítulo Preliminar

Artículo 1.- Ámbito de aplicación. Las disposiciones de la presente ley son de aplicación para todo el sector público provincial no financiero, el que estará integrado por:

a) el Poder Ejecutivo, ministerios y secretarías de Estado;
b) el Poder Legislativo;
c) el Poder Judicial;
d) organismos autárquicos y descentralizados, comprendiendo a las instituciones de seguridad social;
e) órganos creados por la Constitución de la provincia; y
f) empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.

En el contexto de esta ley se entiende por entidad toda organización pública con personería jurídica y patrimonio propio, se trate de empresas o sociedades y organismos descentralizados; y por jurisdicción al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, los ministerios, secretarías de Estado, Fiscalía de Estado y al Tribunal de Cuentas.

Título I
Contrataciones

Capítulo I
Régimen General y Disposiciones Comunes

Artículo 2º.- Presunciones. Toda contratación incluida en el ámbito de aplicación dispuesto en el artículo 1º se presume de índole administrativa, salvo que de ella o de sus antecedentes surja que esté sometida a un régimen jurídico de derecho privado.

Artículo 3º.- Principios generales. Los principios generales a los que deberá ajustarse la gestión de las contrataciones teniendo en cuenta las particularidades de cada una, serán:

a) razonabilidad: debe existir una vinculación estrecha entre el objeto de la contratación y el interés público comprometido;
b) concurrencia e igualdad: todo oferente de bienes y/o servicios tendrá acceso a participar en contrataciones públicas en condiciones semejantes a las de los demás. La existencia de privilegios, ventajas o prerrogativas queda prohibida, salvo las excepciones que por ley se dispongan;
c) transparencia: la contratación pública en todas sus etapas se basará en la publicidad y difusión de las actuaciones, permitiendo la utilización de las tecnologías informáticas que permitan aumentar la eficiencia de los procesos y facilitar el acceso de la sociedad a la información en materia de gestión de contrataciones y en la participación real y efectiva de la comunidad;
d) economía: en toda contratación se aplicarán los criterios de simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en el uso de los recursos, en las etapas de los procesos de selección, y en los acuerdos y resoluciones recaídos sobre ellos, debiéndose evitar en las bases y en los contratos exigencias y formalidades costosas e innecesarias;
e) eficiencia y eficacia: los bienes y servicios se deberán contratar de acuerdo a la necesidad definida, en el momento oportuno y al menor costo posible, dentro de los parámetros que se requieran en cada oportunidad; y
f) sustentabilidad: las contrataciones públicas deberán regirse en criterios de sustentabilidad que garanticen el menor impacto al ambiente, mejores condiciones

éticas y económicas, así como el cumplimiento de la legislación tributaria y laboral vigente.

Desde el inicio de las actuaciones hasta la finalización de la ejecución del contrato, toda cuestión vinculada con la contratación deberá interpretarse sobre la base de una rigurosa observancia de los principios que anteceden. Estos principios servirán de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de esta ley; como parámetros para actuación de los funcionarios y las dependencias responsables, y para suplir los vacíos en la presente ley y demás normas reglamentarias.”.

Moción

Sra. DEL CORRO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito un cuarto intermedio.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción de la legisladora Del Corro.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Cuarto Intermedio

- Son las 14:55.
- A las 15:32

Sr. PRESIDENTE.— Se levanta el cuarto intermedio.

Mociones

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Como estamos en comisión, solicito que suspendamos momentáneamente la lectura del asunto porque es largo y hay gente que está esperando que se trate este proyecto de ley, por lo cual solicito a mis pares que nos apartemos del Reglamento, para darle ingreso y tratarlo.

Este es un proyecto de ley relacionado a la actividad industrial, similar a los que vinimos aprobando en sesiones anteriores, a efectos permitir que con este tipo de modificaciones, la reducción mínima en la tasa de verificación de procesos productivos, se pueda sostener y mantener el nivel de empleo.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Blanco.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Sr. BARRIENTOS.— Pido la palabra.

Señor presidente: Hay gente que está esperando el tratamiento del Asunto Nº 535/14. Les avisamos que consensuamos que vuelve a la Comisión Nº 1 para seguir tratándolo a partir del inicio del período de sesiones del año próximo.

Por eso, pedimos retirarlo del Orden del Día, y enviarlo a la comisión nuevamente.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Barrientos.

-Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito que continuemos en comisión. Haré entrega del proyecto a

la Secretaría Legislativa.
Sr. LÖFFLER.— Pido la palabra.
Señor presidente: Como estamos en sesión, solicito que se incorpore un asunto para tratarlo en la fecha, referido a una modificación a la Ley provincial 798, en su artículo 26. Ha sido consensuando por el conjunto de los legisladores y el personal de la IGJ.
Sr. PRESIDENTE.— Artículo 26, de la Ley provincial 798, es la moción del legislador preopinante…
Sr. MARINELLO.— Pido la palabra.
Señor presidente: Solicito apartarme del Reglamento e incorporar un proyecto de modificación de la Ley provincial 854, artículo 16.
En otra oportunidad ya se votó la creación de un fondo referido a un porcentaje de las tasas que se cobran, cuyo destino son proyectos, programas, tareas, actividades y capacitación que se realiza en el ámbito del Ministerio de Industria.
En su momento, votamos este artículo y pusimos una alícuota que ha quedado descontextualizada. Mediante esta modificación en su artículo 16, pretendemos dejar una alícuota que permita que ese fondo tenga vigencia.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Marinello.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

- 17 -

Asunto Nº 539/14

Tasa de Verificación de Procesos Productivos

Sr. RODRÍGUEZ.— Pido la palabra.
Señor presidente: Por tratarse de un proyecto de ley, pido que la Cámara se constituya en comisión.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Rodríguez.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

En Comisión

Sec. LEGISLATIVA.—"La Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Sanciona con fuerza de ley

Artículo 1º.- Establécese que la alícuota reducida de la Tasa de Verificación de Procesos Productivos prevista en el artículo 9º, punto 4, inciso 4.3), de la Ley provincial 440, respecto de los establecimientos industriales dedicados a la fabricación de productos eléctricos y/o electrónicos se reducirá del 1,50% al 1,10%.
Las empresas alcanzadas por el citado beneficio, que actualmente tributan bajo el artículo 9º, punto 4, inciso 4.3), de la Ley provincial 440, podrán aplicar la reducción de alícuota que se establece en el presente artículo a partir del hecho imponible cuyo nacimiento se produzca con posterioridad al 1 de enero de 2015.
Artículo 2º.- Exceptúase del pago de la tasa establecida en el artículo 6º, de la Ley provincial 440, a todas las tramitaciones presentadas ante el Ministerio de Industria e Innovación

Productiva.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.”.
Sr. PRESIDENTE.— A consideración el Asunto Nº 539/14 en comisión.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Moción

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.
Señor presidente: Solicito que la Cámara se constituya en sesión para la votación en general y en particular.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Blanco.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

En Sesión

Sr. PRESIDENTE.— Por tratarse de un proyecto de ley, corresponde votación nominal, en general que se tomará por Secretaría Administrativa.
Sec. ADMINISTRATIVO.— Procedo a tomar la votación.

- Votan por la afirmativa los legisladores Andrade Tenorio, Arcando, Barrientos, Blanco, Del Corro, Lechman, Liendo, Löffler, Marinello, Martínez, Martínez Allende, Rodríguez, Rojo, Siracusa y Tapia.

Sec. ADMINISTRATIVO.— Resultan 15 votos por la afirmativa, señor presidente.
Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Moción

Sr. LÖFFLER.— Pido la palabra.
Señor presidente: Solicito que nos apartemos del Reglamento para tratar, como siguiente Orden del Día, el proyecto presentado por el legislador Marinello, y a continuación el que presenté yo.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Löffler.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

- 18 -

Asunto Nº 541/14

Modificación Ley Impositiva

Sec. LEGISLATIVA.— “La Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Sanciona con fuerza de ley

Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 16 de la Ley provincial 854, Ley Impositiva - ejercicio 1999 – Modificación, por el siguiente texto:

'Artículo 16.- De los recursos provenientes de la aplicación del artículo 3° de la presente ley, constitúyase un fondo específico del 1% destinado a proyectos, programas, tareas y actividades para capacitación, asignaciones suplementarias para el personal, y efectuar las inversiones y erogaciones que resulten necesarias para la mejor consecución de los objetivos del Ministerio de Industria e Innovación Productiva u organismo que en el futuro lo reemplace.

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Industria e Innovación Productiva deberá reglamentar el destino de los fondos'.

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.”.

Mociones

Sr. LÖFFLER.— Pido la palabra.

Señor presidente: Por tratarse de un proyecto de ley que no tiene dictamen, mociono apartarnos del Reglamento y constituir la Cámara en comisión.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Löffler.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

En Comisión

Sr. LÖFFLER.— Pido la palabra.

Señor presidente: Habiéndose dado lectura en sesión, solicito que se omita la lectura, y se ponga a consideración en comisión.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Löffler.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Sr. BARRIENTOS.— Pido la palabra.

Señor presidente: Perdón, tendríamos que seguir en comisión, porque lo que se votó fue la moción del legislador Löffler, para que no se le diera lectura. Ahora tenemos que votar el asunto.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración en comisión, el Asunto Nº 541/14.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Sr. LÖFFLER.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito que se constituya la Cámara en sesión.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Löffler.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

En Sesión

Sr. PRESIDENTE.— Por Secretaría Administrativa se toma la votación nominal.
Sec. ADMINISTRATIVO.— Procedo a tomar la votación.

- Votan por la afirmativa los legisladores Andrade Tenorio, Arcando, Barrientos, Blanco, Del Corro, Lechman, Löffler, Marinello, Martínez, Martínez Allende, Rojo, Siracusa y Tapia.
- Ausente: legislador Rodríguez.

Sec. ADMINISTRATIVO.— Resultan 14 votos por la afirmativa, señor presidente.
Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Moción

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito que se obvie el trámite de observación de cuatro días para todos los proyectos de ley que no tenían dictamen de comisión, hasta ahora, y que fueron aprobados.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración de los señores legisladores, la moción del legislador Blanco.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

- 19 -

Asunto Nº 540/14

Resarcimiento por Dedicación Exclusiva o Bloqueo de Títulos

Sec. LEGISLATIVA.— “La Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Sanciona con fuerza de ley

Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 26, de la Ley provincial 798, por el siguiente texto:

'Artículo 26.- El personal comprendido en el régimen establecido en el artículo anterior percibirá mensualmente un resarcimiento denominado «Dedicación Exclusiva» o «Bloqueo de Títulos», según corresponda, que consistirá en la suma remunerativa y no bonificable equivalente al 65% de la remuneración mensual, normal, habitual, regular y permanente de la categoría de revista de cada agente respecto del primero, y respecto del segundo el porcentaje será establecido por vía de reglamentación del Poder Ejecutivo, el cual no podrá ser inferior al adicional que por dedicación exclusiva perciba el personal PAyT con categoría 24 de este organismo'.

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.”.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración de los señores legisladores.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Moción

Sr. LÖFFLER.— Pido la palabra.
Señor presidente: Solicito que se constituya la Cámara en sesión.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Löffler.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

En Sesión

Sr. PRESIDENTE.— Por tratarse de un proyecto de ley corresponde votación nominal.
Sec. ADMINISTRATIVO.— Se toma la votación.

- Votan por la afirmativa los legisladores Andrade Tenorio, Arcando, Barrientos,Blanco, Del Corro, Lechman, Löffler, Marinello, Martínez, Martínez Allende, Rojo, Siracusa y Tapia.
- Ausentes: legisladores Liendo y Rodríguez.

Sec. ADMINISTRATIVO.— Son 13 votos por la afirmativa, señor presidente.
Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Continuación Tratamiento Asunto Nº 507/14

Moción

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.
Señor presidente: Solicito que se constituya la Cámara en comisión.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Blanco.

- Se vota y es afirmativa.

SR. PRESIDENTE.— Aprobado.

En Comisión

Sr. PRESIDENTE.— Artículo 4º, del Asunto Nº 507/14.
Sec. LEGISLATIVA.—"Artículo 4º.- Subsanación de deficiencias. El principio de concurrencia de ofertas no debe ser restringido por medio de recaudos excesivos, severidad en la admisión de ofertas o exclusión de estas por omisiones intrascendentes o subsanables, debiéndose requerir a los oferentes las aclaraciones que sean necesarias, dándoles la oportunidad de subsanar deficiencias insustanciales, sin que ello implique alterar los principios establecidos en la presente ley.
Artículo 5º.- Contratos comprendidos. Este régimen se aplicará a los siguientes contratos: compraventa, suministros, servicios, locaciones, alquileres con opción a compra, permutas, concesiones de uso de los bienes del dominio público y privado del Estado provincial, que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en su ámbito de aplicación y a todos aquellos contratos no excluidos expresamente.
La presente ley será aplicable por analogía a las contrataciones de obras públicas, concesiones de obras públicas, concesiones de servicios públicos y licencias sólo en las cuestiones no previstas en las leyes específicas de estas materias.
Artículo 6º.- Contratos excluidos. No se encuentran comprendidas las siguientes contrataciones, en el marco de la presente ley:
a) las de empleo público;

b) las que se celebren con estados extranjeros, entidades de derecho público internacional, instituciones multilaterales de crédito y aquellos que sean financiados total o parcialmente por dichos organismos; sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones del presente régimen cuando ello así se establezca y de las facultades de fiscalización sobre ese tipo de contratos que confiere a los organismos de control; y
c) las operaciones de crédito público.

Artículo 7º.- Normativa aplicable. Las contrataciones se regirán por las disposiciones de la presente ley, su reglamentación…".

Sr. RODRÍGUEZ.— Pido la palabra.

Señor presidente: Pido que se vuelva a leer desde el artículo 3º.

Sr. PRESIDENTE.— Del Asunto Nº 507/14, ¿legislador?

Sr. RODRÍGUEZ.— Sí.

Sec. LEGISLATIVA.— ¿Desde el artículo 3º o desde el 4º?

Sr. RODRÍGUEZ.— ¿La modificación estaba en el artículo 5º, no?

Sec. LEGISLATIVA.— La modificación la tenemos en el artículo 5º.

Sr. RODRÍGUEZ.— El artículo 5º completo ¿ya lo había leído?

Sec. LEGISLATIVA.— Ya lo había leído. Lo leo de nuevo.

Sr. PRESIDENTE.— Lo repite; adelante, secretaria.

Sec. LEGISLATIVA.— "Artículo 5º.- Contratos comprendidos. Este régimen se aplicará a los siguientes contratos: compraventa, suministros, servicios, locaciones, alquileres con opción a compra, permutas, concesiones de uso de los bienes del dominio público y privado del Estado provincial, que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en su ámbito de aplicación y a todos aquellos contratos no excluidos expresamente.

La presente ley será aplicable por analogía a las contrataciones de obras públicas, concesiones de obras públicas, concesiones de servicios públicos y licencias sólo en las cuestiones no previstas en las leyes específicas de esta materia.

Artículo 6º.- Contratos Excluidos. No se encuentran comprendidas las siguientes contrataciones, en el marco de la presente ley:

a) las de empleo público;
b) las que se celebren con estados extranjeros, entidades de derecho público internacional, instituciones multilaterales de crédito y aquellos que sean financiados total o parcialmente por dichos organismos; sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones del presente régimen cuando ello así se establezca y de las facultades de fiscalización sobre ese tipo de contratos que confiere a los organismos de control; y
c) las operaciones de crédito público.

Artículo 7º.- Normativa aplicable. Las contrataciones se regirán por las disposiciones de la presente ley, su reglamentación las normas dictadas en consecuencia, por los pliegos de bases y condiciones y por el contrato o la orden de compra según corresponda.

Artículo 8º.- Órganos del Sistema. Créase la Oficina Provincial de Contrataciones, quien será el órgano rector del sistema de compras y contrataciones, con carácter desconcentrado, que operará en el ámbito del Ministerio de Economía.

Por otra parte, funcionarán las unidades operativas de contrataciones, que tendrán a su cargo la gestión de las compras y contrataciones.

Artículo 9º.- Funciones de la Oficina Provincial de Contrataciones. La Oficina Provincial de Contrataciones tendrá las siguientes funciones:

a) proponer políticas de compras y contrataciones;
b) dictar normas reglamentarias, aclaratorias, interpretativas y complementarias en la materia;
c) mantener un registro actualizado de la normativa vigente en materia de contrataciones de la provincia;
d) diseñar, implementar y administrar sistemas de información que permitan el seguimiento de las adquisiciones tanto por parte de la administración como de los

terceros, haciendo uso de las herramientas informáticas disponibles;
e) diseñar, implementar y administrar el Registro de Proveedores del Estado (PROTDF);
f) elaborar y aprobar el pliego único de bases y condiciones generales, y confeccionar modelos de pliegos de bases y condiciones particulares en materias específicas;
g) fijar y mantener actualizados los precios de referencia de los bienes y servicios que adquiera el Estado provincial;
h) brindar asesoramiento a las unidades operativas de contrataciones así como a los proveedores;
i) llevar a cabo contrataciones para procurar el suministro de bienes y servicios a las jurisdicciones o entidades contratantes, a petición de uno o más entidades o de oficio; y
j) otras que fije la reglamentación.

Artículo 10.- Funciones de las unidades operativas de contrataciones. Las unidades operativas de contrataciones tienen las facultades y obligaciones que se establecen en la presente, sin perjuicio de las que estuvieran previstas en la legislación específica, en sus reglamentos, en los pliegos de bases y condiciones o en la restante documentación contractual, y en especial:

a) recomendar y asesorar a la autoridad competente en cuestiones de interpretación de los contratos, resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificaciones, disposiciones de caducidad, rescisión o resolución, por razones de oportunidad, mérito o conveniencia;
b) controlar, inspeccionar y dirigir la respectiva contratación;
c) recomendar a la autoridad competente la ejecución por sí o por terceros del objeto del contrato, cuando el cocontratante no lo hiciera dentro de los plazos establecidos, cuando medien cuestiones de urgencia y no puedan ser resueltos por otros medios;
d) advertir a la autoridad competente sobre la necesidad de imponer las penalidades y sanciones previstas en los contratos específicos a los oferentes y a los cocontratantes, cuando estos incumplieran sus obligaciones;
e) elaborar los pliegos de bases y condiciones particulares;
f) informar al órgano rector sobre la evolución de la gestión de las adquisiciones bajo su responsabilidad, con el fin de integrarlas al sistema de información;
g) coordinar y agrupar las contrataciones a su cargo cuando se considere conveniente; y
h) llevar a cabo las contrataciones que surjan bajo su órbita.

Artículo 11.- Responsabilidad. Los agentes de planta permanente y funcionarios que autoricen, aprueben o gestionen contrataciones, apartándose de lo indicado en la presente y sus normativas complementarias, serán pasibles de penalidades que la legislación nacional y local establezca, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que pueda corresponderle.

Artículo 12.- Criterios de selección. La adjudicación deberá realizarse en favor de la oferta más conveniente para el organismo contratante, teniendo en cuenta el precio, la calidad, los costos asociados de uso y mantenimiento presentes y futuros, así como los criterios y objetivos con los cuales se dispuso la contratación, como ser oportunidad, mérito y conveniencia, y demás condiciones de la oferta. Cuando se trate de la compra de un bien o la contratación de un servicio estandarizado o de uso común, cuyas características técnicas puedan ser inequívocamente especificadas o identificadas, se entenderá en principio como oferta más conveniente la de menor precio.

Artículo 13.- Anticorrupción. Será causal determinante del rechazo de la oferta, en cualquier estado del procedimiento de contratación, así como causal de rescisión de pleno derecho del contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva, a fin de que:

a) funcionarios o empleados públicos con competencia referida a una contratación, incurran en acciones u omisiones en el cumplimiento de sus funciones;

b) funcionarios o empleados públicos hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que estos incurran en acciones u omisiones en el cumplimiento de sus funciones; o
c) cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público con la competencia descrita, a fin de que estos incurran en acciones u omisiones en el cumplimiento de sus funciones.

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido o intentaran cometer tales actos en interés del contratista, directa o indirectamente.

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aún cuando se hayan consumado en grado de tentativa.

Capítulo II
Procedimientos de Selección

Artículo 14.- Regla general. La selección del contratista para la ejecución de los contratos contemplados en este régimen es, por regla general, mediante licitación pública o concurso público.

La utilización de otros procedimientos de selección sólo será procedente en los casos expresamente previstos en los artículos 18 a 20 de la presente ley.

La elección del procedimiento de selección está determinada por una o más de las siguientes condiciones:

a) características de los bienes o servicios a contratar;
b) monto estimado del contrato; y
c) condiciones de comercialización y configuración del mercado.

Si la elección del procedimiento se efectúa conforme al inciso b) del presente artículo, y las ofertas, aún cuando sean admisibles o económicamente convenientes, superasen el monto dispuesto por el decreto jurisdiccional, ello conllevará al fracaso del procedimiento.

Artículo 15.- Procedimientos de selección. Los procedimientos para seleccionar cocontratantes serán:

a) licitación o concurso;
b) contratación directa;
c) remate o subasta pública; y
d) subasta inversa electrónica.

Artículo 16.- Licitación o concurso. Se entiende por licitación al procedimiento cuyo criterio de selección recaiga primordialmente en factores económicos. En cambio, se estará a concurso cuando el criterio de selección recaiga en cuestiones de capacidad técnica o científica, artística u otras del oferente, según corresponda. En el concurso, el organismo licitante no determina detalladamente las especificaciones del objeto del contrato, aunque sí debe consignar previamente los factores que han de considerarse para la evaluación de las propuestas y determinar el coeficiente de ponderación relativa que se asigna a cada factor y la manera de considerarlo.

Artículo 17.- Tipos de licitación o concurso. Los procedimientos de licitación o el concurso pueden ser:

a) públicos o privados: cuando el llamado a participar está dirigido a una cantidad indeterminada de posibles oferentes, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos que exija el pliego de bases y condiciones. La licitación o concurso es privado cuando intervienen como oferentes los invitados en forma directa por el ente licitante.

   La licitación o concurso privado será de aplicación cuando el valor estimado de los contratos no supere el que determine la reglamentación, o haya un número determinado de proveedores u otras razones excepcionales que justifiquen este empleo distinto al de la licitación o concurso público y así lo justifique la autoridad competente que la disponga;
b) de etapa única o múltiple: es única cuando la comparación de las ofertas en sus

aspectos económicos, de calidad o técnicos, se efectúa en un mismo acto, esto es, mediante la presentación de un sobre único. Es múltiple cuando la comparación y evaluación de antecedentes empresariales y técnicos, capacidad económica financiera, características de la prestación y análisis de los componentes económicos de las ofertas se realizan mediante preselecciones o precalificaciones sucesivas, esto es, por la presentación de más de un sobre.

Resulta de aplicación la licitación o concurso de etapa múltiple cuando las características específicas de la prestación, tales como el alto grado de complejidad del objeto o la extensión del término del contrato lo justifiquen. En este caso, se realiza en dos o más fases el análisis de oferentes y la comparación de las ofertas. En una primera etapa, se evalúan los requisitos y documentación. En una segunda, se comparan las ofertas. En los casos en que se utilice esta variante, la recepción de los sobres respectivos será simultánea para todos los oferentes. Sólo se procederá a abrir los correspondientes a las ofertas económicas de aquellos oferentes que hubieran dado cumplimiento a lo pautado en la primera etapa;

c) con iniciativa privada: surge de la presentación de iniciativas por parte de personas físicas o jurídicas. Procederá cuando la iniciativa sea novedosa u original o implique una innovación tecnológica o científica, y contenga los lineamientos que permitan su identificación y comprensión, así como la aptitud suficiente para demostrar la viabilidad jurídica, técnica y económica del proyecto. Aceptada la propuesta, se debe llamar a licitación pública a fin de seleccionar a quien ejecutará la iniciativa oportunamente presentada, conforme el procedimiento que se establezca en la reglamentación respectiva.

Considérase que en todos los casos en que las ofertas presentadas sean de equivalente conveniencia será preferida la de quien hayan presentado la iniciativa, entendiéndose que existe equivalencia de ofertas cuando la diferencia entre la oferta del autor de la iniciativa y la oferta mejor calificada no supere el 5% de esta última. Si la diferencia entre la oferta mejor calificada y la del iniciador sea superior a la indicada precedentemente, hasta un 20% el oferente mejor calificado y el autor de la iniciativa serán invitados a mejorar sus ofertas en forma simultánea y en sobre cerrado.

El autor de la iniciativa privada, en el supuesto de no ser seleccionado, tendrá derecho a percibir de quien resulte adjudicatario, en calidad de honorarios y gastos reembolsables, un porcentaje del 1% de la oferta adjudicada. El organismo licitante en ningún caso estará obligado a rembolsar gastos ni honorarios al autor del proyecto por su calidad de tal; y

d) convenio marco: es un acuerdo que, sin fijar cantidades definitivas de contratación, pretende acordar precios y condiciones de contratación determinadas durante un período de tiempo definido. Podrá ser de aplicación para adquirir bienes y servicios estandarizados, es decir, con características técnicas que puedan ser inequívocamente especificadas e identificadas y que tienen un mercado permanente.

Artículo 18.- Contratación directa. La contratación directa es un procedimiento de selección simplificado, que sólo será procedente en los casos expresamente previstos a continuación. Dicha medida debe ser debidamente fundada y ponderada por la autoridad competente que la invoca. Podrá contratarse en forma directa con un proveedor seleccionado, de acuerdo a la reglamentación que se dicte al efecto, sólo en los siguientes casos:

a) cuando la licitación, concurso, remate o subasta resulten desiertos o fracasados;
b) cuando medien probadas razones de urgencia o emergencia que respondan a circunstancias objetivas que impidan la realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno, o su realización resienta seriamente el servicio;
c) para adquirir bienes o servicios cuya fabricación o propiedad sea exclusiva de quienes tengan privilegio para ello y no haya sustituto conveniente. Asimismo,

cuando la operación requiera o se encuentra supeditada a la compatibilidad técnica o tecnológica de bienes o servicios existentes para el Estado. También procederá cuando razones de compatibilidad técnica o tecnológica permitan la entrega como parte de pago de bienes del Estado del mismo género que requieran actualizaciones, con la finalidad de proceder a su renovación y ampliación. La autoridad competente que invoque esta excepción deberá fundarse en informes técnicos que acrediten objetivamente la existencia de los supuestos que la habilitan;

d) las contrataciones que sean menester efectuar en países extranjeros, siempre que no sea posible realizar la licitación pública;
e) cuando haya notoria escasez de los elementos a adquirir;
f) la adquisición, ejecución, conservación o restauración de obras artísticas, científicas o técnicas que deban confiarse a empresas, personas o artistas especializados, que sean los únicos que puedan llevarlas a cabo;
g) las reparaciones de maquinarias, equipos, rodados o motores cuyo desarme, traslado o examen previo sea imprescindible para determinar la reparación necesaria y resulte oneroso en caso de utilizarse otro procedimiento de selección. Esta excepción no rige para las reparaciones comunes de mantenimiento, periódicas, normales o previsibles, salvo en el caso de que ello conlleve la pérdida de la garantía o un servicio previsto para la posventa;
h) cuando las circunstancias exijan que las operaciones del Estado provincial se mantengan secretas;
i) la compra de semovientes por selección y semillas, plantas o estacas, cuando se trate de ejemplares únicos o sobresalientes;
j) cuando se trate de bienes o servicios cuyos precios sean determinados o autorizados por el Estado. Se incluyen dentro de este inciso las contrataciones de servicios básicos como energía eléctrica, agua corriente, gas, transporte de pasajeros por vía terrestre, aérea, marítima, fluvial o lacustre y de telecomunicaciones tales como telefonía fija, telefonía móvil, internet u otras tecnologías que en el futuro se utilicen, y que adquieran el carácter de servicio de uso regular para el Estado provincial. Ello sólo en los casos en los que no exista más de un prestador posible o el cambio de prestador resulte oneroso para la continuidad de la prestación del servicio y pueda implicar una suspensión transitoria del mismo;
k) la locación de servicios de personas físicas que resulten necesarios para una adecuada prestación del servicio propio del área contratante, respetando las restricciones establecidas en el artículo 73, inciso 2), de la Constitución Provincial;
l) cuando el monto presunto del contrato no supere el máximo que fije la reglamentación; y
m) los contratos interadministrativos que se puedan celebrar entre lasjurisdicciones y entidades alcanzadas por la presente ley con organismos nacionales, provinciales o municipales, como así también con las sociedades en cuya administración o capital tenga participación mayoritaria cualquiera de los organismos arriba mencionados. Ello no implica admitir en este inciso aquellos casos en que el cocontratante efectúe subcontrataciones con terceros para el cumplimiento del acuerdo.

Artículo 19.- Remate o subasta pública**.** El procedimiento de remate o subasta pública es aquel que se realiza con intervención de un martillero público con un precio base previamente establecido y en el cual la adjudicación recae en el mejor postor. Puede ser aplicado en los siguientes casos, sin perjuicio de otros que en el futuro puedan surgir:

a) venta de bienes inmuebles y muebles de propiedad del Estado provincial, así como los semovientes;
b) concesión de uso de bienes del dominio público y privado del Estado; o
c) compra de bienes muebles, inmuebles, semovientes, incluyendo dentro de los

primeros los objetos de arte o de interés histórico, tanto en el país como en el exterior. Este procedimiento será aplicado preferentemente al previsto en el artículo 18 de contratación directa de la presente ley, en los casos en que la subasta sea viable, en las condiciones que fije la reglamentación.

Artículo 20.- Subasta inversa electrónica. La subasta inversa electrónica es aquella en que la selección de proveedores se desarrolla a través de una plataforma electrónica, y mediante un procedimiento dinámico. Permite que los potenciales proveedores pujen y oferten rebajas del precio vigente, a fin de ganar el contrato. Este procedimiento será aplicable en la medida que se incorporen las herramientas tecnológicas que lo hagan posible, el oferente sobre el que recaiga la contratación deberá reunir las condiciones exigidas para contratar con el Estado.

Artículo 21.- Los límites de monto establecidos para los procedimientos de selección descritos en los artículos 17, inciso a), y 18, inciso I), serán determinados por la reglamentación.

Artículo 22.- Régimen especial para hidrocarburos. Podrán contratarse, por los procedimientos que se detallan, las siguientes operaciones vinculadas con hidrocarburos:

a) los otorgamientos de permisos de exploración y concesiones de explotación quese regirán por lo dispuesto en las secciones segunda y tercera, del título II, de la Ley nacional 17319 y sus modificatorias; y
b) la venta de hidrocarburos propiedad de la provincia, sea que fueren obtenidospor explotación de yacimientos propios o por percepción de regalías en especie, según lo establecido por el artículo 60, de la Ley nacional 17319, siempre que sean destinados a proyectos de industrialización en la provincia. A tal fin, el Poder Ejecutivo implementará el Registro Público de Empresas Industrializadoras de Hidrocarburos en la provincia, el que tendrá por fin inscribir y receptar las ofertas que realicen las empresas interesadas en industrializarlos en los términos que se establezcan en las condiciones particulares de cada llamado. Las ofertas que presenten las empresas deberán establecer claramente el proceso de industrialización a realizarse con los hidrocarburos, la inversión prevista para su instalación, la oferta económico financiera por la adquisición del hidrocarburo de que se trate, la proyección de ocupación de mano de obra que implica el proyecto industrial y el estudio de su impacto ambiental. El Poder Ejecutivo analizará la oferta más conveniente a los intereses de la industrialización de hidrocarburos de la provincia y celebrará el respectivoconvenio con el adjudicatario, remitiéndolo al Poder Legislativo para su aprobación por los 2/3 de la Legislatura, según lo establecido en el artículo 84 de la Constitución Provincial.

Capítulo III
Disposiciones Comunes a las Contrataciones

Artículo 23.- Procedimiento básico. Lo establecido en el presente capítulo será aplicable a todos los procedimientos de selección, siempre que no se dispongan excepciones en el marco de la presente.

Artículo 24.- Del Registro de Proveedores de la Provincia (PROTDF). En el PROTDF deben inscribirse las personas físicas o jurídicas que deseen proveer bienes y servicios a la provincia. En dicho registro se consignarán los antecedentes que, en acuerdo con la reglamentación, se consideren necesarios. Los procedimientos de inscripción deben ser simples, gratuitos, rápidos y asistidos. La inscripción se realizará en forma electrónica y se deberá adjuntar por parte del interesado la documentación establecida en la reglamentación.

Las unidades operativas de contrataciones solicitarán la certificación de inscripción registral y vigencia de la misma en forma interna al registro. La inscripción es requisito indispensable para contratar, con las excepciones que disponga la reglamentación.

En el PROTDF se registrarán también las sanciones y penalidades en las que hayan incurrido los proveedores.

Artículo 25.- Personas habilitadas para contratar. Podrán contratar con el Estado provincial las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse, que no se encuentren

comprendidas en el artículo 26, y que se encuentren inscritas en el PROTDF.

La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas, mas deberá encontrarse inscrito en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación.

Artículo 26.- Prohibiciones. No podrán contratar con el Estado provincial:

a) personas físicas y sus convivientes, las personas jurídicas e individualmente sus socios, miembros del directorio, consejo de administración o gerentes, según el caso, que estén sancionados con suspensión o inhabilitación, mientras dichas sanciones sigan vigentes;
b) firmas sucesoras de firmas sancionadas, cuando a criterio de la autoridad de aplicación, existan indicios suficientes, por su gravedad, precisión y concordancia, para presumir que media en el caso una simulación con el fin de eludir los efectos de las sanciones impuestas a las antecesoras;
c) agentes y funcionarios del sector público nacional, provincial y municipal, y las empresas en las cuales aquellos tengan una participación suficiente para formar la voluntad social, en tanto se verifique que pueda ejercer una influencia directa o indirecta en los procedimientos de selección establecidos en el marco de la presente ley, de conformidad con lo establecido en la Ley nacional de Ética de la Función Pública 25188, o la norma que en el futuro la reemplace. Podrán admitirse excepciones a lo aquí dispuesto en las condiciones que fije la reglamentación;
d) fallidos e inhibidos mientras no sean rehabilitados;
e) personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la administración de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran en estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en contrario; y
f) condenados por delitos vinculados a contrataciones con el Estado provincial. Esta prohibición alcanzará tanto a las personas físicas como jurídicas cuyos socios, administradores o apoderados, miembros del directorio, consejo de administración o gerentes, según el caso se encuentren en dicha condición. Asimismo, se hace extensiva a los cónyuges de sobre quien recaiga dicha condena. El plazo de inhibición será establecido en la reglamentación.

Artículo 27.- Comunicaciones. Toda comunicación entre el organismo contratante y los oferentes o proveedores, ya sea en el transcurso del procedimiento de selección o durante la ejecución del contrato debe efectuarse conforme a los principios de economía y celeridad en los trámites. A tal efecto, se admite el uso del correo electrónico como medio válido para cursar comunicaciones y notificaciones conforme lo establezca la reglamentación.

Asimismo, cualquier otro medio de comunicación que en el futuro pueda ser implementado, y que propenda a cumplir con los principios enunciados anteriormente, será válido siempre que se garantice la certeza de fecha de recepción y del contenido del mensaje, en tanto la reglamentación así lo determine.

Artículo 28.- Cómputo de plazos. Todos los plazos que se establezcan en la reglamentación de la presente ley deben computarse en días hábiles administrativos, salvo disposición expresa en contrario.

Artículo 29.- Observaciones, impugnaciones y recursos. La reglamentación determinará las actuaciones que sean susceptibles de observaciones o impugnaciones, los requisitos y el tratamiento que se dará a ellas. Toda observación, impugnación, reclamo o presentación similar efectuada fuera de lo previsto en dicha reglamentación carecerá de efectos suspensivos. La reglamentación determinará el tratamiento a aplicar a estas últimas.

Artículo 30.- Garantías. Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios deberán constituir garantías o contragarantías por anticipos otorgados por la Administración Pública provincial, en las formas y por los montos que establezca la reglamentación o los pliegos, con las excepciones que aquella determine.

Artículo 31.- Revocación del procedimiento. Los organismos contratantes pueden dejar sin

efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, siempre que medie la fundamentación de la causa, sin que por ello dé lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes.

Artículo 32.- Formalidades de las actuaciones. Deberán realizarse mediante el dictado del acto administrativo como mínimo las siguientes actuaciones:

a) convocatoria y elección del tipo de procedimiento de selección, aprobación de los pliegos de bases y condiciones y designación de la comisión de preadjudicación;
b) declaración de que el procedimiento haya resultado desierto o fracasado;
c) preselección de propuestas en la licitación con etapa múltiple;
d) la aplicación de penalidades;
e) aprobación del procedimiento de contratación y la adjudicación;
f) determinación de dejar sin efecto el procedimiento; y
g) suspensión, resolución, rescisión, rescate o declaración de caducidad del contrato.

Lo dispuesto en la Ley provincial 141, artículo 99, inciso d), sólo procederá a requerimiento del área contratante cuando exista una duda jurídica en el marco de las actuaciones y en el caso de impugnaciones o recursos.

Artículo 33.- Prohibición de Desdoblamiento. No se podrá fraccionar una contratación con la finalidad de eludir procedimientos de selección que se indiquen en la presente. Esta prohibición resulta independiente del origen de los fondos que las financien.

El funcionario o agente que incurre en la prohibición del presente artículo será pasible de las penalidades establecidas en el artículo 11 de la presente ley.

Artículo 34.- Publicidad y Difusión. La convocatoria a presentar ofertas en las licitaciones y concursos públicos deberá efectuarse mediante la publicación de avisos en el Boletín Oficial de la provincia y en un diario de circulación masiva en cada ciudad de la provincia.

La cantidad de días de publicación tendrá relación con los montos previstos para la contratación en las condiciones que se fijen en la reglamentación de la presente ley.

Los plazos establecidos y los medios de publicidad deben ser considerados como mínimos, pudiendo ampliarse de acuerdo a la complejidad, importancia u otras características de la contratación a juicio de la autoridad competente. Cuando se decida la publicidad en un medio gráfico, este debe ser de tal entidad que garantice una amplia difusión.

Cuando se trate de licitaciones o concursos internacionales, deben disponerse las publicaciones en los países correspondientes en las condiciones establecidas en la normativa vigente.

Todas las convocatorias, cualquiera sea el procedimiento de selección que se utilice, se difundirán por internet u otro medio electrónico de igual alcance que lo reemplace, en el sitio del órgano rector, en forma simultánea, desde el día en que se les comience a dar publicidad por el medio específico que se establezca en el presente o en la reglamentación o desde que se cursen las invitaciones y hasta el día de la apertura.

Quedan exceptuadas de la obligación de difusión, en todas las etapas del procedimiento, las contrataciones directas encuadradas en el artículo 18, incisos b), d) y h).

En todos los procedimientos de selección en que la invitación a participar se realice a un determinado número de personas físicas o jurídicas, la unidad operativa de contrataciones deberá considerar y evaluar las ofertas presentadas por quienes no fueron convocados.

Artículo 35.- Revocación de los actos administrativos del procedimiento de contratación. La comprobación de que en un llamado a contratación se hayan omitido los requisitos de publicidad y difusión previa, en los casos en que la norma lo exija, o formulado especificaciones o incluido cláusulas cuyo cumplimiento sólo fuera factible por determinado interesado u oferente, de manera que el mismo esté dirigido a favorecer situaciones particulares, dará lugar a la revocación inmediata del procedimiento, cualquiera fuere el estado de trámite en que se encuentre, y a la iniciación de las actuaciones sumariales pertinentes.

Artículo 36.- Redeterminación de precios. A fin de procurar el mantenimiento de valores constantes de las contrataciones, procederá la aplicación del procedimiento de redeterminación de precios basado en criterios objetivos, que estará determinado en la

reglamentación y en el caso que fuera expresamente previsto en el pliego de bases y condiciones y en el contrato particular.

Capítulo IV
Contrataciones Públicas Electrónicas

Artículo 37.- Contrataciones en formato digital. Las contrataciones comprendidas en este régimen podrán realizarse en formato digital firmado digitalmente, utilizando los procedimientos de selección y las modalidades que correspondan. También podrán realizarse en formato digital firmado digitalmente los contratos previstos en el artículo 5º del presente.

Las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 1° estarán obligadas a aceptar el envío de ofertas, la presentación de informes, documentos, comunicaciones, impugnaciones y recursos relativos a los procedimientos de contratación establecidos en este régimen, en formato digital firmado digitalmente, conforme lo establezca la reglamentación.

Se considerarán válidas las notificaciones en formato digital firmado digitalmente, en los procedimientos regulados por la presente.

Deberá considerarse que los actos realizados en formato digital firmados digitalmente cumplen con los requisitos del artículo 3° de la Ley provincial 955, o aquellas que la sustituyan y sus normas reglamentarias, en los términos establecidos en la mencionada ley, las que se aplicarán, en el caso de las contrataciones incluidas en el artículo 5° de este régimen, aún a aquellos actos que produzcan efectos individuales en forma directa. Los documentos digitales firmados digitalmente tendrán el mismo valor legal que los documentos en soporte papel con firma manuscrita y serán considerados como medio de prueba de la información contenida en ellos.

Artículo 38.- Regulación. La reglamentación establecerá la regulación integral de las contrataciones públicas electrónicas, en particular el régimen de publicidad y difusión, lo referente al proceso electrónico de gestión de las contrataciones, los procedimientos de pago por medios electrónicos, las notificaciones por vía electrónica, la automatización de los procedimientos, la digitalización de la documentación y el expediente digital.

Capítulo V
Concesión de Uso de los Bienes del Concesión de Uso de los Bienes del Dominio Público y Privado del Estado Provincial

Artículo 39.- Caracteres. Se regirán por las disposiciones de este capítulo los contratos por los que los administrados, actuando a su propia costa y riesgo, ocupen, usen o exploten, por tiempo determinado, bienes pertenecientes al dominio público o privado del Estado provincial, al que pagarán un canon por dicho uso, explotación u ocupación de los bienes puestos a su disposición en forma periódica y de acuerdo a las pautas que establezcan los pliegos de bases y condiciones particulares.

Artículo 40.- Cláusulas particulares. Los pliegos de bases y condiciones particulares establecerán, según correspondan:

a) plazo de vigencia del contrato;
b) plazos y formas de pago del canon a abonar por el concesionario, definición de las bases y procedimientos a seguir para su fijación y su eventual reajuste;
c) presentación de certificado de visita al lugar o a las instalaciones objeto de la concesión, por parte del oferente;
d) condiciones y plazos relativos a la entrega de los bienes y su habilitación para el inicio de las actividades por parte del concesionario;
e) cronograma y descripción de los trabajos de mantenimiento o mejoras que deba introducir el concesionario en los bienes afectados a la concesión;
f) garantías que podrán ser exigidas por los bienes de la Administración Provincial afectados a la concesión, por las obras a realizar que obligue el contrato y por los daños que puedan ocasionarle al concedente o a terceros o, en su caso, fondo

que se deberá integrar para reparaciones o reposiciones, con retenciones porcentuales sobre los pagos pertinentes. Tales garantías deberán comprender todo el lapso de duración del contrato y sus eventuales prórrogas;

g) idoneidad técnica y/o experiencia requerida al concesionario y, en su caso, a sus reemplazantes para la atención de la concesión;
h) definición de los bienes afectados a la concesión, incluyendo los datos de la ubicación de las mejoras si las hubiera;
i) limitación o acumulación de adjudicaciones similares a un mismo oferente, cuando existan razones previamente fundadas por autoridad competente;
j) condiciones que obliguen al adjudicatario a hacerse cargo transitoriamente de otra concesión similar que por cualquier motivo se hubiera extinguido;
k) si se otorga o no exclusividad;
l) patrimonio mínimo a exigir al oferente;
m) posibilidad de redeterminación de precios; y
n) otras cuestiones que resulten de relevancia.

Artículo 41.- Falta de entrega de los bienes por parte del Estado. Si por razones de caso fortuito o fuerza mayor no pueda hacerse entrega de los bienes en el plazo estipulado, el concesionario podrá desistir del contrato y obtener la devolución del total de la garantía aportada, si hubiera. Esta situación no generará derecho a indemnización alguna.

Artículo 42.- Precio base. Las convocatorias para el otorgamiento de concesiones se efectuarán con canon base, salvo que la autoridad competente acredite su inconveniencia.

Artículo 43.- Criterio de selección. La adjudicación deberá recaer en la propuesta que ofrezca el mayor canon, salvo que en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares se estableciera otro criterio de selección.

Artículo 44.- Responsabilidad por daños. El concesionario será responsable en todos los casos de los deterioros ocasionados a los bienes de propiedad del Estado provincial afectados a la concesión, que no obedezcan al uso normal de los mismos.

Artículo 45.- Propiedad de las mejoras. Todas las mejoras edilicias, tecnológicas o de cualquier tipo que el concesionario introduzca en los bienes de la administración provincial afectados al cumplimiento del contrato, quedarán incorporadas al patrimonio estatal y no darán lugar a compensación alguna.

Artículo 46.- Obligaciones del concesionario. Sin perjuicio del cumplimiento de las cláusulas del pliego de bases y condiciones particulares, el concesionario estará obligado a:

a) cumplimentar estrictamente las disposiciones legales que sean de aplicación, de acuerdo con la naturaleza de la concesión, y al pago de los impuestos, tasas, contribuciones, patentes y demás obligaciones que graven a los bienes por su explotación o actividad;
b) satisfacer en todos los casos las indemnizaciones por despido, accidentes y demás pagos originados por la concesión;
c) no destinar los bienes a otro uso o goce que el estipulado en el contrato de concesión o hacer uso indebido de los mismos;
d) mantener los bienes en perfectas condiciones de conservación, uso y goce y, en su caso, efectuar con la periodicidad establecida en las cláusulas particulares los trabajos de mantenimiento o mejoras que correspondan;
e) facilitar el acceso de inspectores autorizados a todas las instalaciones, libros de contabilidad y documentación vinculada con el cumplimiento del contrato y firmar las actas de infracción que se labren;
f) no introducir modificaciones ni efectuar obras de cualquier naturaleza sin consentimiento escrito de la dependencia contratante;
g) proponer con anticipación a la dependencia contratante los representantes o reemplazantes con facultad para obligarlo;
h) entregar los bienes dentro del plazo establecido en el contrato a su vencimiento. Si nada dice dicho instrumento legal, deberá entregarlo a los 10 días corridos de vencido el contrato o de comunicada y notificada su rescisión; e

i) satisfacer las multas por infracciones dentro del plazo fijado al efecto.

Artículo 47.- Causales de rescisión. Serán causales de rescisión por culpa del concesionario, sin perjuicio de otras establecidas en la presente ley o en los pliegos de bases y condiciones particulares:

a) falta de pago del canon acordado en el plazo establecido;
b) falta de concurrencia al acto de entrega de los bienes o negativa a su habilitación, salvo causas justificadas a juicio de la dependencia contratante;
c) destinar los bienes a un uso o goce distinto del estipulado;
d) infracciones reiteradas en el cumplimiento de las demás obligaciones establecidas en esta ley o en los pliegos de bases y condiciones particulares;
e) interrupciones reiteradas de las obligaciones emergentes de la concesión;
f) cuando el contrato sea transferido en todo o en parte, sin que la misma haya sido autorizada previamente por el organismo contratante; y
g) en los casos en que se incurra en las causales del artículo 26.

Artículo 48.- Multas. El incumplimiento de las obligaciones contraídas por el concesionario dará lugar a la aplicación de multas las que serán graduadas en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

Artículo 49.- Falta de restitución de los bienes por parte del concesionario. Si el concesionario no haya restituido los bienes en el plazo fijado al efecto, se lo intimará para que desaloje el lugar. De persistir el incumplimiento, el organismo competente podrá requerir a la justicia el inmediato desalojo del concesionario o de cualquier otro ocupante. Efectuada la presentación requerida, los jueces, sin más trámite, ordenarán el lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública, sin perjuicio de las acciones de orden pecuniario que puedan corresponder a ambos contratantes.

Artículo 50.- Continuidad de la concesión por sucesión o curatela. En caso de fallecimiento o incapacidad del concesionario, la entidad contratante tendrá la facultad de aceptar la continuación de la concesión, siempre que los derechohabientes o el curador unifiquen la personería y ofrezcan garantías suficientes. Si la sustitución no fuera aceptada, el contrato quedará rescindido sin aplicación de penalidades.

Capítulo VI
Locación de Inmuebles

Artículo 51.- Normas de aplicación. La locación de inmuebles por parte del Estado provincial se regirá por la presente ley y su reglamentación, por las cláusulas del pliego de bases y condiciones generales y particulares, y por las estipulaciones del respectivo contrato de locación.

En todo lo que no se halle previsto expresamente por la documentación contractual se aplicará supletoriamente el régimen general de locaciones urbanas.

Artículo 52.- Renovación de locaciones. Si el organismo contratante demostrara que la oferta del actual locador no es superior en más del 20% a los valores de mercado, y la existencia de razones de funcionamiento tornaran inconveniente el desplazamiento de los servicios o impidieran la continuidad de los mismos, podrá decidir la adjudicación a su favor utilizando el procedimiento de contratación directa previsto en el artículo 18, inciso c), de la presente.

Título II

De la Gestión de Bienes de Uso del Estado

Capítulo I
Consideraciones Generales

Artículo 53.- Patrimonio incluido. El patrimonio de la provincia se integra con los bienes que, por expresa disposición de ley o por haber sido adquiridos por sus organismos, son de

propiedad provincial. Asimismo, integran el patrimonio provincial los bienes recibidos por donación o legados, por nacimiento (en el caso de los semovientes), aquellos bienes de uso en proceso de construcción y los elaborados por dependencias del Estado provincial.

Artículo 54.- Patrimonio excluido. Quedan excluidos de las disposiciones de la presente ley los bienes que integran el patrimonio cultural, histórico y natural del Estado provincial, que se regirán por las normas específicas que le son aplicables y subsidiariamente por la presente ley en cuanto a su administración, guarda y custodia.

Artículo 55.- Principios rectores. El sistema deberá ajustarse a los siguientes principios rectores:

a) economicidad, eficiencia y eficacia en todas y cada una de las etapas del proceso de administración de bienes;
b) identificación y control a través de inventarios o registros adecuados;
c) colaboración y coordinación entre las distintas jurisdicciones y entidades con el fin de optimizar la utilización y rendimiento de los bienes;
d) responsabilidad de los agentes y funcionarios que autoricen, dirijan y ejecuten las acciones de disposición, administración, guarda o custodia en cuanto a su legitimidad, oportunidad, mérito o conveniencia; y
e) la gestión de los bienes deberá coadyuvar al desarrollo y ejecución de las distintas políticas públicas en vigor.

Artículo 56.- Organización administrativa del sistema. La organización funcional del sistema se compone de:

a) un órgano rector que actuará como unidad central del sistema y tendrá a cargo la elaboración de las políticas, las normas, los procedimientos, la administración de la información y la evaluación del sistema; y
b) las unidades patrimoniales periféricas que funcionarán en cada una de las jurisdicciones o entidades del sector público provincial y tendrán a su cargo la administración de los bienes que tengan asignados o hayan adquirido para su uso, según la presente ley y las que reglamente el órgano rector.

Esta separación será de aplicación siempre que la misma resulte adecuada y conveniente en función de la jurisdicción o entidad que se trate.

Artículo 57.- Disposición de uso y administración. La autoridad superior de cada jurisdicción o entidad dispondrá del uso de los bienes muebles e inmuebles adquiridos o asignados para el funcionamiento de los servicios a su cargo.

El Poder Ejecutivo determinará el organismo que tendrá a su cargo la administración de los bienes cuando quedaran sin uso o destino específico.

Artículo 58.- Conservación y mantenimiento. Los bienes del Estado provincial serán conservados, mantenidos y custodiados de acuerdo con las normas establecidas en la presente ley, su reglamentación y las instrucciones que pueda emitir el órgano rector.

A tal fin, y de acuerdo con su naturaleza, deberán ser objeto de mantenimiento preventivo y correctivo sistemático.

Los gastos atinentes a la conservación y mantenimiento de los bienes estarán a cargo de las jurisdicciones y entidades que los tengan asignados, con cargo a sus partidas presupuestarias específicas.

Artículo 59.- Responsabilidad patrimonial sobre los bienes del Estado. Todo agente de planta permanente o funcionario será pasible de asumir la responsabilidad patrimonial sobre los bienes de uso inventariables, de acuerdo a la reglamentación.

En ningún caso, a una persona se la podrá obligar a suscribir un cargo patrimonial sobre bienes de uso del Estado si estos no están bajo su inmediato control, supervisión, custodia o administración.

Quienes tengan a su cargo bienes bajo su administración o custodia son responsables de la pérdida o daño que sufran los mismos, cuando no provengan del deterioro natural por razón de su uso legítimo o de otra causa justificada. Dichas personas estarán obligadas a velar por el correcto uso de los bienes, debiendo gestionar el mantenimiento y conservación adecuados. Serán eximidos de responsabilidad por los daños previstos en el párrafo anterior

cuando sean por fuerza mayor o caso fortuito.

Cuando se compruebe culpa o dolo en la pérdida o robo de bienes públicos se deberá restituir o pagar el bien de acuerdo con el valor de mercado.

Artículo 60.- Inventario general. Todos los bienes del Estado provincial formarán parte del Inventario General de Bienes de Uso de la Provincia que deberá mantenerse permanentemente actualizado.

El Poder Ejecutivo podrá disponer relevamientos totales o parciales de bienes, en las oportunidades que estime convenientes, sin perjuicio de los que en razón de sus funciones específicas pueda establecer el órgano rector.

Artículo 61.- Donaciones Recibidas. Competerá a las autoridades superiores de los poderes del Estado, o los funcionarios en quienes las mismas deleguen la facultad, y a las de organismos especialmente autorizados por ley, la aceptación de donaciones a favor de la provincia.

No serán consideradas donaciones, las cesiones de tierras que obligatoriamente, en virtud de normas vigentes en materia de fraccionamiento, son realizadas con destino a uso público o para reservas fiscales, cuya aceptación se concretará al aprobarse el plano de subdivisión que la motiva.

- *Ocupa la Presidencia el vicepresidente 1º, Juan Felipe Rodríguez.*

Sec. LEGISLATIVA.— "Artículo 62.- Transferencias. Se podrá transferir con o sin cargo aquellos bienes inmuebles o muebles en desuso o en condiciones de rezago, conforme lo disponga la reglamentación:

a) entre reparticiones del Estado provincial;
b) a entidades oficiales nacionales, provinciales o municipales; y
c) a entidades de bien público, previa autorización legislativa por mayoría agravada.

Podrán ser donados aquellos semovientes cuya vida útil se encuentre agotada, debiendo tal circunstancia ser previamente certificada por profesional veterinario autorizado.

Artículo 63.- Permuta. Podrán permutarse bienes muebles o semovientes siempre que se demuestre que la operación resulta ventajosa a los intereses del Estado. La valuación deberá establecerse por un técnico competente, siempre que la naturaleza del bien que se trate lo amerite. Asimismo deberá pronunciarse con respecto a la calidad y características de los bienes a permutar.

La entrega a cuenta de precio de bienes muebles o semovientes, en operaciones de compra y venta simultánea, será reglada por el Poder Ejecutivo.

Capítulo II
De la Administración y Disposición de los Bienes Inmuebles

Artículo 64.- Administración compartida. Cuando distintas jurisdicciones y entidades ocupen un mismo inmueble, ejercerán la administración en forma común o compartida, a excepción de aquellos casos en la cual una de ellas asume exclusivamente la responsabilidad de la administración.

Artículo 65.- Venta. Los bienes inmuebles de la provincia no podrán enajenarse ni gravarse en forma alguna sin expresa disposición de ley, la que al mismo tiempo deberá indicar el destino de su producido, en cuyo defecto pasará a integrar el conjunto de recursos aplicados a financiar el Presupuesto General de la Administración Pública provincial.

Artículo 66.- Inmuebles en desuso. Los inmuebles del dominio privado del Estado provincial no podrán mantenerse inactivos o privados de destino útil. Si por cualquier circunstancia algún inmueble asignado a una jurisdicción o entidad deviniere no necesario para la prestación del servicio, se deberá comunicar dicha circunstancia al Ministerio de Economía, en un plazo máximo de 60 días, a fin de considerar otro destino.

Artículo 67.- Destino de inmuebles en desuso. Cumplimentado lo indicado en el artículo anterior, los inmuebles de propiedad del Estado provincial que se encuentren ociosos deberán

ser:

a) entregados en comodato a:
    1. organismos públicos nacionales, provinciales o municipales; y
    2. entidades de bien público con personería jurídica. Este caso, será procedente siempre que el inmueble sea destinado al desarrollo de un programa de bien público mediante el cual se beneficie a la comunidad y con previa autorización legislativa con mayoría agravada.

Durante el tiempo en que el comodatario permanezca en posesión del bien, tendrá a su cargo el pago de todos los impuestos, tasas y contribuciones y servicios que afecten al mismo y deberá asegurarlo contra riesgo de incendio, como mínimo, en una compañía aseguradora a favor del comodante.

Para realizar cualquier tipo de mejoras en el inmueble, el comodatario deberá requerir la expresa conformidad del comodante. Las mejoras realizadas quedarán en beneficio exclusivo del inmueble, no pudiendo el comodatario efectuar reclamo alguno por tal concepto;

a) locados, en acuerdo a lo que disponga la reglamentación;
b) concesionados en observancia a lo dispuesto en los artículos 39 al 50 de la presente ley y su reglamentación;
c) transferidos en acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la presente ley; y
d) vendidos, conforme lo dispuesto en los artículos 19 y 65 de la presente ley y su reglamentación.

Capítulo III
De la Administración y Disposición de los Bienes Muebles

Artículo 68.- Del uso. Los bienes muebles deberán destinarse al uso para el que fueron asignados o adquiridos, no pudiendo ser utilizados, ni siquiera excepcionalmente, para satisfacer necesidades personales de los agentes de planta permanente o funcionarios.

Artículo 69.- Comodatos. Los bienes muebles del Estado que se encuentren en desuso podrán ser entregados en comodato.

Durante el tiempo en que el comodatario permanezca en posesión del bien tendrá a su cargo el pago de todos los impuestos y deberá asegurarlo en una compañía aseguradora a favor del comodante. Las mejoras realizadas quedarán en beneficio exclusivo del bien, no pudiendo el comodatario efectuar reclamo alguno por tal concepto.

Título III
Disposiciones Finales y Transitorias

Artículo 70.- Derógase la Ley territorial 6 y toda norma que se oponga a la presente.

Artículo 71.-Fíjase un plazo de 90 días para la puesta en funcionamiento del sistema informático, según dicta el artículo 37 de la presente, y para su reglamentación.

Artículo 72.- Hasta tanto se dicte el reglamento de la presente, regirá el Decreto provincial 674/11 reglamentario de la Ley territorial 6, de Contabilidad, en su Capítulo II, Título III y sus modificatorios; el Decreto provincial 1505/02, reglamentario de la Ley territorial 6, de Contabilidad en su capítulo V, los Decretos Jurisdiccionales, y las resoluciones de Contaduría General y Subsecretaría de Hacienda y Contrataciones vigentes, que no se opongan a la presente.

Artículo 73.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.”.

- Ocupa la Presidencia el vicegobernador Roberto Luis Crocianelli.

Sr. PRESIDENTE.— En comisión, se pone a consideración.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Moción

Sr. LÖFFLER.— Pido la palabra.

Señor presidente: Mociono constituir la Cámara en sesión.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Löffler.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

En Sesión

Sr. RODRÍGUEZ.— Pido la palabra.

Señor presidente: En función de que votaremos un proyecto de ley que modifica la Ley de Contrataciones en el Estado provincial y los estados municipales -o sea, deroga la Ley 6, la vieja Ley de Contabilidad que tuvo muchos años de existencia- quiero rescatar que tiene que ver con lo que se decidió en la Comisión Nº 5, donde se le pidió al Ejecutivo que solicitara las herramientas -y esta es una de las que se solicitó, dentro de los tres proyectos que ingresaron en la sesión anterior-, y en ese marco dos fueron votados en la misma sesión.

En dos reuniones de la Comisión Nº 1 no pudimos lograr el dictamen porque la última reunión se hizo en el día de ayer.

Esto tiene que ver con el compromiso asumido desde la Cámara y desde cada uno de los bloques. Hoy estamos votando una herramienta fundamental que modificará la realidad en cuanto a la posibilidad que tiene el Estado de agilizar los trámites para tener los insumos y las contrataciones que se requieren. Nada más, señor presidente.

Sr. BARRIENTOS.— Pido la palabra.

Señor presidente: Adelanto nuestro voto positivo, y quiero reconocer el trabajo del Tribunal de Cuentas que ha pedido de la Legislatura en la última sesión estuvo varios días trabajando, con sus equipos de profesionales para poder tener una norma consensuada y así poder votarla desde lo técnico y específico. Es bueno recordar la participación del cuerpo técnico en este sentido.

Sr. PRESIDENTE.— Por tratarse de un proyecto de ley, corresponde votación nominal, en general y en particular.

Sec. ADMINISTRATIVO.— Procedo a tomar la votación.

- *Votan por la afirmativa los legisladores Andrade Tenorio, Arcando, Barrientos, Blanco, Del Corro, Lechman, Liendo, Löffler, Marinello, Martínez, Martínez Allende, Rodríguez, Rojo, Siracusa y Tapia.*

Sec. ADMINISTRATIVO.— Resultan 15 votos por la afirmativa, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.— Gracias, secretario. Aprobado. *(Ver texto definitivo en Anexo I).*

Mociones

Sr. LÖFFLER.— Pido la palabra.

Señor presidente: Es para incorporar al Orden del Día, como último asunto, el proyecto de ley que modifica el artículo 10 de la Ley provincial 834, referente a la modificación de la remuneración de los directores de la Caja de la Policía.

A la fecha, los directores de la Caja de la Policía cobran doble remuneración: la de retiro de la actividad más la del cargo de director. Para subsanar este error se presenta, como proyecto de ley, la remuneración que equipara al presidente de la Caja, a un secretario de Estado; y a los directores, a un subsecretario de Estado.

Resultará de carácter optativo percibir la remuneración de retiro, en el caso de

aquellos directores que la tengan, o la del director de la Caja.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Löffler.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.
Sec. LEGISLATIVA.— Ingresa como Asunto Nº 542/14.
Sr. LÖFFLER.— Pido la palabra.
Señor presidente: Mociono que nos apartemos del Reglamento y constituir la Cámara en comisión.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Löffler.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

- 20 -

Asunto Nº 542/14

Ley Previsional Personal Policial de la Provincia

En Comisión

Sec. LEGISLATIVA.— “La Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Sanciona con fuerza de ley

Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 10 de la Ley provincial 834, Policía provincial: Ley Previsional para el Personal Policial provincial, territorial y Servicio Penitenciario de la Provincia, por el siguiente texto:
'Asignaciones
Artículo 10.- La retribución del presidente será equivalente a la remuneración asignada para el cargo de secretario de Estado y la de los directores será equivalente al cargo de subsecretario de Estado del gobierno provincial.
Sin perjuicio de ello, el presidente y, en su caso, los directores podrán optar entre percibir la remuneración prevista precedentemente o continuar percibiendo sus haberes, o bien sus beneficios por retiro o pasividad, según corresponda'.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.”.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración el proyecto.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Moción

Sr. LÖFFLER.— Pido la palabra.
Señor presidente: Solicito que la Cámara se constituya en sesión.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Löffler.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

En Sesión

Sr. PRESIDENTE.— Por tratarse de un proyecto de ley, corresponde votación nominal, que se tomará por Secretaría Administrativa.
Sec. ADMINISTRATIVO.— Procedo a tomar la votación.

- Votan por la afirmativa los legisladores Andrade Tenorio, Arcando, Barrientos, Blanco, Del Corro, Lechman, Liendo, Löffler, Marinello, Martínez, Martínez Allende, Rodríguez, Rojo, Siracusa y Tapia.

Sec. ADMINISTRATIVO.— Resultan 15 votos por la afirmativa, señor presidente.
Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Moción

Sra. ROJO.— Pido la palabra.
Señor presidente: Solicito que se incorpore el Asunto Nº 73/14 para su tratamiento, ahora. Es el proyecto de la Ley provincial de Educación.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción de la legisladora Rojo.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.
Seguimos en comisión (sic).

- 21 -

Asunto Nº 73/14

Ley Provincial de Educación

Sec. LEGISLATIVA.— "La Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Sanciona con fuerza de ley

Título I
Disposiciones Generales

Capítulo I
Objeto

Artículo 1º.- La presente ley regula y garantiza el ejercicio del derecho humano personal y social de enseñar y aprender en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, conforme lo establecido en el artículo 14 de la Constitución Nacional, los tratados internacionales incorporados a ella, el artículo 14, inciso 5, de la Constitución Provincial, la Ley de Educación nacional...".

Mociones

Sr. BARRIENTOS.— Pido la palabra.
Señor presidente: Quiero solicitar un recurso de reconsideración porque no están los votos necesarios para apartarnos del Reglamento e ingrese el proyecto.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Barrientos...
Sr. LÖFFLER.— Pido la palabra.
Señor presidente: Lo que en realidad hay que consultar es quién votó y quién no votó por la afirmativa; no es que hay que reconsiderar el voto. La votación se hizo y no hay ningún legislador que esté pidiendo cambiarlo, porque haya entendido mal o se haya interpretado mal su decisión, se someta a considerar el voto. Lo que hay que saber es cuántos votos fueron por la afirmativa y cuántos por la negativa.
Sr. PRESIDENTE.— ¿Secretario Administrativo, cuántos votos hubo?
Legisladores, a sus bancas, por favor.
Sr. LÖFFLER.— Pido la palabra.
Señor presidente: Solicito un cuarto intermedio sobre bancas a fin de ver el resultado.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Löffler.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Cuarto Intermedio

- Son las 16:50.
- A las 16:51

Sr. PRESIDENTE.— Se reanuda la sesión.
Sr. BARRIENTOS.— Pido la palabra.
Señor presidente: Retiro la moción, pensé que se había votado…
Sr. PRESIDENTE.— Está bien, legislador.
El compañero Barrientos retira la moción.

Moción

Sr. ARCANDO.— Pido la palabra.
Señor presidente: Como tenemos algunas disidencias con el proyecto consensuado por la mayoría, entregaré a la Secretaría Parlamentaria el dictamen que preparamos en caso de que se hubiere tratado en la comisión en su momento, porque quiero que sea tenido en cuenta y que quede como antecedente cuál fue nuestra postura con respecto a la ley.
Seguramente, que hay muchos artículos en los que podemos coincidir y en otros en los que no, al no haber podido compatibilizar en dos artículos, votaremos en general y en particular en contra del proyecto.
Pido al Cuerpo que me autorice a incorporarlo como dictamen de la minoría. Nada más, señor presidente.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Arcando.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.
Adelante, secretaria.
Sec. LEGISLATIVA.— "…la Ley de Educación nacional 26206 y toda otra legislación nacional o provincial vigente en materia educativa, para la aplicación de la presente ley.

Capítulo II
Autoridad de Aplicación. Competencia

Artículo 2º.- El Ministerio de Educación, o quien en el futuro lo reemplace, es la autoridad de aplicación de la presente. El Ministerio de Educación es responsable de llevar a la práctica lo

establecido en la Constitución Provincial, sección cuarta, título II, capítulo III, e implementar la política educativa.

Capítulo III
Principios, Derechos y Garantías

Principios

Artículo 3º.- La educación y el conocimiento son derechos humanos fundamentales que hacen a la dignidad de la persona, son un bien público y un derecho personal y social, garantizado por el Estado. Los principios sobre los que se funda la educación fueguina son los siguientes:

a) la Educación constituye una política de Estado, para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional y provincial, promover el bien común, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales, consolidar la democracia, el fortalecimiento y defensa de la República y profundizar el ejercicio de una ciudadanía activa, solidaria y responsable;
b) la educación debe brindar oportunidades para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas, movilizándolas a construir su proyecto de vida, basado en los valores constitucionales; y
c) el Estado provincial no suscribirá tratados ni acuerdos de cualquier índole que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o alienten cualquier forma de mercantilización de la educación pública.

Derechos

Artículo 4º.- La educación y el conocimiento constituyen derechos sociales y culturales en la vida de los estudiantes de la provincia. La política educativa provincial reconoce los siguientes derechos:

a) derecho a una educación, que permita la igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia y egreso del sistema educativo provincial;
b) derecho a una educación gratuita, a lo largo de toda la vida y en cualquier contexto o situación;
c) derecho a no ser discriminado, marginado o segregado, por ningún motivo o razón, del sistema educativo provincial;
d) derecho a una educación de excelencia, con materiales didácticos, pedagógicos y tecnologías educativas adecuadas, actualizadas y justamente distribuidas;
e) derecho a una educación pública, democrática, laica, y no dogmática, que promueva la libertad intelectual de estudiantes y docentes, en todas sus manifestaciones;
f) derecho de enseñar y aprender en condiciones dignas según la legislación vigente sobre riesgo de trabajo y de seguridad e higiene;
g) derecho a recibir educación sexual integral conforme lo establece la Ley nacional 26150;
h) derechos establecidos en la Ley nacional 25584 de protección de adolescentes embarazadas; e
i) derechos establecidos en la Ley nacional 26892, contra el acoso escolar.

Artículo 5º.- El Estado provincial, con la participación de la comunidad educativa, garantiza:

a) respeto por el ser humano, como sujeto de derecho del proceso educativo, fortaleciendo su interioridad, su interrelación con el ambiente y los valores éticos y filosóficos;
b) derechos de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes establecidos en las leyes nacionales y provinciales vigentes, y en los instrumentos internacionales de derechos humanos referidos al tema;
c) condiciones necesarias y equitativas para enseñar y aprender;

d) gratuidad y universalización de la enseñanza, para todas y todos los habitantes de la provincia, en cualquier contexto o situación;

- Ocupa la Secretaría Legislativa la prosecretaria administrativa, Mabel L. Caparrós.

e) inclusión educativa, a través de políticas universales, de estrategias pedagógicas y de asignación de recursos, que otorguen prioridad a los sectores más vulnerables de la sociedad;
f) derecho de igualdad, inclusión, excelencia y justicia social de todos los niños, jóvenes, adolescentes y adultos con discapacidades temporales o permanentes, con mecanismos eficientes para atender la particularidad que se trate;
g) atención, a través de servicios interdisciplinarios de prevención, detección, orientación, derivación y asistencia, para todos los estudiantes que la necesiten para desarrollar su proceso educativo, en la educación inicial, primaria y secundaria, con sus respectivas modalidades y especialidades, como así también la articulación intersectorial con las distintas áreas gubernamentales de política social y otras que se consideren pertinentes;
h) educación intercultural de pueblos originarios y sus descendientes, respetando su lengua y su identidad;
i) acceso a la información y al conocimiento como instrumentos centrales de la participación en un proceso social de desarrollo con crecimiento económico y justicia social;
j) la creación de bibliotecas escolares y apoyo a las existentes;
k) asegurar condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre las personas sin admitir discriminación de género, identidad de género, ni de ningún otro tipo, incorporando enfoques y contenidos básicos de la equidad de género y la diversidad cultural; y
l) garantizar a las personas migrantes sin documento nacional de identidad, el acceso y las condiciones para la permanencia y egreso de todos los niveles del sistema educativo, mediante la presentación de documentos emanados por su país de origen.

Artículo 6º.- El Estado provincial sostiene y garantiza un sistema educativo que se caracteriza por:

a) público:".

Sr. BARRIENTOS.— Pido la palabra.

Señor presidente: Es para solicitar a los señores de la comisión que me acerquen una copia del dictamen que se está leyendo, porque yo no lo tengo; y no sé qué es lo que estamos tratando. Yo debo tener el texto para poder analizarlo. Se lo estoy pidiendo a la comisión porque soy integrante de la Comisión de Educación, y no tengo un dictamen.

Sr. PRESIDENTE.— Adelante, secretaria.

Sec. LEGISLATIVA.— "a) público: la educación pública de jurisdicción provincial está integrada por los servicios educativos de gestión estatal, privada, cooperativa o social;
b) inclusivo: el sistema educativo no discriminará a las personas por ningún motivo, permitiendo cursar sus estudios en todos los niveles educativos;
c) permanente: el derecho a la educación se extiende a lo largo de toda la vida;
d) democrático: el Estado provincial en conjunto con las instituciones educativas aseguran a la comunidad un funcionamiento democrático y participativo, en la producción y distribución del conocimiento, como aporte a la vida democrática de las instituciones y al sostenimiento del estado de derecho;
e) abierto: la educación debe permanecer abierta e interrelacionada con las distintas manifestaciones del arte, la producción, el trabajo, la formación científica, tecnológica y la investigación;
f) laico: la educación pública de gestión estatal es laica. Las instituciones de gestión social o privada podrán incorporar orientaciones religiosas de cultos admitidos en

el Registro Nacional de Cultos. Los estudiantes y docentes no serán obligados a profesarla;

g) integrado: con identidad local, regional, nacional y latinoamericana, y del mundo;
h) articulado: horizontal y verticalmente; e
i) las instituciones educativas de gestión, estatal, social o privada, implementarán las políticas educativas y curriculares fijadas por la autoridad educativa nacional y/o provincial. Los contenidos curriculares podrán ser ampliados por las instituciones y la comunidad educativa.

Artículo 7°.- Son responsables de las acciones educativas el Estado nacional y el Estado provincial, en los términos fijados en el artículo 4º de la Ley de Educación nacional 26206.

Bajo la supervisión del Estado provincial son corresponsables las confesiones religiosas reconocidas oficialmente, las organizaciones de la sociedad y la familia como agente natural y primario.

Los municipios serán corresponsables por la prestación de determinados servicios educativos que el Estado provincial convenga con los mismos.

Artículo 8º.- El Estado provincial, en forma concertada y concurrente con el Estado nacional, financia, planifica, organiza y supervisa el sistema educativo provincial, garantizando el acceso a la educación en todos sus niveles, modalidades y especialidades, mediante la creación, regulación, financiamiento y administración de las instituciones....".

Sr. PRESIDENTE.— Disculpe, secretaria.

Bajen el volumen de conversación en la Sala y respetemos a la secretaria, que está dando lectura al asunto.

Adelante, secretaria.

Sec. LEGISLATIVA.— "... y supervisar a las instituciones educativas públicas de gestión privada en un todo de acuerdo con lo establecido en el artículo 58 de la Constitución Provincial.

Artículo 9º.- El financiamiento del sistema educativo provincial se integra con los recursos prescriptos en el presupuesto general de la provincia, conforme a las previsiones de la presente y las metas establecidas en la Ley nacional 26075 y vigentes, pudiendo incorporar, además, otros ingresos.

Artículo 10.- Las confesiones religiosas reconocidas oficialmente y las organizaciones de la sociedad civil podrán ejecutar acciones educativas bajo supervisión de la provincia, de manera complementaria con la educación pública, según la Ley provincial 749.

Artículo 11.- El Estado provincial propicia el establecimiento de acuerdos, convenios e intercambios con otros países, de acuerdo a los tratados internacionales vigentes, referidos a derechos e intercambios educativos; y favorecerá intercambios interprovinciales o intraprovinciales orientados a fortalecer procesos de capacitación fundamentados en el respeto a la diversidad y valoración de la interculturalidad.

Capítulo IV
Fines y Objetivos de la Política Educativa Provincial

Artículo 12.- El Estado provincial fija la política educativa, considerando al educando y a la sociedad como sujetos destinatarios del derecho a la educación, en concordancia con la política educativa nacional, y controla su cumplimiento con el propósito de consolidar la unidad nacional, respetando las particularidades regionales.

Artículo 13.- Los fines de la educación provincial son:

a) la conformación de una sociedad justa, democrática y solidaria;
b) la formación integral, armoniosa y permanente de la persona; y
c) la participación reflexiva y crítica del educando que le permita elaborar su escala de valores, cumplir con su realización personal, y su inserción en la vida sociocultural y en el mundo laboral.

Artículo 14.- El sistema educativo provincial, de acuerdo con la política educativa, establece los siguientes objetivos:

a) brindar una educación de excelencia, que permita el desarrollo de múltiples dimensiones de la persona, con igualdad de oportunidades, posibilidades y regionalmente equilibrada en toda la provincia, reconociendo y respetando las diferencias, fortaleciendo el principio de inclusión de todos los alumnos;
b) garantizar una educación integral que forme ciudadanos desarrollando todas las dimensiones de la persona incluyendo las abarcadas por el artículo 14 de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño;
c) garantizar el acceso, la permanencia y el egreso en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, asegurando la gratuidad de toda la educación pública de gestión estatal;
d) brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de participación, libertad, paz, solidaridad, igualdad, equidad, justicia, resolución pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, honestidad, como así también con la valoración y preservación del patrimonio natural y cultural;
e) brindar una formación física, motriz y deportiva que favorezca el desarrollo armónico de todos los estudiantes y su inserción activa en la sociedad;
f) propiciar la participación responsable de la comunidad educativa en todos los niveles y modalidades;
g) brindar formación, actualización y capacitación docente, para todos los trabajadores de la educación de los distintos niveles, modalidades y especialidades, propiciando su perfeccionamiento para adecuarla a los desafíos sociales y educativos y a los nuevos desarrollos culturales, científicos y tecnológicos;
h) establecer condiciones y propuestas pedagógicas que les asegure a los estudiantes con discapacidades temporales o permanentes, el desarrollo de sus posibilidades, la inclusión escolar, laboral y social, y el pleno ejercicio de sus derechos;
i) asegurar una educación que favorezca la construcción de un pensamiento crítico para la interpretación de la realidad, su comprensión y la construcción de herramientas para transformarla;
j) fortalecer la cultura del trabajo y el esfuerzo individual y cooperativo, como base fundamental en los procesos de enseñanza y aprendizaje, habilitando al estudiante, a través de pasantías, para el desempeño social y laboral, como para el acceso a estudios superiores;
k) fortalecer la identidad nacional y provincial, estimulando el arraigo y el sentido de pertenencia a la provincia, basada en el respeto a la diversidad cultural, a las particularidades locales y la valoración de las raíces histórico culturales, abierta a valores universales y a la integración regional y latinoamericana;
l) fortalecer la centralidad de la lectura y escritura, como condiciones básicas de la educación a lo largo de toda la vida, la construcción de una ciudadanía responsable y la libre circulación del conocimiento;
m) promover el conocimiento del ambiente natural, social y el respeto por el patrimonio histórico, geográfico y cultural de la región, iniciando a los estudiantes en la preservación de los bienes culturales y la necesidad de la protección del ambiente, en el marco de una educación que se base en la autodeterminación y el compromiso con la defensa de la calidad de vida, y el aprovechamiento sustentable de los recursos no renovables que nos provee la naturaleza;
n) desarrollar las competencias necesarias para el manejo de los nuevos lenguajes producidos por las tecnologías de la información y la comunicación;
o) coordinar las políticas de educación, ciencia y tecnología con las de cultura, salud, trabajo y producción, desarrollo social, deportes y comunicaciones para atender, integralmente, las necesidades de la población aprovechando al máximo los recursos estatales, sociales y comunitarios;

p) promover al cuidado integral de la salud al cuidado integral de la salud de los estudiantes;
q) disponer el acceso libre y gratuito a la información pública de los datos y estadísticas educativas;
r) asegurar una formación que estimule la creatividad y la comprensión de las distintas manifestaciones del arte y la cultura;
s) implementar acciones tendientes a comprometer a los medios masivos de comunicación a asumir mayores grados de responsabilidad ética y social por los contenidos y valores que transmiten;
t) fomentar el conocimiento sociohistórico y geográfico de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y espacios marítimos adyacentes;
u) propiciar el conocimiento sobre el afianzamiento de la presencia argentina en el territorio antártico y las islas del Atlántico Sur;
v) promover el intercambio y comunicación entre la comunidad educativa e investigadores y trabajadores antárticos; y
w) promover gradualmente el conocimiento de las lenguas originarias fueguinas.

Título II
Estructura del Sistema Educativo Provincial

Capítulo I
Organización General

Artículo 15.- El sistema educativo provincial es el conjunto organizado y articulado de instituciones, programas y proyectos educativos, regulados por el Estado provincial, que posibilitan la educación. Lo integran las instituciones educativas de todos los niveles, sean de gestión estatal, privada, cooperativa o social, así como por los servicios de apoyo a la formación, investigación e información de estudiantes, los profesionales de la educación, las instituciones encargadas de la administración, y los servicios que brindan asistencia y orientación a niños, jóvenes, adultos y a la comunidad educativa en general.
Artículo 16.- El sistema educativo provincial tiene una estructura unificada en todo el territorio de la provincia que asegura su ordenamiento y cohesión, la organización y articulación de los niveles, modalidades y especialidades de la educación y la validez nacional de los títulos y certificados que se expiden.
Artículo 17.- La estructura del sistema educativo provincial comprende cuatro niveles y ocho modalidades.
1. Cuatro niveles:
a) educación inicial;
b) educación primaria;
c) educación secundaria; y
d) educación superior.
2. Ocho modalidades educativas generales:
a) educación técnico profesional;
b) educación artística;
c) educación especial;
d) educación permanente de jóvenes y adultos;
e) educación rural;
f) educación multicultural e intercultural bilingüe;
g) educación en contextos de privación de la libertad; y
h) educación domiciliaria y hospitalaria.

Los niveles del sistema educativo provincial se definen como tramos educativos con unidad pedagógica y articulación en ciclos curriculares que corresponden a las características psicosociales propias de distintos momentos de la vida de los seres humanos.”.
Sr. BARRIENTOS.— Pido la palabra.

Señor presidente: Dice: “que responden” no “que corresponden”.
Sec. LEGISLATIVA.— “Que responden” -correcto- legislador, vuelvo a leer el párrafo: “Los niveles del sistema educativo provincial se definen como tramos educativos con unidad pedagógica y articulación en ciclos curriculares que responden a las características psicosociales propias de distintos momentos de la vida de los seres humanos.

La modalidad es un dispositivo organizativo y/o curricular específico de la educación común, dentro de uno o más niveles educativos, que procura dar respuesta a requerimientos específicos de formación y a atender particularidades del sujeto educativo, de carácter permanente o temporal, personal y/o contextual, con el propósito de garantizar la igualdad en el derecho a la educación y cumplir con las exigencias legales, técnicas y pedagógicas de los diferentes niveles educativos.
Sr. BARRIENTOS.— Pido la palabra.

Señor presidente: Es “y pedagógicas”.
Sec. LEGISLATIVA.— “técnicas y pedagógicas de los diferentes niveles educativos”. ¿Está bien, legislador?
Sr. BARRIENTOS.— Sí. Me preocupo por la versión taquigráfica.
Sr. PRESIDENTE.— Está bien, legislador.
Sec. LEGISLATIVA.— “Artículo 18.- Las modalidades enunciadas en el inciso 2 del artículo anterior podrán constituir, en forma permanente o temporaria, ofertas de carreras específicas de formación docente, con su correspondiente diseño curricular. Se podrán crear, conforme a la Ley de Educación nacional 26206, con carácter excepcional y de acuerdo a requerimientos específicos de condición permanente y contextual, modalidades educativas específicas de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Dichas modalidades podrán tener distintas orientaciones según los requerimientos provinciales.
Artículo 19.- El personal responsable del proceso educativo en los niveles, modalidades y especialidades serán docentes con título, conforme lo establezca la normativa vigente de la provincia.”.
Sr. BARRIENTOS.— Perdón, es “en la provincia”.
Sec. LEGISLATIVA.— Bien. ¿Algo más?

“El personal responsable del proceso educativo...”

Moción

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: A efectos de evitar este tipo de inconvenientes, porque la verdad es que los secretarios tienen que leer mucho, yo les solicitaría a las taquígrafas -porque puede haber un error de lectura en “de, en”- que después corroboren con el texto que se está leyendo, así no estamos parando a cada momento. Cualquiera se puede equivocar.
Sr. PRESIDENTE.—En la medida en que sea menor.
Sr. BARRIENTOS.— Por supuesto, yo no pongo en duda que cualquiera se puede equivocar. Yo lo hago por una cuestión de prolijidad, nada más.
Sr. PRESIDENTE.— A consideración, la moción del legislador Blanco.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.
Sec. LEGISLATIVA.— Vuelvo a leer desde el artículo 19: “Artículo 19.- El personal responsable del proceso educativo en los niveles, modalidades y especialidades, serán docentes con título conforme lo establece la normativa vigente en la provincia.
Artículo 20.- El Estado provincial reconoce, autoriza y supervisa el funcionamiento de instituciones educativas de gestión privada, confesionales o no confesionales, de gestión cooperativa y gestión social, según lo establece la Ley provincial 749.
Artículo 21.- Las bibliotecas escolares constituyen una unidad técnica, pedagógica y organizativa destinada a favorecer el acceso a la información, la lectura y el conocimiento de

la comunidad educativa a la que asiste.
Artículo 22.- El Estado provincial garantiza a las bibliotecas escolares la provisión de personal bibliotecario, material bibliotecario, tecnologías actualizadas, conectividad y espacio físico adecuado a la cantidad de matrículas, secciones y características de cada institución.
Artículo 23.- El Ministerio de Educación garantiza la existencia del Gabinete Psicopedagógico y de Asistencia al Escolar (GPAE) como servicio educativo. Abarca el asesoramiento, orientación, prevención y asistencia de problemáticas en las instituciones en los niveles inicial, primario, secundario, y en las modalidades especiales, adultos y domiciliaria, hospitalaria, generando espacios en la comunidad educativa que favorezcan un diálogo abierto, y un pensar y accionar crítico frente a las problemáticas transitorias o permanentes que allí tengan lugar.
Artículo 24.- Son objetivos y funciones del GPAE:

a) promover, orientar y acompañar las trayectorias escolares de los niños y niñas, como así también organizar las asistencias terapéuticas y/o preventivas de la población escolar en los niveles inicial, primario, secundario y en las modalidades especial adulta y domiciliaria, hospitalaria;
b) participar conjuntamente con los equipos directivos y docentes de las unidades educativas de los niveles inicial, primario, secundario y modalidades especial adulta y domiciliaria, hospitalaria; seguimiento y evaluación de estrategias que favorezcan las trayectorias escolares de los niños y niñas, y en función de la atención a la diversidad;
c) promover espacios de trabajos interdisciplinarios en relación a los diferentes procesos de intervención;
d) participar en instancias de trabajo institucional, de reflexión y capacitación sobre las distintas dimensiones del campo institucional;
e) participar conjuntamente con los integrantes del equipo interdisciplinario en el diseño, desarrollo y puesta en práctica de estrategias e instrumentos de investigación inherentes al ámbito escolar e institucional;
f) elaborar e implementar propuestas preventivas a fin de dar respuestas a las diferentes problemáticas detectadas en el ámbito escolar;
g) trabajar en interdisciplinar con profesionales de otras áreas: salud, justicia, desarrollo social y defensoría con el fin de promover el intercambio con los mismos y enriquecer la práctica en las instituciones educativas;
h) brindar las asistencias y orientaciones al alumno, respecto del motivo de consulta, como así también con todos aquellos adultos significativos del mismo;
i) asesorar a la institución educativa en relación a los procesos de aprendizaje y enseñanza presentados a nivel individual y grupal; y
j) participar en la implementación de acciones con el fin de generar las condiciones necesarias para la integración e inclusión de niños con necesidades educativas especiales.

Artículo 25.- En la organización de equipos interdisciplinarios del Gabinete Psicopedagógico y de Asistencia al Escolar se contará con profesionales de las siguientes disciplinas: asistentes educacionales, asistentes sociales, fonoaudiólogos, musicoterapeutas, psicólogos, psicomotricista, psicopedagogos y terapistas ocupacionales.

Capítulo II
Nivel Inicial

Artículo 26.- El primer tramo del sistema educativo provincial se denomina 'nivel inicial', constituye una unidad pedagógica y comprende a todos los niños desde los 45 cinco días hasta los cinco años de edad inclusive; siendo obligatorios los dos últimos años del nivel, definidos como sala de cuatro y cinco años.

El nivel de educación inicial define sus diseños curriculares, articulados con los diferentes niveles y modalidades, conforme lo establece la presente ley.

Artículo 27.- El Estado provincial garantizará la universalidad del nivel inicial a través de dispositivos que respondan a los requerimientos de cada zona y localidad, asegurando su provisión en tanto constituye su responsabilidad indelegable. Asimismo deberá regular el funcionamiento de todas aquellas instituciones educativas que atiendan la primera infancia en el territorio fueguino, priorizando los sectores más desfavorecidos con el objetivo de igualar las oportunidades de acceso y permanencia para el logro de aprendizajes valiosos.

Artículo 28.- La educación inicial tiene por finalidad proporcionar una formación integral, básica y común, que promueva el pensamiento reflexivo de los niños. Son sus objetivos, además de los determinados en el artículo 13 de la presente, los que a continuación se detallan:

a) promover el aprendizaje y desarrollo de los niños como sujetos de derecho, partícipes activos de un proceso de formación integral, en tanto miembros de una familia y una comunidad democrática constitutiva de la república;
b) promover el juego, como valor en sí mismo y como pilar de la didáctica del nivel;
c) como contenido de alto valor cultural para el desarrollo cognitivo, afectivo, ético, estético, motor y social;
d) favorecer el desarrollo progresivo de su identidad, su autonomía personal y su pertenencia a la comunidad local, regional y nacional;
e) promover la solidaridad, la confianza, el cuidado, la amistad y el respeto a sí mismo y a los otros;
f) ofrecer oportunidades para el aprendizaje significativo, a través del conocimiento del ambiente natural, social y del contacto con diversas producciones culturales;
g) desarrollar la capacidad creativa y el placer por el conocimiento en las experiencias de aprendizaje;
h) desarrollar la capacidad de expresión y comunicación a través de los distintos lenguajes, verbales y no verbales, como el movimiento, la música, la expresión artística y la literatura, entre otros;
i) favorecer la formación corporal y motriz a través de la educación física;
j) propiciar y fortalecer la participación de las familias en el cuidado y la tarea educativa promoviendo la comunicación y el respeto mutuo entre la familia y la institución educativa;
k) atender las desigualdades educativas de origen social y familiar para favorecer una integración plena de todos los niños en el sistema educativo provincial; y
l) contribuir a la detección temprana, prevención, y atender necesidades especiales o dificultades de aprendizaje de los niños, asegurando el desarrollo de sus posibilidades, su integración y el pleno ejercicio de derechos.

Artículo 29.- El nivel inicial se organizará en dos ciclos:

a) jardín maternal, que comprenderá a todos los niños y niñas desde los 45 días a los dos años de edad inclusive; y
b) jardín de infantes, para los niños desde los tres a los cinco años, siendo obligatorios los dos últimos años, conforme a lo establecido en el artículo 21 de la presente ley.

Artículo 30.- Las certificaciones de cumplimiento de la educación inicial obligatoria, en cualquiera de las formas organizativas reconocidas y supervisadas por las autoridades educativas, tienen plena validez para la inscripción en la educación primaria.

Artículo 31.- Las actividades pedagógicas realizadas en el nivel de educación inicial en cualquiera de sus instituciones, jardines maternales, jardines de infantes u otras modalidades, serán supervisadas por las autoridades educativas del Ministerio de Educación y estarán a cargo de personal docente titulado con validez provincial y nacional.

La reglamentación de esta ley deberá establecer los requisitos de títulos docentes para el personal que lleve a cabo estas tareas en los jardines maternales.

Artículo 32.- El Ministerio de Educación desarrollará estrategias organizativas de gestión y de capacitación docente, orientadas a favorecer la articulación entre el nivel inicial y la educación

primaria, a fin de lograr coherencia en el modelo pedagógico-didáctico y continuidad en el itinerario escolar de los alumnos.

Capítulo III
Nivel Primario

Artículo 33.- El segundo tramo del sistema educativo provincial se denomina nivel primario y constituye una unidad pedagógica y organizativa obligatoria, de seis años de duración, destinada a la formación de los niños y niñas a partir de los seis años de edad.

Artículo 34.- La educación primaria tiene por finalidad proporcionar una formación integral, básica y común que promueva el pensamiento reflexivo de los estudiantes. Son sus objetivos, además de los determinados en el artículo 13 de la presente, los siguientes:

a) garantizar a todos los niños y niñas, como sujetos de derecho, partícipes activos de un proceso de formación integral, el acceso a un conjunto de saberes comunes que les permita participar de manera plena y acorde a su edad en la vida familiar y escolar, desarrollando y socializando la cultura de la comunidad de pertenencia, respetando la diversidad;
b) ofrecer las condiciones necesarias para el desarrollo integral de la infancia en todas sus dimensiones, desde su función específica y en articulación con otros organismos del Estado;
c) brindar oportunidades equitativas a todos los niños y niñas para el aprendizaje de saberes educativos en diversos campos del conocimiento, en especial la lengua, la comunicación, la tecnología, las ciencias sociales, la matemática, las ciencias naturales, el medio ambiente, las lenguas extranjeras, el arte, la cultura, y la capacidad de aplicarlos en situaciones de la vida cotidiana;
d) contribuir a la detección temprana, prevención, atendiendo necesidades especiales y dificultades de aprendizaje de los niños y niñas, asegurando el desarrollo de sus posibilidades, la integración y el pleno ejercicio de sus derechos;
e) acceder a los conocimientos y procedimientos científicos, desarrollando las capacidades de investigación, análisis reflexivo y crítico de la realidad, potenciando la creatividad;
f) garantizar las condiciones pedagógicas necesarias para la incorporación al proceso de enseñanza-aprendizaje de tecnologías de la información y la comunicación;
g) brindar formación ética para el ejercicio de una ciudadanía responsable que permita construir los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común;
h) promover el desarrollo de una actitud de esfuerzo, trabajo, responsabilidad en el estudio y de curiosidad e interés por el aprendizaje, fortaleciendo la confianza en las posibilidades personales de aprender.

Artículo 35.- Las escuelas primarias deberán adecuarse progresivamente a lo establecido en el artículo 28 de la Ley nacional 26206, implementando la jornada completa o extendida para mejorar las condiciones de equidad y calidad educativa.

En el proceso de su gradual implementación se atenderá la revisión y recreación de las condiciones que favorezcan los procesos educativos, dando prioridad a las escuelas a las que asisten los sectores más desfavorecidos.

Artículo 36.- El Ministerio de Educación desarrollará las estrategias, planificará los modelos de organización y de gestión más adecuados para garantizar que todos los niños y niñas logren los aprendizajes establecidos para la educación primaria, tengan igualdad de oportunidades en el acceso y la permanencia en este nivel educativo.

Capítulo IV
Nivel Secundario

Artículo 37.- El tercer tramo del sistema educativo provincial se denomina nivel secundario, constituye una unidad pedagógica, organizativa y obligatoria, destinada a la formación de adolescentes y jóvenes que acrediten el cumplimiento del nivel primario.

El nivel secundario tiene una duración de seis años, con excepción de la modalidad técnico profesional que tiene una duración de siete años.

Artículo 38.- El nivel secundario está constituido por dos ciclos:

a) ciclo básico común: de tres años de duración, de carácter común a todas las orientaciones; y
b) ciclo superior orientado: de carácter diversificado según distintas áreas del conocimiento, del mundo social y del trabajo con una duración de tres años. Para las ofertas de las modalidades de educación técnico profesional, cuyos planes de estudio así lo requieran, el ciclo superior orientado tendrá una duración de cuatro años.

Sr. RODRÍGUEZ.— Pido la palabra.

Señor presidente: Hubo un error. Tiene que terminar de leer el artículo 34 desde el inciso i).

Sec. LEGISLATIVA.— Sí, sí, ya lo evaluamos.

"Inciso: i) desarrollar la iniciativa individual, el trabajo en equipo y los hábitos de convivencia solidaria y cooperación;

j) fomentar el desarrollo de la creatividad, la expresión, la comprensión, el conocimiento y valoración de las distintas manifestaciones del arte y la cultura;
k) favorecer el desarrollo de los conocimientos y procesos cognitivos necesarios para continuar los estudios en la educación secundaria;
l) brindar oportunidades para una educación física que promueva la formación corporal y motriz, que consolide el desarrollo armónico de todos los niños y niñas; y
m) valorar y respetar la diversidad cultural, la perspectiva de género, sociabilizando el conocimiento, la valoración de la pluralidad del patrimonio sociocultural de su comunidad así como aspectos socioculturales de otros pueblos y naciones, no admitiendo ningún tipo de discriminación;
n) promover una educación que posibilite el desarrollo de la conciencia ambiental en pos de comprometerse con la calidad de vida, contribuyendo activamente al cuidado, preservación y mejoramiento del patrimonio natural y cultural;
o) promover hábitos del cuidado del propio cuerpo, la promoción de la salud en general, y la salud sexual integral en particular;
p) promover el juego como actividad necesaria para el desarrollo cognitivo, afectivo, ético, estético, motor y social;
q) promover la implementación de un currículum abierto, flexible e inclusivo que comprenda a todos los estudiantes que asisten al nivel primario, atendiendo sus necesidades educativas y respetando sus derechos;
r) promover la creación de programas y/o proyectos educativos extracurriculares para el conjunto de niños;
s) favorecer la equidad, brindando asistencia y orientación a los estudiantes que lo requieran y a la comunidad educativa;
t) fortalecer las condiciones para el desarrollo de competencias lingüísticas, expresión oral, lectura y escritura como prioritarias para el desarrollo del conocimiento; y
u) promover la participación de la familia en el proceso educativo de sus hijos.

Capítulo IV
Nivel Secundario

Artículo 35.- El tercer tramo del sistema educativo provincial se denomina 'nivel secundario', constituye una unidad pedagógica, organizativa y obligatoria, destinada a la formación de adolescentes y jóvenes que acrediten el cumplimiento del nivel primario.

El nivel secundario tiene una duración de seis años, con excepción de la modalidad técnico profesional que tiene una duración de siete años.

Artículo 38.- El nivel secundario está constituido por dos ciclos:

a) ciclo básico común, de tres años de duración, de carácter común a todas las orientaciones; y
b) ciclo superior orientado, de carácter diversificado según distintas áreas del conocimiento, del mundo social y del trabajo con una duración de tres años. Para las ofertas de las modalidades de educación técnico profesional, cuyos planes de estudio así lo requieran, el ciclo superior orientado tendrá una duración de cuatro años.

Artículo 39.- La orientación o especialidad es un área del aprendizaje, formada por el conjunto de disciplinas con sus contenidos que permiten una especialización del conocimiento o una opción de formación para el campo laboral.

Artículo 40.- La educación secundaria, en todas sus modalidades y orientaciones, tiene como finalidad la formación integral del sujeto como ser reflexivo, autónomo para el trabajo y para la prosecución de estudios superiores. Siendo sus objetivos, además de los determinados en el artículo 13 de la presente, son los siguientes:

a) formar personas pluralistas, democráticas, responsables, reflexivas y críticas, capacitadas para ejercer sus derechos y deberes de habitantes o ciudadanos, partícipes activos de un proceso de formación integral, utilizando el conocimiento como una herramienta idónea para transformar la realidad en sus distintas dimensiones, preparadas para situarse en un mundo en permanente transformación, con respeto, cuidado por sí mismo y por el otro;
b) brindar una formación ética que permita a los estudiantes desempeñarse como sujetos conscientes de sus derechos y obligaciones, que practiquen la cooperación, la solidaridad, respeten los derechos humanos, y que rechacen todo tipo de discriminación, y preserven el patrimonio natural y cultural;
c) favorecer la autonomía, la iniciativa, como así también potenciar las propias aptitudes y capacidades;
d) desarrollar y consolidar en cada estudiante las capacidades de estudio, aprendizaje e investigación; de trabajo individual y en equipo; de esfuerzo, iniciativa, responsabilidad, como condiciones necesarias para el acceso al mundo laboral, los estudios superiores y la educación a lo largo de toda la vida;
e) actualizar los conocimientos acordes a la evolución sistemática global y gradual, utilizando las herramientas apropiadas para formar egresados que acrediten conocimientos actualizados y reforzados;
f) promover el desarrollo de las competencias necesarias para la vinculación e incorporación de los estudiantes y egresados al mundo del trabajo, la producción, la ciencia y la tecnología;
g) comunicar de un modo sistemático, significativo y crítico el patrimonio cultural de la Nación y de la humanidad, posibilitando la apropiación y resignificación personal y comunitaria por parte de los estudiantes;
h) promover el desarrollo de las competencias lingüísticas, orales y escritas de la lengua española y, comprender, como así también expresarse en una lengua extranjera;
i) estimular la creación artística, la libre expresión y la comprensión de las distintas manifestaciones de la cultura;
j) generar e implementar proyectos que contemplen la educación sexual integral;

k) promover la formación corporal y motriz, a través de una educación física acorde con los requerimientos del proceso de desarrollo integral de los adolescentes;
l) promover la creación o fortalecer los espacios, proyectos extracurriculares, experiencias complementarias o innovadoras para el conjunto de estudiantes y jóvenes de la comunidad;
m) garantizar el ejercicio de la ciudadanía y la gestión democrática de las instituciones del nivel, mediante la participación de los estudiantes en la conformación de organizaciones propias y autónomas;
n) concebir y fortalecer en las instituciones educativas, la cultura del trabajo, de los saberes socialmente productivos, individuales, colectivos y cooperativos, vinculándolos, a través de una inclusión crítica y transformadora de los adolescentes y jóvenes, a los espacios productivos, brindando conocimientos generales y específicos para su formación a través de propuestas de las que surjan de las distintas modalidades y orientaciones o especialidades;
o) promover la realización de prácticas laborales para lograr la inserción de los estudiantes en el mundo social y laboral;
p) proporcionar alfabetización científica y tecnológica pertinente, desarrollar la capacidad de respuestas sociales y éticas ante los cambios en la ciencia, la técnica, el sistema productivo y el mundo laboral. Trabajar en pos de preservar el ambiente, la biodiversidad y la calidad de vida desarrollando sistemas de uso, consumo, producción de bienes y servicios socialmente sustentables, en especial, el desarrollo de actividades cooperativas;
q) propiciar en el marco del proyecto educativo institucional el intercambio de estudiantes de diferentes ámbitos y contextos, la organización de actividades de voluntariado juvenil y proyectos educativos solidarios con el fin de cooperar en el desarrollo comunitario;
r) crear programas o proyectos educativos curriculares o extracurriculares a fin de introducir saberes relacionados a la prevención y uso indebido de drogas, desarrollando en los estudiantes la capacidad para la toma de decisiones saludables como medio para mejorar su proyecto de vida;
s) favorecer la equidad brindando asistencia y orientación a los estudiantes que lo requieran y a la comunidad educativa;
t) promover el acceso al conocimiento como saber integrado, a través de distintas áreas y si quieren que los constituyan a sus principales problemas, contenidos y métodos;
u) desarrollar procesos de orientación vocacional a fin de permitir una adecuada elección profesional y ocupacional de los estudiantes de manera articulada con las instituciones educativas del nivel superior;
v) promover la participación de la familia en el proceso educativo de sus hijos;
w) incluir contenidos que posibiliten el desarrollo de la conciencia ambiental en pos de comprometerse con la calidad de vida, contribuyendo activamente al cuidado, preservación y mejoramiento del patrimonio natural y cultural; y
x) promover estrategias pedagógicas que aseguren a todos los estudiantes con discapacidades temporales o permanentes, el desarrollo de sus posibilidades, la integración social y el pleno ejercicio de sus derechos.

Artículo 41.- Las cargas horarias se definen según los requerimientos de formación específica para cada orientación, siendo la carga horaria mínima de 25 horas reloj de clases semanales.

Artículo 42.- El nivel secundario tendrá diferentes modalidades, orientaciones o especialidades para formar egresados que acrediten conocimientos óptimos en las diversas áreas del campo técnico profesional, humanístico, económico, agropecuario, deportivo, científico, artístico y otros.

Artículo 43.- Las ofertas de educación secundaria pueden articularse con ofertas de formación profesional brindadas por instituciones acreditadas en el Registro Federal de Instituciones de Educación Técnico Profesional.

Artículo 44.- En relación a la educación secundaria, el Ministerio de Educación:

a) promueve, reglamenta y supervisa regímenes de prácticas y pasantías laborales de carácter educativo para alumnos secundarios mayores de 16 años, que permitan una aproximación al mundo del trabajo y de la producción;
b) implementa acciones de articulación entre la educación secundaria y la educación superior a fin de preparar a los estudiantes para su inserción y permanencia en el nivel superior; y
c) propicia espacios de integración entre los diversos ámbitos del Estado provincial y organizaciones de la sociedad para la colaboración en el diseño de una agenda integral para la juventud.

Capítulo V
Educación Superior

Artículo 45.- El nivel de educación superior provincial comprende el conjunto de instituciones y carreras especialmente diseñadas para la continuación de estudios posteriores a la educación secundaria o de especialización del nivel.

Está conformado por institutos de educación superior de gestión estatal y gestión privada, según sean institutos técnicos superiores o institutos de formación docente, y por las universidades e institutos universitarios, estatales o privados, de jurisdicción provincial. El nivel de educación superior tendrá una estructura organizativa abierta, permeable a la creación de espacios y modalidades con el fin de responder a los compromisos sociales, económicos y políticos de la provincia, en concordancia con lo establecido en la Ley nacional de Educación Superior 24521 y la Ley nacional de Educación Técnico Profesional 26058.

Artículo 46.- El Ministerio de Educación como autoridad de aplicación de la presente ley y, en lo que respecta a los institutos de educación superior, tiene competencia para:

a) el gobierno y organización de la educación superior;
b) debe establecer jurisdiccionalmente las condiciones administrativas e institucionales para el acceso a la carrera docente y para el acceso a los estudios en el nivel;
c) asumir la planificación y evaluación de carreras y postítulos; y
d) evalúa la oferta de educación superior atendiendo a la adecuación, apertura o cierre de las carreras existentes, de acuerdo a las nuevas demandas educativas y sociales derivadas del mundo del trabajo, de la producción, del desarrollo y del crecimiento socioeconómico de la provincia, de la región y del país.

Artículo 47.- Son finalidades de la educación superior provincial:

a) la formación de docentes, profesionales e investigadores para todos los niveles, modalidades y orientaciones del sistema educativo provincial;
b) la formación de profesionales y técnicos, orientados al desarrollo académico, científico, tecnológico, artístico, cultural, de la producción, el trabajo y el campo, relacionados con el desarrollo sustentable;
c) diseñar e implementar programas permanentes de capacitación, perfeccionamiento, la actualización técnico-científica y pedagógica para graduados;
d) la investigación, la producción de conocimiento científico, tecnológico, humanístico y artístico, en relación con los requerimientos, los saberes sociales y culturales existentes; en concordancia con el desarrollo sustentable de la provincia, los procesos de desarrollo e integración regional; y
e) la generación de proyectos educativos que propicien la realización de pasantías, talleres, laboratorios, aulas itinerantes y otras modalidades pedagógicas y/o productivas que contribuyan al desarrollo de prácticas profesionales de alumnos y docentes.

Artículo 48.- Son objetivos, además de los determinados en el artículo 13 de la presente, los siguientes:

a) propiciar la formación de una persona pluralista, democrática, responsable, productiva, creativa y reflexiva, con conciencia ética, solidaria con identidad cultural, capacitada para ejercer sus derechos y deberes de habitante o ciudadana/o; partícipe activa de un proceso de formación integral, en tanto miembro de una familia y una comunidad democrática, constitutiva de la república; produciendo y utilizando el conocimiento como una herramienta idónea para transformar la realidad en sus distintas dimensiones; preparada para situarse en un mundo en permanente transformación; capacitada para mejorar la calidad de vida;
b) jerarquizar y reconceptualizar la formación docente, articulándola con los diferentes niveles, modalidades y orientaciones, como factor central y estratégico del mejoramiento de la calidad de la educación, entendiendo a la misma como un proceso de producción cultural-social y de transmisión y de preservación del capital cultural;
c) impulsar en los campos educativo, artístico, científico, tecnológico y productivo, la investigación y la innovación orientándolas a la resolución de las problemáticas de la sociedad;
d) brindar una adecuada diversificación de las propuestas de la educación superior, que atiendan a las expectativas y necesidades de la población, especialmente a los requerimientos del campo educativo, problemáticas regionales y a las demandas técnico-profesionales;
e) promover una formación continua, adecuada a los nuevos escenarios sociales, económicos, políticos y culturales, a los cambios operados en los sujetos sociales, favoreciendo la identidad patagónica y fueguina como parte de la argentinidad y el latinoamericanismo;
f) garantizar la implementación, en las instituciones de educación superior, de organismos colegiados que integren la participación de la comunidad educativa, ampliando la democratización y autonomía de los mismos en el marco de los lineamientos de la política educativa provincial;
g) coordinar y articular acciones de cooperación y vinculación académica e institucional en los establecimientos e instituciones que conforman el nivel de educación superior, así como en el nivel secundario, tendientes a articular los conocimientos necesarios para el ingreso y permanencia en el nivel superior;
h) valorar y preservar el patrimonio natural y cultural de la Nación y la provincia en sus diversas expresiones, y al sujeto de la historia de hoy que produce cultura y la proyecta a nuevas producciones locales, regionales y nacionales;
i) coordinar y articular acciones de cooperación y vinculación académica e institucional entre todas las instituciones que conforman el nivel, así como con los procesos científicos, tecnológicos, de desarrollo e innovación productiva de la provincia, de la región y del país;
j) favorecer la continuidad y/o la prosecución de estudios a los estudiantes que ingresen al sistema educativo provincial en el nivel, provenientes de instituciones de educación superior de otras jurisdicciones, así como también para quienes deban continuar sus estudios fuera de la provincia; instrumentando modeloscurriculares flexibles y a través de una gestión académica institucional que facilite el reconocimiento de los estudios cursados;
k) promover la educación superior técnico profesional en las áreas sociohumanísticas, agropecuarias, pesqueras, forestal, minera, industrial y de la producción de servicios; y
i) articular la continuidad de estudios en las instituciones universitarias ubicadas en la provincia, promoviendo acuerdos de cooperación que tengan como fin intercambiar prácticas y experiencias profesionales y educativas.

Artículo 49.- El Estado provincial tiene la responsabilidad indelegable de asegurar, financiar, organizar, planificar y evaluar la educación superior pública estatal, como así también de

planificar, supervisar y fiscalizar la educación superior pública de gestión privada, e institutos incorporados a la educación oficial de la provincia que se ajusten a los requisitos de la Ley provincial 749.

Artículo 50.- Podrán ingresar como estudiantes al nivel de educación superior quienes hubieren cumplido con el nivel secundario. La persona mayor de 25 años que no reúna esa condición, puede ingresar a las instituciones del nivel, siempre que demuestre, a través de las evaluaciones establecidas por las normativas provinciales y nacionales vigentes, que tiene preparación y/o experiencia laboral acorde con los estudios que se propone iniciar, así como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente.

Artículo 51.- La articulación entre las instituciones que conforman el nivel de educación superior provincial tiene por fin facilitar a los estudiantes, la transversalidad del mismo, el cambio de modalidad, orientación o carrera, la continuación y/o la prosecución de estudios de grado o posgrado en instituciones universitarias así como la reconversión de los estudios concluidos, de acuerdo a los criterios emanados del Consejo Provincial de Educación, la Ley de Educación Superior, la Ley de Educación nacional 26206 y el Consejo Federal de Educación.

Artículo 52.- Para facilitar la continuidad de los estudios y alcanzar el reconocimiento automático de los mismos, el Ministerio de Educación:

a) promueve la articulación de las carreras afines, estableciendo regímenes flexibles de equivalencia y reconversión;
b) asegura la articulación entre las instituciones de educación superior provinciales mediante el reconocimiento de los estudios parciales o asignaturas de las carreras aprobadas en cualquiera de esas instituciones; y
c) favorece la articulación, mediante convenios, entre instituciones de educación superior y universidades.

Artículo 53.- Los planes de estudio de las carreras y postítulos serán definidos por la autoridad jurisdiccional y diseñados respetando los contenidos básicos que se acuerden en el Consejo Provincial y Federal de Educación. Deberán estar articulados con los diseños provinciales de los distintos niveles, modalidades y orientaciones para los que se habilite en la formación. Las instituciones de educación superior podrán proponer formaciones profesionales con validez provincial.

Artículo 54.- Son principios de la educación técnica superior:

a) promover en las personas el aprendizaje de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes relacionadas con desempeños profesionales y criterios de profesionalidad propios del contexto socioproductivo que permitan conocer la realidad a partir de la reflexión sistemática sobre la práctica y la aplicación sistematizada de la teoría;
b) desarrollar oportunidades de formación específica propia de la profesión u ocupación abordada y prácticas profesionalizantes dentro del campo ocupacional elegido; y
c) favorecer niveles crecientes de equidad, calidad, eficiencia y efectividad de la educación.

Artículo 55.- Los institutos técnicos superiores tendrán como finalidad principal la formación de técnicos y profesionales en las áreas sociales, técnicas, profesionales, humanísticas y artísticas, entre otros campos del conocimiento, que habiliten para el desempeño laboral, además de los definidos en el artículo 43 de la presente, tienen por funciones y objetivos:

a) brindar formación inicial como proceso sistemático que posibilita el desarrollo de competencias que habilitan para el ejercicio profesional;
b) ofrecer capacitación, perfeccionamiento y actualización continua que genera nuevas competencias requeridas por el avance tecnológico y las transformaciones del sector productivo y de la sociedad, incluyendo certificaciones y postítulos como instancias de formación posterior al título de base que podrán articularse con ofertas universitarias;
c) promover la investigación y el desarrollo orientados a brindar asistencia técnica,

investigación aplicada, producción de bienes y prestación de servicios a empresas, organizaciones e instituciones públicas y privadas;

d) acreditar las carreras y/o ciclos de formación realizados para la prosecución de estudios y actualización permanente en otros ciclos, instituciones y niveles;
e) estructurar los estudios sobre la base de una organización curricular flexible, que facilite a sus egresados una salida laboral; y
f) adecuar los estudios a los perfiles profesionales requeridos, tanto como las estructuras curriculares, los parámetros de excelencia y los títulos a los criterios que se acuerden en el Consejo Federal de Educación y en el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, en concordancia con la Ley de Educación Técnico Profesional 26058.

Artículo 56.- Son principios de la formación docente:

a) el carácter público, gratuito, inclusivo y permanente, de los institutos de formación docente de gestión estatal;
b) la centralidad ética y política del conocimiento como un bien público y como instrumento para comprender y transformar la realidad;
c) el compromiso con la escuela pública, popular y democrática, con sentido nacional y latinoamericano;
d) el sentido histórico político del hecho educativo y el compromiso con los intereses de las mayorías populares;
e) el reconocimiento del trabajo docente como productor de conocimiento pedagógico; y transformador del capital cultural provincial, nacional y latinoamericano; y
f) el compromiso con la democratización de la enseñanza, la cultura y el patrimonio cultural tangible e intangible de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Artículo 57.- Los institutos de formación docente tienen como funciones:

a) promover la formación docente basada en la autonomía profesional;
b) formar docentes capaces de enseñar, generar y trasmitir conocimientos y valores mediante una pedagogía para la formación integral de las personas que favorezca el desarrollo sustentable nacional, provincial y el bien común de la sociedad;
c) vincular la cultura en sus diversas expresiones, el discernimiento de las características de la sociedad contemporánea y el conocimiento actualizado de las ciencias y los saberes en general;
d) perfeccionar en forma continua a los docentes y generar la responsabilidad en el ejercicio de su tarea y trabajo colaborativo;
e) tender a una organización institucional y curricular participativa y dinámica;
f) organizar el trabajo docente estructurado con una carga horaria para los procesos de enseñanza y aprendizaje, carga horaria específica para investigación, formación permanente y proyectos de articulación con organizaciones sociales;
g) otorgar los títulos para el ejercicio de la docencia en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo y las certificaciones de conformidad con la reglamentación vigente; y
h) desarrollar las funciones de formación continua y de fortalecimiento del sistema educativo provincial que le sean asignadas en función de la política educativa provincial y las políticas públicas nacionales, concertadas federalmente por el Instituto Nacional de Formación Docente y el Consejo Federal de Educación.

Artículo 58.- Las carreras de formación docente tendrán una duración no inferior a cuatro años y se organizan en torno a tres campos, establecidos por el Consejo Federal de Educación y el Instituto Nacional de Formación Docente:

a) formación general: centrada en la educación humanística, los fundamentos de la profesión docente, la identidad cultural, y el conocimiento y reflexión de la realidad educativa nacional y provincial;
b) formación específica: centrada en las disciplinas específicas para la enseñanza de

la orientación en la que se forma y las características de los estudiantes del nivel o modalidad para la que se forma; y

c) formación en la práctica profesional: orientada al aprendizaje de las capacidades para la actuación docente en las instituciones educativas y en las aulas, e integrada con conocimientos de los otros dos campos, con énfasis en los contenidos de la formación específica.

Título III
Modalidades Educativas Generales

Capítulo I
Educación Técnico Profesional

Artículo 59.- La educación técnico profesional es la modalidad de los niveles secundario y superior responsable de la formación de técnicos secundarios y técnicos superiores en áreas ocupacionales específicas y de la formación profesional. La educación técnico profesional se rige por los principios, fines y objetivos de la presente, en concordancia con las disposiciones del Consejo Nacional de Educación, de la Ley de Educación nacional 26206 y la Ley nacional de Educación Técnico Profesional 26058.

Artículo 60.- La educación técnico profesional es una necesidad social y brindará formación continua en las áreas específicas, teniendo en cuenta, en la definición de sus propuestas formativas, las necesidades del mundo del trabajo, la producción, la continuidad de estudios superiores y la planificación provincial y regional para el desarrollo humano.

Artículo 61.- La educación técnico profesional es el proceso educativo sistemático que comprende la formación científica y tecnológica, relacionada con las actividades productivas que se realizan o se realicen en el ámbito provincial, propiciando el desarrollo sustentable y las capacidades orientadas al fortalecimiento ético ciudadano en su contexto sociocultural. Sus objetivos y funciones, conforme a lo establecido en el artículo 13 de la presente, son:

a) aportar propuestas curriculares para la formación de técnicos secundarios y superiores y de cursos de formación profesional en las áreas a determinar, de acuerdo con las necesidades y potencialidades del contexto provincial, regional y nacional, en el marco del proceso de desarrollo sustentable;
b) formular proyectos de mejoramiento y fortalecimiento de las instituciones y los programas de educación técnico profesional en el marco de políticas nacionales y de particularidades y diversidades de la política provincial;
c) plantear articulaciones de las instituciones y los programas de educación secundaria y educación superior, con aquellos ámbitos de la ciencia, la tecnología, la producción y el trabajo que puedan aportar recursos materiales y simbólicos, para el completo desarrollo de la educación técnico profesional, especialmente la relacionada a las áreas industriales, nuevas tecnologías y de servicios, a través de mecanismos que garanticen el carácter pedagógico y formador de prácticas vinculadas al mundo del trabajo;
d) contribuir a la formación integral de los alumnos, cerrando la brecha en la desigualdad profesional científica técnica de los egresados del nivel secundario y favorecer la equidad, excelencia, eficiencia y efectividad de la educación técnica profesional, como estrategia de inclusión social, de desarrollo y crecimiento socioeconómico de la provincia;
e) recuperar y desarrollar propuestas pedagógicas, organizativas y de investigación en el campo social, que formen técnicos con capacidades para promover emprendimientos asociativos y/o cooperativos, sobre la base de producciones familiares, el cuidado del ambiente y la diversificación en términos de producción y consumo; y
f) fortalecer la educación técnica y la formación profesional, impulsando su modernización y vinculación pedagógica con el trabajo y la producción sustentable.

Artículo 62.- La educación técnico profesional en la educación secundaria tendrá una duración de siete años, organizada en dos ciclos:

a. ciclo básico: de tres años de duración que preservará un núcleo principal de carácter común a todas las modalidades y orientaciones que adopte la educación secundaria; y
b. ciclo orientado: de cuatro años, que abordará la formación técnica específica y las prácticas profesionales.

Se podrán implementar distintas especialidades propiciando la vinculación con el mundo del trabajo y la producción, según los requerimientos locales, provinciales o regionales, conforme a la Ley de Educación nacional 26206, la Ley nacional de Educación Técnico Profesional 26058.”.

- Ocupa la Presidencia, el vicepresidente 1º, Juan Felipe Rodríguez.

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Pido, por favor, a aquellos a quienes no les interesa escuchar lo que está leyendo la secretaria, que se retiren, porque -la verdad- que lea para el Diario de Sesiones y no poder prestar atención, no tiene sentido. Para eso que no se lea más y que vote el que quiera votar.

O escuchamos, o... si no se está leyendo para el Diario de Sesiones.

Sean respetuosos, por lo menos con a quienes nos interesa escuchar.

Sr. PRESIDENTE.— Hacemos silencio, por favor. Continúe con la lectura.

Sec. LEGISLATIVA.— Gracias.

“Capítulo II
Educación Artística

Artículo 63.- La educación artística comprende:

a) la formación en distintos lenguajes y disciplinas del arte, para niñas, niños, jóvenes y adultos en todos los niveles y modalidades la que será curricular y obligatoria;
b) la especialidad orientada a la formación específica de nivel secundario para los estudiantes que opten por seguirla; y
c) la formación artística impartida en los institutos de educación superior, que comprende los profesorados en los diversos lenguajes artísticos para los distintos niveles de enseñanza y carreras artísticas específicas.

Artículo 64.- Sus objetivos, conforme a lo establecido en el artículo 13 de la presente, son:

a) aportar propuestas curriculares y formular proyectos de fortalecimiento institucional para una educación artística integral de calidad articulada con todos los niveles de enseñanza para todas y todos los estudiantes del sistema educativo provincial;
b) propiciar articulaciones de los proyectos educativos institucionales y los programas de formación específica y técnico profesional en arte, de todos los niveles educativos, con ámbitos de la ciencia, la cultura y la tecnología a fin de favorecer la producción de bienes materiales y simbólicos, garantizando el carácter pedagógico y formador de las prácticas vinculadas al mundo del trabajo;
c) valorar la formación docente artística como una herramienta para el mejoramiento de la calidad de la educación;
d) propiciar la interacción de la modalidad con el Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas(CEAPI), en cuanto al rol que el arte tiene en la cosmovisión y la expresión creativa de las culturas ancestrales; y
e) favorecer la difusión de las producciones artísticas y culturales enfatizando en la importancia del patrimonio intangible y de los bienes culturales, históricos y contemporáneos, estimulando su reelaboración y transformación.

Artículo 65.- El Ministerio de Educación garantizará una educación artística de calidad para todas y todos los estudiantes del sistema educativo provincial que fomente y desarrolle la

sensibilidad y la capacidad creativa de cada persona en un marco de valoración y protección del patrimonio natural y cultural, material y simbólico de las diversas comunidades que integran la provincia.
Artículo 66.- Todas y todos los estudiantes, en el transcurso de su escolaridad obligatoria, tendrán las oportunidades de desarrollar su sensibilidad y su capacidad creativa, al menos, en dos disciplinas artísticas.

En la educación secundaria, la modalidad artística ofrecerá una formación específica en música, danza, artes visuales, artes audiovisuales, plástica, teatro y otras que pudieran conformarse, admitiendo, en cada caso, diferentes especializaciones. La formación específica brindada en las instituciones educativas especializadas en artes podrá continuarse en instituciones de nivel superior de la misma modalidad.
Artículo 67.- La educación artística en la educación secundaria tendrá una duración de siete años...".
Sr. PRESIDENTE.— ¡Hacemos silencio, por favor!
Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Presidente: No tiene sentido que siga leyendo si no tienen ganas de escuchar. Seamos respetuosos con la gente interesada y que está trabajando en esto. Al que no le interesa que se vaya.
Sr. PRESIDENTE.— Les pido que guardemos silencio.
Sec. LEGISLATIVA.— "Artículo 67.- La educación artística en la educación secundaria tendrá una duración de seis años, organizada en dos ciclos, a saber:

a) ciclo básico: de tres años de duración, que preservará un núcleo principal de carácter común a todas las modalidades y orientaciones que adopte la educación secundaria; y
b) ciclo orientado: de cuatro años de duración, que abordará la formación artística específica.

Capítulo III
Educación Especial

Artículo 68.- La educación especial es la modalidad destinada a asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidades, temporales o permanentes en todo el sistema educativo provincial. La educación especial se rige por los principios de inclusión educativa e integración de alumnos con necesidades educativas derivadas de la discapacidad, que no pueden ser abordadas por la educación común. Se entiende a la discapacidad como el resultante entre la deficiencia de la persona y su interacción con el entorno.

El Ministerio de Educación garantiza la integración de los estudiantes con discapacidades en todos los niveles, modalidades y especialidades, según las posibilidades de cada persona.
Artículo 69.- Sus objetivos y funciones, conforme a lo establecido en el artículo 13 de la presente, son:

a) generar propuestas pedagógicas flexibles, para una educación especial que garantice los derechos de igualdad, inclusión, calidad y justicia social de todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidades, temporales o permanentes, que componen la comunidad educativa;
b) favorecer el desarrollo, constitución física y psíquica en forma integral;

- Ocupa la Presidencia el vicegobernador Roberto Luis Crocianelli.

c) promover una formación que permita a los estudiantes su inserción laboral, académica y social, garantizando la acreditación y certificación, según el caso que corresponda, de los saberes construidos en los trayectos educativos y de formación laboral;
d) generar acciones educativas que faciliten la inclusión de personas con

discapacidades temporales o permanentes y necesidades especiales a la educación común, cuando las evaluaciones de los equipos intervinientes de las instituciones reconocidas por el Ministerio de Educación así lo recomienden, manteniendo la educación especial como complementaria cuando la inclusión no pueda ser total;

e) formular proyectos de mejoramiento y fortalecimiento de las instituciones y los programas, articulándolos organizativamente con las respectivas supervisiones de nivel, en el marco de políticas provinciales y estrategias que integren las particularidades y diversidades de la provincia, sus habitantes y sus culturas;
f) desarrollar la atención educativa de las personas jóvenes y adultas con discapacidades temporales o permanentes, físicas o psíquicas, y necesidades educativas especiales de manera conjunta con el resto de las modalidades; y
g) promover articulaciones de las instituciones y los programas de formación específica de todos los niveles educativos con aquellos ámbitos de la ciencia, la tecnología, la producción y el trabajo que puedan aportar recursos materiales y simbólicos para el completo desarrollo de la educación especial a través de mecanismos que garanticen el carácter pedagógico y formador de toda práctica.

Artículo 70.- El Ministerio de Educación asegurará una supervisión o dirección propia de la modalidad especial, que atienda a todos los niveles del sistema educativo, con el fin de garantizar la transversalidad en todos los niveles y modalidades.

Artículo 71.- El Ministerio de Educación, en forma conjunta con los organismos pertinentes, en el marco de la Ley nacional 26061, la Ley provincial 521, y/u otras normas que las reemplacen, establecerá los procedimientos y recursos correspondientes para identificar tempranamente las necesidades educativas derivadas de la discapacidad o de trastornos en el desarrollo, con el objeto de brindarles la atención interdisciplinaria y educativa para lograr su inclusión.

Artículo 72.- El Ministerio de Educación, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, creará las instancias institucionales y técnicas necesarias para la orientación de la trayectoria escolar más adecuada de los estudiantes con discapacidades temporales o permanentes, en todos los niveles, modalidades especialidades de la enseñanza obligatoria, así como también las normas que regirán los procesos de evaluación, acreditación y certificación escolar, conforme a las capacidades cognitivas y sociales alcanzadas, de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley. Asimismo, participarán en mecanismos de articulación entre ministerios y otros organismos del Estado provincial que atienden a personas con discapacidades temporales o permanentes, para garantizar un servicio eficiente y de mayor calidad.

Artículo 73.- El Ministerio de Educación en el marco de la Ley nacional 26061, la Ley provincial 48 y la Ley provincial 521, y otras normas que las reemplacen, establece en los respectivos niveles educativos, los procedimientos y recursos correspondientes para asegurar el derecho a la educación, favoreciendo la integración escolar y la inserción social de las personas con discapacidades, temporales o permanentes. Con este propósito se dispondrá:

- *Ocupa la Secretaría Legislativa la señora Marcela V. Scilletta.*

a) la detección y la educación temprana de los niños y niñas con riesgo en su proceso de desarrollo, sea de origen social, emocional y/o biológico, pre- peri- o posnatal;
b) una trayectoria educativa integral que permita el acceso a los saberes tecnológicos, culturales, de educación física y artística;
c) docentes de educación especial que trabajen en equipo con los docentes de la institución común y con equipos del servicio interdisciplinario de todos los niveles;
d) asegurar la cobertura de los servicios educativos especiales, el transporte, los recursos técnicos y materiales necesarios para el desarrollo del currículo escolar;
e) proveer alternativas de continuidad para su formación integral a lo largo de toda la vida, a través de instituciones, escuelas, centros de formación laboral, talleres

protegidos y escuelas de educación integral;
f) garantizar progresivamente la accesibilidad universal de todos los edificios escolares; y
g) la formación docente específica y capacitación gratuita continua en la modalidad.

Artículo 74.- El Ministerio de Educación, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, creará las instancias institucionales y técnicas necesarias para la orientación de la trayectoria escolar más adecuada de los estudiantes con discapacidades temporales o permanentes, en todos los niveles, modalidades, especialidades de la enseñanza obligatoria, así como también las normas que regirán los procesos de evaluación, acreditación y certificación escolar, conforme a las capacidades cognitivas y sociales alcanzadas, de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley.

Capítulo IV
Educación Permanente de Jóvenes y Adultos

Artículo 75.- La Educación Permanente de Jóvenes y Adultos es la modalidad educativa que garantiza la alfabetización y el cumplimiento de la obligatoriedad escolar de quienes no la hayan completado en la edad establecida reglamentariamente, brindando posibilidades de educación a lo largo de toda la vida.

Artículo 76.- El Estado provincial garantizará el avance gradual de disponibilidad de instalaciones edilicias de uso exclusivo para este tipo de modalidad, incluyendo bibliotecas y laboratorios, en un plazo de cuatro años contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 77.- Los programas y las acciones de educación para jóvenes y adultos se articularán, con acciones de otras dependencias del Estado y de organizaciones no gubernamentales; se vincularán con el mundo de la cultura, de la producción, del trabajo, de la ciencia y de la tecnología. El Estado provincial garantiza el acceso a la información y a la orientación sobre las ofertas de educación permanente y las posibilidades de acceso a las mismas.

Artículo 78.- La estructura curricular e institucional de la educación de jóvenes y adultos responderá, conforme a lo establecido en el artículo 13 de la presente, a los siguientes objetivos y criterios:

a) diseñar propuestas curriculares acordes con las características, las aspiraciones y las necesidades de la población destinataria, en relación con el desarrollo local y regional;
b) desarrollar propuestas de alfabetización, de nivel primario y secundario, que permitan la certificación de los niveles educativos, así como la acreditación de saberes adquiridos a través de la experiencia laboral;
c) brindar una formación básica que permita adquirir conocimientos y desarrollar las capacidades de expresión, comunicación, relación interpersonal y de construcción del conocimiento, atendiendo las particularidades socioculturales, laborales, contextuales y personales de la población destinataria;
d) desarrollar propuestas que incentiven para la continuidad de los estudios, a la inserción en el mundo del trabajo, y al mejoramiento de la formación profesional;
e) incorporar en sus enfoques y contenidos básicos la igualdad de género y la diversidad cultural;
f) promover la inclusión de los adultos mayores y de las personas con discapacidades temporales o permanentes, en el caso que el tipo y grado de discapacidad así lo permitan (Ley nacional 24901, artículo 22), a través de recursos profesionales y medios necesarios que permitan un acompañamiento acorde con las características de esta población;
g) implementar sistemas de créditos y equivalencias que permitan y acompañen la movilidad de los estudiantes;
h) desarrollar acciones educativas presenciales, semipresenciales y/o a distancia,

particularmente en zonas rurales o aisladas, asegurando la calidad y la igualdad de sus resultados;

i) promover la participación de docentes y estudiantes en el desarrollo del proyecto educativo, así como la vinculación con la comunidad local y con los sectores laborales o sociales;
j) promover proyectos de mejoramiento y fortalecimiento de las instituciones de jóvenes y adultos, procurando la conformación de redes integradas e integrales de atención a las necesidades educativas;
k) promover el acceso al conocimiento y manejo de nuevas tecnologías;
l) desarrollar la capacidad de participación en la vida social, cultural, política, económica y hacer efectivo su derecho a la ciudadanía democrática; y
m) el Ministerio de Educación dispondrá en forma progresiva de espacios institucionales destinados al cuidado de los hijos y las hijas, durante el horario escolar, de los y las estudiantes de esta modalidad.

Capítulo V
Educación Rural

Artículo 79.- La educación rural es la modalidad del sistema educativo de los niveles de educación inicial, primaria y secundaria destinada a garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria, a través de modelos de organización y de gestión adecuados a las necesidades y particularidades de la población que habita en zonas rurales.

Artículo 80.- Sus objetivos y funciones, conforme a lo establecido en el artículo 13 de la presente, son:

a) garantizar el acceso a los saberes postulados para el conjunto del sistema a través de propuestas pedagógicas flexibles que fortalezcan el vínculo con las identidades culturales y las actividades productivas locales;
b) promover diseños institucionales que permitan a los estudiantes mantener los vínculos con su núcleo familiar y su medio local de pertenencia durante el proceso educativo, coordinados y articulados con el sistema educativo provincial;
c) fortalecer la relación de la escuela con la comunidad rural, realizando un aporte real al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes;
d) favorecer el uso de los sistemas de información, de producción sustentables, de desarrollo de nuevas tecnologías y comunicación en el medio rural; y
e) promover la igualdad de oportunidades y posibilidades asegurando la igualdad de género.

Artículo 81.- Se admiten, en el medio rural, modelos de organización escolar adecuados a cada contexto, tales como agrupamientos de instituciones, salas plurigrados y grupos multiedad, instituciones que abarquen varios niveles en una misma unidad educativa, escuela de alternancia, escuelas itinerantes u otras que garanticen el cumplimiento de la obligatoriedad escolar y la continuidad de los estudios en los diferentes ciclos, niveles y modalidades del sistema educativo provincial, atendiendo asimismo a las necesidades educativas de la población rural.

Artículo 82.- La autoridad de aplicación es responsable de definir las medidas necesarias para que los servicios educativos brindados en las zonas rurales alcancen niveles de calidad equivalentes a los urbanos.

Capítulo VI
Educación Multicultural e Intercultural Bilingüe

Artículo 83.- La educación intercultural bilingüe es la modalidad del sistema educativo de los niveles de educación inicial, primaria y secundaria que garantiza el derecho constitucional de los pueblos originarios, establecido en el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, a recibir una educación que contribuya a preservar y fortalecer sus pautas culturales, su lengua,

su cosmovisión e identidad étnica; a desempeñarse activamente en un mundo multicultural y a mejorar su calidad de vida.

Asimismo, la educación intercultural bilingüe promueve un diálogo mutuamente enriquecedor de conocimientos y valores entre los pueblos indígenas y poblaciones étnica, lingüística y culturalmente diferentes, y propicia el reconocimiento y el respeto hacia tales diferencias.

Artículo 84.- Para favorecer el desarrollo de la educación intercultural bilingüe, el Estado provincial será responsable de:

a) crear mecanismos de participación permanente de los representantes de los pueblos originarios en los órganos responsables de definir y evaluar las estrategias de educación intercultural bilingüe;
b) crear mecanismos de participación e interacción continua con el Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas (CEAPI);
c) garantizar la formación docente específica, inicial y continua, correspondiente a los distintos niveles del sistema educativo;
d) impulsar la investigación sobre la realidad sociocultural y lingüística de los pueblos indígenas, que permita el diseño de propuestas curriculares, materiales educativos pertinentes e instrumentos de gestión pedagógica;
e) promover la generación de instancias institucionales de participación de los pueblos originarios en la planificación y gestión de los procesos de enseñanza y aprendizaje;
f) propiciar la construcción de modelos y prácticas educativas propias de los pueblos originarios que incluyan sus valores, conocimientos, lengua y otros rasgos sociales y culturales; y
g) incentivar la formación de espacios de investigación en educación intercultural con la participación de las universidades nacionales y provinciales, los centros de investigación educativa, los institutos de formación docente y otros organismos y organizaciones interesadas para el diseño de propuestas curriculares, materiales educativos pertinentes e instrumentos de gestión pedagógica.

Artículo 85.- La autoridad de aplicación adoptará las definiciones que se acuerden en el Consejo Federal de Educación, respecto de los contenidos curriculares comunes que promuevan el respeto por la pluriculturalidad e interculturalidad y el conocimiento de las culturas originarias que habitaron el actual territorio nacional y provincial, en todas las instituciones educativas provinciales, permitiendo a los estudiantes valorar y comprender la diversidad cultural como atributo positivo de nuestra sociedad.

Capítulo VII
Educación en Contextos de Privación de la Libertad

Artículo 86.- La educación en contextos de privación de la libertad es la modalidad del sistema educativo provincial, destinado a garantizar el derecho a la educación de todas las personas que se encuentran privadas de la libertad para promover su desarrollo y formación integral. El ejercicio de este derecho no admite limitación alguna vinculada a la situación de encierro, y será puesto en conocimiento de todas las personas privadas de libertad, en forma fehaciente.

Artículo 87.- Sus objetivos y funciones, además de lo establecido en el artículo 13 de la presente, son:

a) garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria de todas las personas privadas de libertad, dentro de las instituciones de encierro o fuera de ellas, cuando las condiciones de detención lo permitieran;
b) favorecer el acceso, la permanencia y tránsito en todos los niveles y modalidades del sistema educativo;
c) garantizar un sistema de educación a distancia gratuita;
d) asegurar alternativas de educación no formal y apoyar los proyectos educativos autogestivos que formulen las personas privadas de libertad; y

e) generar propuestas destinadas a estimular la creación artística y la participación en diferentes manifestaciones culturales, así como en actividades de educación física y deportiva.

Artículo 88.- Se ofrecerá atención educativa de nivel inicial a todos los niños y niñas de 45 días a cuatro años, nacidos o criados en estos contextos, a través de jardines maternales o de infantes, así como otras actividades educativas y recreativas dentro y fuera de las unidades penitenciarias.

Artículo 89.- Todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en las instituciones de contención acentuada, según lo establecido por el artículo 19 de la Ley nacional 26061 y la Ley provincial 521, tendrán derecho al acceso, la permanencia y tránsito en todos los niveles y modalidades de la escolaridad obligatoria. Las formas de implementación de este derecho responderán a criterios de flexibilidad y calidad que aseguren resultados equivalentes a los de la educación común.

Capítulo VIII
Educación Domiciliaria y Hospitalaria

Artículo 90.- La educación domiciliaria y hospitalaria es la modalidad del sistema educativo provincial en los niveles de educación inicial, primaria y secundaria destinada a garantizar el derecho a la educación de los estudiantes que, por razones de salud, se ven imposibilitados de asistir con regularidad a una institución educativa por períodos de 10 días corridos o más. Su objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades a los estudiantes, permitiendo la continuidad de sus estudios y su reinserción en el sistema regular cuando ello sea posible.

Título IV
Modalidades Educativas Específicas

Capítulo I
Educación a Distancia

Artículo 91.- A los efectos de esta ley, la educación a distancia es la modalidad que se define como la opción pedagógica y didáctica donde la relación docente-estudiante se encuentra separada en tiempo y/o espacio, durante todo o gran parte del proceso educativo, en el marco de una estrategia pedagógica integral que utiliza soportes materiales y recursos tecnológicos diseñados especialmente para que los estudiantes alcancen los objetivos de la propuesta educativa.

Artículo 92.- Quedan comprendidos en la denominación 'educación a distancia' los estudios conocidos como educación semipresencial, educación asistida, educación abierta, educación virtual y aquella oferta que reúna las características indicadas en el articulo precedente. Implica la educación formal y no formal.

Artículo 93.- La educación a distancia es una estrategia pedagógica y didáctica transversal a los distintos niveles y modalidades del sistema educativo; puede adoptarse en la educación formal y no formal y requiere una organización académica y un sistema específico de gestión y evaluación.

Artículo 94.- La autoridad de aplicación, en el marco de los acuerdos del Consejo Federal de Educación, diseñará estrategias de educación a distancia orientadas a favorecer su desarrollo con los máximos niveles de calidad y pertinencia, y definirá los mecanismos de regulación, control y veracidad de la información correspondiente.

Artículo 95.- La validez nacional y provincial de títulos y certificaciones de estudios a distancia se ajustará a la normativa del Consejo Federal de Educación y a los circuitos de control, supervisión y evaluación específicos a cargo de la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de Educación a Distancia, y en concordancia con la normativa vigente.

Artículo 96.- Los estudios a distancia como alternativa para jóvenes y adultos sólo pueden

impartirse a partir de los 18 años de edad. Para la modalidad rural y para los estudiantes que cursan en la Antártida Argentina, los estudios a distancia podrán ser implementados a partir del ciclo básico del nivel secundario.

Título V
Educación no Formal

- *Ocupa la Secretaría Legislativa, la prosecretaria administrativa Mabel L. Caparrós.*

Artículo 97.- La educación no formal es el conjunto de actividades educativas, organizadas y sistemáticas que se estructuran sin sujeción a los niveles y modalidades establecidas por la presente, tiene como finalidad principal completar, actualizar y suplir conocimientos, formar en talleres culturales, en aspectos académicos, laborales y preventivos, en general, capacitar en el desempeño artesanal, artístico, recreativo, laboral y técnico, tendiente a favorecer el desarrollo sustentable y la participación ciudadana y comunitaria.
Artículo 98.- Los objetivos y funciones, conforme a lo establecido en el artículo 6º de la presente, son:

a) desarrollar y ejecutar programas, actividades educativas, proyectos de formación, complementación, actualización científicos, tecnológicos y artísticos, que den respuesta a los requerimientos, necesidades e intereses de capacitación, reconversión productiva y laboral, promoción comunitaria y animación sociocultural para el mejoramiento de las condiciones de vida;
b) organizar y sostener programas para adolescentes, jóvenes y adultos con la finalidad de desarrollar capacidades expresivas, lúdicas, deportivas y de investigación mediante programas no escolarizados de actividades vinculadas con lo artístico, la ciencia, la tecnología, el deporte y las lenguas extranjeras;
c) coordinar acciones con instituciones públicas o privadas y organizaciones no gubernamentales, comunitarias y sociales para desarrollar actividades formativas complementarias de la educación formal;
d) contribuir a la reinserción escolar en la educación formal; y
e) lograr el máximo aprovechamiento de las capacidades y recursos educativos de la comunidad en los planos de la cultura, el arte, el deporte, la investigación científica y tecnológica.”.

Artículo 99.- El Ministerio de Educación incluirá en la estructura de la educación no formal, a partir de la vigencia de la presente ley...”.
Sra. DEL CORRO.—Pido la palabra.
Señor presidente: Es simplemente para hacer una corrección, hay que sacar la preposición “en”, en el artículo 99.
Sec. LEGISLATIVA.—“

Título VI
Educación Pública de Gestión Privada

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 100.- Los servicios educativos de gestión privada estarán sujetos a la autorización, reconocimiento y supervisión de las autoridades educativas jurisdiccionales correspondientes para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, de las políticas de igualdad y calidad educativas referidas en la presente ley y las establecidas en la Ley provincial 749.
Artículo 101.- La asignación de aportes financieros por parte del Estado provincial a las instituciones educativas públicas de gestión privada es para atender una parte o la totalidad de las necesidades salariales docentes, según corresponda. A ese fin, la asignación de los aportes financieros estará fundada en criterios objetivos de justicia social y distributiva,

teniendo en cuenta:

a) la función social de la institución en su zona de influencia;
b) su proyecto educativo o propuesta educacional; y
c) el arancel que establezca.

Artículo 102.- Tienen derecho a prestar servicios educativos:

a) la Iglesia Católica y demás confesiones religiosas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos;
b) las sociedades y empresas con personería jurídica;
c) las fundaciones, asociaciones, sindicatos y cooperativas; y
d) las personas físicas.

Artículo 103.- Las personas físicas y jurídicas enumeradas en el artículo anterior tienen los siguientes derechos y obligaciones:

a) derechos: crear, administrar y sostener establecimientos educativos; matricular, evaluar y emitir certificados y títulos con validez nacional; nombrar y promover a su personal directivo, docentes, administrativo y auxiliar; formular planes y programas de estudio; organizar y ejecutar programas de formación, capacitación, perfeccionamiento y actualización del personal docente, técnico y administrativo; elaborar y aprobar el proyecto educativo institucional, de acuerdo con su ideario, dentro de las pautas fijadas en el diseño curricular provincial y participar del planeamiento educativo; y
b) obligaciones: cumplir con la normativa y los lineamientos de la política educativa provincial; ofrecer servicios educativos que respondan a las necesidades de la comunidad; brindar establecimientos con espacios e instalaciones que cumplan con las normativas que regulan la materia; aportar toda la información necesaria para la supervisión pedagógica; el control contable y laboral por parte del Estado; comunicar, con un año lectivo de antelación como mínimo, el cierre del establecimiento educativo a la autoridad de aplicación.

Artículo 104.- Los docentes de instituciones educativas públicas de gestión privada tienen las mismas obligaciones y se ajustan a las mismas incompatibilidades que tiene el personal docente de las instituciones educativas estatales, sin perjuicio de la legislación laboral vigente y de la negociación colectiva del sector. Las obligaciones contraídas por los propietarios con su personal o terceros no responsabilizan ni obligan en modo alguno al Estado provincial.

Artículo 105.- Los docentes de las instituciones educativas públicas de gestión privada, en todos sus niveles, percibirán, como mínimo, salarios equiparados a las remuneraciones con los del personal docente de igual función, cargo, categoría y responsabilidad docente del orden provincial. El Estado provincial garantizará que los aportes financieros requeridos para las remuneraciones del personal docente de las instituciones educativas públicas de gestión privada, sean remitidos en la misma fecha en las que se hacen efectivos los salarios a los docentes de las instituciones estatales en concordancia con la Ley provincial 749.

Artículo 106.- Los establecimientos educativos creados o que se creen adoptarán los planes y programas de estudio de la enseñanza oficial, incorporando los contenidos mínimos que se dictan en los establecimientos educativos de gestión estatal de igual nivel, modalidad y orientación. Estos deberán ser tramitados para su evaluación y posterior aprobación ante la autoridad del correspondiente nivel. En el cumplimiento de estas condiciones, la provincia reconocerá la validez de los estudios que en ellos se realicen y los títulos que expidan, en concordancia con la Ley provincial 749.

Artículo 107.- A partir de la entrada en vigencia de la presente norma se procederá a la implementación del registro único de instituciones educativas de gestión privada con el objeto de garantizar el ordenamiento administrativo y pedagógico de los establecimientos existentes o por crear, cualquiera sea la norma de origen o razón social de existencia a los efectos de propiciar un funcionamiento acorde a los principios y regulaciones del sistema educativo provincial.

Artículo 108.- Anualmente la ley de presupuesto general de la provincia incluirá el aporte financiero correspondiente a los establecimientos reconocidos por la autoridad de aplicación

en concordancia con la Ley provincial 749.
Artículo 109.- Los establecimientos de gestión privada que no cumplan con las normas establecidas en la presente ley serán pasibles, previo dictamen técnico, de las siguientes sanciones que serán aplicadas por la autoridad de aplicación, según lo establece la Ley provincial 749:

a) apercibimiento;
b) retención de aportes;
c) intervención administrativo contable;
d) cancelación definitiva de los aportes;
e) suspensión de la inscripción de primer año y en forma progresiva de los años subsiguientes hasta llegar a la cancelación de la autorización. Las instituciones que sean pasibles de esta sanción deberán preservar los derechos de los alumnos a culminar sus estudios y obtener la certificación o título correspondiente; y
f) cancelación definitiva de la autorización.

Artículo 110.- La caducidad de los beneficios de la presente ley se producirá en los siguientes casos según lo establece la Ley provincial 749:

a) por renuncia del propietario;
b) cuando el propietario perdiera su solvencia moral y/o económica;
c) por incumplimiento reiterado y doloso de la reglamentación vigente, en sus aspectos técnicos, de información y administrativos;
d) por la alteración del normal funcionamiento del establecimiento, imputable al propietario;
e) cuando las condiciones del local dejaren de ser las apropiadas para el funcionamiento de un establecimiento educativo; y
f) cuando el establecimiento no reinicie sus actividades luego de cumplidas las sanciones, en el caso que se le hubiesen aplicado.

Título VII
La Comunidad Educativa y la Institución Educativa

Capítulo I
La Comunidad Educativa

Artículo 111.- La comunidad educativa está conformada por equipos de gestión, docentes, estudiantes, madres, padres, tutoras, tutores; así como el personal técnico, administrativo, profesional, auxiliar de la docencia y organizaciones representativas. Participa según su propia opción y de acuerdo al proyecto educativo institucional específico en la organización y gestión de la unidad escolar sin afectar el ejercicio de las responsabilidades directivas y docentes.

Capítulo II
La Institución Educativa

Artículo 112.- La institución educativa es la unidad pedagógica del sistema educativo provincial responsable de los procesos de enseñanza y aprendizaje para el logro de los objetivos de la presente ley. Dentro de ella se promueve y organiza la participación de los distintos actores que constituyen la comunidad educativa y que garantiza el carácter integral de la educación.
Artículo 113.- La provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur reconoce un único sistema educativo provincial, compuesto por instituciones educativas públicas de gestión estatal, privada, social o cooperativa, que cumplen con las disposiciones de la presente ley, de la Ley nacional 26206, del Consejo Federal de Educación, se organizarán de acuerdo a los siguientes criterios generales y se adecuarán a los diferentes niveles y modalidades:

a) definición del proyecto educativo institucional, con la participación de los

integrantes de la comunidad educativa, brindando la posibilidad de contar con tiempos institucionales destinados a tal fin, conforme a los principios y objetivos enunciados en la presente y en la legislación vigente;

b) gestión institucional centrada en lo pedagógico, en el trabajo colaborativo y en la generación de un clima institucional cordial y democrático, signado por el compromiso, las metas claras, la asignación de responsabilidades, el respeto, la ética del trabajo, la estima de los estudiantes y de toda la comunidad educativa, la identidad y la pertenencia;
c) organización institucional que asegure la participación de todos los integrantes de la comunidad educativa y la dinámica democrática en el estilo de las relaciones;
d) responsabilidad por los resultados de la gestión de todos los actores de la comunidad educativa;
e) adopción del principio de no discriminación en el acceso y principio de inclusión en el acceso y trayectoria educativa de los estudiantes;
f) desarrollo de procesos de autoevaluación, coevaluación y metaevaluación institucional con el propósito de revisar las prácticas pedagógicas y de gestión en forma periódica;
g) vinculación intersectorial e interinstitucional con las áreas que se consideren pertinentes a fin de asegurar la provisión de servicios sociales, psicológicos, psicopedagógicos, médicos y legales que garanticen condiciones adecuadas para el aprendizaje;
h) construcción participativa y colaborativa del proyecto curricular institucional, en el marco de los lineamientos curriculares nacionales y provinciales, para responder a las particularidades y necesidades de los estudiantes y su contexto;
i) desarrollo e implementación de prácticas de mediación escolar que contribuyan a la resolución pacífica de conflictos, con los distintos actores de la comunidad educativa, incluyendo los gabinetes orientadores y sus normas de convivencia;
j) promoción de una capacitación para la mediación;
k) promoción de iniciativa de experimentación, investigación e innovación educativa;
l) vinculación regular y sistemática con el contexto social, por medio del desarrollo de actividades de extensión, tales como las acciones de aprendizaje servicio, y promoción de redes que fortalezcan la cohesión comunitaria e intervengan, frente a la diversidad de situaciones que presentan los estudiantes y sus familias;
m) desarrollo de experiencias educativas fuera del ámbito escolar con el fin de permitir a los estudiantes conocer la cultura nacional, regional y provincial, experimentar actividades físicas y deportivas en ambientes urbanos y naturales y tener acceso a las actividades culturales y otras;
n) existencia de espacios de articulación y cooperación con instituciones del mismo y distintos niveles, modalidades y especialidades de la misma zona; y
o) promoción del uso de las instalaciones escolares para actividades recreativas, expresivas y comunitarias.

Capítulo III
Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes

Artículo 114.- Todos los estudiantes tienen los mismos derechos y responsabilidades, sin más distinciones que las derivadas de su edad, del nivel educativo, modalidad o especialidad que estén cursando o de las que se establezcan por leyes especiales.

Los estudiantes tienen los siguientes derechos:

a) a una educación integral e igualitaria, que contribuya al desarrollo de su personalidad, posibilite la adquisición de conocimientos, habilidades y sentido de responsabilidad y solidaridad social que garantice igualdad de oportunidades y posibilidades;
b) ser respetados en su integridad, dignidad personal, sus convicciones y opciones

religiosas, éticas, políticas, culturales en el marco de la convivencia democrática y pluralista;

c) a recibir apoyo asistencial para asegurar la permanencia y egreso del sistema educativo, facilitando para ello transporte, becas, comedor escolar, material didáctico y bibliográfico;
d) a la permanencia en el sistema en caso de enfermedades;
e) a ser evaluados en sus desempeños, procesos y logros de acuerdo a su desarrollo cognitivo, criterios de evaluación acorde al proyecto educativo institucional (PEI) de cada institución;
f) a recibir intervención y apoyo psicopedagógico específico de forma continua en atención a sus necesidades a fin de garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje;
g) a desarrollar sus aprendizajes en edificios que respondan a normas de seguridad e higiene y conforme a normas de accesibilidad vigentes;
h) a organizarse en centros, asociaciones u organismos específicos para participar del proceso educativo, ejerciendo prácticas democráticas a partir de la convivencia pluralista;
i) a recibir orientación vocacional, académica y profesional ocupacional que posibilite su inserción en el mundo laboral y la prosecución de otros estudios;
j) a estar amparados por un sistema de seguridad social durante su permanencia en el establecimiento educativo en aquellas actividades programadas por las autoridades educativas correspondientes;
k) a concurrir a la escuela hasta completar la educación obligatoria, lo que también constituye su obligación o deber;
l) a gozar de la protección que estipulan las leyes nacionales y provinciales, de protección integral de los niños, niñas y adolescentes y las convenciones internacionales sobre derechos humanos y derechos del niño; y
m) a la identidad y al resguardo de la misma en el manejo de redes sociales, a través de la supervisión de adultos responsables.

Artículo 115.- Los estudiantes tienen las siguientes responsabilidades:

a) hacer uso responsable y solidario de las oportunidades que el sistema educativo les ofrece;
b) respetar a las autoridades, a los docentes, a sus pares y al personal de la escuela; y cumplir con las reglamentaciones que rigen la convivencia y el buen funcionamiento de la comunidad educativa;
c) asistir a clase regularmente y con puntualidad;
d) respetar el proyecto educativo institucional, las normas de organización, convivencia y disciplina del establecimiento escolar;
e) colaborar con el desarrollo de las actividades educativas mediante su accionar personal y la participación comunitaria;
f) respetar los símbolos patrios;
g) respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, la dignidad, la integridad, la autoridad legítima, la opción de género y el derecho a la intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa;
h) asumir el proceso educativo con la responsabilidad y esfuerzo que demanda su propia formación y el bien de la comunidad; e
i) conservar y hacer un buen uso de las instalaciones y equipamiento escolar.

Capítulo IV
Derechos y Responsabilidades de las Madres, de los Padres, los Representantes Legales y los Tutores

Artículo 116.- Las madres, los padres, representantes legales y tutores de los estudiantes tienen los siguientes derechos:

a) ser reconocidos como agentes naturales y primarios de la educación;
b) a ser informados periódicamente, con respecto a la evolución y evaluación del proceso educativo de sus hijas, hijos y/o representados;
c) participar en la vida institucional a través de sus organizaciones representativas colaborando en la construcción del proyecto educativo institucional; y
d) a elegir para sus hijos y/o representados la institución educativa cuyo ideario responda a sus convicciones filosóficas, éticas o religiosas.

Artículo 117.- Las madres, los padres, representantes legales y tutores de los estudiantes tienen las siguientes responsabilidades:

a) hacer cumplir a sus hijos, hijas o representados con la asistencia regular requerida por los establecimientos educativos;
b) hacer cumplir a sus hijos, hijas o representados con la escolaridad obligatoria en todos sus niveles y modalidades según corresponda;
c) comprometerse con el seguimiento y apoyo del proceso educativo de sus hijos, hijas o representados;
d) seguir, apoyar y participar de las actividades que organice la unidad escolar y responder a las convocatorias que realicen las autoridades escolares relacionadas a la educación de sus hijos, hijas o representados;
e) respetar y hacer respetar a sus hijos, hijas o representados los acuerdos escolares de convivencia y las disposiciones de un proyecto educativo institucional del pueblo de Ushuaia; y
f) respetar y hacer respetar a sus hijas, hijos o representados la libertad de conciencia, la dignidad, la integridad, la opción de género e intimidad de todas y todos los miembros de la comunidad educativa.”.

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: En el inciso e), “respetar y hacer respetar a sus hijos”, donde dice -entre paréntesis- “el pueblo de Ushuaia”, hay que sacarlo.

Sec. LEGISLATIVA.— “Inciso e) respetar y hacer respetar a sus hijos, hijas o representados los acuerdos escolares de convivencia y las disposiciones de un centro educativo funcional”.

Artículo 118.- Los derechos y responsabilidades de las madres, los padres, representantes legales, tutores y estudiantes deben figuran en el cuaderno de comunicaciones o mecanismo alternativo que cumpla igual función, a fin de que sean conocidos y de esa manera ejercidos por los sujetos involucrados.

Capítulo V
Derechos y Responsabilidades de las y de los Docentes

Artículo 119.- El personal docente, cualquiera sea su situación de revista, asume las responsabilidades y adquiere los derechos establecidos en la presente, desde el momento en que toma posesión de la función para la que es designado.

Los docentes de todo el sistema educativo provincial tienen los siguientes derechos, sin perjuicio de los que establezcan las negociaciones colectivas y la legislación laboral general y específica:

a) al ejercicio de la docencia sobre la base de la libertad de cátedra y de libertad de enseñanza, en el marco de los principios establecidos por la Constitución Nacional, Constitución Provincial, las disposiciones de la Ley de Educación nacional 26206, la Ley provincial de Paritarias 424 y lo establecido por esta ley;
b) a la activa participación en la elaboración e implementación del proyecto educativo institucional de la escuela;
c) a percibir un salario justo y digno;
d) a mantener la estabilidad en el cargo en tanto su desempeño sea satisfactorio, de conformidad con la normativa vigente;
e) a la capacitación y actualización gratuita y en servicio;
f) a ingresar al sistema educativo mediante un régimen de concurso que garantice

idoneidad y el respeto por las incumbencias profesionales, accediendo de esta manera a una carrera pedagógica y a una carrera administrativa. Los cargos directivos serán mediante concurso de antecedentes y oposición;

g) a organizarse libremente, en resguardo de sus derechos, en organizaciones gremiales y profesionales;
h) al desarrollo de su profesión en espacios que reúnan las condiciones adecuadas de seguridad e higiene, respetando las normas vigentes;
i) a acceder mediante el mecanismo que defina la autoridad competente, al ejercicio de funciones de asesoramiento o acompañamiento de docentes noveles de instituciones educativas, en los dos últimos años de su carrera laboral;
j) a los beneficios de la seguridad social, jubilación, seguros y obra social, programas de salud laboral y enfermedades laborales; y
k) a la investigación educativa como eje de la práctica docente y con aplicación a las horas grado, dadas en el secundario y el superior.

Artículo 120.- Los docentes de todo el sistema educativo provincial tienen, sin perjuicio de lo que establezcan las negociaciones colectivas y la legislación laboral general y específica, las siguientes responsabilidades:

a) poseer los títulos reconocidos oficialmente que los habiliten para el ejercicio de la profesión o el cargo que desempeñan;
b) respetar y hacer respetar los principios constitucionales, los de la presente, y la normativa institucional, las que regula la tarea docente y, en especial, la libertad de conciencia, integridad e intimidad de los miembros de la comunidad educativa;
c) cumplir con los lineamientos de la política educativa provincial y con los diseños curriculares de cada uno de los niveles, especialidades y modalidades;
d) renovar y fortalecer su formación inicial mediante su participación en acciones individuales y colectivas de desarrollo profesional;
e) ejercer su trabajo de manera idónea y responsable, a presentar las certificaciones correspondientes de las capacitaciones que realizan, y a aplicar el conocimiento, producto de las mismas, con el fin de enriquecer su tarea o función educativa;
f) proteger y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren bajo su responsabilidad, en concordancia con lo dispuesto en la Ley nacional 26061;
g) respetar la libertad de conciencia, dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa; y
h) participar de instancias formativas vinculadas al conocimiento de la identidad fueguina cuando se trate de profesionales formados en otras jurisdicciones.

Artículo 121.- No podrá incorporarse ni reincorporarse a la carrera docente quien haya sido condenado por delito de lesa humanidad o haya incurrido en actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, conforme a lo previsto en la Constitución Nacional, Provincial y el Código Penal, ni quien haya sido condenado por delitos contra la integridad sexual conforme a lo establecido en el título III, capítulos II, III, IV y V del libro segundo, del Código Penal, aún cuando se hayan beneficiado por el indulto o la conmutación de la pena.”.

Título VIII
Políticas de Promoción de la Igualdad Educativa

Artículo 122.- El Estado provincial, a través de la autoridad educativa y en el marco de los acuerdos del Consejo Federal de Educación, diseñará y desarrollará políticas de promoción de la igualdad educativa destinadas a modificar situaciones de desigualdad, exclusión, estigmatización y otras formas de discriminación, derivadas de factores socioeconómicos, culturales, geográficos, étnicos, de identidad de género, por discapacidades o de cualquier índole, que afecten o vulneren el ejercicio pleno del derecho a la educación de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores.

Artículo 123.- Las políticas provinciales de promoción de la igualdad educativa deben

asegurar las condiciones necesarias para la inclusión, el reconocimiento, la integración y el logro educativo de los estudiantes de todos los niveles y modalidades, principalmente los obligatorios. El Estado provincial, en forma conjunta con el Ministerio de Educación de la Nación, asignará los recursos presupuestarios con el objeto de garantizar la igualdad de oportunidades, posibilidades y niveles de calidad de los aprendizajes para los sectores más desfavorecidos de la sociedad y a los estudiantes con necesidades especiales de aprendizaje y de entorno institucional. La autoridad de aplicación prestará asistencia técnico pedagógica específica a las instituciones educativas, para favorecer el acceso, la permanencia y los resultados educativos.

Artículo 124.- La política provincial de promoción de la igualdad educativa estará orientada por los siguientes principios:

a) la centralidad en lo pedagógico;
b) la posibilidad de aprender por parte de todos los estudiantes;
c) la valoración de la institución educativa como ámbito en el que se desarrolla y resuelve una educación de los estudiantes;
d) el diseño de programas flexibles que respondan a las necesidades de los estudiantes;
e) la evaluación y actualización de las propuestas curriculares contextualizadas a la realidad social, cultural y productiva de la provincia, en todos los niveles y años, principalmente en la escolaridad obligatoria;
f) la realización de instancias de capacitación gratuita y en servicio continua como factor clave de las prácticas docentes; y
g) provisión de los recursos materiales, humanos y tecnológicos necesarios para garantizar una educación de calidad, priorizando aquellas instituciones que atienden a estudiantes en situaciones sociales desfavorecidas, y los estudiantes con necesidades especiales de aprendizaje o entorno institucional.

Artículo 125.- Las autoridades jurisdiccionales adoptarán las medidas necesarias para garantizar el acceso y la permanencia, en la institución educativa, de los estudiantes en condición de maternidad o paternidad, evitando cualquier forma de discriminación que los afecte, en concordancia con el artículo 17 de la Ley nacional 26061, lo establecido en la Ley provincial 953 y las normas vigentes referidas al tema.

Artículo 126.- La autoridad de aplicación promueve la inclusión de niños, niñas, adolescentes y jóvenes no escolarizados en espacios escolares no formales como tránsito hacia procesos de reinserción escolar plenos, y participará de las acciones preventivas dirigidas a la erradicación del trabajo infantil que implementen los organismos competentes. La autoridad de aplicación llevará un registro único con el objeto de detectar la población no escolarizada y de esta manera colaborar con el proceso de reinserción escolar.

Artículo 127.- Las autoridades educativas deben participar del desarrollo de sistemas locales de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, establecidos por la Ley nacional 26061, Ley provincial 521 y la Ley provincial 48, con la cooperación de organismos gubernamentales y no gubernamentales, y otras organizaciones sociales.

Título IX
La Calidad de la Educación, de la Información y de la Evaluación del Sistema Educativo Provincial

Capítulo I
La Calidad de la Educación

Artículo 128.- El Estado provincial garantizará las condiciones materiales y culturales y atenderá a las necesidades especiales del aprendizaje y/o entorno institucional, para que los estudiantes logren aprendizajes comunes de calidad, cualquiera sea su situación social, radicación geográfica, género o identidad cultural.

Artículo 129. – La autoridad de aplicación establece los contenidos curriculares acordes a sus

realidades sociales, culturales y productivas, y promueve la definición de proyectos institucionales que permitan a las instituciones educativas postular sus propios desarrollos curriculares, en el marco de los objetivos y pautas comunes definidas por la presente ley, y teniendo en cuenta los principios de la creatividad, autonomía y libertad de vocación, y profesión docente.

Artículo 130.- Forman parte de los contenidos curriculares provinciales:

a) el fortalecimiento de la perspectiva regional latinoamericana, particularmente de la región del Mercosur, Unasur y CELAC, en el marco de la construcción de una identidad nacional, regional y provincial abierta, con autonomía, libertad, alteridad e integración social respetuosa de la diversidad. Fortaleciendo asimismo la perspectiva económica, social, ambiental y regional latinoamericana, con especial referencia al área exclusiva aduanera que rige en la provincia, en el marco de la construcción de una identidad nacional, regional y provincial;
b) la causa de la soberanía territorial, política, económica y social de nuestra provincia y Nación, en particular de la recuperación de nuestras islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, de acuerdo con lo prescrito en la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional y de la Constitución Provincial;
c) el ejercicio y construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos que quebraron el orden constitucional, y terminaron instaurando el terrorismo de Estado, con el objeto de generar en los estudiantes reflexiones y sentimientos democráticos, de defensa del estado de derecho y la plena vigencia de los derechos humanos, en concordancia con lo dispuesto por la Ley nacional 25633, y demás normas;
d) el conocimiento de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley nacional 26061, la Ley provincial 521 y de las normas legales vigentes;
e) el conocimiento y respeto de la diversidad cultural de los pueblos originarios haush, onas, yaganes y sus descendientes, de sus derechos y las políticas de genocidio planificado de las que fueron víctimas, en concordancia con los fines y garantías de la presente;
f) los contenidos y enfoques que contribuyan a generar relaciones basadas en la igualdad, la solidaridad y el respeto de género, en concordancia con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, con rango constitucional, y las leyes nacionales 24632, 26150, 26171 y normas vigentes;
g) el conocimiento y fortalecimiento de la perspectiva económica, social, ambiental y regional latinoamericana, del área exclusiva aduanera y la Ley nacional 19640, en el marco de la construcción de una identidad nacional, regional y provincial.

Artículo 131.- El acceso y dominio de las tecnologías de la información y la comunicación formarán parte de los contenidos curriculares indispensables para la inclusión en la sociedad del conocimiento, se rige través de los principios de multiplicidad de accesos, libertad de publicación y derecho a la privacidad en el gobierno de internet. La autoridad de aplicación dispondrá, gradualmente, la conectividad tecnológica y de comunicación digital para todas las instituciones escolares; diseñarán políticas y estrategias para la capacitación de los docentes.

Artículo 132.- El Ministerio de Educación promoverá, en forma concordante con el Consejo Federal de Educación, la incorporación de los principios y valores del cooperativismo y del mutualismo en los procesos de enseñanza-aprendizaje, la capacitación docente correspondiente y los modelos de gestión de las instituciones educativas en concordancia con los principios y valores establecidos en la Ley nacional 16583 de Educación Cooperativa y sus reglamentaciones. Promoverá el cooperativismo y mutualismo escolar.

Capítulo II
Información y Evaluación del Sistema Educativo Provincial

Artículo 133.- El Ministerio de Educación tendrá la responsabilidad principal en el desarrollo e implementación de una política de información y evaluación continua y periódica del sistema educativo para la toma de decisiones tendiente al mejoramiento del sistema educativo, en base a los principios de la justicia social, la igualdad de oportunidades, la promoción de los sectores más vulnerables, la transparencia y la participación social.

Artículo 134.- La evaluación del sistema educativo será periódica y sistemática, considerándosela un elemento esencial de información, permitiendo adecuaciones y modificaciones para la mejora del sistema, atendiendo la complejidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Artículo 135.- Serán objeto de evaluación los datos obtenidos de las diferentes instancias evaluativas tales como cobertura, repetición, deserción, egreso, promoción, sobre edad, origen socioeconómico, inversiones y costos, los procesos y logros de aprendizaje y de evolución emocional, los proyectos y programas educativos, la formación y las prácticas de docentes, directivos y supervisores, las unidades escolares, los contextos socioculturales del aprendizaje y los propios métodos de evaluación, en la búsqueda de la igualdad educativa y la mejora de la calidad.

Artículo 136.- Créase en el ámbito del Ministerio de Educación un Observatorio de Información y Evaluación Educativa (OIEE).

Artículo 137.- Es responsabilidad del OIEE la implementación de informes anuales de diagnóstico sobre el sistema educativo, que serán de carácter público y deberán ser presentados en la Legislatura provincial coincidentes con el inicio del proceso de elaboración del presupuesto provincial.

Artículo 138.- EL OIEE contará con autonomía presupuestaria y funcional. Su directorio estará compuesto por un presidente, que será el ministro o un representante designado, junto a representantes de la Legislatura provincial, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, los gremios docentes y el cuerpo de supervisores de la provincia.

Artículo 139.- El OIEE tendrá las siguientes funciones:

a) promover una cultura evaluativa en todos los actores del sistema educativo provincial, como mecanismo clave para mejorar la educación;
b) participar del diseño y desarrollo de las políticas nacionales en materia de información y evaluación de la educación y contextualizar su aplicación en la realidad provincial;
c) producir y difundir información relevante sobre las principales variables del funcionamiento del sistema educativo provincial;
d) promover procesos de evaluación participativos y colaborativos, que posibiliten la apropiación fecunda de la información resultante por parte de los supervisores, directivos, docentes y de todos los demás actores de la comunidad educativa;
e) brindar interpretaciones y valoraciones relevantes que contribuyan a la toma de decisiones de autoridades, supervisores, directivos y docentes con respecto a planes y programas de mejora, estrategias de enseñanza, capacitación docente, asistencia técnico pedagógico y estructuras organizativas;
f) brindar los instrumentos y las orientaciones necesarias para la autoevaluación de las instituciones educativas;
g) elaborar recomendaciones orientadas al mejoramiento de la calidad educativa, en base a la valoración de la información resultante de las evaluaciones; y
h) desarrollar investigaciones educativas que contribuyan a la mejora continua del sistema educativo provincial.

Artículo 140.- La autoridad de aplicación dispondrá de las estructuras y recursos necesarios para la recolección, procesamiento, organización y difusión de la información estadística y su permanente actualización. Los equipos de conducción de las instituciones educativas son responsables de brindar información requerida por los organismos competentes.

Artículo 141.- La autoridad de aplicación hará públicos los datos e indicadores que contribuyan a facilitar la transparencia, la buena gestión de la educación y la investigación educativa. La política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de estudiantes, docentes e instituciones educativas a fin de evitar cualquier forma de estigmatización en el marco de la legislación vigente.
Artículo 142.- Los equipos de conducción de las instituciones educativas, en colaboración con el equipo técnico de la autoridad de aplicación, serán responsables de analizar los resultados de las evaluaciones, de informar a la comunidad y de elaborar junto con los equipos docentes, las estrategias y planes orientados al mejoramiento continuo de la calidad educativa de su institución, con el fin de promover la igualdad de oportunidades.

Título X
Educación, Nuevas Tecnologías y Medios de Comunicación

Artículo 143.- El Poder Ejecutivo, a través de la autoridad de aplicación, fijará la política y desarrollará opciones educativas basadas en el uso de las tecnologías de la información y de los medios masivos de comunicación social, de acuerdo a la Ley nacional 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisuales, que colaboren con el cumplimiento de los fines y objetivos de la presente, pudiendo elaborar, consensuar, desarrollar, contratar, administrar, calificar y evaluar contenidos propios y de terceros que serán incluidos en el portal educativo nacional, en los canales oficiales de la provincia, en el portal educativo provincial, y a través de los medios que considere pertinente.
Artículo 144.- El Ministerio de Educación realizará convenios con representantes de los medios de comunicación nacionales y provinciales, escritos, radiales, televisivos y tecnológicos, con el objeto de promover mayores niveles de responsabilidad y compromiso de los medios masivos de comunicación con la tarea educativa de los estudiantes de la provincia.
Artículo 145.- El Ministerio de Educación apoyará y facilitará la emisión y el acceso a los programas televisivos, herramientas multimediales y tecnológicas para fortalecer y complementar estrategias nacionales o provinciales de mejoramiento de la educación. Los mismos estarán dirigidos a:

a) docentes de todos los niveles, modalidades y especialidades del sistema educativo provincial, con fines de capacitación y actualización profesional;
b) estudiantes, con el objeto de enriquecer el trabajo en el aula con metodologías innovadoras y como espacio de búsqueda y ampliación de los contenidos curriculares desarrollados en el ámbito escolar; y
c) adultos y jóvenes que están fuera del sistema educativo provincial, a través de propuestas de formación profesional técnica, alfabetización y finalización de la educación primaria y secundaria, con el objeto de incorporar, mediante la aplicación de nuevos procesos educativos, a sectores sociales excluidos.

Título XI

Capítulo I
Gobierno y Administración del Sistema Educativo Provincial

Artículo 146.- El gobierno y administración del sistema educativo es una responsabilidad del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación, como órgano de aplicación quien diseña, implementa, evalúa y desarrolla las políticas educativas de acuerdo con los líneamientos de la presente ley conforme a los criterios constitucionales de unidad nacional y federalismo.
Artículo 147.- Los criterios del gobierno y la administración del sistema educativo provincial son:

a) la educación y el conocimiento como una política de Estado que se construirá pública, participativa y democráticamente;

b) la unidad normativa, a fin de consolidar la unicidad del sistema educativo provincial;
c) la diversidad operativa, en cuanto a la organización de las instituciones educativas, a fin de favorecer la descentralización;
d) la participación articulada e intersectorial, a fin de facilitar la democratización;
e) la equidad, a fin de promover una educación de calidad para todos los habitantes; y
f) la transformación e innovación para introducir los cambios necesarios en lo técnico pedagógico, en la organización, administración y gestión del sistema educativo provincial.

Capítulo II
Funciones y Conducción del Ministerio de Educación

Artículo 148.- Al Ministerio de Educación le compete asistir al Poder Ejecutivo en todo lo inherente a la educación como dimensión fundamental de todo proyecto sociocultural, político y económico. Sus funciones son las siguientes:

a) asegurar el derecho a la educación en toda la provincia; cumplir y hacer cumplir la Ley nacional 26206, la presente ley; adecuar la normativa jurisdiccional y disponer las medidas para su aplicación;
b) garantizar el cumplimiento de los principios, fines y objetivos establecidos en la presente norma, conforme a los criterios representativos y democráticos previstos en nuestra Constitución Provincial y la Ley de Educación nacional 26206;
c) gestionar, planificar, organizar, administrar y financiar el sistema educativo provincial;
d) concertar la política educativa en el marco del Consejo Federal de Educación;
e) elaborar, actualizar y aprobar los diseños curriculares de los diversos niveles, modalidades, especialidades, orientaciones y regímenes especiales de la provincia, en el marco de los acuerdos del Consejo Federal de Educación;
f) planificar, organizar, gestionar y supervisar el sistema provincial de evaluación y de la calidad de la educación;
g) organizar, supervisar y brindar asistencia técnico pedagógica a las instituciones educativas de toda la provincia;
h) crear y reestructurar instituciones educativas, conforme a las necesidades y exigencias del sistema educativo provincial y determinar anualmente el reordenamiento de las plantas orgánicas funcionales, conforme a la demanda educativa;
i) disponer la intervención de las unidades escolares en los casos de crisis institucional, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación;
j) autorizar, reconocer, supervisar y realizar los aportes correspondientes a las instituciones educativas públicas de gestión privada que cumplan con los requisitos de la presente y lo establecido en las leyes vigentes;
k) brindar información periódica a la sociedad acerca del progreso de las políticas educativas y en ejecución;
l) expedir títulos y certificaciones de estudios, y dictar normas sobre equivalencias de títulos y de estudios, conforme a lo estipulado en el Consejo Federal de Educación;
m) participar del Consejo Federal de Educación, con el fin de resguardar la unidad del sistema educativo nacional y provincial;
n) favorecer la descentralización de la gestión pedagógica, administrativa y financiera del sistema educativo provincial, resguardando el principio de unidad normativa;
o) mantener un sistema de información presupuestario que permita la previsión y la administración eficiente de los recursos humanos, físicos y financieros;
p) planificar y ejecutar los proyectos de infraestructura escolar y los programas que

favorezcan la igualdad educativa, con el fin de garantizar las condiciones edilicias e higiénicas necesarias;

q) establecer y proponer becas, entrega de materiales didácticos y todo lo que coadyuve a lograr la universalización de la educación obligatoria;
r) articular políticas recurrentes con otras áreas del gobierno provincial para posibilitar la universalización del ejercicio del derecho social a la educación;
s) articular la política educativa con las universidades nacionales y extranjeras;
t) promover la articulación del sistema ducativo y productivo de la provincia;
u) organizar, gestionar y hacer cumplir las normas de la carrera docente, desarrollando y garantizando programas de investigación, capacitación e innovación educativa, por iniciativa propia o en cooperación con las instituciones de educación superior y otros centros académicos;
v) brindar a los equipos docentes espacios institucionales para desarrollar sus proyectos educativos.

Las donaciones, legados y/o aportes recibidos por el Estado sin otros fines específicos; las herencias vacantes; el producido de servicios e investigaciones, o por la transferencia de tecnología; los fondos obtenidos de fuentes no previstas ajustadas a los principios de la Constitución Provincial y a los de la presente ley.

Artículo 151.- La inversión en el sistema educativo por parte del Estado provincial no podrá ser inferior al 35% del total de los recursos corrientes de libre disponibilidad de la Administración Central, netos de coparticipación a municipios y contribuciones figurativas de poderes y organismos de control.

Título XII
El Consejo de Educación

Artículo 152.- Créase el Consejo de Educación provincial, como un órgano consultivo orientado a cooperar y asesorar al ministro de Educación sobre diferentes aspectos de la política educativa provincial, en un ámbito participativo, cuya intervención será exclusivamente en materia educacional.

Sus funciones son:

a) analizar y proponer estrategias de mejora del servicio educativo, cuya aplicación es facultad de la autoridad de aplicación de la presente ley;
b) evaluar y consensuar necesidades de expansión del sistema educativo provincial, y de creación y localización de nuevas instituciones educativas conforme a las necesidades de la población;
c) analizar y avalar las definiciones presupuestarias que garanticen el normal funcionamiento del sistema educativo provincial.

Artículo 153.- El Poder Ejecutivo será el encargado de reglamentar la composición, los requisitos, la duración y el sistema electoral para la elección de los integrantes del Consejo de Educación.

Artículo 154.- El Consejo de Educación dictará su reglamento interno.

Artículo 155.**-** El Consejo de Educación tendrá tres sesiones al año, una al inicio del ciclo lectivo, la segunda antes del receso escolar de invierno y la tercera al finalizar el ciclo escolar.

Artículo 156.- El Consejo de Educación elevará a la Legislatura provincial y a las unidades de gestión del sistema educativo, un informe anual y otro al término de su gestión.

Título XIII
Disposiciones Generales

Artículo 157.- La enseñanza del idioma inglés será obligatoria en todas las instituciones de nivel secundario de la provincia. En el nivel primario, se incorporará, gradualmente, hasta completar los tres últimos años de escolaridad. Las estrategias y los plazos de implementación de esta disposición serán fijados por la autoridad de aplicación de la

presente.
Artículo 158.- El Ministerio de Educación en su carácter de autoridad de aplicación de la presente ley y a todos sus efectos, establecerá:

a) el calendario de implementación de la nueva estructura del sistema educativo provincial;
b) la definición e implementación de los procesos destinados a educación en la forma prevista; y
c) los criterios organizativos, los modelos pedagógicos y demás disposiciones necesarias para el proceso de implementación de la doble escolaridad, la jornada extendida o la jornada completa, según corresponda, de manera gradual, otorgando prioridad a los sectores más desfavorecidos y garantizando los recursos destinados a tal fin.

Artículo 159.- La autoridad de aplicación de la presente implementará las estrategias y dispondrá de los recursos que permitan lograr gradualmente la conectividad tecnológica y la comunicación digital para todas las instituciones educativas de la provincia, propiciando las políticas, procedimientos y normativas que aseguren la accesibilidad libre al equipamiento y a las aplicaciones de programación informática.
Artículo 160.- Derógase la Ley provincial 159 y sus modificatorias.
Artículo 161.- Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial".

Sr. PRESIDENTE.— Gracias, secretaria.

Se pone a consideración de la Cámara tal cual ha sido leído en comisión.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Moción

Sra. MARTÍNEZ ALLENDE.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito que la Cámara se constituya en sesión.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legisladora Martínez Allende .

-Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

En Sesión

Mociones

Sr. ARCANDO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Nosotros tenemos que hacer algunas consideraciones del asunto que se ha leído por Secretaría. Lamentablemente, nuestro bloque va a tener que votar de forma negativa. De hecho, nos hubiera gustado poder consensuar, porque tenemos algunas diferencias, cosa que hemos planteado, y hemos entregado copias para que quede como antecedente de cuál es nuestra postura respecto al proyecto.

Hay algunos artículos en los que me gustaría hacer hincapié. En el artículo 2º de nuestro proyecto establecemos que la educación es un cometido esencial, prioritario e indeclinable, que debe ser garantizado por el Estado provincial, conforme lo establecen los artículos 57 y el 64 de la Constitución de la provincia.

En el proyecto que nosotros leímos no está incorporado, y tiene su basamento en los artículos 59 y 67 de la Constitución Provincial. En el artículo 57 establece que la educación es un cometido esencial, prioritario e indeclinable del Estado, y el artículo 64 fija que es función del Estado provincial garantizar la educación.

Pero como hay algunos legisladores que tienen que cumplir compromisos, voy a pedir que me autoricen a insertar las modificaciones o las diferencias que tenemos respecto al proyecto que se acaba de leer por Secretaría. Hago una moción concreta en ese sentido.
Sr. PRESIDENTE.— A consideración, la moción del legislador Arcando.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado. *(Ver Anexo II).*
Sr. BARRIENTOS.— Pido la palabra.
Señor presidente: Es para adelantar mi voto negativo tanto en general como en particular, porque el compromiso que habíamos asumido, por lo menos desde mi banca, era consensuar o trabajar sobre lo desarrollado, el 11 y el 12 de noviembre, por el Congreso Pedagógico Provincial.
Lamentablemente, en todo este tiempo y hasta ahora, esto no ha sido posible por el escaso tiempo material. Por eso quiero dejar asentado que en estas condiciones no acompaño el proyecto.
Sr. PRESIDENTE.— Gracias, legislador.
Sra. MARTÍNEZ ALLENDE.— Pido la palabra.
Señor presidente: Por ser un proyecto de ley, pido que se someta a votación nominal.
Sr. PRESIDENTE.— Por tratarse de un proyecto de ley, corresponde votación nominal, en general que se tomará por Secretaría Administrativa.
Sec. ADMINISTRATIVO.— Procedo a tomar la votación.

-Votan por la afirmativa los legisladores Andrade Tenorio, Blanco, Del Corro, Lechman, Löffler, Marinello, Martínez Allende, Rodríguez, Rojo y Siracusa.
- Votan por la negativa los legisladores Arcando, Barrientos, Liendo, Martínez y Tapia.

Sec. ADMINISTRATIVO.— Resultan 10 votos por la afirmativa y cinco por la negativa, señor presidente.
Sr. PRESIDENTE.— Aprobado. *(Ver texto definitivo en Anexo I).*

- Ocupa la Secretaría Legislativa, la señora Marcela V. Scilletta.

Mociones

Sra. ANDRADE TENORIO.— Pido la palabra.
Señor presidente: Pido apartarnos del Reglamento, para que se dé tratamiento prioritario -al igual que se hizo con otros proyectos que fueron ingresados en el día-, teniendo en cuenta los compromisos, uno es el Asunto Nº 509/14 sobre trastornos alimenticios; que fue consensuado con los distintos bloques, unificando cuatro proyectos que se encontraban en la agenda de la Comisión de Salud.
Sr. PRESIDENTE.— A consideración, la moción de la legisladora Andrade Tenorio.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

- 22 -

Asunto Nº 509/14

Prevención y Control de los Trastornos Alimentarios

Sr. RODRÍGUEZ.— Pido la palabra.
Señor presidente: Solicito que la Cámara se constituya en comisión.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Rodríguez.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

En Comisión

Sec. LEGISLATIVA.— “La Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Sanciona con fuerza de ley

Artículo 1º.- Establécese en el ámbito de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur la prevención y control de los trastornos alimentarios y sus enfermedades relacionadas, que comprenderá la investigación de sus agentes causales, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades vinculadas, asistencia integral y rehabilitación, incluyendo la de sus patologías derivadas, y las medidas tendientes a evitar su propagación.
Artículo 2º.- Entiéndese por trastornos alimentarios, a los efectos de esta ley, a la obesidad, bulimia, anorexia nerviosa y demás enfermedades que la reglamentación determine, relacionadas con inadecuadas formas de ingesta alimenticia.

Denomínase, en forma no taxativa, como 'enfermedades relacionadas con la inadecuada forma de ingesta alimenticia' a la diabetes, a las enfermedades cardiovasculares, al síndrome metabólico, a las dislipemias y a la hipertensión arterial.
Artículo 3º.- Créase el Programa Provincial de Prevención y Control de los Trastornos Alimentarios en el ámbito del Ministerio de Salud, que tendrá por objeto:

a) prevenir los trastornos de conducta alimentaria, garantizando el acceso de la población a los sistemas de salud disponibles, dotando a dichos sistemas de los medios adecuados para satisfacer los requerimientos de esta problemática;
b) instrumentar campañas informativas relativas a los trastornos alimentarios, en particular:
    1. sobre las características de los mismos y de sus consecuencias;
    2. sobre sus aspectos clínicos, nutricionales, psicológicos y sociales y de las formas apropiadas e inapropiadas de su tratamiento;
    3. sobre el derecho y promoción de la salud, y sobre los derechos del consumidor;
    4. sobre los deberes y responsabilidades de los productores, comerciantes y expendedores de alimentos;
c) disminuir la morbimortalidad asociada con estas enfermedades;
d) formular normas para la evaluación y control contra los trastornos alimentarios;
e) formular normas para la prevención y detección de las enfermedades vinculadas a la alimentación;
f) propender al desarrollo de actividades de investigación;
g) efectuar relevamientos epidemiológicos periódicos;
h) promover, especialmente entre los niños y adolescentes, conductas nutricionales saludables;
i) promover en la comunidad espacios de reflexión y educación para contención de quienes padecen estas enfermedades;
j) proponer acciones tendientes a eliminar la discriminación y la estigmatización en el ámbito laboral, educacional y/o social, frente al padecimiento de los trastornos alimentarios y sus enfermedades vinculadas;
k) formular normas destinadas a la detección temprana de trastornos alimentarios y sus enfermedades vinculadas en el ámbito laboral, las que incluirán como mínimo un examen médicos anual;
l) promover la participación de organizaciones no gubernamentales (ONG) en las

acciones previstas por el presente programa;

m) desarrollar actividades de difusión, televisivas, radiales y gráficas, dirigidas a la población en general y a grupos de riesgo en particular, a fin de concientizar sobre los riesgos en la salud que ocasionan las dietas sin control médico y de instruir a la población sobre hábitos alimentarios saludables y adecuados a cada etapa de crecimiento;
n) promover la capacitación de profesionales y técnicos de la salud para optimizar su desempeño en la prevención y control de estas patologías;
ñ) elaborar periódicamente un mapa sanitario epidemiológico y un informe respecto a esta problemática;
o) desarrollar sistemas estadísticos, en toda la provincia, a fin de disponer oportunamente de la información necesaria para detectar grupos de personas vulnerables, avance de las acciones instrumentadas y metas alcanzadas; y
p) realizar toda otra acción conducente al logro de los objetivos del presente programa.

Artículo 4º.- La autoridad de aplicación dispondrá las medidas necesarias para que en cada una de las ciudades funcione, al menos, un sector especializado en trastornos alimentarios y sus enfermedades vinculadas.

Artículo 5º.- La detección, tratamiento, rehabilitación y seguimiento de los trastornos alimentarios deberá ser realizado por un equipo multidisciplinario, tales como médicos clínicos, cirujanos, nutricionistas, psicólogos y aquellos que la autoridad de aplicación estime pertinente.

Articulo 6º.- El Ministerio de Salud coordinará con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, subsecretarias y direcciones de niveles la implementación de las siguientes acciones:

a) la incorporación de la educación alimentaria nutricional (EAN) en el sistema educativo en todos sus niveles, como así también de medidas que fomenten la actividad física y eviten el sedentarismo, y la promoción de un ambiente escolar saludable;
b) la capacitación de educadores, trabajadores sociales, trabajadores de la salud y demás operadores comunitarios a fin de formar agentes aptos para:
   1. contribuir a la capacitación, perfeccionamiento y actualización de conocimientos básicos sobre la problemática alimentaria;
   2. detectar adecuadamente las situaciones de vulnerabilidad y promover acciones y estrategias para abordarlas a través de una adecuada orientación o derivación;
c) la realización de talleres y reuniones para dar a conocer a los padres cuestiones relativas a la prevención de los trastornos alimentarios, y los peligros de los estilos de vida no saludables; y
d) el desarrollo de estándares provinciales para garantizar que los planes alimentarios cumplan con los aspectos nutricionales adecuados para la población.”.

Artículo 7º.- El Ministerio de Salud auspiciará actos, seminarios, talleres, conferencias, certámenes y programas de difusión que contribuyan al conocimiento de los problemas que traen aparejado los diferentes trastornos alimentarios, y las formas de prevención.

Artículo 8º.- El Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social, desarrollará:

a) estándares alimentarios para garantizar que los comedores escolares y los planes alimentarios provinciales velen por los aspectos nutricionales de la población atendida, poniendo especial énfasis en la corrección de las deficiencias o excesos de nutrientes, atendiendo las particularidades de la cultura alimentaria local;
b) la capacitación de trabajadores sociales y demás operadores comunitarios a fin de formar personal apto para contribuir con el perfeccionamiento y actualización de conocimientos básicos sobre la problemática alimentaria; y
c) la detección de situaciones de vulnerabilidad y promoción de acciones y

estrategias para abordarlas a través de una adecuada orientación o derivación.

Artículo 9º.- Los quioscos y demás establecimientos de expendio de alimentos dentro de los establecimientos escolares deberán ofrecer únicamente productos que integren una alimentación saludable y variada, conforme a la Ley provincial 900, debiendo estar los mismos debidamente exhibidos.

Artículo 10.- La autoridad de aplicación deberá tomar medidas a fin de que la exhibición en los locales comerciales, los anuncios publicitarios y los diseñadores de moda, no utilicen la extrema delgadez como símbolo de salud o belleza, y ofrezcan una imagen saludable de los jóvenes, en particular de las mujeres.

Artículo 11.- Prohíbase la publicación o difusión en medios de comunicación de dietas o métodos para adelgazar que no conlleven el aval de un médico o licenciado en nutrición.

Artículo 12.- El Ministerio de Salud deberá requerir al responsable del producto alimentario publicitado o promocionado, la comprobación técnica de las aseveraciones que realice en el mismo, sobre la calidad, origen, pureza, conservación, propiedades nutritivas y beneficio de empleo de los productos publicitados.

Artículo 13.- Los anuncios publicitarios en medios masivos de comunicación de productos para bajar de peso deberán dirigirse, exclusivamente a mayores de 18 años de edad, debiendo ser protagonizados también por personas mayores de edad.

Artículo 14.- Incorpórase en el programa médico obligatorio, la cobertura del tratamiento integral de los trastornos alimentarios según las especificaciones que a tal efecto dicte la autoridad de aplicación.

Artículo 15.- La cobertura que deberán brindar todas las obras sociales y asociaciones de obras sociales del sistema nacional incluidas en la Ley nacional 23660, recipiendarias del fondo de redistribución de la Ley nacional 23661, el Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (IPAUSS), las demás obras sociales y organismos creados o regidos por leyes nacionales o provinciales y las empresas o entidades que presten servicios de medicina prepaga, conforme a lo establecido en la Ley nacional 24754, incluirá los tratamientos médicos necesarios, incluyendo los nutricionales, psicológicos, clínicos, quirúrgicos, farmacológicos y todas las prácticas médicas necesarias para una atención multidisciplinaria e integral de las enfermedades.

Artículo 16.- Los proveedores de bienes o servicios con destino al público en general no podrán negarse, ante el requerimiento de una persona obesa, a proporcionar el bien o servicio solicitado, en las condiciones que al respecto establezca el Poder Ejecutivo.

Tal negativa será considerada acto discriminatorio en los términos de la Ley nacional 23592.

Artículo 17.- El Poder Ejecutivo dispondrá las medidas necesarias a fin de que los establecimientos educacionales y sanitarios de su jurisdicción cuenten con las comodidades y el equipamiento adecuado para el uso y asistencia de las personas que padecen obesidad.

Artículo 18.- Todas las instituciones de atención médica, públicas y privadas, deberán llevar un registro estadístico de pacientes con trastornos alimentarios y de las enfermedades crónicas relacionadas. A tal efecto la autoridad de aplicación confeccionará los formularios de recolección y registro.

La autoridad de aplicación elaborará periódicamente un mapa sanitario epidemiológico y un informe sobre las acciones llevadas a cabo a nivel provincial. También se informará de los adelantos e investigaciones que sobre las enfermedades se estuvieren llevando a cabo a nivel oficial o con becas oficiales.

Artículo 19.- La autoridad de aplicación deberá fiscalizar periódicamente el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley. Asimismo dispondrá de una línea telefónica gratuita a fin de informar los alcances de la presente ley y recepcionar denuncias.

Artículo 20.- La autoridad de aplicación remitirá anualmente, a la Comisión Permanente de Asesoramiento Legislativo Nº 5 de la Legislatura provincial, un informe detallado sobre el desarrollo y proyección del programa provincial a fin de evaluar la correcta efectividad y operatividad del mismo.

Artículo 21.- El Poder Ejecutivo realizará las modificaciones presupuestarias pertinentes a los

fines del cumplimiento de la presente.
Artículo 22.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 60 días de su promulgación.
Artículo 23.- Derógase toda norma que se oponga a la presente ley.
Artículo 24.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.”.

Mociones

Sra. MARTÍNEZ.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito una modificación en el artículo 1º, que quedaría de la siguiente manera: “Establécese en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”; se quita: “de interés provincial”.

Sec. LEGISLATIVA.— Leemos el artículo que quedaría redactado de la siguiente manera: “Artículo 1º.- Establécese en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur la prevención y control de los trastornos alimentarios y sus enfermedades relacionadas, que comprenderá la investigación de sus agentes causales, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades vinculadas, asistencia integral y rehabilitación, incluyendo la de sus patologías derivadas, y las medidas tendientes a evitar su propagación.”.

Sra. MARTÍNEZ.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito que se incorporen los fundamentos al Diario de Sesiones.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción de la legisladora Martínez.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado. *(Ver fundamentos en Anexo II).*

Se pone a consideración, el asunto en comisión.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Sr. ARCANDO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito constituir la Cámara en sesión.

Sr. PRESIDENTE.— A consideración, la moción del legislador Arcando.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

En Sesión

Sr. PRESIDENTE.— Por tratarse de un proyecto de ley, corresponde votación nominal, en general que se tomará por Secretaría Administrativa.

Sec. ADMINISTRATIVO.— Procedo a tomar la votación.

- Votan por la afirmativa los legisladores Arcando, Barrientos, Blanco, Del Corro, Liendo, Marinello, Martínez, Martínez Allende, Rodríguez, Rojo, Siracusa y Tapia.
- Ausentes: legisladores Andrade Tenorio, Lechman y Löffler.

Sec. ADMINISTRATIVO.— Resultan 12 votos por la afirmativa, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.— Gracias, secretario. Aprobado.

- 23 -

Asunto Nº 474/14

Sistema Provincial de Acogimiento Familiar

Moción

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito que la Cámara se constituya en comisión.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Blanco.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

En Comisión

Sec. LEGISLATIVA.— "La Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Sanciona con fuerza de ley

Creación del Sistema Provincial de Acogimiento Familiar

Capítulo I
Del Sistema Provincial de Acogimiento

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene por objeto crear el sistema provincial de acogimiento familiar de la provincia de Tierra del Fuego, en el marco de la Ley nacional 26061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley provincial 521, Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y sus Familias.

Artículo 2°.- Fines. El sistema provincial de acogimiento familiar tendrá a su cargo el cumplimiento de la medida excepcional de protección, sea jurídica o administrativa, prevista en los artículos 39, 40 y 41 de la Ley nacional 26061 y artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley provincial 521, así como también los artículos correspondientes de sus decretos reglamentarios.

Artículo 3°.- Interés Superior. En acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño (CIDN) y las leyes mencionadas precedentemente que rigen en el territorio provincial, y ante las distintas situaciones que en el marco del acogimiento familiar se susciten, será de consideración primordial de niños, niñas y adolescentes el interés superior de los mismos.

Artículo 4°.- Derecho a la Convivencia Familiar y Comunitaria. El sistema de acogimiento familiar creado en el territorio provincial vela por el estricto cumplimiento del derecho a la convivencia familiar y comunitaria. En cumplimiento de este derecho, se instará a las instituciones que conforman dicho sistema a evitar por todos los medios la institucionalización de niños, niñas y adolescentes, siempre que los profesionales intervinientes no evalúen lo contrario.

Artículo 5°.- Derecho a la Identidad. El sistema de acogimiento familiar respeta y vela por el estricto cumplimiento del derecho a la identidad de los niños, niñas y adolescentes. En cumplimiento de este derecho se promoverá por todos los medios el regreso de los niños, niñas y adolescentes con sus progenitores, el acogimiento en familia extensa cuando ello no fuera posible, o la vinculación permanente con la familia biológica, siempre que los profesionales intervinientes no evalúen lo contrario.

Artículo 6°.- Definición. Se entiende por acogimiento familiar al cuidado integral, temporal y no

institucional brindado por un grupo familiar cuando un niño, niña o adolescente se encuentre privado de los cuidados de su grupo familiar de origen o cuando se haya dispuesto como medida excepcional de protección.

El acogimiento familiar no crea parentesco alguno entre acogedores y acogidos, no forma parte del proceso de adopción y preserva los derechos de la familia de origen.

Artículo 7°.- Actores. El sistema de acogimiento familiar comprende a todos los actores e instituciones que forman parte del sistema de protección y que despliegan sus recursos y saberes en pos de cumplir con los principios protectorios de la presente ley, cuando se hubiese dictado una medida excepcional de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Artículo 8°.- Acceso. El ingreso al sistema provincial de acogimiento familiar puede responder a:

a) la existencia de medida judicial o administrativa, dispuesta por autoridad competente, en orden a la preservación de los derechos de los beneficiarios definidos en el artículo 9°, que puedan ser afectados por situaciones presentes en su ámbito doméstico;
b) pedido de ingreso al sistema por parte de la familia del niño, niña y adolescente; y
c) pedido de ingreso al sistema por parte de las personas establecidas en el artículo 9°.

Artículo 9°.- Beneficiarios. Son beneficiarios del sistema provincial de acogimiento familiar todos aquellos niños, niñas y adolescentes desde su nacimiento hasta los 18 años de edad residentes en esta provincia, que se encuentren privados de forma temporaria o permanente de su grupo familiar de pertenencia, exista medida judicial o administrativa con causas o motivos suficientes para ordenar la separación de su medio familiar.

En todos los casos, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser escuchados antes de ser propuestos para el régimen de acogimiento familiar.

Capítulo II
De la Familia de Acogimiento

Artículo 10.- La Familia Acogedora. Se entiende por familia acogedora a aquella evaluada, formada y seleccionada por el organismo estatal competente, que dispone a recibir en su hogar a un niño, niña o adolescente, miembro de una familia que, en forma temporal, no pueda garantizar su desarrollo integral. Se evaluará de la familia acogedora la capacidad de cuidado, las motivaciones personales para hacerlo y las condiciones socioafectivas que brindarán a los niños, niñas y adolescentes de los que se responsabilizaren.

Artículo 11.- Funciones. Las familias de acogimiento tienen la función primordial de cuidar al niño, niña o adolescente garantizando la totalidad de sus derechos, adquiriendo estos la obligación de ofrecer un ambiente familiar que le proporcione cuidado, alimentación, educación y formación integral, con el fin de integrarlo a una vida familiar que complemente temporalmente a la familia de origen.

Artículo 12.- Evaluación. La familia postulante para acogimiento familiar deberá ser estrictamente evaluada por la autoridad de aplicación. Dicha evaluación considerará los aspectos psicológicos, sociales, relacionales, económicos, ambientales, de interés y motivaciones de los adultos que se involucrarán en los cuidados. En cuanto a los miembros menores se deberá evaluar, en la medida que su desarrollo lo permita, su percepción acerca de la tarea de acogimiento a la que se comprometerá su familia.

Artículo 13.- Capacitación. La familia postulante deberá percibir una capacitación previa a la incorporación de un niño, niña o adolescente a su hogar. Dicha capacitación estará a cargo de la autoridad de aplicación. Asimismo se brindará acompañamiento continuo acerca de los diversos aspectos que se ponen en juego en el acogimiento familiar.

Artículo 14.- Principio de Prioridad. El acogimiento puede ser otorgado en orden de prioridad a:

a) personas o grupos familiares vinculados con el niño, niña o adolescente a través

de líneas de parentesco, por consanguinidad o por afinidad;
b) personas o grupos familiares miembros de la familia ampliada del niño, niña o adolescente; y
c) personas o grupos familiares de la comunidad que reúnan las aptitudes y formación necesarias para constituirse en familia de acogimiento dando prioridad a aquellos que formen parte de la red de relaciones comunitarias y de lazos sociales del niño, niña o adolescente.

Artículo 15.- Excepción. Para el caso en que la familia acogedora del niño cuente con la guarda provisoria emitida por el juzgado competente queda a criterio de la autoridad de aplicación la incorporación de la familia a este sistema.

Artículo 16.- Exclusiones. No puede incluirse en el sistema provincial de acogimiento familiar a aquellas personas que:

a) hayan sido condenadas por delitos dolosos en contra de la vida o de la integridad sexual, previstos en la legislación penal, o hayan sido condenadas por reincidencia respecto de otros delitos;
b) hayan sido sancionadas con pérdida de la patria potestad o removidas por mal desempeño de tutela, curatela o guarda;
c) registren denuncias por actos de violencia familiar o violencia de género;
d) registren incumplimiento en sus obligaciones en materia alimentaria; y
e) registren incumplimientos en el régimen de visitas.”.

Artículo 17.- Responsabilidades**.** Las familias que se incorporen al sistema provincial de acogimiento familiar deberán:

a) cuidar que el niño, niña o adolescente se encuentre en adecuadas condiciones de vida garantizando especialmente su salud, equilibrio emocional, hábitat, vestimenta, higiene, educación y esparcimiento, y todos los derechos reconocidos por la normativa vigente;
b) actuar en coordinación con la autoridad de aplicación, los equipos técnicos y la familia de pertenencia del niño, niña o adolescente a fin de fortalecer sus vínculos y favorecer su retorno a la misma; y
c) brindar toda la información que la autoridad de aplicación del proceso de acogimiento y los responsables que esta determine soliciten en relación a su desempeño y estado del niño, niña o adolescente acogido.

Artículo 18.- Requisitos. La familia de acogimiento debe reunir los siguientes requisitos:

a) personas mayores de 25 años de edad cualquiera sea su estado civil;
b) incorporarse y participar del proceso de estudio y valoración;
c) deberán contar con una situación económica estable y una vivienda adecuada;
d) presentar certificado de antecedentes penales expedido por el Registro de Reincidencia;
e) certificado que acredite la no inclusión en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
f) presentar certificado de buena salud;
g) realizar las actividades de capacitación que determine la autoridad de aplicación;
h) residencia en la provincia no inferior a dos años; e
i) poseer una diferencia mínima de 15 años con el niño, niña o adolescente.

Artículo 19.- Límite. La familia de acogimiento puede tener a cargo hasta dos niños, niñas o adolescentes por proceso. Se exceptúan aquellos casos en los que el grupo a acoger esté conformado por tres o más hermanos o previos convivientes.

Artículo 20.- Cese. El sistema provincial de acogimiento familiar cesa por las siguientes causas:

a) resolución judicial;
b) resolución administrativa;
c) decisión de las personas que lo ejercen, previa comunicación a la entidad pública; y
d) a petición del menor de edad, comunicado fehacientemente a la autoridad judicial

o administrativa que corresponde.

En todos los casos, el menor sólo regresará a su familia de origen cuando las circunstancias que motivaron el ingreso del menor al sistema provincial de acogimiento familiar hayan cesado, teniendo en cuenta siempre el interés superior del niño.

Artículo 21.- Campañas para la captación y selección de familias. El órgano de aplicación diagramará e implementará campañas de difusión, información y captación de familias postulantes al acogimiento familiar de forma permanente en todo el territorio provincial, en medios de comunicación de alcance provincial o local cuya continuidad de emisión no podrá ser interrumpida.

Capítulo III
De la Familia Biológica

Artículo 22.- Propuesta terapéutica. El acogimiento familiar es una medida de protección excepcional de derechos para los niños, niñas y adolescentes; y una propuesta terapéutica para sus progenitores o persona que haya estado a su cuidado tendiente a revertir las circunstancias o condiciones que dieron lugar a la medida. La autoridad de aplicación deberá ofrecer alternativas terapéuticas suficientes en pos de lograr la restitución.

Artículo 23.- Derecho de contacto**.** La autoridad de aplicación dispondrá de los medios necesarios para garantizar el contacto frecuente y sostenido entre los niños, niñas y adolescentes y sus progenitores, hermanos, miembros de la familia extensa o referente familiar con quien tuviesen vínculo afectivo positivo. Sólo en los casos en los que se evalúe como perjudicial y negativo para el interés superior del niño dicho contacto, mediante informe fundado de la autoridad de aplicación, se denegarán o suspenderán temporalmente dichos contactos.

Artículo 24.- Restitución. El sistema provincial de acogimiento familiar se propondrá como objetivo primordial e irrenunciable el retorno de los niños, niñas y adolescentes con su familia de origen, facilitando para ello las instancias terapéuticas necesarias y suficientes. Sólo en situaciones en las que se evaluara imposible o perjudicial la restitución se propondrá otras alternativas de resolución de la medida excepcional, como la adopción o un régimen de vida autónomo, en casos de adolescentes en los que se evalúe pertinente esta alternativa.

Capítulo IV
De la Autoridad de Aplicación

Artículo 25.- Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación será la subsecretaria de Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia o el organismo que en el futuro la reemplace.

Artículo 26.- Obligaciones. Son obligaciones de la autoridad de aplicación:

a) fijar las pautas de funcionamiento del sistema y su articulación con el Poder Judicial, el sistema de promoción de los derechos del niño, los servicios locales de protección de derechos, las organizaciones de la sociedad civil y todo otro actor que considere relevante en el proceso;
b) determinar el tiempo de acogimiento, en caso de no existir disposición judicial. Su duración debe ser establecida en función del diagnóstico que diera origen al proceso, y entendiendo que la misma debe ser por el mínimo tiempo posible. Este plazo puede ser prorrogado cuando la autoridad competente dictamine, en función de los informes presentados por la entidad de seguimiento, la persistencia de las causas que dieron origen al acogimiento o cuando por motivos fundados, dicho organismo constate la inconveniencia del retorno del niño, niña o adolescente a su hogar;
c) determinar la capacitación, constitución y el ámbito de actuación de los equipos técnicos que tendrán a su cargo la formación, evaluación, selección y contención de las familias intervinientes;

d) diseñar e implementar un sistema de capacitación para la formación y apoyo de los participantes del sistema de acogimiento;
e) gestionar el acuerdo entre la niña, niño o adolescente, la familia de origen y la familia de acogida que habilite el inicio del proceso de acogimiento y en el que consten las finalidades, alcances, derechos, garantías y responsabilidades que se asumen en este proceso;
f) asistir a la niña, niño o adolescente para garantizar la cobertura de sus necesidades básicas a través de la familia de acogida y disponer las medidas necesarias para la atención de la familia de origen;
g) elaborar y llevar actualizado un registro de cada proceso de acogimiento que incluya la documentación requerida así como las evaluaciones, seguimientos y todo otro proceder inherente;
h) preservar la privacidad del niño, niña o adolescente y de las familias participantes; e
i) establecer un sistema de supervisión y controles sistemáticos, con informes que no pueden exceder la frecuencia trimestral y con responsables específicos para cada proceso de acogimiento, que aseguren la disponibilidad permanente de información desde y hacia las niñas, niños y adolescentes y sus familias de origen y de acogida.

Capítulo V
De los Beneficios del Sistema Provincial de Acogimiento Familiar

Artículo 27.- Obra social. Los beneficiarios definidos en el artículo 9°, incluidos en el sistema provincial de acogimiento familiar que no posean obra social, deben ser incorporados al Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (IPAUSS).
Artículo 28.- Recurso económico. La familia acogedora percibirá un subsidio mensual cuyo importe será equivalente al 30% del sueldo bruto de la categoría 10 PAyT de un agente de la Administración Pública provincial, escalafón seco, por niño, niña o adolescente a cargo. En caso que la estadía sea menor a un mes el subsidio será en proporción a los días de acogimiento de estos en el seno familiar.

La familia acogedora percibirá el subsidio dentro de los 30 días corridos de recibir al niño, niña o adolescente sea que la medida sea dictada por oficio judicial o por el órgano administrativo competente para dicho acto.
Artículo 29.- Licencia especial. Se fijará a favor de la familia acogedora un período de licencia extraordinaria que se otorgará con goce íntegro de haberes, siendo obligatoria su concesión, de 15 días corridos a partir del primer día hábil posterior a la fecha de la recepción del menor.

El plazo de licencia se ampliará en cinco días corridos más, cuando el acogimiento sea múltiple por cada menor posterior al primero.

Asimismo, se acuerda para la familia acogedora el mismo régimen legal de licencias aplicable para los cuidados de atención al grupo familiar, siempre que el acogimiento sea mediante acto administrativo u oficio judicial.

Este régimen especial de licencias se acuerda para la familia acogedora siempre que el empleador sea notificado de forma fehaciente del acto administrativo u oficio judicial que autoriza el acogimiento.
Artículo 30.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el plazo de 90 días desde su promulgación.
Artículo 31.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.”.

Moción

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Previo a la votación en comisión, solicito que los fundamentos que dieron lugar al proyecto, sean incorporados al Diario de Sesiones.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Blanco.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado. *(Ver fundamentos en Anexo II).*
Se pone a consideración el Asunto Nº 474/14.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Moción

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.
Señor presidente: Solicito que la Cámara se constituya en sesión.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Blanco.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

En Sesión

Sr. PRESIDENTE.— Por tratarse de un proyecto de ley, corresponde votación nominal, en general que se tomará por Secretaría Administrativa.
Sec. ADMINISTRATIVO.— Procedo a tomar la votación.

- Votan por la afirmativa los legisladores Arcando, Barrientos, Blanco, Del Corro, Liendo, Marinello, Martínez, Martínez Allende, Rodríguez, Rojo, Siracusa y Tapia.
- Ausentes: legisladores Andrade Tenorio, Lechman y Löffler.

Sec. ADMINISTRATIVO.— Resultan 12 votos por la afirmativa, señor presidente.
Sr. PRESIDENTE.— Gracias, secretario. Aprobado.

- 24 -

Asunto Nº 521/14

Procedimiento Judicial de Protección a Víctimas de Violencia Familiar

Moción

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.
Señor presidente: Solicito que la Cámara se constituya en comisión.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Blanco.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

En Comisión

Sec. LEGISLATIVA.— ""La Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas

del Atlántico Sur

Sanciona con fuerza de ley

Procedimiento Judicial de Protección a Víctimas de Violencia Familiar

Artículo 1º.- Las disposiciones de la presente ley tienen como finalidad prever las medidas de protección judicial para la víctima de violencia familiar y las sanciones para quien la ejerza.
Artículo 2º.- Se entenderá a los fines de la presente ley como violencia familiar a toda acción, omisión o abuso dirigido a dominar, someter, controlar o agredir la integridad física, psíquica, moral, psicoemocional, sexual o la libertad de una persona en el ámbito de las relaciones familiares, aunque la misma no configure delito.
Artículo 3º.- Toda persona que fuere víctima de violencia por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar podrá denunciar los hechos en forma oral o escrita ante cualquier autoridad judicial o policial. Se entenderá por integrantes del grupo familiar el originado en el matrimonio, en uniones de hecho o de relaciones de noviazgo o pareja, sean convivientes o no, persista o haya cesado el vínculo, comprendiendo ascendientes, descendientes, colaterales o por afinidad.
Articulo 4°.- El funcionario receptor de la denuncia deberá poner en conocimiento en forma inmediata al Juzgado de Familia y Minoridad por la vía más expedita, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad funcional. La denuncia se podrá receptar en formulario especial que podrá ser creado a tal efecto por vía reglamentaria del Poder Judicial.
Articulo 5º.- Podrán formular denuncia las personas enumeradas en el artículo 3º y toda persona que tenga fundadas sospechas de la comisión de un hecho de violencia descripto en la presente ley.
Artículo 6º.- Cuando las víctimas estuvieran impedidas de realizar las denuncias por su condición física o psicológica, o cuando fueran menores de edad o incapaces, o por cualquier causa estén imposibilitados de accionar por sí, los hechos deberán ser denunciados por sus representantes legales, los obligados por alimentos, el Ministerio Público, los servicios asistenciales, sociales y educativos, los profesionales de la salud. Si además, el hecho configurara delito, los funcionarios públicos se encuentran obligados a formular la denuncia penal.
Artículo 7°.- El juzgado, en todos los casos, requerirá un informe efectuado por un equipo interdisciplinario. El juzgado establecerá los daños físicos y psíquicos, económicos o de otro tipo sufridos por la víctima, la situación de peligro en que se encuentra, el medio social y ambiental de la familia y las características de su funcionamiento.

Para estas evaluaciones se valdrá de los informes de expertos de las distintas áreas competentes. El juzgado puede acudir para ello a informes de equipos interdisciplinarios de la administración pública o a profesionales de organizaciones de la sociedad civil idóneas en el tratamiento de la violencia, evitando producir nuevos informes que provoquen revictimización.

El equipo interdisciplinario interviniente sugerirá estrategias de abordaje referidas al ámbito de su incumbencia profesional en relación al grupo familiar afectado.
Artículo 8°.- El juzgado podrá adoptar de manera provisoria, por el tiempo que estime, toda aquella medida necesaria para garantizar la seguridad del agredido, hacer cesar la situación de violencia y evitar la repetición de todo acto de perturbación o intimidación, agresión y maltrato del agresor. A título enunciativo se mencionan:

a) ordenar la exclusión de la vivienda donde habita el grupo familiar de quien el juzgado considere conveniente, si halla que la continuación de la convivencia significa un riesgo para la integridad física o psíquica de alguno de sus integrantes;
b) prohibir el acceso o acercamiento del denunciado, tanto al domicilio de quien fue la víctima de los hechos puestos en su conocimiento, como a su lugar de trabajo o estudio con el objeto de evitar la repetición de actos de violencia. También podrá prohibir que el denunciado realice actos de perturbación o intimidación de alguno de los integrantes del grupo familiar;
c) decidir el reintegro al domicilio a petición de quien ha debido salir del mismo por

razones de seguridad personal, excluyendo en tal caso de dicha vivienda, al supuesto agresor;

d) otorgar la guarda protectora en caso de que la víctima fuere un niño o adolescente, mediante resolución fundada, a quien considere idóneo para tal función en los términos de la Ley 521, fijándose alimentos de manera provisoria. También podrá suspender el régimen de visitas del progenitor agresor;
e) ordenar la restitución inmediata de los efectos personales a la parte peticionante, si esta se ha vista privada de los mismos; prohibir al presunto agresor enajenar, disponer, destruir, ocultar o trasladar bienes gananciales de la sociedad conyugal o los comunes de la pareja conviviente; disponer el inventario de los bienes gananciales de la sociedad conyugal y de los bienes propios de quien ejerce y padece violencia. En los casos de las parejas convivientes se puede disponer el inventario de los bienes de cada uno;
f) prohibir al presunto agresor la compra y tenencia de armas, y ordenar el secuestro de las que estén en su posesión; y
g) podrá ordenar a los organismos pertinentes que provean alojamiento temporario para las víctimas si fuera necesario para resguardo de su vida o integridad.

Artículo 9°.- Ante la comprobación de las acciones violentas o ante el incumplimiento de las órdenes emitidas, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que correspondan, el juzgado adoptará alguna o varias de las siguientes sanciones alternativas, según las circunstancias del caso:

a) amonestación por el acto cometido;
b) multas pecuniarias en favor de la parte agredida, cuyo monto se fijará teniendo en cuenta la situación patrimonial del agresor, el que no podrá ser inferior a un salario mínimo, vital y móvil, ni mayor a 100;
c) realización de trabajos comunitarios durante los fines de semana, cuya duración se determinará conforme a la evolución de la conducta del agresor, entre un mínimo de un mes y un máximo de un año;
d) comunicación de los hechos de violencia denunciados a la asociación profesional, sindical u organización intermedia o lugar de trabajo a la que pertenezca el agresor; y
e) asistencia obligatoria del agresor a programas reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes a la modificación de conductas violentas, con informes periódicos y resultado del tratamiento al juzgado.

Cuando el incumplimiento configure desobediencia u otro delito, el juzgado deberá poner el hecho en conocimiento al juzgado con competencia penal.

Artículo 10.- En los casos de incumplimiento del agresor a una orden de protección a la víctima ordenada por el juzgado, a los fines de asegurar la protección de la misma o para asegurar el comparendo del incumplidor a primera audiencia, el juzgado podrá ordenar su arresto por 24 horas, en uso de las facultades conferidas por el artículos 337.11 y 49.4 inciso b), del Código de Procedimiento Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero.

En este supuesto, antes de disponer la libertad, el juzgado notificará al agresor que frente a un nuevo incumplimiento de las órdenes emitidas en virtud de lo dispuesto por el artículo 8º, inciso b), se le dará intervención al juzgado penal ante la posible configuración del delito de desobediencia previsto en el artículo 239 del Código Penal, sin perjuicio de la continuación de las actuaciones.

Artículo 11.- Durante el transcurso de la causa y después de finalizada la misma, por el tiempo que se juzgue prudente, el juzgado controlará el resultado de las medidas y decisiones adoptadas, a través de la comparencia de las partes al mismo con la frecuencia que se ordene, mediante la intervención del equipo interdisciplinario quienes elaborarán informes periódicos acerca de la situación.

Artículo 12.- Los funcionarios policiales y los de organismos e instituciones a los cuales acudan las personas afectadas tendrán la obligación de informar sobre los recursos legales existentes frente a los hechos de violencia doméstica.

Artículo 13.- La presentación de la denuncia podrá hacerse en forma escrita o verbal, con o sin patrocinio letrado.

Las partes deberán contar para la sustanciación del proceso, con asistencia letrada, la que podrá solicitarse al defensor de pobres y ausentes, teniendo en cuenta la gratuidad que rige el proceso.

En el escrito inicial, el interesado podrá peticionar fundadamente todas las medidas cautelares de urgencia conexas con el hecho denunciado.

Artículo 14.- El procedimiento será gratuito, sumarísimo y actuado. El juzgado fijará una audiencia, que tomará personalmente, dentro de las 48 horas de conocer los hechos, sin perjuicio de la adopción previa de las medidas a que se refiere el artículo 8º. En dicha audiencia, escuchará a las partes por separado bajo pena de nulidad. Quedan prohibidas las audiencias de mediación o conciliación por estas causas. Se comunicará al centro de mediación el inicio de las causas por violencia.

El presunto agresor estará obligado a comparecer bajo apercibimiento de ser llevado ante el juzgado con auxilio de la fuerza pública.

Artículo 15.- En caso de adoptarse la resolución a la que alude el artículo 8º, cualquiera de las partes, dentro de los 30 días de dictada, puede promover en el expediente demanda para continuar el juicio por violencia familiar. De la demanda se debe correr traslado por el plazo de cinco días.

Artículo 16.- Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, el juzgado puede declarar de puro derecho la causa o cuando hubiere hechos controvertidos ordenar la apertura a prueba con los elementos existentes en autos y con los demás ofrecidos por las partes u ordenados por el juzgado.

Pueden ser ofrecidos como testigos, y deberán declarar aquellos parientes mencionados en el artículo 392.1 del Código de Procedimiento Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero por tratarse de un proceso referido a hechos de violencia en un ámbito íntimo.

Artículo 17. Finalizada la etapa probatoria o declarada la causa de puro derecho, el juzgado debe dictar sentencia rechazando o admitiendo la demanda. Si se admitiere la denuncia, el juzgado podrá:

a) confirmar o modificar las medidas de protección de naturaleza cautelar dictadas, las que podrán tener carácter de definitivas;
b) aplicar una o más sanciones de las previstas en el artículo 9º de la presente ley; y
c) fijar la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados, cuando la víctima los hubiera reclamado en este proceso.

Artículo 18.- Las resoluciones que concedan, rechacen, interrumpan, modifiquen o dispongan el cese de alguna de las medidas preventivas urgentes o impongan sanciones, serán apelables dentro del plazo de tres días hábiles.

La apelación contra resoluciones que concedan medidas preventivas urgentes y las sentencias definitivas se concederá sin efecto suspensivo.

La apelación contra resoluciones que dispongan la interrupción o el cese de tales medidas se concederá con igual efecto.

Artículo 19.- Los antecedentes y documentación correspondientes a los procedimientos se mantendrán en reserva, salvo para las partes, letrados y expertos intervinientes. Las audiencias serán privadas.

Podrá solicitar el interesado la reserva de la identidad del denunciante.

Artículo 20. Las organizaciones públicas o privadas podrán colaborar en el proceso a través de la figura del instituto de *amicus curiae*, el cual podrá solicitarse o ser requerido por el juzgado, en carácter de la colaboración de organizaciones o entidades públicas o privadas dedicadas a la protección de los derechos de las mujeres, niños, niñas o adolescentes y ancianos.

Artículo 21.- En caso de ser solicitado por la parte interesada, el juzgado podrá autorizar en los actos procesales en los que intervenga a la víctima será acompañada por una persona de su confianza.

Articulo 22. Las actuaciones fundadas en la presente ley estarán exentas del pago de sellado,

tasas, depósitos y cualquier otro impuestos sin perjuicio de lo establecido en el artículo 78 del Código Procesal, Comercial, Laboral, Rural y Minero de la provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, en materia de costas.
Artículo 23. Derógase la Ley 39 y toda otra norma que se oponga a la presente.
Artículo 24. Comuníquese al Poder Ejecutivo.”.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración de la Cámara.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Moción

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.
Señor presidente: A efectos de constituir la Cámara en sesión, para la votación del proyecto de ley en general y en particular, en forma nominal.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Blanco.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

En Sesión

Mociones

Sra. MARTÍNEZ ALLENDE .— Pido la palabra.
Señor presidente: Solicito la incorporación de los fundamentos que dieron origen al proyecto, al Diario de Sesiones; por favor.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción de la legisladora.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado. *(Ver fundamentos en Anexo II).*
Se procede a la votación nominal, en general y en particular, por Secretaría Administrativa.
Sec. ADMINISTRATIVO.— Procedo a tomar la votación.

- *Votan por la afirmativa los legisladores Arcando, Barrientos, Blanco, Del Corro,Liendo, Marinello, Martínez, Martínez Allende, Rodríguez, Rojo, Siracusa y Tapia.*
- *Ausente: legisladores Andrade Tenorio, Lechman y Löffler.*

Sec. ADMINISTRATIVO.— Resultan 12 votos por la afirmativa, señor presidente.
Sr. PRESIDENTE.— Gracias, secretario. Aprobado.

- 25 -

Asunto Nº 389/14

Régimen Único de Pensiones Especiales

Moción

Sr. RODRÍGUEZ.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito constituir la Cámara en comisión, por tratarse de un proyecto de ley sin dictamen.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Rodríguez.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

En Comisión

Sec. LEGISLATIVA.— "La Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Sanciona con fuerza de ley

Artículo 1º.- Incorpórase como inciso e), al artículo 7º, de la Ley provincial 389, Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE), el siguiente texto:

'e) los montos correspondientes a las pensiones otorgadas en el marco de la presente ley deberán ser abonados dentro del plazo máximo de cinco días hábiles del período que corresponda, mediante depósito bancario, en cuenta habilitada a tal fin en el Banco de Tierra del Fuego, la que no tendrá costo para el beneficiario.

El recibo prestacional correspondiente al pago del período abonado deberá ponerse a disposición del beneficiario dentro del mismo plazo estipulado en el párrafo anterior en lugar de fácil accesibilidad, eliminándose cualquier barrera u obstáculo que impida razonablemente su obtención por parte del mismo de su recibo prestacional'.

Artículo 2º.- El poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro del término de 30 días contados a partir de su promulgación.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.".
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración, a mano alzada.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Moción

Sr. RODRÍGUEZ.— Pido la palabra.
Señor presidente: Solicito constituir la Cámara en sesión para la votación nominal, en general y en particular.
Sr. PRESIDENTE.— A consideración, la moción del legislador Rodríguez.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

En Sesión

Moción

Sr. ARCANDO.— Pido la palabra.
Señor presidente: Solicito autorización al Cuerpo para que los fundamentos del proyecto que se acaba de votar en comisión, sean incorporados al Diario de Sesiones.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Arcando.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado. *(Ver fundamentos en Anexo II).*

Por tratarse de un proyecto de ley, corresponde votación nominal, en general que se tomará por Secretaría Administrativa.

Sec. ADMINISTRATIVO.— Procedo a tomar la votación.

- Votan por la afirmativa los legisladores Arcando, Barrientos, Blanco, Del Corro, Liendo, Marinello, Martínez, Martínez Allende, Rodríguez, Rojo, Siracusa y Tapia.

- Ausentes los legisladores Andrade Tenorio, Lechman y Löffler.

Sec. ADMINISTRATIVO.— Resultan 12 votos por la afirmativa, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

- 26 -

Asunto Nº 490/14

Regulación de la Práctica del Acompañante Terapéutico

Moción

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Por tratarse de un proyecto que no tiene dictamen, solicito constituir la Cámara en comisión.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Blanco.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado. La Cámara se constituye en comisión.

Por Secretaría se da lectura al asunto.

En Comisión

Sec. LEGISLATIVA.— "La Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Sanciona con fuerza de ley

Ley de Regulación de la Práctica del Acompañante Terapéutico
en el Ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto regular en el ámbito de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur la actividad técnico profesional del acompañante terapéutico. Se entenderá como acompañante terapéutico a todo agente cuya función sea asistir específicamente en el área de salud, como parte de un dispositivo interdisciplinario. El acompañante terapéutico podrá ejercer la actividad de acompañamiento por solicitud e indicación del profesional de la salud a cargo del tratamiento, en forma privada o en instituciones públicas o privadas responsables del paciente o por disposición del Poder Judicial.

La tarea del acompañante terapéutico abarcará el trabajo con niños, niñas, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad en situaciones de vulnerabilidad, en cuidados paliativos, enfermedades mentales, enfermedades crónicas, en situaciones de catástrofe social o naturales; entre otras situaciones que amerite en actuación del acompañamiento terapéutico.

Artículo 2º.- Son objetivos del acompañamiento terapéutico:

a) favorecer el desarrollo biopsicosocial y autovalimiento del sujeto respetando su autonomía y singularidad;
b) fortalecer y afianzar la capacidad del sujeto para el sostenimiento de vínculos saludables;
c) actuar de nexo para la construcción de nuevos vínculos saludables del sujeto;
d) intervenir para facilitar a la persona su integración en el proceso de vida independiente; y
e) evitar la estigmatización social que implica el pasaje por una institución de salud.

Artículo 3º.- Créase el registro de acompañantes terapéuticos en el ámbito de la provincia, dependiente del Ministerio de Salud. Será función de dicho organismo, el contralor del ejercicio técnico profesional de quienes se inscriban con el fin de ejercer como acompañantes terapéuticos. Para la realización de tal listado se tendrá en cuenta el registro que posee la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la República Argentina (AATRA).

Artículo 4º.- Son requisitos para el ejercicio del acompañamiento terapéutico:

a) estar inscripto en el Registro de Acompañantes Terapéuticos;
b) ser egresado de instituciones terciarias, universitarias, públicas o privadas, reconocidas oficialmente por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación;
c) los que poseen títulos otorgados por universidades extranjeras o nacionales, en virtud de tratados internacionales;
d) las personas que hayan revalidado títulos otorgados por universidades extranjeras, y cumpliendo los requisitos exigidos por universidades argentinas para la obtención de los mismos; y
e) denunciar domicilio real y constituir domicilio legal en el ámbito de actuación.

Artículo 5º.- A los fines de la presente ley, el Ministerio de Salud será el encargado de extender a quienes reúnan los requisitos enunciados en el artículo anterior, la correspondiente credencial que habilite al ejercicio técnico profesional.

Artículo 6º.- El ejercicio del acompañamiento terapéutico consistirá únicamente en la ejecución personal de los actos enunciados en la presente ley, quedando prohibido todo préstamo de la firma o nombre profesional a terceros.

Artículo 7º.- El Estado provincial deberá incluir la cobertura del acompañamiento terapéutico en las prestaciones ofrecidas por las obras sociales oficiales y, en el plazo de un año, las demás obras sociales deberán contener la prestación del acompañamiento terapéutico entre su asistencia.

Artículo 8º.- Las personas que ejerzan el acompañamiento terapéutico podrán:

a) certificar, a pedido de la persona asistida, las prestaciones del servicio de acompañamiento que efectúe, así como las limitaciones de su propia actividad, restricciones en la participación o dar cuenta de cualquier otro obstáculo que obstruya su desempeño; y
b) abstenerse de intervenir en aquellos casos en los que no haya terapeuta, coordinador o profesional a cargo del tratamiento, entendiendo que el ejercicio técnico profesional del acompañante terapéutico constituye una labor inmersa en un dispositivo asistencial interdisciplinario.

Artículo 9º.- Las personas que ejerzan el acompañamiento terapéutico estarán obligadas a:

a) coordinar acciones permanentes con los profesionales de la salud, en tanto integrante de un equipo interdisciplinario para orientar la tarea de acompañamiento;
b) supervisar las tareas con un director, jefe de área, profesional a cargo del tratamiento o coordinador del equipo de salud;
c) promover o proteger a las personas acompañadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que el acompañamiento terapéutico se realice de acuerdo a normas éticas, conforme al artículo 10 de la presente;
d) prestar colaboración que le sea requerida por las autoridades sanitarias en caso de

emergencia; y

e) guardar el más riguroso secreto profesional sobre cualquier acto que realizare en cumplimiento de sus tareas específicas, así como de los datos o hechos que se les comunicare en razón de su actividad de acompañamiento. Serán exceptuados del secreto los casos de presunción de maltrato o abuso cometido en perjuicio de un menor de edad y aquellos en que exista una obligación legal de expresarse.

Artículo 10.- Se tendrá en cuenta el Código de Ética de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la República Argentina (AATRA) que tiene como propósito proveer tanto principios generales como normativas deontológicas orientadas a las situaciones con que pueden encontrarse los acompañantes terapéuticos en el ejercicio de su profesión, estableciendo así las reglas de conducta profesional que han de regir su práctica.

Artículo 11.- Queda prohibido a los acompañantes terapéuticos:

a) prescribir, administrar o aplicar medicamentos sin la correspondiente orden médica;
b) anunciar o hacer anunciar actividad de acompañamiento terapéutico cuando se difundan falsos éxitos terapéuticos, estadísticas ficticias, datos inexactos, promesas de resultados en la curación o cualquier otro hecho o afirmación que no se ajuste a la realidad;
c) delegar la atención de las personas acompañadas a alguna persona auxiliar no habilitada; y
d) anunciar actividades laborales como acompañante terapéutico sin aclarar en forma inequívoca el cumplimiento de las indicaciones terapéuticas emanadas por el equipo interdisciplinario de salud. Los anuncios no podrán contener informaciones inexactas o ambiguas que puedan provocar confusión sobre el acompañante terapéutico, sus títulos o actividades, ni contener otra denominación que el acompañamiento terapéutico, ni vocablos afines aludiendo a prácticas no incluidas en la presente.

Artículo 12.- Los acompañantes terapéuticos que violen las disposiciones de la presente ley o su reglamentación son pasibles de las sanciones que la autoridad de aplicación determine, con independencia de la responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley de fondo disponga.

Artículo 13.- El Estado provincial dispondrá la inclusión del acompañante terapéutico en aquellos ministerios, dependencias, áreas o instituciones provinciales en que el mismo resulte necesario, siendo reconocido como tal.

Artículo 14.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 60 días de su promulgación.

Artículo 15.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.”.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración de la Cámara.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Sr. ARCANDO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito poner el Cuerpo en sesión.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Arcando.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

En Sesión

Sr. PRESIDENTE.— Legisladora Martínez, tiene la palabra…

¿Le sacó la palabra el legislador? Yo se la vuelvo a otorgar.

Sra. MARTÍNEZ. — No, está bien.
Sr. PRESIDENTE.— Corresponde tomar la votación nominal, en general y en particular, por Secretaría Administrativa
Sec. ADMINISTRATIVO.— Procedo a tomar la votación.

- Votan por la afirmativa los legisladores Barrientos, Blanco, Del Corro, Liendo, Marinello, Martínez, Martínez Allende, Rodríguez, Rojo, Siracusa y Tapia.
- Ausentes: legisladores Andrade Tenorio, Lechman y Löffler.

Sec. ADMINISTRATIVO.— Resultan 12 votos por la afirmativa, señor presidente.
Sr. PRESIDENTE.— Aprobado. Muchas gracias, secretario.

- 27 -

Asunto Nº 534/14

Modificación Código Fiscal

Moción

Sr. RODRÍGUEZ.— Pido la palabra.
Señor presidente: Solicito constituir la Cámara en comisión, por tratarse de un proyecto de ley.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Rodríguez.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

En Comisión

Sec. LEGISLATIVA.— "La Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Sanciona con fuerza de ley

'Artículo 1º.- Sustitúyase el artículo 28 de la Ley provincial 439, Código Fiscal, el que quedará redactado de la siguiente manera:

'Artículo 28.- La declaración jurada está sujeta a verificación administrativa y sin perjuicio del tributo que en definitiva liquide o determine la dirección, hace responsable al declarante por el gravamen que en ella se basa o resulte, cuyo monto no podrá reducir por correcciones posteriores cualquiera sea la forma de su instrumentación, salvo en los casos de errores comprobables mediante el aporte de documentación respaldatoria aportada por el contribuyente. Se considerará suficiente documentación respaldatoria de las facturas emitidas por el contribuyente que corresponden al período rectificado, sobre las cuales recaiga el tributo'.

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.".

Mociones

Sr. RODRÍGUEZ.— Pido la palabra.
Señor presidente: Pido que los fundamentos que dieron origen al proyecto sean incorporados al Diario de Sesiones en el día de la fecha.
Aclaro que se viene a resolver una inequidad que se producía en las declaraciones juradas, que cuando había errores en más, que no podían ser corregidos, y en función de eso

se tenía que pagar más ingresos brutos de lo que se declaraba. Ahora lo que hacemos en función de esto es que ,cuando haya errores de ese tipo, con esta corrección lo que hacemos es darle la oportunidad al contribuyente de que abone realmente lo que corresponde y cuando esto ocurra, solo con la presentación de la nueva documentación que puede ser la factura, o lo facturado a lo largo del año. Nada más, señor presidente.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Rodríguez.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado. *(Ver fundamentos en Anexo II).*
Sr. RODRÍGUEZ.— Pido la palabra.
Señor presidente: Pido constituir la Cámara en sesión.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Rodríguez.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

En Sesión

Sr. PRESIDENTE.— Por tratarse de un proyecto de ley, corresponde votación nominal, en general que se tomará por Secretaría Administrativa.
Sec. ADMINISTRATIVO.— Procedo a tomar la votación.

- Votan por la afirmativa los legisladores Arcando, Barrientos, Blanco, Del Corro, Liendo, Marinello, Martínez, Martínez Allende, Rodríguez, Rojo, Siracusa y Tapia.
- Ausentes: legisladores Andrade Tenorio, Lechman y Löffler.

Sec. ADMINISTRATIVO.— Resultan 12 votos por la afirmativa, señor presidente.
Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

- 28 -

Asunto Nº 449/14

Día Provincial de Concienciación sobre la Diabetes

Moción

Sr. ARCANDO.— Pido la palabra.
Señor presidente: Por tratarse de un proyecto de ley, solicito constituir la Cámara en comisión.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Arcando.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado. La Cámara se constituye en comisión.
Por Secretaría se dará lectura al asunto.

En Comisión

Sec. LEGISLATIVA.— “La Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Sanciona con fuerza de ley

Artículo 1º.- Institúyese el día 14 de noviembre de cada año como 'Día Provincial de Concienciación sobre la Diabetes', adhiriendo a la Resolución 61/225, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 20 de diciembre de 2006.
Artículo 2°.- El Poder Ejecutivo provincial, a través del Ministerio de Salud, Ministerio Educación y la Subsecretaría de Comunicación Institucional, o quienes las reemplacen en un futuro, deberán organizar y ejecutar campañas de concienciación sobre la diabetes en un todo de acuerdo a lo que establece la Federación Internacional de Diabetes (FID).
Artículo 3°.- Invítase a los municipios de la provincia a adherir a la presente ley.
Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.”.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración el proyecto en comisión.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Moción

Sr. ARCANDO.— Pido la palabra.
Señor presidente: Solicito que la Cámara se constituya en sesión.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Arcando.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

En Sesión

Sr. PRESIDENTE.— Por tratarse de un proyecto de ley, corresponde votación nominal, en general que se tomará por Secretaría Administrativa.
Sec. ADMINISTRATIVO.— Procedo a tomar la votación.

- Votan por la afirmativa los legisladores Arcando, Barrientos, Blanco, Del Corro, Liendo, Marinello, Martínez, Martínez Allende, Rodríguez, Rojo, Siracusa y Tapia.
- Ausentes: legisladores Andrade Tenorio, Lechman y Löffler.

Sec. ADMINISTRATIVO.— Resultan 12 votos por la afirmativa, señor presidente.
Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Moción

Sr. ARCANDO.— Pido la palabra.
Señor presidente: Solicito al Cuerpo autorización para que los fundamentos del proyecto que se acaba de tratar en comisión, sean incorporados al Diario de Sesiones.
Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Arcando.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado. *(Ver fundamentos en Anexo II).*

- 29 -

Asunto Nº 537/14

Las Malvinas son Argentinas

Moción

Sr. BARRIENTOS.— Pido la palabra.

Señor presidente: Por tratarse de un proyecto de ley, solicito constituir la Cámara en Comisión.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Barrientos.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Por Secretaría se dará lectura al asunto.

En Comisión

Sec. LEGISLATIVA.— “La Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Sanciona con fuerza de ley

Artículo 1º.- Es objeto de la presente ley la concientización de la pertenencia territorial, histórica y jurídica de las islas Malvinas a la República Argentina y, en particular, a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, tanto respecto de sus habitantes como de las personas que visitan nuestra provincia, mediante el uso de la leyenda 'Las Malvinas son Argentinas', en medios de transporte y diversos espacios públicos y privados.

Artículo 2º.- Los medios de transportes públicos y privados de pasajeros, de origen nacional o extranjero, que presten servicios por cualquier título dentro de la jurisdicción del Estado provincial, sea terrestre, fluvial, lacustre, marítimo o aéreo, están obligados a disponer en sus unidades de transporte la leyenda 'Las Malvinas son Argentinas', en un espacio visible y destacado con la tipografía y formato que determine la reglamentación de la presente ley.

Artículo 3º.- Las estaciones de llegada, partida o escala del medio de transporte del que se trate deberán disponer de un espacio visible y destacado a efectos de inscribir la leyenda citada en el artículo 1º, acorde al diseño que se establezca en la reglamentación de la presente ley.

Artículo 4º.- Los locales comerciales, bancos, hoteles y restaurantes ubicados en las ciudades de la provincia deberán exhibir la leyenda establecida en el artículo 1º.

La reglamentación de la presente ley, previa consulta a las municipalidades de la provincia, determinará las arterias que delimiten el área de cumplimiento obligatorio en cada una de las ciudades.

Artículo 5º.- El Estado provincial dispondrá lo necesario para que en el Paso Internacional San Sebastián pueda ser adquirida por los propietarios de transporte público o privado de pasajeros que ingresen a la provincia, la cartelería reglamentaria para exhibir en sus unidades móviles mientras permanezcan prestando servicios en territorio provincial.

Artículo 6º.- La empresa concesionaria del aeropuerto internacional de Ushuaia “Malvinas Argentinas”, deberá exhibir, además de lo establecido precedentemente, la misma leyenda en al menos un bastidor publicitario, por cada sentido de circulación, de los existentes en la ruta de acceso a dicha terminal.

Artículo 7º.- La empresa concesionaria del aeropuerto internacional de Ushuaia 'Malvinas Argentinas', deberá instalar sobre el plano inclinado que conforma el techo del cuerpo

principal de la aeroestación, la figura geográfica representativa de las Islas Malvinas.

La reglamentación de la presente ley determinará las características de la obra, las dimensiones de la figura, suficientes para que pueda ser visualizada e identificada a gran distancia; el material con el que será construida y/o pintada, como así también el financiamiento de la obra que deberá estar terminada antes del 20 de noviembre de 2015, Día de la Soberanía Nacional.

Artículo 8º.- Serán autoridad de aplicación de la presente ley los organismos provinciales con competencia específica en cada una de las materias alcanzadas por la presente.

Artículo 9º.- La presente ley tendrá vigencia a partir del 30 de marzo de 2015.

Artículo 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.”.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración de los señores legisladores, a mano alzada.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Mociones

Sr. BARRIENTOS.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito que los fundamentos sean incorporados al Diario de Sesiones.

Dejo aclarado que es un expreso pedido del Centro de Excombatientes de la ciudad de Ushuaia, el tratamiento del proyecto en la sesión del día de hoy.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Barrientos.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado. *(Ver fundamentos en Anexo II).*

Sr. BARRIENTOS.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito que se constituya la Cámara en sesión.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Barrientos.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

En Sesión

Sr. PRESIDENTE.— Por tratarse de un proyecto de ley, corresponde tomar votación nominal, por Secretaría Administrativa.

Sec. ADMINISTRATIVO.— Procedo a tomar la votación nominal.

- Votan por la afirmativa los legisladores Arcando, Barrientos, Blanco, Liendo, Marinello, Martínez, Martínez Allende, Rojo, Siracusa y Tapia.

- Ausentes: legisladores Andrade Tenorio, Lechman, Löffler, Del Corro y Rodríguez.

Sec. ADMINISTRATIVO.— Resultan 10 votos por la afirmativa, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

- 30 -

Asunto Nº 538/14

Autorización a la BBC

Sec. LEGISLATIVA.— "La Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Resuelve:

Artículo 1°:- Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente, remita a esta Cámara en un plazo improrrogable de dos días, el siguiente informe:

a) razones por las cuales se autorizó a la empresa British Broadcasting Corporation (BBC) a acceder a la isla de los Estados; y
b) copia del expediente administrativo, por el cual se ha tramitado la autorización y todo antecedente documentado de la misma.

Artículo 2°.- Regístrese, comuníquese y archívese.".

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración de la Cámara, por la afirmativa a mano alzada.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

Moción

Sr. BARRIENTOS.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito que los fundamentos del pedido de informe se incorporen al Diario de Sesiones.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración de los señores legisladores, la moción del legislador Barrientos.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado. (*Ver fundamentos en Anexo II).*

Sr. BLANCO.— Pido la palabra.

Señor presidente: En razón de que algunos legisladores tuvieron que retirarse cuando llegó el momento de tratarse el Asunto Nº 73/14, desde este bloque no fundamentamos el porqué de nuestro voto afirmativo, quiero que quede asentado para que, en otras cosas, no se diga que se hizo sin ningún tipo de fundamentos.

El Asunto Nº 73/14, fue presentado por distintos bloques políticos, producto de una discusión sobre la ley de educación, iniciada en el período anterior de esta Legislatura.

En el inicio de este nuevo período, en el Cuerpo legislativo hemos tenido una serie de reuniones con distintos sectores, discutiendo y analizando proyectos presentados, escuchando sugerencias, y el texto ordenado que había quedado -según la autoridad anterior de la Comisión de Educación- medianamente consensuado por diversos sectores.

A partir de ahí, e independientemente de las reuniones, se tomó la determinación de realizar tres foros. En primer lugar, previo a esos foros se dio participación a todos los establecimientos escolares de la provincia.

Tengo entendido que -si mal no recuerdo y a esta hora- fueron más de 140 o 145 instituciones escolares de la provincia las que hicieron llegar sus comentarios sobre el proyecto que tuvieron en su poder, que fuera enviado para su análisis.

Posteriormente, se realizaron tres foros, uno en Ushuaia, uno en Río Grande y uno en

Tolhuin, donde participaron alrededor de 600 docentes de la provincia.

Con posteridad, y a efectos de cumplir con los requerimiento del gremio SUTEF, esta Legislatura, a través de la Comisión Nº 4 y de otros legisladores, hizo gestiones ante el Ministerio de Educación, a efectos de que se pueda llevar adelante el Congreso Pedagógico Provincial para analizar y discutir como único tema el proyecto de la ley provincial de educación. Días pasados, recibimos las conclusiones de este congreso. Una vez analizadas, aquellos que tuvimos la oportunidad, y el tiempo de hacerlo, llegamos a la conclusión de que luego de los foros y de las sugerencias de los distintos establecimientos escolares las diferencias esenciales, entre lo que planteaba el gremio de la educación y el proyecto en discusión, estaban básicamente centradas en tres puntos.

El Consejo Provincial de Educación, que para el gremio debe ser la determinación resolutiva, y que nosotros consideramos la mayoría o la totalidad de los legisladores que sí estamos de acuerdo con el consejo, pero de manera consultiva porque si no -a mi criterio- no tendría razón de ser que un legítimo aspirante a gobernar la provincia presente un proyecto de educación que sea sometido a consideración de la ciudadanía, que obtenga el voto de la ciudadanía y que después no lo pueda llevar adelante, porque al tener consejo provincial resolutivo que, a la mejor no coincide con lo que votó la ciudadanía, no pueda cumplir con él.

Otro de los puntos en los que no hay acuerdo es en el presupuesto de financiamiento de educación. El gremio pretende volver a la redacción anterior o a la incorrecta de aplicación de la redacción anterior de la Ley provincial 648 que era el 25% del presupuesto total de la provincia. Eso llevó a varias discusiones en modificaciones por esta Cámara legislativa y ese punto tampoco había disidencia.

Un tercer punto es la duración de los ciclos educativos, en los que no se si es correcto el término que algunos proponían, de siete años de primaria y cinco de secundario. Otros proponían seis y seis años, como creo que en definitiva terminó saliendo el proyecto que fue votado por 10 legisladores en el día de la fecha.

Hago estas aclaraciones porque, seguramente, mañana tendremos que dar explicaciones a aquellos que demostraron que vivir en democracia no es “hagan lo que yo quiero, si no rompo todo”; vivir en democracia es respetar a quienes, por distintos motivos, el pueblo eligió. Les guste o no, la gente los eligió con su voto.

Deben ser respetuosos de las instituciones y también deben ser respetuosos de las decisiones.

Recién estaba leyendo, en los medios, o recibiendo mensajes, y escuchaba algunos comentarios. Yo me preguntaba, en principio, ¿¡qué ejemplo le vamos a dejar a nuestros hijos si a aquellos que tienen la posibilidad de educar, y no les damos la razón, lo primero que hacen es romper todo o llevar por delante, o amenazar y decir que van a ir a las viviendas personales de los señores legisladores que van a ir a molestar a la familia.

Yo les digo, acá, a los representantes del SUTEF: Saben donde vivo. Mi familia no tiene por qué soportar las consecuencias de mis decisiones como legislador de la provincia.

Si tienen algo para decirme, saben que en San Martín 1500 “y chirolas” está mi oficina, adonde muchas veces van. Pueden tranquilamente conversar conmigo, ahí; conversar en la calle o donde sea, pero no en mi casa, porque mi familia o las familias de los legisladores no tienen por qué pagar las consecuencias de las decisiones que uno tome.

Independientemente de eso, cuando uno se presenta a una elección, y asume la responsabilidad de legislar, sabe a lo que se atiene.

Estamos en un sistema democrático, donde deciden las mayorías, y yo quiero seguir viviendo en un sistema democrático. Quiero que se respeten las disidencias.

No puede ser que algunos señores que se dicen “dirigentes” si no se hace lo que ellos quieren, rompen todo, o si no tratan de dificultar el funcionamiento normal de las instituciones. Entonces, llamo a la reflexión a esos dirigentes que se dicen “representantes democráticos” de un sector tan importante como es la educación, que recapaciten. Y si ellos creen que esta Legislatura, en el día de la fecha, hizo algo malo, que busquen los mecanismos democráticos para revisarlo o para cambiarlo. Y si ellos tienen aspiraciones de legislar, que tengan la valentía de presentarse en un partido político, como sea, a consideración de la ciudadanía, y

que después se sienten en estas bancas -si la ciudadanía los elige- y ahí sí van a legislar.

A mí nadie, por más que tenga la manera de ser que sea, me va a prepear ni me va a forzar a hacer lo que yo no estoy convencido. Yo voté la Ley de Educación porque estoy convencido de lo que voté, una ley en la que participaron todos los que quisieron participar. Voté por el respeto a todos los docentes que participaron, no solamente en los foros, no solamente en las consultas en los establecimientos escolares sino también en el Congreso Pedagógico, que ellos solicitaron tan asiduamente.

Entonces, por respeto a esa gente que opinó, por respeto a esas personas que se manifestaron, es que nosotros -el bloque de la Unión Cívica Radical- actuamos como actuamos. Nosotros no tenemos "papá político" para que anden alcahueteando lo que hacen los legisladores. Los legisladores de la Unión Cívica Radical respetan lo que dice la plataforma de la Unión Cívica Radical.

Y como en el año 1994, cuando se pretendió y se adhirió a la Ley Federal de Educación, nosotros decíamos de las consecuencias nefastas de esa ley. Luego el tiempo nos dio la razón.

En la campaña decíamos que nosotros íbamos a modificar la ley de educación de la provincia, y aggiornarla a los requerimientos de la provincia de Tierra del Fuego.

Parece que algunos señores docentes, o que dicen ser docentes porque realmente de la manera en que actúan dejan mucho que desear... Y yo no quiero que mis hijos aprendan de las actitudes que ellos tienen. Uno muchas veces como más enseña no es con la palabra sino con el ejemplo. Entonces ¡¿qué clase de ejemplo están dando a los chicos de Tierra del Fuego?!

Yo les digo a ellos, que yo voté convencido cumpliendo lo que habíamos sostenido y dicho en la campaña electoral.

Si ellos quieren modificar esta realidad -reitero- que se presenten como candidatos a la Legislatura provincial, que la gente los elija, y que sentados en esta banca, democráticamente modifiquen las redacciones. Porque acá algunos creen que cuando no tienen razón, van a sacar las cosas por la fuerza. Me parece que están equivocados, al menos con este legislador no lo van a lograr.

Por otro lado, señor presidente, creo que nos debemos un respeto. Un respeto a las instituciones, y creo que es mucho el daño que se les está haciendo.

En el día de la fecha tuvimos un entredicho con algunos, porque creen que es como ellos dicen o que somos todos atorrantes, o somos todos ladrones. Entonces, por qué no se revisan y tienen otro tipo de actitudes. Nada más, señor presidente.

Sra. DEL CORRO.— Pido la palabra.

Señor presidente: En primer lugar, por supuesto que acompaño y firmo al pie, la exposición del legislador Pablo Blanco. Pero voy a agregar algunas cuestiones porque creo que son necesarias.

La ley de educación nacional, que llevó mucha discusión con todos los docentes del país, en todas las provincias y, en el mismo Congreso de la Nación, fue sancionada en el año 2006.

En esta provincia, desprendida de ese marco nacional, se presentaron los primeros proyectos en discusión en el año 2008. Y se discutieron los proyectos, y no se pudo consensuar, entre los legisladores del parlamento anterior, un proyecto de ley y que finalmente terminara como este proyecto, en una sanción de ley provincial.

¿Y ustedes creen que la ley no se pudo aprobar en ese momento porque no se discutió? Se discutió con otra representación de composición política en esta Cámara, pero con el mismo sindicato docente.

En esa ocasión no se convocó como se ha hecho en esta oportunidad, a cerca de 2.000 docentes a participar entres los foros, jornadas institucionales y el Congreso Pedagógico. Se discutió con la dirigencia sindical y los legisladores representantes de cada espacio político y las autoridades, en ese momento, del Ministerio de Educación. Y se discutió muchísimo; perdieron estado parlamentario los proyectos presentados en el año 2008. Y en 2010, se volvieron a levantar algunos y se presentaron otros y, se siguió discutiendo.

Insisto: ¿Usted cree, señor presidente, que no se pudo aprobar una ley de educación porque no se discutió?. No se pudo aprobar porque algunos siguen pensando que la educación va de la mano de la violencia. Y no se puede seguir pensando y mucho menos legislando bajo esa combinación extraña.

Quiero destacar, aquí, que lo que hemos hecho hoy ha sido asumir la responsabilidad que tenemos de legislar con consenso, con construcción, aún en la diferencia.

Alrededor de 2.000 docentes hicieron sus aportes, 150 instituciones, más de 700 docentes en los foros, cerca de 1.200 participaron en el Congreso Pedagógico que pidió el gremio. ¿Sabe usted, señor presidente, cuál es el resultado de eso? Que el proyecto original sufrió muchas modificaciones, un 60% de los artículos presentados originalmente han sufrido mejoras, modificaciones e incluso la incorporación de artículos nuevos.

De esos foros hubo versión taquigráfica. Y quiero aclarar que en esos foros el SUTEF tuvo participación en Ushuaia, en Tolhuin y en Río Grande. Y si no, invito a leer las versiones taquigráficas. En las tres ciudades quedó registrado el posicionamiento en el mismo sentido, respecto del mismo articulado del proyecto que se puso en debate.

La versión taquigráfica fue trabajada por algunos legislador y sus asesores. De esa versión taquigráfica resulta el 60% de la modificación del proyecto.

Todo esto se tradujo en un nuevo borrador de proyecto. Nosotros estuvimos trabajando en las jornadas institucionales de abril hasta los foros que se realizaron en agosto.

Inmediatamente después de los foros, las taquígrafas de esta Legislatura pusieron a disposición todo lo registrado, incluso lo dicho por el SUTEF. Y trabajamos mucho.

Se hizo un borrador que se entregó a los señores legisladores que integran la Comisión Nº 4; mientras, el SUTEF fue extendiendo los plazos de la realización de su Congreso Pedagógico. Y el lunes de esta semana, a las 15:30 horas -porque como presidenta de esta comisión, dos veces envié notas formalmente al sindicato, pidiendo que no aplazara más la presentación de su documento- se presentó finalmente el documento.

Pero entre las jornadas institucionales y la presentación del documento, algunos legisladores trabajamos seriamente dando lectura a todo.

De ese documento, con el 60% de modificaciones -inmediatamente ingresado el documento del SUTEF- nos convocamos con asesores. En esto, tengo que rescatar particularmente el trabajo de mi colega la legisladora Laura Rojo y sus asesores, y también del bloque radical. Trabajamos hasta altas horas de la noche leyéndolo.

De esa lectura, a ese proyecto ya modificado en un 60%, se incorporaron entre 10 y 15 artículos que surgieron del documento del SUTEF. Tuvimos tiempo para hacerlo porque había interés de avanzar en un trabajo que diera respuesta a la participación docente. Y el compromiso político que asumió esta Legislatura, a principios de año, de convocar a los docentes para que participaran,finalmente, después de todos estos años en los que no pudo ser aprobada, llegar a la aprobación de la ley.

Quince artículos de ese documento del SUTEF fueron presentados el lunes. Y no tienen por qué creer en mi palabra. Está en el documento y está el del SUTEF, y está este proyecto de ley donde se han vertido todas las modificaciones.

Solo destacaré algunas: la incorporación de estructura de gestión de las bibliotecas escolares, y dispone bibliotecas escolares para todas las instituciones de la provincia, en todas sus modalidades y niveles. Esto fue pedido por el gremio docente en los foros y en el Congreso Pedagógico.

La estructura y la conformación de los gabinetes escolares y gabinetes psicopedagógicos, llevó un largo tiempo de reclamos del gremio docente. Está incorporado en este proyecto; surgió en los foros y en el Congreso Pedagógico. Está, como lo solicitó el gremio.

Por primera vez, una ley de educación incorpora expresamente la necesidad de inversión en infraestructura edilicia para la educación de jóvenes y adultos de la provincia, porque aún no se tiene un solo edificio dedicado a la educación de adultos.

Se crea el Consejo de Educación como un órgano de participación democrática para discutir políticas públicas. El SUTEF, en todos los lugares donde expuso sobre esta

conformación, pidió expresamente “cogobierno de educación” en un consejo de carácter resolutivo. Nosotros responsablemente hemos creado, en esta ley, ese consejo de carácter consultivo; siempre le dijimos al gremio que tendría ese carácter. Estamos dando la cara acá, igual que cuando vinieron a consultarnos al respecto.

Un reiterado pedido, tanto en los foros como en el Congreso Pedagógico, insistentemente, fue que se legislara para garantizar por ley la capacitación y actualización docente, en forma gratuita y en servicio. Esto está incorporado a pedido del SUTEF.

Hay una serie de incorporaciones -creo que son los artículos 65, 66 y 67- donde están, casi textuales, las propuestas del Congreso Pedagógico del SUTEF, en relación a la educación especial, fue tanto que se creó en esta ley la supervisión de la modalidad, que no existió nunca en la provincia. Fue pedido en ese Congreso.

Entonces, me parece que tenemos que dejar de mentirnos, incluso entre nosotros.

¡Sí se leyó el documento que se presentó el lunes! ¡Sí se trabajó! ¡Sí se incorporaron algunos artículos! Solo menciono algunos importantes que surgieron de allí. Y me veo en la obligación de decirlo porque como no hice uso de la palabra en la introducción del proyecto de ley para no demorar a los legisladores que tenían otros compromisos, ¡me veo en la obligación de decirlo! Porque pareciera que ingresó ese documento y nosotros irresponsablemente no dimos cuenta del trabajo de 1.200 docentes convocados en los foros. A mí no me gusta mentir, pero tampoco me gusta que alguien me haga mentir.

Esta ley, además, incorpora algunas cuestiones novedosas para la provincia.

Hemos creado el Observatorio de Mejora del Sistema Educativo. ¿Para qué? Para hacer, en la provincia, los procesos de evaluación educativa, que se llevan adelante cada cuatro años en el dispositivo Operativos Nacionales de Educación (ONE), que es el dispositivo nacional de evaluación de la calidad de todas las provincias; y que evalúa en competencias el resultado en lenguas, en matemática, en ciencias, para ver cómo estamos en relación con las demás provincias.

Nosotros acabamos de crear cómo vamos a trabajar en ese sentido, sobre la realidad local.

Hay un pedido especial, además, del gremio docente que surgió en el Congreso Pedagógico -que se ha creado mediante esta ley- que es un órgano, una estructura, de gestión para el control del ausentismo docente. Fue pedido por el Congreso Pedagógico del SUTEF. Así fue incorporado a esta ley.

Podría mencionar muchísimos aspectos que han mejorado el proyecto original que -insisto- no pertenecía a ningún bloque; a pesar del esfuerzo que se hizo en insistir, en que es el proyecto del PSP y, casi más, de esta legisladora.

Hubo consenso para que eso que había quedado registrado en el parlamento anterior ingresara interbloque. Hubo decisión política para avanzar en la discusión, durante este año, para terminar en la aprobación de la ley.

No solamente hemos trabajado mucho, nosotros, estoy hablando de la participación de 2.000 docentes; estoy hablando de la participación del Ministerio de Educación y sus equipos técnicos y pedagógicos, y de autoridades.

Y estoy hablando de una decisión política que tomó esta Legislatura, de invitar a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, a ser moderadora de este debate para que hubiese un actor neutro, que pudiera llevar adelante la discusión.

El SUTEF, en palabras del secretario general, Raúl Arce, agradeció públicamente y destacó la participación de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.

Entonces, a pesar de lo que estamos viviendo alrededor de este recinto, insisto, en que la educación nunca irá de la mano de la violencia.

Quiero decir algo más: A mí nunca me asustaron los bombos del SUTEF ni el patoterismo de algunos dirigentes. No.

Hemos actuado, todos, responsablemente, y si esta ley se está discutiendo desde el año 2008 y no se ha podido aprobar, ese es el motivo, y no la imposibilidad de encontrar acuerdos. Porque como dijo el legislador, tenemos apenas algunos puntos de diferencia. No hay cogobierno. Si gana un partido político, y si se es gobernador, se elige un ministro. Así

que si algún dirigente del SUTEF quiere ser ministro de Educación, tiene que hacer ese caminito, porque estamos en democracia.

El otro punto quedó resuelto, que es la discusión del presupuesto, está como ha estado hasta hoy, después de la declarativa de certeza de la Ley 648.

El problema de la estructura (de si siete años, si cinco años) se podía discutir; no había consenso siquiera entre los legisladores, estábamos dispuestos; finalmente se da la mayoría, y hay que aprender que dispone la mayoría.

Hoy, haber sancionado la ley, señor presidente, es eso: dar cuenta de que vivimos y construimos en democracia.

Acá esta ley y no ha salido por unanimidad, lamentablemente, pero hubo voluntad política que se expresó en los votos. Esa misma voluntad política que se expresó a principio de año, se expresó hoy. Hoy, nadie actuó acá a escondidas de nadie.

Por último, quiero que se me permita, una vez más, destacar en primer lugar el acompañamiento de la mayoría de mis pares. Este no ha sido el trabajo de uno o de dos legisladores; el consenso se logró, creo, por la muy responsable conciencia de todos de que, finalmente, esta provincia debe tener una ley que garantice el derecho a la educación y que norme el derecho a la educación pública. Porque, paradójicamente, pudimos aprobar una ley de educación privada, vigente de hace años, y no nos pudimos poner de acuerdo en una ley que regule la educación pública.

Aquí ha habido participación del bloque radical con el compromiso del legislador Blanco, que conforma la comisión.

Insisto, en mi reconocimiento como presidenta de esta comisión, particular, -permítanme mis pares- a la legisladora Laura Rojo, que es colega. Somos las dos docentes y, desde ese lugar, sentimos un doble compromiso, como legisladoras, para poder avanzar y encontrar los consensos para esta ley.

El mismo agradecimiento para todos los que han aportado. Porque -con todo respeto le digo, legislador Arcando- no se puede venir a decir, el último día, que hay un nuevo proyecto de ley. Porque insistentemente se preguntó si había aportes para hacer a lo que ya se venía trabajando, y si existía la posibilidad de discutir otro proyecto de ley. Tampoco se puede decir que no hubo tiempo para leer lo que había que leer.

Voy a terminar diciendo que esta Ley de Educación -y ojalá me escuchen casi los 6.000 docentes de esta provincia- da cuenta verdaderamente del trabajo, del compromiso de los docentes que han participado.

Nosotros no hemos inventado nada, está en las versiones taquigráficas. Hubiese sido una falta de respeto a esos 6.000 docentes que participaron, a la universidad que fue invitada, y al mismo Ministerio de Educación, haber trabajado durante todo el año y no haber encontrado los consensos para aprobar esta ley.

Entonces, el reconocimiento va para todos aquellos que quisieron, genuinamente, llegar a la sanción de una Ley de Educación para la provincia.

Seguramente alguien va a querer contestar estas palabras, y no voy a volver a pedir la palabra.

Permítame, señor presidente, estamos en la última sesión ordinaria del año, y solo quiero -aún a los que agreden y faltan el respeto- enviarles un mensaje de paz, de apostar a la paz. Gracias, señor presidente.

Sra. ROJO.— Señor presidente: Comparto las opiniones de mis pares preopinantes y solo quiero agregar un acto de sinceridad, de madurez, si se quiere política, a estos sectores que hoy vinieron, de manera patoteril, a querer imponer algo en lo que se ha trabajado y en lo que se les ha dado espacio para que cada uno de ellos hiciera sus aportes; y han sido tomados en cuenta, y están plasmados en la modificación de la Ley de Educación.

Creo que hemos logrado una ley ampliamente inclusiva, ampliamente innovadora en muchos aspectos, como señaló mi par Amanda Del Corro.

Lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que reflexionar es que la Ley de Educación era una deuda que teníamos con la sociedad fueguina y más que nada con nuestros jóvenes y con nuestros niños que son los actores del sistema. Nada más y nada

menos que ellos.

Entonces -reitero- apelo a la madurez política, del sinceramiento, porque los aportes realizados por los distintos sectores del sistema educativo y del sindicato de trabajadores docentes, han sido -todos- tomados en cuenta. Es más, son 33 artículos los que hemos modificado, tomando textualmente los aportes del SUTEF.

Empecemos a ser sinceros en el discurso porque la ley era necesaria, no podíamos dilatar más la decisión y la posibilidad de tener esta herramienta que es tan importante para la provincia.

También, particularmente, cumplo una promesa de campaña, y me siento muy conforme de poder dar a mis pares...

Porque también voy a decir que el SUTEF no representa a la mayoría del sector docente, porque yo soy docente. Había muchísimos pares míos, muchos compañeros que no eran del SUTEF y acompañaron. Muchas gracias.

Sr. ARCANDO.— Pido la palabra.

Señor presidente: El próximo 10 de diciembre se cumple un nuevo aniversario de la democracia. Y estamos en una Casa legislativa, con acuerdos y con disensos.

Pero acá se planteó la posibilidad de dar un debate sobre la Ley de Educación; y lo dimos. Nos sentamos y acá estamos, a pesar de disidencias. Pero las disidencias tenía que ver con otra cosa, quizá, este tramo final -porque estuve trabajando codo a codo con la comisión en los foros, al lado de ellos-, en el tramo final, se olvidaron que existían algunos legisladores. Algunos me dieron las explicaciones y las entiendo, y también las acepto. Pero no pueden decir que había un nuevo proyecto, simplemente tenían un proyecto de dictamen -nuestro- para compatibilizar con el otro; que quizá podría haber enriquecido, ¡o no!, el proyecto que se aprobó pero vinimos y nos sentamos y dimos el debate. No nos van a poder culpar porque no nos sentamos y nos escondimos debajo de la cama. Acá estamos.

Y, por otro lado, me solidarizo con el legislador Pablo Blanco que, por esta votación de la ley, su familia ha sufrido alguna consecuencia o alguna cuestión que no es propia, porque -como dijo el legislador Blanco- si nosotros nos equivocamos, ¡somos nosotros no es mi familia, ni mi hijos! ¡No hay que confundir!

Nosotros somos los que tenemos un lugar en la Legislatura provincial.

Me consta que el legislador recibe gente permanentemente en su despacho, como yo lo hago en el mío. Muchas veces hemos acordado con los que van a plantear -no me refiero a este gremio, sino a todos- algunas cosas y los recibimos. En algunas cosas les decimos que podemos acompañar y en otras que no podrán contar con el apoyo, porque estamos en una casa democrática.

Señor presidente: Lamento mucho no poder haber aportado un granito de arena para poder enriquecer, o no, reitero, este proyecto que se aprobó. Pero acá estamos y nos quedamos hasta último momento para aprobar y fundamentar nuestro proyecto.

Me hubiera gustado que los fundamentos que pedí incorporar, los pudiese expresar, para que sepan todos cuáles son los puntos en los que no teníamos acuerdo.

Pero como le dije a la señora presidenta de la Comisión de Educación, en muchos artículos tenemos coincidencia. Pueden haber algunas cuestiones en el planteo de la escolaridad primaria y secundaria pero aceptamos y aquí estamos.

Reitero que el próximo 10 de diciembre se cumple un nuevo aniversario más de la democracia, estamos en una casa democrática: Estamos sentados acá. Dimos todos los debates, con consensos y con disensos, pero nadie nos podrá decir que estuvimos legislando entre gallos y medianoche, como hoy se ha manifestado en el recinto -no por algún legislador- por algunos que vinieron a protestar.

Acá sesionamos y lo hacemos como corresponde, ya que esta es una casa política. Nada más, señor presidente.

Sr. RODRÍGUEZ.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito a la Cámara obviar el plazo de observación de cuatro días en todos los proyectos de ley que votamos, y que no tenían dictamen. Gracias.

Sr. MARINELLO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Antes de pasar a la votación del legislador Rodríguez, me siento en la obligación, porque se habló mucho y se dijeron muchas cosas. Indudablemente es una discusión controversial porque es una ley importantísima y trascendente para el futuro de la provincia, para nuestros chicos, nuestros jóvenes.

Es lógico que esto genere debate, tensiones, porque no estamos discutiendo cualquier ley. Imaginémonos que hace siete años que vinimos discutiendo esta ley. Han participado, en su debate, muchísimas personas; muchísimos docentes. El sindicato docente ha hecho enormes aportes; los padres; la Legislatura anterior de la que me siento parte porque fui presidente de la Comisión de Educación, y no puedo dejar de mencionar el trabajo que llevaron adelante esos legisladores mandato cumplido, Ricardo Furlan, Élida Deheza, Mónica Urquiza y otros más -seguro me estoy olvidando de algunos- que aportaron muchísimo. A último momento, no se llegó al consenso como para que esa ley se votara en 2011.

Hoy estamos en el 2014. En todo no nos vamos a poner de acuerdo, es muy difícil, porque cada uno defiende sus intereses, y es lógico y normal en una democracia, tal como mencionaban recién los legisladores Arcando y Blanco.

La verdad, es una pena porque en muchos casos todavía ni han leído el texto de esta ley, en la que se han contemplado importantes aportes realizados, en los foros, por los docentes, por el sindicato. Esas cosas han sido consideradas, aunque por ahí no todas las cuestiones que se pretendían.

Y cuando uno está en el juego político tiene que saber que no siempre se gana, a veces se gana y a veces se pierde. Lo importante es haber tenido la posibilidad de participar y de manifestar la opinión. Creo que está más que claro que existió y que estuvieron todos los ámbitos, para que así sea.

En el momento de la votación siempre iba a haber tensión. Pero me parece que nos tenemos que correr de tanto enojo, y no agarrárnosla con las familias y con las cosas que sabemos que no llevan a buen puerto y que no aportan absolutamente nada.

Lo digo por experiencia propia, en varias oportunidades y, la verdad, he tratado de correrme de ese enojo para poder ver un poco más allá de la bronca que puede generar.

Me parce que hay que leer el proyecto, creo que se han contemplado cosas importantísimas, y eso es lo importante.

¿Faltarán cosas? ¡Seguramente! Con seguridad, la práctica y el paso del tiempo van a determinar que habrá cosas que modificar; y habrá cosas que fueron buenas, y que se consideraron malas. Sin embargo, el tiempo demostrará las cosas que haya que modificar, buscando -como siempre- los consensos en el marco de la democracia, que es lo que por suerte nos rige desde hace 30 años, y ojalá por muchos años más.

Me parece que tenemos que calmarnos, porque nos vienen muchas otras discusiones, que hacen a la vida económica de la provincia, a la salud de la provincia, y a un montón de temas. Entonces, no podemos, en cada cuestión por definir, estar pasando por situaciones violentas que la verdad no aportan nada. Tensiones, insisto, van a haber siempre, porque es parte de la política. Solamente esto.

Recordar a la Legislatura que terminó, que trabajó muchísimo y que hizo grandes aportes que, creo, fueron la base de lo que hoy terminamos votando.

Sr. BARRIENTOS.— Pido la palabra.

Señor presidente: Es para hacer unas consideraciones cortitas.

Se hablo de valentía, de sinceridad, de las reglas del juego político.

La verdad, entiendo todas las situaciones. Claramente, también desde mi lugar, tengo una palabra y me gusta respetarla. Yo manifesté, en lo personal, que me parecía que hacía

falta tomar el tiempo necesario para analizar la labor de esos miles de docentes que trabajaron en el último Congreso Pedagógico, y sinceramente -no voy a descreer de quienes han manifestado lo han leído, lo han analizado, y creen que está, o han tomado la mayoría de las cosas consensuadas de ese congreso- en lo particular, me parece que la discusión de tan importante ley, en su último tramo, no merecía que terminara de esta manera. Simplemente eso.

Lo dije al momento de la votación, y lo repito con total tranquilidad, con total convicción: me parece que nos deberíamos haber dado el tiempo necesario para discutir esos aportes, además, con quienes lo llevaron adelante. Porque así como reclamamos que se nos respete, porque somos personas electas de la ciudadanía, también es cierto, y más allá de las consideraciones personales que se puedan hacer, el gremio el SUTEF, las personas que conducen hoy ese gremio, también han sido votadas por el sector o por los votos que hayan tenido, y representan al colectivo docente, en un gremio, que también merece ser respetado. Nada más, señor presidente.

Sra. ROJO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Yo creo que el tiempo de discusión se ha dado, siete años estuvimos discutiendo, ¡siete años! Esta es la segunda Legislatura que ha tenido en debate esta ley.

También aclaro que es la única provincia del país que no tiene -gracias a Dios, hoy ya la tenemos- Ley Provincial de Educación.

Es cierto, y comparto lo que se dice que representa a un sector de los docentes. Justamente por eso no podemos tener hechos vandálicos y de violencia que estamos, hoy nosotros, en esta situación, como si hubiéramos hecho un acto totalmente delictivo. Y no es así. ¡Y no es así! No hicimos más que cumplir con lo que nos corresponde, hayamos estado o no a favor de esta ley que se sancionó. Nada más.

Mociones

Sra. DEL CORRO.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito que se incorporen los fundamentos que se presentaron con el proyecto de ley, al Diario de Sesiones.

Sr. PRESIDENTE.— A consideración de la moción de la legisladora Amanda Del Corro.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado. *(Ver fundamentos en Anexo II).*

Tenemos pendiente la moción del legislador Rodríguez.

Legislador, ¿la puede repetir?

Sr. RODRÍGUEZ.— Pido la palabra.

Señor presidente: Solicito quitar los cuatro días de observación a todos los proyectos de ley que se votaron en la fecha que no tenían dictamen de comisión.

Sr. PRESIDENTE.— Se pone a consideración la moción del legislador Rodríguez.

- Se vota y es afirmativa.

Sr. PRESIDENTE.— Aprobado.

- VII -

CIERRE DE LA SESIÓN

Sr. PRESIDENTE.— No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión.

- Son las 20:50.

Marcela Verónica SCILLETTA
Secretaria Legislativa

Roberto Luis CROCIANELLI
Presidente

Marcela Fabiana AMOR
a/c Dirección de Taquigrafía

ANEXO I

ASUNTOS APROBADOS

- 1 -

Asunto Nº 276/14

Código Contravencional de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Libro I
Parte General

Título I
Interpretación y Aplicación de la Ley

Capítulo I
Principios Generales

Ámbito de Aplicación. Territorialidad
Artículo 1º.- El Código Contravencional se aplicará a las contravenciones que se cometan en el territorio de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y a las que produzcan sus efectos en ella.
Principios Generales
Artículo 2º.- En la aplicación de este Código resultan operativos todos los principios, derechos y garantías consagrados en la Constitución de la Nación Argentina, en los Tratados de Derechos Humanos que forman parte de la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 22), en los demás tratados ratificados por el Congreso de la Nación (artículo 31 de la Constitución Nacional) y en la Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Lesividad
Artículo 3º.- El Código Contravencional de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur sanciona las conductas que por acción u omisión dolosa o culposa implican daño o peligro cierto para los bienes jurídicos individuales o colectivos protegidos.
Principio de Legalidad
Artículo 4º.- Ningún procedimiento contravencional podrá ser iniciado sin imputación de acciones u omisiones tipificadas por ley dictada con anterioridad al hecho e interpretada en forma estricta.
Prohibición de Analogía
Artículo 5º.- Ninguna disposición de este Código podrá interpretarse o integrarse en forma analógica en perjuicio del imputado.
Principio de culpabilidad
Artículo 6º.- Las contravenciones son dolosas o culposas. La forma culposa debe estar expresamente prevista en la ley.
Presunción de Inocencia
Artículo 7º.- Toda persona a quien se le imputare la comisión de una contravención tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.
Non bis in idem
Artículo 8º.- Nadie puede ser juzgado más de una vez por el mismo hecho.
Ley Penal Más Benigna
Artículo 9º.- Si la ley vigente al tiempo de cometerse la falta fuere distinta de la que existiere al momento de pronunciarse el fallo, o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna.

Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la sanción se adecuará de

oficio a la establecida por esa ley, quedando firme el cumplimiento parcial de la condena que hubiere tenido lugar.

En todos los casos los efectos de la nueva ley operarán de pleno derecho.

In dubio pro reo

Artículo 10.- En caso de duda debe estarse siempre a lo que sea más favorable al presunto contraventor.

Ejercicio Regular de los Derechos

Artículo 11.- El ejercicio regular de los derechos constitucionales no constituirá contravención de acuerdo a las previsiones de este Código.

Capítulo II
De las Contravenciones

Contravención

Artículo 12.- Es toda acción u omisión tipificada en el Libro Segundo de este Código.

Comisión por Omisión

Artículo 13.- Comete contravención por omisión quien omite evitar la producción de un resultado típico, cuando:

a) en razón de un deber jurídico emergente de la ley, o asumido libremente, deba cuidar que el resultado no se produzca; o
b) haya creado el peligro de producción del resultado.

Sólo será sancionado conforme al tipo correspondiente, si lo injusto de su conducta conforme a las circunstancias del hecho, equivale a lo injusto de la comisión activa.

Inimputabilidad. Causas de Justificación

Artículo 14.- No resultarán punibles las personas que:

a) no hubieren cumplido dieciocho (18) años a la fecha de comisión del hecho. Cuando el presunto infractor contare con una edad menor a la indicada precedentemente, el funcionario interviniente deberá remitir los antecedentes al Juzgado de Primera Instancia de Familia y Minoridad que corresponda. Cuando se imputare la comisión de contravenciones de tránsito, la edad de punibilidad será la requerida para la obtención de la licencia para conducir;
b) actuaren en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, siempre que concurran las siguientes circunstancias:
   1. agresión antijurídica;
   2 necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla;
   3. falta de provocación suficiente por parte del que se defiende;
   4. causaren un mal para evitar otro mayor e inminente al que han sido extraños;
   5. obraren en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo;
   6. al momento de cometer la contravención se encontraren violentadas por fuerza física irresistible o amenazadas de sufrir un mal grave e inminente; y
   7. al momento de cometer la contravención no pudieren comprender el alcance de sus actos o dirigir sus acciones.

Penalización Atenuada

Artículo 15.- Cuando el autor comenzare a actuar justificadamente, y continuare luego su accionar antijurídicamente, la pena podrá disminuirse de conformidad con el grado de antijuridicidad de su conducta en su mínimo a la mitad y en su máximo a un tercio (1/3) respecto de la sanción prevista para el tipo contravencional respectivo.

Inculpabilidad

Artículo 16.- Serán causales de inculpabilidad:

a) error de tipo: quien en la ejecución de un hecho yerra sobre alguna circunstancia del tipo contravencional o acepta circunstancias erróneamente, no actúa dolosamente, sin perjuicio de la eventual comisión culposa. Quien en la ejecución de un hecho admitiera erróneamente circunstancias que pertenecen a un tipo

contravencional penado más benignamente sólo puede ser sancionado por comisión dolosa conforme al tipo cuyas circunstancias aceptó;

b) error de prohibición: quien en la ejecución de una conducta típica yerra sobre su antijuridicidad, actúa inculpablemente si el error no le es reprochable. En caso de serle reprochable, la pena podrá disminuirse en la forma establecida en el artículo 15, de conformidad con el grado de culpabilidad;
c) perturbaciones psíquicas: actúa inculpablemente quien, al tiempo del hecho, a causa de una perturbación grave de su actividad psíquica o por disminución de la misma, fuere incapaz de comprender lo injusto o de conducirse conforme esta comprensión; y
d) estado de necesidad inculpable: quien comete un injusto contravencional para apartar de un peligro a bienes jurídicos propios, de parientes o de otra persona próxima, o de terceros que no son próximos, actúa inculpablemente cuando, conforme sus circunstancias personales y las del hecho no le fuere exigible otra conducta. En caso de serle exigible otra conducta, deberá disminuirse la pena conforme la escala del artículo 15 atendiendo al grado de culpabilidad.

Tentativa y Participación

Artículo 17.- La tentativa contravencional no es punible. Quien interviniere en la comisión de una contravención, como partícipe necesario o instigador, tendrá la misma sanción prevista para el autor, sin perjuicio de graduar la sanción con arreglo a su respectiva participación y lo dispuesto en el artículo 25. La sanción se reducirá en un tercio (1/3) del máximo para quienes intervinieren como partícipes secundarios.

Responsabilidad de la Persona de Existencia Ideal

Artículo 18.- Cuando una contravención se cometiere en ocasión del desarrollo de actividades realizadas en nombre, al amparo o beneficio de una persona de existencia ideal, ésta será pasible de las sanciones que establece este Código cuya aplicación fuere procedente, sin perjuicio de la responsabilidad de los autores materiales.

Ámbito de Aplicación. Leyes Especiales

Artículo 19.- Las disposiciones generales de este Código serán aplicables a las contravenciones tipificadas en el Libro Segundo (Parte Especial), y a las previstas en leyes especiales si éstas no establecen normas expresas.

Cuando un hecho constituya a la vez una contravención y un delito, a excepción de las figuras contenidas en el Capítulo III Título I del Libro Segundo, las disposiciones de este Código no serán aplicables y el juzgamiento del mismo corresponderá exclusiva y excluyentemente al Fuero Penal, de conformidad con las normas que regulan su procedimiento, toda vez que por aplicación de esta ley se entenderá que la tipicidad contravencional queda subsumida en la penal.

Sin perjuicio de ello, en los casos previstos en el Capítulo III Título I del Libro Segundo, el inicio de la acción penal suspenderá la prescripción de la acción contravencional relativa al mismo hecho. En caso de absolución en el proceso penal, se reanudará el curso de la prescripción de la acción contravencional, debiéndose continuar con el proceso contravencional y aplicarse, en su caso, las sanciones que este Código prevé.

Conflictos de Competencia

Artículo 20.- Cuando un mismo hecho cometido dentro de una jurisdicción territorial municipal caiga bajo la sanción de esta ley y de ordenanzas municipales, las disposiciones de este Código no serán aplicables y el juzgamiento del mismo corresponderá exclusiva y excluyentemente a la autoridad municipal competente.

Advertida la incompetencia, el Juez Contravencional remitirá las actuaciones a la autoridad municipal competente. Recibida una causa remitida por la autoridad municipal en que se reconoce su incompetencia, el Juez Contravencional se avocará al conocimiento del caso si reconoce la propia. En caso de considerarse incompetente para intervenir, remitirá los autos al Juez Correccional, quien resolverá la incidencia.

Cuando un mismo hecho cometido dentro de la jurisdicción territorial provincial estuviere tipificado por este Código y por normas provinciales especiales, el juzgamiento del

mismo corresponderá exclusiva y excluyentemente a la autoridad administrativa provincial competente. Recibida una causa remitida por la autoridad administrativa provincial en que se reconoce su incompetencia, el Juez Contravencional se avocará al conocimiento del caso si reconoce la propia. En caso de considerarse incompetente para intervenir, remitirá los autos al Juez Correccional, quien resolverá la incidencia.

Concurso de Contravenciones

Artículo 21.- Cuando concurrieren varios hechos contravencionales independientes reprimidos con una misma especie de sanción, el mínimo aplicable será el mínimo mayor, y el máximo será la suma de los máximos acumulados. Ese máximo no podrá exceder los topes previstos para cada una de las sanciones.

Cuando concurrieren varios hechos contravencionales independientes reprimidos con sanciones de distinta especie se aplicará la más grave. A tal efecto, la gravedad relativa de las sanciones de diferente naturaleza se determinará por el orden de enumeración del artículo 25, debiendo en tal sentido entenderse que las mismas se hallan allí enunciadas de menor a mayor.

Las sanciones establecidas como accesorias se aplicarán sin sujeción a lo dispuesto en los párrafos precedentes.

Cuando un hecho recaiga bajo más de una sanción contravencional, se aplicará solamente la escala mayor.

Reincidencia

Artículo 22.- El condenado por sentencia firme que cometiera una nueva contravención que afecta o lesiona el mismo bien jurídico, dentro de los dos (2) años de dictada aquella, será declarado reincidente y la nueva sanción que se le imponga se agravará en un tercio (1/3) del máximo. Se entiende que una nueva contravención afecta o lesiona el mismo bien jurídico cuando está contenida dentro del mismo capítulo.

Aplicación Supletoria

Artículo 23.- Las disposiciones generales del Código Penal de la Nación serán aplicables supletoriamente siempre que no estén excluidas por este Código

Título II
Sanciones. Cuenta Contravencional

Capítulo I
De las Sanciones

Finalidad de la Sanción

Artículo 24.- La sanción tiene por fin la adaptación del individuo a las condiciones de la vida en una comunidad jurídicamente organizada, necesarias para la realización individual y social.

Para la obtención de esta finalidad los agentes de aplicación de la ley, el fiscal y el Juez se esforzarán para que el contraventor tome consciencia de la responsabilidad social que le incumbe como partícipe de la comunidad democrática.

Enumeración

Artículo 25.- Las sanciones que este Código establece serán principales, accesorias y sustitutivas.

a) Sanciones principales: son sanciones principales:
   1. amonestación formal;
   2. caución de no ofender;
   3. multa;
   4. reparación del daño;
   5. instrucciones especiales;
   6. trabajo de utilidad pública;
b) sanciones accesorias: son sanciones accesorias:
   1. prohibición de concurrencia;
   2. clausura;

3. inhabilitación;
4. decomiso;
5. interdicción de cercanía;

Las sanciones accesorias sólo podrán imponerse juntamente con alguna de las establecidas como principales, cuando a criterio del Juez resulten procedentes en atención a las circunstancias del caso.

c) Sanciones sustitutivas: cuando el contraventor injustificadamente no cumpliera o quebrantare las sanciones impuestas, el Juez podrá sustituirlas por trabajos de utilidad pública o multa. Esta medida podrá cesar cuando el contraventor manifestare su decisión de cumplir la sanción originalmente impuesta, o el resto de ella.

La sanción sustitutiva a aplicarse no podrá exceder el máximo previsto para dicha especie de sanción en el tipo contravencional respectivo.

Determinación y Graduación de la Sanción

Artículo 26.- La sanción en ningún caso deberá exceder la medida del reproche por el hecho.

Para elegir y graduar la sanción se deberán considerar las circunstancias que rodearon al hecho, la extensión del daño causado y en caso de acción culposa la gravedad de la infracción al deber de cuidado. Deberán ser tenidos en cuenta el carácter físico o jurídico de la persona del infractor, los motivos, la conducta anterior al hecho, las circunstancias económicas, sociales y culturales y el comportamiento posterior, especialmente la disposición para reparar el daño, resolver el conflicto, mitigar sus efectos y los antecedentes contravencionales iniciados en los dos (2) años anteriores al hecho del juzgamiento.

No serán punibles las conductas que no resulten significativas para ocasionar daño o peligro cierto para los bienes jurídicos individuales o colectivos protegidos.

Acumulación de Sanciones

Artículo 27.- Sólo podrán acumularse como máximo una (1) sanción principal y dos (2) accesorias, optando dentro de estas últimas por las más eficaces para prevenir la reiteración, reparar el daño o resolver el conflicto. El máximo de la sanción se reducirá en un tercio (1/3) del máximo cuando al contraventor le fuera imputable un accionar culposo, siempre que la forma culposa estuviere expresamente prevista en la figura.

Amonestación Formal

Artículo 28.- La amonestación formal consiste en el apercibimiento que el Juez hará efectivo señalándole al infractor la naturaleza y alcances del hecho cometido y la sanción que le correspondería, conminándolo a evitar su reiteración. De todo ello el Juez dejará constancia en acta.

Caución de No Ofender

Artículo 29.- La pena de caución de no ofender consiste en el depósito en el Banco de Tierra del Fuego de una suma establecida conforme los criterios fijados para la sanción de multa, con el compromiso formal de no cometer una nueva contravención durante el tiempo que se le fije, el que no podrá exceder de seis (6) meses. Si a su término el contraventor no ha cometido una nueva contravención, se le reintegrará lo depositado; en caso contrario, la suma depositada pasará a integrar la Cuenta Contravencional prevista en el artículo 41 y ss.

Multa

Artículo 30.- Consiste en la obligación de pagar una suma de dinero conforme la graduación establecida en este Código, dentro del plazo que al efecto fije en cada caso el Juez Contravencional, el que no podrá ser superior a treinta (30) días posteriores a la resolución firme que la disponga, mediante el depósito correspondiente en la “Cuenta contravencional” prevista en el artículo 41 y ss.

El Juez podrá autorizar al contraventor a pagar la multa en cuotas, fijando el importe y las fechas de los pagos, cuando el monto de la multa y la situación económica del condenado así lo aconseje.

Si por causas sobrevinientes a la sentencia condenatoria el contraventor demostrara carecer totalmente de bienes, el Juez podrá reemplazar la multa no cumplida por la sanción de trabajos de utilidad pública.

En caso de incumplimiento injustificado de la sanción de multa se aplica lo dispuesto en el artículo 25 inciso c) del presente Código, excepto en los casos en que el condenado sea una persona de existencia ideal, en los que se procederá a la ejecución forzada de la sanción.

Unidad de Multa

Artículo 31.- La Unidad de Multa (UM) será del cinco por ciento (5%) del haber de la escala salarial correspondiente a la Categoría diez (10) P.A.y T. de la Administración Pública Central.

Cobro Judicial de las Multas

Artículo 32.- La falta de pago de la multa habilitará su cobro judicial. La acción se promoverá por vía de apremio a través de los funcionarios que la Fiscalía de Estado indique, sirviendo de título suficiente el testimonio de la sentencia condenatoria firme que deberá serle remitido por el Juzgado Contravencional a tal efecto.

Reparación del Daño

Artículo 33.- Cuando la contravención hubiere causado un perjuicio a una persona determinada y no resultaren afectados el interés público o de terceros, el Juez podrá ordenar la reparación del daño a cargo del contraventor.

Instrucciones Especiales

Artículo 34.- Las instrucciones especiales consisten en el sometimiento del contraventor a un plan de conducta establecido por el Juez, que no podrá superar el plazo de veinticuatro (24) meses. Las instrucciones podrán consistir, entre otras, en asistir a determinados cursos especiales, en participar en programas individuales o de grupos de organismos públicos o privados, que le permitan modificar los comportamientos que hayan incidido en la realización de la conducta sancionada.

El Juez no podrá impartir instrucciones especiales cuyo cumplimiento sea vejatorio para el contraventor, que afecten sus convicciones, su privacidad, que sean discriminatorias o que se refieran a pautas de conducta no directamente relacionadas con la contravención cometida.

Durante el término de duración de estas instrucciones especiales el contraventor deberá solicitar la autorización del Juez Contravencional para abandonar la Provincia en forma temporaria o definitiva.

El contraventor estará sometido a contralor judicial en lo que al cumplimiento de las instrucciones especiales respecta. El Juez deberá instruirlo para que comparezca periódicamente a darle cuenta de su cumplimiento y tomar, además, todas las medidas que crea necesarias para el control de su conducta.

En caso de que una contravención se hubiera cometido en ocasión del desarrollo de actividades realizadas en nombre, al amparo o beneficio de una persona de existencia ideal, el Juez podrá ordenar, a cargo de ésta, la publicación de la parte dispositiva de la sentencia condenatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y en el medio gráfico provincial de mayor circulación.

Trabajo de Utilidad Pública

Artículo 35.- El trabajo de utilidad pública consiste en la sanción impuesta a una persona física de efectuar tareas en interés y beneficio de la comunidad.

El trabajo de utilidad pública se deberá prestar en lugares y horarios que determine el Juez, fuera de la jornada de actividades laborales y educativas del contraventor.

Se considerará un (1) día de trabajo de utilidad pública la prestación de cuatro (4) horas de trabajo.

El trabajo de utilidad pública deberá realizarse en instituciones públicas o privadas de bien público y sin fines de lucro, con exclusión del Poder Judicial de la Provincia, por un plazo que no podrá exceder de noventa (90) días.

Esta sanción deberá adecuarse a las capacidades físicas y psíquicas del contraventor, y deberán tenerse especialmente en cuenta las habilidades o conocimientos especiales que el contraventor pueda aplicar en beneficio de la comunidad.

El Juez deberá controlar el cumplimiento de los trabajos de utilidad pública, tomar las medidas que sean necesarias para su efectivo control e instruir al contraventor para que comparezca a dar cuenta de su cumplimiento.

Prohibición de Concurrencia
Artículo 36.- La prohibición de concurrencia es la sanción impuesta al contraventor de no concurrir a ciertos lugares por un determinado período de tiempo, la que no podrá exceder del plazo de un (1) año.
Clausura
Artículo 37.- La clausura importará el cierre por el tiempo que disponga la sentencia, el que no podrá exceder de sesenta (60) días, del establecimiento o local donde se cometiere la contravención.
Inhabilitación
Artículo 38.- La inhabilitación importará la prohibición de ejercer empleo, profesión o actividad y sólo podrá aplicarse cuando la contravención se produjere por incompetencia, negligencia o abuso en el ejercicio de un empleo, profesión, servicio o actividad dependiente de una autorización, permiso, licencia o habilitación de autoridad competente.

En el caso de profesiones que requieran matrícula para su ejercicio, regladas por leyes específicas que prevean el órgano sancionador, el Juez se limitará a comunicar a dicho órgano la contravención cometida, cuando guardare relación con el ejercicio de dicha profesión o afectare el decoro y la dignidad de la misma.

La sanción de inhabilitación no podrá superar el término de dos (2) años.
Decomiso
Artículo 39.- La condena implicará la pérdida de los instrumentos y efectos empleados en la contravención salvo que pertenecieran a un tercero no responsable y autorizado para su uso, o se tratare de bienes registrables, o cuando el Juez dispusiere lo contrario fundado en la necesidad del contraventor de disponer de esos bienes para atender necesidades elementales para él y su familia. Tratándose de cosas que están en el comercio, se destinarán a establecimientos públicos de asistencia o enseñanza, cuando por su naturaleza cupiese tal destino. Caso contrario, se procederá a su venta o subasta pública destinándose su producido a la “Cuenta Contravencional”. Tratándose de cosas cuyo comercio es ilícito y no puedan destinarse en beneficio del Estado, se ordenará su destrucción. El destino de las armas de fuego objeto de decomiso se regirá por la reglamentación legal vigente.
Interdicción de Cercanía
Artículo 40.- La interdicción de cercanía es la prohibición impuesta al contraventor de acercarse a menos de determinada distancia, de lugares o personas o comunicarse por cualquier medio con las mismas. Los límites máximos para la imposición de esta sanción serán de doscientos (200) metros y durante un plazo que no podrá exceder de un (1) año.

Capítulo II
De la Cuenta Contravencional

Cuenta Contravencional. Creación y Afectación
Artículo 41.- Créase la “Cuenta Contravencional” que se constituirá a partir de la promulgación de la presente ley, afectada específica y exclusivamente a la financiación de:

a) programas de educación, deportes, promoción social, médicos – psicológicos, o cualquier otro en los que se cumplan instrucciones especiales o trabajo de utilidad pública según lo establecido en el presente Código;
b) programas destinados a la promoción de la cultura cívica, convivencia, medios alternativos de resolución de conflictos, o cualquier otro que tenga como objeto la prevención y concientización de la población sobre la materia; y
c) programas vinculados a la prevención de las contravenciones más recurrentes, de acuerdo a los registros estadísticos, o aquellas que resultaren trascendentes por su impacto en la comunidad y en la opinión pública.

Cuenta Contravencional. Integración
Artículo 42.- La Cuenta Contravencional estará integrada por:

a) los fondos provenientes de la aplicación de multas previstas en la presente ley;
b) los fondos provenientes del producido de la venta o subasta pública contemplada

en el artículo 39; y

c) los fondos no reintegrados al contraventor que resulten de la aplicación del artículo 29 in fine.

Cuenta Especial. Ámbito de Constitución

Artículo 43.- La “Cuenta Contravencional” se constituirá en el ámbito del Ministerio Jefe de Gabinete del Poder Ejecutivo.

Autorízase la apertura de una Cuenta Especial “Contravencional” en el Banco de Tierra del Fuego, con el fin de ingresar los conceptos enumerados en el artículo anterior, y cuyos egresos se ajustarán al destino indicado.

Los montos percibidos serán depositados en una Cuenta Especial en el Banco de la Provincia Tierra del Fuego.

Título III
Medidas Preventivas

Capítulo Único

Internación Tuitiva

Artículo 44.- Aún cuando no se presumiera la comisión o participación en alguna de las conductas tipificadas en el Libro Segundo de este Código, el funcionario interviniente tendrá la obligación de disponer el traslado al nosocomio público más cercano de cualquier persona hallada en la vía pública, cuando el estado en que se encuentre lo hiciera aconsejable con el objeto de proteger su integridad psicofísica.

Comunicará esa situación de inmediato a la Defensoría Pública correspondiente.

Internación Preventiva

Artículo 45.- Cuando el estado en que se hallare el presunto contraventor hiciere necesario su traslado a un nosocomio público con el objeto de proteger su integridad psicofísica y/o mantener el orden público, el funcionario interviniente dispondrá su traslado en el acto al establecimiento más cercano para su diagnóstico por un médico responsable, quien determinará si debe ser internado por el lapso necesario para su restablecimiento. Comunicará esa situación de inmediato a la Defensoría Pública correspondiente.

Los familiares del presunto contraventor podrán solicitar la derivación a un nosocomio privado a su costa, la que de ser factible a criterio del médico tratante se realizará por Acta de entrega suscripta ante la autoridad de aplicación.

Internación Durante el Proceso

Artículo 46.- En cualquier estado del proceso el Fiscal promoverá y el Juez podrá ordenar la internación en establecimientos médicos públicos o privados a propuesta de familiares o interesados, de aquellos presuntos contraventores que por informe médico fuesen peligrosos para sí o para terceros, siguiendo el procedimiento previsto para la internación de incapaces o dementes establecido en el Código Civil derivando su trámite a las Defensorías Públicas correspondientes.

Demora y Detención

Artículo 47.- Ningún funcionario podrá demorar o privar de la libertad ambulatoria a persona alguna, o ejercer sobre ella fuerza física, salvo que se tratare de funcionarios de policía, con sujeción estricta a las siguientes pautas en forma concurrente:

a) que se efectúe con el solo fin de hacer cesar los efectos de la presunta contravención;
b) que no exista otra medida preventiva de las contenidas en este Capítulo para la consecución de tal fin;
c) que se proceda de acuerdo a los lineamientos establecidos en el artículo 63 de la presente ley; y
d) que se mantenga al presunto contraventor fuera de contacto con detenidos o demorados por presunta comisión de delitos o procesados o condenados por delitos, debiendo permanecer durante el lapso de su demora en espacios

especialmente destinados a tal fin.

Constituirá falta grave y causal de exoneración del funcionario que violare este precepto, sin perjuicio de la investigación penal a que diere lugar.

En ningún caso la demora o detención autorizará la incomunicación del presunto contraventor, debiendo facilitarse de manera inmediata a su detención una vía de comunicación con su abogado y/o familiar.

Secuestro

Artículo 48.- Con el solo fin de asegurar la prueba y hacer cesar los efectos de la presunta contravención, el Fiscal podrá disponer el secuestro de aquellos elementos con los que presuntamente se hubiere cometido la contravención.

Clausura Preventiva

Artículo 49.- El funcionario interviniente podrá, por decisión motivada, proceder a clausurar preventivamente lugares por el término necesario para hacer cesar la contravención, sólo cuando ésta ponga en peligro la vida o bienes de terceros, incluyendo el daño ambiental. En estos casos, el funcionario responsable deberá remitir las actuaciones dentro de las doce (12) horas de efectivizada la medida al Fiscal, y éste deberá solicitar instrucciones al Juez.

Prohibición de Retener Documentación. Obligación de Exhibir en Forma Adecuada

Artículo 50.- Ningún funcionario podrá retener documentación personal ni exigir su entrega. Toda persona requerida estará obligada a exhibir adecuadamente la documentación legalmente exigible para la actividad, oficio, profesión, conducción o circulación de bienes o personas, de modo tal que garantice el acceso a los datos por parte de la autoridad de control.

Título IV
Extinción y Prescripción de la Acción y de la Sanción
Registro
Capítulo I

Extinción de la Acción y de la Sanción

Artículo 51.-

a) La acción se extinguirá por:
   1. muerte del imputado;
   2. prescripción;
   3. el cumplimiento del acuerdo celebrado entre las partes involucradas en un proceso de mediación que ponga fin al conflicto;
   4. desestimación del caso por parte del Fiscal.
b) La sanción se extinguirá por:
   1. muerte del condenado;
   2. prescripción;
   3. el cumplimiento de la sanción.

Prescripción de la Acción

Artículo 52.- La acción prescribirá transcurridos dos (2) años desde la comisión de la contravención.

a) La prescripción se interrumpe por:
   1. la comisión de otra contravención;
   2. el primer llamado a declarar, efectuado por el Fiscal;
   3. el requerimiento de remisión de la causa a juicio;
   4. la citación a juicio de las partes;
   5. el dictado de la sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme.
b) La prescripción se suspende respecto de todos los imputados:
   1. por el inicio del trámite de mediación;
   2. por el inicio de la acción penal en los casos previstos en el Capítulo III Título I del Libro Segundo, de conformidad a lo establecido en el artículo 19.

Prescripción de la Sanción. Interrupción de la Prescripción de la Sanción

Artículo 53.- La sanción contravencional se prescribirá transcurridos dos (2) años desde la

fecha en que quedare firme la sentencia condenatoria.

La prescripción de la sanción se interrumpirá por la imposición de otra condena firme.

Legislación Supletoria

Artículo 54.- A las disposiciones del Libro I de este Código son aplicables supletoriamente las disposiciones de la Parte General del Código Penal.

Capítulo II
Del Registro de Contravenciones de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Registro Contravencional

Artículo 55.- Créase el Registro de Contravenciones en el ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el que será llevado dentro del ámbito del Poder Judicial por el organismo que por vía de superintendencia disponga el Superior Tribunal de Justicia. El Registro será llevado en forma digital con mecanismos que aseguren su inviolabilidad y mecanismos de resguardo de su información. Ninguna autoridad policial o administrativa podrá requerir con fines estadísticos o de cualquier otro tipo información acerca del contenido del Registro. Constituirá falta grave y será causal de exoneración para el funcionario responsable que autorizare o facilitare información a terceros particulares o funcionarios del contenido del Registro o los expedientes contravencionales digitales. La información contenida en legajos digitales del Registro será secreta. El Juez tendrá pleno acceso a los expedientes digitales de las causas que lleve, y deberá consultar a los fines de reincidencia de cada imputado el Registro digital respectivo.

El Registro de cada expediente digital caducará y deberá ser borrado de forma segura junto con los respaldos o copias que existieren mediante un proceso informático automatizado a las cero (0) horas del día en que prescriba la acción, la sanción o el plazo de cómputo de la reincidencia conforme a éste Código.

Título V
Procedimiento Contravencional

Capítulo Único
Procedimiento Contravencional. Disposiciones Generales

Promoción de la Acción Contravencional

Artículo 56.- Toda contravención da lugar a una acción pública que podrá ser promovida de oficio, o por simple denuncia verbal o escrita ante la autoridad policial o directamente ante el Ministerio Público Fiscal.

Simple Denuncia

Artículo 57.- Toda persona podrá denunciar hechos que a su juicio puedan constituir una contravención reprimida por este Código. Podrá formularla por escrito u oralmente, personalmente, por representante o por mandatario especial, debiendo en este último caso agregarse el poder.

Se realizará ante un funcionario policial o del Ministerio Público Fiscal, quien estará obligado a recibirla sin demora ni formalidades, debiendo transcribir fielmente los hechos que denuncie, indicando si el denunciante resulta damnificado por los mismos. Será suscripta por el denunciante, representante o apoderado, y deberá adjuntar copia del documento nacional de identidad (DNI). Si lo deseare, podrá intervenir en la etapa investigativa del procedimiento a los fines de la reparación del daño y composición del conflicto.

Acta de Constatación de una Contravención Confeccionada por Funcionario Público

Artículo 58.- El acta de constatación de una contravención confeccionada por un funcionario público será considerada un instrumento público en los términos del artículo 293 del Código Penal.

Deberá ser claramente legible en todas sus partes y contener:

a) lugar, fecha y hora del Acta;
b) lugar, fecha y hora de la comisión del hecho u omisión punible, cuando fuere posible determinarlos;
c) la naturaleza y circunstancias del hecho, características de los elementos, instrumentos o vehículos empleados para cometer la contravención;
d) el tipo contravencional de este Código presuntamente infringido;
e) el nombre y domicilio del infractor, si fuera posible determinarlo;
f) la constancia de la notificación al presunto contraventor, si estuviere presente, de su derecho a ser asistido por un defensor particular, así como del derecho a ser asistido por el defensor oficial en caso de no ejercer aquél derecho;
g) el nombre y domicilio de los testigos y del denunciante, si los hubiere;
h) las pruebas colectadas;
i) las medidas preventivas dispuestas; y
j) la firma del funcionario con aclaración de su nombre completo, cargo y número de legajo o matrícula.

El Acta así formulada hace civil y penalmente responsable de su autenticidad al funcionario que la suscribe.

Cuando el presunto infractor estuviere presente el funcionario responsable le entregará copia del Acta labrada.

Serán nulas las constataciones formuladas en actas que no fueren claramente legibles o que les falten algunos de los requisitos exigidos por este artículo.

Las actas de constatación deberán ser presentadas ante el Ministerio Público Fiscal dentro de los dos (2) días.

Notificaciones, Citaciones y Cómputo de Términos

Artículo 59.- Las notificaciones, las citaciones y el cómputo de términos se realizarán de la forma prevista por el Código Procesal Penal.

Inhibición y Recusación

Artículo 60.- Para la inhibición y recusación de Fiscal, Juez, Secretario y empleados regirán las causales y el trámite establecidos en el Código Procesal Penal.

Investigación

Artículo 61.- Promovida la acción contravencional, el Agente Fiscal guiará la investigación con la finalidad de reunir, con la mayor celeridad, los elementos esenciales que permitan formar apreciación preliminar acerca de la existencia del hecho punible, su calificación legal, la individualización y condiciones personales de los partícipes del mismo.

Tendrá las mismas facultades de dirección e investigación que el Código Procesal Penal otorga al Juez de Instrucción, con excepción de las medidas establecidas en el artículo 41 de la Constitución Provincial, cuya producción deberá ser solicitada al Juez Contravencional en turno.

Cualquier diligencia y aquellas que por su naturaleza y características se consideren definitivas e irreproducibles, deberán ser notificadas por cualquier medio fehaciente en forma previa al defensor, bajo pena de nulidad. Bajo la misma sanción, se le notificará su producción y que puede examinar sus resultados.

La víctima y el imputado podrán proponer la producción de diligencias probatorias. El Juez Contravencional ordenará su producción cuando las considere pertinentes y útiles. Su resolución será irrecurrible.

Medidas Preventivas

Artículo 62.- Tomado conocimiento del hecho, el Fiscal podrá disponer alguna o algunas de las medidas preventivas establecidas en el Capítulo Único del Título III del Libro I de este Código.

Aprehensión. Flagrancia

Artículo 63.- Los funcionarios de la policía comunicarán toda aprehensión inmediatamente al Fiscal y al Juez Contravencional. En ningún caso la aprehensión podrá exceder el término de seis (6) horas. Las actas de prevención serán remitidas sin tardanza cuando el Fiscal las solicite o en su defecto, dentro de las veinticuatro (24) horas de labradas.

El sumario deberá contener todas las actuaciones labradas en virtud de la presunta contravención cometida. Asimismo, cuando correspondiere, las certificaciones médicas del imputado y de las víctimas, los croquis y fotografías del lugar del hecho, las declaraciones testimoniales recibidas a todos los intervinientes, el resultado de las operaciones técnicas realizadas y toda otra diligencia practicada con relación al hecho investigado.

En la primera oportunidad, siempre antes de la realización de la audiencia prevista en el artículo siguiente, el Fiscal invitará al imputado a elegir defensor; si no lo hiciere o el abogado no aceptare inmediatamente el cargo, convocará al acto al defensor oficial. La audiencia no procederá sin su presencia. El defensor podrá entrevistarse con su asistido inmediatamente antes de la realización de la audiencia única.

Audiencia Única

Artículo 64.- Cuando hubiere motivo bastante para sospechar que una persona ha participado en la comisión de una contravención, el Fiscal fijará una única audiencia en la que realizará ante el Juez contravencional el interrogatorio de identificación, de conformidad a las reglas establecidas en el Código Procesal Penal; posteriormente efectuará y pondrá en conocimiento del imputado la imputación formal sobre el o los hechos atribuidos, los elementos de prueba colectados y la calificación legal provisoria. El imputado podrá efectuar un descargo o negarse a declarar, sin que su silencio implique una presunción de culpabilidad. Estarán presentes en esta audiencia el Juez, el Fiscal y su defensor, bajo la pena de nulidad.

Remisión de la Causa a Juicio

Artículo 65.- Concluida la audiencia única, el Fiscal remitirá la causa al Juez Contravencional competente en el término de tres (3) días, prorrogable por otro período igual. Esta remisión a juicio deberá contener, bajo pena de nulidad, los datos personales del imputado, una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, su calificación legal y una exposición sucinta de los motivos en que se funda.

Desestimación del Caso

Artículo 66.- El Fiscal desestimará las actuaciones con relación a uno, algunos o todos los imputados, cuando considere que el hecho investigado no se cometió; que el hecho investigado resulta atípico; que la contravención no fue cometida por el imputado; o que media una causa de justificación, inimputabilidad, inculpabilidad o una excusa absolutoria. En tal caso, procederá a reservar las actuaciones. Esta decisión podrá ser adoptada desde el inicio de las actuaciones.

En cualquier momento de la investigación, incluso antes de recibirle declaración al imputado, el Fiscal podrá desestimar el caso cuando resultare evidente la levedad o insignificancia del hecho. Dicha desestimación cerrará definitiva e irrevocablemente el proceso con relación al imputado a cuyo favor se dictare, debiendo disponerse el archivo de las actuaciones.

En cualquier caso, la desestimación del caso por parte del Fiscal deberá ser fundada, bajo pena de nulidad.

Mediación

Artículo 67.- En cualquier estado de la investigación o del proceso, a pedido del imputado o de la víctima o de oficio, siempre que no se trate de episodios de violencia familiar y que no se encuentre afectado el orden público o de terceros, el Fiscal o el Juez podrán derivar el caso al Centro de Mediación Judicial o Casa de Justicia de Tolhuin a los fines de iniciar un proceso de mediación que ponga fin al conflicto.

Siempre necesitará el expreso consentimiento de la víctima y del imputado, y el acuerdo podrá contemplar algún tipo de reparación hacia la comunidad que resulte significativa para la víctima.

El trámite del proceso de mediación se regirá por las normas establecidas para las causas penales por la ley correspondiente.

Efectos de la Mediación

Artículo 68.- En aquellos acuerdos en que las partes hayan dado enteramente por satisfechas sus pretensiones, el Fiscal dispondrá la desestimación del caso y el Juez declarará la extinción de la acción contravencional. Dicha desestimación hará cosa juzgada, no

pudiéndose formular un nuevo juzgamiento por los mismos hechos.

Para los casos en que se pacte alguna obligación para las partes y/o hacia la comunidad, lo dispuesto en el párrafo precedente quedará sujeto a que se constate su cumplimiento. En caso de comprobarse el incumplimiento de aquella en el plazo acordado, se dejará constancia de dicha circunstancia, reanudándose el trámite del proceso.

Seguimiento

Artículo 69.- En los casos en los que se arribe a un acuerdo, el Fiscal deberá disponer el control y seguimiento de lo pactado, pudiendo para ello solicitar colaboración a instituciones públicas y privadas; también podrá disponer que se efectúe directamente desde el Centro de Mediación o Casa de la Justicia de Tolhuin.

Juicio

Artículo 70.- Recibidas las actuaciones, el Juez Contravencional citará al Ministerio Público Fiscal, al imputado y su defensor, a fin de que en el término de diez (10) días comparezcan a juicio, examinen las actuaciones, los documentos y las cosas secuestradas, ofrezcan las pruebas e interpongan las recusaciones que estimen pertinentes.

Vencido el término de citación a juicio, o resueltas las recusaciones en su caso, el Juez fijará la fecha de audiencia de debate, que se iniciará en un plazo de cinco (5) días, prorrogable por otro período igual.

Regirán supletoriamente las normas del juicio común establecido por el Código Procesal Penal.

Omisión de Debate

Artículo 71.- Dentro del plazo previsto por el artículo precedente, y cualquiera fuese la posición asumida por el imputado en orden a su culpabilidad, el Fiscal podrá proponer omitir el debate. La propuesta y su trámite no suspenderán el plazo referido, a los fines allí contemplados. De la proposición, se conferirá vista al imputado quien, dentro de los cinco (5) días, podrá expresar al Juez Contravencional su conformidad con la petición. Ratificada la manifestación en forma personal ante el magistrado, por el imputado y su defensor, el proceso será llamado para resolver, dentro de los tres (3) días, si corresponde omitir el debate. Si el Juez también considerase innecesario el debate y adecuado el límite de la condena estimada por el Fiscal, los autos pasarán a estudio hasta dictar sentencia. Dará a conocer ésta en audiencia pública, que tendrá lugar dentro de los tres (3) días de dictado el pronunciamiento.

El Juez podrá absolver o condenar, según corresponda, fundando su resolución en la prueba ya incorporada; pero la condena nunca podrá superar la sanción mayor requerida por el Fiscal.

Rechazada la petición, la estimación sancionatoria expresada no constituirá limitación alguna a la cuantía de la sanción que resulte procedente.

La existencia de varios imputados en un mismo procedimiento no inhibirá la aplicación de esta regla a alguno de ellos.

Audiencia de Debate

Artículo 72.- La audiencia de debate, la confección del Acta correspondiente y el dictado de la sentencia se regirán por las normas contenidas en los Capítulos II, III y IV del Título I del Libro III del Código Procesal Penal.

Duración del Proceso

Artículo 73.- Si por circunstancias extraordinarias, la sentencia no pudiere ser pronunciada dentro del plazo de tres (3) meses de recibida la causa por el Juzgado Contravencional, el Juez deberá hacerlo saber al Superior Tribunal de Justicia, con anticipación de diez (10) días del vencimiento de aquél, expresando las razones que determinen la imposibilidad. Si considerare atendible la causa indicada, el Superior Tribunal de Justicia señalará el plazo en que la sentencia debe pronunciarse.

El Juez que incumpliere reiteradamente alguna de estas obligaciones, incurrirá en falta grave.

Recurso

Artículo 74.- Contra la sentencia condenatoria, el imputado o su defensor podrán interponer recurso de apelación, el que se interpondrá en forma fundada, por escrito, ante el mismo

tribunal que dictó la resolución, y dentro de los cinco (5) días de notificada.

Omitida la fundamentación del recurso, el Juez lo declarará desierto.

La concesión del recurso se notificará al Fiscal, quien podrá sostener el pronunciamiento, mediante escrito fundado que deberá presentar dentro de los cinco (5) días.

Las actuaciones serán elevadas de inmediato al Juez Correccional competente.

Facultades del Juez Correccional

Artículo 75.- Recibidas las actuaciones, el Juez Correccional deberá resolver el recurso, pudiendo disponer de oficio medidas para mejor proveer, la producción de prueba adicional, incluso citar al condenado o al denunciante para oírlo personalmente.

Deberá dictar sentencia fundada dentro de los sesenta (60) días de recibidas las actuaciones, confirmando total o parcialmente la resolución apelada, o bien dejándola sin efecto, pudiendo dictar en su reemplazo la que conforme a derecho corresponda, pero no podrá agravar la sanción impuesta.

Aplicación Supletoria

Artículo 76.- Las disposiciones generales del Código Procesal Penal son aplicables supletoriamente siempre que no estén excluidas por este Código.

Libro II
Parte Especial

Título I
Protección Integral de las Personas

Capítulo I
Integridad Física

Pelear

Artículo 77.- Quien peleare o tomare parte en una agresión física en lugar público o de acceso público que no causare lesiones penalmente punibles, será sancionado con caución de no ofender de uno (1) a cinco (5) UM, o multa de uno (1) a tres (3) UM, o trabajo de utilidad pública de cinco (5) a diez (10) días, y prohibición de concurrencia y/o interdicción de cercanía.

Hostigar. Maltratar. Intimidar. Maltratar Físicamente

Artículo 78.- Quien intimidare u hostigare de modo amenazante o maltratare físicamente a otro, siempre que el hecho no constituya delito, será sancionado con multa de tres (3) a diez (10) UM, o trabajo de utilidad pública de siete (7) a quince (15) días, y prohibición de concurrencia y/o interdicción de cercanía.

Agravantes

Artículo 79.- En las conductas descriptas en los dos artículos precedentes la sanción se eleva al doble cuando:

a) existiere previa organización;
b) la víctima fuere persona menor de dieciocho (18) años, mayor de setenta (70), o con limitación temporaria o permanente de sus capacidades; y
c) contravención se cometiere con el concurso de dos (2) o más personas.

Colocar o Arrojar Cosas o Sustancias

Artículo 80.- Quien arrojare cosas o sustancias que pudieran causar lesiones o daños a terceros, en lugares públicos o privados de acceso público, será sancionado con amonestación formal, o reparación del daño, o multa de dos (2) a veinte (20) UM, o instrucciones especiales de uno (1) a tres (3) meses, o trabajo de utilidad pública de tres (3) a quince (15) días, y prohibición de concurrencia y/o interdicción de cercanía. Admite culpa.

Quien colocare o arrojare sustancias insalubres o cosas capaces de producir un daño, en lugares públicos o privados de acceso público, será sancionado con amonestación publicada, o reparación del daño, o instrucciones especiales de tres (3) a seis (6) meses, o multa de cinco (5) a cien (100) UM, o trabajo de utilidad pública de diez (10) a treinta (30)

días, y decomiso y/o prohibición de concurrencia y/o interdicción de cercanía. Admite culpa.

La sanción se elevará al doble cuando la conducta se realizare en espacios donde concurren niños.

Las personas de existencia ideal serán sancionadas con multa de cinco (5) a cien (100) UM, o trabajo de utilidad pública de diez (10) a treinta (30) días, y decomiso, cuando la acción se realizare en nombre, al amparo, en beneficio o con autorización de las mismas. Admite culpa.

Arrojar, Derramar, Permitir Desborde o Verter Residuos y/o Sustancias Peligrosas

Artículo 81.- Quien arrojare a la vía pública o a un sitio común sustancias o emanaciones que puedan resultar peligrosas para la salud, será sancionado con multa de diez (10) a treinta (30) UM, o reparación del daño, o trabajo de utilidad pública de cinco (5) a quince (15) días. Admite culpa.

Quien derramare líquidos cloacales en la vía pública o espacios públicos será sancionado con multa de cincuenta (50) a ciento cincuenta (150) UM, o reparación del daño, o trabajo de utilidad pública de quince (15) a cuarenta (40) días. Admite culpa.

Igual sanción le corresponderá a quien permita el desborde de cámaras sépticas o pozos ciegos.

En todos los casos la sanción se elevará al doble cuando la conducta se verifique en espacios donde concurren niños.

El titular o responsable de un establecimiento industrial o comercial desde el que se vierten líquidos combustibles o aguas servidas u otro contaminante, en infracción a las normas vigentes en cada caso, será sancionado con multa de cincuenta (50) a cuatrocientos (400) UM, o trabajo de utilidad pública de veinte (20) a sesenta (60) días, y clausura del establecimiento, y/o inhabilitación y/o decomiso de los elementos que contengan los líquidos combustibles, aguas servidas u otro contaminante.

Fabricar, Introducir o Vender Ilegítimamente

Artículo 82.- Quien fabricare o introdujere en la provincia o vendiere ilegítimamente psicotrópicos, bebidas alcohólicas o sustancias para su preparación, será sancionado con multa de diez (10) a cincuenta (50) UM, o instrucciones especiales de seis (6) a doce (12) meses, o trabajo de utilidad pública de treinta (30) a sesenta (60) días, e inhabilitación y o decomiso.

Organizar o Promover Juegos o Competencias de Consumo de Alcohol

Artículo 83.- Quien organizare o promoviere juegos o competencias consistentes en el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos o de acceso público, será sancionado con multa de diez (10) a cien (100) UM, o instrucciones especiales de dos (2) a seis (6) meses, o diez (10) a treinta (30) días de trabajo de utilidad pública, y clausura y/o decomiso y/o inhabilitación.

La sanción se elevará al doble cuando en el juego o competencia intervinieren personas menores de dieciocho (18) años. En este único supuesto se admite la forma culposa.

Omitir recaudos de cuidado

Artículo 84.- Quien omitiera los recaudos de cuidado respecto de un animal que se encontrare a su cargo, con peligro para terceros, será sancionado con caución de no ofender de uno (1) a diez (10) UM, o multa de cinco (5) a quince (15) UM, o cinco (5) a diez (10) días de trabajo de utilidad pública.

La sanción se elevará al doble cuando por esa conducta se pusiera en peligro a una persona menor de dieciocho (18) años, o mayor de setenta (70) años, o con limitación temporaria o permanente de sus capacidades.

Capítulo II
Libertad Personal

Impedir u Obstaculizar Ingreso o Salida

Artículo 85.- Quien impidiera u obstaculizara intencionalmente y sin causa justificada el

ingreso o salida de personas o vehículos de lugares públicos o privados, será sancionado con multa de diez (10) a quince (15) UM, o trabajo de utilidad pública de dos (2) a veinte (20) días, e inhabilitación.

La sanción se elevará al doble para quien dispusiere, organizare o promoviere la realización de la conducta precedente.

Ingresar o Permanecer Contra la Voluntad del Titular del Derecho de Admisión

Artículo 86.- Quien ingresare o permaneciere en lugares públicos, o de acceso público o privado, contra la voluntad expresa de quien ejerce válida y legalmente el derecho de admisión, será sancionado con caución de no ofender de dos (2) a cinco (5) UM, o con multa de uno (1) a cinco (5) UM, o trabajo de utilidad pública de cinco (5) a diez (10) días, y prohibición de concurrencia y/o interdicción de cercanía.

Capítulo III
Niños, Niñas y Adolescentes

Inducir a la Mendicidad a Menores de Edad

Artículo 87.- Quien indujere en su beneficio o de terceros a una persona menor de edad o con limitación temporaria o permanente de sus capacidades, a pedir limosna o contribuciones, será sancionado con amonestación formal, o multa de dos (2) a veinte (20) UM, o instrucciones especiales de tres (3) a ocho (8)) meses, o trabajo de utilidad pública de diez (10) a treinta (30) días.

La sanción se elevará al triple cuando existiera previa organización.

El Juez podrá eximir de sanción al autor en razón del superior interés del niño, niña o adolescente.

Promocionar, Publicitar o Informar de Manera Explícita

Artículo 88.- Quien promocionare, publicitare o informare de manera explícita o implícita, por cualquier medio, ayuda, oportunidad, sitio, servicios y/o elementos adecuados o necesarios a fin de que terceros participen o intervengan en actos de contenido sexual que involucren a niños, niñas y adolescentes, será sancionado con multa de cincuenta (50) a doscientos (200) UM, o trabajo de utilidad pública de diez (10) a cincuenta (50) días, e inhabilitación y/o clausura y/o decomiso.

Quien condujere a terceros a establecimientos o lugares donde se oferte a menores de dieciocho (18) años, para su utilización en actos de contenido sexual, será sancionado con multa de setenta (70) a doscientos cincuenta (250) UM, o trabajo de utilidad pública de veinte (20) a sesenta (60) días, e inhabilitación.

Si en las conductas precedentes intervinieren prestadores de servicios turísticos, individual, colectiva, u organizadamente, o al amparo de agencias u otras organizaciones turísticas serán sancionados con multa de ochenta (80) a seiscientos (600) UM, o trabajo de utilidad pública de cuarenta (40) a noventa (90) días, y clausura y/o inhabilitación y/o decomiso.

Si actuando en vinculación con agencias u organizaciones prestadoras de servicios turísticos, las conductas precedentes fueran cometidas por titulares responsables de bares y demás lugares de expendio de bebidas o titulares y conductores de ómnibus, camiones, taxis, remises o cualquier otro medio de transporte, serán sancionados con multa de ochenta (80) a seiscientos (600) UM, o trabajo de utilidad pública de cuarenta (40) a noventa (90) días, y clausura y/o inhabilitación y/o decomiso.

Cuando los actos prohibidos fueran cometidos, con o sin fines de lucro, por una persona jurídica, el responsable será sancionado con multa de ochenta (80) a seiscientos (600) UM, o trabajo de utilidad pública de cuarenta (40) a noventa (90) días, y clausura y/o inhabilitación y/o decomiso.

Vender, Entregar o Exhibir Material, Elementos o Publicaciones Prohibidos para Menores. Filtros de Contenido

Artículo 89.- Quien vendiere, entregare o exhibiere a un menor una publicación, película o cualquier otro elemento gráfico o audiovisual u objeto que hubiere sido calificado por la

autoridad competente como de exhibición prohibida para el menor será sancionado con multa de cien (100) a doscientos (200) UM, o trabajo de utilidad pública de diez (10) a treinta (30) días, y clausura.

La misma sanción se aplicará al titular o responsable de un establecimiento comercial que brinde acceso a Internet y no instalare en todas las computadoras mecanismos o filtros de contenido que impidieren el acceso irrestricto a sitios con contenidos para adultos, u omitiera activar estos mecanismos cuando los usuarios del servicio sean personas menores de dieciocho (18) años.

Cuando los actos prohibidos fueran cometidos, con o sin fines de lucro, por una persona jurídica, ésta será sancionada con multa de ciento cincuenta (150) a trescientos (300) UM, o trabajo de utilidad pública de diez (10) a treinta (30) días, y clausura.

Agravantes

Cuando se tratare de material de contenido pornográfico o violento, las sanciones previstas en este artículo se agravarán:

a) al doble, cuando se tratare de menores mayores de catorce (14) años; y
b) al triple, cuando se tratare de menores de catorce (14) años.

Suministrar Alcohol y/o Cigarrillos a Personas Menores de Edad

Artículo 90.- El propietario, gerente, empresario, encargado o responsable de un comercio o establecimiento de cualquier actividad que suministrare o permitiera el consumo de bebidas alcohólicas y/o cigarrillos a personas menores de dieciocho (18) años será sancionado con multa de veinte (20) a ciento cincuenta (150) UM, o trabajo de utilidad pública de quince (15) a cuarenta y cinco (45) días, y clausura y/o inhabilitación y/o decomiso. Admite culpa.

La sanción se incrementará al doble si se tratare de salas de espectáculos o diversión en horarios reservados exclusivamente para personas menores de edad. Admite culpa.

Tolerar o Permitir la Presencia de Menores en Lugares no Autorizados

Artículo 91.- El propietario, gerente, empresario, encargado o responsable de un local de espectáculos públicos, de baile o de entretenimientos, que tolerare o admitiere la entrada o permanencia de una persona menor de dieciocho (18) años fuera del horario permitido será sancionado con multa de quince (15) a ciento veinte (120) UM, o trabajo de utilidad pública de diez (10) a treinta (30) días, y clausura y/o inhabilitación. Admite culpa.

Suministrar o Permitir el Acceso a Material Pornográfico

Artículo 92.- Quien suministrare o permitiere a una persona menor de dieciocho (18) años el acceso a material pornográfico será sancionado con multa de diez (10) a doscientos (200) UM, o trabajo de utilidad pública de diez (10) a cuarenta y cinco (45) días, y decomiso y/o inhabilitación y/o clausura. Admite culpa.

La sanción se elevará al doble en caso de que tal conducta se dirigiere a una persona menor de dieciséis (16) años. Admite culpa.

Suministrar Objetos Peligrosos a Menores de Edad

Artículo 93.- Quien suministrare para su uso en espacios públicos o privados con acceso de público a una persona menor de dieciocho (18) años cualquier tipo de arma no convencional, de aire o gas comprimido, arma blanca u objetos cortantes o contundentes inequívocamente destinados a ejercer violencia o agredir, será sancionado con multa de veinte (20) a trescientos (300) UM, o instrucciones especiales de tres (3) a ocho (8) meses, o trabajo de utilidad pública de quince (15) a treinta (30) días, y decomiso. Admite culpa.

La sanción se elevará al triple si se suministraren materias explosivas o sustancias venenosas para su uso en espacios públicos o privados con acceso de público a una persona menor de dieciocho (18) años. Admite culpa.

Suministrar Indebidamente Productos Industriales o Farmacéuticos

Artículo 94.- Quien suministrare indebidamente a una persona menor de dieciocho (18) años productos industriales o farmacéuticos, de los que emanen gases o vapores tóxicos que al ser inhalados o ingeridos sean susceptibles de producir trastornos en la conducta y/o daños en la salud, será sancionado con multa de cuarenta y cinco (45) a cuatrocientos (400) UM, o instrucciones especiales de seis (6) a doce (12) meses, o trabajo de utilidad pública de veinte (20) a cuarenta y cinco (45) días, y clausura y/o inhabilitación y/o decomiso.

La sanción se elevará al doble cuando la acción se dirigiera a una persona menor de dieciséis (16) años o los hechos se cometieran en el interior o en las adyacencias de un establecimiento escolar o educativo, o en ocasión de las entradas o salidas de los alumnos.

Capítulo IV
Derechos Personalisimos

Alterar Identificación de las Sepulturas

Artículo 95.- Quien alterare o suprimiere la identificación de una sepultura será sancionado con multa de diez (10) a cien (100) UM, o reparación del daño, o trabajo de utilidad pública de diez (10) a treinta (30) días, y prohibición de concurrencia.

Inhumar, Exhumar o Profanar Cadáveres Humanos. Violar Sepulcros. Sustraer o Dispersar Cenizas o Restos Humanos

Artículo 96.- Quien inhumare o exhumare clandestinamente, o profanare un cadáver humano, violare un sepulcro, o sustrajere o dispersare cenizas o restos humanos, será sancionado con multa de treinta (30) a quinientos (500) UM, o reparación del daño, o trabajo de utilidad pública de quince (15) a sesenta (60) días, y prohibición de concurrencia.

La dispersión de cenizas humanas socialmente aceptada no será punible.

Perturbar Ceremonias Religiosas o Servicios Fúnebres

Artículo 97.- Quien impidiere o perturbare la realización de ceremonias religiosas o de un servicio fúnebre será sancionado con multa de cinco (5) a treinta (30) UM, o reparación del daño, o trabajo de utilidad pública de siete (7) a quince (15) días, y prohibición de concurrencia.

La sanción se elevará al doble si se produjere el ultraje o la profanación de objetos o símbolos en ofensa a los sentimientos religiosos.

Título II
Protección de la Propiedad Pública y Privada

Capítulo I
Administración Pública y Servicios Públicos

Afectar Funcionamiento de Servicios Públicos

Artículo 98.- Quien afectare intencionalmente el funcionamiento de los servicios públicos de alumbrado, limpieza, gas, electricidad, agua, teléfono, transporte, correo o transmisión de datos, será sancionado con multa de cinco (5) a trescientos cincuenta (350) UM, o reparación del daño, o trabajo de utilidad pública de cinco (5) a treinta (30) días.

Idéntica sanción se aplicará a quien abriera, removiera o afectare bocas de incendio, tapas de desagües o sumideros. Este supuesto admite culpa.

Afectar la Señalización Dispuesta por Autoridad Pública

Artículo 99.- Quien alterare, removiere, simulare, suprimiere, tornare confusa, hiciere ilegible o sustituyere señales colocadas por la autoridad pública para identificar calles o su numeración o cualquier otra indicación con fines de orientación pública, será sancionado con caución de no ofender de dos (2) a cinco (5) UM, o multa de cinco (5) a cien (100) UM, o reparación del daño, o trabajo de utilidad pública de tres (3) a treinta (30) días.

Idéntica sanción se aplicará a quien impidiere colocar la señalización reglamentaria.

Afectar Servicios de Emergencia o Seguridad

Artículo 100.- Quien requiriere sin motivo un servicio de emergencia o seguridad, será sancionado con caución de no ofender de uno (1) a cuatro (4) UM, o multa de dos (2) a cinco (5) UM, o trabajo de utilidad pública de uno (1) a cinco (5) días.

La sanción se elevará al triple para quien impidiere u obstaculizare intencionalmente tales servicios.

Denunciar Falsamente

Artículo 101.- Quien denunciare falsamente la comisión de una contravención será

sancionado con multa de cuatro (4) a cien (100) UM, o instrucciones especiales de tres (3) a cuatro (4) meses, o trabajo de utilidad pública de tres (3) a diez (10) días.
Quebrantar Clausura
Artículo 102.- Quien quebrantare una clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa será sancionado con multa de diez (10) a cien (100) UM, o trabajo de utilidad pública de diez (10) a treinta (30) días.
Quebrantar Inhabilitación para Conducir
Artículo 103.- Quien quebrantare una inhabilitación para conducir impuesta por resolución firme administrativa será sancionado con multa de diez (10) a cien (100) UM, o trabajo de utilidad pública de diez (10) a treinta (30) días.
Ejercer Ilegítimamente una Actividad
Artículo 104.- Quien ejerciere actividad para la cual se le hubiere revocado por resolución firme la licencia o autorización, o quebrantare la inhabilitación, será sancionado con multa de quince (15) a doscientos (200) UM, o trabajo de utilidad pública de quince (15) a cuarenta y cinco (45) días, y clausura.

Capítulo II
Fe Pública

Frustrar Subasta Pública
Artículo 105.- Quien perturbare u obstaculizare el derecho de ofertar libremente, manipulare la oferta, o de cualquier otro modo contribuyere a frustrar en todo o en parte el normal desarrollo o el resultado de una subasta pública, será sancionado con multa de cinco (5) a cien (100) UM, o trabajo de utilidad pública de diez (10) a cuarenta y cinco (45) días, e inhabilitación.

La sanción se incrementará al doble cuando la conducta se produjere a cambio de un ofrecimiento dinerario u otra dádiva, o si existiere previa organización.

Título III
Protección del Uso del Espacio Público o Privado

Capítulo Único
Uso del Espacio Público y Privado

Manchar o Ensuciar Bienes
Artículo 106.- Quien manchare o ensuciare por cualquier medio bienes de propiedad pública o privada será sancionado con multa de dos (2) a veinte (20) UM, o reparación del daño, o trabajo de utilidad pública de cinco (5) a quince (15) días.

La sanción se elevará al doble cuando la acción se efectuare sobre estatuas, monumentos, templos religiosos, establecimientos educativos u hospitalarios.
Admite culpa.
Producir Ruidos Molestos
Artículo 107.- Quien perturbare el descanso o la tranquilidad de terceros mediante ruidos que por su volumen, reiteración o persistencia excedieran la normal tolerancia, será sancionado con amonestación formal, o caución de no ofender de uno (1) a cinco (5) UM, o multa de dos (2) a diez (10) UM, o trabajo de utilidad pública de dos (2) a diez (10) días. Admite culpa.

Cuando la conducta se realizare en nombre, al amparo, en beneficio o con autorización de una persona de existencia ideal o del titular de una explotación o actividad, éstos serán sancionados con caución de no ofender de cinco (5) a veinticinco (25) UM, o multa de diez (10) a cien (100) UM, o trabajo de utilidad pública de cinco (5) a treinta (30) días. Admite culpa.
Introducir Ganado sin Autorización en Propiedad Ajena
Artículo 108.- Quien sin autorización del responsable introdujere ganado en propiedad ajena, de forma que produjere daño, será sancionado con caución de no ofender de cinco (5) a quince (15) UM, o multa de diez (10) a veinte (20) UM, o reparación del daño, o trabajo de

utilidad pública de diez (10) a quince (15) días. Admite culpa.

Título IV
Protección de la Seguridad y la Tranquilidad

Capítulo I
Seguridad Pública

Portar Armas
Artículo 109.- Quien portare, en lugares públicos o privados de acceso público, cualquier tipo de arma de fuego, de aire o gas comprimido, arma blanca, objeto cortante o contundente, u otro arma no convencional, sin causa que lo justifique, será sancionado con multa de cinco (5) a treinta (30) UM, o instrucciones especiales de uno (1) a tres (3) meses, o trabajo de utilidad pública de cinco (5) a quince (15) días, y decomiso.
Entregar Indebidamente Armas, Explosivos o Sustancias Venenosas
Artículo 110.- Quien entregare un arma, explosivos o sustancias venenosas a una persona declarada judicialmente insana, o con las facultades mentales notoriamente alteradas, o en estado de intoxicación alcohólica o bajo los efectos de estupefacientes, será sancionado con multa de cinco (5) a novecientos (900) UM, o instrucciones especiales de tres (3) a veinticuatro (24) meses, o trabajo de utilidad pública de quince (15) a noventa (90) días, y decomiso y/o interdicción de cercanía y/o clausura.
Usar Indebidamente Armas
Artículo 111.- Quien ostentare indebidamente un arma de fuego, aún hallándose legalmente autorizado a portarla, será sancionado con multa de seis (6) a trescientos (300) UM, o trabajo de utilidad pública de diez (10) a cuarenta y cinco (45) días, y decomiso y/o inhabilitación.

La sanción se elevará al doble para quien disparare un arma de fuego fuera de los ámbitos autorizados por la ley, siempre que la conducta no constituyere delito.
Suministrar o Transportar sin Autorización Artefactos Pirotécnicos y de Cohetería. Arrojar o Encender Artefactos Pirotécnicos y de Cohetería
Artículo 112.- Quien transportare sin autorización, detentare, fabricare, comercializare, tuviere en depósito o venta al público mayorista o minorista, suministrare a otro, o tuviere para uso particular, todo elemento de pirotecnia y cohetería, sea éste de venta libre o no y/o fabricación autorizada, será sancionado con multa de ocho (8) a quinientos (500) UM, o trabajo de utilidad pública de diez (10) a noventa (90) días, y decomiso y/o clausura.

Idéntica sanción le corresponderá a quien arrojare o encendiere dichos elementos.

Quien suministrare a cualquier título artefactos pirotécnicos y de cohetería a personas menores de dieciocho (18) años será sancionado con multa de quince (15) a novecientos (900) UM, o trabajo de utilidad pública de veinte (20) a noventa (90) días, y decomiso y/o clausura. Admite culpa.

Capítulo II
Actos y Espectáculos Públicos

Vender Entradas o Permitir Ingreso en Exceso
Artículo 113.- Quien dispusiere la venta de entradas en exceso o permitiere el ingreso de una mayor cantidad de asistentes que la autorizada a un espectáculo público, será sancionado con multa de cinco (5) a doscientos (200) UM, o trabajo de utilidad pública de tres (3) a treinta (30) días, y clausura y/o inhabilitación. La sanción se elevará al doble si se produjeren daños a terceros por desórdenes, aglomeraciones o avalanchas. Admite culpa.
Omitir Recaudos de Organización y Seguridad
Artículo 114.- Quien omitiere los recaudos de organización o seguridad exigidos por la legislación vigente o por la autoridad competente respecto de un acto o espectáculo públicos, será sancionado con multa de cinco (5) a doscientos (200) UM, o reparación del daño, o trabajo de utilidad pública de tres (3) a treinta (30) días, y clausura y/o inhabilitación. La

sanción se elevará al doble si se produjeren daños a terceros por desórdenes, aglomeraciones o avalanchas. Admite culpa.

Producir Avalanchas

Artículo 115.- Quien produjere por cualquier medio una avalancha en ocasión de un acto o espectáculo públicos, será sancionado con multa de tres (3) a treinta (30) UM, o instrucciones especiales de uno (1) a tres (3) meses, o trabajo de utilidad pública de tres (3) a quince (15) días, y prohibición de concurrencia.

La sanción se elevará al doble si se produjeren daños a terceros por las avalanchas.

Arrojar Cosas o Sustancias

Artículo 116.- Quien arrojare cosas o sustancias que pudieran causar lesiones o daños a terceros en ocasión de un acto o espectáculo públicos, será sancionado con multa de tres (3) a cuarenta y cinco (45) UM, o instrucciones especiales de uno (1) a tres (3) meses, o trabajo de utilidad pública de tres (3) a veinte (20) días, y prohibición de concurrencia. Admite culpa.

Portar Artefactos Pirotécnicos

Artículo 117.- Quien portare artefactos pirotécnicos con motivo o en ocasión de un acto o espectáculo públicos, será sancionado con multa de quince (15) a quinientos (500) UM, o trabajo de utilidad pública de veinte (20) a cuarenta y cinco (45) días, y decomiso y/o prohibición de concurrencia.

La sanción se elevará al doble si los artefactos son encendidos o arrojados. Toda autorización de excepción deberá ser otorgada en forma escrita por autoridad competente a los organizadores del evento.

Portar Elementos Aptos para la Violencia

Artículo 118.- Quien con motivo o en ocasión de un acto o espectáculo públicos introdujere, tuviere en su poder o portare armas blancas o elementos destinados inequívocamente a ejercer violencia o a agredir, será sancionado con multa de diez (10) a cien (100) UM, o instrucciones especiales de dos (2) a seis (6) meses, o trabajo de utilidad pública de diez (10) a treinta (30) días, y decomiso y/o prohibición de concurrencia.

Guardar Elementos Aptos para la Violencia

Artículo 119.- Quien con motivo o en ocasión de un acto o espectáculo públicos guardare, en dependencias del lugar en el que se desarrollan tales actividades, elementos inequívocamente destinados a ejercer violencia o a agredir, será sancionado con multa de veinte (20) a trescientos (300) UM, o trabajo de utilidad pública de quince (15) a cuarenta y cinco (45) días, y decomiso. Admite culpa.

El dirigente, miembro de comisiones directivas o subcomisiones, o persona con igual poder de decisión que guardare o permitiere la guarda, en dependencias del lugar en el que se desarrollan aquellas actividades, de elementos inequívocamente destinados a ejercer violencia o a agredir, será sancionado con multa de cuarenta (40) a seiscientos (600) UM, o trabajo de utilidad pública de veinte (20) a noventa (90) días, y clausura y/o inhabilitación y/o decomiso. Admite culpa.

Capítulo III
Seguridad y Ordenamiento en la Circulación.

Conducir con Mayor Cantidad de Alcohol en Sangre del Permitido o Bajo los Efectos de Estupefacientes

Artículo 120.- Quien condujere un vehículo superando los límites permitidos de alcohol en sangre o bajo la acción de otras sustancias que disminuyan la aptitud para hacerlo, será sancionado con multa de veinte (20) a cien (100) UM, o instrucciones especiales de tres (3) a doce (12) meses, o trabajo de utilidad pública de siete (7) a treinta (30) días, e inhabilitación. Admite culpa.

La sanción se elevará al doble cuando:

a) la contravención fuere cometida por el conductor de un vehículo motorizado de carga o de transporte de pasajeros en servicio; y
b) la contravención fuere cometida por el conductor de un vehículo de transporte

escolar o de personas con limitación temporaria o permanente de sus capacidades.

Participar, Disputar u Organizar Competencias de Velocidad o Destreza en Vía Pública

Artículo 121.- Quien participare, disputare u organizare competencias de destreza o velocidad con vehículos motorizados en la vía pública, violando las normas reglamentarias de tránsito, será sancionado con multa de veinte (20) a trescientos (300) UM, o instrucciones especiales de seis (6) a doce (12) meses, o trabajo de utilidad pública de quince (15) a cuarenta y cinco (45) días, e inhabilitación.

La sanción se elevará al doble cuando la conducta descripta precedentemente se realizare mediante el empleo de un vehículo modificado o preparado especialmente para dicho tipo de competencias.

Confiar, Permitir o no Impedir Conducción o Manejo a Menor de dieciséis (16) años o Manifiesto Incapaz

Artículo 122.- Quien confiare la conducción, permitiere conducir, o no impidiese – estando en condiciones de hacerlo – la conducción o manejo de vehículo automotor, motocicleta, ciclomotor o cuatriciclo, a menor de dieciséis (16) años o a un manifiesto incapaz, conociendo tal condición, será sancionado con multa de veinte (20) a cuatrocientos (400) UM, o instrucciones especiales de seis (6) a doce (12) meses, o trabajo de utilidad pública de quince (15) a cuarenta y cinco (45) días.

La sanción se elevará al doble cuando la conducta descripta precedentemente se realizare con la finalidad de que el menor de dieciséis (16) o manifiesto incapaz disputase o participare en competencias de destreza o velocidad en la vía pública, violando las normas reglamentarias de tránsito.

Incumplir Obligaciones Legales

Artículo 123.- Quien al conducir un vehículo participare de un accidente de tránsito y no cumpliere con las obligaciones legales a su cargo, será sancionado con multa de cinco (5) a cincuenta (50) UM, o trabajo de utilidad pública de diez (10) a treinta (30) días, e inhabilitación.

La sanción se elevará al doble si el contraventor se diere a la fuga.

Fingir Prestación de Servicio. Abusar de Situación de Emergencia o Cumplimiento de Servicio Oficial

Artículo 124.- Quien condujere fingiendo la prestación de un servicio de urgencia, de emergencia u oficial, o abusando de reales situaciones de emergencia o cumplimiento de un servicio oficial, será sancionado con multa de cuarenta (40) a doscientos (200) UM, o instrucciones especiales de seis (6) a veinticuatro (24) meses, o trabajo de utilidad pública de catorce (14) a sesenta (60) días, e inhabilitación.

Disposiciones Transitorias

Artículo 125.- La presente ley entrará en vigencia a los ciento veinte (120) días de su promulgación.

Artículo 126.- Derógase a partir de la entrada en vigencia de la presente el Digesto de Edictos Policiales contenido en el Decreto de Gobierno Nº 77/59.

Artículo 127.- Derógase a partir de la entrada en vigencia de la presente el artículo 4 incisos b), h) y l) en lo atinente a los edictos policiales, y el artículo 19 incisos h) e i), ambos de la Ley provincial 263 (Texto Ordenado), y toda norma que se oponga a la presente.

Artículo 128.- Sustitúyese el inciso 5) del artículo 23 del Código Procesal Penal, Ley provincial Nº 168, por el siguiente texto:

"5) En grado de apelación en las resoluciones sobre faltas municipales o contravenciones, y de queja por denegación de este recurso.".

Artículo 129.- Incorpórase el inciso 6) al artículo 23 del Código Procesal Penal, Ley Provincial 168, con el siguiente texto:

"6) En conflictos de competencia de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 del Código Contravencional.".

Artículo 130.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- 2 -

Asunto Nº 512/14

Artículo 1º.- Ratificar en todos sus términos la Resolución de Presidencia 811/14, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

- 3 -

Asunto Nº 529/14

Artículo 1º.- Ratificar en todos sus términos la Resolución de Presidencia 841/14, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

- 4 -

Asunto Nº 513/14

Artículo 1º.- Aprobar en todos sus términos el Acta registrada bajo el Nº 16.649, referente a la Reunión del Comité Ejecutivo Nº 148, celebrada el 9 de octubre de 2013, entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y las Provincias de Chubut, de Formosa, de Jujuy, de Mendoza, de Neuquén, de Río Negro, de Salta y la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI); ratificada mediante Decreto provincial Nº 1918/14.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

- 5 -

Asunto Nº 514/14

Artículo 1º.- Aprobar en todos sus términos el Convenio de Subvención y su Anexo I, registrado bajo el Nº 16.926 y el Contrato de Administración registrado bajo el Nº 16.953, referentes a la ejecución del Proyecto “Planificación y Revalorización de la Senda Lucas Bridges” correspondiente a la convocatoria de “Apoyo Tecnológico al Sector Turismo (ASETUR 2011)”, ambos celebrados el 27 de junio de 2013 y el 27 de julio de 2012, entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y la Unión Industrial Argentina; ratificados mediante Decreto provincial Nº 2037/14.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

- 6 -

Asunto Nº 515/14

Artículo 1º.- Aprobar en todos sus términos el Convenio de Colaboración, registrado bajo el Nº 16.887, referente a la efectiva aplicación de la Ley nacional 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas y su Decreto reglamentario, celebrado el 21 de mayo de 2014, entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Instituto Nacional de Semillas (INASE); ratificado mediante Decreto provincial Nº 2166/14.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

- 7 -

Asunto Nº 516/14

Artículo 1º.- Aprobar en todos sus términos las Actas Complementarias y sus Anexos al Convenio ME Nº 944-11, registrados bajo los N.os 16.512 y 16.497, referentes a la ampliación de Equipamiento de Informática y Comunicaciones, ambas celebradas el 26 de junio de 2012 y el 24 de junio de 2013 respectivamente, entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Ministerio de Educación de la Nación; ratificadas mediante Decreto provincial Nº 2165/14.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

- 8 -

Asunto Nº 517/14

Artículo 1º.- Aprobar en todos sus términos el Convenio Marco, registrado bajo el Nº 16.957, referente a la Implementación de un Canal de Colaboración y Asistencia Permanente para la Producción de Contenidos Educativos, celebrado el 28 de julio de 2014, entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Ministerio de Educación de la Nación; ratificado mediante Decreto provincial Nº 2363/14.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

- 9 -

Asunto Nº 518/14

Artículo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Convenio, registrado bajo el Nº 17.013, referente al Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas provenientes de los Programas de Asistencia Financiera 2010, 2011, 2012 y 2013, celebrado el 30 de septiembre de 2014, entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Gobierno Nacional; ratificado mediante Decreto provincial Nº 2409/14.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- 10 -

Asunto Nº 519/14

Artículo 1º.- Aprobar en todos sus términos el Convenio y sus Anexos, registrado bajo el Nº 16.992, referente al Plan Federal del Bicentenario de Ganados y Carnes, celebrado el 14 de agosto de 2014, entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; ratificado mediante Decreto provincial Nº 2588/14.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

Asunto Nº 528/14

CREACIÓN DE LA PROCURACIÓN PENITENCIARIA EN ÁMBITO DEL PODER LEGISLATIVO

Título I

Capítulo I

Carácter y Elección

Artículo 1º.- Creación. Créase en el ámbito del Poder Legislativo de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur la Procuración Penitenciaria que ejerce las funciones que establece la presente ley, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad.

El objetivo fundamental de esta institución es proteger los Derechos Humanos de los internos comprendidos en el Régimen Penitenciario Provincial, de todas las personas privadas de su libertad por cualquier motivo en jurisdicción provincial, comprendidos comisarias, alcaldías y cualquier tipo de locales en donde se encuentren personas privadas de libertad.

Artículo 2º.- Titular y Elección. Será titular de este organismo un (1) funcionario denominado Procurador Penitenciario quien será elegido por el Poder Legislativo por el voto nominal y fundado de los dos tercios (2/3) de los miembros de la Cámara.

A tal efecto y en un plazo no mayor de treinta (30) días a contar desde la promulgación de la presente ley, se confeccionará una terna de tres (3) candidatos para ocupar el cargo de Procurador Penitenciario.

Si los candidatos propuestos no obtuvieran en la primera votación la mayoría requerida, deberán repetirse las votaciones sobre los dos (2) candidatos más votados hasta alcanzarse aquella mayoría.

Artículo 3º.- Mandato. La duración del mandato del Procurador Penitenciario es de cinco (5) años, pudiendo ser reelegido por una sola vez según el procedimiento establecido en el artículo anterior.

Artículo 4º.- Condiciones. Puede ser elegido Procurador Penitenciario toda persona que reúna las siguientes condiciones:

a) ser argentino nativo o por opción;
b) tener treinta (30) años de edad como mínimo;
c) tener cinco (5) años continuos de residencia inmediata en la Provincia anterior a la elección;
d) poseer título de abogado; y
e) poseer aptitud y acreditar experiencia en el ejercicio de la profesión.

Artículo 5º.- Nombramiento. El nombramiento del Procurador Penitenciario deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Diario de Sesiones de la Cámara.

El Procurador Penitenciario toma posesión de su cargo ante las autoridades y miembros de la Cámara, constituida en sesión, prestando juramento de desempeñar debidamente el cargo.

Artículo 6º.- Remuneración. El Procurador Penitenciario percibe la remuneración equivalente a la del Defensor Mayor ante el Superior Tribunal de Justicia.

Capítulo II

Incompatibilidades. Cese. Sustitución. Prerrogativas

Artículo 7º.- Incompatibilidades. El cargo de Procurador Penitenciario tendrá dedicación exclusiva y su ejercicio será incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad pública o privada a excepción de la docencia. Le estará vedada la actividad política partidaria.

Artículo 8º.- Labor. La actividad de la Procuración Penitenciaria no se interrumpirá en el período de receso legislativo.

Artículo 9º.- Incompatibilidad. Dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a su nombramiento y antes de tomar posesión del cargo, el Procurador Penitenciario deberá cesar

en toda situación de incompatibilidad que pueda afectarlo presumiéndose, en caso contrario, que no acepta el nombramiento. Son de aplicación, en lo pertinente, las normas en materia de recusación y excusación previstas en el Código Procesal Penal de la Provincia.

Artículo 10.- Cese. El Procurador Penitenciario cesará en sus funciones por alguna de la siguientes causas:

a) renuncia aceptada en la Cámara legislativa en los términos del párrafo 1º del artículo 2º;
b) muerte;
c) vencimiento del plazo de su mandato;
d) incapacidad sobreviniente para ejercer sus funciones, acreditada fehacientemente;
e) haber sido condenado por delito doloso mediante sentencia firme;
f) notoria negligencia en el cumplimiento de los deberes del cargo; o
g) haber incurrido en alguna situación de incompatibilidad prevista en la presente.

Artículo 11.- Formas de Cese. En los supuestos de muerte y caducidad de su mandato el cese será automático.

En caso de renuncia o condena por sentencia firme, el cese será dispuesto por el presidente de la Cámara.

En los supuestos de incapacidad sobreviniente, notoria negligencia o incompatibilidad, el cese se decidirá por el voto de los dos tercios (2/3) de los miembros de la Cámara, previo debate y audiencia del interesado.

En caso de muerte del Procurador Penitenciario se deberá proceder a su reemplazo provisorio según las normas establecidas en el artículo 13 promoviéndose, en el más breve plazo, la designación del titular en la forma prevista en el artículo 2º.

Artículo 12.- Inmunidades. El Procurador Penitenciario no podrá ser arrestado desde el día de su designación hasta el cese o suspensión, excepto en caso de ser sorprendido “in fraganti” en la ejecución de un delito doloso de lo que se deberá dar cuenta al presidente de la Cámara con la información sumaria del hecho.

Cuando se dicte auto de procesamiento por la justicia competente contra el Procurador Penitenciario por delito doloso, puede ser suspendido en sus funciones por la Cámara, hasta tanto se dicte sobreseimiento definitivo a su favor.

Capítulo III
Del Procurador Adjunto

Artículo 13.- Designación. La Cámara legislativa deberá designar a propuesta del Procurador Penitenciario un Adjunto quién lo auxiliará en su tarea, pudiendo reemplazarlo provisoriamente en los supuestos de cese, muerte, suspensión, imposibilidad temporal, vacancia, ausencia, recusación y excusación del mismo.

Para ser designado Adjunto del Procurador Penitenciario es necesario reunir los requisitos del artículo 4º del la presente ley.

Al Procurador Adjunto, le es de aplicación, en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 3º, 5º, 7º, 10, 11 y 12 de la presente ley.

Coadyuvará con el Procurador en todas sus funciones y lo reemplazará temporalmente en los supuestos previstos en el primer párrafo del presente artículo.

Artículo 14.- Remuneración. El Procurador Adjunto percibirá el ochenta (80%) por ciento de la remuneración establecida para el titular.

Título II
Del Procedimiento

Capítulo I
Competencia. Iniciación y Contenido de la Investigación. Actuación. Forma y Alcance

Artículo 15.- Competencia. El Procurador Penitenciario podrá iniciar y proseguir de oficio o a

petición del interesado o familiar de éste, hasta el cuarto grado de consanguinidad, o de su apoderado o defensor, cualquier investigación, conducente al esclarecimiento y cese, en su caso de actos, hechos u omisiones que afecten los derechos de los procesados y condenados sujetos al Régimen Penitenciario Provincial y de todas las personas privadas de su libertad por cualquier motivo en jurisdicción provincial.

Idéntica función desempeñará, en la medida de sus posibilidades, respecto de los procesados y condenados por la justicia federal que se encuentren internados en establecimientos provinciales.

Visitará periódicamente todos los establecimientos penitenciarios provinciales donde se hallen alojados los detenidos condenados y procesados.

Artículo 16.- Actuación. Respecto de los internos procesados y condenados provinciales por la justicia federal, que se encuentren alojados en establecimientos provinciales, corresponde al Procurador Penitenciario gestionar o suscribir todo convenio con las autoridades federales correspondientes que le permita viabilizar adecuadamente la actuación en la protección de los derechos de estos, especialmente en lo respectivo al ingreso a los establecimientos penitenciarios provinciales.

Sin perjuicio de ello, podrá suscribir acuerdos de colaboración con organismos internacionales, nacionales, provinciales y municipales, públicos, privados o mixtos, dedicados a la promoción y protección de los Derechos Humanos, o con órganos de los poderes judiciales de las distintas provincias, a efectos de brindar una adecuada protección de los derechos a los internos procesados y condenados por la justicia nacional alojados en cárceles provinciales.

Artículo 17.- Forma. El Procurador Penitenciario, al comprobar actos, hechos u omisiones que lesionen derechos de los internos indicados en los artículos precedentes, y de todas las personas privadas de su libertad por cualquier motivo en jurisdicción provincial, deberá realizar recomendaciones o propuestas de alcance particular o general para evitar la reiteración de hechos de esa naturaleza.

En particular deberá remitir al Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad, o quien lo reemplace en el futuro, los informes sobre casos y situaciones que considere necesarios, con las conclusiones y recomendaciones pertinentes. Las actuaciones ante el Procurador Penitenciario serán gratuitas y no se requerirá patrocinio letrado.

Capítulo II
Obligación de Colaboración. Régimen de Responsabilidad

Artículo 18.- Colaboración. Todos los organismos pertenecientes a la Administración Pública Provincial, personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, están obligadas a prestar colaboración con carácter preferente al Procurador Penitenciario en sus investigaciones o inspecciones.

A tales fines, el Procurador Penitenciario y el Adjunto, por orden del primero o en caso de reemplazo provisorio, están facultados para:

a) solicitar expedientes, informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para satisfacer el cometido que tiene asignado;
b) realizar inspecciones, verificaciones, auditorías o cualquier otra medida conducente al esclarecimiento de los hechos objeto de investigación;
c) entrevistar sin aviso previo y sin la presencia de testigos a toda persona privada de libertad por cualquier motivo comprendida en los límites de su mandato;
d) decidir la comparecencia a su despacho de los funcionarios y empleados de los organismos y entes antes citados con el objeto de requerirles explicaciones e informaciones acerca de los hechos cuya investigación estuviera a su cargo. Asimismo, podrá recabar, a los mismos efectos, la colaboración de los particulares;
e) formular denuncia penal, o querella a su criterio, cuando tenga conocimiento de un acto, hecho u omisión presuntamente delictivo de acción pública, y efectuar

denuncias administrativas en todos los casos en que considere configurada una falta administrativa; y

f) poner en conocimiento de lo actuado a los jueces a cuya disposición se encuentre el interno, respecto del cual se inicie una actuación, pudiendo, a su vez, expresar su opinión sobre algún aspecto de hecho o de derecho ante el magistrado interviniente, en carácter de "amigo del tribunal".

Artículo 19.- Comunicaciones. Las comunicaciones y la correspondencia intercambiadas entre el Procurador Penitenciario y las personas detenidas no podrán ser sometidas al control de ninguna autoridad ni podrán ser interferidas o impedidas.

La correspondencia no podrá ser retenida por ningún concepto.

Artículo 20.- Facultades. El Procurador Penitenciario se encontrará facultado además para:

a) difundir entre las personas comprendidas en su mandato el conocimiento de los derechos que le asisten;
b) proponer la realización de las actuaciones necesarias para esclarecer las responsabilidades administrativas en las cuales hayan podido incurrir los funcionarios en perjuicio de los derechos de las personas comprendidas en su mandato; y
c) sugerir reformas a las normas aplicables a las personas comprendidas en su mandato a efectos de hacer más efectiva la vigencia de los derechos de los que son titulares.

Artículo 21.- Obstaculización. Todo aquel que entorpezca o impida la efectivización de una denuncia ante el Procurador Penitenciario u obstaculice sus investigaciones, mediante la negativa o excesiva dilación en el envío de los informes requeridos, o impida el acceso a expedientes o documentación necesaria para el curso de la investigación, incurrirá en el delito que prevé el artículo 240 del Código Penal.

La persistencia en una actitud entorpecedora de la labor de investigación de la Procuración Penitenciaria, por parte de cualquier organismo o autoridad administrativa, podrá ser objeto de un informe especial a la Cámara legislativa, cuando justificadas razones así lo requieran, además de destacarla en la sección correspondiente del informe anual previsto en el artículo 25 de la presente ley.

El Procurador Penitenciario podrá requerir la intervención de la justicia para obtener la remisión de la documentación que le hubiere sido negada por cualquier institución pública o privada.

Título III
De las Resoluciones

Capítulo Único
Alcance de las Resoluciones. Comunicaciones. Informes

Artículo 22.- Límites de su Competencia. El Procurador Penitenciario no será competente para modificar, sustituir o dejar sin efecto las decisiones administrativas; sin perjuicio de ello, podrá proponer la modificación de los criterios utilizados para su producción.

Si como consecuencia de sus investigaciones llega al convencimiento que el cumplimiento riguroso de una norma puede provocar situaciones injustas o perjudiciales para los administrados, podrá proponer al Poder Legislativo, o a la administración pública la modificación de la misma.

Artículo 23.- Advertencia y Recomendaciones. El Procurador Penitenciario podrá formular con motivo de sus investigaciones, advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y funcionales, y propuesta para la adopción de nuevas medidas, cuya respuesta no puede demorar más de treinta (30) días corridos para esos casos.

Si formuladas las recomendaciones no se obtiene una respuesta adecuada o no se informan motivos por los cuales no se adoptaron tales recomendaciones, el Procurador podrá ponerlo en conocimiento del Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad. Si tampoco se

obtiene respuesta, deberá incluirlo en el informe anual a la Cámara.
Artículo 24.- Relaciones con el Poder Legislativo. La Comisión Permanente de Justicia y Seguridad, Relaciones Institucionales, Seguimiento Legislativo y Derechos Humanos del Poder Legislativo, a través de su presidente será quien se encargará de relacionarse con el Procurador Penitenciario e informará a la Cámara legislativa las veces que sean necesarias.
Artículo 25.- Informes. Anualmente el Procurador Penitenciario dará cuenta a la Cámara legislativa, mediante un informe, la labor realizada, el cual deberá ser presentado antes del 31 de mayo de cada año. Asimismo, cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo ameriten podrá presentar un informe especial. En todos los casos, deberá remitirse copia al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial.
Artículo 26.- Contenido del Informe. El informe anual del Procurador Penitenciario, contará con copia de todas las recomendaciones realizadas, como así también de las denuncias y presentaciones realizadas ante el Poder Judicial y trámite o resultado en que se encuentran.

El informe anual no puede contar con nombres y datos personales de los internos y demás personas privadas de libertad comprometidos en las denuncias y/o recomendaciones, salvo expreso consentimiento de éstos. El Procurador Penitenciario, podrá proponer al Poder Legislativo las modificaciones a la presente ley que resulten de su aplicación para el mejor cumplimiento de sus funciones.

Título IV
Recursos Humanos y Materiales

Capítulo Único
Personal. Recursos Económicos. Plazos

Artículo 27.- Estructura. Funcionarios y Empleados. Designación. La estructura orgánica funcional y administrativa de la Procuración Penitenciaria debe ser establecida por su titular, y aprobada por la Cámara con el voto de los dos tercios (2/3) de sus miembros.

Los funcionarios y empleados de la Procuración Penitenciaria serán designados por su titular de acuerdo con su reglamento dentro de los límites presupuestarios.
Artículo 28.- Reglamento Interno. El Reglamento interno de la Procuración Penitenciaria deberá ser dictado por su titular y aprobado por la Cámara legislativa con el voto de los dos tercios (2/3) de sus miembros.
Artículo 29.- Presupuesto. Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán atendidos con los créditos que anualmente determine la Ley de Presupuesto.
Artículo 30.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- 12 -

Asunto Nº 523/14

Artículo 1º.- Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Salud, informe a esta Cámara en un plazo no mayor a treinta (30) días, lo siguiente:

a) en qué condiciones edilicias se encuentrán las casas Nº 4 y Nº 7, dependientes del Hospital Regional Ushuaia (HRU);
b) si el espacio destinado a la auditoría médica en la casa Nº 7, es acorde a la atención necesaria;
c) qué actividades se realizan en la casa Nº 7 y si las mismas cuentan con espacios adecuados para desarrollarse correctamente;
d) si se ha dado respuesta a la Nota Nº 001/2014, letra CTA-CDP, en referencia al pedido de inspección del lugar de trabajo;
e) si se ha dado respuesta a la nota presentada por el gremio CTA a través de su secretario de trabajo, condición y medio ambiente laboral, señor Licciardi, el 20 de octubre de 2014, en la cuál reitera lo solicitado en el inciso e); y

f) si se ha dado respuesta a la nota presentada por el gremio CTA a través de su secretario de trabajo, condición y medio ambiente laboral señor Licciardi, el 28 de octubre de 2014, solicitando audiencia a ambos ministerios para tratar la problemática de los mencionados sectores con el fin de buscar la mejor manera de solucionar la situación.

Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

- 13 -

Asunto Nº 524/14

Artículo 1º.- Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través del área correspondiente, remita a esta Cámara en un plazo no mayor a treinta (30) días, un informe en relación al hospital Regional Ushuaia (HRU), detallando lo siguiente:

a) si cuenta con equipamiento oftalmológico apto para afrontar la atención adecuada para la población de la ciudad de Ushuaia;
b) si el equipamiento oftalmológico adquirido en 2012, consistente en un retinómetro, se encuentra funcionando en dicho nosocomio; y
c) si el oftalmoscopio binocular indirecto (OBI) y el refractómetro se encuentran funcionando y en qué condiciones.

Artículo 2°.- Todo la información deberá ir acompañada con documentación respaldatoria de la que se cuente.

Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

- 14 -

Asunto Nº 525/14

Artículo 1º.- Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través del área correspondiente, remita a esta Cámara en un plazo no mayor a treinta (30) días, un informe sobre las siguientes áreas del Hospital Regional Ushuaia (HRU), detallando lo siguiente:

a) en relación al sector específico de Anatomía Patológica, indique:
   1. motivo por el cual el equipamiento previsto para el sector de anatomía patológica aún no ha sido instalado;
   2. si el personal se encuentra capacitado;
b) en relación al equipamiento específico, indique:
   1. si la cañería de gases medicinales de aire comprimido cumplen con la legislación vigente en la materia;
   2. si los respiradores del área de neonatología cumplen con el mantenimiento anual requerido;
   3. si la mesa de anestesia del área de maternidad cumple con el mantenimiento anual requerido;
   4. si los procesadores de placa de rayos son aptos para el funcionamiento y si los mismos han sido reemplazados por los sistemas de impresión o entrega de CD;
   5. si las camillas de quirófano se encuentran en condiciones aptas para su uso;
   6. si los monitores multipamétricos del sector de terapia de adultos cuentan con los sensores de saturometría;
   7. si la cabina de flujo laminar destinado al tratamiento de ébola se encuentra en funcionamiento actualmente;
   8. si el seriógrafo se encuentra funcionando en la actualidad;
   9. si los equipos de laboratorio cuentan con mantenimientos periódicos;
   10. si el sector de hemoterapia cuenta con mantenimiento preventivo de su equipamiento;
c) en relación a infraestructura edilicia:

1. si cuentan con alarmas de incendio y sistema hidrante relativos a requerimientos legales;
2. si el sistema eléctrico de emergencia funciona correctamente, si cuentan con identificación los tableros eléctricos y si se encuentran protegidos;
3. si el sistema de calefacción de los quirófanos se encuentran en condiciones aptas de asepsia para el mismo.

Artículo 2º.- Toda la información deberá ir acompañada con documentación respaldatoria de la que se cuente.
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

- 15 -

Asunto Nº 526/14

Artículo 1º.- Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través del área que corresponda, remita a esta Cámara en el término de treinta (30) días, el siguiente informe en relación al subsidio otorgado por el Ministerio de Salud de la Nación para la adquisición de un mamógrafo para el Hospital Regional Río Grande (HRRG), detallando:

a) fecha de ingreso de los fondos con copia de los registros contables;
b) copia de los documentos de compra del equipo y demás elementos propios de la puesta en funcionamiento, registraciones aduaneras y patrimoniales de conformidad con las normativas vigentes;
c) inversión total inherente a la puesta en marcha del mismo, referente a adecuaciones espaciales y técnicas apropiadas para su uso eficiente;
d) equipo de profesionales y agentes del servicio de salud que lo operan y capacitación recibida a tal efecto;
e) fecha de puesta en marcha del equipo;
f) estadísticas de atención desde su puesta en marcha al 30 de noviembre de 2014; y
g) adjuntar información que estime pertinente al caso.

Artículo 2°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

- 16 -

Asunto Nº 527/14

Artículo 1º.- Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través del área que corresponda, remita a esta Cámara en un plazo de treinta (30) días improrrogable, el siguiente informe en relación al total de monto percibido, al 28 de noviembre de 2014, en conceptos de subsidios conforme Resolución Nº 1173 del Ministerio de Salud de la Nación, detallando:

a) memoria técnica de las obras realizadas o a realizar, aplicación de los fondos, cronograma de avance de obras y cómputo de materiales previstos en cada caso;
b) copia de los planos aprobados de las mismas y registros fotográficos, en su consecuencia en cada caso;
c) copia de los documentos contables en los cuales se ha registrado el ingreso y egreso de fondos, desde la primera registración al 28 de noviembre de 2014;
d) copia de los registros contables bancarios en los cuales se han efectuado los movimientos de fondos desde el primer ingreso al 28 de noviembre de 2014; y
e) adjuntar información que considere pertinente al caso.

Artículo 2°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

- 17 -

Asunto Nº 532/14

Artículo 1º.- Designar miembros del Consejo de la Magistratura, en representación de esta Cámara Legislativa, a los señores legisladores: Jorge Lechman y Fabio Marinello según lo establecido en el artículo 160, inciso 4) de la Constitución Provincial y en el artículo 2º, inciso 4) de la Ley provincial 8.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

- 18-

Asunto Nº 533/14

Artículo 1º.- Designar miembros de la Comisión Legislativa de Receso establecida durante el período 16 de diciembre de 2014 al 18 de enero de 2015 inclusive, a los legisladores Eduardo Barrientos (PJ), Pablo Daniel Blanco (UCR), Héctor Tapia (FPV), Damián Löffler (MPF), Amanda Del Corro (PSP) y Jorge Lechman (MPF) y para el período comprendido desde el 19 de enero de 2015 al 23 de febrero de 2015 inclusive, a los legisladores Myriam Martínez (FPV), Juan Felipe Rodríguez (UCR), Fabio Marinello (PSP), Laura Susana Rojo (PPP), Claudia Andrade Tenorio (MPF) y Marta Susana Siracusa (PJ).
Artículo 2º.- En caso de que sea necesario modificar los miembros titulares de la Comisión Legislativa de Receso, dicha novedad será informada a la Presidencia de la Cámara mediante nota fundada del bloque político que corresponda.
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

- 19 -

Asunto Nº 377/14

Artículo 1º.- Aféctase el uno coma sesenta y seis por ciento (1,66 %) de los fondos recaudados por la Provincia en concepto de Ingresos Brutos y Convenios Multilaterales a la obra de construcción, reparación estructural y refuncionalización del edificio del Colegio Provincial José Martí, ubicado en la calle Juana Fadul Nº 37 de la ciudad de Ushuaia, hasta cubrir los fondos necesarios para la finalización total de la obra y puesta en funcionamiento de la Institución.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- 20 -

Asunto Nº 402/14

Artículo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Convenio, registrado bajo el Nº 17.009, referente al Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas provenientes de los Programas de Asistencia Financiera 2010, 2011, 2012 y 2013, celebrado el 31 de julio de 2014, entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Gobierno Nacional; ratificado mediante Decreto provincial Nº 2330/14.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- 21 -

Asunto Nº 366/14

Título I y II - Presupuesto de Recursos y Gastos de la Administración Central y Organismos Descentralizados

Artículo 1º.- Fíjase en la suma de pesos doce mil ochocientos cincuenta y cinco millones ciento noventa y cinco mil trescientos cuarenta y uno ($ 12.855.195.341.-) los Gastos Corrientes y Gastos de Capital del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial (Administración Central y Organismos Descentralizados), para el Ejercicio 2015, con destino a las finalidades e instituciones que se indican a continuación, y analíticamente en planillas anexas que forman parte de la presente ley:

Administración Provincial

Finalidad-Funcion	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	3.838.621.485	72.287.395	3.910.908.879
002-SERVICIOS DE SEGURIDAD	934.082.406	29.686.657	963.769.063
003-SERVICIOS SOCIALES	5.000.872.856	1.576.516.046	6.577.388.902
004-SERVICIOS ECONÓMICOS	944.945.126	458.183.371	1.403.128.497
Total	**10.718.521.873**	**2.136.673.468**	**12.855.195.341**

Administración Central

Finalidad-Funcion	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
001-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	3.838.621.485	72.287.395	3.910.908.879
002-SERVICIOS DE SEGURIDAD	934.082.406	29.686.657	963.769.063
003-SERVICIOS SOCIALES	4.716.405.328	665.882.981	5.382.288.309
004-SERVICIOS ECONÓMICOS	278.474.571	17.519.581	295.994.152
Total	**9.767.583.790**	**785.376.613**	**10.552.960.403**

Administración Descentralizada

Finalidad-Funcion	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
003-SERVICIOS SOCIALES	284.467.528	910.633.065	1.195.100.593
004-SERVICIOS ECONÓMICOS	666.470.555	440.663.790	1.107.134.345
Total	**950.938.083**	**1.351.296.855**	**2.302.234.938**

Organismos de la Seguridad Social

Finalidad-Funcion	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Aplicaciones Financieras	Total
003001- SALUD	807.595.386	54.041.879	63.619.977	925.257.242
003003- SEGURIDAD SOCIAL	2.405.601.431	183.794.874	12.029.789	2.601.426.094
Total	**3.213.196.817**	**237.836.753**	**75.649.766**	**3.526.683.336**

Responsable Presupuestario	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Aplicaciones Financieras	Total
903-Administración Central	**9.767.583.790**	**785.376.613**		**10.552.960.403**
904-Poder Ejecutivo	6.772.470.090	723.471.760		7.495.941.851
1299-Poder Legislativo	267.568.685	6.704.200		274.272.885
1300-Poder Judicial	519.501.947	38.386.219		557.888.167
1301-Tribunal de Cuentas	**119.484.949**	**15.812.434**		**135.297.383**
1302-Fiscalía de Estado	14.362.261	1.002.000		15.364.261
1303-Compromisos Gubernamentales con Municipios	2.074.195.857			2.074.195.857
1305-Administración Descentralizada	**950.938.083**	**1.351.296.855**		**2.302.234.938**
1306-InFueTur	33.605.998	2.752.272		36.358.271
1307-Dirección provincial de Puertos	125.907.634	73.728.500		199.636.134
1308-Instituto Provincial de Vivienda	152.659.600	891.790.950		1.044.450.550
1309-Dirección Provincial de Vialidad	85.814.013	228.522.413		314.336.426
1310-Dirección Provincial de Energía	175.099.503	135.234.605		310.334.108
1311-Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios	131.807.928	18.842.115		150.650.043
1312-Instituto Provincial de Apuestas	246.043.407	426.000		246.469.407
1313-Organismos de la Seguridad Social	**3.213.196.817**	**237.836.753**	**75.649.766**	**3.526.683.336**
1314-IPAUSS (Previsional)	2.226.074.654	136.179.874	29.789	2.362.284.317
1315-IPAUSS (Asistencial)	807.595.386	54.041.879	63.619.977	925.257.242
1316-Caja Previsional y Compensadora Policial Provinicial y Servicios Públicos	179.526.777	47.615.000	12.000.000	239.141.777

Artículo 2º.- Estímase en la suma de pesos once mil trescientos ochenta y nueve millones ciento noventa y tres mil cuatrocientos cincuenta y tres ($ 11.389.193.453.-) el Cálculo de Ingresos de la Administración Pública Provincial (Administración Central y Organismos Descentralizados) para el Ejercicio 2015, destinado a atender los gastos fijados en el artículo 1º de la presente ley, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación y al detalle que figura en planillas anexas, las que forman parte integrante de la presente ley:

Responsable	Clasificador Económico	2015
	0101-INGRESOS CORRIENTES	9.196.149.988
903-Administración Central	0102-RECURSOS DE CAPITAL	197.619.249
	Total	9.393.769.237
	0101-INGRESOS CORRIENTES	934504562
1305-Administración Descentralizada	0102-RECURSOS DE CAPITAL	1060919654
	Total	1995424216
Total		11389193453

Artículo 3º.- Fíjanse en la suma de pesos un mil ochenta y ocho millones novecientos sesenta y tres cuatrocientos sesenta y nueve ($1.088.963.469.-) los importes correspondientes a los Gastos Figurativos para transacciones corrientes y de capital de la Administración Pública Provincial (Administración Central y Organismos Descentralizados), quedando en consecuencia establecido el financiamiento por Contribuciones Figurativas de la Administración Pública Provincial en la misma suma para el Ejercicio 2015.

Artículo 4º.- El Resultado Económico de la Administración Pública Provincial (Administración Central y Organismos Descentralizados) para el Ejercicio 2015 se estima en la suma de pesos menos seiscientos setenta y tres millones trescientos cincuenta y ocho mil trescientos ochenta y seis ($- 673.358.386.-) de acuerdo al siguiente detalle y al que figura en planillas anexas a la presente ley:

	Total	Administración Central	Organismos Descentralizados
Ingresos Corrientes	10.130.654.550	9.196.149.988	934.504.562
Gastos Corrientes	10.804.012.936	9.847.416.830	956.596.106
Resultado Económico	-673.358.386	-651.266.842	-22.091.544

Artículo 5º.- Fíjase en la suma de pesos doscientos siete millones ciento cuarenta y ocho mil quinientos dieciseis ($ 207.148.516) el importe correspondiente a los gastos para atender el Servicio de la Deuda en la Administración Pública Provincial, de acuerdo al detalle que figura en la planilla anexa, la que forma parte integrante de la presente ley:

Clasificación Económica del Gasto	Administración Central	Administración Descentralizada	Total
Rentas de la Propiedad	79.833.041	5.658.023	85.471.063
Amortización de la Deuda y disminución de otros pasivos	114.020.006	7.637.447	121.657.453
Total	193.853.046	13.295.470	207.148.516

Artículo 6º.- Estímanse en la suma de pesos un mil seiscientos nueve millones cincuenta mil cuatrocientos cuatro ($ 1.609.050.404) las Fuentes Financieras de la Administración Pública Provincial (Administración Central y Organismos Descentralizados) para el Ejercicio 2015, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación y al detalle que figura en la planilla anexa que forma parte integrante de la presente ley:

		Estimado
FUENTES FINANCIERAS	Administración Central	1.500.136.908
	Administración Descentralizada	108.913.496
	Total	1.609.050.404

Artículo 7º.- Apruébanse los Presupuestos de Gastos y el Cálculo de Recursos y Fuentes Financieras de los Organismos de Seguridad Social para el Ejercicio 2015, de acuerdo al detalle que se indica a continuación y al de las planillas anexas, las que forman parte de la presente ley:

CONCEPTO	Total	Caja Compensadora de Policía	Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (Previsional)	Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (Asistencial)
Recursos Totales	2659037077	193.141.777	1.740.189.548	725.705.752
Gastos Totales	3.451.033.570	227.141.777	2.362.254.528	861.637.265
Resultado Primario	-791.996.493	-34.000.000	-622.064.980	-135.931.513
Fuentes Financieras	867.646.260	46.000.000	622.094.769	199.551.490
Aplicaciones Financieras	75.649.766	12.000.000	29.789	63.619.977
Resultado Financiero Neto	0	0	0	0

Artículo 8º.- Estímase en la suma de pesos cuatrocientos treinta y un millones ciento noventa y cinco mil quinientos treinta y nueve con sesenta y ocho ($ 431.195.539,68) el Gasto Tributario para el Ejercicio 2015, de acuerdo a lo establecido por la Ley nacional 25.917 y la Ley provincial 694 y modificatorias, según el siguiente detalle:

Beneficio Contribuyente Cumplidor art. 124 Ley provincial 439	6.593.003,84
Beneficio de Tasa Cero	53.561.480,26
Ley Provincial 907 artículo 7º	180.887.377,72
Ley Prov. 440 art. 9º,punt4, inciso 4.3 (Leyes Prov. 854, 878 y 976)	190.153.677,86
Total	431.195.539,68

Título II
Disposiciones Generales

Artículo 9º.- Fíjase en nueve mil ciento treinta y nueve (9.139) el número total de cargos de la planta de personal permanente y de personal no permanente, del Poder Ejecutivo Provincial, exceptuando el escalafón docente, para el Ejercicio 2015, de acuerdo a lo indicado en las planillas anexas que forman parte integrante de la presente ley.
Artículo 10.- Fíjase en quinientos noventa (590) el número total de cargos de la planta de personal permanente y de personal no permanente del Poder Judicial.
Artículo 11.- Fíjase en doscientos noventa y ocho (298) el número total de cargos de la planta

de personal permanente y de personal no permanente del Poder Legislativo.
Artículo 12.- Fíjase en ciento cincuenta y cuatro (154) el número total de cargos de la planta de personal permanente y de personal no permanente del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Artículo 13.- Fíjase en diecisiete (17) el número total de cargos de la planta de personal permanente y de personal no permanente de la Fiscalía de Estado.
Artículo 14.- Fíjase en cinco mil ochocientos cuarenta (5.840) el número total de cargos de la planta de personal perteneciente al escalafón docente. Estímanse en ochocientos veintiseis mil (826.000) la cantidad de horas cátedras destinadas a otorgarse para el Ejercicio 2015.
Artículo 15.- Fíjase en un mil ochenta (1.080) el número total de cargos de la planta de personal de los Organismos Descentralizados para el Ejercicio 2015, de acuerdo al siguiente detalle:

Escalafón	Cargos
Instituto Fueguino de Turismo	84
Dirección Provincial de Puerto	161
Instituto Provincial de Vivienda	250
Dirección Provincial de Vialidad	155
Dirección Provincial de Energía	160
Dirección Provincial de Obras y Serv. Sanitarios	170
Instituto Provincial de Regulación de Apuestas	100
Total	1.080

Artículo 16.- Fíjase en trescientos treinta y siete (337) el número total de cargos de la planta de personal de los organismos de la Seguridad Social para el Ejercicio 2015, de acuerdo a lo indicado en el siguiente detalle:

Escalafón	Cargos
Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social	304
Caja Compensadora de Policía	33
Total	337

El total de vacantes del Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (IPAUSS), reconoce un incremento respecto de las autorizadas para el Ejercicio 2014 de veinte (20) vacantes. Establécese respecto de estas últimas la obligatoriedad de destinar como mínimo diez (10) de ellas al sistema previsional.
Artículo 17.- Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial así como los Órganos de Control podrán realizar las reestructuraciones y modificaciones que consideren necesarias dentro de los totales de erogaciones de capital y corrientes determinadas en el artículo 1º de la presente ley para cada uno de ellos, debiendo informar al Poder Ejecutivo dentro de los cinco (5) días de realizada la tramitación a efectos de mantener consolidado el estado presupuestario de la Administración Central.
El total de erogaciones podrá ser incrementado solamente como consecuencia de la obtención de mayores recursos o de financiamiento adicional. En el caso del Poder Ejecutivo también se podrá incrementar cuando se produzcan excedentes financieros cuyo traslado de un Ejercicio al siguiente lo justifique.
Los Organismos Descentralizados podrán proponer modificaciones presupuestarias, las que deberán ser autorizadas por el Ministro de Economía en el marco de las competencias asignadas por la Ley provincial 859 en el artículo 13, inciso 3 y sus modificatorias,

autorización que podrá efectuarse, en el caso de contar con la tecnología adecuada, mediante la instrumentación de firma digital, Ley provincial 633 y Ley nacional 25.506.

Artículo 18.- Facúltase al Poder Ejecutivo a producir reestructuraciones orgánicas de sus jurisdicciones y programas, así como a transferir y/o suprimir vacantes de la planta de personal aprobada por la presente ley, con la única limitación de no incrementar el número total de cargos.

El Poder Ejecutivo podrá designar o reubicar personal temporario, permanente o de planta política y/o gabinete en las distintas reparticiones de los Organismos Descentralizados cuando los organismos cuenten con el debido respaldo presupuestario en forma previa a la designación o reubicación del agente o funcionario.

Artículo 19.- El Poder Ejecutivo deberá distribuir los créditos que se aprueban por esta ley al nivel de desagregación previsto en los clasificadores presupuestarios. Asimismo, podrá reestructurar los créditos del inciso “Personal” según surja de su distribución en función de la recomposición de los salarios, aportes y contribuciones del personal de la Administración Central y Organismos Descentralizados. Las mayores asignaciones presupuestarias que deriven de estos ajustes, deberán estar compensadas por la disminución de los gastos corrientes, o bien a través del incremento de los recursos, de manera de garantizar el principio de equilibrio presupuestario de cada organismo. Dicha atribución sólo podrá estar delegada al Ministerio de Economía.

Artículo 20.- Las vacantes que se generen durante el presente Ejercicio por distintas razones, retiros, renuncias, jubilaciones o bajas, en cualquier repartición de la Administración Pública Provincial serán transferidas al ámbito del Ministerio de Economía y constituirán una reserva de emergencia, las que se utilizarán prioritariamente para el ingreso de profesionales, técnicos y/o los beneficiarios aún no designados de las Leyes provinciales 661 y 668. En el caso de las vacantes que se asignen para profesionales y técnicos serán destinadas preferentemente a las necesidades emergentes del Sistema de Salud de la Provincia.

Artículo 21.- La liquidación de los fondos en concepto de Coparticipación de Recursos a las Municipalidades cuyo cálculo se incluye en planilla anexa, será efectuada de acuerdo al régimen legal vigente desde la Contaduría General y por los montos percibidos netos de retenciones.

El mismo procedimiento será aplicable para las retenciones a que se refiere el artículo 40 de la Ley provincial 534.

Artículo 22 .- El Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado podrán proponer el aumento en el número de sus respectivas vacantes vigentes, las que deberán ser incluidas en el proyecto de presupuesto del Ejercicio de cada organismo, pero éstas no podrán ser financiadas con recursos de la Administración Central, debiendo entonces procurar las fuentes de ingresos de recaudación propia o bien la disminución de los gastos, de manera de no incrementar las asignaciones presupuestarias que se remesan desde el Tesoro Provincial, en tal concepto.

Dicha limitación sólo podrá ser alterada cuando existan razones de fuerza mayor y expreso acuerdo del Poder Ejecutivo.

Artículo 23.- El Poder Ejecutivo deberá remitir mensualmente las remesas financieras destinadas a financiar los presupuestos de gastos de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los Órganos de Control, sujeto a lo establecido en el artículo 11 de la Ley nacional 25.917, a la cual la Provincia adhirió mediante Ley provincial 694.

Artículo 24.- Estímase en pesos trescientos veintinueve millones trescientos doce mil setecientos veinticinco ($ 329.312.725.-) las Transferencias de Capital de la Nación y la Inversión Financiera Provincial destinadas a solventar el Plan de Inversión del Fideicomiso Austral, según el Anexo correspondiente.

Artículo 25.- Establecése que el Censo al que hace alusión el artículo 4° de la Ley provincial 858 sea prorrogado para el Ejercicio 2016.

Artículo 26.- Sustitúyese el artículo 2º de la Ley provincial 939 por el siguiente texto:

“Artículo 2º.- La presente ley tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015.”.

Artículo 27.- Instrúyese al Poder Ejecutivo, a remitir a la Legislatura, dentro de los treinta (30)

días de aprobada la presente, las planillas anexas con el desagregado al nivel de apertura correspondiente, según los Clasificadores Presupuestarios vigentes, de los Recursos y Gastos en los distintos niveles institucionales, a los efectos de su control y seguimiento presupuestario.
Artículo 28.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- 22 -

Asunto Nº 388/14

Artículo 1º.- Adhiérese la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en todos sus términos a la Ley nacional 26.914, Modificación de la Ley sobre Problemática y Prevención de la Diabetes y su Resolución Reglamentaria Nº 1156/2014 del Ministerio de Salud de la Nación y todas sus normas reglamentarias.
Artículo 2º.- El Poder Ejecutivo implementará en el plazo de sesenta (60) días los mecanismos necesarios tendientes a garantizar la provisión de medicamentos e insumos establecidos en el Anexo II de la Resolución Reglamentaria Nº 1156/2014, a las personas que no estén comprendidas en el Sistema Nacional de Salud.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- 23 -

Asunto Nº 507/12

Capítulo Preliminar

Artículo 1º.- Ámbito de Aplicación. Las disposiciones de la presente ley son de aplicación para todo el Sector Público Provincial no financiero, el que estará integrado por:

a) el Poder Ejecutivo, Ministerios y Secretarías de Estado;
b) el Poder Legislativo;
c) el Poder Judicial;
d) organismos autárquicos y descentralizados, comprendiendo a las Instituciones de Seguridad Social;
e) órganos creados por la Constitución de la Provincia;
f) empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.

En el contexto de la presente ley se entiende por entidad toda organización pública con personería jurídica y patrimonio propio, se trate de empresas o sociedades y organismos descentralizados; y por jurisdicción al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, los ministerios, Secretarías de Estado, Fiscalía de Estado y al Tribunal de Cuentas.

Título I
Contrataciones

Capítulo I
Régimen General y Disposiciones Comunes

Artículo 2º.- Presunciones. Toda contratación incluida en el ámbito de aplicación dispuesto en el artículo 1º se presume de índole administrativa, salvo que de ella o de sus antecedentes surja que esté sometida a un régimen jurídico de derecho privado.
Artículo 3º.- Principios Generales. Los principios generales a los que deberá ajustarse la

gestión de las contrataciones teniendo en cuenta las particularidades de cada una, serán:

a) Razonabilidad: debe existir una vinculación estrecha entre el objeto de la contratación y el interés público comprometido;
b) Concurrencia e igualdad: todo oferente de bienes y servicios tendrá acceso a participar en contrataciones públicas en condiciones semejantes a las de los demás. La existencia de privilegios, ventajas o prerrogativas queda prohibida, salvo las excepciones que por ley se dispongan;
c) Transparencia: la contratación pública en todas sus etapas se basará en la publicidad y difusión de las actuaciones, permitiendo la utilización de las tecnologías informáticas que permitan aumentar la eficiencia de los procesos y facilitar el acceso de la sociedad a la información en materia de gestión de contrataciones y en la participación real y efectiva de la comunidad;
d) Economía: en toda contratación se aplicarán los criterios de simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en el uso de los recursos, en las etapas de los procesos de selección y en los acuerdos y resoluciones recaídos sobre ellos, debiéndose evitar en las bases y en los contratos exigencias y formalidades costosas e innecesarias;
e) Eficiencia y eficacia: los bienes y servicios se deberán contratar de acuerdo a la necesidad definida, en el momento oportuno y al menor costo posible dentro de los parámetros que se requieran en cada oportunidad; y
f) Sustentabilidad: las contrataciones públicas deberán regirse en criterios de sustentabilidad que garanticen el menor impacto al ambiente, mejores condiciones éticas y económicas, así como el cumplimiento de la legislación tributaria y laboral vigente.

Desde el inicio de las actuaciones hasta la finalización de la ejecución del contrato, toda cuestión vinculada con la contratación deberá interpretarse sobre la base de una rigurosa observancia de los principios que anteceden. Estos principios servirán de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de esta ley; como parámetros para actuación de los funcionarios y las dependencias responsables, y para suplir los vacíos en la presente ley y demás normas reglamentarias.

Artículo 4º.- Subsanación de Deficiencias. El principio de concurrencia de ofertas no debe ser restringido por medio de recaudos excesivos, severidad en la admisión de ofertas o exclusión de éstas por omisiones intrascendentes o subsanables, debiéndose requerir a los oferentes las aclaraciones que sean necesarias, dándoles la oportunidad de subsanar deficiencias insustanciales, sin que ello implique alterar los principios establecidos en la presente ley.

Artículo 5º.- Contratos Comprendidos. Este régimen se aplicará a los siguientes contratos: compraventa, suministros, servicios, locaciones, alquileres con opción a compra, permutas, concesiones de uso de los bienes del dominio público y privado del Estado provincial, que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en su ámbito de aplicación y a todos aquellos contratos no excluidos expresamente.

La presente ley será aplicable por analogía a las contrataciones de obras públicas, concesiones de obras públicas, concesiones de servicios públicos y licencias sólo en las cuestiones no previstas en las leyes específicas de estas materias.

Artículo 6º.- Contratos Excluidos. No se encuentran comprendidas las siguientes contrataciones, en el marco de la presente ley:

a) las de empleo público;
b) las que se celebren con estados extranjeros, entidades de derecho público internacional, instituciones multilaterales de crédito y aquellos que sean financiados total o parcialmente por dichos organismos; sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones del presente régimen cuando ello así se establezca y de las facultades de fiscalización sobre ese tipo de contratos que confiere a los organismos de control; y
c) las operaciones de crédito público.

Artículo 7º.- Normativa Aplicable. Las contrataciones se regirán por las disposiciones de la

presente ley, su reglamentación, las normas dictadas en consecuencia, por los pliegos de bases y condiciones y por el contrato o la orden de compra según corresponda.
Artículo 8º.- Órganos del Sistema. Créase la Oficina Provincial de Contrataciones, quien será el órgano rector del sistema de compras y contrataciones, con carácter desconcentrado, que operará en el ámbito del Ministerio de Economía.
Por otra parte, funcionarán las Unidades Operativas de Contrataciones, que tendrán a su cargo la gestión de las compras y contrataciones.
Artículo 9º.- Funciones de la Oficina Provincial de Contrataciones. La Oficina Provincial de Contrataciones tendrá las siguientes funciones:

a) proponer políticas de compras y contrataciones;
b) dictar normas reglamentarias, aclaratorias, interpretativas y complementarias en la materia;
c) mantener un registro actualizado de la normativa vigente en materia de contrataciones de la Provincia;
d) diseñar, implementar y administrar sistemas de información que permitan el seguimiento de las adquisiciones tanto por parte de la administración como de los terceros, haciendo uso de las herramientas informáticas disponibles;
e) diseñar, implementar y administrar el Registro de Proveedores del Estado (PROTDF);
f) elaborar y aprobar el pliego único de bases y condiciones generales, y confeccionar modelos de pliegos de bases y condiciones particulares en materias específicas;
g) fijar y mantener actualizados los precios de referencia de los bienes y servicios que adquiera el Estado provincial;
h) brindar asesoramiento a las Unidades Operativas de Contrataciones así como a los proveedores;
i) llevar a cabo contrataciones para procurar el suministro de bienes y servicios a las jurisdicciones o entidades contratantes, a petición de uno o más entidades o de oficio; y
j) otras que fije la reglamentación.

Artículo 10.- Funciones de las Unidades Operativas de Contrataciones. Las Unidades Operativas de Contrataciones tienen las facultades y obligaciones que se establecen en la presente, sin perjuicio de las que esten previstas en la legislación específica, en sus reglamentos, en los pliegos de bases y condiciones o en la restante documentación contractual y en especial:

a) recomendar y asesorar a la autoridad competente en cuestiones de interpretación de los contratos, resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificaciones, disposiciones de caducidad, rescisión o resolución, por razones de oportunidad, mérito o conveniencia;
b) controlar, inspeccionar y dirigir la respectiva contratación;
c) recomendar a la autoridad competente la ejecución por sí o por terceros del objeto del contrato, cuando el cocontratante no lo hiciera dentro de los plazos establecidos, cuando medien cuestiones de urgencia y no puedan ser resueltos por otros medios;
d) advertir a la autoridad competente sobre la necesidad de imponer las penalidades y sanciones previstas en los contratos específicos a los oferentes y a los cocontratantes, cuando éstos incumplieran sus obligaciones;
e) elaborar los pliegos de bases y condiciones particulares;
f) informar al Órgano Rector sobre la evolución de la gestión de las adquisiciones bajo su responsabilidad, con el fin de integrarlas al Sistema de Información;
g) coordinar y agrupar las contrataciones a su cargo cuando se considere conveniente; y
h) llevar a cabo las contrataciones que surjan bajo su órbita.

Artículo 11.- Responsabilidad. Los agentes de planta permanente y funcionarios que

autoricen, aprueben o gestionen contrataciones, apartándose de lo indicado en la presente y sus normativas complementarias, serán pasibles de penalidades que la legislación nacional y local establezca, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que pueda corresponderle.

Artículo 12.- Criterios de Selección. La adjudicación deberá realizarse en favor de la oferta más conveniente para el organismo contratante, teniendo en cuenta el precio, la calidad, los costos asociados de uso y mantenimiento presentes y futuros así como los criterios y objetivos con los cuales se dispuso la contratación, como ser oportunidad, mérito y conveniencia, y demás condiciones de la oferta. Cuando se trate de la compra de un bien o la contratación de un servicio estandarizado o de uso común, cuyas características técnicas puedan ser inequívocamente especificadas e identificadas, se entenderá en principio como oferta más conveniente la de menor precio.

Artículo 13.- Anticorrupción. Será causal determinante del rechazo de la oferta, en cualquier estado del procedimiento de contratación, así como causal de rescisión de pleno derecho del contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva, a fin de que:

a) funcionarios o empleados públicos con competencia referida a una contratación, incurran en acciones u omisiones en el cumplimiento de sus funciones;
b) funcionarios o empleados públicos hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos incurran en acciones u omisiones en el cumplimiento de sus funciones; o
c) cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos incurran en acciones u omisiones en el cumplimiento de sus funciones.

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido o intentaran cometer tales actos en interés del contratista, directa o indirectamente.

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aún cuando se hayan consumado en grado de tentativa.

Capítulo II
Procedimientos de Selección

Artículo 14.- Regla General. La selección del contratista para la ejecución de los contratos contemplados en este régimen es por regla general mediante licitación pública o concurso público.

La utilización de otros procedimientos de selección sólo será procedente en los casos expresamente previstos en los artículos 18 al 20 de la presente ley.

La elección del procedimiento de selección está determinada por una o más de las siguientes condiciones:

a) características de los bienes o servicios a contratar;
b) monto estimado del contrato; y
c) condiciones de comercialización y configuración del mercado.

Si la elección del procedimiento se efectúa conforme al inciso b) del presente artículo, y las ofertas, aún cuando sean admisibles o económicamente convenientes, superasen el monto dispuesto por el Decreto Jurisdiccional, ello conllevará al fracaso del procedimiento.

Artículo 15.- Procedimientos de Selección. Los procedimientos para seleccionar cocontratantes serán:

a) licitación o concurso;
b) contratación directa;
c) remate o subasta pública; y
d) subasta inversa electrónica.

Artículo 16.- Licitación o Concurso. Se entiende por licitación al procedimiento cuyo criterio de selección recaiga primordialmente en factores económicos. En cambio, se estará a concurso cuando el criterio de selección recaiga en cuestiones de capacidad técnica o científica, artística u otras del oferente según corresponda. En el concurso, el organismo licitante no determina detalladamente las especificaciones del objeto del contrato, aunque sí debe

consignar previamente los factores que han de considerarse para la evaluación de las propuestas y determinar el coeficiente de ponderación relativa que se asigna a cada factor y la manera de considerarlo.

Artículo 17.- Tipos de Licitación o Concurso. Los procedimientos de licitación o el concurso pueden ser:

a) públicos o privados: cuando el llamado a participar está dirigido a una cantidad indeterminada de posibles oferentes, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos que exija el pliego de bases y condiciones. La licitación o concurso es privado cuando intervienen como oferentes los invitados en forma directa por el ente licitante.

   La licitación o concurso privado será de aplicación cuando el valor estimado de los contratos no supere el que determine la reglamentación, o haya un número determinado de proveedores u otras razones excepcionales que justifiquen este empleo distinto al de la licitación o concurso público y así lo justifique la autoridad competente que la disponga;

b) de etapa única o múltiple: es única cuando la comparación de las ofertas en sus aspectos económicos, de calidad o técnicos, se efectúa en un mismo acto, esto es, mediante la presentación de un sobre único. Es múltiple cuando la comparación y evaluación de antecedentes empresariales y técnicos, capacidad económica financiera, características de la prestación y análisis de los componentes económicos de las ofertas se realizan mediante preselecciones o precalificaciones sucesivas, esto es, por la presentación de más de un sobre.

   Resulta de aplicación la licitación o concurso de etapa múltiple cuando las características específicas de la prestación, tales como el alto grado de complejidad del objeto o la extensión del término del contrato lo justifiquen. En este caso, se realiza en dos (2) o más fases el análisis de oferentes y la comparación de las ofertas. En una primera etapa, se evalúan los requisitos y documentación. n una segunda, se comparan las ofertas. En los casos en que se utilice esta variante, la recepción de los sobres respectivos será simultánea para todos los oferentes. Sólo se procederá a abrir los correspondientes a las ofertas económicas de aquellos oferentes que hubieran dado cumplimiento a lo pautado en la primera etapa;

c) con iniciativa privada: surge de la presentación de iniciativas por parte de personas físicas o jurídicas. Procederá cuando la iniciativa sea novedosa u original o implique una innovación tecnológica o científica y contenga los lineamientos que permitan su identificación y comprensión, así como la aptitud suficiente para demostrar la viabilidad jurídica, técnica y económica del proyecto. Aceptada la propuesta, se debe llamar a licitación pública a fin de seleccionar a quién ejecutará la iniciativa oportunamente presentada, conforme el procedimiento que se establezca en la reglamentación respectiva.

   Considérase que en todos los casos en que las ofertas presentadas sean de equivalente conveniencia, será preferida la de quien hayan presentado la iniciativa, entendiéndose que existe equivalencia de ofertas cuando la diferencia entre la oferta del autor de la iniciativa y la oferta mejor calificada no supere el cinco por ciento (5%) de esta última. Si la diferencia entre la oferta mejor calificada y la del iniciador sea superior a la indicada precedentemente, hasta en un veinte por ciento (20%), el oferente mejor calificado y el autor de la iniciativa serán invitados a mejorar sus ofertas en forma simultánea y en sobre cerrado.

   El autor de la iniciativa privada, en el supuesto de no ser seleccionado, tendrá derecho a percibir de quien resulte adjudicatario, en calidad de honorarios y gastos reembolsables, un porcentaje del uno por ciento (1%) de la oferta adjudicada. El organismo licitante en ningún caso estará obligado a rembolsar gastos ni honorarios al autor del proyecto por su calidad de tal; y

d) convenio marco: es un acuerdo que, sin fijar cantidades definitivas de contratación,

pretende acordar precios y condiciones de contratación determinadas durante un período de tiempo definido. Podrá ser de aplicación para adquirir bienes y servicios estandarizados, es decir con características técnicas que puedan ser inequívocamente especificadas e identificadas y que tienen un mercado permanente.

Artículo 18.- Contratación Directa. La contratación directa es un procedimiento de selección simplificado, que sólo será procedente en los casos expresamente previstos a continuación. Dicha medida debe ser debidamente fundada y ponderada por la autoridad competente que la invoca. Podrá contratarse en forma directa con un proveedor seleccionado, de acuerdo a la reglamentación que se dicte al efecto, sólo en los siguientes casos:

a) cuando la licitación, concurso, remate o subasta resulten desiertos o fracasados;
b) cuando medien probadas razones de urgencia o emergencia que respondan a circunstancias objetivas que impidan la realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno, o su realización resienta seriamente el servicio;
c) para adquirir bienes o servicios cuya fabricación o propiedad sea exclusiva de quienes tengan privilegio para ello y no haya sustituto conveniente. Asimismo, cuando la operación requiera o se encuentre supeditada a la compatibilidad técnica o tecnológica de bienes o servicios existentes para el Estado. También procederá cuando razones de compatibilidad técnica o tecnológica permitan la entrega como parte de pago de bienes del Estado del mismo género que requieran actualizaciones, con la finalidad de proceder a su renovación y ampliación. La autoridad competente que invoque esta excepción deberá fundarse en informes técnicos que acrediten objetivamente la existencia de los supuestos que la habilitan;
d) las contrataciones que sean menester efectuar en países extranjeros, siempre que no sea posible realizar la licitación pública;
e) cuando haya notoria escasez de los elementos a adquirir;
f) la adquisición, ejecución, conservación o restauración de obras artísticas, científicas o técnicas que deban confiarse a empresas, personas o artistas especializados, que sean los únicos que puedan llevarlas a cabo;
g) las reparaciones de maquinarias, equipos, rodados o motores cuyo desarme, traslado o examen previo sea imprescindible para determinar la reparación necesaria y resulte oneroso en caso de utilizarse otro procedimiento de selección. Esta excepción no rige para las reparaciones comunes de mantenimiento, periódicas, normales o previsibles, salvo en el caso de que ello conlleve la pérdida de la garantía o un servicio previsto para la postventa;
h) cuando las circunstancias exijan que las operaciones del Estado provincial se mantengan secretas;
i) la compra de semovientes por selección y semillas, plantas o estacas, cuando se trate de ejemplares únicos o sobresalientes;
j) cuando se trate de bienes o servicios cuyos precios sean determinados o autorizados por el Estado. Se incluyen dentro de este inciso las contrataciones de servicios básicos como energía eléctrica, agua corriente, gas, transporte de pasajeros por vía terrestre, aérea, marítima, fluvial o lacustre y de telecomunicaciones tales como telefonía fija, telefonía móvil, internet u otras tecnologías que en el futuro se utilicen, y que adquieran el carácter de servicio de uso regular para el Estado provincial. Ello sólo en los casos en los que no exista más de un prestador posible o el cambio de prestador resulte oneroso para la continuidad de la prestación del servicio y pueda implicar una suspensión transitoria del mismo;
k) la locación de servicios de personas físicas que resulten necesarios para una adecuada prestación del servicio propio del área contratante, respetando las restricciones establecidas en el artículo 73, inciso 2) de la Constitución Provincial;
l) cuando el monto presunto del contrato no supere el máximo que fije la

reglamentación; y

m) los contratos interadministrativos que se puedan celebrar entre las jurisdicciones y entidades alcanzadas por la presente ley con organismos nacionales, provinciales o municipales, como así también con las sociedades en cuya administración o capital tenga participación mayoritaria cualquiera de los organismos arriba mencionados. Ello no implica admitir en este inciso aquellos casos en que el cocontratante efectúe subcontrataciones con terceros para el cumplimiento del acuerdo.

Artículo 19.- Remate o Subasta Pública. El procedimiento de remate o subasta pública es aquel que se realiza con intervención de un martillero público con un precio base previamente establecido y en el cual la adjudicación recae en el mejor postor. Puede ser aplicado en los siguientes casos, sin perjuicio de otros que en el futuro puedan surgir:

a) venta de bienes inmuebles y muebles de propiedad del Estado provincial, así como los semovientes;
b) concesión de uso de bienes del dominio público y privado del Estado; o
c) compra de bienes muebles, inmuebles, semovientes, incluyendo dentro de los primeros los objetos de arte o de interés histórico, tanto en el país como en el exterior. Este procedimiento será aplicado preferentemente al previsto en el artículo 18 de contratación directa de la presente ley, en los casos en que la subasta sea viable, en las condiciones que fije la reglamentación.

Artículo 20.- Subasta Inversa Electrónica. La subasta inversa electrónica es aquella en que la selección de proveedores se desarrolla a través de una plataforma electrónica, y mediante un procedimiento dinámico. Permite que los potenciales proveedores pujen, y oferten rebajas del precio vigente, a fin de ganar el contrato. Este procedimiento será aplicable en la medida que se incorporen las herramientas tecnológicas que lo hagan posible, el oferente sobre el que recaiga la contratación deberá reunir las condiciones exigidas para contratar con el Estado.

Artículo 21.- Límites de Montos. Los límites de monto establecidos para los procedimientos de selección descriptos en los artículos 17 inciso a) y 18 inciso l), serán determinados por la reglamentación.

Artículo 22.- Régimen Especial para Hidrocarburos. Podrán contratarse, por los procedimientos que se detallarán, las siguientes operaciones vinculadas con hidrocarburos:

a) los otorgamientos de permisos de exploración y concesiones de explotación que se regirán por lo dispuesto en las Secciones Segunda y Tercera del Título II de la Ley nacional 17.319 y sus modificatorias; y
b) la venta de hidrocarburos propiedad de la Provincia, sea que fueren obtenidos por explotación de yacimientos propios o por percepción de regalías en especie según lo establecido por el artículo 60 de la Ley nacional 17.319, siempre que sean destinados a proyectos de industrialización en la Provincia. A tal fin, el Poder Ejecutivo implementará el Registro Público de Empresas Industrializadoras de Hidrocarburos en la Provincia, el que tendrá por fin inscribir y receptar las ofertas que realicen las empresas interesadas en industrializarlos, en los términos que se establezcan en las condiciones particulares de cada llamado. Las ofertas que presenten las empresas deberán establecer claramente el proceso de industrialización a realizarse con los hidrocarburos, la inversión prevista para su instalación, la oferta económico financiera por la adquisición del hidrocarburo de que se trate, la proyección de ocupación de mano de obra que implica el proyecto industrial y el estudio de su impacto ambiental. El Poder Ejecutivo analizará la oferta más conveniente a los intereses de la industrialización de hidrocarburos de la Provincia y celebrará el respectivo convenio con el adjudicatario, remitiéndolo al Poder Legislativo para su aprobación por los dos tercios (2/3) de la Legislatura según lo establecido en el artículo 84 de la Constitución Provincial.

Capítulo III
Disposiciones Comunes a las Contrataciones

Artículo 23.- Procedimiento Básico. Lo establecido en el presente Capítulo será aplicable a todos los procedimientos de selección, siempre que no se dispongan excepciones en el marco de la presente.

Artículo 24.- Del Registro de Proveedores de la Provincia (PROTDF). En el PROTDF deben inscribirse las personas físicas o jurídicas que deseen proveer bienes y servicios a la Provincia. En dicho Registro se consignarán los antecedentes que en acuerdo con la reglamentación, se consideren necesarios. Los procedimientos de inscripción deben ser simples, gratuitos, rápidos y asistidos. La inscripción se realizará en forma electrónica y se deberá adjuntar por parte del interesado la documentación establecida en la reglamentación.

Las Unidades Operativas de Contrataciones solicitarán la certificación de inscripción registral y vigencia de la misma en forma interna al Registro. La inscripción es requisito indispensable para contratar, con las excepciones que disponga la reglamentación.

En el PROTDF se registrarán también las sanciones y penalidades en las que hayan incurrido los proveedores.

Artículo 25.- Personas Habilitadas para Contratar. Podrán contratar con el Estado provincial, las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse, que no se encuentren comprendidas en el artículo 26, y que se encuentren inscriptas en el PROTDF.

La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas, mas deberá encontrarse inscripto en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación.

Artículo 26.- Prohibiciones. No podrán contratar con el Estado provincial:

a) personas físicas y sus convivientes, las personas jurídicas e individualmente sus socios, miembros del directorio, consejo de administración o gerentes, según el caso, que estén sancionados con suspensión o inhabilitación, mientras dichas sanciones sigan vigentes;
b) firmas sucesoras de firmas sancionadas, cuando a criterio de la autoridad de aplicación, existan indicios suficientes, por su gravedad, precisión y concordancia, para presumir que media en el caso una simulación con el fin de eludir los efectos de las sanciones impuestas a las antecesoras;
c) agentes y funcionarios del sector público nacional, provincial y municipal, y las empresas en las cuales aquellos tengan una participación suficiente para formar la voluntad social, en tanto se verifique que pueda ejercer una influencia directa o indirecta en los procedimientos de selección establecidos en el marco de la presente ley, de conformidad con lo establecido en la Ley nacional de Ética de la función Pública 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. Podrán admitirse excepciones a lo aquí dispuesto en las condiciones que fije la reglamentación.
d) fallidos e inhibidos mientras no sean rehabilitados;
e) personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la administración de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran en estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en contrario; y
f) condenados por delitos vinculados a contrataciones con el Estado provincial. Esta prohibición alcanzará tanto a las personas físicas como jurídicas cuyos socios, administradores o apoderados, miembros del directorio, consejo de administración o gerentes, según el caso se encuentren en dicha condición. Asimismo, se hace extensiva a los cónyuges de sobre quien recaiga dicha condena. El plazo de inhibición será establecido en la reglamentación.

Artículo 27.- Comunicaciones. Toda comunicación entre el organismo contratante y los oferentes o proveedores, ya sea en el transcurso del procedimiento de selección o durante la ejecución del contrato debe efectuarse conforme a los principios de economía y celeridad en los trámites. A tal efecto, se admite el uso del correo electrónico como medio válido para

cursar comunicaciones y notificaciones conforme lo establezca la reglamentación.

Asimismo, cualquier otro medio de comunicación que en el futuro pueda ser implementado y que propenda a cumplir con los principios enunciados anteriormente, será válido, siempre que se garantice la certeza de fecha de recepción y del contenido del mensaje, en tanto la reglamentación así lo determine.

Artículo 28.- Cómputo de Plazos. Todos los plazos que se establezcan en la reglamentación de la presente ley deben computarse en días hábiles administrativos, salvo disposición expresa en contrario.

Artículo 29.- Observaciones, Impugnaciones y Recursos. La reglamentación determinará las actuaciones que sean susceptibles de observaciones o impugnaciones, los requisitos y el tratamiento que se dará a ellas. Toda observación, impugnación, reclamo o presentación similar efectuada fuera de lo previsto en dicha reglamentación carecerá de efectos suspensivos. La reglamentación determinará el tratamiento a aplicar a éstas últimas.

Artículo 30.- Garantías. Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios deberán constituir garantías o contra garantías por anticipos otorgados por la Administración Pública Provincial, en las formas y por los montos que establezca la reglamentación o los pliegos, con las excepciones que aquella determine.

Artículo 31.- Revocación del Procedimiento. Los organismos contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, siempre que medie la fundamentación de la causa, sin que por ello dé lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes.

Artículo 32.- Formalidades de las Actuaciones. Deberán realizarse mediante el dictado de acto administrativo como mínimo las siguientes actuaciones:

a) convocatoria y elección del tipo de procedimiento de selección, aprobación de los pliegos de bases y condiciones y designación de la comisión de preadjudicación;
b) declaración de que el procedimiento haya resultado desierto o fracasado;
c) preselección de propuestas en la licitación con etapa múltiple;
d) la aplicación de penalidades;
e) aprobación del procedimiento de contratación y la adjudicación;
f) determinación de dejar sin efecto el procedimiento; y
g) suspensión, resolución, rescisión, rescate o declaración de caducidad del contrato.

Lo dispuesto en la Ley provincial 141, artículo 99, inciso d) sólo procederá a requerimiento del área contratante, cuando exista una duda jurídica en el marco de las actuaciones y en el caso de impugnaciones o recursos.

Artículo 33.- Prohibición de Desdoblamiento. No se podrá fraccionar una contratación con la finalidad de eludir procedimientos de selección que se indiquen en la presente. Esta prohibición resulta independiente del origen de los fondos que las financien.

El funcionario o agente que incurre en la prohibición del presente artículo, será pasible de las penalidades establecidas en el artículo 11 de la presente ley.

Artículo 34.- Publicidad y Difusión. La convocatoria a presentar ofertas en las licitaciones y concursos públicos, deberá efectuarse mediante la publicación de avisos en el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de circulación masiva en cada ciudad de la Provincia.

La cantidad de días de publicación tendrá relación con los montos previstos para la contratación en las condiciones que se fijen en la reglamentación de la presente ley.

Los plazos establecidos y los medios de publicidad deben ser considerados como mínimos, pudiendo ampliarse de acuerdo a la complejidad, importancia u otras características de la contratación a juicio de la autoridad competente. Cuando se decida la publicidad en un medio gráfico, éste debe ser de tal entidad que garantice una amplia difusión.

Cuando se trate de licitaciones o concursos internacionales, deben disponerse las publicaciones en los países correspondientes en las condiciones establecidas en la normativa vigente.

Todas las convocatorias, cualquiera sea el procedimiento de selección que se utilice, se difundirán por internet u otro medio electrónico de igual alcance que lo reemplace, en el sitio del Órgano Rector, en forma simultánea, desde el día en que se les comience a dar

publicidad por el medio específico que se establezca en el presente o en la reglamentación o desde que se cursen las invitaciones y hasta el día de la apertura.
Quedan exceptuadas de la obligación de difusión en todas las etapas del procedimiento las contrataciones directas encuadradas en el artículo 18, incisos b), d) y h).

En todos los procedimientos de selección en que la invitación a participar se realice a un determinado número de personas físicas o jurídicas, la Unidad Operativa de Contrataciones deberá considerar y evaluar las ofertas presentadas por quienes no fueron convocados.

Artículo 35.- Revocación de los Actos Administrativos del Procedimiento de Contratación. La comprobación de que en un llamado a contratación se hayan omitido los requisitos de publicidad y difusión previa, en los casos en que la norma lo exija, o formulado especificaciones o incluido cláusulas cuyo cumplimiento sólo fuera factible por determinado interesado u oferente, de manera que el mismo esté dirigido a favorecer situaciones particulares, dará lugar a la revocación inmediata del procedimiento, cualquiera fuere el estado de trámite en que se encuentre, y a la iniciación de las actuaciones sumariales pertinentes.

Artículo 36.- Redeterminación de Precios. A fin de procurar el mantenimiento de valores constantes de las contrataciones, procederá la aplicación del procedimiento de redeterminación de precios basado en criterios objetivos, que estará determinado en la reglamentación y en el caso que fuera expresamente previsto en el pliego de bases y condiciones y en el contrato particular.

Capítulo IV
Contrataciones Públicas Electrónicas

Artículo 37.- Contrataciones en Formato Digital. Las contrataciones comprendidas en este régimen podrán realizarse en formato digital firmado digitalmente, utilizando los procedimientos de selección y las modalidades que correspondan. También podrán realizarse en formato digital firmado digitalmente los contratos previstos en el artículo 5° del presente.

Las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 1° estarán obligadas a aceptar el envío de ofertas, la presentación de informes, documentos, comunicaciones, impugnaciones y recursos relativos a los procedimientos de contratación establecidos en este Régimen, en formato digital firmado digitalmente, conforme lo establezca la reglamentación.

Se considerarán válidas las notificaciones en formato digital firmado digitalmente, en los procedimientos regulados por la presente.

Deberá considerarse que los actos realizados en formato digital firmados digitalmente cumplen con los requisitos del artículo 3° de la Ley provincial 955 o aquellas que la sustituyan y sus normas reglamentarias, en los términos establecidos en la mencionada ley, las que se aplicarán, en el caso de las contrataciones incluidas en el artículo 5° de este Régimen, aún a aquellos actos que produzcan efectos individuales en forma directa. Los documentos digitales firmados digitalmente tendrán el mismo valor legal que los documentos en soporte papel con firma manuscrita y serán considerados como medio de prueba de la información contenida en ellos.

Artículo 38.- Regulación. La reglamentación establecerá la regulación integral de las contrataciones públicas electrónicas, en particular el régimen de publicidad y difusión, lo referente al proceso electrónico de gestión de las contrataciones, los procedimientos de pago por medios electrónicos, las notificaciones por vía electrónica, la automatización de los procedimientos, la digitalización de la documentación y el expediente digital.

Capítulo V
Concesión de Uso de los Bienes del Dominio Público y Privado del Estado Provincial

Artículo 39.- Caracteres. Se regirán por las disposiciones de este Capítulo los contratos por los que los administrados, actuando a su propia costa y riesgo, ocupen, usen o exploten, por

tiempo determinado, bienes pertenecientes al dominio público o privado del Estado provincial, al que pagarán un canon por dicho uso, explotación u ocupación de los bienes puestos a su disposición en forma periódica y de acuerdo a las pautas que establezcan los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares.

Artículo 40.- Cláusulas Particulares. Los pliegos de bases y condiciones particulares establecerán, según correspondan:

a) plazo de vigencia del contrato;
b) plazos y formas de pago del canon a abonar por el concesionario, definición de las bases y procedimientos a seguir para su fijación y su eventual reajuste;
c) presentación de certificado de visita al lugar o a las instalaciones objeto de la concesión, por parte del oferente;
d) condiciones y plazos relativos a la entrega de los bienes y su habilitación para el inicio de las actividades por parte del concesionario;
e) cronograma y descripción de los trabajos de mantenimiento o mejoras que deba introducir el concesionario en los bienes afectados a la concesión;
f) garantías que podrán ser exigidas por los bienes de la Administración Provincial afectados a la concesión, por las obras a realizar que obligue el contrato y por los daños que pudan ocasionarle al concedente o a terceros o, en su caso, fondo que se deberá integrar para reparaciones o reposiciones, con retenciones porcentuales sobre los pagos pertinentes. Tales garantías deberán comprender todo el lapso de duración del contrato y sus eventuales prórrogas;
g) idoneidad técnica y/o experiencia requerida al concesionario y, en su caso, a sus reemplazantes para la atención de la concesión;
h) definición de los bienes afectados a la concesión, incluyendo los datos de la ubicación de las mejoras si las hubiera;
i) limitación o acumulación de adjudicaciones similares a un mismo oferente, cuando existan razones previamente fundadas por autoridad competente;
j) condiciones que obliguen al adjudicatario a hacerse cargo transitoriamente de otra concesión similar que por cualquier motivo se hubiera extinguido;
k) si se otorga o no exclusividad;
l) patrimonio mínimo a exigir al oferente;
m) posibilidad de redeterminación de precios; y
n) otras cuestiones que resulten de relevancia.

Artículo 41.- Falta de Entrega de los Bienes por parte del Estado. Si por razones de caso fortuito o fuerza mayor, no pueda hacerse entrega de los bienes en el plazo estipulado, el concesionario podrá desistir del contrato y obtener la devolución del total de la garantía aportada, si hubiera. Esta situación no generará derecho a indemnización alguna.

Artículo 42.- Precio Base. Las convocatorias para el otorgamiento de concesiones se efectuarán con canon base, salvo que la autoridad competente acredite su inconveniencia.

Artículo 43.- Criterio de Selección. La adjudicación deberá recaer en la propuesta que ofrezca el mayor canon, salvo que en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares se estableciera otro criterio de selección.

Artículo 44.- Responsabilidad por Daños. El concesionario será responsable en todos los casos de los deterioros ocasionados a los bienes de propiedad del Estado provincial afectados a la concesión, que no obedezcan al uso normal de los mismos.

Artículo 45.- Propiedad de las Mejoras. Todas las mejoras edilicias, tecnológicas o de cualquier tipo que el concesionario introduzca en los bienes de la Administración Provincial afectados al cumplimiento del contrato, quedarán incorporadas al patrimonio estatal y no darán lugar a compensación alguna.

Artículo 46.- Obligaciones del Concesionario. Sin perjuicio del cumplimiento de las cláusulas del pliego de bases y condiciones particulares, el concesionario estará obligado a:

a) cumplimentar estrictamente las disposiciones legales que sean de aplicación, de acuerdo con la naturaleza de la concesión, y al pago de los impuestos, tasas, contribuciones, patentes y demás obligaciones que graven a los bienes por su

explotación o actividad;
b) satisfacer en todos los casos las indemnizaciones por despido, accidentes y demás pagos originados por la concesión;
c) no destinar los bienes a otro uso o goce que el estipulado en el contrato de concesión o hacer uso indebido de los mismos;
d) mantener los bienes en perfectas condiciones de conservación, uso y goce y, en su caso, efectuar con la periodicidad establecida en las cláusulas particulares los trabajos de mantenimiento o mejoras que correspondan;
e) facilitar el acceso de inspectores autorizados a todas las instalaciones, libros de contabilidad y documentación vinculada con el cumplimiento del contrato y firmar las actas de infracción que se labren;
f) no introducir modificaciones ni efectuar obras de cualquier naturaleza sin consentimiento escrito de la dependencia contratante;
g) proponer con anticipación a la dependencia contratante los representantes o reemplazantes con facultad para obligarlo;
h) entregar los bienes dentro del plazo establecido en el contrato a su vencimiento. Si nada dice dicho instrumento legal, deberá entregarlo a los diez (10) días corridos de vencido el contrato o de comunicada y notificada su rescisión; e
i) satisfacer las multas por infracciones dentro del plazo fijado al efecto.

Artículo 47.- Causales de Rescisión. Serán causales de rescisión por culpa del concesionario, sin perjuicio de otras establecidas en la presente ley o en los pliegos de bases y condiciones particulares:

a) falta de pago del canon acordado en el plazo establecido;
b) falta de concurrencia al acto de entrega de los bienes o negativa a su habilitación, salvo causas justificadas a juicio de la dependencia contratante;
c) destinar los bienes a un uso o goce distinto del estipulado;
d) infracciones reiteradas en el cumplimiento de las demás obligaciones establecidas en la presente ley o en los pliegos de bases y condiciones particulares;
e) interrupciones reiteradas de las obligaciones emergentes de la concesión;
f) cuando el contrato sea transferido en todo o en parte, sin que la misma haya sido autorizada previamente por el organismo contratante; y
g) en los casos en que se incurra en las causales del artículo 26.

Artículo 48.- Multas. El incumplimiento de las obligaciones contraídas por el concesionario dará lugar a la aplicación de multas las que serán graduadas en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

Artículo 49.- Falta de Restitución de los Bienes por Parte del Concesionario. Si el concesionario no haya restituido los bienes en el plazo fijado al efecto, se lo intimará para que desaloje el lugar. De persistir el incumplimiento, el organismo competente podrá requerir a la justicia el inmediato desalojo del concesionario o de cualquier otro ocupante. Efectuada la presentación requerida, los jueces, sin más trámite, ordenarán el lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública, sin perjuicio de las acciones de orden pecuniario que puedan corresponder a ambos contratantes.

Artículo 50.- Continuidad de la Concesión por Sucesión o Curatela. En caso de fallecimiento o incapacidad del concesionario, la entidad contratante tendrá la facultad de aceptar la continuación de la concesión, siempre que los derechohabientes o el curador unifiquen la personería y ofrezcan garantías suficientes. Si la sustitución no fuera aceptada, el contrato quedará rescindido sin aplicación de penalidades.

Capítulo VI
Locación de Inmuebles

Artículo 51.- Normas de Aplicación. La locación de inmuebles por parte del Estado provincial se regirá por la presente ley y su reglamentación, por las cláusulas del pliego de bases y condiciones generales y particulares y por las estipulaciones del respectivo contrato de

locación.
En todo lo que no se halla previsto expresamente por la documentación contractual, se aplicará supletoriamente el régimen general de locaciones urbanas.
Artículo 52.- Renovación de Locaciones. Si el organismo contratante demostrara que la oferta del actual locador no es superior en más del veinte por ciento (20%) a los valores de mercado y la existencia de razones de funcionamiento tornaran inconveniente el desplazamiento de los servicios, o impidieran la continuidad de los mismos, podrá decidir la adjudicación a su favor utilizando el procedimiento de contratación directa previsto en el artículo 18 inciso c) de la presente ley.

Título II
De la Gestión de Bienes de Uso del Estado

Capítulo I
Consideraciones Generales

Artículo 53.- Patrimonio Incluido. El patrimonio de la Provincia se integra con los bienes que por expresa disposición de ley o por haber sido adquiridos por sus organismos, son de propiedad provincial. Asimismo, integran el patrimonio provincial los bienes recibidos por donación o legados, por nacimiento (en el caso de los semovientes), aquellos bienes de uso en proceso de construcción y los elaborados por dependencias del Estado provincial.
Artículo 54.- Patrimonio Excluido. Quedan excluidos de las disposiciones de la presente ley los bienes que integran el patrimonio cultural, histórico y natural del Estado provincial, que se regirán por las normas específicas que le son aplicables y subsidiariamente por la presente ley en cuanto a su administración, guarda y custodia.
Artículo 55.- Principios Rectores. El sistema deberá ajustarse a los siguientes principios rectores:

a) economicidad, eficiencia y eficacia en todas y cada una de las etapas del proceso de administración de bienes;
b) identificación y control a través de inventarios o registros adecuados;
c) colaboración y coordinación entre las distintas jurisdicciones y entidades con el fin de optimizar la utilización y rendimiento de los bienes;
d) responsabilidad de los agentes y funcionarios que autoricen, dirijan y ejecuten las acciones de disposición, administración, guarda o custodia en cuanto a su legitimidad, oportunidad, mérito o conveniencia; y
e) la gestión de los bienes deberá coadyuvar al desarrollo y ejecución de las distintas políticas públicas en vigor.

Artículo 56.- Organización Administrativa del Sistema. La organización funcional del sistema se compone de:

a) un Órgano Rector que actuará como Unidad Central del Sistema y tendrá a cargo la elaboración de las políticas, las normas, los procedimientos, la administración de la información y la evaluación del sistema; y
b) las Unidades Patrimoniales Periféricas que funcionarán en cada una de las jurisdicciones o entidades del Sector Público provincial y tendrán a su cargo la administración de los bienes que tengan asignados o hayan adquirido para su uso, según la presente ley y las que reglamente el Órgano Rector.

Esta separación será de aplicación siempre que la misma resulte adecuada y conveniente en función de la Jurisdicción o Entidad que se trate.
Artículo 57.- Disposición de uso y Administración. La autoridad superior de cada jurisdicción o entidad dispondrá del uso de los bienes muebles e inmuebles adquiridos o asignados para el funcionamiento de los servicios a su cargo.
El Poder Ejecutivo determinará el organismo que tendrá a su cargo la administración de los bienes cuando quedaran sin uso o destino específico.
Artículo 58.- Conservación y Mantenimiento. Los bienes del Estado provincial serán

conservados, mantenidos y custodiados de acuerdo con las normas establecidas en la presente ley, su reglamentación y las instrucciones que pueda emitir el Órgano Rector.

A tal fin y de acuerdo con su naturaleza, deberán ser objeto de mantenimiento preventivo y correctivo sistemático.

Los gastos atinentes a la conservación y mantenimiento de los bienes estarán a cargo de las jurisdicciones y entidades que los tengan asignados, con cargo a sus partidas presupuestarias específicas.

Artículo 59.- Responsabilidad Patrimonial sobre los Bienes del Estado. Todo agente de planta permanente o funcionario será pasible de asumir la responsabilidad patrimonial sobre los bienes de uso inventariables, de acuerdo a la reglamentación.

En ningún caso, a una persona se la podrá obligar a suscribir un cargo patrimonial sobre bienes de uso del Estado si éstos no están bajo su inmediato control, supervisión, custodia o administración.

Quienes tengan a su cargo bienes bajo su administración o custodia, son responsables de la pérdida o daño que sufran los mismos, cuando no provengan del deterioro natural por razón de su uso legítimo o de otra causa justificada. Dichas personas estarán obligadas a velar por el correcto uso de los bienes, debiendo gestionar el mantenimiento y conservación adecuados. Serán eximidos de responsabilidad por los daños previstos en el párrafo anterior cuando sean por fuerza mayor o caso fortuito.

Cuando se compruebe culpa o dolo en la pérdida o robo de bienes públicos se deberá restituir o pagar el bien de acuerdo con el valor de mercado.

Artículo 60.- Inventario General. Todos los bienes del Estado provincial formarán parte del Inventario General de Bienes de Uso de la Provincia que deberá mantenerse permanentemente actualizado.

El Poder Ejecutivo podrá disponer relevamientos totales o parciales de bienes, en las oportunidades que estime convenientes, sin perjuicio de los que en razón de sus funciones específicas pueda establecer el Órgano Rector.

Artículo 61.- Donaciones Recibidas. Competerá a las autoridades superiores de los poderes del Estado, o los funcionarios en quienes las mismas deleguen la facultad, y a las de organismos especialmente autorizados por ley, la aceptación de donaciones a favor de la Provincia.

No serán consideradas donaciones, las cesiones de tierras que obligatoriamente, en virtud de normas vigentes en materia de fraccionamiento, son realizadas con destino a uso público o para reservas fiscales, cuya aceptación se concretará al aprobarse el plano de subdivisión que la motiva.

Artículo 62.- Transferencias. Se podrá transferir con o sin cargo aquellos bienes inmuebles o muebles en desuso o en condiciones de rezago, conforme lo disponga la reglamentación:

a) entre reparticiones del Estado provincial;
b) a entidades oficiales nacionales, provinciales o municipales; y
c) a entidades de bien público, previa autorización legislativa por mayoría agravada.

Podrán ser donados aquellos semovientes cuya vida útil se encuentre agotada, debiendo tal circunstancia ser previamente certificada por profesional veterinario autorizado.

Artículo 63.- Permuta. Podrán permutarse bienes muebles o semovientes siempre que se demuestre que la operación resulta ventajosa a los intereses del Estado. La valuación deberá establecerse por un técnico competente, siempre que la naturaleza del bien que se trate lo amerite. Asimismo deberá pronunciarse con respecto a la calidad y características de los bienes a permutar.

La entrega a cuenta de precio de bienes muebles o semovientes, en operaciones de compra y venta simultánea, será reglada por el Poder Ejecutivo.

Capítulo II
De la Administración y Disposición de los Bienes Inmuebles

Artículo 64.- Administración Compartida. Cuando distintas jurisdicciones y entidades ocupen

un mismo inmueble, ejercerán la administración en forma común o compartida, a excepción de aquellos casos en la cual una de ellas asume exclusivamente la responsabilidad de la administración.
Artículo 65.- Venta. Los bienes inmuebles de la Provincia no podrán enajenarse ni gravarse en forma alguna sin expresa disposición de ley, la que al mismo tiempo deberá indicar el destino de su producido, en cuyo defecto, pasará a integrar el conjunto de recursos aplicados a financiar el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial.
Artículo 66.- Inmuebles en Desuso. Los inmuebles del dominio privado del Estado provincial no podrán mantenerse inactivos o privados de destino útil. Si por cualquier circunstancia algún inmueble asignado a una jurisdicción o entidad, deviniera no necesario para la prestación del servicio, se deberá comunicar dicha circunstancia al Ministerio de Economía, en un plazo máximo de sesenta (60) días, a fin de considerar otro destino.
Artículo 67.- Destino de Inmuebles en Desuso. Cumplimentado lo indicado en el artículo anterior, los inmuebles de propiedad del Estado provincial que se encuentren ociosos deberán ser:

a) entregados en comodato a:
   1. organismos públicos nacionales, provinciales o municipales;
   2. entidades de bien público con personería jurídica. Este caso, será procedente siempre que el inmueble sea destinado al desarrollo de un programa de bien público mediante el cual se beneficie a la comunidad y con previa autorización legislativa con mayoría agravada

      Durante el tiempo en que el comodatario permanezca en posesión del bien, tendrá a su cargo el pago de todos los impuestos, tasas y contribuciones y servicios que afecten al mismo y deberá asegurarlo contra riesgo de incendio como mínimo en una compañía aseguradora a favor del comodante.

      Para realizar cualquier tipo de mejoras en el inmueble, el comodatario deberá requerir la expresa conformidad de la comodante. Las mejoras realizadas quedarán en beneficio exclusivo del inmueble, no pudiendo la comodataria efectuar reclamo alguno por tal concepto;
b) locados, en acuerdo a lo que disponga la reglamentación;
c) concesionados en observancia a lo dispuesto en los artículos 39 al 50 de la presente ley y su reglamentación;
d) transferidos en acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la presente ley; y
e) vendidos, conforme lo dispuesto en los artículos 19 y 65 de la presente ley y su reglamentación.

Capítulo III
De la Administración y Disposición de los Bienes Muebles

Artículo 68.- Del Uso. Los bienes muebles deberán destinarse al uso para el que fueron asignados o adquiridos, no pudiendo ser utilizados, ni siquiera excepcionalmente para satisfacer necesidades personales de los agentes de planta permanente o funcionarios.
Artículo 69.- Comodatos. Los bienes muebles del Estado que se encuentren en desuso podrán ser entregados en comodato.

Durante el tiempo en que el comodatario permanezca en posesión del bien, tendrá a su cargo el pago de todos los impuestos y deberá asegurarlo en una compañía aseguradora a favor del comodante. Las mejoras realizadas quedarán en beneficio exclusivo del bien, no pudiendo la comodataria efectuar reclamo alguno por tal concepto.

Título III
Disposiciones Finales y Transitorias

Artículo 70.- Derógase la Ley territorial 6 y toda norma que se oponga a la presente ley.
Artículo 71.-Fíjase un plazo de noventa (90) días para la puesta en funcionamiento del

sistema informático, según dicta el artículo 37 de la presente, y para su reglamentación.
Artículo 72.- Hasta tanto se dicte el reglamento de la presente, regirá el Decreto provincial Nº 674/11 reglamentario de la Ley territorial 6 de Contabilidad, en su Capítulo II, Título III y sus modificatorios, el Decreto provincial Nº 1505/02 reglamentario de la Ley territorial 6 de Contabilidad en su Capítulo V, los Decretos Jurisdiccionales y las resoluciones de Contaduría General y Subsecretaría de Hacienda y Contrataciones vigentes, que no se opongan a la presente ley.
Artículo 73.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- 24 -

Asunto Nº 539/14

Artículo 1º.- Establécese que la alícuota reducida de la Tasa de Verificación de Procesos Productivos previstas en el artículo 9º, punto 4, inciso 4.3) de la Ley provincial 440, respecto de los establecimientos industriales dedicados a la fabricación de productos eléctricos y/o electrónicos se reducirá del uno coma cincuenta por ciento (1,50%) al uno coma diez por ciento (1,10%).
Las empresas alcanzadas por el citado beneficio y que actualmente tributan bajo el artículo 9º, punto 4, inciso 4.3) de la Ley provincial 440 podrán aplicar la reducción de alícuota que se establece en el presente artículo a partir del hecho imponible cuyo nacimiento se produzca con posterioridad al 1 de enero de 2015.
Artículo 2º.- Exceptúase del pago de la tasa establecida en el artículo 6º de la Ley provincial 440 a todas las tramitaciones presentadas ante el Ministerio de Industria e Innovación Productiva.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- 25 -

Asunto Nº 541/14

Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 16 de la Ley provincial 854, Ley Impositiva - Ejercicio 1999 – Modificación, por el siguiente texto:

> “Artículo 16.- De los recursos provenientes de la aplicación del artículo 3° de la presente ley, constitúyase un fondo específico del uno por ciento (1%), destinado a proyectos, programas, tareas y actividades de capacitación, asignaciones suplementarias para el personal, y efectuar las inversiones y erogaciones que resulten necesarias para la mejor consecución de los objetivos del Ministerio de Industria e Innovación Productiva, u organismo que en el futuro lo reemplace.
>
> El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Industria e Innovación Productiva deberá reglamentar el destino de los fondos.”.

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- 26 -

Asunto Nº 540/14

Artículo 1º.- Sustituyese el artículo 26 de la Ley provincial 798 por el siguiente texto:

> “Artículo 26.- El personal comprendido en el régimen establecido en el artículo anterior percibirá mensualmente un resarcimiento denominado “Dedicación Exclusiva” o “Bloqueo de Títulos” según corresponda, que consistirá en la suma remunerativa y no bonificable equivalente al sesenta y cinco por ciento (65%) de la remuneración mensual, normal, habitual, regular y permanente de la categoría de revista de cada agente respecto del primero, y respecto del segundo el porcentaje será establecido

por vía de reglamentación del Poder Ejecutivo, el cual no podrá ser inferior al adicional que por dedicación exclusiva perciba el personal P.A.yT. con categoría 24 de este organismo.”.

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- 27 -

Asunto Nº 542/14

Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 10 de la Ley provincial 834, Policía Provincial: Ley Previsional para el Personal Policial Provincial, Territorial y Servicio Penitenciario de la Provincia, por el siguiente texto:

“ASIGNACIONES

Artículo 10.- La retribución del Presidente será equivalente a la remuneración asignada para el cargo de Secretario de Estado y la de los Directores será equivalente al cargo de Subsecretario de Estado del Gobierno Provincial.

Sin perjuicio de ello, el Presidente y, en su caso, los Directores podrán optar entre percibir la remuneración prevista precedentemente o continuar percibiendo sus haberes, o bien sus beneficios por retiro o pasividad, según corresponda.”.

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- 28 -

Asunto Nº 73/14

Título I
Disposiciones Generales
Capítulo I
Objeto

Artículo 1º.- La presente ley regula y garantiza el ejercicio del derecho humano personal y social de enseñar y aprender en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, conforme lo establecido en el artículo 14 de la Constitución Nacional, los tratados internacionales incorporados a ella, el artículo 14 inciso 5 de la Constitución Provincial, la Ley de Educación nacional 26.206 y toda otra legislación nacional o provincial vigente en materia educativa, para la aplicación de la presente ley.

Capítulo II
Autoridad de Aplicación. Competencia

Artículo 2º.- El Ministerio de Educación, o quien en el futuro lo reemplace, es la autoridad de aplicación de la presente. El Ministerio de Educación es responsable de llevar a la práctica lo establecido en la Constitución Provincial, Sección Cuarta, Título II, Capítulo III, e implementar la política educativa.

Capítulo III
Principios, Derechos y Garantías

Artículo 3º.- La educación y el conocimiento son derechos humanos fundamentales que hacen a la dignidad de la persona, son un bien público y un derecho personal y social, garantizado por el Estado. Los principios sobre los que se funda la educación fueguina son los siguientes:

a) la Educación constituye una política de Estado, para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional y provincial, promover el bien común, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales, consolidar la

democracia, el fortalecimiento y defensa de la República y profundizar el ejercicio de una ciudadanía activa, solidaria y responsable;

b) la educación debe brindar oportunidades para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas, movilizándolas a construir su proyecto de vida, basado en los valores constitucionales; y

c) el Estado provincial no suscribirá tratados ni acuerdos de cualquier índole que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o alienten cualquier forma de mercantilización de la educación pública.

Artículo 4º.- La educación y el conocimiento constituyen derechos sociales y culturales en la vida de los estudiantes de la Provincia. La política educativa provincial reconoce los siguientes derechos:

a) derecho a una educación, que permita la igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia y egreso del Sistema Educativo Provincial;

b) derecho a una educación gratuita, a lo largo de toda la vida y en cualquier contexto o situación;

c) derecho a no ser discriminado, marginado o segregado, por ningún motivo o razón, del Sistema Educativo Provincial;

d) derecho a una educación de excelencia, con materiales didácticos, pedagógicos y tecnologías educativas adecuadas, actualizadas y justamente distribuidas;

e) derecho a una educación pública, democrática, laica, y no dogmática, que promueva la libertad intelectual de estudiantes y docentes, en todas sus manifestaciones;

f) derecho de enseñar y aprender en condiciones dignas según la legislación vigente sobre Riesgo de Trabajo y de Seguridad e Higiene;

g) derecho a recibir educación sexual integral conforme lo establece la Ley nacional 26.150;

h) derechos establecidos en la Ley nacional 25.584 de Protección de Adolescentes Embarazadas; e

i) derechos establecidos en la Ley nacional 26.892 Contra el Acoso Escolar.

Artículo 5º.- El Estado provincial, con la participación de la comunidad educativa, garantiza:

a) respeto por el ser humano, como sujeto de derecho del proceso educativo, fortaleciendo su interioridad, su interrelación con el ambiente y los valores éticos y filosóficos;

b) derechos de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes establecidos en las leyes nacionales y provinciales vigentes, y en los instrumentos internacionales de derechos humanos referidos al tema;

c) condiciones necesarias y equitativas para enseñar y aprender;

d) gratuidad y universalización de la enseñanza, para todas y todos los habitantes de la Provincia, en cualquier contexto o situación;

e) inclusión educativa, a través de políticas universales, de estrategias pedagógicas y de asignación de recursos, que otorguen prioridad a los sectores más vulnerables de la sociedad;

f) derecho de igualdad, inclusión, excelencia y justicia social de todos los niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos con discapacidades temporales o permanentes, con mecanismos eficientes para atender la particularidad que se trate;

g) atención, a través de servicios interdisciplinarios de prevención, detección, orientación, derivación y asistencia, para todos los estudiantes que la necesiten para desarrollar su proceso educativo, en la Educación Inicial, Primaria y Secundaria, con sus respectivas modalidades y especialidades, como así también la articulación intersectorial con las distintas áreas gubernamentales de política social y otras que se consideren pertinentes;

h) educación intercultural de pueblos originarios y sus descendientes, respetando su lengua y su identidad;

i) acceso a la información y al conocimiento como instrumentos centrales de la participación en un proceso social de desarrollo con crecimiento económico y justicia social;
j) creación de bibliotecas escolares y apoyo a las existentes;
k) asegurar condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre las personas sin admitir discriminación de género, identidad de género, ni de ningún otro tipo, incorporando enfoques y contenidos básicos de la equidad de género y la diversidad cultural; y
l) garantizar a las personas migrantes sin Documento Nacional de Identidad, el acceso y las condiciones para la permanencia y egreso de todos los niveles del sistema educativo, mediante la presentación de documentos emanados por su país de origen.

Artículo 6º.- El Estado provincial sostiene y garantiza un sistema educativo que se caracteriza por ser:

a) público: la educación pública de jurisdicción provincial está integrada por los servicios educativos de gestión estatal, privada, cooperativa o social;
b) inclusivo: el sistema educativo no discriminará a las personas por ningún motivo, permitiendo cursar sus estudios en todos sus niveles;
c) permanente: el derecho a la educación se extiende a lo largo de toda la vida;
d) democrático: el Estado provincial en conjunto con las instituciones educativas aseguran a la comunidad un funcionamiento democrático y participativo, en la producción y distribución del conocimiento, como aporte a la vida democrática de las instituciones y al sostenimiento del estado de derecho;
e) abierto: la educación debe permanecer abierta e interrelacionada con las distintas manifestaciones del arte, la producción, el trabajo, la formación científica, tecnológica y la investigación;
f) laico: la educación pública de gestión estatal es laica. Las instituciones de gestión social o privada podrán incorporar orientaciones religiosas de cultos admitidos en el Registro Nacional de Cultos. Los estudiantes y docentes no serán obligados a profesarla;
g) integrado: con identidad local, regional, nacional y latinoamericana;
h) articulado: horizontal y verticalmente; e
i) común: las instituciones educativas de gestión, estatal, social o privada, implementarán las políticas educativas y curriculares fijadas por la autoridad educativa nacional y/o provincial. Los contenidos curriculares podrán ser ampliados por las instituciones y la comunidad educativa.

Artículo 7°.- Son responsables de las acciones educativas el Estado nacional y el Estado provincial en los términos fijados en el artículo 4º de la Ley de Educación nacional 26.206. Bajo la supervisión del Estado provincial son corresponsables las confesiones religiosas reconocidas oficialmente, las organizaciones de la sociedad y la familia como agente natural y primario. Los municipios serán corresponsables por la prestación de determinados servicios educativos que el Estado provincial convenga con los mismos.

Artículo 8º.- El Estado provincial, en forma concertada y concurrente con el Estado nacional, financia, planifica, organiza y supervisa el Sistema Educativo Provincial, garantizando el acceso a la educación en todos sus niveles, modalidades y especialidades, mediante la creación, regulación, financiamiento y administración de las instituciones educativas de gestión estatal; y la regulación y supervisión de las instituciones educativas públicas de gestión privada en un todo de acuerdo con lo establecido en el artículo 58 de la Constitución Provincial.

Artículo 9º.- El financiamiento del Sistema Educativo Provincial se integra con los recursos prescriptos en el presupuesto general de la Provincia conforme a las previsiones de la presente y las metas establecidas en la Ley nacional 26.075 y vigentes, pudiendo incorporar, además, otros ingresos.

Artículo 10.- Las confesiones religiosas reconocidas oficialmente y las organizaciones de la

sociedad civil podrán ejecutar acciones educativas bajo supervisión de la Provincia, de manera complementaria de la Educación Pública, según la Ley provincial 749.
Artículo 11.- El Estado provincial propicia el establecimiento de acuerdos, convenios e intercambios con otros países, de acuerdo a los tratados internacionales vigentes, referidos a derechos e intercambios educativos; y favorecerá intercambios interprovinciales orientados a fortalecer procesos de capacitación fundamentados en el respeto a la diversidad y valoración de la interculturalidad.

Capítulo IV
Fines y Objetivos de la Política Educativa Provincial

Artículo 12.- El Estado provincial fija la política educativa, considerando al educando y a la sociedad como sujetos destinatarios del derecho a la educación, en concordancia con la política educativa nacional, y controla su cumplimiento con el propósito de consolidar la unidad nacional, respetando las particularidades regionales.
Artículo 13.- Los fines de la educación provincial son:

a) la conformación de una sociedad justa, democrática y solidaria;
b) la formación integral, armoniosa y permanente de la persona; y
c) la participación reflexiva y crítica del educando que le permita elaborar su escala de valores, cumplir con su realización personal, y su inserción en la vida socio-cultural y en el mundo laboral.

Artículo 14.- El Sistema Educativo Provincial, de acuerdo con la política educativa, establece los siguientes objetivos:

a) brindar una educación de excelencia, que permita el desarrollo de múltiples dimensiones de la persona, con igualdad de oportunidades, posibilidades y regionalmente equilibrada en toda la Provincia, reconociendo y respetando las diferencias, fortaleciendo el principio de inclusión de todos los alumnos;
b) garantizar una educación integral que forme ciudadanos desarrollando todas las dimensiones de la persona incluyendo las abarcadas por el artículo 14 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño;
c) garantizar el acceso, la permanencia y el egreso en los diferentes niveles y modalidades del Sistema Educativo, asegurando la gratuidad de toda la Educación Pública de Gestión Estatal;
d) brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de participación, libertad, paz, solidaridad, igualdad, equidad, justicia, resolución pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, honestidad, como así también con la valoración y preservación del patrimonio natural y cultural;
e) brindar una formación física, motriz y deportiva que favorezca el desarrollo armónico de todos los estudiantes y su inserción activa en la sociedad;
f) propiciar la participación responsable de la Comunidad Educativa en todos los niveles y modalidades;
g) brindar formación, actualización y capacitación docente, para todos los trabajadores de la educación de los distintos niveles, modalidades y especialidades, propiciando su perfeccionamiento para adecuarla a los desafíos sociales y educativos y a los nuevos desarrollos culturales, científicos y tecnológicos;
h) establecer condiciones y propuestas pedagógicas que les asegure a los estudiantes con discapacidades temporales o permanentes, el desarrollo de sus posibilidades, la inclusión escolar, laboral y social, y el pleno ejercicio de sus derechos;
i) asegurar una educación que favorezca la construcción de un pensamiento crítico para la interpretación de la realidad, su comprensión y la construcción de herramientas para transformarla;

j) fortalecer la cultura del trabajo y el esfuerzo individual y cooperativo, como base fundamental en los procesos de enseñanza y aprendizaje, habilitando al estudiante, a través de pasantías, para el desempeño social y laboral, como para el acceso a estudios superiores;
k) fortalecer la identidad nacional y provincial, estimulando el arraigo y el sentido de pertenencia a la Provincia, basada en el respeto a la diversidad cultural, particularidades locales y valoración de las raíces histórico culturales, abierta a valores universales y a la integración regional y latinoamericana;
l) fortalecer la centralidad de la lectura y escritura, como condiciones básicas de la educación a lo largo de toda la vida, la construcción de una ciudadanía responsable y la libre circulación del conocimiento;
m) promover el conocimiento del ambiente natural, social y el respeto por el patrimonio histórico, geográfico y cultural de la región, iniciando a los estudiantes en la preservación de los bienes culturales y la necesidad de la protección del ambiente, en el marco de una educación que se base en la autodeterminación y el compromiso con la defensa de la calidad de vida, y el aprovechamiento sustentable de los recursos no renovables que nos provee la naturaleza;
n) desarrollar las competencias necesarias para el manejo de los nuevos lenguajes producidos por las tecnologías de la información y comunicación;
ñ) coordinar las políticas de educación, ciencia y tecnología con las de cultura, salud, trabajo y producción, desarrollo social, deportes y comunicaciones para atender, integralmente, las necesidades de la población aprovechando al máximo los recursos estatales, sociales y comunitarios;
o) promover el cuidado integral de la salud de los estudiantes;
p) disponer el acceso libre y gratuito a la información pública de los datos y estadísticas educativas;
q) asegurar una formación que estimule la creatividad y comprensión de las distintas manifestaciones del arte y cultura;
r)implementar acciones tendientes a comprometer a los medios masivos de comunicación a asumir mayores grados de responsabilidad ética y social por los contenidos y valores que transmiten;
s) fomentar el conocimiento socio histórico y geográfico de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y espacios marítimos adyacentes;
t) propiciar el conocimiento sobre el afianzamiento de la presencia argentina en el territorio antártico y las Islas del Atlántico Sur;
u) promover el intercambio y comunicación entre la comunidad educativa y de investigadores y trabajadores antárticos; y
v) promover gradualmente el conocimiento de las lenguas originarias fueguinas.

Título II
Estructura del Sistema Educativo Provincial.

Capítulo I
Organización General

Artículo 15.- El Sistema Educativo Provincial es el conjunto organizado y articulado de instituciones, programas y proyectos educativos, regulados por el Estado provincial, que posibilitan la educación. Lo integran las instituciones educativas de todos los niveles, sean de gestión estatal, privada, cooperativa o social, así como por los servicios de apoyo a la formación, investigación e información de estudiantes, los profesionales de la educación, las instituciones encargadas de la administración, y los servicios que brindan asistencia y orientación a niños, niñas, jóvenes, adultos y a la comunidad educativa en general.
Artículo 16.- El Sistema Educativo Provincial tiene una estructura unificada en todo el territorio de la Provincia que asegura su ordenamiento y cohesión, la organización y articulación de los

niveles, modalidades y especialidades de la educación y la validez nacional de los títulos y certificados que se expiden.

Artículo 17.- La estructura del Sistema Educativo Provincial comprende cuatro (4) niveles y ocho (8) modalidades.

1. Niveles:
   a) Educación Inicial;
   b) Educación Primaria;
   c) Educación Secundaria; y
   d) Educación Superior.
2. Modalidades Educativas Generales:
   a) Educación Técnico Profesional;
   b) Educación Artística;
   c) Educación Especial;
   d) Educación Permanente de Jóvenes y Adultos;
   e) Educación Rural;
   f) Educación Multicultural e Intercultural Bilingüe;
   g) Educación en Contextos de Privación de la Libertad; y
   h) Educación Domiciliaria y Hospitalaria.

Los niveles del Sistema Educativo Provincial se definen como tramos educativos con unidad pedagógica y articulación en ciclos curriculares que responden a las características psicosociales propias de distintos momentos de la vida de los seres humanos.

La modalidad es un dispositivo organizativo y/o curricular específico de la educación común, dentro de uno o más niveles educativos, que procura dar respuesta a requerimientos específicos de formación y atender particularidades del sujeto educativo, de carácter permanente o temporal, personal y/o contextual, con el propósito de garantizar la igualdad en el derecho a la educación y cumplir con las exigencias legales, técnicas y pedagógicas de los diferentes niveles educativos.

Artículo 18.- Las modalidades enunciadas en el punto 2 del artículo anterior, podrán constituir, en forma permanente o temporaria, ofertas de carreras específicas de formación docente, con su correspondiente diseño curricular. Se podrán crear, conforme a la Ley de Educación nacional 26.206, con carácter excepcional y de acuerdo a requerimientos específicos de condición permanente y contextual, modalidades educativas específicas de la Provincia, que podrán tener distintas orientaciones según los requerimientos provinciales.

Artículo 19.- Los responsables del proceso educativo en los niveles, modalidades y especialidades, serán docentes con título conforme lo establezca la normativa vigente en la Provincia.

Artículo 20.- El Estado provincial reconoce, autoriza y supervisa el funcionamiento de instituciones educativas de gestión privada, confesionales o no confesionales, de gestión cooperativa y gestión social, según lo establece la Ley provincial 749.

Artículo 21.- Las Bibliotecas Escolares constituyen una unidad técnica, pedagógica y organizativa destinada a favorecer el acceso a la información, lectura y conocimiento de la comunidad educativa a la que asiste.

Artículo 22.- El Estado provincial garantiza a las Bibliotecas Escolares la provisión de personal y material bibliotecario, tecnologías actualizadas, conectividad y espacio físico adecuado a la cantidad de matrícula, secciones y características de cada institución.

Artículo 23.- El Ministerio de Educación garantiza la existencia del Gabinete Psicopedagógico y de Asistencia al Escolar (GPAE) como servicio educativo. Abarca el asesoramiento, orientación, prevención y asistencia de problemáticas en las instituciones en los niveles inicial, primaria, secundaria, y en las modalidades de educación permanente de jóvenes y adultos, y educación domiciliaria y hospitalaria, generando espacios en la comunidad educativa que favorezcan un diálogo abierto y un pensar y accionar crítico frente a las problemáticas transitorias o permanentes que allí tengan lugar.

Artículo 24.- Son objetivos y funciones del GPAE:

a) promover, orientar y acompañar las trayectorias escolares de los niños y niñas,

como así también organizar las asistencias terapéuticas y/o preventivas de la población escolar en los niveles inicial, primaria, secundaria y en las modalidades de educación permanente de jóvenes y adultos, y educación domiciliaria y hospitalaria;

b) participar conjuntamente con los equipos directivos y docentes de las unidades educativas de los niveles inicial, primaria, secundaria y en las modalidades de educación permanente de jóvenes y adultos, y educación domiciliaria y hospitalaria, en el seguimiento y evaluación de estrategias que favorezcan las trayectorias escolares de los niños y niñas, jóvenes y adultos en función de la atención a la diversidad;
c) promover espacios de trabajos interdisciplinarios en relación a los diferentes procesos de intervención;
d) participar en instancias de trabajo institucional, de reflexión y capacitación sobre distintas dimensiones del campo institucional;
e) participar conjuntamente con los integrantes del equipo Interdisciplinario en el diseño, desarrollo y puesta en práctica de estrategias e instrumentos de investigación inherentes al ámbito escolar e institucional;
f) elaborar e implementar propuestas preventivas a fin de dar respuestas a las diferentes problemáticas detectadas en el ámbito escolar;
g) trabajar en interdisciplinar con profesionales de otras áreas como salud, justicia, desarrollo social y defensoría con el fin de promover el intercambio con los mismos y enriquecer la práctica en las instituciones educativas;
h) brindar las asistencias y orientaciones al alumno, respecto del motivo de consulta, como así también con todos aquellos adultos significativos del mismo;
i) asesorar a la institución educativa en relación a los procesos de aprendizaje y enseñanza presentados a nivel individual y grupal; y
j) participar en la implementación de acciones con el fin de generar las condiciones necesarias para la integración e inclusión de niños y niñas con necesidades educativas especiales.

Artículo 25.- En la organización de equipos interdisciplinarios del GPAE se contará con profesionales de las siguientes disciplinas: asistentes educacionales, asistentes sociales, fonoaudiólogos, musicoterapéutas, psicólogos, psicomotricista, psicopedagogos y terapistas ocupacionales.

Capítulo II
Nivel Inicial

Artículo 26.- El primer tramo del Sistema Educativo Provincial se denomina Nivel Inicial, constituye una unidad pedagógica y comprende a todos los niños y niñas desde los cuarenta y cinco (45) días hasta los cinco (5) años de edad inclusive. Siendo obligatorios los dos (2) últimos años del nivel, definidos como sala de cuatro (4) y cinco (5) años. El nivel de Educación Inicial define sus diseños curriculares, articulados con los diferentes niveles y modalidades, conforme lo establece la presente ley.

Artículo 27.- El Estado Provincial garantizará la universalidad del Nivel Inicial a través de dispositivos que respondan a los requerimientos de cada zona y localidad, asegurando su provisión en tanto constituye su responsabilidad indelegable. Asimismo deberá regular el funcionamiento de todas aquellas instituciones educativas que atiendan la primera infancia en el territorio fueguino, priorizando los sectores más desfavorecidos con el objetivo de igualar las oportunidades de acceso y permanencia para el logro de aprendizajes valiosos.

Artículo 28.- La Educación Inicial tiene por finalidad, proporcionar una formación integral, básica y común, que promueva el pensamiento reflexivo de los niños. Son sus objetivos, además de los determinados en el artículo 13 de la presente, los que a continuación se detallan:

a) promover el aprendizaje y desarrollo de los niños como sujetos de derecho,

partícipes activos de un proceso de formación integral, en tanto miembros de una familia y una comunidad democrática constitutiva de la República;
b) promover el juego, como valor en sí mismo y como pilar de la didáctica del nivel;
c) como contenido de alto valor cultural para el desarrollo cognitivo, afectivo, ético, estético, motor y social;
d) favorecer el desarrollo progresivo de su identidad, su autonomía personal y su pertenencia a la comunidad local, regional y nacional;
e) promover la solidaridad, la confianza, el cuidado, la amistad y el respeto a sí mismo y a los otros;
f) ofrecer oportunidades para el aprendizaje significativo, a través del conocimiento del ambiente natural, social y del contacto con diversas producciones culturales;
g) desarrollar la capacidad creativa y el placer por el conocimiento en las experiencias de aprendizaje;
h) desarrollar la capacidad de expresión y comunicación a través de los distintos lenguajes, verbales y no verbales, como el movimiento, la música, la expresión artística y la literatura, entre otros;
i) favorecer la formación corporal y motriz a través de la educación física;
j) propiciar y fortalecer la participación de las familias en el cuidado y la tarea educativa promoviendo la comunicación y el respeto mutuo entre la familia y la institución educativa;
k) atender las desigualdades educativas de origen social y familiar para favorecer una integración plena de todos los niños en el Sistema Educativo Provincial; y
l) contribuir a la detección temprana, prevención, y atender necesidades especiales o dificultades de aprendizaje de los niños, asegurando el desarrollo de sus posibilidades, su integración y el pleno ejercicio de sus derechos.

Artículo 29.- El Nivel Inicial se organizará en dos (2) ciclos:
a) Jardín Maternal, que comprenderá a todos los niños y niñas desde los cuarenta y cinco (45) días a los dos (2) años de edad inclusive; y
b) Jardín de Infantes, para los niños desde los tres (3) a los cinco (5) años, siendo obligatorios los dos (2) últimos años, conforme a lo establecido en el artículo 26 de la presente ley.

Artículo 30.- Las certificaciones de cumplimiento de la Educación Inicial obligatoria, en cualquiera de las formas organizativas reconocidas y supervisadas por las autoridades educativas, tienen plena validez para la inscripción en la Educación Primaria.

Artículo 31.- Las actividades pedagógicas realizadas en el Nivel de Educación Inicial en cualquiera de sus instituciones, Jardines Maternales, Jardines de Infantes u otras modalidades, son supervisadas por las autoridades educativas del Ministerio de Educación y estarán a cargo de personal docente titulado con validez provincial y nacional. La reglamentación de esta ley deberá establecer los requisitos de títulos docentes para el personal que lleve a cabo estas tareas en los Jardines Maternales.

Artículo 32.- El Ministerio de Educación desarrollará estrategias organizativas, de gestión y de capacitación docente, orientadas a favorecer la articulación entre el Nivel Inicial y la Educación Primaria a fin de lograr coherencia en el modelo pedagógico-didáctico y continuidad en el itinerario escolar de los alumnos.

Capítulo III
Nivel Primario

Artículo 33.- El segundo tramo del Sistema Educativo Provincial se denomina Nivel Primario y constituye una unidad pedagógica y organizativa obligatoria, de seis (6) años de duración, destinada a la formación de los niños y niñas a partir de los seis (6) años de edad.

Artículo 34.- La Educación Primaria tiene por finalidad proporcionar una formación integral, básica y común que promueva el pensamiento reflexivo de los estudiantes. Son sus objetivos, además de los determinados en el artículo 14 de la presente, los siguientes:

a) garantizar a todos los niños y niñas, como sujetos de derecho, partícipes activos de un proceso de formación integral, el acceso a un conjunto de saberes comunes que les permita participar de manera plena y acorde a su edad en la vida familiar y escolar, desarrollando y socializando la cultura de la comunidad de pertenencia, respetando la diversidad;
b) ofrecer las condiciones necesarias para el desarrollo integral de la infancia en todas sus dimensiones, desde su función específica y en articulación con otros organismos del Estado;
c) brindar oportunidades equitativas a todos los niños y niñas para el aprendizaje de saberes significativos en los diversos campos del conocimiento, en especial lengua, comunicación, tecnología, ciencias sociales, matemática, ciencias naturales, medio ambiente, lenguas extranjeras, arte, cultura y la capacidad de aplicarlos en situaciones de la vida cotidiana;
d) contribuir a la detección temprana, prevención, atendiendo necesidades especiales y dificultades de aprendizaje de los niños y niñas, asegurando el desarrollo de sus posibilidades, la integración y el pleno ejercicio de sus derechos;
e) acceder a los conocimientos y procedimientos científicos, desarrollando las capacidades de investigación, análisis reflexivo y crítico de la realidad, potenciando la creatividad;
f) garantizar las condiciones pedagógicas necesarias para la incorporación al proceso de enseñanza-aprendizaje de tecnologías de la información y la comunicación;
g) brindar formación ética para el ejercicio de una ciudadanía responsable que permita construir los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común;
h) promover el desarrollo de una actitud de esfuerzo, trabajo, responsabilidad en el estudio y de curiosidad e interés por el aprendizaje, fortaleciendo la confianza en las posibilidades personales de aprender;
i) desarrollar la iniciativa individual, el trabajo en equipo y los hábitos de convivencia solidaria y cooperación;
j) fomentar el desarrollo de la creatividad, expresión, comprensión, conocimiento y valoración de las distintas manifestaciones del arte y la cultura;
k) favorecer el desarrollo de los conocimientos y procesos cognitivos necesarios para continuar los estudios en la Educación Secundaria;
l) brindar oportunidades para una educación física que promueva la formación corporal y motriz que consolide el desarrollo armónico de todos los niños y niñas;
m) valorar y respetar la diversidad cultural, la perspectiva de género, la valoración de la pluralidad del patrimonio socio-cultural de su comunidad así como aspectos socio-culturales de otros pueblos y naciones, no admitiendo ningún tipo de discriminación;
n) promover una educación que posibilite el desarrollo de la conciencia ambiental en pos de comprometerse con la calidad de vida, contribuyendo activamente al cuidado, preservación y mejoramiento del patrimonio natural y cultural;
ñ) promover hábitos del cuidado del propio cuerpo, la promoción de la salud en general, y la salud sexual integral en particular;
o) promover el juego como actividad necesaria para el desarrollo cognitivo, afectivo, ético, estético, motor y social;
p) promover la implementación de un currículum abierto, flexible e inclusivo que comprenda a todos los estudiantes que asistan al Nivel Primario, atendiendo sus necesidades educativas y respetando sus derechos;
q) promover la creación de programas y/o proyectos educativos extracurriculares para el conjunto de niños y niñas;
r) favorecer la equidad, brindando asistencia y orientación a los estudiantes que lo requieran y a la comunidad educativa;

s) fortalecer las condiciones para el desarrollo de competencias lingüísticas, expresión oral, lectura y escritura como prioritarias para el desarrollo del conocimiento; y
t) promover la participación de la familia en el proceso educativo de sus hijos.

Artículo 35.- Las escuelas primarias deberán adecuarse progresivamente a lo establecido en el artículo 28 de la Ley nacional 26.206, implementando la Jornada Completa o Extendida para mejorar las condiciones de equidad y calidad educativa.

En el proceso de su gradual implementación se atenderá la revisión y recreación de las condiciones que favorezcan los procesos educativos, dando prioridad a las escuelas a las que asisten los sectores más desfavorecidos.

Artículo 36.- El Ministerio de Educación desarrollará las estrategias, planificará los modelos de organización y de gestión más adecuados para garantizar que todos los niños y niñas logren los aprendizajes establecidos para la educación primaria, tengan igualdad de oportunidades en el acceso y la permanencia en este nivel educativo.

Capítulo IV
Nivel Secundario

Artículo 37.- El tercer tramo del Sistema Educativo Provincial se denomina Nivel Secundario, constituye una unidad pedagógica, organizativa y obligatoria, destinada a la formación de adolescentes y jóvenes que acrediten el cumplimiento del Nivel Primario.

El Nivel Secundario tiene una duración de seis (6) años, con excepción de la modalidad Técnico Profesional que tiene una duración de siete (7) años.

Artículo 38.- El Nivel Secundario está constituido por dos (2) ciclos:

a) Ciclo Básico Común, de tres (3) años de duración, de carácter común a todas las orientaciones; y
b) Ciclo Superior Orientado, de carácter diversificado según distintas áreas del conocimiento, del mundo social y del trabajo con una duración de tres (3) años. Para las ofertas de las modalidades de Educación Técnico Profesional, cuyos planes de estudio así lo requieran, el Ciclo Superior Orientado tendrá una duración de cuatro (4) años.

Artículo 39.- La orientación o especialidad es un área del aprendizaje, formada por el conjunto de disciplinas con sus contenidos que permiten una especialización del conocimiento o una opción de formación para el campo laboral.

Artículo 40.- La Educación Secundaria, en todas sus modalidades y orientaciones, tiene como finalidad la formación integral del sujeto como ser reflexivo y autónomo para el trabajo y para la prosecución de estudios superiores. Siendo sus objetivos, además de los determinados en el artículo 14 de la presente, los siguientes:

a) formar personas pluralistas, democráticas, responsables, reflexivas y críticas, capacitadas para ejercer sus derechos y deberes de habitantes o ciudadanos, partícipes activos de un proceso de formación integral, utilizando el conocimiento como una herramienta idónea para transformar la realidad en sus distintas dimensiones, preparadas para situarse en un mundo en permanente transformación con respeto, cuidado por sí mismo y por el otro;
b) brindar una formación ética que permita a los estudiantes desempeñarse como sujetos conscientes de sus derechos y obligaciones, que practiquen la cooperación, la solidaridad, respeten los derechos humanos, rechacen todo tipo de discriminación y preserven el patrimonio natural y cultural;
c) favorecer la autonomía, la iniciativa y potenciar las propias aptitudes y capacidades;
d) desarrollar y consolidar en cada estudiante las capacidades de estudio, aprendizaje e investigación, de trabajo individual y en equipo, de esfuerzo, iniciativa, responsabilidad, como condiciones necesarias para el acceso al mundo laboral, los estudios superiores y la educación a lo largo de toda la vida;

e) actualizar los conocimientos acordes a la evolución sistemática global y gradual, utilizando las herramientas apropiadas para formar egresados que acrediten conocimientos actualizados;
f) promover el desarrollo de las competencias necesarias para la vinculación e incorporación de los estudiantes y egresados al mundo del trabajo, la producción, la ciencia y la tecnología;
g) comunicar de un modo sistemático, significativo y crítico el patrimonio cultural de la Nación y de la humanidad, posibilitando la apropiación, y resignificación personal y comunitaria por parte de los estudiantes;
h) promover el desarrollo de las competencias lingüísticas, orales y escritas de la lengua española y, comprender y expresarse en una lengua extranjera;
i) estimular la creación artística, la libre expresión y la comprensión de las distintas manifestaciones de la cultura;
j) generar e implementar proyectos que contemplen la educación sexual integral;
k) promover la formación corporal y motriz a través de una educación física acorde con los requerimientos del proceso de desarrollo integral de los adolescentes;
l) promover la creación o fortalecer los espacios, proyectos extracurriculares, experiencias complementarias o innovadoras para el conjunto de estudiantes y jóvenes de la comunidad;
m) garantizar el ejercicio de la ciudadanía y la gestión democrática de las instituciones del nivel, mediante la participación de los estudiantes en la conformación de organizaciones propias y autónomas;
n) concebir y fortalecer en las instituciones educativas, la cultura del trabajo, de los saberes socialmente productivos, individuales, colectivos y cooperativos, vinculándolos, a través de una inclusión crítica y transformadora de los adolescentes y jóvenes, a los espacios productivos, brindando conocimientos generales y específicos para su formación a través de propuestas de las distintas modalidades y orientaciones o especialidades;
ñ) promover la realización de prácticas laborales para lograr la inserción de los estudiantes en el mundo social y laboral;
o) proporcionar alfabetización científica y tecnológica pertinente, desarrollar la capacidad de respuestas sociales y éticas ante los cambios en la ciencia, la técnica, el sistema productivo y el mundo laboral. Trabajar en pos de preservar el ambiente, la biodiversidad y la calidad de vida desarrollando sistemas de uso, consumo, producción de bienes y servicios socialmente sustentables, en especial, el desarrollo de actividades cooperativas;
p) propiciar en el marco del proyecto educativo institucional el intercambio de estudiantes de diferentes ámbitos y contextos, la organización de actividades de voluntariado juvenil y proyectos educativos solidarios con el fin de cooperar con el desarrollo comunitario;
q) crear programas o proyectos educativos curriculares o extracurriculares a fin de introducir saberes relacionados a la prevención y uso indebido de drogas, desarrollando en los estudiantes la capacidad para la toma de decisiones saludables como medio para mejorar su proyecto de vida;
r) favorecer la equidad brindando asistencia y orientación a los estudiantes que lo requieran y a la comunidad educativa;
s) promover el acceso al conocimiento como saber integrado, a través de distintas áreas y disciplinas, a sus principales problemas, contenidos y métodos;
t) desarrollar procesos de orientación vocacional a fin de permitir una adecuada elección profesional y ocupacional de los estudiantes de manera articulada con las instituciones educativas del Nivel Superior;
u) promover la participación de la familia en el proceso educativo de sus hijos e hijas;
v) incluir contenidos que posibiliten el desarrollo de la conciencia ambiental en pos de comprometerse con la calidad de vida, contribuyendo activamente al cuidado,

preservación y mejoramiento del patrimonio natural y cultural; y

w) promover estrategias pedagógicas que aseguren a todos los estudiantes con discapacidades temporales o permanentes, el desarrollo de sus posibilidades, la integración social y el pleno ejercicio de sus derechos.

Artículo 41.- Las cargas horarias se definen según los requerimientos de Formación Específica para cada orientación, siendo la carga horaria mínima de veinticinco (25) horas reloj de clases semanales.

Artículo 42.- El Nivel Secundario tendrá diferentes modalidades, orientaciones o especialidades para formar egresados/as que acrediten conocimientos óptimos en las diversas áreas del campo técnico profesional, humanístico, económico, agropecuario, deportivo, científico, artístico y otros.

Artículo 43.- Las ofertas de Educación Secundaria pueden articularse con ofertas de Formación Profesional brindadas por instituciones acreditadas en el Registro Federal de Instituciones de Educación Técnico Profesional.

Artículo 44.- En relación a la Educación Secundaria el Ministerio de Educación deberá:

a) promover, reglamentar y supervisar regímenes de prácticas y pasantías laborales de carácter educativo para alumnos secundarios mayores de dieciséis (16) años que permitan una aproximación al mundo del trabajo y de la producción;
b) implementar acciones de articulación entre la Educación Secundaria y la Educación Superior a fin de preparar a los estudiantes para su inserción y permanencia en el Nivel Superior; y
c) propiciar espacios de integración entre los diversos ámbitos del Estado Provincial y organizaciones de la sociedad para la colaboración en el diseño de una agenda integral para la juventud.

Capítulo V
Educación Superior

Artículo 45.- El Nivel de Educación Superior comprende el conjunto de instituciones y carreras especialmente diseñadas para la continuación de estudios posteriores a la Educación Secundaria o de especialización del Nivel. Está conformado por Institutos de Educación Superior de gestión estatal y gestión privada, sean Institutos Técnicos Superiores o Institutos de Formación Docente, y por las Universidades e Institutos Universitarios, estatales o privados, de jurisdicción provincial. El nivel de Educación Superior tendrá una estructura organizativa abierta y permeable a la creación de espacios y modalidades con el fin de responder a los compromisos sociales, económicos y políticos de la Provincia, en concordancia con lo establecido en la Ley nacional de Educación Superior 24.521 y la Ley nacional de Educación Técnico Profesional 26.058.

Artículo 46.- El Ministerio de Educación como autoridad de aplicación de la presente ley, y en lo que respecta a los institutos de educación superior, tiene competencia para:

a) gobernar y organizar la Educación Superior;
b) establecer jurisdiccionalmente las condiciones administrativas e institucionales para el acceso a la carrera docente y a los estudios en el Nivel;
c) asumir la planificación y evaluación de carreras y pos títulos; y
d) evaluar la oferta de Educación Superior atendiendo a la adecuación, apertura o cierre de las carreras existentes de acuerdo a las nuevas demandas educativas y sociales derivadas del mundo del trabajo, producción, desarrollo y crecimiento socioeconómico de la Provincia, la región y el país.

Artículo 47.- Son finalidades de la Educación Superior:

a) formar docentes, profesionales e investigadores para todos los niveles, modalidades y orientaciones del Sistema Educativo Provincial;
b) formar profesionales y técnicos, orientados al desarrollo académico, científico, tecnológico, artístico, cultural, de la producción, el trabajo, y otros campos relacionados con el desarrollo sustentable;

c) diseñar e implementar programas permanentes de capacitación, perfeccionamiento, actualización técnico científica y pedagógica para graduados;
d) producir investigación de conocimiento científico, tecnológico, humanístico y artístico, en relación con los requerimientos, los saberes sociales y culturales existente; en concordancia con el desarrollo sustentable de la Provincia, los procesos de desarrollo e integración regional; y
e) generar proyectos educativos que propicien la realización de pasantías, talleres, laboratorios, aulas itinerantes y otras modalidades pedagógicas y/o productivas que contribuyan al desarrollo de prácticas profesionalizantes de alumnos y docentes.

Artículo 48.- Son objetivos de la Educación Superior, además de los determinados en el artículo 14 de la presente, los siguientes:

a) propiciar la formación de una persona pluralista, democrática, responsable, productiva, creativa y reflexiva, solidaria con conciencia ética, con identidad cultural, capacitada para ejercer sus derechos y deberes de habitante o ciudadano; partícipe activa de un proceso de formación integral, en tanto miembro de una familia y una comunidad democrática, constitutiva de la República; produciendo y utilizando el conocimiento como una herramienta idónea para transformar la realidad en sus distintas dimensiones; preparada para situarse en un mundo en permanente transformación; capacitada para mejorar la calidad de vida;
b) jerarquizar y reconceptualizar la formación docente, articulándola con los diferentes niveles, modalidades y orientaciones, como factor central y estratégico del mejoramiento de la calidad de la educación, entendiendo a la misma como un proceso de producción cultural-social y de transmisión y de preservación del capital cultural;
c) impulsar en los campos educativo, artístico, científico, tecnológico y productivo, la investigación y la innovación orientándolas a la resolución de las problemáticas de la sociedad;
d) brindar una adecuada diversificación de las propuestas de la Educación Superior, que atiendan a las expectativas y necesidades de la población, especialmente a los requerimientos del campo educativo, problemáticas regionales y a las demandas técnico-profesionales;
e) promover una formación continua, adecuada a los nuevos escenarios sociales, económicos, políticos y culturales, a los cambios operados en los sujetos sociales, favoreciendo la identidad patagónica y fueguina acentuando la identidad nacional y latinoamericana;
f) garantizar la implementación de organismos colegiados que integren la participación de la comunidad educativa, ampliando la democratización y autonomía de los mismos en el marco de los lineamientos de la política educativa provincial;
g) coordinar y articular acciones de cooperación y vinculación académica e institucional entre las instituciones de nivel de Educación Superior y el nivel Secundario, tendientes a articular los conocimientos necesarios para el ingreso y permanencia en el nivel Superior;
h) valorar y preservar el patrimonio natural y cultural de la Nación y la Provincia en sus diversas expresiones, y al sujeto de la historia de hoy que produce cultura y la proyecta a nuevas producciones locales, regionales y nacionales;
i) coordinar y articular acciones de cooperación y vinculación académica e institucional entre las instituciones que conforman el nivel, así como con los procesos científicos, tecnológicos, de desarrollo e innovación productiva de la Provincia, de la región y del país;
j) favorecer la continuidad y/o la prosecución de estudios a los estudiantes que ingresen al Sistema Educativo Provincial en el nivel, provenientes de instituciones de Educación Superior de otras jurisdicciones y para quienes deban continuar sus

estudios fuera de la Provincia;

k) promover la Educación Superior Técnico Profesional en las áreas socio-humanísticas, agropecuarias, pesqueras, forestal, minera, industrial y de la producción de servicios; y
l) articular la continuidad de estudios en las instituciones universitarias de la Provincia, promoviendo acuerdos de cooperación que tengan como fin intercambiar prácticas y experiencias profesionales y educativas.

Artículo 49.- El Estado provincial tiene la responsabilidad indelegable de asegurar, financiar, organizar, planificar y evaluar la Educación Superior Publica Estatal y planificar, supervisar y fiscalizar los Institutos de Educación Superior pública de gestión Privada incorporados a la educación oficial de la Provincia que se ajusten a los requisitos de la Ley provincial 749.

Artículo 50.- Podrán ingresar como estudiantes al nivel de Educación Superior quienes hayan cumplido con el nivel Secundario. La persona mayor de veinticinco (25) años que no reúna esa condición, puede ingresar a las instituciones del Nivel, siempre que demuestre, a través de las evaluaciones establecidas por las normativas provinciales y nacionales vigentes, que tiene preparación y/o experiencia laboral acorde con los estudios que se propone iniciar, así como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente.

Artículo 51.- La articulación entre las instituciones que conforman el nivel de Educación Superior tiene por fin facilitar a los estudiantes, la transversalidad del mismo, el cambio de modalidad, orientación o carrera, la continuación y/o la prosecución de estudios de grado o postgrado en instituciones universitarias y la reconversión de los estudios concluidos, de acuerdo a los criterios emanados del Consejo Provincial de Educación, la Ley de Educación Superior 24.521, la Ley de Educación nacional 26.206 y el Consejo Federal de Educación.

Artículo 52.- Para facilitar la continuidad de los estudios y alcanzar el reconocimiento automático de los mismos el Ministerio de Educación deberá:

a) promover la articulación de las carreras afines, estableciendo regímenes flexibles de equivalencia y reconversión;
b) asegurar la articulación entre las Instituciones de Educación Superior provinciales, mediante el reconocimiento de los estudios parciales o asignaturas de las carreras aprobadas en cualquiera de esas instituciones; y
c) favorecer la articulación, mediante convenios, entre instituciones de Educación Superior y Universidades.

Artículo 53.- Los planes de estudio de las carreras y postítulos serán definidos por la autoridad jurisdiccional y diseñados respetando los contenidos básicos que se acuerden en el Consejo Federal de Educación. Deberán estar articulados con los Diseños Provinciales de los distintos niveles, modalidades y orientaciones para los que se habilite en la formación. Las instituciones de Educación Superior podrán proponer formaciones profesionales con validez provincial.

Artículo 54.- Son principios de la Educación Técnica Superior:

a) promover en las personas el aprendizaje de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes relacionadas con desempeños profesionales y criterios de profesionalidad propios del contexto socio productivo que permitan conocer la realidad a partir de la reflexión sistemática sobre la práctica y la aplicación sistematizada de la teoría;
b) desarrollar oportunidades de formación específica propia de la profesión u ocupación abordada y prácticas profesionalizantes dentro del campo ocupacional elegido; y
c) favorecer niveles crecientes de equidad, calidad, eficiencia y efectividad de la Educación.

Artículo 55.- Los Institutos Técnicos Superiores tendrán como finalidad principal la formación de técnicos y profesionales, en las áreas sociales, técnicas, profesionales, humanísticas y artísticas, entre otros campos del conocimiento, que habiliten para el desempeño laboral, además de los definidos en el artículo 43 de la presente, tienen por funciones y objetivos:

a) brindar formación inicial como proceso sistemático que posibilita el desarrollo de

competencias que habilitan para el ejercicio profesional;
b) ofrecer capacitación, perfeccionamiento y actualización continua que genera nuevas competencias requeridas por el avance tecnológico y las transformaciones del sector productivo y de la sociedad, incluyendo certificaciones y pos-títulos como instancias de formación posterior al título de base que podrán articularse con ofertas universitarias;
c) promover la investigación y el desarrollo orientada a brindar asistencia técnica, investigación aplicada, producción de bienes y prestación de servicios a empresas, organizaciones e instituciones públicas y privadas;
d) acreditar las carreras y/o ciclos de formación realizados para la prosecución de estudios y actualización permanente en otros ciclos, instituciones y niveles;
e) estructurar los estudios sobre la base de una organización curricular flexible, que facilite a sus egresados una salida laboral; y
f) adecuar los estudios a los perfiles profesionales requeridos, tanto como las estructuras curriculares, los parámetros de excelencia y los títulos a los criterios que se acuerden en el Consejo Federal de Educación y en el Instituto Nacional de Educación Tecnológica en concordancia con la Ley de Educación Técnico Profesional 26.058.

Artículo 56.- Son principios de la Formación Docente:
a) el carácter público, gratuito, inclusivo y permanente, de los Institutos de Formación Docente de Gestión Estatal;
b) la centralidad ética y política del conocimiento como un bien público y como instrumento para comprender y transformar la realidad;
c) el compromiso con la escuela pública, popular y democrática, con sentido nacional y latinoamericano;
d) el sentido histórico político del hecho educativo y el compromiso con los intereses de las mayorías populares;
e) el reconocimiento del trabajo docente como productor de conocimiento pedagógico. Y transmisor del capital cultural provincial, nacional y latinoamericano; y
f) el compromiso con la democratización de la enseñanza, la cultura y el patrimonio cultural tangible e intangible de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Artículo 57.- Los institutos de formación docente tienen como funciones:
a) promover la formación docente basada en la autonomía profesional;
b) formar docentes capaces de enseñar, generar y trasmitir conocimientos y valores mediante una pedagogía para la formación integral de las personas que favorezca el desarrollo sustentable nacional, provincial y el bien común de la sociedad;
c) vincular la cultura en sus diversas expresiones, el discernimiento de las características de la sociedad contemporánea y el conocimiento actualizado de las ciencias y los saberes en general;
d) perfeccionar en forma continua a los docentes y generar la responsabilidad en el ejercicio de su tarea y trabajo colaborativo;
e) tender a una organización institucional y curricular participativa y dinámica;
f) organizar el trabajo docente estructurado con una carga horaria para los procesos de enseñanza y aprendizaje, carga horaria específica para investigación, formación permanente y proyectos de articulación con organizaciones sociales;
g) otorgar los títulos para el ejercicio de la docencia en los diferentes niveles y modalidades del Sistema Educativo y las certificaciones de conformidad con la reglamentación vigente; y
h) desarrollar las funciones de formación continua y de fortalecimiento del Sistema Educativo provincial que le sean asignadas en función de la política educativa provincial y las políticas públicas nacionales concertadas federalmente por el Instituto Nacional de Formación Docente y el Consejo Federal de Educación.

Artículo 58.- Las carreras de Formación Docente tendrán una duración no inferior a cuatro (4) años y se organizan en torno a tres (3) campos, en concordancia con lo establecido por el Consejo Federal de Educación y el Instituto Nacional de Formación Docente:

a) formación general, centrada en la educación humanística, los fundamentos de la profesión docente, la identidad cultural, y el conocimiento y reflexión de la realidad educativa nacional y provincial;
b) formación específica, centrada en las disciplinas específicas para la enseñanza de la orientación en la que se forma y las características de los estudiantes del nivel o modalidad para la que se forma; y
c) formación en la práctica profesional, orientada al aprendizaje de las capacidades para la actuación docente en las instituciones educativas y en las aulas, e integrada con conocimientos de los otros dos (2) campos, con énfasis en los contenidos de la formación específica.

Título III
Modalidades Educativas Generales

Capítulo I
Educación Técnico Profesional

Artículo 59.- La Educación Técnico Profesional es la modalidad de los niveles Secundario y Superior responsable de la formación de técnicos secundarios y técnicos superiores en áreas ocupacionales específicas y de la formación profesional. La Educación Técnico Profesional se rige por los principios, fines y objetivos de la presente, en concordancia con las disposiciones del Consejo Nacional de Educación, de la Ley de Educación nacional 26.206 y la Ley nacional de Educación Técnico Profesional 26.058.

Artículo 60.- La Educación Técnico Profesional es una necesidad social y brindará formación continua en las áreas específicas, teniendo en cuenta, en la definición de sus propuestas formativas, las necesidades del mundo del trabajo, la producción, la continuidad de estudios superiores y la planificación provincial y regional para el desarrollo humano.

Artículo 61.- La Educación Técnico Profesional es el proceso educativo sistemático que comprende la formación científica y tecnológica, relacionada con las actividades productivas que se realizan o se realicen en el ámbito provincial, propiciando el desarrollo sustentable y las capacidades orientadas al fortalecimiento ético ciudadano en su contexto sociocultural. Sus objetivos y funciones, conforme a lo establecido en el artículo 14 de la presente, son:

a) aportar propuestas curriculares para la formación de Técnicos Secundarios y Superiores y de cursos de Formación Profesional en las áreas a determinar, de acuerdo con las necesidades y potencialidades del contexto provincial, regional y nacional, en el marco del proceso de desarrollo sustentable;
b) formular proyectos de mejoramiento y fortalecimiento de las instituciones y los programas de Educación Técnico Profesional en el marco de políticas nacionales y de las particularidades y diversidades de la política provincial;
c) plantear articulaciones de las instituciones y los programas de Educación Secundaria y Educación Superior, con aquellos ámbitos de la ciencia, la tecnología, la producción y el trabajo que puedan aportar recursos materiales y simbólicos, para el completo desarrollo de la Educación Técnico Profesional, especialmente la relacionada a las áreas industriales, nuevas tecnologías y de servicios, a través de mecanismos que garanticen el carácter pedagógico y formador de prácticas vinculadas al mundo del trabajo;
d) contribuir a la formación integral de los alumnos, cerrando la brecha en la desigualdad profesional científica técnica de los egresados del nivel Secundario y favorecer la equidad, excelencia, eficiencia y efectividad de la Educación Técnica Profesional, como estrategia de inclusión social, de desarrollo y crecimiento socioeconómico de la Provincia;

e) recuperar y desarrollar propuestas pedagógicas, organizativas y de investigación en el campo social, que formen técnicos con capacidades para promover emprendimientos asociativos y/o cooperativos, sobre la base de las producciones familiares, el cuidado del ambiente y la diversificación en términos de producción y consumo; y
f) fortalecer la educación técnica y la formación profesional, impulsando su modernización y vinculación pedagógica con el trabajo y la producción sustentable.

Artículo 62.- La Educación Técnico Profesional en la Educación Secundaria tendrá una duración de siete (7) años organizada en dos ciclos:

a) Ciclo Básico, de tres (3) años de duración que preservará un núcleo principal de carácter común a todas las modalidades y orientaciones que adopte la educación secundaria, y
b) Ciclo Orientado de cuatro (4) años que abordará la formación técnica específica y las prácticas profesionales.

Se podrán implementar distintas especialidades propiciando la vinculación con el mundo del trabajo y la producción, según los requerimientos locales, provinciales o regionales, conforme a la Ley de Educación nacional 26.206, la Ley nacional de Educación Técnico Profesional 26.058.

Capítulo II
Educación Artística

Artículo 63.- La Educación Artística comprende:

a) la formación en distintos lenguajes y disciplinas del arte, para niñas, niños, jóvenes y adultos en todos los niveles y modalidades la que será curricular y obligatoria;
b) la especialidad orientada a la formación específica de nivel Secundario para los estudiantes que opten por seguirla, y
c) la formación artística impartida en los Institutos de Educación Superior, que comprende los profesorados en los diversos lenguajes artísticos para los distintos niveles de enseñanza y carreras artísticas específicas.

Artículo 64.- Sus objetivos, conforme a lo establecido en el artículo 14 de la presente, son:

a) aportar propuestas curriculares y formular proyectos de fortalecimiento institucional para una educación artística integral de calidad articulada con todos los niveles de enseñanza para todas y todos los estudiantes del Sistema Educativo Provincial;
b) propiciar articulaciones de los proyectos educativos institucionales y los programas de formación específica y técnico profesional en arte, de todos los niveles educativos, con ámbitos de la ciencia, cultura y tecnología a fin de favorecer la producción de bienes materiales y simbólicos, garantizando el carácter pedagógico y formador de las prácticas vinculadas al mundo del trabajo;
c) valorar la formación docente artística como una herramienta para el mejoramiento de la calidad de la educación;
d) propiciar la interacción de la modalidad con el Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas(CEAPI), en cuanto al rol que el arte tiene en la cosmovisión y la expresión creativa de las culturas ancestrales; y
e) favorecer la difusión de las producciones artísticas y culturales enfatizando en la importancia del patrimonio intangible y de los bienes culturales, históricos y contemporáneos, estimulando su reelaboración y transformación.

Artículo 65.- El Ministerio de Educación garantizará una educación artística de calidad para todas y todos los estudiantes del Sistema Educativo Provincial que fomente y desarrolle la sensibilidad y la capacidad creativa de cada persona en un marco de valoración y protección del patrimonio natural y cultural, material y simbólico de las diversas comunidades que integran la Provincia.

Artículo 66.- Todas y todos los estudiantes, en el transcurso de su escolaridad obligatoria, tendrán las oportunidades de desarrollar su sensibilidad y capacidad creativa, al menos, en dos (2) disciplinas artísticas. En la Educación Secundaria, la Modalidad Artística ofrecerá una

formación específica en música, danza, artes visuales, artes audiovisuales, plástica, teatro y otras que pudieran conformarse, admitiendo, en cada caso, diferentes especializaciones. La formación específica brindada en las instituciones educativas especializadas en artes podrá continuarse en instituciones de nivel superior de la misma modalidad.

Artículo 67.- La Educación Artística en la Educación Secundaria tendrá una duración de siete (7) años, organizada en dos (2) ciclos, a saber:

a) Ciclo Básico: de tres (3) años de duración, que preservará un núcleo principal de carácter común a todas las modalidades y orientaciones que adopte la Educación Secundaria; y
b) Ciclo Orientado: de cuatro (4) años de duración, que abordará la Formación Artística Específica.

Capítulo III
Educación Especial

Artículo 68.- La Educación Especial es la modalidad destinada a asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidades, temporales o permanentes en todo el Sistema Educativo Provincial. La Educación Especial se rige por los principios de inclusión educativa e integración de alumnos con necesidades educativas derivadas de la discapacidad que no pueden ser abordadas por la educación común. Se entiende a la discapacidad como el resultante entre la deficiencia de la persona y su interacción con el entorno. El Ministerio de Educación garantiza la integración de los estudiantes con discapacidades en todos los niveles, modalidades y especialidades, según las posibilidades de cada persona.

Artículo 69.- Sus objetivos y funciones, conforme a lo establecido en el artículo 14 de la presente son:

a) generar propuestas pedagógicas flexibles para una Educación Especial que garantice los derechos de igualdad, inclusión, calidad y justicia social de todos los niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidades, temporales o permanentes que componen la comunidad educativa;
b) favorecer el desarrollo, constitución física y psíquica en forma integral;
c) promover una formación que permita a los estudiantes su inserción laboral, académica y social garantizando la acreditación y certificación según el caso que corresponda de los saberes construidos en los trayectos educativos y de formación laboral;
d) generar acciones educativas que faciliten la inclusión de personas con discapacidades temporales o permanentes y necesidades especiales a la educación común, cuando las evaluaciones de los equipos intervinientes de las instituciones reconocidas por el Ministerio de Educación así lo recomienden, manteniendo la Educación Especial como complementaria cuando la inclusión no pueda ser total;
e) formular proyectos de mejoramiento y fortalecimiento de las instituciones y los programas, articulándolos organizativamente con las respectivas supervisiones de nivel, en el marco de políticas provinciales y estrategias que integren las particularidades y diversidades de la Provincia, sus habitantes y sus culturas;
f) desarrollar la atención educativa de las personas jóvenes y adultas con discapacidades temporales o permanentes, físicas o psíquicas y necesidades educativas especiales de manera conjunta con el resto de las modalidades; y
g) promover articulaciones de las instituciones y los programas de formación específica de todos los niveles educativos con aquellos ámbitos de la ciencia, tecnología, producción y trabajo que puedan aportar recursos materiales y simbólicos para el completo desarrollo de la Educación Especial a través de mecanismos que garanticen el carácter pedagógico y formador de toda práctica.

Artículo 70.- El Ministerio de Educación asegurará una supervisión o dirección propia de la modalidad especial, que atienda a todos los niveles del sistema educativo, con el fin de

garantizar la transversalidad en todos los niveles y modalidades.
Artículo 71.- El Ministerio de Educación en forma conjunta con los organismos pertinentes, en el marco de la Ley nacional 26.061, la Ley provincial 521 y otras normas que las reemplacen, establecerá los procedimientos y recursos correspondientes para identificar tempranamente las necesidades educativas derivadas de la discapacidad o de trastornos en el desarrollo, con el objeto de brindarles la atención interdisciplinaria y educativa para lograr su inclusión.
Artículo 72.- El Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo Federal de Educación creará las instancias institucionales y técnicas necesarias para la orientación de la trayectoria escolar más adecuada de los estudiantes con discapacidades temporales o permanentes, en todos los niveles, modalidades y especialidades de la enseñanza obligatoria y las normas que regirán los procesos de evaluación, acreditación y certificación escolar, conforme a las capacidades cognitivas y sociales alcanzadas, de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley; participarán en mecanismos de articulación entre ministerios y otros organismos del Estado provincial que atienden a personas con discapacidades temporales o permanentes para garantizar un servicio eficiente y de mayor calidad.
Artículo 73.- El Ministerio de Educación en el marco de la Ley nacional 26.061, la Ley provincial 48 y la Ley provincial 521, y otras normas que las reemplacen, establece en los respectivos niveles educativos, los procedimientos y recursos correspondientes para asegurar el derecho a la educación, favoreciendo la integración escolar y la inserción social de las personas con discapacidades, temporales o permanentes. Con este propósito se dispondrá:

a) la detección y la educación temprana de los niños y niñas con riesgo en su proceso de desarrollo;
b) una trayectoria educativa integral que permita el acceso a los saberes tecnológicos, culturales, de educación física y artística;
c) docentes de educación especial que trabajen en equipo con los docentes de la institución común y con equipos del servicio interdisciplinario de todos los niveles;
d) asegurar la cobertura de los servicios educativos especiales, el transporte, los recursos técnicos y materiales necesarios para el desarrollo del currículo escolar;
e) proveer alternativas de continuidad para su formación integral a lo largo de toda la vida, a través de instituciones, escuelas, centros de formación laboral, talleres protegidos y escuelas de educación integral;
f) garantizar progresivamente la accesibilidad universal de todos los edificios escolares; y
g) la formación docente específica y capacitación gratuita continúa en la modalidad.

Artículo 74.- El Ministerio de Educación, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, creará las instancias institucionales y técnicas necesarias para la orientación de la trayectoria escolar más adecuada de los estudiantes con discapacidades temporales o permanentes, en todos los niveles, modalidades y especialidades de la enseñanza obligatoria, y las normas que regirán los procesos de evaluación, acreditación y certificación escolar, conforme a las capacidades cognitivas y sociales alcanzadas, de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley.

Capítulo IV
Educación Permanente de Jóvenes y Adultos

Artículo 75.- La Educación Permanente de Jóvenes y Adultos es la modalidad educativa que garantiza la alfabetización y el cumplimiento de la obligatoriedad escolar de quienes no la hayan completado en la edad establecida reglamentariamente, brindando posibilidades de educación a lo largo de toda la vida.
Artículo 76.- El Estado provincial garantizará el avance gradual de disponibilidad de instalaciones edilicias de uso exclusivo para este tipo de modalidad, incluyendo bibliotecas y laboratorios, en un plazo de cuatro (4) años contados a partir de la promulgación de la presente ley.
Artículo 77.- Los programas y las acciones de educación para jóvenes y adultos, se articularán, con acciones de otras dependencias del Estado y de organizaciones no

gubernamentales, se vincularán con el mundo de la cultura, producción, trabajo, ciencia y tecnología. El Estado provincial garantiza el acceso a la información y a la orientación sobre las ofertas de educación permanente y las posibilidades de acceso a las mismas.
Artículo 78.- La estructura curricular e institucional de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos responderá, conforme a lo establecido en el artículo 14 de la presente, a los siguientes objetivos y criterios:

a) diseñar propuestas curriculares acordes con las características, aspiraciones y necesidades de la población destinataria, en relación con el desarrollo local y regional;
b) desarrollar propuestas de alfabetización de Nivel Primario y Secundario, que permitan la certificación de los niveles educativos, así como la acreditación de saberes adquiridos a través de la experiencia laboral;
c) brindar una formación básica que permita adquirir conocimientos y desarrollar las capacidades de expresión, comunicación, relación interpersonal y de construcción del conocimiento, atendiendo las particularidades socioculturales, laborales, contextuales y personales de la población destinataria;
d) desarrollar propuestas que incentiven para la continuidad de los estudios, a la inserción en el mundo del trabajo y al mejoramiento de la formación profesional;
e) incorporar en sus enfoques y contenidos básicos la igualdad de género y la diversidad cultural;
f) promover la inclusión de los adultos mayores y de las personas con discapacidades temporales o permanentes, en el caso que el tipo y grado de discapacidad así lo permitan, según lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley nacional 24.901, a través de recursos profesionales y medios necesarios que permitan un acompañamiento acorde con las características de esta población;
g) implementar sistemas de créditos y equivalencias que permitan y acompañen la movilidad de los estudiantes;
h) desarrollar acciones educativas presenciales, semi presenciales y a distancia, particularmente en zonas rurales o aisladas, asegurando la calidad e igualdad de sus resultados;
i) promover la participación de docentes y estudiantes en el desarrollo del proyecto educativo y la vinculación con la comunidad local y con los sectores laborales o sociales;
j) promover proyectos de mejoramiento y fortalecimiento de las instituciones procurando la conformación de redes integradas e integrales de atención a las necesidades educativas;
k) promover el acceso al conocimiento y manejo de nuevas tecnologías;
l) desarrollar la capacidad de participación en la vida social, cultural, política y económica haciendo efectivo su derecho a la ciudadanía democrática; y
m) disponer en forma progresiva de espacios institucionales destinados al cuidado de los hijos y las hijas, durante el horario escolar, de los y las estudiantes de esta modalidad.

Capítulo V
Educación Rural

Artículo 79.- La Educación Rural es la modalidad del sistema educativo de los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria destinada a garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria, a través de modelos de organización y de gestión adecuados a las necesidades y particularidades de la población que habita en zonas rurales.
Artículo 80.- Los objetivos y funciones de la Educación Rural, conforme a lo establecido en el artículo 14 de la presente, son:

a) garantizar el acceso a los saberes postulados para el conjunto del sistema a través de propuestas pedagógicas flexibles que fortalezcan el vínculo con las identidades

culturales y las actividades productivas locales;
b) promover diseños institucionales que permitan a los estudiantes mantener los vínculos con su núcleo familiar y su medio local de pertenencia durante el proceso educativo, coordinados y articulados con el Sistema Educativo Provincial;
c) fortalecer la relación de la escuela con la comunidad rural realizando un aporte real al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes;
d) favorecer el uso de los sistemas de información, de producción sustentables, de desarrollo de nuevas tecnologías y comunicación en el medio rural; y
e) promover la igualdad de oportunidades y posibilidades asegurando la igualdad de género.

Artículo 81.- Se admiten, en el medio rural, modelos de organización escolar adecuados a cada contexto, tales como agrupamientos de instituciones, salas plurigrados y grupos multiedad, instituciones que abarquen varios niveles en una misma unidad educativa, escuela de alternancia, escuelas itinerantes u otras que garanticen el cumplimiento de la obligatoriedad escolar y la continuidad de los estudios en los diferentes ciclos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Provincial, atendiendo a las necesidades educativas de la población rural.

Artículo 82.- La autoridad de aplicación es responsable de definir las medidas necesarias para que los servicios educativos brindados en las zonas rurales alcancen niveles de calidad equivalentes a los urbanos.

Capítulo VI
Educación Multicultural e Intercultural Bilingüe

Artículo 83.- La Educación Multicultural e Intercultural Bilingüe es la modalidad del Sistema Educativo de los Niveles de educación Inicial, Primaria y Secundaria que garantiza el derecho constitucional de los pueblos originarios establecido en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, a recibir una educación que contribuya a preservar y fortalecer sus pautas culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad étnica; a desempeñarse activamente en un mundo multicultural y a mejorar su calidad de vida.

Esta modalidad promueve un diálogo mutuamente enriquecedor de conocimientos y valores entre los pueblos indígenas y poblaciones étnica, lingüística y culturalmente diferentes propiciando el reconocimiento y el respeto hacia tales diferencias.

Artículo 84.- Para favorecer el desarrollo de la Educación Multicultural e Intercultural Bilingüe, el Estado provincial será responsable de:

a) crear mecanismo de participación permanente de los representantes de los pueblos originarios en los órganos responsables de definir y evaluar las estrategias;
b) crear mecanismo de participación e interacción continua con el Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas (CEAPI);
c) garantizar la Formación Docente Específica, inicial y continua, correspondiente a los distintos niveles del Sistema Educativo;
d) impulsar la investigación sobre la realidad sociocultural y lingüística de los pueblos indígenas, que permita el diseño de propuestas curriculares, materiales educativos pertinentes e instrumentos de gestión pedagógica;
e) promover la generación de instancias institucionales de participación de los pueblos originarios en la planificación y gestión de los procesos de enseñanza y aprendizaje;
f) propiciar la construcción de modelos y prácticas educativas propias de los pueblos originarios que incluyan sus valores, conocimientos, lengua y otros rasgos sociales y culturales; y
g) incentivar la formación de espacios de investigación en la modalidad con la participación de las universidades nacionales y provinciales, centros de investigación educativa, institutos de Formación Docente y otros organismos y

organizaciones interesadas en el diseño de propuestas curriculares, materiales educativos pertinentes e instrumentos de gestión pedagógica.

Artículo 85.- La autoridad de aplicación adoptará las definiciones que se acuerden en el Consejo Federal de Educación, respecto de los contenidos curriculares comunes que promuevan el respeto por la pluriculturalidad e interculturalidad y el conocimiento de las culturas originarias que habitaron el actual territorio Nacional y Provincial, en todas las instituciones educativas provinciales, permitiendo a los estudiantes valorar y comprender la diversidad cultural como atributo positivo de nuestra sociedad.

Capítulo VII
Educación en Contextos de Privación de La Libertad

Artículo 86.- La Educación en Contextos de Privación de la Libertad es la modalidad del Sistema Educativo Provincial destinado a garantizar el derecho a la educación de todas las personas que se encuentran privadas de la libertad para promover su desarrollo y formación integral. El ejercicio de este derecho no admite limitación alguna vinculada a la situación de encierro, y será puesto en conocimiento de todas las personas privadas de libertad, en forma fehaciente.

Artículo 87.- Los objetivos y funciones Educación en Contextos de Privación de la Libertad, además de lo establecido en el artículo 14 de la presente, son:

a) garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria de todas las personas privadas de libertad, dentro de las instituciones de encierro o fuera de ellas, cuando las condiciones de detención lo permitan;
b) favorecer el acceso, la permanencia y tránsito en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo;
c) garantizar un sistema de Educación a Distancia gratuita;
d) asegurar alternativas de educación no formal y apoyar los proyectos educativos autogestivos que formulen las personas privadas de libertad; y
e) generar propuestas destinadas a estimular la creación artística y la participación en diferentes manifestaciones culturales, así como en actividades de educación física y deportiva.

Artículo 88.- Se ofrecerá atención educativa de Nivel Inicial a todos los niños y niñas de cuarenta y cinco (45) días a cuatro (4) años, nacidos o criados en estos contextos, a través de Jardines Maternales o de Infantes, así como otras actividades educativas y recreativas dentro y fuera de las unidades penitenciarias.

Artículo 89.- Todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en instituciones de contención acentuada, según lo establecido por el artículo 19 de la Ley nacional 26.061 y la Ley provincial 521 tendrán derecho al acceso, la permanencia y tránsito en todos los niveles y modalidades de la escolaridad obligatoria. Las formas de implementación de este derecho responderán a criterios de flexibilidad y calidad que aseguren resultados equivalentes a los de la educación común.

Capítulo VIII
Educación Domiciliaria y Hospitalaria

Artículo 90.- La Educación Domiciliaria y Hospitalaria es la modalidad del Sistema Educativo Provincial en los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria destinada a garantizar el derecho a la educación de los estudiantes que, por razones de salud, se ven imposibilitados de asistir con regularidad a una institución educativa por períodos de diez (10) días corridos o más. Su objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades a los estudiantes, permitiendo la continuidad de sus estudios y su reinserción en el sistema regular cuando ello sea posible.

Título IV
Modalidades Educativas Específicas
Capítulo I
Educación A Distancia

Artículo 91.- A los efectos de esta ley, la Educación a Distancia es la modalidad que se define como la opción pedagógica y didáctica donde la relación docente-estudiante se encuentra separada en tiempo o espacio, durante todo o gran parte del proceso educativo, en el marco de una estrategia pedagógica integral que utiliza soportes materiales y recursos tecnológicos diseñados especialmente para que los estudiantes alcancen los objetivos de la propuesta educativa.
Artículo 92.- Quedan comprendidos en la denominación Educación a Distancia los estudios conocidos como educación semi presencial, educación asistida, educación abierta, educación virtual y aquella oferta que reúna las características indicadas en el articulado precedente. Implica la Educación Formal y no Formal.
Artículo 93.- La Educación a Distancia es una estrategia pedagógica y didáctica transversal a los distintos niveles y modalidades del Sistema Educativo, puede adoptarse en la Educación Formal y No Formal y requiere una organización académica y un sistema específico de gestión y evaluación.
Artículo 94.- La autoridad de aplicación, en el marco de los acuerdos del Consejo Federal de Educación, diseñará estrategias de educación a distancia orientadas a favorecer su desarrollo con los máximos niveles de calidad y pertinencia, y definirá los mecanismos de regulación, control y veracidad de la información correspondiente.
Artículo 95.- La validez nacional y provincial de títulos y certificaciones de estudios a distancia se ajustará a la normativa del Consejo Federal de Educación y a los circuitos de control, supervisión y evaluación específicos a cargo de la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de las ofertas de Educación a Distancia y en concordancia con la normativa vigente.
Artículo 96.- Los estudios a distancia como alternativa para jóvenes y adultos sólo pueden impartirse a partir de los dieciocho (18) años de edad. Para la modalidad Rural y para los estudiantes que cursan en la Antártida Argentina, los estudios a distancia podrán ser implementados a partir del Ciclo Básico del nivel Secundario.

Título V

Capítulo I
Educación No Formal

Artículo 97.- La Educación No Formal es el conjunto de actividades educativas, organizadas y sistemáticas que se estructuran sin sujeción a los niveles y modalidades establecidas por la presente, tiene como finalidad principal completar, actualizar y suplir conocimientos, formar en talleres culturales, en aspectos académicos, laborales y preventivos, en general, capacitar en el desempeño artesanal, artístico, recreativo, laboral y técnico, tendiente a favorecer el desarrollo sustentable y la participación ciudadana y comunitaria.
Artículo 98.- Los objetivos y funciones de la Educación No Formal, conforme a lo establecido en el artículo 6º de la presente, son:

a) desarrollar y ejecutar programas, actividades educativas, proyectos de formación, complementación, actualización científicos, tecnológicos y artísticos, que den respuesta a los requerimientos, necesidades e intereses de capacitación, reconversión productiva y laboral, promoción comunitaria y animación sociocultural para el mejoramiento de las condiciones de vida;
b) organizar y sostener programas para adolescentes, jóvenes y adultos con la finalidad de desarrollar capacidades expresivas, lúdicas, deportivas y de

investigación mediante programas no escolarizados de actividades vinculadas con lo artístico, ciencia, tecnología, deporte y lenguas extranjeras;
c) coordinar acciones con instituciones públicas o privadas y organizaciones no gubernamentales, comunitarias y sociales para desarrollar actividades formativas complementarias de la Educación Formal;
d) contribuir a la reinserción escolar en la Educación Formal ; y
e) lograr el máximo aprovechamiento de las capacidades y recursos educativos de la comunidad en los planos de la cultura, arte, deporte e investigación científica y tecnológica.

Artículo 99.- El Ministerio de Educación incluirá en la estructura de la Educación No Formal, a partir de la promulgación de la presente ley, a los Centros Educativos de Actividades Alternativas para Discapacitados (CAAD).

Título VI
Educación Pública de Gestión Privada

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 100.- Los servicios educativos de gestión privada estarán sujetos a la autorización, reconocimiento y supervisión de las autoridades educativas jurisdiccionales correspondientes para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, de las políticas de igualdad y calidad educativas referidas en la presente ley y las establecidas en la Ley provincial 749.

Artículo 101.- La asignación de aportes financieros por parte del Estado provincial a las instituciones educativas públicas de gestión privada es para atender una parte o la totalidad de las necesidades salariales docentes, según corresponda. A ese fin, la asignación de los aportes financieros estará fundada en criterios objetivos de justicia social y distributiva, teniendo en cuenta:

a) la función social de la institución en su zona de influencia;
b) su proyecto educativo o propuesta educacional; y
c) el arancel que establezca.

Artículo 102.- Tienen derecho a prestar servicios educativos:

a) la Iglesia Católica y demás confesiones religiosas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos;
b) las sociedades y empresas con personería jurídica;
c) las fundaciones, asociaciones, sindicatos y cooperativas; y
d) las personas físicas.

Artículo 103.- Las personas físicas y jurídicas enumeradas en el artículo anterior, tienen los siguientes derechos y obligaciones:

a) derechos: crear, administrar y sostener establecimientos educativos; matricular, evaluar y emitir certificados y títulos con validez nacional; nombrar y promover a su personal directivo, docentes, administrativo y auxiliar; formular planes y programas de estudio; organizar y ejecutar programas de formación, capacitación, perfeccionamiento y actualización del personal docente, técnico y administrativo; elaborar y aprobar el Proyecto Educativo Institucional de acuerdo con su ideario, dentro de las pautas fijadas en el diseño curricular provincial y participar del planeamiento educativo; y
b) obligaciones: cumplir con la normativa y los lineamientos de la política educativa provincial; ofrecer servicios educativos que respondan a las necesidades de la comunidad; brindar establecimientos con espacios e instalaciones que cumplan con las normativas que regulan la materia; aportar toda la información necesaria para la supervisión pedagógica; el control contable y laboral por parte del Estado; comunicar, con un año lectivo de antelación como mínimo, el cierre del establecimiento educativo a la autoridad de aplicación.

Artículo 104.- Los docentes de instituciones educativas públicas de Gestión Privada tienen las mismas obligaciones y se ajustan a las mismas incompatibilidades que tiene el personal docente de las instituciones educativas estatales, sin perjuicio de la legislación laboral vigente y de la negociación colectiva del sector. Las obligaciones contraídas por los propietarios con su personal o terceros no responsabilizan ni obligan en modo alguno al Estado provincial.

Artículo 105.- Los docentes de las instituciones educativas públicas de gestión privada, en todos sus niveles, percibirán, como mínimo, salarios equiparados a las remuneraciones con los del personal docente de igual función, cargo, categoría y responsabilidad docente del orden provincial. El Estado provincial garantizará que los aportes financieros requeridos para las remuneraciones del personal docente de las instituciones educativas públicas de Gestión Privada, sean remitidos en la misma fecha en las que se hacen efectivos los salarios a los docentes de las instituciones estatales en concordancia con la Ley provincial 749.

Artículo 106.- Los Establecimientos educativos creados o que se creen, adoptarán los planes y programas de estudio de la enseñanza oficial, incorporando los contenidos mínimos que se dictan en los establecimientos educativos de gestión estatal de igual nivel, modalidad y orientación. Éstos deberán ser tramitados para su evaluación y posterior aprobación ante la autoridad del correspondiente nivel. En el cumplimiento de estas condiciones, la Provincia reconocerá la validez de los estudios que en ellos se realicen y los títulos que expidan, en concordancia con la Ley provincial 749.

Artículo 107.- A partir de la promulgación de la presente se procederá a la implementación del registro único de instituciones educativas de gestión privada con el objeto de garantizar el ordenamiento administrativo y pedagógico de los establecimientos existentes o por crear, cualquiera sea la norma de origen o razón social de existencia a los efectos de propiciar un funcionamiento acorde a los principios y regulaciones del Sistema Educativo Provincial.

Artículo 108.- Anualmente la Ley de Presupuesto General de la Provincia incluirá el aporte financiero correspondiente a los establecimientos reconocidos por la autoridad de aplicación en concordancia con la Ley provincial 749.

Artículo 109.- Los establecimientos de gestión privada que no cumplan con las normas establecidas en la presente ley, serán pasibles, previo dictamen técnico, de las siguientes sanciones que serán aplicadas por la autoridad de aplicación según lo establece la Ley provincial 749:

a) apercibimiento;
b) retención de aportes;
c) intervención administrativo contable;
d) cancelación definitiva de los aportes;
e) suspensión de la inscripción de primer año y en forma progresiva de los años subsiguientes hasta llegar a la cancelación de la autorización. Las instituciones que sean pasibles de esta sanción deberán preservar los derechos de los alumnos a culminar sus estudios y obtener la certificación o título correspondiente; y
f) cancelación definitiva de la autorización.

Artículo 110.- La caducidad de los beneficios de la presente ley se producirá en los siguientes casos según lo establece la Ley provincial 749:

a) por renuncia del propietario;
b) cuando el propietario perdiera su solvencia moral y/o económica;
c) por incumplimiento reiterado y doloso de la reglamentación vigente, en sus aspectos técnicos, de información y administrativos;
d) por la alteración del normal funcionamiento del establecimiento, imputable al propietario;
e) cuando las condiciones del local dejen de ser las apropiadas para el funcionamiento de un establecimiento educativo; y
f) cuando el establecimiento no reinicie sus actividades luego de cumplidas las sanciones en el caso que se le hayan aplicado.

Título VII
La Comunidad Educativa y la Institución Educativa

Capítulo I
La Comunidad Educativa

Artículo 111.- La comunidad educativa está conformada por equipos de gestión, docentes, estudiantes, madres, padres, tutoras, tutores; así como el personal técnico, administrativo, profesional, auxiliar de la docencia y organizaciones representativas. Participa según su propia opción y de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional Específico en la organización y gestión de la unidad escolar sin afectar el ejercicio de las responsabilidades directivas y docentes.

Capítulo II
La Institución Educativa

Artículo 112.- La institución educativa es la unidad pedagógica del Sistema Educativo Provincial responsable de los procesos de enseñanza y aprendizaje para el logro de los objetivos de la presente ley. Dentro de ella se promueve y organiza la participación de los distintos actores que constituyen la comunidad educativa y que garantiza el carácter integral de la Educación.

Artículo 113.- La Provincia reconoce un único Sistema Educativo Provincial, compuesto por instituciones educativas públicas de gestión estatal, privada, social o cooperativa, que cumplen con las disposiciones de la presente ley, de la Ley nacional 26.206, del Consejo Federal de Educación, se organizarán de acuerdo a los siguientes criterios generales y se adecuarán a los diferentes niveles y modalidades:

a) definición del Proyecto Educativo Institucional, con la participación de los integrantes de la comunidad educativa, brindando la posibilidad de contar con tiempos institucionales destinados a tal fin, conforme a los principios y objetivos enunciados en la presente y en la legislación vigente;
b) gestión institucional centrada en lo pedagógico, en el trabajo colaborativo y en la generación de un clima institucional cordial y democrático, signado por el compromiso, las metas claras, la asignación de responsabilidades, el respeto, la ética del trabajo, la estima de los estudiantes y de toda la comunidad educativa, la identidad y la pertenencia;
c) organización institucional que asegure la participación de todos los integrantes de la comunidad educativa y la dinámica democrática en el estilo de las relaciones;
d) responsabilidad por los resultados de la gestión de todos los actores de la comunidad educativa;
e) adopción del principio de no discriminación en el acceso y principio de inclusión en el acceso y trayectoria educativa de los estudiantes;
f) desarrollo de procesos de autoevaluación, coevaluación y metaevaluación institucional con el propósito de revisar las prácticas pedagógicas y de gestión en forma periódica;
g) vinculación intersectorial e interinstitucional con las áreas que se consideren pertinentes a fin de asegurar la provisión de servicios sociales, psicológicos, psicopedagógicos, médicos y legales que garanticen condiciones adecuadas para el aprendizaje;
h) construcción participativa y colaborativa del Proyecto Curricular Institucional, en el marco de los lineamientos curriculares nacionales y provinciales, para responder a las particularidades y necesidades de los estudiantes y su contexto;
i) desarrollo e implementación de prácticas de mediación escolar que contribuyan a la resolución pacífica de conflictos, con los distintos actores de la comunidad

educativa, incluyendo los gabinetes orientadores y sus normas de convivencia;
j) promoción de una capacitación para la mediación;
k) promoción de iniciativa de experimentación, investigación e innovación educativa;
l) vinculación regular y sistemática con el contexto social, por medio del desarrollo de actividades de extensión, tales como las acciones de aprendizaje servicio, y promoción de redes que fortalezcan la cohesión comunitaria e intervengan, frente a la diversidad de situaciones que presentan los estudiantes y sus familias;
m) desarrollo de experiencias educativas fuera del ámbito escolar con el fin de permitir a los estudiantes conocer la cultura nacional, regional y provincial, experimentar actividades físicas y deportivas en ambientes urbanos y naturales y tener acceso a las actividades culturales y otras;
n) existencia de espacios de articulación y cooperación con instituciones del mismo y distintos niveles, modalidades y especialidades de la misma zona; y
ñ) promoción del uso de las instalaciones escolares para actividades recreativas, expresivas y comunitarias.

Capítulo III
Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes

Artículo 114.- Todos los estudiantes tienen los mismos derechos y responsabilidades, sin más distinciones que las derivadas de su edad, del nivel educativo, modalidad o especialidad que estén cursando o de las que se establezcan por leyes especiales.

Los estudiantes tienen los siguientes derechos:

a) a una educación integral e igualitaria, que contribuya al desarrollo de su personalidad, posibilite la adquisición de conocimientos, habilidades y sentido de responsabilidad y solidaridad social que garantice igualdad de oportunidades y posibilidades;
b) ser respetados en su integridad, dignidad personal, sus convicciones y opciones religiosas, éticas, políticas, culturales en el marco de la convivencia democrática y pluralista;
c) a recibir apoyo asistencial para asegurar la permanencia y egreso del sistema educativo, facilitando para ello transporte, becas, comedor escolar, material didáctico y bibliográfico;
d) a la permanencia en el sistema en caso de enfermedades;
e) a ser evaluados en sus desempeños, procesos y logros de acuerdo a su desarrollo cognitivo, criterios de evaluación acorde al Proyecto Educativo Institucional (PEI) de cada institución;
f) a recibir intervención y apoyo psicopedagógico específico de forma continua en atención a sus necesidades a fin de garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje;
g) a desarrollar sus aprendizajes en edificios que respondan a normas de seguridad e higiene y conforme a normas de accesibilidad vigentes;
h) a organizarse en centros, asociaciones u organismos específicos para participar del proceso educativo, ejerciendo prácticas democráticas a partir de la convivencia pluralista;
i) a recibir orientación vocacional, académica y profesional ocupacional que posibilite su inserción en el mundo laboral y la prosecución de otros estudios;
j) a estar amparados por un sistema de seguridad social durante su permanencia en el establecimiento educativo en aquellas actividades programadas por las autoridades educativas correspondientes;
k) a concurrir a la escuela hasta completar la educación obligatoria, lo que también constituye su obligación o deber;
l) a gozar de la protección que estipulan las leyes, nacional y provincial, de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes y las Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos y Derechos del Niño; y

m) a la identidad y al resguardo de la misma en el manejo de redes sociales a través de la supervisión de adultos responsables.

Artículo 115.- Los estudiantes tienen las siguientes responsabilidades:

a) hacer uso responsable y solidario de las oportunidades que el Sistema Educativo les ofrece;
b) respetar a las autoridades, a los docentes, a sus pares y al personal de la escuela; y cumplir con las reglamentaciones que rigen la convivencia y el buen funcionamiento de la Comunidad Educativa;
c) asistir a clase regularmente y con puntualidad;
d) respetar el Proyecto Educativo Institucional, las normas de organización, convivencia y disciplina del establecimiento escolar;
e) colaborar con el desarrollo de las actividades educativas mediante su accionar personal y la participación comunitaria;
f) respetar los símbolos patrios;
g) respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, la dignidad, la integridad, la autoridad legítima, la opción de género y el derecho a la intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa;
h) asumir el proceso educativo con la responsabilidad y esfuerzo que demanda su propia formación y el bien de la comunidad; e
i) conservar y hacer un buen uso de las instalaciones y equipamiento escolar.

Capítulo IV
Derechos y Responsabilidades de las Madres, Padres, Representantes Legales y Tutores

Artículo 116.- Las madres, los padres, representantes legales y tutores de los estudiantes tienen los siguientes derechos:

a) ser reconocidos como agentes naturales y primarios de la educación;
b) a ser informados periódicamente, con respecto a la evolución y evaluación del proceso educativo de sus hijas, hijos o representados;
c) participar en la vida institucional a través de sus organizaciones representativas colaborando en la construcción del proyecto educativo institucional; y
d) a elegir para sus hijos, hijas o representados la institución educativa cuyo ideario responda a sus convicciones filosóficas, éticas o religiosas.

Artículo 117.- Las madres, los padres, representantes legales y tutores de los estudiantes tienen las siguientes responsabilidades:

a) hacer cumplir a sus hijos, hijas o representados con la asistencia regular requerida por los establecimientos educativos;
b) hacer cumplir a sus hijos, hijas o representados con la escolaridad obligatoria en todos sus niveles y modalidades según corresponda;
c) comprometerse con el seguimiento y apoyo del proceso educativo de sus hijos, hijas o representados;
d) seguir, apoyar y participar de las actividades que organice la unidad escolar y responder a las convocatorias que realicen las autoridades escolares relacionadas a la educación de sus hijos, hijas o representados;
e) respetar y hacer respetar a sus hijos, hijas o representados los acuerdos escolares de convivencia y las disposiciones del Proyecto Educativo; y
f) respetar y hacer respetar a sus hijas, hijos o representados la libertad de conciencia, la dignidad, la integridad, la opción de género e intimidad de todas y todos los miembros de la comunidad educativa.

Artículo 118.- Los derechos y responsabilidades de las madres, los padres, representantes legales, tutores y estudiantes deben figuran en el cuaderno de comunicaciones o mecanismo alternativo que cumpla igual función a fin de que sean conocidos y de esa manera ejercidos por los sujetos involucrados.

Capítulo V
Derechos y Responsabilidades de las y de los Docentes

Artículo 119.- El personal docente, cualquiera sea su situación de revista, asume las responsabilidades y adquiere los derechos establecidos en la presente, desde el momento en que toma posesión de la función para la que es designado.

Los docentes de todo el Sistema Educativo Provincial tienen los siguientes derechos sin perjuicio de los que establezcan las negociaciones colectivas y la legislación laboral general y específica:

a) al ejercicio de la docencia sobre la base de la libertad de cátedra y de enseñanza, en el marco de los principios establecidos por la Constitución Nacional, Constitución Provincial, las disposiciones de la Ley de Educación nacional 26.206, la Ley provincial de paritaria 424 y lo establecido por esta ley;
b) a la activa participación en la elaboración e implementación del Proyecto Educativo Institucional de la escuela;
c) a percibir un salario justo y digno;
d) a mantener la estabilidad en el cargo en tanto su desempeño sea satisfactorio, de conformidad con la normativa vigente;
e) a la capacitación y actualización gratuita y en servicio;
f) a ingresar al Sistema Educativo mediante un régimen de concurso que garantice idoneidad y el respeto por las incumbencias profesionales, accediendo de esta manera a una carrera pedagógica y a una carrera administrativa. Los cargos directivos serán mediante concurso de antecedentes y oposición;
g) a organizarse libremente, en resguardo de sus derechos, en organizaciones gremiales y profesionales;
h) al desarrollo de su profesión en espacios que reúnan las condiciones adecuadas de seguridad e higiene, respetando las normas vigentes;
i) a acceder mediante el mecanismo que defina la autoridad competente, al ejercicio de funciones de asesoramiento o acompañamiento de docentes noveles de instituciones educativas, en los dos (2) últimos años de su carrera laboral;
j) a los beneficios de la seguridad social, jubilación, seguros y obra social, programas de salud laboral y enfermedades laborales; y
k) a la investigación educativa como eje de la práctica docente y con aplicación a las horas grado, dadas en el secundario y el superior.

Artículo 120.- Los docentes de todo el Sistema Educativo Provincial tienen, sin perjuicio de lo que establezcan las negociaciones colectivas y la legislación laboral general y específica, las siguientes responsabilidades:

a) poseer los títulos reconocidos oficialmente que los habiliten para el ejercicio de la profesión o el cargo que desempeñan;
b) respetar y hacer respetar los principios constitucionales, los de la presente, la normativa institucional, las que regula la tarea docente y, en especial, la libertad de conciencia, integridad e intimidad de los miembros de la comunidad educativa;
c) cumplir con los lineamientos de la política educativa provincial y con los diseños curriculares de cada uno de los niveles, especialidades y modalidades;
d) renovar y fortalecer su formación inicial mediante su participación en acciones individuales y colectivas de desarrollo profesional;
e) ejercer su trabajo de manera idónea y responsable, a presentar las certificaciones correspondientes de las capacitaciones que realizan, y a aplicar el conocimiento, producto de las mismas, con el fin de enriquecer su tarea o función educativa;
f) proteger y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren bajo su responsabilidad, en concordancia con lo dispuesto en la Ley nacional 26.061;
g) respetar la libertad de conciencia, dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la Comunidad Educativa; y

h) participar de instancias formativas vinculadas al conocimiento de la identidad fueguina cuando se trate de profesionales formados en otras jurisdicciones.

Artículo 121.- No podrá incorporarse ni reincorporarse a la carrera docente quien haya sido condenado por delito de lesa humanidad o haya incurrido en actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, conforme a lo previsto en la Constitución Nacional, Provincial y el Código Penal, ni quien haya sido condenado por delitos contra la integridad sexual conforme a lo establecido en el Título III, Capítulos II, III, IV y V del Libro Segundo del Código Penal, aún cuando se hayan beneficiado por el indulto o la conmutación de la pena.

Título VIII
Políticas de Promoción de la Igualdad Educativa

Artículo 122.- El Estado provincial, a través de la autoridad educativa y en el marco de los acuerdos del Consejo Federal de Educación, diseñará y desarrollará políticas de promoción de la igualdad educativa destinadas a modificar situaciones de desigualdad, exclusión, estigmatización y otras formas de discriminación, derivadas de factores socioeconómicos, culturales, geográficos, étnicos, de identidad de género, por discapacidades o de cualquier índole, que afecten o vulneren el ejercicio pleno del derecho a la educación de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores.

Artículo 123.- Las políticas provinciales de Promoción de la Igualdad Educativa deben asegurar las condiciones necesarias para la inclusión, el reconocimiento, la integración y el logro educativo de los estudiantes de todos los niveles y modalidades, principalmente los obligatorios. El Estado provincial, en forma conjunta con el Ministerio de Educación de la Nación, asignará los recursos presupuestarios con el objeto de garantizar la igualdad de oportunidades, posibilidades y niveles de calidad de los aprendizajes para los sectores más desfavorecidos de la sociedad y a los estudiantes con necesidades especiales de aprendizaje y de entorno institucional. La autoridad de aplicación prestará asistencia técnico pedagógica específica a las instituciones educativas, para favorecer el acceso, la permanencia y los resultados educativos.

Artículo 124.- La política provincial de promoción de la igualdad educativa estará orientada por los siguientes principios:

a) centralidad en lo pedagógico;
b) posibilidad de aprender por parte de todos los estudiantes;
c) valoración de la institución educativa como ámbito en el que se desarrolla y resuelve una educación de los estudiantes;
d) diseño de programas flexibles que respondan a las necesidades de los estudiantes;
e) evaluación y actualización de las propuestas curriculares contextualizadas a la realidad social, cultural y productiva de la Provincia, en todos los niveles y años, principalmente en la escolaridad obligatoria;
f) realización de instancias de capacitación gratuita y en servicio continua como factor clave de las prácticas docentes; y
g) provisión de los recursos materiales, humanos y tecnológicos necesarios para garantizar una educación de calidad, priorizando aquellas instituciones que atienden a estudiantes en situaciones sociales desfavorecidas y con necesidades especiales de aprendizaje o entorno institucional.

Artículo 125.- Las autoridades jurisdiccionales adoptarán las medidas necesarias para garantizar el acceso y la permanencia en la institución educativa de las y los estudiantes en condición de maternidad o paternidad, evitando cualquier forma de discriminación que los afecte, en concordancia con el artículo 17 de la Ley nacional 26.061, lo establecido en la Ley provincial 953 y las normas vigentes referidas al tema.

Artículo 126.- La autoridad de aplicación promueve la inclusión de niños, niñas, adolescentes y jóvenes no escolarizados en espacios escolares no formales como tránsito hacia procesos de reinserción escolar plenos, y participará de las acciones preventivas dirigidas a la

erradicación del trabajo infantil que implementen los organismos competentes. Llevará un registro único con el objeto de detectar la población no escolarizada y de esta manera colaborar con el proceso de reinserción escolar.
Artículo 127.- Las autoridades educativas deben participar del desarrollo de sistemas locales de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, establecidos por la Ley nacional 26.061, Ley provincial 521 y la Ley provincial 48, con la cooperación de organismos gubernamentales y no gubernamentales y otras organizaciones sociales.

Título IX
La Calidad de la Educación, de la Información y de la Evaluación del Sistema Educativo Provincial

Capítulo I
La Calidad de la Educación

Artículo 128.- El Estado provincial garantizará las condiciones materiales y culturales y atenderá a las necesidades especiales de aprendizaje y/o entorno institucional, para que los estudiantes logren aprendizajes comunes de calidad, cualquiera sea su situación social, radicación geográfica, género o identidad cultural.
Artículo 129. – La autoridad de aplicación establece los contenidos curriculares acordes a sus realidades sociales, culturales y productivas, y promueve la definición de proyectos institucionales que permitan a las instituciones educativas postular sus propios desarrollos curriculares, en el marco de los objetivos y pautas comunes definidas por la presente ley, teniendo en cuenta los principios de la creatividad, autonomía y libertad propios de la vocación y profesión docente.
Artículo 130.- Forman parte de los contenidos curriculares provinciales:

a) el fortalecimiento de la perspectiva regional latinoamericana, particularmente de la región del Mercosur, Unasur y CELAC, en el marco de la construcción de una identidad nacional, regional y provincial abierta, con autonomía, libertad, alteridad e integración social y respetuosa de la diversidad. Fortaleciendo la perspectiva económica, social, ambiental y regional latinoamericana, con especial referencia al Área Exclusiva Aduanera que rige en la Provincia, en el marco de la construcción de una identidad nacional, regional y provincial;
b) la causa de la soberanía territorial, política, económica y social de nuestra provincia y nación, en particular de la recuperación de nuestras Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, de acuerdo con lo prescripto en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y de la Constitución Provincial;
c) el ejercicio y construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos que quebraron el orden constitucional y terminaron instaurando el Terrorismo de Estado, con el objeto de generar en los estudiantes reflexiones y sentimientos democráticos, de defensa del Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos, en concordancia con lo dispuesto por la Ley nacional 25.633 y demás normas vigentes;
d) el conocimiento de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley nacional 26.061, la Ley provincial 521 y de las normas legales vigentes;
e) el conocimiento y respeto de la diversidad cultural de los pueblos originarios Haush, Onas, Yaganes y sus descendientes, de sus derechos y las políticas de genocidio planificado de las que fueron víctimas, en concordancia con los fines y garantías de la presente;
f) los contenidos y enfoques que contribuyan a generar relaciones basadas en la igualdad, solidaridad y respeto de género, en concordancia con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, con

rango constitucional, y las Leyes nacionales 24.632, 26.150, 26.171 y normas vigentes;

g) el conocimiento y fortalecimiento de la perspectiva económica, social, ambiental y regional latinoamericana, del Área Exclusiva Aduanera y la Ley nacional 19.640, en el marco de la construcción de una identidad nacional, regional y provincial.

Artículo 131.- El acceso y dominio de las tecnologías de la información y la comunicación formarán parte de los contenidos curriculares indispensables para la inclusión en la sociedad del conocimiento, se rige través de los principios de multiplicidad de accesos, libertad de publicación y derecho a la privacidad en el gobierno de Internet. La autoridad de aplicación dispondrá, gradualmente, la conectividad tecnológica y de comunicación digital para todas las instituciones escolares, diseñarán políticas y estrategias para la capacitación de los docentes.

Artículo 132.- El Ministerio de Educación promoverá, en forma concordante con el Consejo Federal de Educación, la incorporación de los principios y valores del cooperativismo y del mutualismo en los procesos de enseñanza-aprendizaje, la capacitación docente correspondiente y los modelos de gestión de las instituciones educativas en concordancia con los principios y valores establecidos en la Ley nacional 16.583 de Educación Cooperativa y sus reglamentaciones. Promoverá el cooperativismo y mutualismo escolar.

Capítulo II
Información y Evaluación del Sistema Educativo Provincial

Artículo 133.- El Ministerio de Educación tendrá la responsabilidad principal en el desarrollo e implementación de una política de información y evaluación continua y periódica del Sistema Educativo para la toma de decisiones tendiente a su mejoramiento, en base a los principios de la justicia social, la igualdad de oportunidades, la promoción de los sectores más vulnerables, la transparencia y la participación social.

Artículo 134.- La evaluación del sistema educativo será periódica y sistemática, considerándosela un elemento esencial de información, permitiendo adecuaciones y modificaciones para la mejora del sistema, atendiendo la complejidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Artículo 135.- Serán objeto de evaluación los datos obtenidos de las diferentes instancias evaluativas tales como cobertura, repetición, deserción, egreso, promoción, sobre edad, origen socioeconómico, inversiones y costos, los procesos y logros de aprendizaje y de evolución emocional, los proyectos y programas educativos, la formación y las prácticas de docentes, directivos y supervisores, las unidades escolares, los contextos socioculturales del aprendizaje y los propios métodos de evaluación, en la búsqueda de la igualdad educativa y la mejora de la calidad.

Artículo 136.- Créase en el ámbito del Ministerio de Educación un Observatorio de Información y Evaluación Educativa (OIEE).

Artículo 137.- Es responsabilidad del OIEE la implementación de Informes Anuales de Diagnóstico sobre el Sistema Educativo, que serán de carácter público y deberán ser presentados en la Legislatura provincial coincidentes con el inicio del proceso de elaboración del presupuesto provincial.

Artículo 138.- EL OIEE contará con autonomía presupuestaria y funcional. Su directorio estará compuesto por un (1) presidente, que será el Ministro o un representante designado, junto a representantes de la Legislatura Provincial, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, los gremios docentes y el cuerpo de supervisores de la Provincia.

Artículo 139.- El OIEE tendrá las siguientes funciones:

a) promover una cultura evaluativa en todos los actores del Sistema Educativo Provincial, como mecanismo clave para mejorar la educación;

b) participar del diseño y desarrollo de las políticas nacionales en materia de información y evaluación de la educación y contextualizar su aplicación en la realidad provincial;

c) producir y difundir información relevante sobre las principales variables del

funcionamiento del Sistema Educativo Provincial;

d) promover procesos de evaluación participativos y colaborativos, que posibiliten la apropiación fecunda de la información resultante por parte de los supervisores, directivos, docentes y de todos los demás actores de la comunidad educativa;
e) brindar interpretaciones y valoraciones relevantes que contribuyan a la toma de decisiones de autoridades, supervisores, directivos y docentes con respecto a planes y programas de mejora, estrategias de enseñanza, capacitación docente, asistencia técnico pedagógico y estructuras organizativas;
f) brindar los instrumentos y las orientaciones necesarias para la autoevaluación de las instituciones educativas;
g) elaborar recomendaciones orientadas al mejoramiento de la calidad educativa, en base a la valoración de la información resultante de las evaluaciones; y
h) desarrollar investigaciones educativas que contribuyan a la mejora continua del Sistema Educativo Provincial.

Artículo 140.- La autoridad de aplicación dispondrá de las estructuras y recursos necesarios para la recolección, procesamiento, organización y difusión de la información estadística y su permanente actualización. Los equipos de conducción de las instituciones educativas son responsables de brindar información requerida por los organismos competentes.

Artículo 141.- La autoridad de aplicación hará públicos los datos e indicadores que contribuyan a facilitar la transparencia, la buena gestión de la educación y la investigación educativa. La política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de estudiantes, docentes e instituciones educativas a fin de evitar cualquier forma de estigmatización en el marco de la legislación vigente.

Artículo 142.- Los equipos de conducción de las instituciones educativas en colaboración con el equipo técnico de la autoridad de aplicación, serán responsables de analizar los resultados de las evaluaciones, de informar a la comunidad y de elaborar junto con los equipos docentes, las estrategias y planes orientados al mejoramiento continuo de la calidad educativa de su institución, con el fin de promover la igualdad de oportunidades.

Título X
Educación, Nuevas Tecnologías y Medios de Comunicación

Artículo 143.- El Poder Ejecutivo, a través de la autoridad de aplicación, fijará la política y desarrollará opciones educativas basadas en el uso de las tecnologías de la información y de los medios masivos de comunicación social de acuerdo a la Ley nacional 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisuales, que colaboren con el cumplimiento de los fines y objetivos de la presente, pudiendo elaborar, consensuar, desarrollar, contratar, administrar, calificar y evaluar contenidos propios y de terceros que serán incluidos en el portal educativo nacional, en los canales oficiales de la Provincia, en el portal educativo provincial y a través de los medios que considere pertinente.

Artículo 144.- El Ministerio de Educación realizará convenios con representantes de los medios de comunicación nacionales y provinciales, escritos, radiales, televisivos y tecnológicos, con el objeto de promover mayores niveles de responsabilidad y compromiso de los medios masivos de comunicación con la tarea educativa de los estudiantes de la Provincia.

Artículo 145.- El Ministerio de Educación apoyará y facilitará la emisión y el acceso a los programas televisivos, herramientas multimediales y tecnológicas para fortalecer y complementar estrategias nacionales o provinciales de mejoramiento de la educación. Los mismos estarán dirigidos a:

a) docentes de todos los niveles, modalidades y especialidades del Sistema Educativo Provincial, con fines de capacitación y actualización profesional;
b) estudiantes, con el objeto de enriquecer el trabajo en el aula con metodologías innovadoras y como espacio de búsqueda y ampliación de los contenidos curriculares desarrollados en el ámbito escolar; y

c) adultos y jóvenes que están fuera del Sistema Educativo Provincial, a través de propuestas de formación profesional técnica, alfabetización y finalización de la Educación Primaria y Secundaria, con el objeto de incorporar, mediante la aplicación de nuevos procesos educativos, a sectores sociales excluidos.

Título XI

Capítulo I
Gobierno y Administración del Sistema Educativo Provincial

Artículo 146.- El gobierno y administración del Sistema Educativo es una responsabilidad del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación, como Órgano de Aplicación quien diseña, implementa, evalúa y desarrolla las políticas educativas de acuerdo con los lineamientos de la presente ley conforme a los criterios constitucionales de unidad nacional y federalismo.

Artículo 147.- Los criterios del Gobierno y la Administración del Sistema Educativo Provincial son:

a) la educación y el conocimiento como una política de Estado que se construirá pública, participativa y democráticamente;
b) la unidad normativa, a fin de consolidar la unicidad del Sistema Educativo Provincial;
c) la diversidad operativa, en cuanto a la organización de las Instituciones Educativas, a fin de favorecer la descentralización;
d) la participación articulada e intersectorial, a fin de facilitar la democratización;
e) la equidad, a fin de promover una educación de calidad para todos los habitantes; y
f) la transformación e innovación para introducir los cambios necesarios en lo técnico pedagógico, en la organización, administración y gestión del Sistema Educativo Provincial.

Capítulo II
Funciones y Conducción del Ministerio de Educación

Artículo 148.- Al Ministerio de Educación le compete asistir al Poder Ejecutivo en todo lo inherente a la educación como dimensión fundamental de todo proyecto sociocultural, político y económico. Sus funciones son las siguientes:

a) asegurar el derecho a la educación en toda la Provincia, cumplir y hacer cumplir la Ley nacional 26.206, la presente ley, adecuar la normativa jurisdiccional y disponer las medidas para su aplicación;
b) garantizar el cumplimiento de los principios, fines y objetivos establecidos en la presente norma, conforme a los criterios representativos y democráticos previstos en nuestra Constitución Provincial y la Ley de Educación nacional 26.206;
c) gestionar, planificar, organizar, administrar y financiar el Sistema Educativo Provincial;
d) concertar la política educativa en el marco del Consejo Federal de Educación;
e) elaborar, actualizar y aprobar los diseños curriculares de los diversos niveles, modalidades, especialidades, orientaciones y regímenes especiales de la Provincia, en el marco de los acuerdos del Consejo Federal de Educación;
f) planificar, organizar, gestionar y supervisar el Sistema Provincial de Evaluación de la Calidad de la Educación;
g) organizar, supervisar y brindar asistencia técnico pedagógica a las instituciones educativas de toda la Provincia;
h) crear y reestructurar instituciones educativas, conforme a las necesidades y exigencias del Sistema Educativo Provincial y determinar anualmente el reordenamiento de las plantas orgánicas funcionales conforme a la demanda

educativa;
i) disponer la intervención de las unidades escolares en los casos de crisis institucional, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación;
j) autorizar, reconocer, supervisar y realizar los aportes correspondientes a las instituciones educativas públicas de gestión privada que cumplan con los requisitos de la presente y lo establecido en las leyes vigentes;
k) brindar información periódica a la sociedad acerca del progreso de las políticas educativas y en ejecución;
l) expedir títulos y certificaciones de estudios y dictar normas sobre equivalencias de títulos y de estudios, conforme a lo estipulado en el Consejo Federal de Educación;
m) participar del Consejo Federal de Educación, con el fin de resguardar la unidad del Sistema Educativo Nacional y Provincial;
n) favorecer la descentralización de la gestión pedagógica, administrativa y financiera del Sistema Educativo Provincial, resguardando el principio de unidad normativa;
ñ) mantener un sistema de información presupuestario que permita la previsión y la administración eficiente de los recursos humanos, físicos y financieros;
o) planificar y ejecutar los proyectos de infraestructura escolar y los programas que favorezcan la igualdad educativa, con el fin de garantizar las condiciones edilicias e higiénicas necesarias;
p) establecer y proponer becas, entrega de materiales didácticos y todo lo que coadyuve a lograr la universalización de la educación obligatoria;
q) articular políticas concurrentes con otras áreas del gobierno provincial para posibilitar la universalización del ejercicio del derecho social a la educación;
r) articular la Política Educativa con las Universidades Nacionales y extranjeras;
s) promover la articulación del Sistema Educativo y Productivo de la Provincia;
t) organizar, gestionar y hacer cumplir las normas de la carrera docente, desarrollando y garantizando programas de investigación, capacitación e innovación educativa, por iniciativa propia o en cooperación con las instituciones de educación superior y otros centros académicos;
u) brindar a los equipos docentes espacios institucionales para desarrollar sus proyectos educativos;
v) organizar, actualizar y gestionar el sistema de información estadística del Sistema Educativo Provincial; y
w) presentar, anualmente, un informe sobre su gestión y otro al finalizar la misma, al Consejo de Educación, quien lo remitirá a la Legislatura para su conocimiento.

Capítulo III
Financiamiento del Sistema Educativo Provincial

Artículo 149.- El gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur garantizará, en su presupuesto anual, los recursos para sostener las políticas de mejora en la calidad de la enseñanza en todos los niveles, modalidades y orientaciones; así como la creación de cargos y horas cátedra, la actualización profesional, la capacitación docente, la vinculación de la formación con los procesos productivos, el fortalecimiento de la investigación educativa y científico tecnológica, el programa de actividades artísticas y culturales, así como también todos aquellos programas específicos de interés provincial, que impliquen apoyos e incentivos, a los estudiantes que integran el Sistema Educativo Provincial. El presupuesto general de la Provincia garantizará los recursos que hagan viable la realización de un plan de construcciones de infraestructura escolar; mantenimiento, ampliación y refacción de edificios e instalaciones escolares existentes, provisión de equipamiento, mobiliarios, recursos didácticos, libros y útiles escolares; como también, las previsiones presupuestarias de recursos que aseguren la igualdad de oportunidades de aprendizaje.
Artículo 150.- Serán consideradas como fuentes de financiamiento del Sistema Educativo Provincial las siguientes:

a) los recursos de Rentas Generales;
b) los recursos que con destino específico dispongan leyes especiales nacionales y/o provinciales;
c) los créditos y/o aportes provenientes de organismos financieros o de cooperación, nacionales o internacionales, destinados a educación;
d) las donaciones, legados y/o aportes recibidos por el Estado sin otros fines específicos;
e) las herencias vacantes;
f) el producido de servicios e investigaciones, o por la transferencia de tecnología; y
g) los fondos obtenidos de fuentes no previstas ajustadas a los principios de la Constitución Provincial y a los de la presente ley.

Artículo 151.- La inversión en el sistema educativo por parte del Estado provincial no podrá ser inferior al treinta y cinco por ciento (35%) del total de los recursos corrientes de libre disponibilidad de la Administración Central, netos de coparticipación a municipios y Contribuciones Figurativas de Poderes y organismos de Control.

Título XII
El Consejo de Educación

Artículo 152.- Créase el Consejo de Educación Provincial, como un órgano consultivo orientado a cooperar y asesorar al Ministro de Educación sobre diferentes aspectos de la Política Educativa Provincial, en un ámbito participativo, cuya intervención será exclusivamente en materia educacional.
Sus funciones son:

a) analizar y proponer estrategias de mejora del servicio educativo, cuya aplicación es facultad de la autoridad de aplicación de la presente ley;
b) evaluar y consensuar necesidades de expansión del Sistema Educativo Provincial, y de creación y localización de nuevas instituciones educativas conforme a las necesidades de la población;
c) analizar y avalar las definiciones presupuestarias que garanticen el normal funcionamiento del sistema educativo provincial.

Artículo 153.- El Poder Ejecutivo será el encargado de reglamentar la composición, los requisitos, la duración y el sistema electoral para la elección de los integrantes del Consejo de Educación.
Artículo 154.- El Consejo de Educación dictará su reglamento interno.
Artículo 155.- El Consejo de Educación tendrá tres (3) sesiones en el año, una al inicio del ciclo lectivo, la segunda antes del receso escolar de invierno y la tercera al finalizar el ciclo escolar.
Artículo 156.- El Consejo de Educación elevará a la Legislatura provincial y a las unidades de gestión del Sistema Educativo, un informe anual y otro al término de su gestión.

Título XIII
Disposiciones Generales

Artículo 157.- La enseñanza del idioma inglés será obligatoria en todas las instituciones de nivel Secundario de la Provincia. En el Nivel Primario, se incorporará, gradualmente, hasta completar los tres (3) últimos años de escolaridad. Las estrategias y los plazos de implementación de esta disposición serán fijados por la autoridad de aplicación de la presente ley.
Artículo 158.- El Ministerio de Educación en su carácter de autoridad de aplicación de la presente ley y a todos sus efectos, establecerá:

a) el calendario de implementación de la nueva estructura del Sistema Educativo Provincial;
b) la definición e implementación de procedimientos de auditoría eficientes que

garanticen la utilización de los recursos destinados a educación en la forma prevista; para lo que se deberá crear un organismo de fiscalización del ausentismo docente, cuya composición y funciones serán reglamentadas por el Poder Ejecutivo, y

c) los criterios organizativos, los modelos pedagógicos y demás disposiciones necesarias para el proceso de implementación de la doble escolaridad, la jornada extendida o la jornada completa, según corresponda, de manera gradual, otorgando prioridad a los sectores más desfavorecidos y garantizando los recursos destinados a tal fin.

Artículo 159.- La autoridad de aplicación de la presente implementará las estrategias y dispondrá de los recursos que permitan lograr gradualmente la conectividad tecnológica y de comunicación digital para todas las instituciones educativas de la Provincia propiciando las políticas, procedimientos y normativas que aseguren la accesibilidad libre al equipamiento y a las aplicaciones de programación informática.

Artículo 160.- Derógase la Ley provincial 159 y sus modificatorias.

Artículo 161.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- 29 -

Asunto Nº 509/14

Artículo 1º.- Establécese en el ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur la prevención y control de los trastornos alimentarios y sus enfermedades relacionadas, que comprenderá la investigación de sus agentes causales, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades vinculadas, asistencia integral y rehabilitación, incluyendo la de sus patologías derivadas, y las medidas tendientes a evitar su propagación.

Artículo 2º.- Entiéndese por trastornos alimentarios, a los efectos de esta ley a la obesidad, bulimia, anorexia nerviosa y demás enfermedades que la reglamentación determine, relacionadas con inadecuadas formas de ingesta alimenticia.

Denomínase, en forma no taxativa, como enfermedades relacionadas con la inadecuada forma de ingesta alimenticia a la diabetes, a las enfermedades cardiovasculares, al síndrome metabólico, a las dislipemias y a la hipertensión arterial.

Artículo 3º.- Créase el Programa Provincial de Prevención y Control de los Trastornos Alimentarios en el ámbito del Ministerio de Salud, que tendrá por objeto:

a) prevenir los trastornos de conducta alimentaria, garantizando el acceso de la población a los sistemas de salud disponibles, dotando a dichos sistemas de los medios adecuados para satisfacer los requerimientos de esta problemática;
b) instrumentar campañas informativas relativas a los trastornos alimentarios, en particular:
   1. sobre las características de los mismos y de sus consecuencias;
   2. sobre sus aspectos clínicos, nutricionales, psicológicos y sociales y de las formas apropiadas e inapropiadas de su tratamiento;
   3. sobre el derecho y promoción de la salud, y sobre los derechos del consumidor;
   4. sobre los deberes y responsabilidades de los productores, comerciantes y expendedores de alimentos;
c) disminuir la morbimortalidad asociada con estas enfermedades;
d) formular normas para la evaluación y control contra los trastornos alimentarios;
e) formular normas para la prevención y detección de las enfermedades vinculadas a la alimentación;
f) propender al desarrollo de actividades de investigación;
g) efectuar relevamientos epidemiológicos periódicos;
h) promover, especialmente entre los niños y adolescentes, conductas nutricionales saludables;
i) promover en la comunidad espacios de reflexión y educación para contención de

quienes padecen estas enfermedades;

j) proponer acciones tendientes a eliminar la discriminación y la estigmatización en el ámbito laboral, educacional y/o social, frente al padecimiento de los trastornos alimentarios y sus enfermedades vinculadas;
k) formular normas destinadas a la detección temprana de trastornos alimentarios y sus enfermedades vinculadas en el ámbito laboral, las que incluirán como mínimo un examen médicos anual;
l) promover la participación de organizaciones no gubernamentales (ONG) en las acciones previstas por el presente Programa;
m) desarrollar actividades de difusión, televisivas, radiales y gráficas, dirigidas a la población en general y a grupos de riesgo en particular, a fin de concientizar sobre los riesgos en la salud que ocasionan las dietas sin control médico y de instruir a la población sobre hábitos alimentarios saludables y adecuados a cada etapa de crecimiento;
n) promover la capacitación de profesionales y técnicos de la salud para optimizar su desempeño en la prevención y control de estas patologías;
ñ) elaborar periódicamente un mapa sanitario epidemiológico y un informe respecto a esta problemática;
o) desarrollar sistemas estadísticos en toda la Provincia a fin de disponer oportunamente de la información necesaria para detectar grupos de personas vulnerables, avance de las acciones instrumentadas y metas alcanzadas; y
p) realizar toda otra acción conducente al logro de los objetivos del presente Programa.

Artículo 4º.- La autoridad de aplicación dispondrá las medidas necesarias para que en cada una de las ciudades funcione al menos un (1) sector especializado en trastornos alimentarios y sus enfermedades vinculadas.

Artículo 5º.- La detección, tratamiento, rehabilitación y seguimiento de los trastornos alimentarios deberá ser realizado por un equipo multidisciplinario, tales como médicos clínicos, cirujanos, nutricionistas, psicólogos y aquellos que la autoridad de aplicación estime pertinente.

Articulo 6º.- El Ministerio de Salud coordinará con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, Subsecretarias y Direcciones de niveles la implementación de las siguientes acciones:

a) la incorporación de la Educación Alimentaria Nutricional (EAN) en el sistema educativo en todos sus niveles, como así también de medidas que fomenten la actividad física y eviten el sedentarismo, y la promoción de un ambiente escolar saludable;
b) la capacitación de educadores, trabajadores sociales, trabajadores de la salud y demás operadores comunitarios a fin de formar agentes aptos para:
    1. contribuir a la capacitación, perfeccionamiento y actualización de conocimientos básicos sobre la problemática alimentaria;
    2. detectar adecuadamente las situaciones de vulnerabilidad y promover acciones y estrategias para abordarlas a través de una adecuada orientación o derivación;
c) la realización de talleres y reuniones para dar a conocer a los padres cuestiones relativas a la prevención de los trastornos alimentarios, y los peligros de los estilos de vida no saludables; y
d) el desarrollo de estándares provinciales para garantizar que los planes alimentarios cumplan con los aspectos nutricionales adecuados para la población.

Artículo 7º.- El Ministerio de Salud auspiciará actos, seminarios, talleres, conferencias, certámenes y programas de difusión, que contribuyan al conocimiento de los problemas que traen aparejado los diferentes trastornos alimentarios, y las formas de prevención.

Artículo 8º.- El Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social, desarrollará:

a) estándares alimentarios para garantizar que los comedores escolares y los planes alimentarios provinciales velen por los aspectos nutricionales de la población atendida, poniendo especial énfasis en la corrección de las deficiencias o excesos de nutrientes, atendiendo las particularidades de la cultura alimentaria local;
b) la capacitación de trabajadores sociales y demás operadores comunitarios a fin de formar personal apto para contribuir con el perfeccionamiento y actualización de conocimientos básicos sobre la problemática alimentaria; y
c) la detección de situaciones de vulnerabilidad y promoción de acciones y estrategias para abordarlas a través de una adecuada orientación o derivación.

Artículo 9º.- Los quioscos y demás establecimientos de expendio de alimentos dentro de los establecimientos escolares deberán ofrecer únicamente productos que integren una alimentación saludable y variada, conforme a la Ley provincial 900, debiendo estar los mismos debidamente exhibidos.

Artículo 10.- La autoridad de aplicación deberá tomar medidas a fin de que la exhibición en los locales comerciales, los anuncios publicitarios, y los diseñadores de moda, no utilicen la extrema delgadez como símbolo de salud o belleza, y ofrezcan una imagen saludable de los jóvenes, en particular de las mujeres.

Artículo 11.- Prohíbase la publicación o difusión en medios de comunicación de dietas o métodos para adelgazar que no conlleven el aval de un médico o licenciado en nutrición.

Artículo 12.- El Ministerio de Salud deberá requerir al responsable del producto alimentario publicitado o promocionado, la comprobación técnica de las aseveraciones que realice en el mismo, sobre la calidad, origen, pureza, conservación, propiedades nutritivas y beneficio de empleo de los productos publicitados.

Artículo 13.- Los anuncios publicitarios en medios masivos de comunicación de productos para bajar de peso, deberán dirigirse, exclusivamente a mayores de dieciocho (18) años de edad, debiendo ser protagonizados también por personas mayores de edad.

Artículo 14.- Incorpórase en el Programa Médico Obligatorio, la cobertura del tratamiento integral de los trastornos alimentarios según las especificaciones que a tal efecto dicte la autoridad de aplicación.

Artículo 15.- La cobertura que deberán brindar todas las obras sociales y asociaciones de obras sociales del Sistema Nacional incluidas en la Ley nacional 23.660, recipiendarias del fondo de redistribución de la Ley nacional 23.661, el Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (IPAUSS), las demás obras sociales y organismos, creados o regidos por leyes nacionales o provinciales, y las empresas o entidades que presten servicios de medicina prepaga, conforme a lo establecido en la Ley nacional 24.754, incluirá los tratamientos médicos necesarios, incluyendo los nutricionales, psicológicos, clínicos, quirúrgicos, farmacológicos y todas las prácticas médicas necesarias para una atención multidisciplinaria e integral de las enfermedades.

Artículo 16.- Los proveedores de bienes o servicios con destino al público en general, no podrán negarse, ante el requerimiento de una persona obesa, a proporcionar el bien o servicio solicitado, en las condiciones que al respecto establezca el Poder Ejecutivo.

Tal negativa será considerada acto discriminatorio en los términos de la Ley nacional 23.592.

Artículo 17.- El Poder Ejecutivo dispondrá las medidas necesarias a fin de que los establecimientos educacionales y sanitarios de su jurisdicción, cuenten con las comodidades y el equipamiento adecuado para el uso y asistencia de las personas que padecen obesidad.

Artículo 18.- Todas las instituciones de atención médica, públicas y privadas, deberán llevar un registro estadístico de pacientes con trastornos alimentarios y de las enfermedades crónicas relacionadas. A tal efecto la autoridad de aplicación confeccionará los formularios de recolección y registro.

La autoridad de aplicación elaborará periódicamente un mapa sanitario epidemiológico y un informe sobre las acciones llevadas a cabo a nivel provincial. También se informará de los adelantos e investigaciones que sobre las enfermedades se estuvieren llevando a cabo a nivel oficial o con becas oficiales.

Artículo 19.- La autoridad de aplicación deberá fiscalizar periódicamente el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley. Asimismo dispondrá de una línea telefónica gratuita a fin de informar los alcances de la presente ley y recepcionar denuncias.
Artículo 20.- La autoridad de aplicación remitirá anualmente a la Comisión de Salud de la Cámara Legislativa un informe detallado sobre el desarrollo y proyección del Programa Provincial a fin de evaluar la correcta efectividad y operatividad del mismo.
Artículo 21.- El Poder Ejecutivo realizará las modificaciones presupuestarias pertinentes a los fines del cumplimiento de la presente.
Artículo 22.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los sesenta (60) días de su promulgación.
Artículo 23.- Derógase toda norma que se oponga a la presente ley.
Artículo 24.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- 30 -

Asunto Nº 474/14

Creación Del Sistema Provincial de Acogimiento Familiar

Capítulo I
Del Sistema Provincial de Acogimiento

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene por objeto crear el Sistema Provincial de Acogimiento Familiar de la Provincia de Tierra del Fuego, en el marco de la Ley nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley provincial 521 Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y sus Familias.
Artículo 2°.- Fines. El Sistema Provincial de Acogimiento Familiar tendrá a su cargo el cumplimiento de la medida excepcional de protección, sea jurídica o administrativa, previstas en los artículos 39, 40 y 41 de la Ley nacional 26.061 y artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley provincial 521, así como también los artículos correspondientes de sus decretos reglamentarios.
Artículo 3°.- Interés Superior. En acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño (CIDN) y las leyes mencionadas precedentemente que rigen en el territorio provincial, y ante las distintas situaciones que en el marco del acogimiento familiar se susciten será de consideración primordial de niños, niñas y adolescentes el interés superior de los mismos.
Artículo 4°.- Derecho a la convivencia familiar y comunitaria. El Sistema de Acogimiento Familiar creado en el territorio provincial vela por el estricto cumplimiento del derecho a la convivencia familiar y comunitaria. En cumplimiento de este derecho, se instará a las instituciones que conforman dicho sistema a evitar por todos los medios la institucionalización de niños, niñas y adolescentes, siempre que los profesionales intervinientes no evalúen lo contrario.
Artículo 5°.- Derecho a la Identidad. El Sistema de Acogimiento Familiar respeta y vela por el estricto cumplimiento del derecho a la identidad de los niños, niñas y adolescentes. En cumplimiento de este derecho se promoverá por todos los medios el regreso de los niños, niñas y adolescentes con sus progenitores, el acogimiento en familia extensa cuando ello no fuera posible, o la vinculación permanente con la familia biológica, siempre que los profesionales intervinientes no evalúen lo contrario.
Artículo 6°.- Definición. Se entiende por acogimiento familiar al cuidado integral, temporal y no institucional brindado por un grupo familiar cuando un niño, niña o adolescente se encuentre privado de los cuidados de su grupo familiar de origen o cuando se haya dispuesto como medida excepcional de protección.
El acogimiento familiar no crea parentesco alguno entre acogedores y acogidos, no forma parte del proceso de adopción y preserva los derechos de la familia de origen.

Artículo 7°.- Actores. El Sistema de Acogimiento Familiar comprende a todos los actores e instituciones que forman parte del sistema de protección y que despliegan sus recursos y saberes en pos de cumplir con los principios protectorios de la presente ley cuando se hubiese dictado una medida excepcional de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Artículo 8°.- Acceso. El ingreso al Sistema Provincial de Acogimiento Familiar puede responder a:

a) la existencia de medida judicial o administrativa, dispuesta por autoridad competente, en orden a la preservación de los derechos de los beneficiarios definidos en el artículo 9°, que puedan ser afectados por situaciones presentes en su ámbito doméstico;
b) pedido de ingreso al Sistema por parte de la familia del niño, niña y adolescente; y
c) pedido de ingreso al sistema por parte de las personas establecidas en el artículo 9°.

Artículo 9°.- Beneficiarios. Son beneficiarios del Sistema Provincial de Acogimiento Familiar todos aquellos niños, niñas y adolescentes desde su nacimiento hasta los dieciocho (18) años de edad residentes en esta provincia, que se encuentren privados de forma temporaria o permanente de su grupo familiar de pertenencia, exista medida judicial o administrativa con causas o motivos suficientes para ordenar la separación de su medio familiar.
En todos los casos, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser escuchados antes de ser propuestos para el régimen de acogimiento familiar.

Capítulo II
De la Familia de Acogimiento

Artículo 10.- La familia acogedora. Se entiende por familia acogedora a aquella evaluada, formada y seleccionada por el organismo estatal competente, que dispone a recibir en su hogar a un niño, niña o adolescente, miembro de una familia que, en forma temporal, no pueda garantizar su desarrollo integral. Se evaluará de la familia acogedora la capacidad de cuidado, las motivaciones personales para hacerlo y las condiciones socio-afectivas que brindarán a los niños, niñas y adolescentes de los que se responsabilizaren.
Artículo 11.- Funciones. Las familias de acogimiento tienen la función primordial de cuidar al niño, niña o adolescente garantizando la totalidad de sus derechos, adquiriendo éstos la obligación de ofrecer un ambiente familiar que le proporcione cuidado, alimentación, educación y formación integral, con el fin de integrarlo a una vida familiar que complemente temporalmente a la familia de origen.
Artículo 12.- Evaluación. La familia postulante para acogimiento familiar deberá ser estrictamente evaluada por la autoridad de aplicación. Dicha evaluación considerará los aspectos psicológicos, sociales, relacionales, económicos, ambientales, de interés y motivaciones de los adultos que se involucrarán en los cuidados. En cuanto a los miembros menores se deberá evaluar, en la medida que su desarrollo lo permita, su percepción acerca de la tarea de acogimiento a la que se comprometerá su familia.
Artículo 13.- Capacitación. La familia postulante deberá percibir una capacitación previa a la incorporación de un niño, niña o adolescente a su hogar. Dicha capacitación estará a cargo de la autoridad de aplicación. Asimismo se brindará acompañamiento continuo acerca de los diversos aspectos que se ponen en juego en el acogimiento familiar.
Artículo 14.- Principio de Prioridad. El acogimiento puede ser otorgado en orden de prioridad a:

a) personas o grupos familiares vinculados con el niño, niña o adolescente a través de líneas de parentesco, por consanguinidad o por afinidad;
b) personas o grupos familiares miembros de la familia ampliada del niño, niña o adolescente; y
c) personas o grupos familiares de la comunidad que reúnan las aptitudes y formación necesarias para constituirse en familia de acogimiento dando prioridad a

aquellos que formen parte de la red de relaciones comunitarias y de lazos sociales del niño, niña o adolescente.

Artículo 15.- Excepción. Para el caso en que la familia acogedora del niño cuente con la guarda provisoria emitida por el juzgado competente, queda a criterio de la autoridad de aplicación la incorporación de la familia a este sistema.

Artículo 16.- Exclusiones. No puede incluirse en el Sistema provincial de Acogimiento Familiar a aquellas personas que:

a) hayan sido condenadas por delitos dolosos en contra de la vida o la integridad sexual, previstos en la legislación penal o hayan sido condenadas por reincidencia respecto de otros delitos;
b) hayan sido sancionadas con pérdida de la patria potestad o removidas por mal desempeño de tutela, curatela o guarda;
c) registren denuncias por actos de violencia familiar o violencia de género;
d) registren incumplimiento en sus obligaciones en materia alimentaria; y
e) registren incumplimientos en el régimen de visitas.

Artículo 17.- Responsabilidades. Las familias que se incorporen al Sistema Provincial de Acogimiento Familiar deberán:

a) cuidar que el niño, niña o adolescente se encuentre en adecuadas condiciones de vida garantizando especialmente su salud, equilibrio emocional, hábitat, vestimenta, higiene, educación y esparcimiento, y todos los derechos reconocidos por la normativa vigente;
b) actuar en coordinación con la autoridad de aplicación, los equipos técnicos y la familia de pertenencia del niño, niña o adolescente a fin de fortalecer sus vínculos y favorecer su retorno a la misma; y
c) brindar toda la información que la autoridad de aplicación del proceso de acogimiento y los responsables que ésta determine soliciten en relación a su desempeño y estado del niño, niña o adolescente acogido.

Artículo 18.- Requisitos. La familia de acogimiento debe reunir los siguientes requisitos:

a) personas mayores de veinticinco (25) años de edad cualquiera sea su estado civil;
b) incorporarse y participar del proceso de estudio y valoración;
c) deberán contar con una situación económica estable y una vivienda adecuada;
d) presentar certificado de antecedentes penales expedido por el Registro de Reincidencia;
e) certificado que acredite la no inclusión en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
f) presentar Certificado de Buena Salud;
g) realizar las actividades de capacitación que determine la autoridad de aplicación;
h) residencia en la Provincia no inferior a dos (2) años; e
i) poseer una diferencia mínima de quince (15) años con el niño, niña o adolescente.

Artículo 19.- Límite. La familia de acogimiento puede tener a cargo hasta dos (2) niños, niñas o adolescentes por proceso. Se exceptúan aquellos casos en los que el grupo a acoger esté conformado por tres (3) o más hermanos o previos convivientes.

Artículo 20.- Cese. El Sistema Provincial de Acogimiento Familiar cesa por las siguientes causas:

a) resolución judicial;
b) resolución administrativa;
c) decisión de las personas que lo ejercen, previa comunicación a la entidad pública; y
d) a petición del menor de edad, comunicado fehacientemente a la autoridad judicial o administrativa que corresponde.

En todos los casos, el menor sólo regresará a su familia de origen cuando las circunstancias que motivaron el ingreso del menor al Sistema Provincial de Acogimiento Familiar hayan cesado, teniendo en cuenta siempre el interés superior del niño.

Artículo 21.- Campañas para la captación y selección de familias. El órgano de aplicación

diagramará e implementará campañas de difusión, información y captación de familias postulantes al acogimiento familiar de forma permanente en todo el territorio provincial, en medios de comunicación de alcance provincial o local cuya continuidad de emisión no podrá ser interrumpida.

Capítulo III
De la Familia Biológica

Artículo 22.- Propuesta terapéutica. El acogimiento familiar es una medida de protección excepcional de derechos para los niños, niñas y adolescentes; y una propuesta terapéutica para sus progenitores o persona que haya estado a su cuidado tendiente a revertir las circunstancias o condiciones que dieron lugar a la medida. La autoridad de aplicación deberá ofrecer alternativas terapéuticas suficientes en pos de lograr la restitución.

Artículo 23.- Derecho de Contacto. La autoridad de aplicación dispondrá de los medios necesarios para garantizar el contacto frecuente y sostenido entre los niños, niñas y adolescentes y sus progenitores, hermanos, miembros de la familia extensa o referente familiar con quien tuviesen vínculo afectivo positivo. Sólo en los casos en los que se evalúe como perjudicial y negativo para el interés superior del niño dicho contacto, mediante informe fundado de la autoridad de aplicación se denegarán o suspenderán temporalmente dichos contactos.

Artículo 24.- Restitución. El Sistema Provincial de Acogimiento Familiar se propondrá como objetivo primordial e irrenunciable el retorno de los niños, niñas y adolescentes con su familia de origen, facilitando para ello las instancias terapéuticas necesarias y suficientes. Sólo en situaciones en las que se evaluará imposible o perjudicial la restitución se propondrá otras alternativas de resolución de la medida excepcional, como la adopción o un régimen de vida autónomo, en casos de adolescentes en lo que se evalúe pertinente esta alternativa.

Capítulo IV
De la Autoridad de Aplicación

Artículo 25.- Autoridad de Aplicación. La autoridad de aplicación será la Subsecretaria de Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia o el organismo que en el futuro la reemplace.

Artículo 26.- Obligaciones. Son obligaciones de la autoridad de aplicación:

a) fijar las pautas de funcionamiento del Sistema y su articulación con el Poder Judicial, el Sistema de Promoción de los derechos del niño, los Servicios Locales de Protección de Derechos, las organizaciones de la sociedad civil y todo otro actor que considere relevante en el proceso;
b) determinar el tiempo de acogimiento, en caso de no existir disposición judicial. Su duración debe ser establecida en función del diagnóstico que diera origen al proceso, y entendiendo que la misma debe ser por el mínimo tiempo posible. Este plazo puede ser prorrogado cuando la autoridad competente dictamine, en función de los informes presentados por la entidad de seguimiento, la persistencia de las causas que dieron origen al acogimiento o cuando por motivos fundados, dicho organismo constate la inconveniencia del retorno del niño, niña o adolescente a su hogar;
c) determinar la capacitación, constitución y el ámbito de actuación de los equipos técnicos que tendrán a su cargo la formación, evaluación, selección y contención de las familias intervinientes;
d) diseñar e implementar un sistema de capacitación para la formación y apoyo de los participantes del sistema de acogimiento;
e) gestionar el acuerdo entre la niña, niño o adolescente, la familia de origen y la familia de acogida que habilite el inicio del proceso de acogimiento y en el que consten las finalidades, alcances, derechos, garantías y responsabilidades que se asumen en este proceso;

f) asistir a la niña, niño o adolescente para garantizar la cobertura de sus necesidades básicas a través de la familia de acogida y disponer las medidas necesarias para la atención de la familia de origen;
g) elaborar y llevar actualizado un registro de cada proceso de acogimiento que incluya la documentación requerida así como las evaluaciones, seguimientos y todo otro proceder inherente;
h) preservar la privacidad del niño, niña o adolescente y de las familias participantes; e
i) establecer un sistema de supervisión y controles sistemáticos, con informes que no pueden exceder la frecuencia trimestral y con responsables específicos para cada proceso de acogimiento, que aseguren la disponibilidad permanente de información desde y hacia las niñas, niños y adolescentes y sus familias de origen y de acogida.

Capítulo V
De los Beneficios del Sistema Provincial de Acogimiento Familiar

Artículo 27.- Obra Social. Los beneficiarios definidos en el artículo 9°, incluidos en el Sistema Provincial de Acogimiento Familiar que no posean obra social, deben ser incorporados al Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (IPAUSS).
Artículo 28.- Recurso económico. La familia acogedora, percibirá un subsidio mensual cuyo importe será equivalente al treinta por ciento (30%) del sueldo bruto de la categoría 10 P.A.yT. de un agente de la Administración Pública Provincial, Escalafón Seco, por niño, niña o adolescente a cargo. En caso que la estadía sea menor a un mes el subsidio será en proporción a los días de acogimiento de estos en el seno familiar.

La Familia Acogedora percibirá el subsidio dentro de los treinta (30) días corridos de recibir al niño, niña o adolescente sea que la medida sea dictada por oficio judicial o por el órgano administrativo competente para dicho acto.
Artículo 29.- Licencia especial. Se fijará a favor de la familia acogedora un período de licencia extraordinaria que se otorgará con goce íntegro de haberes, siendo obligatoria su concesión, de quince (15) días corridos a partir del primer día hábil posterior a la fecha de la recepción del menor.

El plazo de licencia se ampliará en cinco (5) días corridos más, cuando el acogimiento sea múltiple por cada menor posterior al primero.

Asimismo se acuerda para la familia acogedora el mismo régimen legal de licencias aplicable para los cuidados de atención al grupo familiar, siempre que el acogimiento sea mediante acto administrativo u oficio judicial.

Este régimen especial de licencias se acuerda para la familia acogedora siempre que el empleador sea notificado de forma fehaciente del acto administrativo u oficio judicial que autoriza el acogimiento.
Artículo 30.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el plazo de noventa (90) días desde su promulgación.
Artículo 31.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- 31 -

Asunto Nº 521/14

Procedimiento Judicial de Proteccion a Víctimas de Violencia Familiar.

Artículo 1º.-Las disposiciones de la presente ley tienen como finalidad prever las medidas de protección judicial para la víctima de violencia familiar y las sanciones para quien la ejerza.
Artículo 2º.- Se entenderá a los fines de la presente ley como violencia familiar a toda acción, omisión o abuso dirigido a dominar, someter, controlar o agredir la integridad física, psíquica,

moral, psicoemocional, sexual o la libertad de una persona en el ámbito de las relaciones familiares, aunque la misma no configure delito.

Artículo 3º.- Toda persona que fuere víctima de violencia por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar podrá denunciar los hechos en forma oral o escrita ante cualquier autoridad judicial o policial. Se entenderá por integrantes del grupo familiar el originado en el matrimonio, en uniones de hecho o de relaciones de noviazgo o pareja, sean convivientes o no, persista o haya cesado el vínculo, comprendiendo ascendientes, descendientes, colaterales o por afinidad.

Articulo 4°.- El funcionario receptor de la denuncia deberá poner en conocimiento en forma inmediata al Juzgado de Familia y Minoridad por la vía más expedita, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad funcional. La denuncia se podrá receptar en formulario especial que podrá ser creado a tal efecto por vía reglamentaria del Poder Judicial.

Articulo 5º.- Podrán formular denuncia las personas enumeradas en el artículo 3 y toda persona que tenga fundadas sospechas de la comisión de un hecho de violencia descripto en la presente ley.

Artículo 6º.- Cuando las víctimas estuvieran impedidas de realizar las denuncias por su condición física o psicológica o cuando fueran menores de edad o incapaces, o por cualquier causa estén imposibilitados de accionar por si, los hechos deberán ser denunciados por sus representantes legales, los obligados por alimentos, el Ministerio Público, los servicios asistenciales, sociales y educativos, los profesionales de la salud. Si además, el hecho configurara delito los funcionarios públicos se encuentran obligados a formular la denuncia penal.

Artículo 7°.- El Juzgado, en todos los casos, requerirá un informe efectuado por un equipo interdisciplinario. El Juzgado establecerá los daños físicos y psíquicos, económicos o de otro tipo sufridos por la víctima, la situación de peligro en que se encuentra, el medio social y ambiental de la familia y las características de su funcionamiento.

Para estas evaluaciones se valdrá de los informes de expertos de las distintas áreas competentes. El Juzgado puede acudir para ello a informes de equipos interdisciplinarios de la administración pública o a profesionales de organizaciones de la sociedad civil idóneas en el tratamiento de la violencia, evitando producir nuevos informes que provoquen revictimización.

El equipo interdisciplinario interviniente sugerirá estrategias de abordaje referidas al ámbito de su incumbencia profesional en relación al grupo familiar afectado.

Artículo 8°.- El Juzgado podrá adoptar de manera provisoria por el tiempo que estime, toda aquella medida necesaria para garantizar la seguridad del agredido, hacer cesar la situación de violencia y evitar la repetición de todo acto de perturbación o intimidación, agresión y maltrato del agresor. A título enunciativo se mencionan:

a) ordenar la exclusión de la vivienda donde habita el grupo familiar de quien el Juzgado considere conveniente, si halla que la continuación de la convivencia significa un riesgo para la integridad física o psíquica de alguno de sus integrantes;
b) prohibir el acceso o acercamiento del denunciado, tanto al domicilio de quien fue la víctima de los hechos puestos en su conocimiento, como a su lugar de trabajo o estudio con el objeto de evitar la repetición de actos de violencia. También podrá prohibir que el denunciado realice actos de perturbación o intimidación de alguno de los integrantes del grupo familiar;
c) decidir el reintegro al domicilio a petición de quien ha debido salir del mismo por razones de seguridad personal, excluyendo en tal caso de dicha vivienda, al supuesto agresor;
d) otorgar la guarda protectora en caso de que la víctima fuere un niño o adolescente, mediante resolución fundada, a quien considere idóneo para tal función en los términos de la Ley provincial 521, fijándose alimentos de manera provisoria. También podrá suspender el régimen de visitas del progenitor agresor;
e) ordenar la restitución inmediata de los efectos personales a la parte peticionante, si ésta se ha vista privada de los mismos; prohibir al presunto agresor enajenar, disponer, destruir, ocultar o trasladar bienes gananciales de la sociedad conyugal o

los comunes de la pareja conviviente; disponer el inventario de los bienes gananciales de la sociedad conyugal y de los bienes propios de quien ejerce y padece violencia. En los casos de las parejas convivientes se puede disponer el inventario de los bienes de cada uno;

f) prohibir al presunto agresor la compra y tenencia de armas, y ordenar el secuestro de las que estén en su posesión; y
g) podrá ordenar a los organismos pertinentes que provean alojamiento temporario para las víctimas si fuera necesario para resguardo de su vida o integridad.

Artículo 9°.- Ante la comprobación de las acciones violentas o ante el incumplimiento de las órdenes emitidas, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que correspondan, el Juzgado adoptará alguna o varias de las siguientes sanciones alternativas, según las circunstancias del caso:

a) amonestación por el acto cometido;
b) multas pecuniarias en favor de la parte agredida, cuyo monto se fijará teniendo en cuenta la situación patrimonial del agresor, el que no podrá ser inferior a un (1) salario mínimo, vital y móvil, ni mayor a cien (100);
c) realización de trabajos comunitarios durante los fines de semana, cuya duración se determinará conforme a la evolución de la conducta del agresor, entre un (1) mínimo de un (1) mes y un (1) máximo de un (1) año;
d) comunicación de los hechos de violencia denunciados a la asociación profesional, sindical u organización intermedia o lugar de trabajo a la que pertenezca el agresor; y
e) asistencia obligatoria del agresor a programas reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes a la modificación de conductas violentas, con informes periódicos y resultado del tratamiento al Juzgado.

Cuando el incumplimiento configure desobediencia u otro delito, el Juzgado deberá poner el hecho en conocimiento al Juzgado con competencia penal.

Artículo 10.- En los casos de incumplimiento del agresor a una orden de protección a la víctima ordenada por el Juzgado, a los fines de asegurar la protección de la misma o para asegurar el comparendo del incumplidor a primera audiencia, el Juzgado podrá ordenar su arresto por veinticuatro horas (24) en uso de las facultades conferidas por el artículos 337.11 y 49.4 inciso b), del Código de Procedimiento Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero.

En este supuesto, antes de disponer la libertad, el Juzgado notificará al agresor que frente a un nuevo incumplimiento de las órdenes emitidas en virtud de lo dispuesto por el artículo 8º inciso b), se le dará intervención al Juzgado Penal ante la posible configuración del delito de desobediencia previsto en el artículo 239 del Código Penal, sin perjuicio de la continuación de las actuaciones.

Artículo 11.- Durante el transcurso de la causa y después de finalizada la misma, por el tiempo que se juzgue prudente, el Juzgado controlará el resultado de las medidas y decisiones adoptadas, a través de la comparecencia de las partes al mismo con la frecuencia que se ordene, mediante la intervención del equipo interdisciplinario quienes elaborarán informes periódicos acerca de la situación.

Artículo 12.- Los funcionarios policiales y los de organismos e instituciones a los cuales acudan las personas afectadas, tendrán la obligación de informar sobre los recursos legales existentes frente a los hechos de violencia doméstica.

Artículo 13.- La presentación de la denuncia podrá hacerse en forma escrita o verbal, con o sin patrocinio letrado.

Las partes deberán contar para la sustanciación del proceso, con asistencia letrada, la que podrá solicitarse al defensor de pobres y ausentes, teniendo en cuenta la gratuidad que rige el proceso.

En el escrito inicial, el interesado podrá peticionar fundadamente todas las medidas cautelares de urgencia conexas con el hecho denunciado.

Artículo 14.- El procedimiento será gratuito, sumarísimo y actuado. El Juzgado fijará una audiencia, que tomará personalmente, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de conocer

los hechos, sin perjuicio de la adopción previa de las medidas a que se refiere el artículo 8º.

En dicha audiencia, escuchará a las partes por separado bajo pena de nulidad.

Quedan prohibidas las audiencias de mediación o conciliación por estas causas. Se comunicará al Centro de Mediación el inicio de las causas por violencia.

El presunto agresor estará obligado a comparecer bajo apercibimiento de ser llevado ante el Juzgado con auxilio de la fuerza pública.

Artículo 15.- En caso de adoptarse la resolución a la que alude el artículo 8º, cualquiera de las partes, dentro de los treinta (30) días de dictada, puede promover en el expediente demanda para continuar el juicio por violencia familiar. De la demanda se debe correr traslado por el plazo de cinco (5) días.

Artículo 16.- Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, el Juzgado puede declarar de puro derecho la causa o, cuando hubiere hechos controvertidos, ordenar la apertura a prueba con los elementos existentes en autos y con los demás ofrecidos por las partes u ordenados por el Juzgado.

Pueden ser ofrecidos como testigos, y deberán declarar aquellos parientes mencionados en el artículo 392.1 del Código de Procedimiento Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero por tratarse de un proceso referido a hechos de violencia en un ámbito íntimo.

Artículo 17.- Finalizada la etapa probatoria o declarada la causa de puro derecho, el Juzgado debe dictar sentencia rechazando o admitiendo la demanda. Si se admitiere la denuncia, el Juzgado podrá:

a) confirmar o modificar las medidas de protección de naturaleza cautelar dictadas, las que podrán tener carácter de definitivas;
b) aplicar una o más sanciones de las previstas en el artículo 9º de la presente ley; y
c) fijar la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados, cuando la víctima los hubiera reclamado en este proceso.

Artículo 18.- Las resoluciones que concedan, rechacen, interrumpan, modifiquen o dispongan el cese de alguna de las medidas preventivas urgentes o impongan sanciones, serán apelables dentro del plazo de tres (3) días hábiles.

La apelación contra resoluciones que concedan medidas preventivas urgentes y las sentencias definitivas se concederá sin efecto suspensivo.

La apelación contra resoluciones que dispongan la interrupción o el cese de tales medidas se concederá con igual efecto.

Artículo 19.- Los antecedentes y documentación correspondientes a los procedimientos se mantendrán en reserva, salvo para las partes, letrados y expertos intervinientes. Las audiencias serán privadas.

Podrá solicitar el interesado la reserva de la identidad del denunciante.

Artículo 20.- Las organizaciones públicas o privadas podrán colaborar en el proceso a través de la figura del instituto del “amicus curiae”, el cual podrá solicitarse o ser requerido por el Juzgado, en carácter de la colaboración de organizaciones o entidades públicas o privadas dedicadas a la protección de los derechos de las mujeres, niños, niñas o adolescentes y ancianos.

Artículo 21.- En caso de ser solicitado por la parte interesada, el Juzgado podrá autorizar que durante los actos procesales en los que intervenga la víctima, ésta sea acompañada por persona de su confianza.

Artículo 22.- Las actuaciones fundadas en la presente ley estarán exentas del pago de sellado, tasas, depósitos y cualquier otro impuesto, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 78 del Código Procesal, Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero de la Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur en materia de costas.

Artículo 23.- Derógase la Ley provincial 39 y toda otra norma que se oponga a la presente.

Artículo 24.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- 32 -

Asunto Nº 389/14

Artículo 1º.- Incorpórase como inciso e), al artículo 7º de la Ley provincial 389, Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE), el siguiente texto:

"e) los montos correspondientes a las pensiones otorgadas en el marco de la presente ley deberán ser abonados dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles del periodo que corresponda, mediante depósito bancario, en cuenta habilitada a tal fin en el Banco de Tierra del Fuego, la que no tendrá costo para el beneficiario.

El recibo prestacional correspondiente al pago del periodo abonado deberá ponerse a disposición del beneficiario dentro del plazo estipulado en el párrafo anterior en lugar de fácil accesibilidad, eliminándose cualquier barrera u obstáculo que impida razonablemente su obtención por parte del mismo de su recibo prestacional.".

Artículo 2º.- El poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro del término de treinta (30) días contados a partir de su promulgación.

Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- 33 -

Asunto Nº 490/14

Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto regular en el ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur la actividad técnico profesional del acompañante terapéutico. Se entenderá como acompañante terapéutico a todo agente cuya función sea asistir específicamente en el área de salud, como parte de un dispositivo interdisciplinario. El acompañante terapéutico podrá ejercer la actividad de acompañamiento por solicitud e indicación del profesional de la salud a cargo del tratamiento, en forma privada o en instituciones públicas o privadas responsables del paciente o por disposición del Poder Judicial.

La tarea del acompañante terapéutico abarcará el trabajo con niños, niñas, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad en situaciones de vulnerabilidad, en cuidados paliativos, enfermedades mentales, enfermedades crónicas, en situaciones de catástrofe social o naturales; entre otras situaciones que amerite en actuación del acompañamiento terapéutico.

Artículo 2º.- Son objetivos del acompañamiento terapéutico:

a) favorecer el desarrollo biopsicosocial y autovalimiento del sujeto respetando su autonomía y singularidad;
b) fortalecer y afianzar la capacidad del sujeto para el sostenimiento de vínculos saludables;
c) actuar de nexo para la construcción de nuevos vínculos saludables del sujeto;
d) intervenir para facilitar a la persona su integración en el proceso de vida independiente; y
e) evitar la estigmatización social que implica el pasaje por una institución de salud.

Artículo 3º.- Créase el Registro de Acompañantes Terapéuticos en el ámbito de la Provincia, dependiente del Ministerio de Salud. Será función de dicho organismo, el contralor del ejercicio técnico profesional de quienes se inscriban con el fin de ejercer como acompañantes terapéuticos. Para la realización de tal listado se tendrá en cuenta el registro que posee la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la República Argentina (AATRA).

Artículo 4º.- Son requisitos para el ejercicio del acompañamiento terapéutico:

a) estar inscripto en el Registro de Acompañantes Terapéuticos;
b) ser egresado de instituciones terciarias, universitarias, públicas o privadas, reconocidas oficialmente por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación;

c) los que poseen títulos otorgados por universidades extranjeras o nacionales, en virtud de tratados internacionales;
d) las personas que hayan revalidado títulos otorgados por universidades extranjeras, y cumpliendo los requisitos exigidos por universidades argentinas para la obtención de las mismos; y
e) denunciar domicilio real y constituir domicilio legal en el ámbito de actuación.

Artículo 5º.- A los fines de la presente ley, el Ministerio de Salud será el encargado de extender a quienes reúnan los requisitos enunciados en el artículo anterior, la correspondiente credencial que habilite al ejercicio técnico profesional.

Artículo 6º.- El ejercicio del acompañamiento terapéutico consistirá únicamente en la ejecución personal de los actos enunciados en la presente ley, quedando prohibido todo préstamo de la firma o nombre profesional a terceros.

Artículo 7º.- El Estado provincial deberá incluir la cobertura del acompañamiento terapéutico en las prestaciones ofrecidas por las obras sociales oficiales y en el plazo de un (1) año, las demás obras sociales deberán contener la prestación del acompañamiento terapéutico entre su asistencia.

Artículo 8º.- Las personas que ejerzan el acompañamiento terapéutico podrán:

a) certificar, a pedido de la persona asistida, las prestaciones del servicio de acompañamiento que efectúe, así como las limitaciones de su propia actividad, restricciones en la participación o dar cuenta de cualquier otro obstáculo que obstruya su desempeño; y
b) abstenerse de intervenir en aquellos casos en los que no haya terapeuta, coordinador o profesional a cargo del tratamiento, entendiendo que el ejercicio técnico profesional del acompañante terapéutico constituye una labor inmersa en un dispositivo asistencial interdisciplinario.

Artículo 9º.- Las personas que ejerzan el acompañamiento terapéutico estarán obligados a:

a) coordinar acciones permanentes con los profesionales de la salud, en tanto integrante de un equipo interdisciplinario para orientar la tarea de acompañamiento;
b) supervisar las tareas con un director, jefe de área, profesional a cargo del tratamiento o coordinador del equipo de salud;
c) promover o proteger a las personas acompañadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que el acompañamiento terapéutico se realice de acuerdo a normas éticas conforme al artículo 10 de la presente;
d) prestar colaboración que le sea requerida por las autoridades sanitarias en caso de emergencia; y
e) guardar el más riguroso secreto profesional sobre cualquier acto que realizare en cumplimiento de sus tareas específicas, así como de los datos o hechos que se les comunicare en razón de su actividad de acompañamiento. Serán exceptuados del secreto los casos de presunción de maltrato o abuso cometido en perjuicio de un menor de edad y aquellos en que exista una obligación legal de expresarse.

Artículo 10.- Se tendrá en cuenta el Código de Ética de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la República Argentina (AATRA) que tiene como propósito proveer tanto principios generales como normativas deontológicas orientadas a las situaciones con que pueden encontrarse los acompañantes terapéuticos en el ejercicio de su profesión, estableciendo así las reglas de conducta profesional que han de regir su práctica.

Artículo 11.- Queda prohibido a los acompañantes terapéuticos:

a) prescribir, administrar o aplicar medicamentos sin la correspondiente orden médica;
b) anunciar o hacer anunciar actividad de acompañamiento terapéutico, cuando se difundan falsos éxitos terapéuticos, estadísticas ficticias, datos inexactos, promesas de resultados en la curación o cualquier otro hecho o afirmación que no se ajuste a la realidad;
c) delegar la atención de las personas acompañadas a alguna persona auxiliar no

habilitada;

d) anunciar actividades laborales como acompañante terapéutico sin aclarar en forma inequívoca el cumplimiento de las indicaciones terapéuticas emanadas por el equipo interdisciplinario de salud. Los anuncios no podrán contener informaciones inexactas o ambiguas que puedan provocar confusión sobre el acompañante terapéutico, sus títulos o actividades, ni contener otra denominación que el acompañamiento terapéutico, ni vocablos afines aludiendo a prácticas no incluidas en la presente.

Artículo 12.- Los acompañantes terapéuticos que violen las disposiciones de la presente ley o su reglamentación, son pasibles de las sanciones que la autoridad de aplicación determine, con independencia de la responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley de fondo disponga.

Artículo 13.- El Estado provincial dispondrá la inclusión del acompañante terapéutico en aquellos ministerios, dependencias, áreas o instituciones provinciales en que el mismo resulte necesario, siendo reconocido como tal.

Artículo 14.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los sesenta (60) días de su promulgación.

Artículo 15.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- 34 -

Asunto Nº 534/14

Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 28 de la Ley provincial 439, Código Fiscal, por el siguiente texto:

> “Artículo 28.- La declaración jurada está sujeta a verificación administrativa y sin perjuicio del tributo que en definitiva liquide o determine la Dirección, hace responsable al declarante por el gravamen que en ella se basa o resulte, cuyo monto no podrá reducir por correcciones posteriores cualquiera sea la forma de su instrumentación, salvo en los casos de errores comprobables mediante el aporte de documentación respaldatoria aportada por el contribuyente. Se considerará suficiente documentación respaldatoria de las facturas emitidas por el contribuyente que corresponden al período rectificado, sobre las cuales recaiga el tributo.”.

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- 35 -

Asunto Nº 449/14

Artículo 1º.- Institúyese el día 14 de noviembre de cada año como “Día Provincial de Concienciación sobre la Diabetes” adhiriendo a la Resolución 61/225 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 20 de diciembre de 2006.

Artículo 2°.- El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud, Ministerio Educación y la Subsecretaría de Comunicación Institucional, o quienes las reemplacen en un futuro, deberán organizar y ejecutar campañas de concienciación sobre la diabetes en un todo de acuerdo a lo establecido en la Federación Internacional de Diabetes (FID).

Artículo 3°.- Invítase a los municipios de la Provincia a adherir a la presente ley.

Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- 36 -

Asunto Nº 537/14

Artículo 1º.- Es objeto de la presente ley la concientización de la pertenencia territorial,

histórica y jurídica de las Islas Malvinas a la República Argentina y en particular, a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, tanto respecto de sus habitantes, como de las personas que visitan nuestra provincia, mediante el uso de la leyenda “Las Malvinas son Argentinas”, en medios de transporte y diversos espacios públicos y privados.
Artículo 2º.- Los medios de transportes públicos y privados de pasajeros, de origen nacional o extranjero, que presten servicios por cualquier título dentro de la jurisdicción del Estado provincial, sea terrestre, fluvial, lacustre, marítimo o aéreo, están obligados a disponer en sus unidades de transporte la leyenda “Las Malvinas son Argentinas”, en un espacio visible y destacado con la tipografía y formato que determine la reglamentación de la presente ley.
Artículo 3º.- Las estaciones de llegada, partida o escala del medio de transporte del que se trate, deberán disponer de un espacio visible y destacado a efectos de inscribir la leyenda citada en el artículo 1º acorde al diseño que se establezca en la reglamentación de la presente ley.
Artículo 4º.- Los locales comerciales, bancos, hoteles y restaurantes ubicados en las ciudades de la Provincia deberán exhibir la leyenda establecida en el artículo 1º.

La reglamentación de la presente ley, previa consulta a las municipalidades de la Provincia, determinará las arterias que delimiten el área de cumplimiento obligatorio en cada una de las ciudades.
Artículo 5º.- El Estado provincial dispondrá lo necesario para que en el Paso Internacional San Sebastian pueda ser adquirida por los propietarios de transporte público o privado de pasajeros que ingresen a la Provincia, la cartelería reglamentaria para exhibir en sus unidades móviles mientras permanezcan prestando servicios en territorio provincial.
Artículo 6º.- La empresa concesionaria del Aeropuerto Internacional Ushuaia “Malvinas Argentinas”, deberá exhibir, además de lo establecido precedentemente, la misma leyenda en al menos un (1) bastidor publicitario, por cada sentido de circulación, de los existentes en la ruta de acceso a dicha terminal.
Artículo 7º.- La empresa concesionaria del Aeropuerto Internacional Ushuaia “Malvinas Argentinas”, deberá instalar sobre el plano inclinado que conforma el techo del cuerpo principal de la aeroestación, la figura geográfica representativa de las Islas Malvinas.
La reglamentación de la presente ley determinará las características de la obra, las dimensiones de la figura, suficientes para que pueda ser visualizada e identificada a gran distancia, el material con el que será construida y/o pintada, como así también el financiamiento de la obra que deberá estar terminada antes del 20 de noviembre de 2015, Día de la Soberanía Nacional.
Artículo 8º.- Serán autoridad de aplicación de la presente ley, los organismos provinciales con competencia específica en cada una de las materias alcanzadas por la presente.
Artículo 9º.- La presente ley tendrá vigencia a partir del 30 de marzo de 2015.
Artículo 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- 37 -

Asunto Nº 538/14

Artículo 1°:- Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente, remita a esta Cámara en un plazo improrrogable de dos (2) días, el siguiente informe:

a) razones por las cuales se autorizó a la empresa British Broadcasting Corporation (BBC) a acceder a la isla de los Estados; y
b) copia del expediente administrativo, por el cual se ha tramitado la autorización y todo antecedente documentado de la misma.

Artículo 2°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

ANEXO II

- 1 -

Inserción de fundamentos solicitada por la legisladora Martínez

Asunto Nº 388/14

Señor presidente:

Desde el año 2012 venimos trabajando en la prevención, el control y el tratamiento de la diabetes en la provincia, con el objetivo de dar respuestas a las inquietudes y reclamos de distintos ciudadanos que padecen esta enfermedad o tienen algún familiar que la padece, quienes nos informaban sobre la falta de especialistas infantiles, el incumplimiento de las obras sociales sobre la cobertura para el tratamiento, la demora en la entrega de insumos e incluso la ausencia de medicamentos específicos, afectando la calidad de vida de quienes sufren este tipo de enfermedad, llegando al riesgo de vida.

Ante este panorama decidimos en ese mismo año solicitar dos pedidos de informes, uno al Poder Ejecutivo y otro al IPAUSS.

Lamentablemente al día de hoy seguimos esperando que el IPAUSS nos dé respuesta pese a haberle reiterado la solicitud formulada.

En cuanto al Poder Ejecutivo provincial, nos respondió el día 3/10/2012 -mediante la Comunicación Oficial Nº147/12- pero lamentablemente su respuesta nos dejó sumamente preocupados, ya que pudimos confirmar, lo que nos venían informando los familiares y pacientes que sufren día a día la falta de política sobre este tema tan delicado.

Se desprendió de la contestación del Poder Ejecutivo: que no hay especialista en diabetes para niños en la ciudad de Ushuaia, que si bien funciona desde el año 2005 un equipo interdisciplinario que trabaja con niños y adolescentes con diabetes tipo 1 y sus familias el mismo no cuenta con especialista en Diabetes, solo tiene una médica pediatra, una psicóloga, una enfermera, una nutricionista, una asistente social y una podóloga que va a las charlas pero que atiende en forma privada y cobrando por sus servicios; es decir falta la parte más importante del equipo, falta el profesional idóneo que pueda coordinar ese grupo; que en Rio Grande y en Tolhuin no hay equipos interdisciplinarios, por lo que cada profesional aborda la patología según su criterio y que a nivel provincial no cuenta con registros de pacientes menores.

Asimismo en agosto del corriente año solicitamos otro pedido de informes al Poder Ejecutivo a fin de poder tomar conocimiento de si, en cumplimiento con lo prescripto por la Ley nacional 23753, la provincia ha suscrito o se encuentra trabajando en la suscripción de Convenios con el Estado nacional, pero lamentablemente a la fecha no hemos obtenido respuesta.

Legislativamente contamos en la provincia con la Ley territorial 489, sancionada el 24/10/1991, que entre otras cosas declara de interés para Tierra del Fuego la lucha contra la diabetes, prevé la no discriminación e incorpora la diabetes a los planes de atención primaria de salud, el desarrollo de planes para el diabético, la implementación de planes de educación y prevención, etcétera. Asimismo el 3/6/1999, se sanciono la Ley provincial 450 que adhiere en todos sus términos a la Ley nacional 23753, sobre Problemática y Prevención de Diabetes, sancionada el 29/9/1989- y a su Decreto reglamentario 1271/98.

Esta Ley nacional 23753 de seis artículos principalmente prevé que el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación dicte las medidas necesarias para la divulgación de esta problemática y sus complicaciones, tendientes al reconocimiento temprano de la enfermedad; asimismo prevé que el ministerio lleve su control estadístico que permita la coordinación de acciones a nivel nacional, a la vez que establece que debe asegurar a todos los pacientes los medios terapéuticos y de control evolutivo, estableciendo finalmente la no discriminación por motivos de la diabetes para el acceso al ingreso laboral tanto público como privado.

El 27 de noviembre del año 2013, se sancionó la Ley nacional 26914, que sustituyó el

artículo 1º de la Ley 23753 e incorporó los artículos 5º, 6º y 7º a la citada ley.

Con esta modificación pasa a ser autoridad de aplicación de la ley, el Ministerio de Salud de la Nación, poniendo a su cargo, además de las funciones que ya tenía con la Ley 23753, garantizar la producción, distribución y dispensación de los medicamentos y reactivos de diagnóstico para autocontrol a todos los pacientes con diabetes, con el objeto de asegurarles el acceso a una terapia adecuada; asimismo se amplía –por ley- al 100% la cobertura en medicamentos y reactivos de diagnóstico para autocontrol a todos los pacientes, a la vez que se contempla la actualización permanente (cada dos años como mínimo) de la cobertura de medicamentos y reactivos de diagnóstico para autocontrol teniendo en cuenta los avances farmacológicos y tecnológicos; finalmente la nueva ley prevé la implementación de campañas de detección y educación que promuevan una mayor integración social de los pacientes con diabetes.

Es en el marco de esta política que el 23/7/2014 el Ministerio de Salud de la Nación emitió la Resolución 1156/2014 por la cual se aprueba el Programa Nacional de Prevención y Control de Personas con Diabetes Mellitus y las normas de provisión de medicamentos e insumos para las personas con diabetes", estableciéndose que "Las Obras Sociales Nacionales, las entidades de medicina prepaga y los demás actores del Sistema Nacional de Seguro de Salud deberán establecer los procedimientos administrativos necesarios a fin de garantizar la provisión de medicamentos e insumos estipulados en el Anexo II de la citada Resolución; invitando a las jurisdicciones provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a instrumentar los mecanismos necesarios tendientes a garantizar la cobertura a las personas que no estén comprendidas en el Sistema Nacional de Seguro de Salud".

Que, a fin de cumplir con esta política nacional, el proyecto de ley presentado, además de adherir a la ley nacional, establece que el Poder Ejecutivo en el plazo de 60 días deberá implementar los mecanismos necesarios para garantizar la provisión de medicamentos e insumos que establece la Resolución 1156/2014 del Ministerio de Salud de Nación a las personas que no estén comprendidas en el Sistema Nacional de Salud, quedando, de este modo, cubierto el 100% de los pacientes con el 100% de los medicamentos y reactivos para autocontrol que establece el Anexo II de la mencionada Resolución.

Resumiendo el presente proyecto, introduce las modificaciones que se han efectuado a la Ley nacional 23753, por la Ley nacional 26914, y su reglamentación mediante la Resolución 1156/2014, del Ministerio de Salud de la Nación, dando una mayor y mejor protección en derechos a los habitantes de nuestra provincia; y, a la vez, permite la igualdad en el ejercicio de derechos, de los ciudadanos amparados por el sistema provincial de salud y por las obras sociales provinciales, con los ciudadanos que cuentan con cobertura de obras sociales nacionales, entidades de medicina prepaga y demás actores del Sistema Nacional de Seguro de Salud.

Es por ello, señor presidente, que solicitamos el acompañamiento de nuestros pares al presente proyecto de ley.

Firmante: Myriam Noemí Martínez.

Asunto Nº 509/14

Señor presidente:

El 13 de agosto de 2008, se sanciona la Ley nacional 26396 referida al tratamiento de los trastornos alimentarios.

Siguiendo esta política nacional en materia de salud, y habiendo observado que el artículo 22 de la ley mencionada invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar normas de similares características, este espacio político inicio un trabajo con el objetivo de darle a nuestra provincia una ley propia, ley que viene a reglamentar derechos consagrados constitucionalmente, dándoles de una buena vez operatividad a los mismos haciendo que efectivamente se cumpla con ciertas garantías constitucionales que resultan fundamentales para la salud de la población.

Con esta idea, se inició un trabajo con distintos profesionales de la salud, de modo de consensuar, adaptar y mejorar los alcances de la Ley nacional 26396, adecuándola a las reales necesidades de nuestra provincia, ampliando su cobertura y mejorando en muchos aspectos la normativa nacional de modo de dar cumplimiento con la manda Constitucional referida a garantizar ampliamente el derecho a la salud a la población de la provincia, consagrado principalmente en el artículo 53 de nuestra constitución, es por ello que quiero agradecer especialmente a los profesionales de la salud que nos han asesorado en la elaboración del proyecto, particularmente quiero dar las gracias al doctor. Raúl Maltes, al doctor Julio Torres y a la nutricionista Romina Imboden, todos profesionales de la salud que prestan sus servicios en el Hospital Regional de Río Grande de nuestra provincia.

Este proyecto que presentamos en setiembre de 2013, fue enviado a la Comisión Nº 5 de Acción Social. Familia y Minoridad. Salud Pública. Deportes y Recreación. Vivienda. Tierras Fiscales. Asistencia, Previsión Social y Trabajo, que integro, donde se trabajó, conjuntamente con otros proyectos sobre este mismo tema presentados por otros espacios políticos, con quienes consensuamos la creación de una única norma, por lo que quiero reconocer el trabajo y el interés demostrado por todos los integrantes de la comisión, quienes permitieron que hoy podamos tener dictamen favorable sobre este proyecto de ley interbloque que nos permite dar un marco legal apropiado que ayude a prevenir y tratar la enorme cantidad de enfermedades vinculadas a la inadecuada ingesta de alimentos.

El objetivo principal de la ley es la prevención y control de los trastornos alimentarios y sus enfermedades relacionadas, quedando comprendidos en estos términos la obesidad, la bulimia, la anorexia nerviosa, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el síndrome metabólico, las dislipemias, la hipertensión arterial y toda otra enfermedad que se relacione con la ingesta inadecuada de los alimentos.

Asimismo, se establece la creación de un programa provincial para la prevención y control de este tipo de trastornos alimenticios, el que prevé entre otras cosas la implementación de campañas informativas, efectuar relevamientos epidemiológicos, promover las actividades de investigación formular normas para evaluación, control, prevención y detección de este tipo de enfermedades, promover entre niños y adolescentes conductas nutricionales saludables, eliminar la discriminación y estigmatización frente a este tipo de padecimientos, promover la participación de ONG, formular la detección temprana de los trastornos alimentarios y sus enfermedades relacionadas en el ámbito laboral, incluyendo como mínimo un examen médico anual, entre otras cosas.

También se establece que el Ministerio de Salud disponga las medidas necesarias para que en cada ciudad funcione un sector especializado para este tipo de trastornos y enfermedades vinculadas, como así también la incorporación de la educación alimentaria y medidas que fomenten la actividad física en los tres niveles educativos, y la capacitación de los educadores, trabajadores sociales y de la salud.

Otro punto importante de la norma es que se incorpora al Plan Médico Obligatorio (PMO), la cobertura integral de los trastornos alimentarios, de esta forma la comunidad toda se encuentra amparada por el sistema de salud ante este tipo de contingencias, quedando obligadas la totalidad de las obras sociales, sean nacionales o provinciales, como las medicinas prepagas a dar una amplia cobertura que incluye todos los tratamientos médicos necesarios, incluyendo los nutricionales, psicológicos, clínicos, quirúrgicos, y todas las practicas medicas necesarias para una atención integral de este tipo de enfermedades.

Es en este contexto, que considero de suma importancia contar con esta ley que, reitero, no hace más que reglamentar derechos constitucionales, haciendo que efectivamente se cumpla con ciertas garantías constitucionales que resultan fundamentales para la salud de la población.

Es por ello, señor presidente, que solicitamos el acompañamiento de nuestros pares al presente proyecto de ley.

Firmante: Myriam Noemí Martínez.

Inserción de fundamentos solicitada por la legisladora Martínez Allende

Asunto Nº 521/14

Señor presidente:

La presente ley busca lograr un régimen integral que contenga todas las aristas del tema, con el fin de proteger a los integrantes de los círculos familiares vulnerables.

Es claro que la familia es la base de la sociedad y el estado debe resguardarla. Sin embargo debemos tener en cuenta que la mayor parte de los delitos que atentan contra la vida y la integridad física son perpetrados en el ámbito de estas relaciones. Es por ello, que el Estado en su conjunto debe intervenir, no solo para sancionar las conductas disvaliosas que dañen a sus integrantes, sino también para prevenirlas y erradicarlas.

La institución "Familia" es anterior al Estado y la misma, es el eje sobre el cual funciona. Tradicionalmente las familias eran concebidas por un hombre, una mujer y a su descendencia. En la actualidad, ya han sido reconocidas diversas formas de familias y la realidad trae nuevos paradigmas y realidades a las cuales hay que responder con un amparo estatal de protección.

La institución familiar, intenta ser resguardada por el Estado, y es así que como antecedentes legales, contamos con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en el artículo 16, ya se busca la protección de la institución, la Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre de 1948, ordenando a los Estados a proteger a la familia. El pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales de las Naciones Unidas de 1966, solicita "la más amplia protección y asistencia posible" (…). También en este sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año de 1966, en el artículo 23, afirma que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado, en este mismo sentido lo declara la convención Americana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica. Asimismo se deberá tener en cuenta la CEDAW y la Convención de Belén Do Pará, reconociendo la protección integral de los derechos de las mujeres y la convención de los derechos del niño, que otorgan una legislación de protección integral a la Niñez y Adolescencia.

Nuestra Carta Marga dispone desde la reforma de 1994, la jerarquía constitucional de tratados que versen sobre Derechos Humanos y que sean ratificados por la Nación. También con la reforma constitucional del 94, se busca promover la protección integral de la familia, en el artículo 14 bis y con el artículo 75, inciso 19, se le otorga al congreso la facultad de dictar normas de protección familiares.

En el derecho interno contamos en el ámbito nacional con la Ley 26485 de Protección Integral de la Mujer, (a la que recientemente nuestra provincia adhirió a su articulado que prevé el procedimiento), la Ley 26061, de protección integral de la niñez y adolescencia, entre otras. En este sentido si bien existen normas vigentes que buscan prevenir sancionar y erradicar la violencia son meramente declarativas de derechos, por ello, y en consonancia a las potestades reconocidas por la Constitución Nacional a las provincias, es que poseemos la potestad de dictar nuestros propios procedimientos, por ello, es nuestro deber y responsabilidad nutrirnos de un marco legal procesal que efectivice los derechos consagrados por las normas del derecho positivo en la materia y así, ayudar a la problemática en el rol en nos ocupa.

La violencia que vivimos día a día, que nos sorprende escuchar en los medios de comunicación y vivir personalmente, se origina en estos ámbitos familiares (tanto los modelos tradicionales como los nuevos), atento a que la familia es principalmente, de la cual adquirimos las primeras enseñanzas (de socialización). Es difícil de entender y de imaginar, pero la violencia muchas veces se origina en el marco de los vínculos afectivos familiares o afínes. Aunque sea difícil de comprender, atento a cada uno de nosotros entendemos a la familiar como el ámbito donde se desarrollan los deseos más plenos de cariño, afecto, amor y

confianza.

Es clave poder visibilizar la violencia que se genera en el marco de estas relaciones, para comenzar a abordar el conflicto y garantizar a todos los habitantes de nuestra sociedad, sean niños, niñas, adolescentes y demás miembros, que su vida esté libre de violencia, para desarrollarse en un ambiente sano; generando en este sentido un régimen jurídico de protección integral.

En otro sentido, es dable destacar que la Ley 39 creó en el ámbito de la provincia un régimen legal de protección judicial para las víctimas de violencia familiar. Fue dictada en el año 1992, un año después de la provincialización de Tierra del Fuego, siendo la primera ley de violencia familiar provincial de la Argentina. Con este interesante dato es que tenemos la obligación moral de reconocer a los hombres y mujeres miembros de la primera Legislatura provincial que lucharon por lograr la protección de las víctimas de la violencia familiar. Con la presentación de este proyecto de reforma, si bien proponemos una modificación amplia de la misma, lo hacemos con el afán de ampliar los derechos a quienes son víctimas de la violencia doméstica, reconociendo la fabulosa tarea de los miembros de la Legislatura que generaron un norma precursora en Argentina, con el excelente resultado para los casos a los que se ha aplicado durante estos 22 años de plena vigencia.

La Unión Cívica Radical, como partido político representativo y plural que persigue el bien común, en cumplimiento de la función legislativa que nos fue encomendada, invitamos a participar para escuchar diversos actores de la sociedad. De esta manera detectamos la necesidad de una reforma integral de la Ley 39, para de esta manera adecuarla a nuevas necesidades sociales y paradigmas de investigación. Es de destacar que participaron sectores relacionados con los distintos poderes del Estado, profesionales e idóneos de las distintas ciencias relacionadas.

Con este nuevo marco normativo, se intenta dotar al Poder Judicial de una herramienta que le permita dar respuestas coherentes y adecuadas a las personas que son víctimas del flagelo que tratamos, es por ello que planteamos un régimen más preciso y amplio en todo lo relativo al procedimiento judicial. A su vez se plantea el tratamiento de la problemática de manera transversal de esta manera hacer un abordaje multidisciplinario del conflicto y así darle una solución definitiva que revincule a su miembros en conflicto si fuera oportuno, no solo afines sancionatorios, evitando la revictimización de las relaciones familiares.

Por todo lo expuesto, es que solicitamos a nuestros pares acompañar este proyecto.

Firmantes: Juan Felipe Rodríguez y Pablo Daniel Blanco.

- 3 -

Inserción de fundamentos solicitada por el legislador Arcando

Asunto Nº 389/14

Señor presidente:

Este proyecto viene a dar respuesta a reiterados reclamos de beneficiarios del Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE), quienes constantemente nos solicitan una solución que les permitiera tener certeza en cuanto a la fecha en que cobran sus beneficios y poder tener un lugar adecuado y accesible en donde poder retirar sus correspondientes recibos.

Habiendo receptado estas inquietudes de los beneficiarios de estas pensiones, personas que en su mayoría padecen de alguna capacidad diferente, es que este espacio político presento este proyecto de ley, que modifica la Ley provincial 389, con el objeto de hacer cesar esta incertidumbre en cuanto a la fecha de cobro de las pensiones y que eliminar cualquier obstáculo y/o barrera para la obtención del recibo por parte del beneficio.

Es así que a partir de la aprobación de esta ley, los beneficiarios de las pensiones deben cobrar dentro del plazo máximo de cinco días hábiles, mediante depósito bancario, en

cuenta habilitada a tal fin en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, cuenta que no tendrá costo para el beneficiario; asimismo se debe poner a disposición de los beneficiarios el recibo correspondiente en idéntico plazo y en un lugar de fácil accesibilidad, eliminándose cualquier barrera u obstáculo que les impida la obtención del mismo.

Es en este sentido, señor presidente, por lo que solicitamos el acompañamiento de nuestros pares al presente proyecto de ley.

Firmante: Myriam Martínez.

Asunto Nº 449/14

Señor presidente:

El próximo 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes (DMD), la fecha es significativa porque marca el cumpleaños de sir Frederick Banting, quien junto a Charles Best descubrió la insulina en 1921, esta fecha fue una iniciativa de la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1991, como respuesta ante su preocupación por la creciente incidencia de la diabetes en todo el mundo. Desde entonces, ha ido creciendo cada año en popularidad y sus asociaciones miembros “Día Mundial de la Diabetes” (DMD) aprovecha este día para realizar campañas mundiales contra esta enfermedad que afecta a millones de seres humanos en el mundo.

Las últimas estimaciones de la FID indican que hay 382 millones de personas que viven con diabetes en todo el mundo. Para 2035,592 millones de personas o una persona de cada 10 tendrá la enfermedad, otras 316 millones de personas, están actualmente en alto riesgo de desarrollar algún tipo de diabetes. Algunas estimaciones que realizan los expertos dicen que pueden llegar a 500 millones las personas que puedan padecer esta enfermedad en una generación.

Lo que hace que algunos profesionales de la salud consideren a la diabetes una pandemia, amenazante a lo largo de gran parte del mundo y manifiestan que en muchos lugares permanece oculto porque las personas no tienen acceso a la salud, es más estiman que más de la mitad de la personas con diabetes permanecen sin diagnosticar.

La campaña 2014 del Día Mundial de la Diabetes tiene por objetivo crear conciencia que la opción saludable, puede ser la opción más fácil y los distintos pasos que las personas pueden tomar decisiones informadas acerca de lo que comen.

Señor presidente, dentro de la FDI está creada una red mundial de parlamentarios que están abordando el tema de la diabetes en sus instituciones y estos colegas ha recomendado una serie de medidas para promover el Día Mundial de la Diabetes en cada uno de los países, donde desempeñan su función legislativa, estas son algunas de las sugerencias de actividades para el Día Mundial de la Diabetes:

1. incorporar un representante al movimiento o iniciar un debate en su parlamento en apoyo de la financiación del gobierno a las campañas de investigación y sensibilización de la salud pública para combatir la diabetes;
2. pin una personalidad con el círculo azul;
3. promover el círculo azul, el símbolo mundial de la diabetes, y/o integrar el color azul en sus materiales de promoción del DMD, las actividades y las comunicaciones;
4. organizar una actividad pública (por ejemplo, caminata, paseo en bicicleta, entrenamiento aeróbico, etcétera);
5. organizar un desayuno saludable en su área de trabajo o en el parlamento, invitando a asociaciones locales que abordan la temática de la diabetes;
6. formar un círculo azul humano, una actividad sencilla con un gran impacto visual que puede ser organizado como una actividad individual o como parte de un evento más grande;
7. lleve el azul para la conciencia de la diabetes, invite a sus amigos, familiares y colegas a unirse a usted; y
8. promover el Día Mundial de la Diabetes en su sitio web, blog o foro.

Señor presidente: En el año 2007, la población de niños en el mundo (0-14 años) se estimaba en 1,8 mil millones, de los cuales el 0,24% tenían diabetes.

Esto significa que aproximadamente 440.000 niños en todo el mundo tienen diabetes con 70.000 nuevos casos diagnosticado cada año. Este gran número de niños necesitan la ayuda para sobrevivir de las inyecciones de insulina, y así vivir una vida plena y sin restricciones ni complicaciones incapacitantes, ni ser estigmatizados por su enfermedad.

Los jóvenes que se han incorporado a la FID a través de "Los Jóvenes Líderes en el Programa de Diabetes (AVD)", este espacio etario está presidido por Debbie Jones y fue conformado en el 2011 en Dubái, donde 70 jóvenes con diabetes de distintos países del mundo se reunieron para la "Formación de Liderazgo" y para asistir al Congreso Mundial de Diabetes.

Estos jóvenes líderes continúan trabajando junto con sus asociaciones adheridas, y han logrado lo imposible que es demostrar a la comunidad mundial que con trabajo y compromiso pueden concientizar a otros jóvenes sobre la enfermedad, la misión de ellos es que sus congéneres afectados por la diabetes en todo el mundo puedan mejorar su calidad de vida y a su vez ser una poderosa voz para la prevención, la educación y el acceso a una atención de calidad y el fin de la discriminación en todo el mundo.

Estos jóvenes se han puestos objetivos a alcanzar, estos son algunos de ellos:

1. ser la voz para los jóvenes afectados por la diabetes en todo el mundo;
2. identificar y apoyar el desarrollo de jóvenes líderes en la comunidad internacional de la diabetes: y
3. potenciar y educar a jóvenes líderes, para apoyar la misión de la FID y AVD mediante el fortalecimiento de las asociaciones miembros de la FID.

Actualmente hay 132 jóvenes líderes, que actúan sobre la diabetes en todo el mundo. Espero que la gente joven de mi país y de mi provincia se inspiren para encontrar nuevas formas de abordar la educación en diabetes, y obtener el valor de vivir con ella.

Señor presidente quiero poner de manifiesto que el 20 de diciembre de 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 61/225.

Esta resolución histórica reconoce la diabetes como enfermedad crónica, debilitante y costosa que tiene graves complicaciones, conlleva grandes riesgos para las familias, los estados miembros y el mundo entero.

La Resolución 61/225 designa el 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, como Día de las Naciones Unidas dedicado a esta cuestión, que se observará todos los años a partir de 2007.

Las Naciones Unidas han demostrado su compromiso con la lucha contra la diabetes dando su apoyo al Día Mundial de la Diabetes y destacando el impacto mundial de esta enfermedad, es la primera vez que se reconoce que una enfermedad no contagiosa representa una grave amenaza para la salud mundial, al igual que las epidemias de enfermedades infecciosas como la malaria, la tuberculosis y el VIH/SIDA.

La aprobación de la Resolución es un importante logro para todas las personas que viven con diabetes o corren el riesgo de desarrollarla. Sin embargo, tan sólo es un primer paso en la lucha por revertir la epidemia de diabetes y salvar vidas.

La resolución 61/225 de la ONU, establece la agenda mundial para la inminente lucha contra la pandemia de diabetes, animando a todas las naciones a que desarrollen políticas nacionales de prevención, atención y tratamiento de la diabetes.

El mundo de la diabetes debe unirse contra dicha afección y garantizar que todas las naciones cumplan este compromiso.

El próximo 14 de noviembre el mundo celebrara El Día Mundial de la Diabetes se reunirán millones de personas en más de 160 países para aumentar la concienciación sobre la diabetes, incluyendo a niños y adultos afectados por la diabetes, profesionales sanitarios, políticos sanitarios y medios de comunicación.

Las asociaciones miembro de la Federación Internacional de la Diabetes (FID), así como otras asociaciones y organizaciones, profesionales del sector sanitario, autoridades sanitarias e individuos, con un interés en la diabetes serán los encargados de organizar

numerosos eventos locales y nacionales. El Día Mundial de la Diabetes une a la comunidad diabética mundial, creando así una voz poderosa a favor de la concienciación sobre la diabetes.

Cada año, el Día Mundial de la Diabetes se centra en un tema relacionado con la diabetes. Los temas desarrollados en el pasado incluyen diabetes y derechos humanos, diabetes y estilo de vida y los costos de la diabetes. Desde 2001, se ha prestado especial atención a las complicaciones diabéticas que afectan al corazón, la vista, los riñones, y los pies. La campaña del Día Mundial de la Diabetes 2014, marca el primero de tres años (2014-2016) de una cruzada que se centrará en una "Vida Saludable y Diabetes" y se continuarán desarrollando las actividades de la campaña bajo el eslogan: "diabetes, protejamos nuestro futuro".

Entre las actividades que se organizaran se incluyen; la participación en el Global Diabetes Walk 2014; programas de radio y televisión; eventos deportivos; análisis gratuitos para detectar casos de diabetes y sus complicaciones; reuniones públicas informativas; campañas de carteles y folletos; talleres y exposiciones sobre diabetes; artículos en periódicos y revistas; sancionar legislación referido al DMD; eventos para niños y adolescentes; entre otros.

Señor presidente, podría seguir fundamentando sobre esta pandemia que afecta a millones de personas en el mundo, pero creo que con esta apretada síntesis es suficiente para que mis pares me acompañen con la aprobación del proyecto de ley que estoy proponiendo.

Firmante: Juan Carlos Arcando.

- 4 -

Inserción de fundamentos solicitada por el legislador Rodríguez

Asunto Nº 534/14

Señor presidente:

El artículo 28 de la Ley 439, encierra la posibilidad de incurrir en situaciones gravosas para para integrantes de la comunidad económica fueguina. La redacción de dicho artículo impide la corrección de errores en las confecciones juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que disminuyan el impuesto declarado. De tal forma, la materialización de un error en la preparación de una declaración jurada habilita al Estado, con la actual redacción de la referida norma, a la obtención de un crédito a su favor por sobre la carga fiscal que el mismo código y la normativa en la materia le otorga como fuente de recursos públicos. Esto puede traducirse, en algunos casos, que errores que determinan en una declaración jurada, más impuesto que el sacrificio económico previsto en las normas, pueden inclusive, generar un perjuicio irreparable.

La modificación de esta norma viene a responder el equilibrio -en este sentido-, a la relación físico-contribuyente, principal de recursos fiscales del Estado.

> Artículo 28.- La declaración jurada está sujeta a verificación administrativa y sin perjuicio del tributo que en el definitiva liquide o determine la Dirección, hace responsable al declarante por el gravamen que en ella se basa o resulte, cuyo monto no podrá reducir por correcciones posteriores cualquiera que sea la forma de su instrumentación, salvo en los casos errores comprobables, mediante el aporte de documentación, respaldatoria aportada por el contribuyente. Se considerará suficiente documentación respaldatoria la facturas emitidas por el contribuyente que corresponden al período ratificado, sobre las cuales recaiga el tributo.

Firmante: Juan Felipe Rodríguez.

Inserción de fundamentos solicitada por el legislador Blanco

Asunto Nº 474/14

Señor presidente:

En la República Argentina, la ley nacional aplicable en la materia es la Ley nacional 26061 de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y en la provincia de Tierra del Fuego es la Ley provincial 521 Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y sus Familias.

Específicamente, el Programa de Acogimiento Familiar fue creado y aprobado en nuestra provincia mediante el Decreto provincial 2134/92, siendo modificado en varias oportunidades, modificaciones que van desde el monto económico que recibe cada familia por el menor acogido como así también en los requisitos o denominación del régimen.

El acogimiento familiar se constituye como una de las alternativas más idóneas que llevan adelante los organismos encargados de velar por el bienestar infantil, para dar respuesta a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de desprotección o de riesgo grave.

La figura del acogimiento familiar tal y como conocemos en la actualidad no habría sido posible sin los cambios sociales producidos en el pasado siglo XX y muy especialmente en la segunda mitad del mismo. Podemos destacar como cambios esenciales, entre otros, el paso de la concepción del niño como propiedad de sus padres a su consideración como sujeto de derecho y consecuentemente a la idea de la protección de menores como una serie de recursos de actuación de una sociedad que se erige en defensora de los derechos de los niños y legitimada para intervenir, de forma activa en situaciones de desprotección. Esta concepción del niño como sujeto de derecho se plasma en la Convención de Derechos del Niño de 1989, y en las legislaciones que le siguieron de los disantos Estados, entre los cuales derechos se encuentran el "derecho a los cuidados y asistencia especiales, reconociendo a la familia como grupo fundamental para el crecimiento y bienestar de los niños...", el interés superior del niño en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos..., y el derecho a preservar su identidad incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares....

Siguiendo esta nueva concepción podemos decir que el acogimiento familiar se presenta como una medida de protección por la que se integra un niño, niña o adolescente en una familia que no es la constituida por sus padres biológicos, con la finalidad de proporcionarle un ambiente familiar normalizado que le garantice una atención adecuada, salvaguardando sus derechos y cubriendo sus necesidades.

El acogimiento familiar supone y pretende garantizar la plena participación del menor en la vida de familia e impone a la familia acogedora la obligación de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral.

Así, el acogimiento es un recurso social; que responde a unos principios de individualización y normalización, que proporciona una familia alternativa a la de origen a aquellos niños y niñas o adolescentes que por diversas razones no pueden convivir con la suya propia.

Este régimen ofrece al niño/a la posibilidad de vivir durante cierto tiempo en un ambiente familiar complementario al suyo, en donde pueda recibir el cuidado, la atención y educación que le facilite un desarrollo armónico de su personalidad, al tiempo que mantiene la relación y el vínculo con su familia de origen.

Por ello, se plantea que el acogimiento es provisorio, independientemente del período de duración, y no es un fin en sí mismo, sino un medio que plantea posibilitar la búsqueda de una solución a la situación de crisis familiar que le dio origen.

Es importante mencionar, que para que el acogimiento familiar llegue a buen fin y

umpla con su objetivo último, es necesaria la colaboración real entre las dos familias e participan en el acogimiento, la familia de origen y la familia acogedora, para que el niño acogido pueda contar con la presencia simultánea de todos los adultos que comparten su vida.

Sin perjuicio de ello, al cabo de 22 años, dicho programa ha sufrido múltiples modificaciones, y considerando que es fundamental y primordial el rol que estas familias acogedoras cumplen dentro de la sociedad y generando un aporte sumamente importante para el desarrollo y el crecimiento de los niños sujetos pasivos del presente programa, consideramos que resulta necesario reformular y revalorizar el mismo para así poder adecuarlo a los nuevos paradigmas que rigen la materia.

Firmantes: Pablo Daniel Blanco y Juan Felipe Rodríguez.

- 6 -

Inserción de fundamentos solicitada por el legislador Barrientos

Asunto Nº 537/14

No contiene fundamentos.

Asunto Nº 538/14

Señor presidente:

Recientemente nuestra comunidad y toda la Patagonia se vieron agredidas por la conducta de un programa televisivo de la BBC (British Broadcasting Corporation) que lisa y llanamente se burló de la Gesta de Malvinas.

No se acallan aún los reproches a esa afrenta cuando nos enteramos que la misma emisora inglesa hoy accede con autorización estatal, a la islas de los Estados, que es, por Constitución Provincial, patrimonio intangible y permanente de los fueguinos (artículo 54, in fine, CP).

Por tal razón, solicito que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente brinde los informes correspondientes, según el proyecto de pedido de informe que adjunto, y que solicito a mis pares que me acompañen.

Nada más, señor presidente.

Firmante: Néstor Eduardo Barrientos.

- 7 -

Inserción de fundamentos solicitada por la legisladora Del Corro

Asunto Nº 73/14

No contiene fundamentos.

ANEXO III

Inserción solicitada por el legislador Barrientos

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY: CÓDIGO CONTRAVENCIONAL

A) OBSERVACIONES A LA PARTE GENERAL
1) OMISIÓN EN LA ENUNCIACIÓN Y TRATAMIENTO ADECUADO DE LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS:
a) PRINCIPIO DE DEFENSA.

"La defensa en juicio es uno de los derechos más ecuménicos del sistema de garantías del orden jurídico nacional e internacional y tal como lo sostiene Maier, se conecta en forma íntima con el derecho a ser oído.

La defensa, para ser tal, eficaz e idónea, debe estar revestida de una serie de recaudos sin los cuales la misma se transformaría en un contrasentido al derecho establecido por la ley. Es así que, en primer lugar, el individuo sospechado o imputado por la comisión de un delito o una contravención debe tener la posibilidad de acceder a un defensor técnico, letrado y especializado, que lo represente en el proceso que se le siga, preferentemente de su confianza, o en su defecto, designado pro el Estado en forma gratuita.

Luego, para que esa defensa pueda ser ejercitada debidamente, el sospechado o imputado debe tener la posiblidad de conocer en forma exacta cuáles son los hechos que se le imputan y cuáles las pruebas que obran en su contra, a los fines de preparar adecuadamente su estrategia defensiva. Del mismo modo, tener la posiblidad de controlar la producción de las pruebas de cargo a los fines de su confrontación.

Por último -dentro de lo que se estima más relevante en este sumario repaso- debe garantizarse la igualdad de armas entre acusación y defensa, con las mismas posibilidades para hacer valer sus derechos, ser oídos y producir las pruebas que les incumban, evitando emboscamientos por parte de la fiscalía con el indebido ocultamiento de pruebas o dificultando el acceso a las constancias que se pretende hacer valer en el juicio." ("¿JUSTICIA DE FALTAS O FALTA DE JUSTICIA? Análisis crítico del Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires (Decreto-Ley 8.031/73). Su comparación con el Régimen Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Leyes 12 y 1.472)" Mario Alberto Juliano, Editores Del Puerto, 2007.)

El artículo 18 de la Constitución Nacional reza en su parte pertinente: "Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos".

El artículo XXVI de Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública...".

El artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece lo siguiente: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter".

Por su parte el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que: "Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil".

a.1) SUS IMPLICANCIAS EN EL PROYECTO DE LEY DE CÓDIGO CONTRAVENCIONAL.

OBSERVACIÓN Nº 1

Merece especial consideración lo expresado por el Dr. Mario Alberto Juliano en la obra precitada respecto que el individuo sospechado o imputado de la comisión de una contravención "debe tener la posibilidad de acceder a un defensor técnico, letrado y especializado".

Ello en atención al proyecto de ley en análisis que omite tratar en forma explícita este derecho. Sólo dice en el ARTÍCULO 64 que es el caso de FLAGRANCIA que "el fiscal invitará al imputado a elegir defensor,.....".

En algunos códigos, podemos observar en su parte general y como enunciación de un principio que rige todo el proceso contravencional y por lo tanto como expresión del reconocimiento de este derecho, artículos tales como:

"El sospechado o imputado por la comisión de una contravención tendrá derecho a ser asistido por un defensor letrado y, en caso de no designarlo, se le asignará uno de oficio."

PROPUESTA: Agregar en la Parte General el siguiente artículo:

Derecho a asistencia letrada

ARTÍCULO. - El sospechado o imputado por la comisión de una contravención tendrá derecho a ser asistido por un defensor letrado y, en caso de no designarlo, se le asignará uno de oficio.

OBSERVACIÓN Nº 2

En cuanto a la posibilidad que tiene el sospechado o imputado de la comisión de una contravención de conocer en forma exacta cuáles son los hechos que se le imputan y cuáles las pruebas que obran en su contra, a los fines de preparar adecuadamente su estrategia defensiva, vemos que el Proyecto de ley en cuestión en su artículo 65 omite este derecho, violando así la garantía de defensa. Veamos:

El artículo 65 dice:

Audiencia única

ARTÍCULO 65. Cuando hubiere motivo bastante para sospechar que una persona ha participado en la comisión de una contravención, el fiscal fijará una única audiencia en la que realizará el interrogatorio de identificación, de conformidad a las reglas establecidas en el Código Procesal Penal; posteriormente efectuará la imputación formal sobre el o los hechos atribuidos, los elementos de prueba colectados y la calificación legal provisoria. El imputado podrá efectuar un descargo o negarse a declarar, sin que su silencio implique una presunción de culpabilidad. Estarán presentes en esta audiencia el fiscal y su defensor, bajo pena de nulidad."

En NINGUNA PARTE de la norma se expresa que al presunto contraventor se LO DEBERÁ (formulado como obligación) PONER EN CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS QUE SE LE ATRIBUYEN, LOS ELEMENTOS DE PRUEBA Y LA CALIFICACIÓN LEGAL PROVISORIA.

"Como podemos observar en una audiencia se concentra todo: interrogatorio de identificación, imputación formal sobre el o los hechos atribuidos, los elementos de prueba colectados y la calificación legal provisoria.Es de elemental evidencia señalar que si no se conoce el tenor de una acusación, resulta prácticamente imposible una respuesta. En las manifestaciones extremas del proceso inquisitivo, la nota dominante del secreto comprendía también, y hasta diríamos de una manera especial, al imputado, que no sabía de la imputación, los motivos de la misma ni las pruebas que obraban en su contra." ("¿JUSTICIA DE FALTAS O FALTA DE JUSTICIA? Análisis crítico del Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires (Decreto-Ley 8.031/73). Su comparación con el Régimen Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Leyes 12 y 1472)" Mario Alberto Juliano, Editores Del Puerto, 2007.).

Más aún, en el esfuerzo de interpretar la norma con mayor laxitud y entendiendo que en esa misma audiencia se lo pone en conocimiento de los hechos que se le imputan, la

prueba en su contra y la calificación legal (acto que no preve la norma), es dable preguntarnos ¿Cómo puede el imputado efectuar eficazmente su descargo en esa audiencia (como preve la norma) si recién en esa audiencia conoce los hechos que se le imputan, la prueba en su contra y la calificación legal? Directamente nunca el imputado podrá ni tendrá derecho a efectuar su descargo con todas las garantías, como lo establece nuestra Constitución Nacional, ya que no existe tiempo material para reunir pruebas, para asesorarse con su defensor, para establecer su estrategia defensiva, etcétera A mayor abundamiento señalo que existen innumerable fallos que han resuelto que el plazo exiguo establecido por la norma para efectuar la defensa trasgrede el principio de defensa en juicio.

Veamos que tampoco la norma preve que el descargo del presunto contraventor deba hacerse ante el Juez, garantía que debió tenerse en cuenta, toda vez que asegura el principio de igualdad de armas.

La norma resulta inconstitucional por resultar violatoria al derecho a la defensa en juicio y al debido proceso (del cual me ocuparé más adelante).

PROPUESTA: Modificar la norma, la que quedaría redactada de la siguiente manera:

Audiencias.

ARTÍCULO 65.- Cuando hubiere motivo bastante para sospechar que una persona ha participado en la comisión de una contravención, el fiscal fijará una audiencia en la que realizará ante el Juez contravencional el interrogatorio de identificación, de conformidad a las reglas establecidas en el Código Procesal Penal; posteriormente efectuará y pondrá en conocimiento del imputado, la imputación formal sobre el o los hechos atribuidos, los elementos de prueba colectados y la calificación legal provisoria.

Ante el Juez contravencional, el imputado podrá efectuar su descargo, solicitar se fije una segunda audiencia para realizarlo o negarse a declarar, sin que su silencio implique una presunción de culpabilidad.

La segunda audiencia prevista en el párrafo anterior deberá fijarse a los quince días hábiles de realizada la primera.

En todas las audiencias estarán presentes el juez contravencional, el fiscal y su defensor, bajo pena de nulidad.

OBSERVACIÓN Nº 3

El ARTÍCULO 66 expresa lo siguiente:

Remisión de la causa a juicio

ARTÍCULO 66.- Concluida la audiencia única, el fiscal remitirá la causa al Juez Contravencional competente en el término de tres (3) días, prorrogable por otro período igual. Esta remisión a juicio deberá contener, bajo pena de nulidad, los datos personales del imputado, una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, su calificación legal y una exposición sucinta de los motivos en que se funda.

Como claramente podemos observar la remisión a juicio NO CONTIENE "EL DESCARGO" QUE PODRIA REALIZAR EL PRESUNTO CONTRAVENTOR, lo que implica a las claras un VERDADERO DESPROPOSITO, INADMISIBLE desde el punto de vista lógico jurídico. Sin perjuicio de ello, es necesario reiterar que el "DESCARGO" al cual alude el artículo 65, igualmente impide la posibilidad de contestar adecuadamente la pretensión acusatoria y de producir prueba y de alegar, tal como lo sostuviera, precedentemente, al analizar el mencionado artículo.

Además, ha de tenerse en cuenta que debe garantizarse el "PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS " entre acusación y defensa, con las mismas posibilidades para hacer valer sus derechos, ser oídos y producir las pruebas que les incumban, evitando emboscamientos por parte de la Fiscalía con el indebido ocultamiento de pruebas o dificultando el acceso a las constancias que se pretende hacer valer en el juicio. Garantía esta que, conforme lo expuesto, también se trasgrede.

No existe ningún artículo que asegure el respeto del derecho de defensa en juicio que implica, entre otros, el derecho a participar en las declaraciones testimoniales, las

inspecciones, peritajes, derecho a ser oído, etcétera
PROPUESTA: Modificar la norma, la que quedaría redactada de la siguiente manera:
Remisión de la causa a juicio
ARTÍCULO 66.- Concluida la primera o la segunda audiencia, en su caso, el fiscal remitirá la causa al Juez Contravencional competente en el término de tres (3) días, prorrogable por otro período igual. Esta remisión a juicio deberá contener, bajo pena de nulidad, los datos personales del imputado, una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, su calificación legal, una exposición sucinta de los motivos en que se funda y el descargo del presunto contraventor, si hubiera hecho uso de ese derecho.

OBSERVACIÓN Nº 4

Esta observación recae sobre los efectos jurídicos del Acta de Comprobación de una contravención confeccionada por funcionario público, previstos en el ARTÍCULO 59. Este artículo dice lo siguiente:
Acta de de constatación de una contravención confeccionada por funcionario público
ARTÍCULO 59.- El acta de constatación de una contravención confeccionada por un funcionario público será considerada un instrumento público en los términos del artículo 293 del Código Penal.
Deberá ser claramente legible en todas sus partes y contener:

1) Lugar, fecha y hora del acta
2) Lugar, fecha y hora de la comisión del hecho u omisión punible, cuando fuere posible determinarlos;
3) La naturaleza y circunstancias del hecho, características de los elementos, instrumentos o vehículos empleados para cometer la contravención;
4) El tipo contravencional de este Código presuntamente infringido;
5) El nombre y domicilio del infractor, si fuera posible determinarlo;
6) La constancia de la notificación al presunto contraventor, si estuviere presente, de su derecho a ser asistido por un defensor particular, así como del derecho a ser asistido por el defensor oficial en caso de no ejercer aquél derecho.
7) El nombre y domicilio de los testigos y del denunciante, si los hubiere;
8) Las pruebas colectadas;
9) Las medidas preventivas dispuestas;
10) La firma del funcionario con aclaración de su nombre completo, cargo y numero de legajo o matrícula.

El acta así formulada hace civil y penalmente responsable de su autenticidad al funcionario que la suscribe.

Cuando el presunto infractor estuviere presente el funcionario responsable le entregará copia del acta labrada.

Serán nulas las constataciones formuladas en actas que no fueren claramente legibles o que les falten algunos de los requisitos exigidos por este artículo.
Las actas de constatación deberán ser presentadas ante el Ministerio Público Fiscal dentro de los dos (02) días.

Comienza el artículo expresando que: "El acta de constatación de una contravención confeccionada por un funcionario público será considerada un instrumento público en los términos del artículo 293 del Código Penal."

La norma sostiene que el acta de constatación será considerada un instrumento público en los términos del artículo 293 del Código Penal.

El artículo 293 del Código Penal prescribe lo siguiente:

"ARTÍCULO 293.- Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio.

Si se tratase de los documentos o certificados mencionados en el último párrafo del artículo anterior, la pena será de 3 a 8 años." (El resaltado me pertenece).

La mención del artículo 293 del Código Penal obliga a remitirnos al artículo 979 del Código Civil, por su alusión a la frase: "instrumento público".

El artículo 979 del Código Civil expresamente dispone:

"Artículo 979. Son instrumentos públicos respecto de los actos jurídicos:

1. Las escrituras públicas hechas por escribanos públicos en sus libros de protocolo, o por otros funcionarios con las mismas atribuciones, y las copias de esos libros sacadas en la forma que prescribe la ley;
2. Cualquier otro instrumento que extendieren los escribanos o funcionarios públicos en la forma que las leyes hubieren determinado;
3. Los asientos en los libros de los corredores, en los casos y en la forma que determine el Código de Comercio;
4. Las actas judiciales, hechas en los expedientes por los respectivos escribanos, y firmadas por las partes, en los casos y en las formas que determinen las leyes de procedimientos; y las copias que de esas actas se sacasen por orden del juez ante quien pasaron;
5. Las letras aceptadas por el Gobierno o sus delegados, los billetes o cualquier título de crédito emitido por el Tesoro público, las cuentas sacadas de los libros fiscales, autorizadas por el encargado de llevarlas;
6. Las letras de particulares, dadas en pago de derechos de aduana con expresión o con la anotación correspondiente de que pertenecen al Tesoro público;
7. Las inscripciones de la deuda pública, tanto nacionales como provinciales;
8. Las acciones de las compañías autorizadas especialmente, emitidas en conformidad a sus estatutos;
9. Los billetes, libretas, y toda cédula emitida por los bancos, autorizados para tales emisiones;
10. Los asientos de los matrimonios en los libros parroquiales, o en los registros municipales, y las copias sacadas de esos libros o registros."

Además y en cuanto a la validez y efectos, tendremos que tener presente el artículo 980 del Código Civil que expresamente dispone:

"Artículo 980.

Para la validez del acto, como instrumento público, es necesario que el oficial público obre en los límites de sus atribuciones, respecto a la naturaleza del acto, y que éste se extienda dentro del territorio que se le ha asignado para el ejercicio de sus funciones.

Los instrumentos públicos extendidos de acuerdo a lo que establece este Código gozan de entera fe y producen idénticos efectos en todo el territorio de la República Argentina, cualquiera sea la jurisdicción donde se hubieren otorgado." (el resaltado me pertenece).

Con lo expuesto, podemos facilmente deducir que el efecto jurídico principal del Acta de Comprobación de una contravención confeccionada por funcionario público, es que, al ser considerada instrumento público, GOZA DE ENTERA FE.

Ello quiere decir que si bien el sospechado o IMPUTADO GOZA DEL ESTADO DE INOCENCIA, el ACTA GOZA DE ENTERA FE.

En consecuencia, todo el esfuerzo probatorio lo deberá realizar el presunto contraventor, atento a que habría una inversión de la carga de la prueba. Esto es, que el presunto contraventor aunque considerado inocente, en la práctica debe demostrar que los extremos del acta son falsos (porque el acta de comprobación goza de entera fe) y por lo general deberá utilizar para quitar mérito al acta, gran cantidad de prueba, pues la escasez probatoria no es buena para los imputados por contravenciones. Es decir, el presunto contraventor deberá realizar un tarea titánica para demostrar su inocencia (aunque constitucionalmente se presuma su inocencia) debiendo dirigir todo el andamiaje probatorio en destruir los extremos y las constancias del acta (que goza de entera fe).

En esta inteligencia, estimo que la redacción del artículo 59 del proyecto de Código Contravencional lo convierte en inconstitucional desde que vulnera el derecho de defensa, el estado de inocencia, invierte la carga de prueba (inversión del "onus probandi"), al determinar los efectos que produce el acta de constatación, cual es el que GOZA DE ENTERA FE.

El criterio expuesto ha sido sostenido por la jurisprudencia en numerosos fallos, entre los que se transcribe el siguiente:
"Dicha normativa debería limitarse a atribuir valor de prueba de cargo testimonial al acta de comprobación y que no solamente puede ser tachada de falsedad, sino también enervada por prueba en contrario. Prueba que el juez está obligado a admitir si es ofrecida y conducente y no está atado a aceptar el acta como prueba de cargo absoluta, ya que puede y debe desestimarla si no cumplen los requisitos legales y absolver si la defensa enerva la acusación" (CAF, 05-07-66, cita de Aguero, Arístides Horacio, "Falta y Delito – Jurisprudencia", Ediciones Dike – Foro de Cuyo, Mendoza, 2000, Tº II, pp 411/412 nº 20)… "
PROPUESTA: Debe quitársele al Acta de comprobación de una contravención, el efecto que hace que la misma GOCE DE ENTERA FE y que surge de la remisión al artículo 923 del Código Penal que efectúa el artículo 59 del Proyecto de ley en examen. En consecuencia, se propone la siguiente redacción:

ACTA DE CONSTATACIÓN DE UNA CONTRAVENCIÓN
CONFECCIONADA POR FUNCIONARIO PÚBLICO

ARTÍCULO 59.- El Acta de Comprobación de una contravención confeccionada por un funcionario público en la forma establecida por la presente norma, tendrá el valor de prueba de cargo testimonial. No solamente podrá ser tachada de falsedad, sino también enervada por prueba en contrario ofrecida por el presunto contraventor, prueba que el juez está obligado a admitir, si resulta conducente. El juez no está obligado a aceptar el Acta como prueba suficiente de culpabilidad del presunto contraventor, debe desestimarla si no cumple con los requisitos legales y absolver si la defensa enerva la acusación.

El Acta de Constatación deberá ser claramente legible en todas sus partes y contener:

1) Lugar, fecha y hora del Acta;
2) Lugar, fecha y hora de la comisión del hecho u omisión punible, cuando fuere posible determinarlos;
3) La naturaleza y circunstancias del hecho, características de los elementos, instrumentos o vehículos empleados para cometer la contravención;
4) El tipo contravencional de este Código presuntamente infringido;
5) El nombre y domicilio del infractor, si fuera posible determinarlo;
6) La constancia de la notificación al presunto contraventor, si estuviere presente, de su derecho a ser asistido por un defensor particular, así como del derecho a ser asistido por el defensor oficial en caso de no ejercer aquél derecho.
7) El nombre y domicilio de los testigos y del denunciante, si los hubiere;
8) Las pruebas colectadas;
9) Las medidas preventivas dispuestas;
10) La firma del funcionario con aclaración de su nombre completo, cargo y número de legajo o matrícula.

El acta así formulada hace civil y penalmente responsable de su autenticidad al funcionario que la suscribe.

Cuando el presunto contraventor estuviere presente, el funcionario responsable le entregará copia del acta labrada.

Serán nulas las constataciones formuladas en actas que no fueren claramente legibles o que les falten algunos de los requisitos exigidos por este artículo.

Las actas de constatación deberán ser presentadas ante el Ministerio Público Fiscal dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de labradas, excepto si se dispusieran medidas preventivas, en cuyo caso se presentarán en forma inmediata al mencionado Ministerio.

b) GARANTÍA DE DEBIDO PROCESO Y PROCESO CONTRAVENCIONAL PREVIO.

El procedimiento previo exigido por la Constitución Nacional no es cualquier proceso que puedan establecer las autoridades públicas a su arbitrio, ni ellas en combinación con el imputado y su defensor, aún cuando se propongan observar las garantías de su seguridad individual previstas en la ley suprema. (Maier)

Muy por el contrario este proceso debe ser reglado por ley, teniendo claramente definidos los roles de los sujetos intervinientes y los actos que le darán vida.

A su vez esta norma debe ineludiblemente contener las garantías mínimas que establece la Constitución en favor de los ciudadanos como ser la del juez natural para el juzgamiento, la inviolabilidad de la defensa en juicio, el tratamiento que debe dársele al imputado como inocente, incoercibilidad del imputado como sujeto de la relación jurídica procesal, la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia epistolar, el juicio público, la no obligación de declarar contra sí mismo, etcétera

b.1) SUS IMPLICANCIAS EN EL PROYECTO DE LEY DE CÓDIGO CONTRAVENCIONAL.

La deliberada omisión al principio en análisis no es sólo declarativa, atento a que el proyecto de ley en cuestión, como hemos visto hasta aquí, y veremos más adelante con mayor detenimiento, propone un proceso contravencional inquisitivo, reñido con los postulados de nuestra Constitución Nacional.

La defensa de las garantías inherentes al debido proceso legal que indica la Constitución, no es una cuestión menor, ya que en su empleo se dirime la tensión existente entre el modelo inquisitivo y el modelo acusatorio, cuestión de no poca relevancia para la plena vigencia del Estado de derecho.

Un sistema procesal respetuoso de las garantías individuales, debería identificarse con los principios del acusatorio y valorar la seguridad jurídica, de raigambre constitucional.

En efecto, el concepto de seguridad jurídica “nos endereza a la idea de que es posible prever razonablemente con suficiente precisión y sin sorpresivas irrupciones, cuáles han de ser las conductas de los operadores gubernamentales y de los particulares en el marco estable del ordenamiento jurídico, así como contar con adecuada protección frente a la arbitrariedad y a las violaciones de ese mismo orden jurídico”.

El proyecto de ley en cuestión al atribuir las mismas facultades de dirección e investigación que el Código Procesal Penal otorga al Juez de instrucción (Artículo 62) y a su vez prescribir, como lo efectúa el artículo 77, que “Las disposiciones generales del Código Procesal Penal son aplicables supletoriamente siempre que no estén excluidas por este Código”, nos sumerge en un procedimiento impreciso, sin reglas establecidas de antemano a las cuales atenerse. En una especie de laberinto jurídico donde no es posible prever las conductas de los operadores del derecho, cuando por vía de remisión se les permite establecer procedimientos que no se encuentran reglados expresa y ordenadamente dentro de un plexo normativo determinado.

Todo ello se ve agravado ante un proceso:

OBSERVACIÓN Nº 5

1) donde “el fiscal invitará al imputado a elegir defensor”; artículo 64, contradiciendo el principio de igualdad de armas, por posicionar a las partes en desigualdad procesal.
PROPUESTA: Me remito a la Observación Nº 10 en la cual se propone la eliminación del artículo 64.

OBSERVACIÓN Nº 6

2) donde si bien la víctima y el imputado pueden proponer la producción de diligencias probatorias, “El fiscal las practicará cuando las considere pertinentes y útiles. Su resolución será apelable dentro de los cinco (5) días..”, artículo 62 in fine, contradiciendo el principio de igualdad de armas, por posicionar a las partes en desigualdad procesal y además considerando incorrectamente como “resolución” la decisión del fiscal (o sea la decisión de una de las partes) y admitiendo por ello su carácter de apelable, cuando en forma correcta debe entenderse que las únicas “RESOLUCIONES” SON LAS QUE EMITE UN JUEZ y sólo estas podrían ser apelables o no apelables.
PROPUESTA: Me remito a la Observación Nº 16 en la cual se propone la redacción del artículo 62.

OBSERVACIÓN Nº 7

3) donde según artículo 63, las “medidas preventivas” tales como: internación tuitiva (artículo 45), internación preventiva (artículo 46), internación durante el proceso (artículo 47), demora y detención (artículo 48), Secuestro (artículo 49); son dispuestas por el fiscal, el mismo que investiga, que requiere y que posee “las mismas facultades de dirección e investigación que el Código Procesal Penal otorga al Juez de Instrucción”, (artículo 62). Ello trasgrede el principio de igualdad de armas.

Como es obvio, de un fiscal que investiga, que dirige el proceso, que dispone la adopción de medidas de prueba y también coercitivas, poco resguardo de sus derechos es lo que podrá esperar el procesado.

PROPUESTA: Se propone la siguiente redacción del artículo 63:

Medidas preventivas

ARTÍCULO 63.- Tomado conocimiento del hecho, el fiscal solicitará al Juez contravencional alguna o algunas de las medidas preventivas establecidas en el Capítulo Único del Título III del Libro I de este Código, quien debiendo interpretarlas en forma restrictiva podrá ordenarlas en forma excepcional y proporcionada a aquello que se espera del procedimiento.

OBSERVACIÓN Nº 8

4) donde no se establecen límites a la adopción de las medidas preventivas del artículo 63, necesarios, ya que dichas medidas restringen la libertad del imputado y el ejercicio de las facultades del imputado. Por lo tanto debe preverse que dichas medidas serán interpretadas en forma restrictiva, excepcional y proporcionada a aquello que se espera del procedimiento, evitando así que el Estado abuse de ellas. Ello en base al estado de inocencia del que goza el presunto contraventor.

PROPUESTA: Se propone la redacción del artículo 63 ensayada en la Observación Nº 7, anterior.

OBSERVACIÓN Nº 9

5) donde el funcionario interviniente puede clausurar preventivamente lugares y solicitar instrucciones al fiscal. (artículo 50).

PROPUESTA: Se propone la redacción del artículo 50 en los siguientes términos:

Clausura preventiva

ARTÍCULO 50.- El funcionario interviniente podrá, por decisión motivada, proceder a clausurar preventivamente lugares por el término necesario para hacer cesar la contravención, sólo cuando ésta ponga en peligro la vida o bienes de terceros, incluyendo el daño ambiental. En estos casos, el funcionario responsable deberá remitir al fiscal las actuaciones dentro de las 12 horas de efectivizada la medida y este deberá solicitar instrucciones al Juez.

OBSERVACIÓN Nº 10

6) donde LA POLICÍA PUEDE PRIVAR DE LIBERTAD A UN INDIVIDUO Y NO SOLAMENTE EN CASO DE FLAGRANCIA, conforme artículo 48.

En efecto, la remisión que efectúa el artículo 48 inciso c) al artículo 64 que se refiere exclusivamente a casos de flagrancia, arrastra a todos los demás casos, es decir aquellos que no son casos de flagrancia, a la posibilidad de que funcionarios policiales demoren o priven de la libertad ambulatoria a cualquier persona, ya que estarían facultados para ello por la norma del artículo 48. Esta norma viola el artículo 37º de la Constitución Provincial “nadie será privado de su libertad sin orden escrita y fundada de autoridad judicial competente”.

Dicho de otro modo, si la intención o espíritu de la norma hubiera sido prever la aprehensión de personas por funcionarios policiales SOLO EN CASO DE FLAGRANCIA, la norma del artículo 48 estaría de más (y por supuesto también la remisión efectuada en su

inciso c), porque la flagrancia y el instituto de la aprehensión en tal caso, ya está prevista en el artículo 64 del Proyecto de Ley en cuestión. Ergo, la intención o espíritu de la norma es habilitar a los funcionarios policiales a detener a cualquier persona, sea que se la encuentre in franganti o no.

Lo dicho se agrava aún más, si tenemos en cuenta que la norma omite expresar preceptos tales como que: “Toda persona debe ser informada del motivo de su detención en el acto, así como también de los derechos que le asisten.”

La norma tampoco prohíbe las declaraciones de detenidos ante la autoridad policial.

Corresponde aquí tener presente el artículo 37º de la Constitución Provincial que expresamente dice:

"Privación de la libertad

Artículo 37.- La privación de la libertad durante el proceso tiene carácter excepcional y sólo puede ordenarse dentro de los límites de esta Constitución, siempre que no exceda el término máximo que fije la ley. Las normas que la autoricen son de interpretación restrictiva. Salvo en caso de flagrancia, en que podrá ser detenido por cualquier persona, nadie será privado de su libertad sin orden escrita y fundada de autoridad judicial competente, siempre que existan suficientes elementos de convicción de participación en un hecho ilícito y sea absolutamente indispensable para asegurar la investigación y la actuación de la ley. En caso de flagrancia, se dará aviso inmediato a aquélla y se pondrá a su disposición el aprehendido, con constancia de sus antecedentes y los del hecho que se le atribuya, a los fines previstos precedentemente. Producida la privación de la libertad, el afectado será informado en el mismo acto del hecho que la motiva y de los derechos que le asisten, y podrá dar aviso de su situación a quien crea conveniente. La autoridad arbitrará los medios conducentes a ello. Ningún detenido podrá ser incomunicado por más de cinco días corridos, siendo este plazo improrrogable." (El resaltado me pertenece).

En definitiva, la detención preventiva tal como se encuentra diagramada en el artículo 48 del proyecto de ley resulta violatoria a la Constitución tanto Nacional (artículo 18) como Provincial (artículo 37).

A mayor abundamiento, corresponde afirmar que además, carece de sentido y de finalidad, al no tener prevista, el Proyecto de Ley en cuestión, como sanción, la de ARRESTO.

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que tampoco el Proyecto de Código Contravencional PREVÉ como contrapartida, LA EXCARCELACIÓN NI LA EXIMICIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA, lo que agrava aún más la inconstitucionalidad aludida.

Resulta oportuno transcribir la opinión doctrinaria que sobre el punto en examen realiza el Dr. Mario Alberto Juliano:

“Debe hacerse la salvedad que tampoco corresponde la detención de individuos sospechados por la comisión de faltas que no se encuentren conminadas con pena de arresto. La posibilidad inversa colisiona con expresos mandatos de la Constitución de la Provincia, la cual veda la detención de personas por hechos que no sean merecedores de penas corporales. Una privación de la libertad ambulatoria de estas características -por la supuesta comisión de una falta que no se encuentre conminada con pena de arresto- sería, además, violatoria del principio de proporcionalidad que deriva del principio de inocencia, y aun legal -prevista por la ley- arbitraria y, por ende, nuevamente prohibida por el orden jurídico internacional.

Al referirse al orden jurídico internacional, el destacado autor, hace alusión al artículo 7.3, CADH: “Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”.

A mayor abundamiento, analizando el artículo 64, cabe poner de resalto que resulta absolutamente excesivo el término de 6 horas establecido como límite máximo para la aprehensión de las personas, teniendo además en cuenta que se trata de la comisión de presuntas contravenciones, cuya entidad difiere sustancialmente de la de los delitos. Este exceso trae como consecuencia la irrazonabilidad de la norma y como efecto natural su nulidad, como remedio a la ilegitimidad configurada por aquella. Esta circunstancia factica-jurídica podría dar lugar a numerosas impugnaciones de inconstitucionalidad del artículo en cuestión, situación que debiéramos evitar en esta instancia, a los fines de no provocar dislate jurisdiccional, suprimiendo la norma del artículo 64 (posición por la cual me inclino).

PROPUESTA: En relación al artículo 64 se propone su eliminación y respecto al artículo 48 se ensaya la siguiente redacción:
Prohibición de demora y detención.
ARTÍCULO 48.- Ningún funcionario podrá demorar o privar de la libertad ambulatoria a persona alguna, o ejercer sobre ella fuerza física.

OBSERVACIÓN Nº 11

7) donde la PRISIÓN PREVENTIVA (artículo 48) puede efectivizarse sin respetar los requisitos que doctrina y jurisprudencia ponen de resalto: 1) después de ser oído el imputado; 2) ante la existencia de elementos de convicción suficiente para sostener, razonablemente, que el imputado es, con probabilidad, autor de un hecho punible o partícipe en él; 3) la existencia de una presunción razonable, por apreciación de las circunstancias del caso particular, acerca de que el imputado no se someterá al procedimiento (peligro de fuga) u obstaculizará la averiguación de la verdad (peligro de entorpecimiento). 4) El auto que autoriza la prisión preventiva deberá fundar expresamente cada uno de los presupuestos que la motivan.

Lo expuesto se relaciona directamente con el derecho a transitar el proceso en libertad. En efecto, lo cierto es que al margen de personales enrolamientos, (tesis sustantivistas, tesis abolicionistas, tesis procesalistas) hoy por hoy resulta insostenible legitimar el encarcelamiento preventivo como herramienta de control de los sectores desplazados de los beneficios de la sociedad -que son quienes en su inmensa mayoría sufren sus consecuencias.

El Estado democrático de derecho no admite que los fines, por más legitimados que ellos sean (lograr la pacificación de la sociedad, que se disminuya la tasa delictiva, etcétera) sean alcanzados por cualquier vía, justificando todo tipo de métodos (el violento encarcelamiento de individuos que gozan del estado de inocencia y que en los hechos así terminan siéndolo, en porcentajes más elevados de lo razonablemente tolerable).

Interesante resulta destacar la exposición que realizara el Convencional Dr. Zaffaroni quien sostuvo que prohibir la detención preventiva (en referencia a lo prescripto por el artículo 13 inc. 11 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires) tiende sobre todo a impedir que continúe la corrupción, como consecuencia de su aplicación. Sostuvo que se ha probado en sede judicial, en un caso reciente, que a los detenidos por razones preventivas, se les prometió la libertad inmediata si contribuían para formar una vaquita.... (sic). (en la Sesión del 24 de setiembre de la Convención Constituyente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
PROPUESTA: Me remito a la propuesta ensayada en la Observación Nº 10, anterior.

OBSERVACIÓN Nº 12

8) donde no se establecen LÍMITES A LA AVERIGUACIÓN DE LA VERDAD.

Uno de los logros más importantes del iluminismo lo constituye sin duda, las limitaciones establecidas para la averiguación de la verdad. Los imputados dejan de ser objeto de prueba para convertirse en sujetos incoercibles, se rechaza toda aplicación de tormentos para la obtención de pruebas y se eliminan de las causas aquellas pruebas obtenidas por actos ilícitos o simplemente irregulares (regla de la exclusión probatoria). Todo lo que contraría estos principios es “expulsado” del proceso.

El primero de los preceptos (incoercibilidad) es receptado por la Constitución Nacional cuando establece que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo (artículo 18 CN) y por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos al establcer la norma del artículo 8.2g, CADH que: “Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable”; el artículo 14.3.g.: “A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable. Se relaciona con el PRINCIPIO DE PROHIBICIÓN DE AUTOINCRIMINACIÓN, ausente en el enunciado de la parte general.

El segundo de los preceptos también es receptado por la Constitución Nacional al

disponer que quedan abolidos para siempre toda clase de tormentos y el tercero es una elaboración pretoriana extraída de la doctrina anglosajona de los frutos del árbol envenenado.
PROPUESTA: Se propone la incorporación del siguiente artículo, en la Parte General del Código Contravencional:
Principio de prohibición de autoincriminación.
ARTÍCULO..... Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable.

OBSERVACIÓN Nº 13

9) donde no se establece expresamente la INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO, LOS PAPELES PRIVADOS, CORRESPONDENCIA EPISTOLAR, SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS, TELÉFONOS Y CUALQUIER OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN.

El artículo 18 de la Constitución Nacional expresa en su parte pertinente: “El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación”.

En concordancia con este precepto, la Constitución Provincial expresa en su artículo 41º.
“El domicilio es inviolable y sólo podrá ser allanado por orden de juez competente, en base a indicios vehementes del hecho punible que se invoque.
No podrán ser intervenidos la correspondencia epistolar, los papeles privados, los sistemas de almacenamiento de datos, los teléfonos y cualquier otro medio de comunicación, sin iguales requisitos.
La conformidad del afectado no suplirá la orden judicial.”

En el proyecto de Código Contravencional vemos que menciona estas medidas como excepción de aquellas que puede adoptar el fiscal por sí sólo, debiendo en estos casos, ser solicitada al Juez Contravencional en turno. Pero una buena técnica legislativa aconseja enunciar dicho precepto constitucional en forma expresa en la parte general del Código.
PROPUESTA: Se propone la incorporación de la siguiente norma:
ARTÍCULO .....El domicilio es inviolable y sólo podrá ser allanado por orden del juez contravencional, en base a indicios vehementes del hecho punible que se invoque.
No podrán ser intervenidos la correspondencia epistolar, los papeles privados, los sistemas de almacenamiento de datos, los teléfonos y cualquier otro medio de comunicación, sin iguales requisitos.

La conformidad del afectado no suplirá la orden judicial.

OBSERVACIÓN Nº 14

10) donde, para destacada doctrina, la omisión de debate (establecida por el artículo 72 cuyo artículo correlativo en el Código de Procedimiento Penal es el artículo 324), no es el resultado del debido proceso. Ello por cuanto constituye un retroceso en lo que significa el juicio, entendido como la forma adecuada de impartir justicia penal, habida cuenta los principios que la estructuran y que habilitan el juzgamiento propio de un Estado de Derecho. Quienes se enrolan en esta doctrina, niegan la posibilidad de todo acuerdo con el imputado, restándole valor, en materia penal, al principio de autonomía de la voluntad y advierten que este instituto responde a un fin práctico, cual es, descongestionar el sistema judicial.

En la crítica a este instituto se carga las tintas en los fiscales y su posible coacción al imputado, en su carácter del Poder estatal.

Es un instituto discutible en su aplicación, pero sea cualquiera la postura que adoptemos, lo cierto es que la negociación que subyace en este tipo de juicio debe ser analizada a la luz de los principios que rigen el moderno derecho penal y procesal de un estado democrático de derecho, a fin de evitar que la justicia se convierta en un “bazar persa”

en el que todo se negocia.

El ministro de la Corte Suprema de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni, se manifestó en varias oportunidades en contra de los juicios abreviados. Zaffaroni recalcó en declaraciones a la prensa que le tiene “mucho miedo” a las decisiones rápidas y sobre todo “al juicio acusatorio, que es acusatorio entre comillas, porque se abre la posibilidad de una negociación y termina en un juicio abreviado, que es una forma de extorsión”.“Entonces –advirtió el magistrado– hay que tener mucho cuidado: no pasemos de los procesados sin condena a los condenados sin juicio porque es una forma extorsiva de hacer desaparecer el juicio.” Zaffaroni siempre se mostró en desacuerdo con esta forma de juzgar “traída de los Estados Unidos”. “Acelera, pero acelera demasiado. Puede ser beneficioso, pero hay que tener mucho cuidado. Podría darse –destacó– que se le dijera a un acusado: “O bien aceptas esta pena que te ofrezco, o vamos a un juicio oral en que vamos a pedir una pena que va a ser del doble de tiempo’”, sostuvo. (Fuente: http://tiempo.infonews.com/notas/zaffaroni-es-una-forma-de-extorsion).

De mantenerse el proceso inquisitivo tal como está previsto en el Proyecto de Ley no se considera apropiado sostener este instituto. Sí podría estimarse su incorporación en el supuesto que se modificara el Proyecto imprimiéndose un procedimiento acusatorio para el juzgamiento de las contravenciones, ya que este ofrece mayores garantías relacionadas con el respeto a los derechos constitucionales del que goza toda persona. Además no se encuentra suficiente fundamento legal que autorice el mantenimiento del artículo 72, habida cuenta de la posibilidad de mediación, la que se encuentra contemplada en los arts. 68 y 69 del Proyecto de Ley en estudio.

OBSERVACIÓN Nº 15

11) donde establece la reincidencia en el artículo 22.

Reincidencia

ARTÍCULO 22. El condenado por sentencia firme que cometiera una nueva contravención que afecta o lesiona el mismo bien jurídico, dentro de los dos años de dictada aquella, será declarado reincidente y la nueva sanción que se le imponga se agravará en un tercio del máximo. Se entiende que una nueva contravención afecta o lesiona el mismo bien jurídico cuando está contenida dentro del mismo capítulo.

En efecto, en doctrina, no todos los autores están conformes con que la reincidencia sea estimada como agravantes.

Quienes sostienen la improcedencia de erigir la reincidencia en circunstancia determinante de agravación de la pena, dicen que ésta debe guardar justa proporción con el delito, importando la retribución exacta del mal que con él se causó. Un nuevo delito debe ser reprimido con idéntico criterio, el que no puede modificarse por el hecho de que un delito anterior motivara una condena. En sustancia, se observa que el delicuente ha expiado ya el delito anterior el cual, por tanto, no es justo tener en cuenta al castigar otro delito posterior: non bis in idem (Así Baumann, Strafrecht, pág. 267).

Además, desde otro punto de vista, se dice que el volver a delinquir depende en gran parte de circunstancias o condiciones sociales no imputables a un individuo en particular (Carmignani, Teoría delle leggi della sicurezza sociale, T. III, Napoli, 1843, pág. 129; Merkel, A., Derecho Penal T.I, Madrid).

Pero más allá de las posturas que puedan adoptarse respecto a este instituto, lo cierto es que de acuerdo a cómo el Código Penal lo trata en su artículo 41, la reincidencia es de apreciación relativa, pues en dicha disposición es evaluada por el juzgador, juntamente con otras pautas objetivas y subjetivas que dicha regla establece, para individualizar la pena a aplicar, la que SIEMPRE TENDRÁ LUGAR DENTRO DE LOS MÁRGENES DE LA ESCALA PENAL PREVISTA PARA EL DELITO COMETIDO.

En cambio, en este Proyecto de Ley, la reincidencia trae como consecuencia directa, (esto es, que no depende de ninguna apreciación judicial), que la sanción se agrave en un tercio del máximo previsto para esa nueva contravención.

PROPUESTA: Por las razones expuestas, se propone la supresión del instituto de la reincidencia,(artículo 22) y del artículo 56 (Registro Contravencional) cuyo mantenimiento no tendría ningún sentido al suprimir el instituto de la reincidencia. Además deberá adecuarse, lo dispuesto en los artículos 26 suprimiendo la frase: "y los antecedentes contravencionales en los dos (2) años anteriores al hecho del juzgamiento" y lo establecido por el artículo 29 suprimiendo la frase: "y la sanción que le corresponderá en caso de reincidir", proponiendo la siguiente redacción:

Determinación y graduación de la sanción

ARTÍCULO 26.- La sanción en ningún caso deberá exceder la medida del reproche por el hecho ni será superior o más grave que la pedida por el fiscal.

Para elegir y graduar la sanción se deberán considerar las circunstancias que rodearon al hecho, la extensión del daño causado y en caso de acción culposa la gravedad de la infracción al deber de cuidado. Deberán ser tenidos en cuenta el carácter físico o jurídico de la persona del contraventor, los motivos, la conducta anterior al hecho, las circunstancias económicas, sociales y culturales y el comportamiento posterior, especialmente la disposición para reparar el daño, resolver el conflicto y mitigar sus efectos.

No serán punibles las conductas que no resulten significativas para ocasionar daño o peligro cierto para los bienes jurídicos individuales o colectivos protegidos.

Amonestación publicada

ARTÍCULO 29.- Consiste en la publicación a costa del contraventor en dos diarios de circulación en la localidad donde reside, y en un medio digital en línea de la provincia, del texto de la resolución dictada por el Juez en la cual motivadamente se señala al contraventor la naturaleza y alcances del hecho cometido, conminándolo a evitar su reiteración.

OBSERVACIÓN Nº 16

12) donde el artículo 62 atribuye al agente fiscal "las mismas facultades de dirección e investigación que el Código Procesal Penal otorga al Juez de Instrucción, con excepción de las medidas establecidas en el artículo 41 de la Constitución Provincial, cuya producción deberá ser solicitada al Juez Contravencional en turno. ..."

Como podrá observarse, el proyecto de ley en estudio imprime un procedimiento inquisitivo, violatorio de nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre DD.HH. vigentes a partir de la reforma constitucional de 1994 (Art 75 inc. 22 C.N. y Convención Americana sobre DD.HH. Art 8.1.). Por ello, se impone la necesidad de implementar un sistema acusatorio puro, a los fines de que este resulte acorde con las mencionadas normas legales.

En efecto, el sistema de enjuiciamiento INQUISITIVO, se caracteriza esencialmente por concentrar los poderes de investigar, acusar y juzgar en una misma persona (el inquisidor), quien como delegado del poder (Monarca, Príncipe o Papa), ejercía la jurisdicción en una plenitud desmedida y monopolizante. Con ello se confundían en una misma persona, las instituciones procesales de acción y jurisdicción, lo que representaba por antonomasia, la negación absoluta de la imparcialidad como elemento inherente a la administración de justicia.

En cambio el procedimiento ACUSATORIO se caracteriza por separar las instituciones procesales de la acción con la de la jurisdicción. La jurisdicción es el poder de juzgar, el poder de "decir el derecho", debiendo sólo estar reservada a jueces letrados o jurados con la dirección de un juez letrado; y para cumplir esa misión en el proceso, debe mantener una POSICIÓN EQUIDISTANTE DE LAS PARTES y distante del objeto del mismo, o sea IMPARCIAL. El Tribunal ejerce así la jurisdicción, ajeno a la contienda de las partes, estándole vedado la introducción de material probatorio al proceso.

También la diferencia que lo caracteriza es que en el sistema ACUSATORIO, el imputado no es más, un mero objeto de persecución, sino que es parte del proceso, es sujeto de derecho en igualdad de posiciones con la parte acusadora. Como se advierte, el ACUSATORIO es el único sistema de enjuiciamiento que tanto filosófica como normativamente se erige como ACORDE AL DEBIDO PROCESO PENAL. Lo primero porque

sólo de este modo es posible, separando los poderes de acción y jurisdicción, que el tribunal o jurado sean imparciales en abstracto; cualidad esencial e inherente al acto humano de “hacer justicia”. Lo segundo porque la GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD, está normativamente impuesta por las Constituciones Nacional y provinciales, como así también por los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos. (Jauchen, Eduardo “Tratado de Derecho Procesal Penal” tomo I Edit. Rubinzal Culzoni).

Conforme lo exige la Convención Americana sobre Derecho Humanos (Art 8.1.) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el juicio debe ser público y frente a un “tribunal independiente e imparcial”. La única forma de cumplir con esta exigencia es mediante la implementación de un procedimiento adversarial acusatorio, donde la jurisdicción carezca de facultades en la promoción de la acción penal y en la incorporación de prueba; como así también QUE LAS PARTES PROCESALES, sea esta el Ministerio Público Fiscal o la Defensa del imputado, NO POSEAN FACULTADES JURISDICCIONALES.

Otorgar facultades jurisdiccionales al agente fiscal, implica un desbalance notorio en la relación jurídico-procesal y con ello una violación a la garantía de “igualdad de posiciones”, estipulada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Art 14.3 “Durante el proceso, toda persona acusada de un delito, tendrá derecho EN PLENA IGUALDAD, a las siguientes garantías . . . “ Análoga normativa expresa el Art. 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas (San Francisco, EE.UU. 1945) y el Pacto de San José de Costa Rica en su Art. 8.2.

Si el Estado ejerce la pretensión punitiva mediante el Ministerio Público Fiscal y las Fuerzas de Seguridad (Policía Federal, Policía Provincial, Gendarmería Nacional, Policía Aeroportuaria, etcétera), quienes actúan como “auxiliares de justicia”, componiendo de este modo un aparato oficial dotado de infraestructura y personal direccionado para ese efecto; es necesario que la persona que resulte imputada, tenga una tutela legal apta y suficiente, como así también las garantías procedimentales, para balancear la genérica desigualdad que se presenta entre el ciudadano y todo el aparato penal-represivo del Estado. (Jauchen, Eduardo “Tratado de Derecho Procesal Penal” tomo I Edit. Rubinzal Culzoni). Debiendo ser el enjuiciamiento penal, un “proceso de partes”, es necesario dotar al imputado de las facultades equivalentes a las del Ministerio Público Fiscal.

Es inadmisible a la luz de los Tratados Internacionales sobre DD.HH., que el agente fiscal cuente con “facultades jurisdiccionales”, tal como lo dispone el artículo 62 del Proyecto, cuando habla de conferir las “mismas facultades de dirección e investigación que el Código Procesal Penal otorga al Juez de Instrucción”. Asimismo, resulta inaceptable que, como lo dispone la misma norma, el agente fiscal deba notificar al defensor solamente "las diligencias que por su naturaleza y características se consideren definitivas e irreproducibles", y "su producción", cuando lo que corresponde, para no violentar la garantía de igualdad de posiciones, es notificar al defensor todas las diligencias probatorias que pretenda producir. A la desigualdad, en detrimento del imputado que implica revestir de calidad de instrumento público (Art. 979, inc. 2 y 980 in fine Código Civil), al acta de constatación de la que habla el Art. 59 del proyecto; se le suman las facultades de un juez de instrucción atribuidas al agente fiscal, lo cual gravita en una desigualdad procesal manifiesta.

En el Artículo 63 del proyecto se hace mención a que el agente fiscal “PODRÁ DISPONER” de medidas preventivas tales como: internación del imputado, detención y demora, secuestro y clausura preventiva. El concepto “DISPONER” habla de la posibilidad de ordenar la medida independientemente del órgano jurisdiccional; lo correcto hubiese sido “REQUERIR AL JUEZ”. Conteste a ello, autores de la talla de Levene, entienden que cuando el fiscal cumple funciones decisorias, se viola la garantía del juez natural. (Citado por Falcone, Roberto Atilio y Madina, Marcelo Augusto “El nuevo proceso penal en la Provincia de Buenos Aires” Edit. Ad Hoc).

En el Artículo 65 se habla de una “AUDIENCIA ÚNICA” en la que el agente fiscal “REALIZARA EL INTERROGATORIO” al imputado. Al tratarse la declaración del imputado un “ACTO DE DEFENSA” y no un acto de prueba; esto debería ser recibido por ante el juez contravencional y no sólo ante la presencia del fiscal. Al momento de ser oído, es preciso en

consecuencia que el imputado, esté exento de toda clase de presión, coacción o intimidación; esta garantía se puede ver vulnerada aún en presencia de un abogado defensor, si el interrogatorio es realizado por quien detenta el ejercicio de la acción penal, que no es un tercero imparcial, sino que tiene un interés concreto que es perseguir contravencionalmente a supuestos infractores. Además las preguntas no deben ser capciosas, sugerentes, tendenciosas, confusas, equívocas, sugestivas; las respuestas no pueden ser instadas perentoriamente, ni se harán reconvenciones al imputado, tendientes a obtener una confesión. Por todo ello, como señala Dalbora, la recepción de la declaración es indelegable y quien la debe recibir es el juez natural, porque esto implica la garantía del debido proceso. (Dalbora, Francisco "El relato del imputado en la ley nacional: intervención del juez natural y del defensor" XIII Congreso Nacional de Derecho Penal).

De todo ello, se concluye que con la sanción de un Código Procesal Contravencional, es la mejor oportunidad para instalar un SISTEMA ACUSATORIO PURO, con respeto por la igualdad procesal de las partes, eliminando la instrucción formal, las facultades de un juez de instrucción; como así también trasladar al fiscal una INVESTIGACIÓN PENAL PREPARATORIA desformalizada, bajo el control de un juez, ubicando al juicio oral como el tramo esencial del procedimiento contravencional.

La INVESTIGACIÓN PENAL PREPARATORIA debe importar una actividad totalmente desformalizada, dirigida a constatar la posible existencia de un hecho, sus circunstancias, a fin de asegurar elementos probatorios que serán evacuados en la audiencia oral (Falcone, Roberto Atilio y Madina, Marcelo Augusto. El nuevo proceso penal en la Provincia de Buenos Aires, Edit. Ad Hoc). En su informalidad radica su diferencia con un sumario de instrucción, por ello es necesario quitarle facultades instructorias al fiscal. Lo contrario, es decir, otorgarle formalidad a los actos procesales previos al debate oral, responde claramente a una lógica inquisitiva.

El derecho a la igualdad en el proceso penal importa en sus alcances que el acusado debe tener normativa y jurídicamente, las mismas oportunidades de defensa, ofrecimiento de prueba, intervención, contralor, alegación e impugnación que la parte acusadora. La Corte Interamericana de DD.HH. ha declarado que "para alcanzar sus objetivos, el proceso debe reconocer y resolver los factores de desigualdad real de quienes son llevados ante la justicia. ."

Para concluir este tema, una reflexión de Luigi Ferrajoli, sobre las bondades del sistema ACUSATORIO, cuando expresa que "el método acusatorio se caracteriza por una desconfianza ilimitada del poder como fuente autónoma de la verdad. . . (El método acusatorio) concibe a la verdad como el resultado de una controversia entre partes contrapuestas, en cuanto respectivamente portadoras del interés en el castigo del culpable y de la tutela del presunto inocente, hasta la prueba en contrario". (Ferrajoli, Luigi. Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal, Edit. Trotta).

Por lo expuesto, otorgar al agente Fiscal las mismas facultades de un juez de instrucción; confundir en un mismo sujeto procesal, las funciones de acción y jurisdicción; además de ser refractario a los Convenios Internacionales sobre DD.HH. vigentes a partir de la reforma constitucional de 1994 (Art. 75, inc. 22, C.N. y Convención Americana sobre DD.HH. Art. 8.1.); importa una violación a la garantía del debido proceso por posicionar a las partes en desigualdad procesal, es decir no respetar el principio de "igualdad de armas".

PROPUESTA: Como podrá observarse, el proyecto de ley en estudio imprime un procedimiento inquisitivo, violatorio de nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre DD.HH. vigentes a partir de la reforma constitucional de 1994 (Art 75 inc. 22 C.N. y Convención Americana sobre DD.HH. Art 8.1.). Por ello, se propone implementar un sistema acusatorio puro, a los fines de que este resulte acorde con las mencionadas normas legales. En cuanto al artículo en estudio se ensaya la siguiente redacción, a los fines de lograr una aproximación a sistema acusatorio que se promueve, la que igualmente deberá revisarse, si la opción fuere implementar un procedimiento acusatorio.

Ello a los fines de lograr un plexo normativo que deberá estar en su conjunto, en sintonía con el sistema que se propugna.

Investigación
ARTÍCULO 62.- Promovida la acción contravencional, el agente Fiscal practicará la investigación con la finalidad de reunir, con la mayor celeridad, los elementos esenciales que permitan formar apreciación preliminar acerca de la existencia del hecho punible, su calificación legal, la individualización y condiciones personales de los partícipes del mismo. En el ejercicio de su función podrá disponer todas las medidas que consideren necesarias para el cumplimiento de los actos que ordene, excepto aquellas establecidas en el artículo 41 de la Constitución Provincial y las medidas preventivas establecidas en el Capítulo Único del Título III del Libro I de este Código, cuya producción deberá ser solicitada al Juez Contravencional en turno, bajo pena de nulidad.

Cualquier diligencia y aquellas que por su naturaleza y características se consideren definitivas e irreproducibles, deberán ser notificadas por cualquier medio fehaciente en forma previa al defensor, bajo pena de nulidad. Bajo la misma sanción, se le notificará su producción, y que puede examinar sus resultados.

El Fiscal actuará en resguardo de la vigencia equilibrada de los valores jurídicos consagrados en las disposiciones constitucionales y legales, debiendo velar por la limitación de su ejercicio abusivo o disfuncional y adecuará sus actos a un criterio objetivo debiendo formular los requerimientos e instancias conforme a este criterio, aún a favor del imputado.

Formulará motivadamente sus requerimientos y conclusiones, de manera que se basten a sí mismos.

La víctima y el imputado podrán producir las diligencias probatorias que crean necesarias para el esclarecimiento de la verdad.

2) OTRAS OBSERVACIONES.

OBSERVACIÓN Nº 17

"Mediación
ARTÍCULO 68. En cualquier estado de la investigación o del proceso, a pedido del imputado o de la víctima o de oficio, siempre que no se trate de episodios de violencia familiar y que no se encuentre afectado el interés público o de terceros, el Fiscal o el Juez podrán derivar el caso al Centro de Mediación Judicial o Casa de Justicia de Tolhuin a los fines de iniciar un proceso de mediación que ponga fin al conflicto.
Siempre necesitará el expreso consentimiento de la víctima y del imputado, y el acuerdo podrá contemplar algún tipo de reparación hacia la comunidad que resulte significativa para la víctima.

El trámite del proceso de mediación se regirá por las normas establecidas para las causas penales por la ley correspondiente."

La observación recae en lo que respecta a la materia del conflicto que puede ser sometida a mediación. En efecto, el proyecto de ley establece expresamente que el fiscal o el Juez podrán derivar el caso al Centro de Mediación Judicial o Casa de Justicia "siempre que no se trate de episodios de violencia familiar y que no se encuentre afectado el interés público o de terceros,"

En concordancia con lo dispuesto por los arts. 10 y 30 de la Ley provincial Nº 804, lo correcto sería que en lugar de "interés público" la norma refiera a "orden público", porque aquellas cuestiones de orden público son las que las partes no pueden disponer.

Así el artículo 10 de la Ley Provincial Nº 804 establece en su parte pertinente lo siguiente:
"Artículo 10.- Podrán someterse al procedimiento de mediación en sede judicial aquellos casos en los que la materia del conflicto sea susceptible de transacción o corresponda a derechos disponibles para las partes. ...".

Y el artículo 30 de la mencionada ley dispone lo siguiente:
"Artículo 30.- Entiéndase por mediación extrajudicial aquella que se realiza ante mediadores o Centros de Mediación no dependientes del Poder Judicial ni de los Colegios Públicos de Abogados y habilitados de acuerdo a la reglamentación que se dicte para cada caso.

Podrán intervenir en todas aquellas controversias que no hayan sido judicializadas ni impliquen derechos indisponibles o se encuentre afectado el orden público."

En definitiva, el caso sometido a proceso contravencional no será mediable, si el conflicto está abordado por el orden público (art. 21, Cód. Civil). Sabido es que el orden público, como figura del Derecho sustantivo, es una construcción jurídica que entre sus efectos está el de estipular la "indisponibilidad de la relaciones jurídicas" por parte de los particulares, respecto de las instituciones por él alcanzadas. Obviamente tampoco será mediable, si hay intereses de terceras personas en juego.

Comprobado por el magistrado interviniente que el caso no se trata de episodios de violencia familiar y que no se encuentra afectado el orden público o el interés de terceros, el juez deberá derivar el caso a mediación.

PROPUESTA: Se propone la siguiente redacción:

Mediación

ARTÍCULO 68.- En cualquier estado de la investigación o del proceso, a pedido del imputado o de la víctima o de oficio, siempre que no se trate de episodios de violencia familiar y que no se encuentre afectado el orden público o el interés de terceros, el juez deberá derivar el caso al Centro de Mediación Judicial o Casa de Justicia de Tolhuin a los fines de iniciar un proceso de mediación que ponga fin al conflicto.

Siempre necesitará el expreso consentimiento de la víctima y del imputado, y el acuerdo podrá contemplar algún tipo de reparación hacia la comunidad que resulte significativa para la víctima.

El trámite del proceso de mediación se regirá por las normas establecidas para las causas penales por la ley correspondiente.

OBSERVACIÓN Nº 18

La presente observación recae sobre dos artículos: el artículo 45 y 46.

Internación tuitiva

ARTÍCULO 45.- Aún cuando no se presumiera la comisión o participación en alguna de las conductas tipificadas en el Libro Segundo de este Código, el funcionario interviniente tendrá la obligación de disponer el traslado al nosocomio público más cercano de cualquier persona hallada en la vía pública, cuando el estado en que se encuentre lo hiciera aconsejable con el objeto de proteger su integridad psicofísica.

No se encuentra fundamento legal para incorporar en un Código Contravencional una norma de estas características, cuando según la misma no es necesario siquiera que se presuma la comisión o participación en alguna de las coductas tipificadas por este Código.

Si bien se reconoce la buena intención de la norma, vale aclarar que la obligación que pesa sobre el funcionario interviniente, responde a toda lógica y sentido común y resulta ser un deber propio de su cargo o función.

PROPUESTA: Se propone la eliminación del artículo 45.

Internación preventiva

ARTÍCULO 46. Cuando el estado en que se hallare el presunto contraventor hiciere necesario su traslado a un nosocomio público con el objeto de proteger su integridad psicofísica y/o mantener el orden público, o en el caso previsto por el artículo 122 del Libro Segundo de esta Ley, el funcionario interviniente dispondrá su traslado en el acto al establecimiento más cercano para su diagnóstico por un médico responsable, quien determinará si debe ser internado por el lapso necesario para su restablecimiento. Comunicará esa situación de inmediato a la Defensoría Pública correspondiente. Los familiares del presunto contraventor podrán solicitar la derivación a un nosocomio privado a su costa, la que de ser factible a criterio del médico tratante se realizará por acta de entrega suscripta ante la autoridad de aplicación.

La remisión al artículo 122 hace necesaria su transcripción:

Conducir con mayor cantidad de alcohol en sangre del permitido o bajo los efectos de estupefacientes.

Artículo 122.- Quien condujere un vehículo superando los límites permitidos de alcohol en sangre o bajo la acción de otras sustancias que disminuyan la aptitud para hacerlo, será sancionado con multa de veinte (20) a cien (100) UM, o instrucciones especiales de tres (3) a doce (12) meses, o trabajo de utilidad pública de siete (7) a treinta (30) días, e inhabilitación. Admite culpa.

La sanción se elevará al doble:

a) cuando la contravención fuere cometida por el conductor de un vehículo motorizado de carga o de transporte de pasajeros en servicio;
b) cuando la contravención fuere cometida por el conductor de un vehículo de transporte escolar o de personas con limitación temporaria o permanente de sus capacidades.

La conducta contravencionalmente reprimida en la disposición antes transcripta, consiste en conducir un vehículo superando los límites permitidos de alcohol en sangre o bajo la acción de otras sustancias que disminuyan la aptitud para hacerlo. Resulta una norma contravencional en blanco.

Esta disposición, interpretada a la luz de lo dispuesto por el artículo 46 del proyecto de ley en análisis, nos lleva a la conclusión que el conductor que se encuentra encuadrado en la norma del artículo 122 debe ser trasladado a un nosocomio, en forma obligatoria y conforme el procedimiento que estipula el artículo 46 que expresamente dispone que: "...el funcionario interviniente dispondrá su traslado en el acto al establecimiento más cercano para su diagnóstico por un médico responsable, quien determinará si debe ser internado por el lapso necesario para su restablecimiento. Comunicará esa situación de inmediato a la Defensoría Pública correspondiente. Los familiares del presunto contraventor podrán solicitar la derivación a un nosocomio privado a su costa, la que de ser factible a criterio del médico tratante se realizará por acta de entrega suscripta ante la autoridad de aplicación."

Como podemos observar, el tratamiento al presunto contraventor de la norma del artículo 122 es más grave a su respecto, que el que preven las ordenanzas municipales, cuando ejercen su poder punitivo contra conductas similares a las descriptas en el mencionado artículo.

Además se debe poner de resalto que el artículo 122 contraviene el principio de legalidad por revestir la calidad de norma contravencional en blanco, que es aquella que remite a otra ley o reglamentación para definir su contenido.

A todo evento y conforme lo que apuntara anteriormente al referirme a las medidas preventivas, reitero que éstas restringen la libertad del imputado y el ejercicio de sus facultades, pese al estado de inocencia del que goza el presunto contraventor, lo cual no resulta apropiada la incorporación de la norma del artículo 46.

A mayor abundamiento cabe destacar que resulta ínsito al deber de todo funcionario público que su accionar deberá ser acorde a la situación que objetivamente se desarrolle, debiendo ajustar sus actos a lo que razonablemente corresponda de acuerdo al caso concreto.

PROPUESTA: Se propone la supresión del artículo 46.

OBSERVACIÓN Nº 19

Esta observación recae sobre el artículo 58 que expresa:

Simple denuncia

ARTÍCULO 58. Toda persona podrá denunciar hechos que a su juicio puedan constituir una contravención reprimida por este Código. Podrá formularla por escrito u oralmente, personalmente, por representante o por mandatario especial, debiendo en este último caso agregarse el poder.

La observación que se efectúa a esta norma es que debiera agregarse que la frase "mayor de edad" luego de la palabra "persona", para que quede claro que sólo las personas mayores de edad resultan aptas para denunciar hechos que a su juicio puedan constituir una contravención.

PROPUESTA: Se propone la siguiente redacción:
Simple denuncia
ARTÍCULO 58. Toda persona mayor de edad podrá denunciar hechos que a su juicio puedan constituir una contravención reprimida por este Código. Podrá formularla por escrito u oralmente, personalmente, por representante o por mandatario especial, debiendo en este último caso agregarse el poder.

OBSERVACIÓN Nº 20

Esta observación recae sobre el artículo 70 que dispone:

Seguimiento
ARTÍCULO 70. En los casos en los que se arribe a un acuerdo, el fiscal deberá disponer el control y seguimiento de lo pactado, pudiendo para ello solicitar colaboración a instituciones públicas y privadas; también podrá disponer que se efectúe directamente desde el Centro de Mediación o Casa de la Justicia de Tolhuin.

La observación al artículo que precede se centraliza en el error consistente en la denominación: "Casa de la Justicia"; cuando correctamente corresponde: "Casa de Justicia", por lo que deberá corregirse en tal sentido, la redacción del dicho precepto.
PROPUESTA: Se propone la siguiente redacción:
Seguimiento
ARTÍCULO 70. En los casos en los que se arribe a un acuerdo, el Fiscal deberá disponer el control y seguimiento de lo pactado, pudiendo para ello solicitar colaboración a instituciones públicas y privadas; también podrá disponer que se efectúe directamente desde el Centro de Mediación o Casa de Justicia de Tolhuin.

OBSERVACIÓN Nº 21

Esta observación recae sobre el artículo 19 que dispone:
Ámbito de aplicación. Leyes especiales
ARTÍCULO 19.- Las disposiciones generales de este Código serán aplicables a las contravenciones tipificadas en el Libro Segundo (Parte Especial), y a las previstas en leyes especiales si éstas no establecen normas expresas.

Cuando un hecho constituya a la vez una contravención y un delito, a excepción de las figuras contenidas en el Capítulo III, Título I, del Libro Segundo, las disposiciones de este Código no serán aplicables y el juzgamiento del mismo corresponderá exclusiva y excluyentemente al Fuero Penal, de conformidad con las normas que regulan su procedimiento, toda vez que por aplicación de esta ley se entenderá que la tipicidad contravencional queda subsumida en la penal.
Sin perjuicio de ello, en los casos previstos en el Capítulo III, Título I, del Libro Segundo, el inicio de la acción penal suspenderá la prescripción de la acción contravencional relativa al mismo hecho. En caso de absolución en el proceso penal, se reanudará el curso de la prescripción de la acción contravencional, debiéndose continuar con el proceso contravencional y aplicarse, en su caso, las sanciones que este Código prevé.

La observación a esta norma consiste en que, conforme lo expresado en su primer párrafo, estamos en presencia de una norma contravencional en blanco, contraviniendo el principio de legalidad. En efecto, la ley en blanco es aquella que remite a otra ley o reglamentación para definir su contenido. Al no estar individualizadas las contravenciones y sus sanciones contenidas en las “leyes especiales” que tampoco lo están, deja completamente librado al intérprete cuáles serían esas leyes especiales a las que se refiere el artículo y por ende también, qué conductas son o no contravencionales.

En otras palabras, el supuesto de hecho no se encuentra regulado en la norma legal, sino que debe acudirse a otra norma jurídica (a esas "leyes especiales"). El uso de esta técnica atenta contra el principio de taxatividad y contra el principio de legalidad, al tener que

recurrir a otras normas que no sabemos cuáles son, ya que no se encuentran individualizadas en el artículo en estudio. Técnica que por añadidura, transfiere potestad legislativa al Poder Judicial, al dejar expuesto a su exclusiva y arbitraria actividad la constitución de conductas contravencionales.

El agregado "si éstas no establecen normas expresas" (refiriéndose a las normas especiales), hace aún más difícil la interpretación, atento a que no se puede establecer a qué contravenciones de qué "leyes especiales" si estás no establecen "normas expresas", de qué tipo?, está aludiendo la norma . Esta terminología vaga, imprecisa y difusa sumerge al intérprete en una verdadera confusión, pudiendo depender de cada operador que una conducta sea contravencional o no lo sea. Ello también atenta contra el principio de taxatividad el cual exige de los legisladores el mayor esfuerzo en precisión de redacción y contra el principio de igualdad en cuanto a la aplicación de las leyes.

Estas OBSERVACIONES ponen en jaque la seguridad jurídica. En efecto, el vivir en un Estado de derecho conlleva varios supuestos, uno de los cuales es que todas las personas tienen derecho a estar informadas acerca de lo que el Estado ordena o prohibe. Y es un deber del Estado, garantizar ese derecho a los ciudadanos.

La seguridad jurídica, de raigambre constitucional, es un concepto que "nos endereza a la idea de que es posible prever razonablemente con suficiente precisión y sin sorpresivas irrupciones, cuáles han de ser las conductas de los operadores gubernamentales y de los particulares en el marco estable del ordenamiento jurídico, así como contar con adecuada protección frente a la arbitrariedad y a las violaciones de ese mismo orden jurídico.-"

A su turno y con relación al PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD el célebre Marat, en su Plan de Legislación Criminal de la Francia Revolucionaria decía: Es muy importante que no haya nada oscuro, incierto o arbitrario en la idea que se formule de los delitos y de las penas, porque importa que cada cual entienda perfectamente las leyes y sepa a qué se expone violándolas.

Los fundamentos del principio de taxatividad, son explicados con demasiada coherencia por Madrid Conesa, quien manifiesta: "Tuvieron como consecuencia que se viera en este principio (.) como una institución tendiente a garantizar la seguridad jurídica a través del conocimiento que los ciudadanos pueden y deben extraer de la ley. El ciudadano, consciente de sus derechos y obligaciones, es libre en el momento de su actuación, y es libre precisamente, porque conoce los límites legales de su libertad, dentro de la cual el individuo soberano no se ve sometido a las injerencias del Estado. Pero para que el ciudadano pueda disfrutar de esa esfera de libertad es necesario que conozca los límites de la misma, esto es, es necesario que conozca la ley. En caso de que el ciudadano no pueda conocer de forma clara y terminante los límites de su libertad, se verá limitado en su acción, ya que, por miedo a la agresión estatal, no actuará. Si las leyes no reúnen el suficiente grado de claridad y determinación, la inseguridad jurídica reinará en la sociedad y la libertad será inexistente."

El segundo y el tercer párrafo del artículo 19 en estudio, nos demuestra que de concretarse lo que la norma prevé, ello implicaría una violación del principio "NON BIS IN IDEM", implícitamente contenido en nuestro sistema de garantías que aseguran en nuestra Carta Magna Nacional el debido procedimiento legal. Además contraría el propio principio contenido en el artículo 8 del Proyecto de ley en estudio.

"Este principio busca proteger los derechos de los individuos que han sido procesados por determinados hechos para que no vuelvan a ser enjuiciados por los mismos hechos. A diferencia de la fórmula utilizada por otros instrumentos internacionales de protección de derechos humanos (por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, artículo 14.7, que se refiere al mismo "delito"), la Convención Americana utiliza la expresión "los mismos hechos", que es un término más amplio en beneficio de la víctima" (Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C Nº 33 -parr.66-: CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS)

La norma en estudio establece que "....el inicio de la acción penal suspenderá la prescripción de la acción contravencional relativa al mismo hecho. En caso de absolución en el proceso penal, se reanudará el curso de la prescripción de la acción contravencional,

debiéndose continuar con el proceso contravencional y aplicarse, en su caso, las sanciones que este Código prevé".

En virtud de que iniciadas las actuaciones en sede penal, esto es, excitada la jurisdicción penal por parte del titular de la acción penal, podemos afirmar que hubo un proceso propiamente dicho, independientemente que el mismo finalizara con sentencia absolutoria o condenatoria. Por lo tanto no resulta legítimo, que luego, reanudándose los términos de la prescripción de la acción contravencional, la persona sea sometida a juzgamiento nuevamente. Máxime cuando además, se le estaría dando una doble chance al Fiscal otorgando así una mayor ventaja al Estado frente al ciudadano, lo que contraría el principio de igualdad de armas.

Dicho en otros términos, la continuación de la persecución contravencional implica una violación a la garantía non bis in idem, puesto que el absuelto en sede penal, sería llevado a juicio en sede contravencional por la misma conducta por la que, anteriormente fue absuelto en sede penal, correspondiendo afirmar que dicho resolutorio hace cosa juzgada no pudiendo, en consecuencia, volver a perseguirlo por el mismo hecho.

Así lo ha entendido la jurisprudencia en múltiples fallos, de los cuales transcribiremos el siguiente:

Sumario: C2001712

TEMA DERECHO CONTRAVENCIONAL-COSA JUZGADA-NON BIS IN ÍDEM: PROCEDENCIA-SOBRESEIMIENTO

Texto

En el caso, el hecho que se les imputara otrora en sede penal y luego en esta Justicia Contravencional es uno e inescindible, pues se trata del mismo comportamiento atribuido a los mismos encartados. Ahora bien, si el proceso contravencional es de íntima naturaleza penal, habremos de concluir que se advierte en el caso la identidad de la causa de persecución referida. Ciertamente, el aditivo de identidad en la causa de la pretensión punitiva penal surge de dos vertientes, estas son: por un lado la situación generada por el sometimiento a un nuevo juzgamiento que puede llegar a darse del hecho a los mismos encausados y por otro, la idéntica naturaleza penal que poseen tanto el fuero de instrucción como el nuestro, con lo que, la habilitación de la eventualidad persecutoria, fluye fatalmente en la violación de la garantía constitucional que protege contra el doble juzgamiento.Si bien el mismo juez de instrucción ordenó la extracción de testimonios y su remisión a este fuero, es innegable que la continuación de la persecución penal -ahora en esta sede- implicaría una violación a la garantía de non bis in idem, pues los imputados serían llevados a juicio, por la misma conducta por la que anteriormente fueron sobreseídos en el estrado de instrucción; así corresponde afirmar que dicho decisorio, hace cosa juzgada en este fuero, impidiendo volver a perseguirse a los imputados por el mismo hecho. Ello así, propugnar lo contrario implicaría violentar el derecho constitucional a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho toda vez que existe sobreseimiento -en los términos del artículo 336 inciso 2 del Código Procesal Penal de la Nación- dictado en sede penal en una causa anterior por los mismos hechos y protagonizados por los mismos sujetos y, en consecuencia, la resolución recurrida habrá de ser cohonestada en este estrado. (Del voto de los Dres. Lucangioli y Dessanti)

CÁMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BS. AS. CIUDAD DE BUENOS AIRES

Sala 02 (Oscar Alberto Lucangioli-Raúl Agustín Dessanti)
B, D. L. y R, C. B. s/ Ley Nro. 255
SENTENCIA del 11 de Julio de 2001
Fuente: Oficial. Infojus (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Presidencia de la Nación).
PROPUESTA: Se propone la siguiente redacción.
Ámbito de Aplicación. Competencia.

ARTÍCULO 19.- Las disposiciones generales de este Código serán aplicables a las contravenciones tipificadas en el Libro Segundo (Parte Especial).
Cuando un hecho constituya a la vez una contravención y un delito, las disposiciones de este Código no serán aplicables y el juzgamiento del mismo corresponderá exclusiva y excluyentemente al Fuero Penal, de conformidad con las normas que regulan su procedimiento, toda vez que por aplicación de esta ley se entenderá que la tipicidad contravencional queda subsumida en la penal.

OBSERVACIÓN Nº 22

Esta observación se basa en lo dispuesto por el artículo 24 en cuanto a que"el Fiscal y el juez se esforzarán para que el contraventor tome consciencia de la responsabilidad que le incumbe como partícipe de la comunidad democrática."

En efecto, no es función ni del juez ni del Fiscal, que el contraventor "tome consciencia de la responsabilidad que le incumbe como partícipe de la comunidad democrática."

"Como lo señala Germán J. Bidart Campos, por jurisdicción constitucional debe entenderse "la función jurisdiccional ejercida para tutelar, mantener y controlar la supremacía constitucional (…) Entendemos que en sentido amplio, la jurisdicción constitucional comprende también la interpretación de la Constitución..." (Tratado Elemental de Derecho Constitucional, t. II, págs. 349/350, Ediar, Bs. As. 1986).

En cuanto a las funciones del Ministerio Público Fiscal, podemos afirmar que en general, a este le corresponde promover y ejercer la acción contravencional. de carácter público, en la forma establecida por la ley y practicar la investigación contravencional preparatoria.

PROPUESTA: Finalidad de la sanción

ARTÍCULO 24.- La sanción tiene por fin la adaptación del individuo a las condiciones de la vida en una comunidad jurídicamente organizada, necesarias para la realización individual y social.

OBSERVACIÓN Nº 23

Esta observación refiere al artículo 25.3 que establece las "Sanciones sustitutivas". En efecto, no corresponde que el juez sustituya las sanciones impuestas, ni aún cuando el contraventor no cumpliere o quebrantare las sanciones impuestas, porque ello importaría quebrantar el principio de correlación de la acusación con la sentencia.

La base de interpretación de este principio está constituida por la relación del mismo con la máxima de la inviolabilidad de la defensa en juicio, consagrado por el artículo 18 de la Constitución Nacional.

Para comprender el concepto resultan ilustrativas las palabras de Maier "todo aquello que, en la sentencia signifique una sorpresa, para quien se defiende, en el sentido de un dato, con trascendencia de ella, sobre el cual el imputado y su defensor no se pudieron expedir, cuestionarlo y enfrentarlo probatoriamente, lesiona el principio estudiado".

PROPUESTA: Se propone la siguiente redacción:

Enumeración

ARTÍCULO 25.- Las sanciones que este Código establece son principales, accesorias y sustitutivas.

25.1) Sanciones principales: Son sanciones principales:

25.1.1) Amonestación formal.
25.1.2) Amonestación publicada.
25.1.3) Caución de no ofender.
25.1.4) Multa.
25.1.5) Reparación del daño.
25.1.6) Instrucciones especiales.

25.1.7) Trabajo de utilidad pública.
25.2) Sanciones accesorias: Son sanciones accesorias:
25.2.1) Prohibición de concurrencia.
25.2.2) Clausura.
25.2.3) Inhabilitación.
25.2.4) Decomiso.
25.2.5) interdicción de cercanía.

Las sanciones accesorias sólo podrán imponerse juntamente con alguna de las establecidas como principales, cuando a criterio del juez resulten procedentes en atención a las circunstancias del caso.

OBSERVACIÓN Nº 24

Esta observación recae sobre el artículo 76, el que atribuye facultades inquisitivas al juez Correccional al facultarlo, para resolver el recurso, a disponer "de oficio medidas para mejor proveer, la producción de prueba adicional, incluso citar al condenado o al denunciante para oírlo personalmente".

En honor a la brevedad, me remito a los fundamentos expuestos en la observación anterior, por considerar que el artículo cuestionado violenta también con el principio de correlación entre la acusación y la sentencia, agregando además que este principio exige la exclusión de toda posible indefensión para el acusado, dicho de otra manera exige que el hecho objeto de acusación y el que es base de la condena permanezcan inalterables. Viene a cumplir con el postulado "nadie puede ser condenado sin ser oído".

En consecuencia, de producirse las medidas que involucra la norma (medidas para mejor proveer, prueba adicional, etc,) ello equivaldría a afectar el derecho de defensa del presunto contraventor, además de violentar el principio que rige el sistema acusatorio que refiere a la separación del órgano acusador respecto del órgano juzgador. En consecuencia, al ejercer el juez correccional funciones investigativas propias del órgano acusador, este principio se vería transgredido.

PROPUESTA: Se propone la siguiente redacción:
Facultades del juez Correccional
ARTÍCULO 76.- Recibidas las actuaciones, el juez Correccional deberá resolver el recurso.
Deberá dictar sentencia fundada dentro de los sesenta (60) días de recibidas las actuaciones, confirmando total o parcialmente la resolución apelada, o bien dejándola sin efecto, pudiendo dictar en su reemplazo la que conforme a derecho corresponda, pero no podrá agravar la sanción impuesta.

B) OBSERVACIÓNES A LA PARTE ESPECIAL.

El análisis crítico de los tipos contravencionales contemplados en la parte especial del Proyecto de Ley en estudio se basa fundamentalmente en los siguientes puntos, a saber:

OBSERVACIÓN Nº 25

1) La parte especial del proyecto de ley propone, en muchas figuras, tipos contravencionales abiertos violando el principio de legalidad. Estos tipos abiertos recurren a terminologías vagas, imprecisas, difusas y ambiguas a la hora de definir su contenido, de tal manera que dejan completamente librado al intérprete el proceso de subsunción (adecuación del hecho al texto de la ley), pudiendo depender de la formación de cada operador que una conducta constituya contravención o no, lo que -como es obvio- atenta contra la seguridad jurídica que debe proporcionar un Estado de derecho. Técnica que por añadidura, transfiere potestad legislativa al Poder Judicial, al dejar expuesto a su exclusiva y arbitraria actividad la constitución de conductas contravencionales.

Esta indeterminación, ambigüedad, y falta de precisión en los tipos contravencionales se contradice con la naturaleza misma de la ley contravencional que tiene por principal función hacer público en qué supuesos, precisos y acotados, los actos, acciones u omisiones

de un individuo se convierten en contravencionales y se habilita la intervención del poder punitivo estatal.

Asimismo, se observa la incorrecta recurrencia a la deformada técnica de la ley en blanco contraviendo también el principio de legalidad. La ley en blanco es aquella que remite a otra ley o reglamentación para definir su contenido. Esta técnica ofrece una doble dificultad: por un lado los cambios en las reglamentaciones administrativas pueden convertir en ilícito aquello que se creía permitido sin que adquiera la misma difusión y conocimiento que se tiene cuando se sanciona una ley y puede importar una transgresión al principio republicano de división de poderes, ello en tanto el poder ejecutivo asume rol legislativo en materia de tanta trascendencia como lo es la punitiva. Ejemplo de la utilización de esta técnica lo constituyen los artículos 116, 122, 123 y 125, al aludir a las siguientes frases resaltadas:

Omitir recaudos de organización y seguridad.
ARTÍCULO 116.- Quien omitiere los recaudos de organización o seguridad exigidos por la legislación vigente o por la autoridad competente respecto de un acto o espectáculo públicos, ...
Conducir con mayor cantidad de alcohol en sangre del permitido o bajo los efectos de estupefacientes
Artículo 122.- Quien condujere un vehículo superando los límites permitidos de alcohol en sangre o bajo la acción de otras sustancias que disminuyan la aptitud para hacerlo,...

Participar, disputar u organizar competencias de velocidad o destreza en vía pública.
ARTÍCULO 123.- Quien participare, disputare u organizare competencias de destreza o velocidad con vehículos motorizados en la vía pública, violando las normas reglamentarias de tránsito, ...
Incumplir obligaciones legales
ARTÍCULO 125. Quien al conducir un vehículo participare de un accidente de tránsito y no cumpliere con las obligaciones legales a su cargo, ...

"...el principio de legalidad representa uno de los más notables jalones en la ardua tarea de protección de los individuos ante el poder punitivo cuando se desboca en forma indiscriminada.

Por cierto, transitando la noción de legalidad de un sentido lato a otro más estricto, en un primer término encontramos que este principio nos indica que únicamente pueden ser ciriminalizadas aquellas conductas contenidas en las leyes sancionadas de acuerdo al proceso regular indicado por las constituciones políticas de los Estados, de donde no es suficiente suficiente su vigencia formal (haber sido sancionada por el Poder Legislativo, promulgada por el Ejecutivo y publicada en el Boletín Oficial), sino que además debe contar con validez constitucional, es decir, encontrarse en sintonía con los postulados básicos del orden jurídico general." ("¿JUSTICIA DE FALTAS O FALTA DE JUSTICIA?. Análisis crítico del Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires (Decreto-Ley 8.031/73). Su comparación con el Régimen Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Leyes 12 y 1.472)" Mario Alberto Juliano, Editores Del Puerto, 2007.).

"A su tiempo, la legalidad penal o material implica que únicamente quedan atrapados por el poder punitivo aquellas conductas expresamente previstas por la ley. En tal sentido, el paradigmático artículo 18 de la Constitución Nacional es el que establece que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, colocando un claro límite a la persecución estatal: solamente aquello que se encuentra previsto por la ley puede ser materia de conocimiento judicial. Como es obvio, esta regla de oro es la que permite a los individuos conocer de antemano cuáles son las coductas que se encuentran penadas por la ley y cuáles (todas las demás) se encuentran exentas de la autoridad de los magistrados (artículo 19, CN)" ("¿JUSTICIA DE FALTAS O FALTA DE JUSTICIA? Análisis crítico del Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires (Decreto-Ley 8.031/73). Su comparación con el Régimen Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Leyes 12 y 1.472)", Mario Alberto Juliano, Editores Del Puerto, 2007).

PROPUESTA: Suprimir las remisiones a normas legales y reglamentarias y definir en forma expresa, clara y precisa cuál es la conducta que, según la voluntad del legislador, quedan atrapadas en el tipo contravencional.

OBSERVACIÓN Nº 26

2) En la Parte Especial del Proyecto, existen tipos contravencionales de peligro abstracto, violando el principio de lesividad. Por ello resulta tan solo declarativa, la disposición del artículo 3 y del último párrafo del artículo 26 del proyecto de ley en estudio.

En efecto, en estos tipos contravencionales existe un adelantamiento de la línea punitiva a estados predelictuales, donde en forma alguna se advierte la existencia de lesión a bienes jurídicos. La conducta típica se encuentra referida a riesgos futuros, hipotéticos y potenciales. (tal es el caso del artículo 121, por citar un ejemplo.).

"En este sentido entendemos que los denominados "delitos de peligro" deben contar con un límite fundamental como lo es la demostración de la existencia del supuesto peligro que contempla la ley. Dicho en otras palabras, el peligro nunca puede ser inferido iure et de iure, sino que siempre debe ser reputado iuris tantum, es decir, sujeto a prueba, ya que lo contrario supondría asignar a la ley un carácter constitutivo del cual carece. Es a la jurisdicción a quien corresponde evaluar en cada caso concreto si se encuentra configurado el supuesto previsto por la ley de acuerdo a las pruebas que se hayan rendido en el juicio respectivo." ("¿JUSTICIA DE FALTAS O FALTA DE JUSTICIA?. Análisis crítico del Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires (Decreto-Ley 8.031/73). Su comparación con el Régimen Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Leyes 12 y 1.472)" Mario Alberto Juliano, Editores Del Puerto, 2007)

"De tal modo que, así como para que se criminalice una conducta debe existir un bien jurídicamente relevante previamente reconocido por la ley, para que constitucionalmente se pueda habilitar el poder punitivo estatal debe haberse verificado una lesión -o al menos puesta en peligro, concreta y tangible- al bien jurídico contenido en el delito o contravención respectivo. Esto es lo que se denomina principio de lesividad." ("¿JUSTICIA DE FALTAS O FALTA DE JUSTICIA? Análisis crítico del Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires (Decreto-Ley 8.031/73). Su comparación con el Régimen Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Leyes 12 y 1.472)" Mario Alberto Juliano, Editores Del Puerto, 2007)

Asimismo, cabe destacar que en el proyecto de ley en estudio existen algunas figuras que carecen de “relevancia en la ilicitud” por ser conductas conflictivas intrascendentes, poco relevantes o que pueden ser resueltas por medios menos lesivos que el punitivo. Por ello, transgreden el principio de proporcionalidad, lógica derivación del principio de razonabilidad (artículo1, 33 CN) y lesividad. Ejemplo de ello, resultan el catálogo de figuras que castigan el peligro abstracto, del cual ya me he ocupado y remito en honor a la brevedad, como asimismo, las contenidas en los arts. 96, 97 y 98 del Proyecto en cuestión.

"Todo ello en razón de que el sistema penal (y el contravencional) es la respuesta más violenta a la que puede acudir el Estado para mediar en la resolución de los conflictos, y que como tal sólo debe (debería) ser empleado cuando no exista otro medio alternativo menos drástico de intervención."
("¿JUSTICIA DE FALTAS O FALTA DE JUSTICIA? Análisis crítico del Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires (Decreto-Ley 8.031/73). Su comparación con el Régimen Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Leyes 12 y 1.472)" Mario Alberto Juliano, Editores Del Puerto, 2007).

PROPUESTA: Suprimir todos los artículos que contengan peligro abstracto, como por ejemplo el artículo 121 y los que carecen de relevancia en la ilicitud, como por ejemplo los arts. 96, 97 y 98.

OBSERVACIÓN Nº 27

3) Quedan atrapados en las mismas redes sancionatorias el imprudente, negligente o imperito que aquel que obra con plena voluntad y conocimiento de la ilicitud.

En efecto, el artículo 6 del proyecto de ley en estudio estipula lo siguiente:

"Principio de culpabilidad

Artículo 6. Las contravenciones son dolosas o culposas. La forma culposa debe estar expresamente prevista en la ley."

Si bien el artículo transcripto ha adoptado una buena técnica legislativa al establecer que la forma culposa debe estar expresamente prevista en la ley, lo cierto es que quedan atrapados en las mismas redes sancionatorias el imprudente, negligente o imperito que aquel que obra con plena voluntad y conocimiento de la ilicitud. Es decir, en aquellos tipos contravencionales que expresamente admiten culpa, no se establece sanciones distintas en relación al obrar doloso. Esta indiferencia de las escalas sancionatorias entre las conductas dolosas y las culposas, puede prima facie, violentar el principio de culpabilidad y sus distintos grados de reproche.

Asimismo, es de criticar la extensión de la forma comisiva culposa que aparece como una indebida ampliación de los ámbitos de punibilidad a conductas descuidadas que no necesariamente implican una lesión o puesta en peligro cierto de los bienes jurídicos tenidos en consideración en cada tipo contravencional. Tal es el caso de los arts. 81, 82 y 91 por citar algunos ejemplos.

PROPUESTA: Establecer escalas sancionatorias distintas, diferenciando el obrar doloso del culposo.

OBSERVACIÓN Nº 28

4) El artículo 107 titulado "Impedir u obstruir la vía pública", el artículo 86 titulado "Impedir u obstaculizar ingreso o salida" y el artículo 99 titulado "Afectar funcionamiento de servicios públicos" presentan un escollo, de carácter constitucional ya que pueden violentar derechos constitucionales, de los que se destaca especialmente el derecho a la libertad de expresión, entendida esta como: "...el derecho a hacer público, a transmitir, a difundir y a exteriorizar un conjunto de ideas, opiniones, críticas, imágenes, creencias, etcétera, a través de cualquier medio: oralmente; mediante símbolos o gestos; en forma escrita; a través de la radio, el cine, el teatro, la televisión, etcétera." "... nuestra constitución protege la libertad "de expresión" en todas sus formas, las que reciben hospitalidad cierta. Apuntamos a esta hospitalidad haciendo una interpretación dinámica de la constitución, que asimila los cambios y formas de expresión actuales que no eran conocidos por el constituyente histórico". (Germán J. Bidart Campos, “Manual de la Constitución Reformada”, Tomo III, pág. 15, Ed. Ediar, año 1998).

Las normas, tal como han sido enunciadas, no parecen expresar la voluntad de no coartar a los ciudadanos el legítimo derecho de protestar y manifestar, más bien, entiendo que intentan poner freno a diferentes formas de protesta y expresión social, criminalizándolas.

En lugar de llevar más opiniones a la mesa de discusión en la que se debaten los asuntos que interesan a la sociedad en su conjunto, promoviendo el derecho a la participación, se opta por sancionar las voces críticas. Justamente son ellas las que deben ser protegidas en forma especial si lo que se busca es un verdadero fortalecimiento de la democracia. De esta manera se ve impedido el ejercicio del derecho a la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, contrariando el espíritu consagrado en el articulado de la Carta Magna Nacional a partir de la reforma de 1994. Asimismo se resiente la facultad de control por parte de la sociedad de los actos de los funcionarios públicos, a los cuales se les ha delegado el manejo de los recursos fundamentales del Estado. La norma en estudio no sólo no promueve el fortalecimiento de sistema democrático sino que pretende ponerle una modarza severa y selectiva.

Un sistema democrático que se precie de tal, precisa como lo ha dicho la Corte de Estados Unidos en el fallo “New York Times vs. Sulivan” —adoptado por nuestra Corte Federal

en su jurisprudencia y reiterado por la Corte Interamericana en el caso “Kimel”—, “un debate público absolutamente amplio, desinhibido y robusto, que puede incluir perfectamente ataques vehementes, cáusticos y muchas veces desagradables contra el gobierno y las autoridades públicas”.

En tanto, debemos recordar que en nuestro país la protesta, el escrache, las distintas manifestaciones públicas, han sido históricamente las herramientas para el reclamo de justicia de aquellos a quienes por razones de hecho o derecho les es vedado el acceso a las vías formales e institucionales del sistema judicial o que ni siquiera encuentran lugar donde su voz sea escuchada.

Nunca olvidemos que cuando los tribunales no permitían alcanzar la justicia, las marchas y los "escraches" fueron las formas de lucha que permitieron visibilizar los reclamos de verdad y justicia y esto es lo que hoy permite enjuiciar a los responsables del genocidio.

Teniendo en cuenta que los artículos en cuestión no garantizarían la tutela jurídica continua y efectiva de la libertad de expresión, de manifestarse, de protestar que la Constitución Nacional reconoce, los mismos no resultan concordantes la norma fundamental.

Con referencia específicamente al artículo 107 y desde el punto de vista técnico, se observa también que el tipo contravencional en cuestión presenta obstáculos de carácter probatorio, ya que la expresión "sin dar aviso" contenida en la norma nos sumerge en un problema. En efecto, para no infringir la norma en cuestión ¿cómo acreditaría un presunto contraventor, en el marco de un proceso contravencional, el hecho que efectivamente dio "aviso"?. En el supuesto que este hubiera dado aviso en formal verbal se encontraría con una dificultad, al no poder probar dicha acción. En tal caso debería haber recurrido a medios probatorios, como por ejemplo un acta notarial, lo cual le irrogaría erogaciones, de las cuales la norma parece no hacerse cargo. Pero siguiendo en el campo de las hipótesis, imaginemos que el aviso pudiera hacerse por nota, esa nota ¿dónde debe presentarse? ¿ante que autoridad?. Si debiera presentarla en una oficina pública y esta estuviera cerrada o eventualmente no la recibiera, ¿cómo cumpliría el extremo que exige la norma, para que no se configure la contravención, si el mismo le resulta de cumplimiento imposible?.

Volviendo al serio riesgo que las normas de los arts. 86 , 99 y 107 implican, esto es, de violar la libertad de expresión, el derecho a protestar, a manifestarse, a peticionar y de cercenar la facultad de participación de la sociedad en los asuntos públicos, es dable tener en cuenta que:

"En este sentido resultan apotegmáticas las palabras de Sebastián Soler en ocasión de desempeñarse como procurador general de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando con elocuentes palabras gratificó el modo en que las contravenciones pueden convertirse en instrumento de la opresión: "Cuando se quiere subvertir el régimen republicano y democrático, cuando se pretende coartar el libre ejercicio de los más elementales derechos individuales, las simples contravenciones resutan ser uno de los principales instrumentos de que se valen los gobiernos dictatoriales para sofocar la libertad. Por ello es preciso precaverse contra todas aquellas prácticas viciosas a que conduce un mal entendido aunque bien intencionado celo policial, en virtud de las cuales muchas veces se transforman en faltas, actitudes que no configuran sino el legítimo ejercicio de derechos que la Constitución garantiza a todos los habitantes de la Nación". ("¿JUSTICIA DE FALTAS O FALTA DE JUSTICIA? Análisis crítico del Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires (Decreto-Ley 8.031/73). Su comparación con el Régimen Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Leyes 12 y 1.472)", Mario Alberto Juliano, Editores Del Puerto, 2007.).

PROPUESTA: Se propone la supresión de los arts. 86, 99 y 107 o reformular su redacción en base a las fundamentaciones expuestas.

OBSERVACIÓN Nº 29

5) El artículo 109 del Proyecto en estudio, titulado "Producir ruidos molestos", suscita la misma observación que la realizada respecto al artículo 107, en relación al obstáculo de carácter constitucional allí analizado, esto es la posible violación de derechos fundamentales

reconocidos por nuestra Constitución Nacional, en especial el de libertad de expresión, el derecho de protestar, de manifestar y de participar en los asuntos públicos. Por tal motivo y en honor a la brevedad me remito a lo allí expuesto.

Asimismo, debe señarlarse que la materia que preve la norma pertenece a la esfera del Derecho Civil por encontrarse legislada en su artículo 2618, por lo que resulta innecesaria y hasta incoveniente su incorporación en el proyecto de ley en examen.

PROPUESTA: Se propone la supresión del artículo 109.

OBSERVACIÓN Nº 30

6) Esta observación recae en el artículo 108 que expresa lo siguiente:

Manchar o ensuciar bienes

ARTÍCULO 108.- Quien manchare o ensuciare por cualquier medio bienes de propiedad pública o privada será sancionado con multa de dos (2) a veinte (20) UM, o reparación del daño, o trabajo de utilidad pública de cinco (5) a quince (15) días.

Sin perjuicio de compartir y reproducir aquí la fundamentación de la observación Nº 28 a los arts. 86, 99 y 107 referida a la vulneración a los derechos de libertad de expresión, manifestación y protesta social, cabe aquí hacer algunas acotaciones específicas al tipo contravencional en estudio.

En efecto, es probable que los supuestos que contempla la norma caigan bajo la esfera típica del delito de daños, por lo que la legislación provincial no puede hacer suya la sanción de conductas que ya se encuentran penalizadas por el código mayor (código penal).

La disposición en estudio sanciona la acción de manchar o ensuciar por cualquier medio bienes de propiedad pública o privada, sin dejar a salvo que dicha actividad pueda ser realizada con autorización municipal y en los lugares expresamente habilitados para ello.

Por otro lado, no resulta lícito que se constituya como objeto de protección bienes de particulares a cuyos titulares les resulte indiferente que sean afectados por la acción propagandística o que incluso autoricen tal actividad. En tal supuesto, caeríamos en el riesgo de sustituir la voluntad de propietario por la forma de ver las cosas del funcionario preventor, convirtiendo en irrazonable su accionar además de desgastar inúltimente la función jurisdiccional, atento a que la indiferencia del propietario o su consentimiento excluye la culpabilidad.

En este sentido hubiera resultado más razonable adoptar el sistema de algunos códigos contravencionales que establecen en forma específica cuáles contravenciones son dependientes de instancia privada, pero el Proyecto de código en cuestión, no adopta este sistema, sino que establece que todas las acciones son públicas (artículo 57).

Es necesario hacer la siguiente aclaración. Aún en el caso que el propietario de la cosa haya exteriorizado su afectación y su deseo que se le procese al autor por ejemplo, de la pintada, la pegatina o la leyenda, ello por sí solo no implica que proceda la contravencionalización, ya que al margen de la voluntad del presunto afectado, debe existir, objetiva y concretamente, lesión al bien jurídico. De donde no sería admisible reputar configurada la contravención prevista en el artículo que se analiza si la pintura, la pegatina o la leyenda pudiera ser removida o fuera inscripta con un material lavable o en un lugar poco visible. Igual consideración merece el caso que se tratara de una clásica pintada en un muro que ya se encuentra repleto de otras pintadas anteriores. Consideraciones estas, que la norma omite prever.

En otro orden de ideas, al abordar el examen de la norma desde un punto de vista histórico y político, la cuestión nos lleva a épocas medievales, en las cuales siempre se buscó un mecanismo de imponer el poder del soberano sobre el súbdito. Para esto el mejor método era la represión, la intimidación, con el fin de dejar una clara lección de quién mandaba en el poder.

Es claro que en sociedades modernas, lamentablemente este mecanismo se reproduce de manera adaptable en épocas basadas en “democracia y justicia”, acoplando fuerzas estatales y paraestatales que en el afán de establecer el “orden”, dejan a su paso

miedo y violencia.

Desde esta perspectiva, quiero resaltar una cuestión que no parece ser menor si tenemos en cuenta que es muy común que en épocas de elecciones, sean estas de autoridades nacionales o provinciales, prolifere la propaganda política callejera mediante pintadas, pegatinas, colocación de pasacalles, etcétera Estas conductas realizadas en este contexto de tiempo y espacio, deben ser interpretadas con mayor laxitud y ser toleradas por la comunidad en su conjunto, precisamente porque es común que se produzcan cuando se encuadran dentro de un proceso electoral determinado.

Además también es común que las organizaciones políticas, finalizadas las elecciones, se aboquen a las tareas de limpiar las calles, blanquear los paredones, descolgar los pasacalles, quitar los carteles y de cualquier manera emprolijar el lugar. Con lo cual el conflicto penal o contravencional cae en abstracto por la realización de una conducta posterior restaurativa.

Es por ello que la coacción estatal o el poder punitivo del Estado no debería alcanzar este tipo de acciones que seguramente desplegaran una conducta posterior restaurativa.

Haciendo un poco de memoria histórica, debemos recordar que la publicación callejera era la manera genuina de expresarse durante la resistencia peronista en el período de proscripción del movimiento político mayoritario con su líder en el exilio, durante el período 1955-1973.

El tristemente célebre decreto ley 4161 de la autodenominada "Revolución Libertadora" proscribió al entonces movimiento policlasista mayoritario a partir del año 1955, dando lugar a dictaduras y a gobiernos democráticos condicionados, encontrando la única y genuina forma de expresión de las mayorías silenciadas, en la publicidad callejera.

Sería un dislate volver a esas infaustas épocas de prohibición y persecución de la militancia política callejera.

Por otra parte, la publicidad callejera es la forma de equiparar los partidos políticos chicos con los partidos políticos grandes ya que los primeros, por razones obvias, no pueden acceder a los medios masivos de comunicación o sea a la publicidad paga, teniendo que apelar, para hacerse conocer, a la publicidad callejera.

Entiendo que en este aspecto la norma en cuestión apunta directamente al corazón de la democracia y con ella al motor de las más profundas transformaciones sociales, económicas y políticas: la juventud.

No olvidemos que luego del escepticismo del 2001, multitud de jóvenes del todo el país retomaron en forma entusiasta el compromiso militante, volcándose a las calles, a los barrios, a los sindicatos a las O.N.G., en fin, a la militancia pública.

Un fenómeno de la argentina moderna, un fenómeno social no del todo advertido, pero cual el “subsuelo de la patria sublevada” del cual hablaba Raúl Scalabrini Ortiz, irrumpieron en la escena durante los festejos del bicentenario y las exequias del presidente Néstor Kirchner.

Esta militancia juvenil, estos jóvenes que se comprometen con la historia, un fenómeno de esta magnitud inconmensurable, no puede ser criminalizado.

Recordemos, a modo de ejemplo, lo acaecido el jueves 10 de enero próximo pasado, en la ciudad de Río Grande: cuatro jóvenes militantes peronistas fueron detenidos por policías que actuaron de oficio, es decir sin mediar denuncia de ningún particular, detención que se prolongó por casi 24 horas, por presuntamente pintar un paredón con las palabras: "PERONISMO MILITANTE", en un año netamente electoral como es este 2013.

Para concluir, quiero recordar lo expresado por uno de los máximos referentes del pensamiento nacional, Don Arturo Jauretche, cuando expresó: “Creo que suficientemente prevenidos, nuestros jóvenes sabrán construir el socialismo nacional... No es posible quedarse a contemplar el ombligo del ayer y no ver el cordón umbilical que aparece a medida que todos los días nace una nueva argentina a través de los jóvenes... El trasvasamiento generacional es la solución... No nos lamentemos tampoco, de que los recién venidos ocupen los primeros puestos de la fila, porque siempre es así: se gana con los nuevos..."

PROPUESTA: Se propone suprimir el artículo 108.

OBSERVACIÓN Nº 31

7) La presente observación recae sobre el artículo 82.
Arrojar, derramar, permitir desborde o verter residuos y/o sustancias peligrosas
ARTÍCULO 82.- Quien arrojare a la vía pública o a un sitio común sustancias o emanaciones que puedan resultar peligrosas para la salud, será sancionado con multa de diez (10) a treinta (30) UM, o reparación del daño, o trabajo de utilidad pública de cinco (5) a quince (15) días. Admite culpa.

Quien derramare líquidos cloacales en la vía pública o espacios públicos será sancionado con multa de 50 a 150 UM, o reparación del daño, o trabajo de utilidad pública de quince (15) a cuarenta (40) días. Admite culpa.
Igual sanción le corresponderá a quien permita el desborde de cámaras sépticas o pozos ciegos.

En todos los casos la sanción se elevará al doble cuando la conducta se verifique en espacios donde concurren niños.

El titular o responsable de un establecimiento industrial o comercial desde el que se vierten líquidos combustibles o aguas servidas u otro contaminante, en infracción a las normas vigentes en cada caso, será sancionado con multa de cincuenta (50) a cuatrocientos (400) UM, o trabajo de utilidad pública de veinte (20) a sesenta (60) días, y clausura del establecimiento, y/o inhabilitación y/o decomiso de los elementos que contengan los líquidos combustibles, aguas servidas u otro contaminante.

La observación se centra en que reprimir las conductas que describe la norma, implica desconocer la realidad socioeconómica de una provincia en la cual la mayoría de los barrios de las tres ciudades: Río Grande, Tolhuin y Ushuaia carecen de servicios de cloacas y de agua potable. Estos servicios se encuentran a cargo del Estado, es este quien debe proveer a la población de la infraestructura necesaria para evitar aquello que la norma prohibe. Por lo tanto no puede el Estado usar de su poder punitivo condenando o procesando a las personas que despliegan conductas que el propio Estado debe evitar con el ejercicio de su actividad lícita.

La falta de ejecución de políticas básicas de infraestructura, de saneamiento, de urbanización, denotan la ausencia de un Estado que ante su propia torpeza o en el mejor de los casos, impotencia, no debe encontrar como solución la criminalización a los ciudadanos. Aquellos que de alguno u otra manera intentan dar solución a sus necesidades básicas no satisfechas por quien está obligado a hacerlo: el Estado.

No puede soslayarse tampoco, la desafortunada argumentación esgrimida por los defensores de este artículo, referida a que, estos ciudadanos pueden esgrimir “el estado de necesidad inculpable”. Lo cierto es que para que ello ocurra, debieron anteriormente estar sometidos a proceso. Es decir, para la norma, no es que los ciudadanos que desplieguen las conductas tipificadas por ella “no tienen culpa” y que por ello no se los procesa. Estos serán sometidos a juzgamiento, con todas molestias que ello implica, para que luego, tal vez, (no se sabe, porque depende del criterio del juzgador), juegue a su favor la causal de inculpabilidad.

Al haber ausencia del Estado en llevar a cabo obras públicas que eviten estas conductas, aquí el único culpable que se erige nítidamente es el Estado mismo. Por lo tanto, no puede transferir su responsabilidad a los ciudadanos, criminalizándolos, porque primero debe dar el ejemplo, brindando a la población todos los servicios que esta necesita, para luego actuar en consecuencia. Lo contrario sería una injusticia, imposible de admitir.

Pero además la ausencia del Estado responde a prácticas de políticas excluyentes, que dejan a muchas personas por fuera del sistema económico, del mundo del empleo, quedando sin un marco de protección que asegure los derechos esenciales para una vida digna. Reprimir a quien procura alivianar esa ausencia, no es la respuesta. Tampoco la es reprimir a quienes han sido excluidos ni estos deben recibirla por parte del Estado, que es el principal y único responsable de no crear las condiciones básicas para que la conducta reprimida no se despliegue.

Señalo con profunda preocupación que esta figura contravencional criminaliza por un

lado a los ciudadanos que intentan suplir la ausencia del Estado y por el otro, a la pobreza.

No responde a políticas inclusivas que atiendan las condiciones que favorezcan el progreso económico, el desarrollo humano, la generación de empleo, la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura, tal como lo establece el artículo 125 de la Constitución Nacional o como insta la Constitución Provincial. Se intenta legislar a espaldas de normas constitucionales claras y contundentes en relación a la manera en la que debe intervenir el Estado Provincial para resolver una situación fáctica de profunda desigualdad social.

Inevitablemente, proyectos que prevén un altísimo impacto en materia de punibilidad terminan generando que las autoridades que velen por su aplicación puedan regirse bajo criterios arbitrarios de selectividad. La norma en cuestión determina como sujetos pasivos por un lado, a los que pertenecen a los estratos más vulnerables de la sociedad, reforzando estereotipos de fuerte contenido discriminatorio y por el otro, a aquellos que intentan suplir la inactividad de Estado, que se ve reflejada en la falta de obras de infraestructura sanitaria; todo lo cual configura un despropósito.

PROPUESTA: Se propone suprimir el artículo 82 o reformularlo en base a las fundamentaciones expuestas.

OBSERVACIÓN Nº 32

8) Otra observación que puede efectuarse al Proyecto de Ley en cuestión se relaciona con las multas previstas en el mismo las cuales resultan, en general, muy elevadas.

En efecto, la multa se trata de una sanción que afecta el patrimonio del condenado y lo obliga a la entrega de una suma de dinero; en consecuencia, la multa no debe ser de un monto tal que pueda reputarse confiscatoria.

Se podría sostener que se trata de una sanción que no se encuentra integrada con ninguna pauta tendiente a la resocialización del condenado ni a su capacitación o tratamiento, ya que significa un castigo dirigido directamente a su patrimonio. Además, los fondos provinientes de la aplicación de multas no se destinan directamente a las víctimas sino que integran la Cuenta Contravencional prevista en el artículo 43.

Es por ello, que tal como se encuentra diseñada en el Proyecto en estudio, la multa tampoco cumple con lo dispuesto por el artículo 24, cual es que "La sanción tiene por fin la adaptación del individuo a las condiciones de la vida en una comunidad jurídicamente organizada, necesarias para la realización individual y social."

Los montos elevados de las multas lesionan el principio de proporcionalidad y de lesividad. Ello por cuanto la “reacción estatal” frente a la ilicitud debe ser proporcional a la culpabilidad que por el hecho específico es dable atribuir al individuo. Una pena que excediera esa medida (la de culpabilidad), por ese sólo motivo se convertiría en pena cruel, inhumana o degradante y por ende, prohibida por nuestro orden jurídico. (conf. artículo 1.1. de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes).

PROPUESTA: Por lo expuesto, deberán revisarse y adecuarse los montos de las multas estipulados en el proyecto, en consonancia con los postulados de nuestra Constitución Nacional.

OBSERVACIÓN Nº 33

9) Esta observación recae en los artículo 88, 89 y 90 por considerar que de configurarse las conductas que describen las normas, podrían éstas constituir delito. En consecuencia resulta inconveniente su introducción en este Código, en atención al riesgo que ello provocaría respecto a la eventual vulneración al principio "non bis in idem".

PROPUESTA: Suprimir los arts. 88, 89 y 90.

OBSERVACIÓN Nº 34

10) Esta observación recae sobre el artículo106 ya que limitaría el accionar de personas que podrían realizar tales conductas en defensa de un derecho superior. Además existen reglamentaciones y normas legales que garantizar el desenvolvimiento de las subastas, por ejemplo mediante el auxilio de la fuerza pública.
PROPUESTA: Suprimir el artículo 106.

OBSERVACIÓN Nº 35

11) Esta observación recae sobre el artículo 122. En efecto, como ya lo expresara en la Observación Nº 25 esta figura constituye un tipo contravencional de los denominados "en blanco" ya que remiten a otra ley o reglamentación para definir su contenido, contraviniendo el principio de legalidad.

Además, al efectuar la Observación Nº 18 se expuso que esta disposición, interpretada a la luz de lo dispuesto por el artículo 46 del proyecto de ley en análisis, nos lleva a la conclusión que el conductor que se encuentra encuadrado en la norma del artículo 122 debe ser trasladado a un nosocomio, en forma obligatoria y conforme el procedimiento que estipula el artículo 46 que expresamente dispone que: "...el funcionario interviniente dispondrá su traslado en el acto al establecimiento más cercano para su diagnóstico por un médico responsable, quien determinará si debe ser internado por el lapso necesario para su restablecimiento. Comunicará esa situación de inmediato a la Defensoría Pública correspondiente. Los familiares del presunto contraventor podrán solicitar la derivación a un nosocomio privado a su costa, la que de ser factible a criterio del médico tratante se realizará por acta de entrega suscripta ante la autoridad de aplicación."

Como podemos observar, el tratamiento al presunto contraventor de la norma del artículo 122 es más grave a su respecto, que el que preven las ordenanzas municipales, cuando ejercen su poder punitivo contra conductas similares a las descriptas en el mencionado artículo.

Además al ser una medida preventiva la Internación preventiva (artículo 46) a la cual se vería sometido el presunto contraventor, esta restringe su libertad y el ejercicio de sus facultades, pese al estado de inocencia del que goza.

Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde poner de resalto que existen normas nacionales y municipales que sancionan la conducta descripta por la norma, por lo que de mantener esta figura en el Código Contravencional, traería como consecuencia el riesgo de causar serios conflictos de competencia, con todo el desgaste jurisdiccional que ello naturalmente provoca y el tiempo que irroga su tramitación.
PROPUESTA: Se propone la eliminación del artículo 122.

OBSERVACIÓN Nº 36

12) Se ha observado en el proyecto de ley en cuestión por un lado la AUSENCIA DE NORMATIVAS TENDIENTES A LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES y por el otro, la errónea ubicación del artículo 85 cuya crítica se formula a continuación.

En efecto, la observación que merece este artículo es que los animales deben ser cuidados, independientemente que estos generen o no peligro para terceros.
PROPUESTA: En este contexto interpretativo, la norma resulta erróneamente ubicada por lo que se propone introducirla dentro del LIBRO SEGUNDO PARTE ESPECIAL, creando el TÍTULO V PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS ANIMALES, CAPÍTULO ÚNICO, bajo la siguiente redacción:
Omitir recaudos de cuidado
ARTÍCULO ....- Quien omitiera los recaudos de cuidado respecto de un animal que se encontrare a su cargo, será sancionado con caución de no ofender de uno (1) a diez (10) UM, o multa de cinco (5) a quince (15) UM, o cinco (5) a diez (10) días de trabajo de utilidad pública. Admite culpa.

La sanción se elevará al doble cuando tal conducta causare la muerte del animal. Admite culpa.

Con respecto a la ausencia de normativa tendiente a la protección de animales se ensaya la siguiente propuesta, la que por razones de unificación de sanciones respecto a todo el plexo normativo, se formula respetando el lineamiento sancionatorio culposo y doloso, proyectado en las restantes figuras; por lo que de considerar lo contrario, aceptando la observación efectuada a ese respecto, se deberá reformular la redacción en consonacia con lo que en definitiva se acuerde.

PROPUESTA: Con fundamento en lo que se expondrá a continuación, se propone la agregación del siguiente artículo en el LIBRO SEGUNDO PARTE ESPECIAL, TÍTULO V, PROTECCIÓN INTEGRAL A LOS ANIMALES, CAPÍTULO ÚNICO.

Malos tratos o Actos de Crueldad a los animales.

ARTÍCULO… Quien infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales, aún sin espíritu de perversidad e independientemente de su condición social, económica, educativa, cultural o de instrucción, siempre que el hecho no implique violación a la ley Nacional N° 14.346, será sancionado con multa de uno (1) a diez (10) UM, o trabajo de utilidad pública de cinco (5) a diez (10) días, y prohibición de concurrencia y/o interdicción de cercanía. Admite culpa.

La sanción se elevará al doble en caso de que tal conducta causare la muerte del animal. Admite culpa.

Esta figura procederá, siempre y cuando no resulte violación a la ley 14.346 de protección animal. No requiere el tan polémico “espíritu de perversidad”, que ha dejado un saldo cuantioso de impunidad a lo largo de sus casi 60 años de vigencia de la Ley 14346. Sólo basta que se acrediten los malos tratos o actos de crueldad de los que habla este artículo, para que se configure la contravención; es más, esta contravención admite culpa, es decir la provocación de la muerte, el daño a la salud, el daño a la integridad física o simplemente el malestar al animal por negligencia, impericia e imprudencia del autor. En otras palabras, no se exige como elemento subjetivo del tipo, el contenido psicológico consistente en infligir “a sabiendas” malos tratos o actos de crueldad; porque como se puede observar en el articulado, la figura contravencional aquí mencionada, pueden ser dolosas o culposas indistintamente, elevándose la sanción al doble en caso de que la conducta descripta en la norma le causare la muerte del animal, admitiendo tambien la culpa.

Es indiferente el nivel social, económico, cultural, etcétera del autor. Basta con que este comprenda la ilicitud del acto para que pueda ser imputable. Es más, por ejemplo, en el caso de los equinos; personas que aun teniendo bajo nivel socio-cultural, pero que trabajan diariamente con esos animales como transporte de carga, es decir que utilizan al animal como “herramienta” de trabajo; conocen mejor aun que una persona ilustrada, instruida o versada, la mala condición física y el eventual sufrimiento del animal, para una tarea de tal envergadura.

Toda norma tutelar de las especies animales, contra los actos de crueldad y maltrato, de los que pueden eventualmente ser víctimas; no pueden estar inspiradas solamente en un ya superado "sentimiento de piedad"; valor propio del la modernidad, del iluminismo y de la burguesía etnocentrista del siglo XIX; muy por el contrario debe ser el reconocimiento normativo de una esfera o marco de derechos para otras especies que deben ser preservadas, no sólo de la depredación sino también de un trato incompatible con la mínima racionalidad. El concepto de "persona" incluye en nuestras sociedades pluralistas y anonimizadas, también un modo racional de contacto con los animales que excluye los tratos crueles o degradantes; en procura de alcanzar la tan ansiada “convivencia armónica” del hombre con los animales.

OBSERVACIÓN Nº 37

13) El proyecto de ley en cuestión en su Título III titulado "Protección del uso del espacio público o privado", Capítulo II titulado "Uso de espacio público y privado", soslaya el

tratamiento de normativa alguna que se refiera a la omisión de recaudos de cuidado del menor.

PROPUESTA: Se propone en consecuencia, la agregación del siguiente artículo en el capítulo mencionado, cuyos fundamentos se exponen a continuación.

Omitir recaudos de cuidado de menor

ARTÍCULO ...- Quien omitiere los recaudos de cuidado, control o contención de personas menores de 18 años que se encuentren bajo su patria potestad, tutela, guarda o custodia, cuando con su conducta perturbasen u hostilicen la tranquilidad de terceros; sea en espacios públicos o privados será sancionado con caución de no ofender de uno (1) a diez (10) UM o multa de cinco (5) a quince (15) UM o cinco (5) a diez (10) días de trabajo de utilidad pública. Admite culpa.

Para realizar debido abordaje de la problemática de los niños faltos de contención, es menester hacer referencia al momento actual que estamos viviendo, dominado por una "laxitud" significante en la educación de los hijos; pregonadas desde las nuevas corrientes de la academia norteamericana; una "new age" de la pediatría con influencias del teórico estadounidense Benjamín Spock, que afirmaba que una educación basada en límites, degeneraba en traumas psicológicos del niño; esgrimiendo por ende, una "simetrización" en la relación padres-hijos. Todo ello en el marco de una posmodernidad hegemónica, sostenida por filósofos contemporáneos como Gianni Vatimo, Jean François Lyotard o Giles Lipovetsky entre otros, que hablan entre tantos temas, del fin de los "grandes relatos", como así también anuncian el fin de los valores de la ilustración, que cimentaron la cultura occidental, tal el caso de la moral, el respeto, la obediencia, la autoridad, la educación, el acceso al conocimiento, etcétera.

Ya adentrándonos a la temática contravencional propiamente dicha, tenemos que por vía del instituto de la Patria Potestad, los padres "tienen la facultad de corregir o hacer corregir la conducta de sus hijos menores" (artículo 278 Código Civil). Este deber de corrección se transfiere a los tutores, guardadores o representantes legales.

El deber de custodia implica el control del accionar inmaduro de los hijos, evitando toda conducta que pueda resultar nociva para sus propios intereses o los de terceras personas; brindándoles todo lo necesario para que se formen en plenitud. Este deber de vigilancia se traduce en la fiscalización de los actos de los hijos, de sus relaciones personales, de sus comunicaciones, de sus lecturas y programas televisivos; de imponer sanciones adecuadas y límites apropiados para asegurar la autoridad paterna; como así también el respeto a terceras personas y valores sociales vigentes. Todo ello se condice con el deber de "respeto y obediencia" de los hijos hacia los padres (artículo 266 Código Civil).

Toda esta normativa, introducida en el Código Civil, cuando regula el instituto de la Patria Potestad; sirve de fundamento en lo que respecta al tipo contravencional de "Omitir recaudos de cuidado de menor".

Para concluir y a modo de reflexión, sabido es que el ámbito educativo, sea este familiar, escolar o institucional está actualmente inmerso este fenómeno de "deconstrucción" del concepto de "autoridad". Esta deconstrucción de la relación asimétrica docente-alumno o padre-hijo; ese relativismo o laxitud de los valores de ilustración: autoridad, educación, respeto, etcétera; se ven reflejados, reitero, en autores como Giles Lipovestky quien en su obra "La era del vacío", pondera valores como la tolerancia y la permisibilidad, contraponiéndolos a los valores ya mencionados. Todo ello es conteste a los postulados del padre de la pediatría moderna, Benjamín Spock, el adalid de la educación "sin límites" y forjador del modelo educativo hegemónico en familias, colegios y escuelas, en la actualidad. Ante el fracaso del posmodernismo, ante la anomia, el vacismo y la orfandad en la contención y límites, que arrojaron a generaciones de niños y adolecentes a situaciones de riesgo como "ausencia de padres", marginalidad, lumpenización, consumo de sustancias o simplemente problemas convivenciales; al decontructivismo educativo imperante hay que oponerle, lo que Jaime Baryilko denomina una vuelta a la educación "en valores".

ESTADÍSTICA ASISTENCIA LEGISLADORES
A LA REUNIONES DE COMISIÓN
Artículo 25 Reglamento Interno de Cámara

DICIEMBRE 2014

Legisladores	Total Reuniones	Asistencia	% Asistencia
ANDRADE TENORIO, Claudia Gabriela	3	3	100,00%
ARCANDO, Juan Carlos	2	2	100,00%
BARRIENTOS, Néstor Eduardo	2	2	100,00%
BLANCO, Pablo Daniel	2	2	100,00%
DEL CORRO, Amanda Ruth	3	2	66,66%
LECHMAN, Jorge Andrés	1	1	100,00%
LIENDO, Marcelo Adrián	2	2	100,00%
LÖFFLER, Damián Alberto	2	1	50,00%
MARINELLO, Fabio Adrián	1	0	0,00%
MARTÍNEZ, Myriam Noemí	2	2	100,00%
MARTÍNEZ ALLENDE, Liliana	2	2	100,00%
RODRÍGUEZ, Juan Felipe	2	2	100,00%
ROJO, Laura Susana	2	1	50,00%
SIRACUSA, Marta Susana	2	0	0,00%
TAPIA, Reinaldo Héctor	2	2	100,00%

ESTADÍSTICA ASISTENCIA LEGISLADORES
A SESIÓN

DICIEMBRE 2014

Legisladores	Total Sesiones	Asistencia	% Asistencia
ANDRADE TENORIO, Claudia Gabriela	**1**	**1**	**100,00%**
ARCANDO, Juan Carlos	**1**	**1**	**100,00%**
BARRIENTOS, Néstor Eduardo	**1**	**1**	**100,00%**
BLANCO, Pablo Daniel	**1**	**1**	**100,00%**
DEL CORRO, Amanda Ruth	**1**	**1**	**100,00%**
LECHMAN, Jorge Andrés	**1**	**1**	**100,00%**
LIENDO, Marcelo Adrián	**1**	**1**	**100,00%**
LÖFFLER, Damián Alberto	**1**	**1**	**100,00%**
MARINELLO, Fabio Adrián	**1**	**1**	**100,00%**
MARTÍNEZ, Myriam Noemí	**1**	**1**	**100,00%**
MARTÍNEZ ALLENDE, Liliana	**1**	**1**	**100,00%**
RODRÍGUEZ, Juan Felipe	**1**	**1**	**100,00%**
ROJO, Laura Susana	**1**	**1**	**100,00%**
SIRACUSA, Marta Susana	**1**	**1**	**100,00%**
TAPIA, Reinaldo Héctor	**1**	**1**	**100,00%**
Observaciones: corresponde a la sesión ordinaria de fecha 4 de diciembre de 2014.			

SUMARIO

Página

I. APERTURA DE LA SESIÓN **2**

II. IZAMIENTO **2**

III. PEDIDOS DE LICENCIA **2**

IV. HOMENAJES **2**

V. ASUNTOS ENTRADOS **2**

1. De Legisladores y del Poder Ejecutivo **2**

2. Comunicaciones Oficiales **4**

3. Asuntos de Particulares **5**

VI. ORDEN DEL DÍA **5**

1. Aprobación Diario de Sesiones. **8**

2. Asunto Nº 276/14. Código Contravencional. **8**

3. Asunto Nº 512/14. Resolución de Presidencia 811/14. **41**

4. Asunto Nº 529/14. Resolución de Presidencia 841/14. **42**

5. Asunto Nº 513/14. Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos. **42**

6. Asunto Nº 514/14. Proyecto de Planificación y Revalorización de la Senda Lucas Bridges. **43**

. Asunto Nº 515/14. Convenio sobre Ley Nacional de Semillas y Creaciones Fitogenéticas. **43**

. Asunto Nº 516/14. Equipamiento de informática y comunicaciones. **43**

. Asunto Nº 517/14. Producción de contenidos educativos. **43**

. Asunto Nº 518/14. Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas **43**

. Asunto Nº 519/14. Plan Federal del Bicentenario de Ganados y Carnes. **43**

7. Asunto Nº 528/14. Procuración Penitenciaria. **44**

8. Asunto Nº 523/14. Condiciones de las casas 4 y 7, del Hospital Regional Ushuaia. **44**

. Asunto Nº 524/14. Equipamiento oftalmológico del Hospital Regional Ushuaia. **44**

. Asunto Nº 525/14. Situación de diferentes áreas del Hospital Regional Ushuaia. **44**

. Asunto Nº 526/14. Mamógrafo para el Hospital Regional Río Grande. **44**

. Asunto Nº 527/14. Subsidios recibidos del Ministerio de Salud de la Nación. **44**

9. Asunto Nº 532/14. Miembros del Consejo de la Magistratura. **45**

10. Asunto Nº 533/14. Comisión Legislativa de Receso. **46**

11. Asunto Nº 377/14. Refuncionalización Colegio José Martí. **46**

12. Asunto Nº 402/14. Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas. **48**

13. Asunto Nº 366/14. Presupuesto 2015. **49**

14. Asunto Nº 388/14. Provisión de Medicamentos e Insumos. **57**

15. Asunto Nº 507/14. Régimen de Contrataciones **59**

16. Asunto Nº 536/14. Titularización en Talleres Culturales y Deportivos (a Comisión). **60**

. Asunto Nº 507/14. Régimen de Contrataciones (continuación). **64**

17. Asunto Nº 539/14. Tasa de Verificación de Procesos Productivos. **67**

18. Asunto Nº 541/14. Modificación Ley Impositiva. **68**

19. Asunto Nº 540/14. Resarcimiento por Dedicación Exclusiva o Bloqueo de Títulos. **70**

. Asunto Nº 507/14. Régimen de Contrataciones (continuación). **71**

20. Asunto Nº 542/14. Ley Previsional Personal Policial de la Provincia. **87**

21. Asunto Nº 73/14. Ley Provincial de Educación. **88**

22. Asunto Nº 509/14. Prevención y Control de los Trastornos Alimentarios. **128**

23. Asunto Nº 474/14. Sistema Provincial de Acogimiento Familiar. **133**

24. Asunto Nº 521/14. Procedimiento Judicial de Protección a Víctimas de Violencia Familiar. **138**

25. Asunto Nº 389/14. Régimen Único de Pensiones Especiales. **142**

26. Asunto Nº 490/14. Regulación de la Práctica del Acompañante Terapéutico. **144**

27. Asunto Nº 534/14. Modificación Código Fiscal. **147**

28. Asunto Nº 449/14. Día Provincial de Concienciación sobre la Diabetes. **148**

29. Asunto Nº 537/14. Leyenda “Las Malvinas son Argentinas”. **150**

30. Asunto Nº 538/14. Autorización a la BBC. **152**

VII. CIERRE DE LA SESIÓN **161**

. ANEXO I **162**

1. Asuntos Aprobados **162**

. ANEXO II **266**

1. Inserción de fundamentos solicitada por la legisladora Martínez **266**

2. Inserción de fundamentos solicitada por la legisladora Martínez Allende **269**

3. Inserción de fundamentos solicitada por el legislador Arcando **270**

4. Inserción de fundamentos solicitada por el legislador Rodríguez **273**

5. Inserción de fundamentos solicitada por el legislador Blanco **274**

6. Inserción de fundamentos solicitada por el legislador Barrientos **275**

7. Inserción de fundamentos solicitada por la legisladora Del Corro **275**

. ANEXO III **276**

1. Inserción solicitada por el legislador Barrientos **276**

. Estadística de Asistencia a Comisión (Art. 25 RIC) de Diciembre. **310**

. Estadística de Asistencia a Sesión de Diciembre. **311**